

DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



618165709

124841213

“EL JUICIO VERBAL ORDINARIO”

Tesis para la colación del Grado de Doctor en Derecho,
dirigida por el Profesor Dr. Pedro Aragonese Alonso y presentada
por:

MONICA PUCCI REY

MADRID 1.999-2.000

A DAVID

MOTIVO

“La justicia es la base de la sociedad; el juicio constituye el orden de la sociedad; por lo tanto, el juicio es la aplicación de la justicia. ”

ARISTÓTELES (384-322 a.C.)

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

Art.	Artículo
AP	Audiencia Provincial
Cap.	Capítulo
CC	Código Civil
CCo	Código de Comercio
CE	Constitución Española de 1978
cit.	citado
CP	Código Penal
DA	Disposición Adicional
DF	Disposición Final
DT	Disposición Transitoria
JP	Juez de Paz
JPI	Juez de Primera Instancia
L	Ley
LAR	Ley de Arrendamientos Rústicos
LAU	Ley de Arrendamientos Urbanos
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LH	Ley Hipotecaria
Lib	Libro
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial

LPH	Ley de Propiedad Horizontal
mrvs.	maravedíes
págs.	páginas
pts.	pesetas
RD	Real Decreto
RR.CC.	Reyes Católicos
rs.	reales
ss.	siguientes
SS	Sentencias
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
Tít	Título
TR	Texto Refundido
TS	Tribunal Supremo
*	Notas a pie de página relativas al Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento nº expediente 121/147, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie A, núm. 147/15, de 5 de octubre de 1.999.

INTRODUCCION GENERAL

Antes de comenzar el análisis del proceso de ínfima cuantía, más conocido como juicio verbal ordinario, estimamos conveniente destacar una serie de cuestiones que se nos han planteado y hemos tenido que decidir con carácter también previo al inicio de este estudio, y alguna otra que se nos ha suscitado a lo largo de la confección del mismo.

En primer lugar, es absolutamente menester justificar la elección del tema propuesto: el juicio verbal ordinario. A nadie se le escapa la importancia cuantitativa del actual juicio verbal ordinario, a pesar de su escasa cuantía (hasta 80.000 pts.) en la práctica forense civil; pero, indudablemente, cuando se produzca la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, esta importancia, lejos de disminuir, aumentará en la misma proporción que aumente la cuantía del nuevo verbal (parece que ésta se fijará en 500.000 pts.), ya que el mismo absorberá en parte los asuntos que hasta ahora se venían conociendo por el proceso de inferior cuantía (o juicio de cognición), y asimismo aumentará porque de nuevo va a absorber algunos de los supuestos que actualmente se vienen conociendo a través de procesos especiales. Junto a este protagonismo cuantitativo, hemos de apuntar también su importancia cualitativa, pues dicho proceso sigue un procedimiento con especialidades en relación al sistema general del juicio de mayor cuantía (proceso tipo del Derecho Procesal Civil español), siendo incluso informado por una serie de principios que lo caracterizan, como son, entre otros, los de oralidad (principio que alcanza su mayor esplendor en este juicio, a pesar de que, de acuerdo con el mandato constitucional del art. 120.2, el mismo debería predominar en todo procedimiento), concentración e inmediación judicial. También es digno de resaltarse el peso histórico que este tipo de juicio sencillo y

abreviado (por ello denominado verbal) siempre ha tenido; como más adelante apreciaremos (en el análisis de los antecedentes históricos) es a partir de Las Partidas cuando puede encontrarse ya claramente un proceso breve y sencillo que recuerda a nuestro actual juicio verbal, pero la existencia del mismo ha sido una constante a lo largo de nuestra historia, hasta tal punto que podemos considerarlo como inherente a nuestro Derecho Procesal Civil (de hecho, es el único proceso declarativo ordinario que se mantiene con su anterior nombre en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil). Por último, consideramos que contribuye a la elección del tratamiento de este juicio verbal ordinario el hecho de que muy pocos estudios globales del mismo pueden hallarse entre nuestra doctrina, pues aquellos que existen se refieren sólo a aspectos parciales; sobre todo, en lo que nosotros hemos sido capaces de investigar, no existe, salvo el de De La Escalera Gayé¹ al que más tarde haremos referencia, estudio monográfico relativo a este juicio verbal ordinario en el que se recojan todos los aspectos que al mismo atañen, incluidos los antecedentes y evolución histórica.

En segundo lugar, nos ha surgido el problema de tener que elegir para el análisis del juicio verbal ordinario una sistemática que además de resultar coherente y exhaustiva, nos fuera próxima; sin lugar a dudas, ésta ha sido la del Profesor Guasp. Varios han sido los motivos de esta elección: nuestra anterior experiencia y contacto con este sistema durante todo el estudio del Derecho Procesal Civil, cuya inolvidable enseñanza en la Licenciatura recibimos de nuestra Profesora Aragonese Martínez; su continuidad durante los estudios de Doctorado a cargo del actual director de este trabajo, el Profesor Aragonese Alonso; y nuestro convencimiento personal de que resulta ser este sistema el mejor y más completo de los hasta ahora consultados para el análisis de un proceso. Por tanto, podrá apreciarse a

¹ DE LA ESCALERA GAYÉ, Santiago; Tratado del juicio verbal civil. Editorial Góngora, 1955, Madrid.

lo largo de todo este estudio cómo nos hemos decantado, por su afinidad con nosotros, por la sistemática guaspiana.

En tercer lugar, en lo que al contenido y estructura de este estudio del juicio verbal ordinario se refiere, podemos adelantar que el mismo se divide en tres grandes bloques, en los que hemos intentado aplicar el anterior sistema guaspiano ya citado: nociones generales, régimen jurídico y conclusiones. La Primera Parte, dedicada a las nociones generales, se compone a su vez de tres Títulos: antecedentes y evolución histórica del juicio verbal ordinario en el ordenamiento procesal civil español, que recoge una obligada (aunque breve) aproximación a nuestro Derecho histórico, en relación a la evolución del juicio verbal desde los Fueros anteriores a Las Partidas hasta la actual Ley de Enjuiciamiento Civil con todas sus posteriores reformas; Derecho comparado, de ordenamientos afines al nuestro (Francia, Italia, Portugal y países de la América Hispánica) y del ordenamiento germano, de gran influencia dogmática en nuestro proceso español; fundamento jurídico, principios, tipos, naturaleza jurídica y concepto del juicio verbal, es decir, toda la construcción dogmática necesaria para abordar el análisis del proceso. La Segunda Parte, que contiene el régimen jurídico del mencionado juicio, entra ya, de la manera más completa que nos ha sido posible (aunque en ninguna forma se ha pretendido fuera exhaustiva), en lo que es propiamente su tramitación procesal y regulación positiva, para lo cual ampara cuatro Títulos: requisitos en la primera instancia; procedimiento y efectos en la primera instancia; requisitos en la segunda instancia; y procedimiento y efectos en la segunda instancia. Por último, la Tercera Parte de conclusiones recoge una brevísimas síntesis de las otras dos Partes anteriores, así como las principales críticas “de lege data” que se han ido incluyendo a lo largo del estudio y las reformas que “de lege ferenda” sería aconsejable abordar.

En cuarto y último lugar, queremos y debemos reseñar que no hemos pasado por alto a lo largo de estos años que nos ha llevado la confección del presente trabajo el hecho de la existencia de un anteproyecto (hoy ya proyecto aprobado por el Pleno del Congreso el 23 de septiembre de 1999) de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. La sombra de esta nueva Ley, ha estado largo tiempo planeando sobre nuestras cabezas, pero a pesar de ello hemos continuado con nuestro estudio por creer firmemente que nuestra investigación puede servir de puente entre el presente y el futuro, ya que en dicho Proyecto se mantiene como tipo de juicio un proceso verbal y, de otro lado, la “vacatio legis” establecida en el mismo hace que nuestro trabajo tenga interés durante un amplio tiempo para los profesionales del Derecho. Por ello, hemos introducido, a modo de notas especiales al pie de página en forma de asterisco, la nueva regulación que dicho proyecto recoge sobre el renovado juicio verbal.

- PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS
- INTRODUCCION GENERAL

I
III

PRIMERA PARTE

NOCIONES GENERALES

TITULO PRIMERO

ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA

DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO EN EL ORDENAMIENTO

PROCESAL CIVIL ESPAÑOL

I- Introducción	1
II- Antecedentes legislativos anteriores a Las Partidas	3
A- Fuero Juzgo o Libro de los Jueces	3
B- Fuero Real (1255)	7
C- Espéculo (1255-1260)	8
III- Las Partidas (1256-1265)	9
IV- Legislación posterior a Las Partidas hasta la Constitución de 1812	11
A- Ordenanzas de Valencia (1283)	13
B- Consulado de Palma de Mallorca (1343) y Consulado de Barcelona (1347)	13
C- Fuero in Causis del Reino de Aragón (1362)	13
D- Libro del Consulado del Mar (1347-1370)	14
E- Ley dictada por los RR.CC. en las Cortes de Toledo de 1480	15
F- Ordenamiento de Montalvo u Ordenanzas Reales de Castilla (1485)	17
G- Ley de 21 de Julio de 1494, dada por los RR.CC. en Medina del Campo (Burgos)	18
H- Ley dictada por D ^a Juana y D. Carlos en las Cortes de Madrid de 1534	20
I- Nueva Recopilación (1567)	22
J- Ordenanzas de Bilbao (1737) y Ordenanzas de Burgos (1766)	22
K- Real Cédula de 6 de Octubre de 1768	26
L- Real Resolución de 18 de Diciembre de 1796	26

M- Novísima Recopilación (1805)	27
N- Constitución de 1812	30
V- Leyes de Enjuiciamiento Civil	31
A- Antecedentes legales:	31
1- Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia de 9 de Octubre de 1812	31
2- Código de Comercio de 30 de Mayo de 1829	33
3- Ley de Enjuiciamiento sobre negocios y causas de comercio de 24 de Julio de 1830	34
4- Reales Decretos de 21 de abril de 1834 y de 23 de Junio de 1835	35
5- Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 26 de Septiembre de 1835	36
6- Ley de Sustanciación de Negocios de Menor Cuantía de 10 de Enero de 1838 e Instrucción del Procedimiento Civil con respecto a la Real Jurisdicción Ordinaria de 30 de Septiembre de 1853	38
B- Ley de Bases de 13 de Mayo de 1855	38
C- Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de Octubre de 1855	39
D- Proyectos de reforma o proposiciones de ley (1855-1880)	44
E- Real Decreto de 22 de Octubre y Real Orden de 12 de Noviembre de 1855	45
F- Real Orden de 2 de Enero y Real Decreto de 28 de Noviembre de 1856, y Real Decreto de 22 de octubre de 1858	46
G- Real Decreto-Ley sobre Unificación de Fueros de 6 de Diciembre de 1868	47
H- Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 23 de Junio-15 de Septiembre de 1870	48
I- Orden de 30 de Septiembre de 1870	51
J- Ley de Bases de 21 de Junio de 1880, para la reforma de la LEC	52
K- Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de Febrero de 1881	53
L- Reformas de la LEC hasta nuestros días:	64
1- Resoluciones de 7 de Marzo y 23 de Junio de 1882, sobre papeletas de los juicios verbales	64
2- Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885	64
3- Ley 5 de Agosto de 1907, sobre Justicia Municipal	66
4- Ley de 19 de Mayo de 1908, creando los Tribunales Industriales	68
5- Ley de 23 de Julio de 1908, sobre Préstamos Usurarios	69
6- Real Decreto de 30 de Octubre de 1923	70
7- Real Decreto-Ley de 12 de Febrero de 1924	70
8- Decreto de 18 de Abril de 1932, sobre Timbre del Estado	71

9- Ley de 21 de Mayo de 1936, sobre competencia de los juicios verbales civiles	72
10- Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de Julio de 1944	73
11- Real Decreto-Ley de 24 de Enero de 1947	75
12- Ley de 17 de Julio de 1948	76
13- Decreto de 21 de Noviembre de 1952	77
14- Ley de 20 de Diciembre de 1952	80
15- Ley 46/1966, de 23 de Julio	82
16- Ley de Bases 42/1974, de 28 de Noviembre, Orgánica de la Justicia	85
17- Ley 34/1984, de 6 de Agosto, de Reforma Urgente de la LEC	86
18- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial y Ley 38/1988, de 28 de Diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial	89
19- Ley 10/992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal	91
20- Ley 1/1996, de 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.	96

TITULO SEGUNDO

DERECHO COMPARADO

I- Sistemas jurídicos	98
II- Sistema jurídico latino	98
A- Francia	98
B- Italia	101
C- Portugal	104
D- Iberoamérica	107
1- México	107
2- Argentina	109
III- Sistema jurídico germánico: Alemania	110

TITULO TERCERO

FUNDAMENTO JURIDICO, PRINCIPIOS, TIPOS, NATURALEZA JURIDICA Y CONCEPTO

DEL JUICIO VERBAL

I- Introducción	112
II- Fundamento Jurídico	113
A- Razones de carácter subjetivo	113
1- Organo jurisdiccional	113
2- Partes	114
B- Razones de carácter objetivo	115
C- Razones de la actividad	117
1- Lugar	117
2- Tiempo	118
3- Forma	118
III- Principios	120
A- Oralidad	120
B- Concentración	121
C- Inmediación judicial	121
D- Informalidad o sencillez	121
E- Celeridad o brevedad	122
F- Economía en sentido estricto	122
IV- Tipos	122
A- Introducción	122
B- Procesos especiales que remiten al juicio verbal	124
1- Derecho de Personas	125
• Proceso sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	125
• Proceso para la rectificación de noticias inexactas	126
2- Derecho de Cosas	127
• Interdictos	127
1. Interdicto de adquirir	130
2. Interdictos de retener y recobrar	131
3. Interdicto de obra nueva	131
4. Interdicto de obra ruinoso	132
• Proceso para la división de la cosa común	132
• Proceso en materia de propiedad intelectual	133
• Procesos de equidad para suplir e impugnar acuerdos y para la adaptación de estatutos en materia de propiedad horizontal, y proceso para el incumplimiento de las obligaciones de pago del art. 9 e) y f), a partir de la citación para juicio oral:	134

1. Cuando la mayoría necesaria para la obtención de acuerdos válidos no se pueda lograr en el seno de la comunidad	135
2. Impugnación de acuerdos	135
3. Adaptación de los estatutos a la LPH	136
4. A partir de la citación para juicio oral, en caso de oposición del demandado en el procedimiento por incumplimiento por algún propietario del pago de las obligaciones contenidas en el art. 9 e) y f)	136
• Procesos sobre derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad	137
1. Proceso sobre anotaciones preventivas del art. 57 LH	137
2. Proceso sobre anotaciones preventivas del art. 61 LH	137
3. Proceso sobre la “acción de devastación” del art. 117 LH	138
3- Derecho de Obligaciones	138
• Juicio sobre responsabilidad civil de funcionarios judiciales (Jueces y Magistrados) y miembros del Ministerio Fiscal	138
• Juicios de desahucio de la legislación común	140
• Reclamación de justiprecio de las labores y plantíos	141
• Procesos arrendaticios urbanos de la LAU	142
1. Precario, extinción del plazo de arriendo o resolución del mismo por falta de pago de las cantidades a que se refiere la causa 1ª del art. 27.2 LAU	142
2. Ejercicio exclusivo de acciones para determinar la existencia y cuantías de rentas o importes que deba pagar el arrendatario, cualquiera que sea la cuantía litigiosa	143
• Juicio de desahucio de la LAR	144
• Proceso sobre préstamos usurarios	145
• Proceso relativo a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor	145
• Proceso para la formalización judicial del arbitraje	150
4- Derecho de Familia	151
• Proceso de alimentos provisionales	151
C- Juicio verbal ordinario	152
V- Naturaleza jurídica del juicio verbal ordinario	153
A- Es un proceso o juicio	153
B- Civil	153
C- Declarativo o de cognición	153
D- Ordinario	154
E- Plenario	154

F- Singular	154
G- Aplicable a la satisfacción de pretensiones no sujetas a algún tipo de proceso especial	155
H- En cuantía mínima o ínfima (hasta 80.000 pts.)	156
VI- Concepto del juicio verbal ordinario	156

SEGUNDA PARTE
REGIMEN JURIDICO

TITULO PRIMERO

REQUISITOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

I- Requisitos en general para la 1ª instancia	158
A- Subjetivos	158
1- Del órgano jurisdiccional	158
I- Jurisdicción	159
A- Concepto	159
B- Naturaleza	159
C- Clases	161
D- Extensión	161
E- Límites	162
a- Subjetivos: Inmunidad de jurisdicción	162
b- Objetivos	163
1- Prejudicialidad	164
2- Competencia internacional	166
3- Arbitraje	166
c- De la actividad	167
1- Territoriales	167
2- Temporales	170
3- Formales	170
II- Competencia	171
A- Competencia objetiva	171
B- Competencia territorial	175
a- Criterio de los fueros legales	178
b- Alteración por conexión	181
C- Competencia funcional	183
2- De las partes	184
I- Capacidad	184
A- Capacidad para ser parte	184
B- Capacidad procesal	187
II- Legitimación en causa	189
III- Postulación	198
A- Representación técnica	200
B- Asistencia letrada	205

B- Objetivos	206
1- Posibilidad	208
I- De la acción	209
A- Existencia de requisitos constitutivos materiales	209
B- Inexistencia de hechos impositivos materiales	209
C- Inexistencia de hechos extintivos materiales	209
D- Inexistencia de hechos excluyentes materiales	210
II- De la pretensión	210
A- Posibilidad física	210
B- Posibilidad jurídica	211
a- Cosa juzgada	211
b- Litispendencia	211
c- Ilícitud	211
2- Idoneidad	212
I- Adecuación del procedimiento	212
II- Conexión entre pretensión y acción	212
III- Teoría de la sustanciación	212
3- Causa	213
C- De la actividad procedimental	213
1- Lugar	213
I- Regla general	213
II- Excepciones	214
2- Tiempo	214
3- Forma	217

TITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO Y EFECTOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

II- Procedimiento en la 1ª instancia	220
A- Actuaciones previas a la presentación de la demanda	221
1- Agotamiento de la vía administrativa	221
2- Conciliación	222
3- Diligencias preliminares	224
B- Iniciación: la demanda	225
1- Concepto de demanda	225
2- Tipo de demanda	226
3- Requisitos de la demanda	228
I- Subjetivos	229

II- Objetivos	230
III- De la actividad	230
4- Contenido o esquema de la demanda	231
I- Encabezamiento	231
II- Cuerpo	232
III- Suplico	233
IV- Fecha y firma	233
5- Documentación que se acompaña	234
C- Presentación de la demanda	237
1- Quién	237
2- Ante quién	238
3- Cuándo	239
4- Cómo	239
5- Recibo	239
6- Dónde	240
7- Documentación del acto	240
D- Reparto	240
1- Concepto	243
2- Requisitos	243
3- Documentación	244
E- Recepción de la demanda en el Juzgado	244
F- Dación de cuenta	245
G- Actuaciones posteriores: desarrollo normal	245
1- Examen de la demanda por el Juez: resoluciones y recursos	246
I- Diligencia de repartimiento	246
A- Si no consta	247
B- Si consta	248
II- Ratificación	248
III- Incompatibilidades subjetivas: abstención	249
A- Si existen	250
B- Si no existen	251
IV- Jurisdicción	251
A- Si cree no tener jurisdicción	254
B- Si cree tener jurisdicción	255
V- Competencia objetiva	255
A- Por razón de la materia	255
a- Si se cree incompetente	256
b- Si se cree competente	256
B- Por razón de la cuantía	256
a- Si se cree incompetente	257

b- Si se cree competente	258
VI- Competencia territorial, de oficio	258
A- Si se cree incompetente	259
B- Si se cree competente	260
VII- Capacidad para ser parte y capacidad procesal	260
A- Si se estima inexistente	260
B- Si se estima existente	261
VIII- Legitimación	261
IX- Postulación	262
X- Posibilidad del objeto	263
A- Si cree imposible el objeto	265
B- Si cree posible el objeto	265
XI- Adecuación del procedimiento	265
A- Si se cree inadecuado el procedimiento	266
B- Si se cree adecuado el procedimiento	267
XII- Forma de la demanda y copias	267
A- Si carece de forma o no se aportan copias	268
B- Si posee forma adecuada y se aportan copias	268
2- Admisión a trámite de la demanda	269
I- Resolución	270
II- Notificación y citación al demandante	271
III- Contenido	271
IV- Efectos	271
A- Efectos procesales	272
B- Efectos materiales	272
3- Llamamiento al demandado	273
I- Tipo	275
A- Citación personal o en propias manos	277
a- Si puede y sabe firmar	278
b- Si no puede o no sabe firmar	278
c- Si no quiere firmar	278
B- Citación a través de familiar, criado o vecino	279
a- Si puede y sabe firmar	279
b- Si no puede o no sabe firmar	279
c- Si no quiere firmar	280
C- Citación mediante cooperación judicial	280
D- Citación mediante edictos	281
II- Contenido	282
III- Plazo	282
4- Alteración del señalamiento para la comparecencia	284

I- Por justa causa	285
II- Por conformidad de ambas partes	285
5- Comparecencia o juicio: posibles conductas	286
I- No comparecer	286
A- El Juez o el Secretario	286
B- El demandante	287
a- Se le tiene por desistido	287
b- Se le condena en todas las costas	288
c- Indemnizará al demandado, si hubiere comparecido, los perjuicios ocasionados	289
1- Si el demandado renuncia	289
2- Si el demandado no renuncia	289
- Momento, lugar y modo en que se fija el importe	290
- Gastos y perjuicios que se comprenden	290
- Cantidades límite	290
A- Si entiende un Juez de Paz	290
B- Si entiende un Juez de Primera Instancia	291
- Posibilidad de recurso	291
- Exigibilidad	291
C- El demandado	291
a- Ficta contestatio	292
b- Notificaciones en estrados	293
c- Medidas cautelares	294
d- Recurso especial de audiencia al rebelde	295
D- Ni el demandante, ni el demandado	296
a- Se tiene por desistido al demandante	296
b- Se condena en costas al demandante	296
c- No existe indemnización al demandado	297
II- Comparecer todos: acto del juicio	298
6- Desarrollo del juicio: celebración de la comparecencia	299
I- Constitución del órgano jurisdiccional	300
II- Posible postulación	300
III- Ratificación	301
IV- Posible transacción judicial	301
V- Alegaciones iniciales o de introducción	302
A- El demandante puede optar por:	302
a- Fundamentar su pretensión (o ratificar la demanda)	302
b- Desistimiento	303
c- Renuncia	304
B- El demandado puede optar por:	304

a- No contestar	304
b- Contestar	305
1- Allanamiento	305
2- Oposición	306
- Concepto	306
- Requisitos	307
A- Requisitos subjetivos	307
B- Requisitos objetivos	308
C- Requisitos de la actividad	308
- Tipos	309
A- Por el tiempo en que puede ser planteada	309
a- Concentrada	309
b- Dispersa	309
B- Por el contenido que se permite	309
a- Libre	310
b- Limitada o restringida	310
C- Por el grado de afirmación o negación del demandado	310
a- Admisión de los hechos	310
b- Evasivas	310
c- Negación de los hechos	311
d- Afirmaciones contrarias: excepciones	311
D- Por los elementos a que afecta	311
a- Oposición procesal	311
1- Legalidad de su citación y traslado de la papeleta o demanda	312
2- Requisitos procesales	312
b- Oposición material o de fondo	314
1- Inexistencia de algún requisito constitutivo de la relación jurídico-material	314
2- Existencia de algún hecho impeditivo de la relación jurídico-material	315
3- Existencia de algún hecho extintivo de la relación jurídico-material	316
4- Existencia de algún hecho excluyente de la relación jurídico-material: excepción en sentido propio	316
- Tratamiento procesal	317
A- Oposición procesal	317
a- Resolución previa mediante auto	317
b- Resolución en la sentencia definitiva	318

B- Oposición material o de fondo	319
- Efectos	319
A- Oposición procesal	319
B- Oposición material o de fondo	320
3- Reconvención	320
- Concepto	320
- Requisitos	320
A- Requisitos subjetivos	321
B- Requisitos objetivos	322
C- Requisitos de la actividad	322
- Tipos	323
A- Por su contenido	323
a- Conexa	323
b- Inconexa	323
B- Por su estructura	323
a- Explícita	324
b- Implícita	324
- Tratamiento procesal	324
- Efectos	324
VI- Alegaciones de fijación: posibles “réplica” y “dúplica” en este proceso	325
A- Orden de actuación	326
a- El actor	326
b- El demandado	326
B- Argumentos a favor	327
a- Legalidad y constitucionalidad	327
b- Conveniencia y utilidad	327
c- Analogía con otros procesos	327
d- Control judicial	328
VII- Eventual suspensión del juicio	328
VIII- Prueba	329
A- Concepto	330
B- Requisitos	330
a- Requisitos subjetivos	330
1- Sujeto activo	331
2- Sujeto pasivo	331
3- Destinatario	332
b- Requisitos objetivos	332
c- Requisitos de la actividad	333
1- Lugar	333

2- Tiempo	333
- Plazo ordinario	333
- Plazo extraordinario	334
3- Forma	335
C- Fases probatorias	335
a- Solicitud de recibimiento a prueba	335
b- Resolución judicial: recibimiento del juicio a prueba	336
1- Denegación del recibimiento del juicio a prueba	336
2- Recibimiento del juicio a prueba	337
c- Proposición de los medios de prueba	337
1- Confesión	339
- Concepto	340
- Naturaleza jurídica	340
- Clases	340
- Requisitos de su proposición	341
A- Requisitos subjetivos	341
B- Requisitos objetivos	341
C- Requisitos de la actividad	342
- Tratamiento procesal: proposición genérica y pliego de posiciones	343
2- Testifical	344
- Concepto	344
- Naturaleza jurídica	344
- Requisitos de su proposición	345
A- Requisitos subjetivos	345
B- Requisitos objetivos	345
C- Requisitos de la actividad	346
- Tratamiento procesal: proposición genérica, interrogatorio de preguntas y lista de testigos	347
3- Pericial	349
- Concepto	349
- Naturaleza jurídica	349
- Requisitos de su proposición	349
- Tratamiento procesal: proposición genérica y específica	350
4- Documental	350
- Concepto	351
- Naturaleza jurídica	351
- Clases de documentos	351
- Requisitos de su proposición	352

- Tratamiento procesal: proposición genérica y específica	356
5- Reconocimiento judicial	357
- Concepto	358
- Naturaleza jurídica	358
- Requisitos de su proposición	358
- Tratamiento procesal: proposición genérica y específica	359
6- Presunciones	359
d- Resolución judicial: admisión de los medios de prueba	360
1- Rechazo de pruebas	361
- Recurso	361
- Protesta	362
2- Admisión de pruebas	362
e- Práctica de la prueba admitida	362
1- Pruebas practicables en el acto	363
2- Pruebas no practicables en el acto	363
3- Tratamiento procesal	364
- Confesión	364
A- Requisitos de su práctica	364
a- Requisitos subjetivos	364
b- Requisitos objetivos	365
c- Requisitos de la actividad	366
B- Procedimiento	367
C- Efectos	368
- Testifical	370
A- Requisitos de su práctica	370
a- Requisitos subjetivos	370
b- Requisitos objetivos	371
c- Requisitos de la actividad	372
B- Procedimiento	372
C- Efectos	375
- Pericial	377
A- Requisitos de su práctica	377
B- Procedimiento	378
C- Efectos	382
- Documental	382
A- Requisitos de su práctica	382
B- Procedimiento	384
C- Efectos	386

- Reconocimiento judicial	386
A- Requisitos de su práctica	386
B- Procedimiento	387
C- Efectos	388
IX- Acta de la comparecencia	388
7- Ulteriores comparecencias	389
8- Expiración del plazo probatorio: Dación de cuenta	389
9- Declaración de conclusión del juicio: Visto para sentencia	390
H- Desarrollo anormal del procedimiento: Crisis procesales	390
1- Crisis subjetivas	390
I- Anomalías que afectan al órgano jurisdiccional	391
II- Anomalías que afectan a las partes	392
A- Pérdida de la capacidad para ser parte	392
B- Pérdida de la capacidad procesal	393
C- Pérdida de la legitimación activa o pasiva	394
D- Pérdida de la postulación	396
2- Crisis objetivas: incidentes	397
I- Sin tramitación específica	397
II- De tramitación específica: superincidentes	398
A- Recusación	399
B- Conflictos de jurisdicción	402
C- Conflictos de competencia	403
D- Cuestiones de competencia	403
E- Acumulación de autos	409
F- Prejudicialidad excluyente	410
3- Crisis de la actividad: Paralización del proceso	411
I- Interrupción	411
II- Detención	412
III- Suspensión	412
I- Terminación	413
1- Terminación normal: Sentencia	413
I- Diligencias para mejor proveer	414
II- Sentencia	415
A- Concepto	416
B- Génesis	416
a- Admisibilidad	416
b- Fundabilidad	417
C- Requisitos intrínsecos	419
a- Motivación	419
b- Claridad y precisión	420

c- Congruencia	420
d- Exhaustividad	422
D- Tipos	423
a- Sentencias procesales o absolutorias de la instancia	424
b- Sentencias sobre el fondo	424
1- Estimatorias	424
- Totalmente	424
- Parcialmente	425
2- Desestimatorias	425
E- Plazo	425
F- Fórmula de la sentencia	426
a- Encabezamiento	426
b- Motivación	427
1- Antecedentes de hecho	427
2- Hechos probados, en su caso	427
3- Fundamentos de derecho	428
c- Fallo	429
G- Formación de la sentencia	429
a- Redacción	430
b- Documentación o extensión	430
c- Firma	430
d- Publicación	431
e- Notificación a las partes	432
H- Aclaración de la sentencia	432
2- Terminación anormal	433
I- Renuncia	434
A- Concepto	434
B- Requisitos	434
a- Requisitos subjetivos	434
b- Requisitos objetivos	435
c- Requisitos de la actividad	436
C- Efectos y costas	436
II- Desistimiento	437
A- Concepto	437
B- Requisitos	437
a- Requisitos subjetivos	437
b- Requisitos objetivos	439
c- Requisitos de la actividad	439
C- Efectos y costas	439
III- Allanamiento	440

A- Concepto	440
B- Requisitos	441
C- Efectos y costas	441
IV- Transacción judicial	441
A- Concepto	442
B- Requisitos	442
C- Efectos y costas	442
V - Caducidad de la instancia	443
A- Concepto	443
B- Requisitos	443
C- Efectos y costas	444
III- Efectos en la 1ª instancia	445
A- Efectos económicos	445
1- Costas	445
I- Concepto	445
II- Criterios	446
III- Partidas	447
IV- Tasación e impugnación	448
2- Asistencia Jurídica Gratuita	449
I- Concepto, fundamento, regulación y origen	449
II- Requisitos	450
III- Ventajas	451
IV- Procedimiento	452
V- Efectos	454
B- Efectos jurídico-materiales	454
1- En el momento de la litispendencia	454
2- En el momento de la sentencia	455
C- Efectos jurídico-procesales	455
1- Firmeza: Recursos	456
I - Contra la sentencia dictada en primera instancia	457
A- Acciones personales basadas en derechos de crédito	457
B- Acciones distintas a las anteriores	458
II - Contra el auto que inadmite la apelación	458
III- Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en primera instancia	458
A- Recurso horizontal: Reposición	459
B- Recurso vertical: Apelación	460
a- Apelación directa	460
1- Sin previa reposición	461

- Por falta de jurisdicción	461
- Por falta de competencia objetiva	461
- Por falta de competencia territorial	462
- Por inadecuación del procedimiento	462
- Por denegación de la solicitud de diligencia preliminar	462
2- Con previa reposición	462
- Por falta de capacidad: para ser parte y procesal	462
- Por falta de subsanación del defecto en la postulación	463
- Por falta de posibilidad del objeto	463
b- Apelación diferida	463
1- Contra algunos autos resolutorios de recursos de reposición	464
2- Contra los autos que pueden recaer en los incidentes que se planteen durante la sustanciación del pleito	464
- En el incidente por recusación	465
- En el incidente por acumulación de autos	465
3- Contra el auto declarando la pertinencia del juicio verbal	465
4- En supuestos del artículo 733 LEC (previa la oportuna protesta)	465
IV- Contra la sentencia firme	466
A- Acciones autónomas de impugnación	466
a- "Recurso" de revisión	467
b- "Recurso" de audiencia al rebelde	468
B- "Recurso" de amparo constitucional	470
C- "Recurso" ante los Tribunales Internacionales	470
2- Cosa juzgada	470
I- Efecto de cosa juzgada formal	471
II- Efecto de cosa juzgada material	471
A- Concepto	471
B- Naturaleza jurídica y fundamento	471
C- Contenido: Funciones	472
D- Requisitos	473
E- Efectos y limitaciones	474
3- Ejecutabilidad	475
I - Tercería de dominio	476
II- Tercería de mejor derecho	476

TITULO TERCERO

REQUISITOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

IV- Requisitos en general para la 2ª instancia	478
A- Subjetivos	478
1- Del órgano jurisdiccional	478
I- Jurisdicción	479
II- Competencia	479
III- Reparto	484
IV- Compatibilidad subjetiva	485
2- De las partes	486
I- Capacidad	486
II- Legitimación en causa	486
III- Postulación	488
B- Objetivos	490
1- Posibilidad	490
2- Idoneidad	491
I- Hasta la reforma de la Ley 10/92	491
II- Después de la reforma de la Ley 10/92	492
A- Si el juicio ha versado sobre reclamación de cantidad	493
B- Si el juicio ha versado sobre reclamaciones que no sean dinerarias	497
3- Causa	498
C- De la actividad procedimental	499
1- Lugar	499
2- Tiempo	499
3- Forma	500

TITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO Y EFECTOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

V- Procedimiento en la 2ª instancia	501
A- Fase procedimental ante el Juez a quo	502
1- Interposición	502
I- Ante quién	502
II- Tiempo	503
III- Forma	503
IV- Contenido del escrito	504

A- Encabezamiento	505
B- Cuerpo	505
C- Suplico	509
D- Lugar, fecha y firma	509
V- Efectos	509
2- Examen del escrito de interposición por el Juez a quo	509
3- Trámite de subsanación de defectos	511
4- Inadmisión o admisión	511
I- Inadmisión: consecuencias y recurso	511
II- Admisión	513
A- Efecto suspensivo. Ejecución provisional de la sentencia	514
B- Efecto devolutivo: Excepciones	515
C- Consecuencias de la admisión de apelaciones improcedentes	516
5- Adhesión o impugnación	516
I- Conductas del apelado	516
A- No presenta escrito	516
B- Presenta escrito	516
II- Resolución del Juez a quo	518
A- Si el apelado no presentó escrito	518
B- Si el apelado presentó escrito	513
III- Recursos	519
A- Contra la admisión improcedente	519
B- Contra la inadmisión	520
B- Fase procedimental ante el Órgano ad quem	520
1- Si la/s parte/s no ha/n propuesto prueba	521
2- Si la/s parte/s ha/n propuesto prueba	522
3- Notificación a las partes de la citación para la vista	523
4- Situaciones que pueden producirse desde la citación	523
I- Anticipo del acto de la vista	524
II- Suspensión del acto de la vista	524
A- Requisitos subjetivos	524
B- Requisitos objetivos	525
a- Casos del art. 323 LEC	525
1- Por circunstancias subjetivas	525
2- Por circunstancias objetivas	527
3- Por circunstancias de la actividad	528
b- Supuesto del art. 326 LEC	528
c- Supuestos de imposibilidad externa	528
C- Requisitos de la actividad	529
a- Tiempo	529

b- Forma	530
D- Tipo y contenido de la resolución del Órgano ad quem	531
E- Recursos	532
5- Celebración de la vista	532
I- Situaciones que pueden producirse	533
A- En relación con el órgano jurisdiccional	533
B- En relación con las partes	534
a- Incomparecencia	534
1- Del apelante	534
2- Del apelado	535
3- De las dos partes	536
b- Comparecencia	536
II- Procedimiento de la vista en las distintas situaciones que pueden darse respecto de las partes	536
A- Si no hay que practicar prueba	536
a- Si no comparece ninguna de las partes	537
b- Si sólo comparece una parte	537
c- Si comparecen ambas partes	537
1- Relación del Secretario	537
2- Posibles actuaciones previas	538
3- Informe de las partes	538
4- Segunda intervención para rectificar hechos o conceptos	540
5- Intervención de las propias partes	540
6- Terminación del acto	540
B- Si hay que practicar prueba	541
III- Documentación del acto	541
IV- Efectos de la vista	542
6- Decisión: la sentencia	542
I- Requisitos intrínsecos	543
A- Motivación	544
B- Exhaustividad	544
C- Congruencia	545
D- Prohibición de la reformatio in peius	547
II- Plazo	549
A- Si no se propuso prueba	549
B- Si se propuso prueba	550
III- Fórmula	550
IV- Formación	551
A- Deliberación y votación	551

B- Redacción	554
C- Extensión	555
D- Firma	555
E- Documentación	556
F- Publicación	557
G- Notificación	557
V- Contenido	558
C- Desarrollo anormal	559
1- Crisis objetivas: Recusación	560
I- Recusación de Magistrado/s	560
II- Recusación de Jueces	562
III- Recusación de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales	563
2- Crisis de la actividad	564
D- Terminación anormal	564
1- Renuncia	565
2- Desistimiento	565
I- Desistimiento ante el Juez a quo	566
II- Desistimiento ante el Órgano ad quem	567
3- Allanamiento	569
4- Transacción Judicial	569
5- Caducidad de la instancia	569
VI- Efectos en la 2ª instancia	570
A- Efectos económicos	571
1- Costas	571
2- Asistencia Jurídica Gratuita	571
B- Efectos jurídico-materiales	572
C- Efectos jurídico-procesales	573
1- Firmeza: Recursos	573
I- Contra la sentencia firme dictada en segunda instancia	574
II- Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en segunda instancia	574
2- Cosa juzgada	575
3- Ejecutabilidad	576

TERCERA PARTE

CONCLUSIONES

577

- RELACION BIBLIOGRAFICA

VII

PRIMERA PARTE
NOCIONES GENERALES

TITULO PRIMERO
ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA
DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO EN EL ORDENAMIENTO
PROCESAL CIVIL ESPAÑOL

I- INTRODUCCION

Creemos necesario comenzar este estudio del juicio verbal ordinario en nuestro ordenamiento actual, haciendo una obligada aunque breve aproximación, a lo que ha sido el mismo a lo largo de nuestra historia, pues ello puede contribuir a establecer un significado más correcto en alguno de sus aspectos.

A pesar de su importancia, hemos de resaltar que tal investigación no es el centro de este trabajo, por lo cual las siguientes páginas sólo pretenden dar una idea global del acontecer histórico del proceso.

La necesidad de abreviar los trámites del procedimiento, hasta el punto de entenderse de él y decidirse en una simple comparecencia verbal cuando el negocio a dilucidar es de leve importancia, ha sido una constante a lo largo de toda la historia.

Así sucedió, dicho sea como mera referencia y tomándolo de De Vicente y Caravantes, entre los Romanos, de cuyos magistrados, debemos destacar aquí, que el presidente de la provincia solía enviar las causas de poca importancia o valor a los iudices

pedanei², que eran jueces inferiores delegados, adscritos en cierto número a cada distrito pretorial, y cuya jurisdicción limitó Justiniano a 300 sueldos³; otro tipo de magistrado que conocía de causas de escaso valor fue el defensor de la ciudad (defensor civitatis), pues además de hallarse investido de distintas atribuciones de policía, juzgaba en primera instancia hasta 300 sueldos en lo civil, y de las faltas ligeras en lo criminal⁴. También entre los Germanos, los pleitos de corta entidad eran decididos por los magistrados o próceres, según la Ley Sállica, “Principes qui jura per pagos vicosque reddum”⁵. Sin embargo, nuestro análisis comenzará partiendo de la redacción del Fuero Juzgo, que refundió toda la legislación que regía hasta entonces.

Hemos dividido el devenir histórico en antes y después de las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, al considerar que esta obra es un hito importante en la evolución legislativa. A continuación, exponemos el panorama de las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881 y sus reformas posteriores hasta nuestros días.

² Un mayor estudio sobre estos jueces pedáneos puede encontrarse en DE LA ESCALERA GAYÉ, Tratado...cit., pto. 6), págs. 8 y ss..

³ DE VICENTE Y CARAVANTES, José; Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Introducción, puntos 101 y 114, páginas 40, 41 y 44. Imprenta de Gaspar y Roig Editores, 1856, Madrid.

⁴ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Introducción, punto 142, págs. 55 y 56.

⁵ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Introducción, cap. VII, págs. 56 y ss..

II- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ANTERIORES A LAS PARTIDAS

A- FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES⁶

En el Fuero Juzgo (Libro II “De los juicios y causas”) no se regulaba en concreto y con rigor un juicio verbal semejante al actual para asuntos de ínfima cuantía. Sin embargo, sí que se enumeraban los distintos tipos de magistrados que existían en la época:

- Ley XXV, Título I, Libro II- “Por cuanto los remedios de los negocios son muchos y non solo el duque, el conde, el vicario, el adsertor de paz, el tiufado, el millonario, el quinquenario, el centenario, el decano, el defensor, el numerario y los que por mandado del rey o del consentimiento de las partes se eligen jueces, y cualquiera otro que haya facultad de juzgar, entiéndanse jueces para que así como reciben los derechos del juicio, del mismo modo experimenten o los provechos o los daños de las leyes.”

De entre ellos, es de nuestro interés ahora destacar a los defensores, pues estos, además de defender y librar a la plebe de cargas injustas, ejercían la jurisdicción, según De Vicente y Caravantes, entendiendo de los pleitos civiles entre labradores y campesinos hasta la suma de 500 áureos⁷. Este mismo autor también explica que en época de los Godos se conocían en España los vilicos o prepósitos, quienes como más adelante los alcaldes, conocían de las diferencias entre los vecinos de las villas o lugares subalternos⁸.

⁶ FUERO JUZGO Ó LIBRO DE LOS JUECES, cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, en Madrid, por Ibarra, impresor de Cámara de Su Majestad. Editorial Lex Nova, 1980, Valladolid.

⁷ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Introducción, pto. 169, pág. 65.

⁸ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 172, pág. 65 y Libro Primero, punto 188, pág. 202.

De igual forma se conocieron en esta época los pacis adsertores, que eran los enviados por el soberano para poner paz entre las partes y avenirlas, configurando así el origen de los jueces conciliadores⁹:

- Ley XV, Título I, Libro II- “Los iuezes deven seer establecidos en tal manera que ayan poder de terminar los pleytos, así de los malos fechos, cuemo de las otras cosas. Mas aquellos que son mandaderos de paz, non deven iudgar nengun pleyto si non quantol mandare el rey. Y el mandadero de paz es aquel á quien envia el rey solamiente por meter paz entre las partes.”

Junto a los jueces surge la figura de los asesores, personas entendidas con que se acompañaban los primeros para asegurar la rectitud y acierto en sus fallos. Para los magistrados inferiores el asesorarse era voluntario, pues según la Ley II, Título II, Libro II, el juez puede tomar personas que con él juzguen el pleito o le aconsejen¹⁰:

- Ley II, Título II, Libro II- “Los pleytos no deven seer destorvados por voces ni por bueltas. Mas el iuez debe mandar seer á una parte aquellos, que non an pleyto, é aquellos cuyo es el pleyto deven seer antel solamiente, y el iuez, si quisiere tomar consigo algunos que oyan el pleyto con él, ó con quien se conseie, puédelo fazer si quisiere. E si non quisiere, non lexe ninguno trabaiarse en el pleyto por ayudar á la una de las partes, é destorvar el otra. E si alguno no lo quisiere dexar de fazer por el iuez, ó si non se quisiere guiar por su mandado, ó non quisiere lexar de ayudar á alguna de las partes, pues que ge lo defendiere el iuez, peche X sueldos doro al iuez mismo, é aquel sea echado fuera del iuizio aviltadamiente.”

⁹ De estos Jueces conciliadores se trata más extensamente en DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado... cit., Intr., pto. 166, pág. 65 y Libro Primero, punto 188, pág. 203; recogen esta opinión en la doctrina moderna ALMAGRO NOSETE, José; GIMENO SENDRA, Vicente; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín; MORENO CATENA, Víctor; Derecho Procesal, Tomo I, Volumen I, pág. 80. Editorial Tirant Lo Blanch, 4ª edición, 1989, Valencia.

En cuanto al procedimiento que se seguía en todos los pleitos en general, éste era breve y sencillo¹¹, recurriéndose en él a las pruebas por testigos y documentos y al juramento del interesado, de forma que, explica De Vicente y Caravantes, se desterraron las pruebas vulgares del agua y del fuego, y las del combate judicial, adoptadas por los antiguos Germanos¹²:

- Ley XXI, Título I, Libro II- “El iudez que bien quisiere oyr el pleyto, debe primeramiente saber la verdat de los testimonios, si los oviere en el pleyto, ó del escripto si lo y oviere, é non deve venir al sagramiento de las partes, nin las debe coniar livianamiente. Ca esto semeia mayor derecho, que el escripto venga primeramiente por saber la verdat, é despues venga el iuramiento si fuere menester. Et mandamos que en los pleytos sea dado el sagramiento de las partes quando non pudier seer provado por testigos, ni por escripto.”

En cuanto a los testigos, no podían serlo, entre otros, los siervos, salvo que los hombres libres no pudiesen dar testimonio y además se tratase de causas civiles de escasa entidad:

- Ley X, Título IV, Libro II- “... Si por ventura los omnes libres fueren luenne de la tierra, ó si non sopieren la verdad, estonz deven seer creydos los siervos, quando non a y omne libre por testimonio, é tales siervos que sean de la tierra, é que ayan conocida la cosa; mas non deven ser creydos de otros pleytos ni de grandes cosas, si non de pequennas, ó de pocas tierras, ó de pocas vinnas, ó de pocas casas; por estas cosas menudas, porque suele avenir á menudo contienda entre los hermanos y entre los vezinos...”

¹⁰ Así lo explica DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 173, págs. 65 y 66.

¹¹ Lo explica con detalle DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 184, págs. 68 y 69.

¹² DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 190, págs. 72 y 73.

De Vicente y Caravantes añade otra excepción, que fueran siervos del Rey¹³.

Por último, las sentencias dictadas por los jueces inferiores podían recurrirse ante el conde de la ciudad, o bien directamente ante el Soberano, en cuyo caso podía éste nombrar jueces delegados especiales que conocieran de tales recursos¹⁴:

- Ley XXIX, Título I, Libro II- “El iuez, si alguno le demanda razon de lo que iudgó antel sennor de la cibdad, ó ante otro iuez ante qui mandare el rey, dévele responder. E si el pleyto viniere antel rey, los iuezes qui mandare el rey, deven terminar el pleyto sin el obispo, é sin los otros iuezes. E si el pleyto es comenzado, ó acabado antel obispo, ó ante qualquier iuez, é alguna de las partes troxiere á otro mandado del rey, el que iudgó el pleyto, devel responder ante aquel iuez, que establesciera el rey; que si iudgó tuerto, que sea penado segund la ley; é si el otro se querelló con tuerto, quel faga emienda segund la ley.”

- Ley XXII, Título I, Libro II- “... Et todo ome que dize, que a el iudez por sospechoso, sis quisiere dél querellar mas adelante, pues quel pleyto fuere acabado, é cumplido, puede apellar antel principe aquel iudez...”

Por tanto, lo esencial en este Fuero es que, de los distintos jueces que existían en la época, los defensores conocían de pleitos civiles entre labradores y campesinos hasta 500 áureos y los adsertores de paz, a quienes puede considerarse como origen de los jueces conciliadores, eran enviados por el Rey solamente para “meter paz entre las partes”. Para los jueces inferiores era voluntario asesorarse. Por otra parte, el procedimiento que se seguía en general en todos los juicios era breve y sencillo, utilizándose la prueba testifical, documental y el juramento del interesado. En las causas de escasa entidad podían, a falta de hombre libre, ser testigos los siervos. Las sentencias dictadas por los jueces inferiores

¹³ También así lo entiende DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 184, pág. 69.

podían recurrirse ante el Señor de la ciudad o directamente ante el Soberano a través de jueces delegados.

B- FUERO REAL (1255) ¹⁵

En el Fuero Real, los competentes para conocer de los juicios son los alcaldes o persona nombrada por el Rey, o incluso la designada por avenencia de las partes:

-Ley II, Título VII, Libro I- “Nengun ome non sea osado de judgar pleitos si non fuere alcalle puesto por el rey, o si non fuere por placer de las partes, que lo tomen por avenencia para judgar algun pleito, o si el rey mandare por su carta a alguno que judgue algunt pleito...”

En cuanto a la forma que los pleitos debían revestir, parece deducirse de la Ley I, Título XI, Libro I, que estos podían iniciarse mediante escrito o sin él, es decir, verbalmente:

- Ley I, Título XI, Libro I- “Todo pleito que entre algunos derechamientre fuere fecho, quier sea por escripto, quier sin escripto, maguer que pena non sea hi puesta, firmemientre sea guardado, et el alcalle fagalo guardar. Et si en el pleito pena fuere puesta, qui contra el pleito veniere, peche la pena, asi como fue puesta en el pleito.”

Su Libro II hace referencia a la organización y procedimiento de los tribunales, dictando reglas precisas sobre substanciación y decisión de los juicios y ejecución de las sentencias. Sin embargo, solamente en cuestión de alzadas establece el Fuero Real reglas diferentes para los pleitos de menor cuantía, siendo considerados tales los de cantidad hasta

¹⁴ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Intr., pto. 182, págs. 70 y 71.

¹⁵ FUERO REAL del Rey Don Alfonso El Sabio, copiado del Códice de El Escorial y cotejado con varios códices de diferentes archivos por la Real Academia de la Historia, de orden y a expensas de Su Majestad, en la Imprenta Real, Madrid, 1836. Editorial Lex Nova, 1979, Valladolid.

10 maravedíes. De esta guisa, las sentencias dictadas en las pequeñas demandas no podían ser objeto de alzada, salvo que el Rey se encontrara en esa villa o en su término :

-Ley I, T. XV, Lib. II- “Porque a las vegadas los alcalles agravian las partes en los juycios que dan, mandamos que quando el alcalle diere el juycio, quier sea juycio acabado quier otro, sobre cosas que acaescen en pleyto, aquel que se toviere por agraviado puedase alzar fasta tercer dia, si non otorgó o non rescibió el juycio que fue dado: e esto sea en todo pleyto, sinon fuer en pleito de iusticia, o fuer menor de la cuantía que es puesta en la ley. Et en este tercer dia sobredicho sea contado el dia en que fuer dada la sentencia.”

-Ley V, T. XV, Lib. II- “Mandamos que ningun ome non se pueda alzar al rey de ningun juicio si la demanda non valiere de X maravedis arriba, e de X non; pero si el rey fuere en la villa o en su termino, quien quisiere alzese a él de todo juycio, quier sea de grand demanda quier de pequeña.”

Por tanto, los juicios son juzgados por el alcalde, o persona designada por el Rey o por aveniencia de las partes, pudiéndose iniciar los mismos por escrito o verbalmente, y sin posibilidad de alzada, salvo que el Rey se encontrase en la villa, para los asuntos de hasta 10 maravedíes.

C- ESPECULO (1255-1260)

Este cuerpo legal fue un mero ensayo de Las Partidas que estudiaremos a continuación, por lo que a ellas nos remitimos.

Por tanto, debemos simplemente señalar que su Libro IV trata de los que intervienen en los juicios y su Libro V del desarrollo de los mismos.

III- LAS PARTIDAS (1256-1265) ¹⁶

De las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, se dedica la Tercera (32 Títulos) al orden y ritualidad de los juicios: "De cómo se ha de fazer ordenadamente en cada logar, por palabra de juicio o por obra de hecho, para desembargar los pleitos". Se trata de un excelente compendio de la materia procesal de la época que, en opinión de Lasso Gaité, no se avenía con la práctica forense de su tiempo por exceso de prolijidad ¹⁷.

Dentro de esta Partida Tercera, se establece, en la Ley VI, Título XXII¹⁸, un juicio, que según Lasso Gaité, era más bien un juicio de equidad, para reclamaciones no superiores a 10 maravedies, entre personas pobres, de las que conocían los alcaldes¹⁹:

-“En escrito dijimos en la ley de suso que debe todo juzgador dar su juicio acatado; pero pleitos y ha que pueden ser juzgados sin escrito , por palabra tan solamente. E esto sería quando la demanda fuese de quantía de diez maravedís ayuso , sobre cosa que non valiere mas de esta quantía, mayormente quando tal contienda como esta acaeciese entre omes pobres , viles. Ca tales como estos develos el juzgador oyr , librar llanamente (esto es, como dice la glosa de Gregorio López, sin escritura) de guisa que non hayan facer costa , mission por razon de las escrituras. E esto mismo decimos que deve ser guardado quando los oficiales den cuenta de lo que ficeron de sus oficios, ó quando algun obispo oyere ó librare pleitos entre sus clérigos.”

¹⁶ LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY DON ALONSO EL NONO, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de Su Magestad, Tomo II (Partidas III-IV). Impreso por Andrea De Portonariis, 1555, Salamanca.

¹⁷ LASSO GAITE, Juan Francisco; Crónica de la Codificación Española, Antecedentes históricos, págs. 30 y 31, Tomo 4 sobre la Codificación Civil (Génesis e Historia del Código). Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, 1970, Madrid.

¹⁸ También hacen referencia a esta Ley DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Libro Tercero, pto. 244, págs. 449 y 450; FAIRÉN GUILLÉN, Víctor; El Juicio Ordinario y los Plenarios Rápidos, Cap. VI, pto. 2, págs. 80 y 81. Editorial Clarasó (Bosch), 1953, Barcelona.

¹⁹ LASSO GAITE, Crónica... cit., Introducción, pág. 1, Tomo 2 sobre el Procedimiento Civil.

La Ley a que se refiere la anterior es la XLI, Tít. II²⁰, también de la Partida III, que dice:

-“Escrita tovieron los antiguos por bien que fuere fecha toda demanda que oviessen facer de diez maravedís arriba de cosa que no lo valse. Mas dende ayuso non ha el demandador porque la facer en escrito si non quisiere; ca abondale que diga por palabra antel juez seyendo y el demandado que es lo que demanda y por que razon, asi como de suso es dicho. E esto tovieron por bien, porque los pleitos pequeños se puedan librar mas aina , sin gran costa.”

Se trata del mismo fenómeno que, como explica Fairén Guillén, provoca la aparición de nuevas y más abreviadas regulaciones procesales italianas en los Estatutos del siglo XIV, a las que en el siguiente epígrafe haremos referencia; sin embargo, la falta de desarrollo procedimental del juicio así regulado, impide una más extensa interpretación²¹.

Aparte de esto, asimismo explica Fairén como en la Ley XXXI, T. I, Partida VI aparece, a propósito de los peregrinos y romeros, un juicio de equidad²²:

-Ley XXXI, T. I, Part. VI- “Como son tenudos los aportellados de los logares de guardar e de amparar su derecho a los pelegrinos e a los romeros.

Todos los judgadores e oficiales de nuestro Señorío, mandamos, que señaladamente, sean tenudos, cada uno dellos en su lugar, de guardar, e amparar, los pelegrinos, e los romeros, que non resciban tuerto, nin daño en sus personas, nin en sus cosas, e que guarden ellos, e fagan guardar, a todos los otros, todas estas cosas, en fecho de los romeros; assi como sobredichas son. E demas desto, les mandamos, que si acaeciére,

²⁰ Asimismo la mencionan DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado... cit., Libro Tercero, pto. 244, pág. 450; MANRESA Y NAVARRO, José María: Comentarios a la LEC reformada conforme a las bases aprobadas por la Ley de 21 de junio de 1880, Tomo III, pág. 862. Editorial Reus, 1955, Madrid.

²¹ FAIRÉN GUILLEN, El Juicio... cit., Cap. VI, pto. 2, pág. 81.

²² FAIRÉN GUILLEN, El Juicio... cit., nota marginal nº 210, pág. 81.

que algunos romeros, o los herederos dellos, que vinieren por razón de sus testamentos, o de sus bienes ante ellos, que los oygan luego, o los libren lo mas ayna, e lo mejor que pudieren e sopieren, sin escatima e sin alongamiento. De manera que su romeria, nin su derecho, non se les embargue, por alongança de pleytos escatimosos, nin en otra manera que ser pueda.”

En resumen: en atención a la cuantía (hasta 10 mrvs.) y a la calidad de los sujetos (entre pobres), se establece un juicio que se tramita llanamente y de palabra. Junto a este juicio, especial tratamiento tienen los peregrinos y romeros, cuyos asuntos se resuelven a través de un juicio de equidad, en el que se destaca la necesidad de la audiencia a los mismos, resolviendo el juzgador lo mejor que supiere y sin dilaciones.

IV- LEGISLACION POSTERIOR A LAS PARTIDAS HASTA LA CONSTITUCION DE 1812

El sistema general imperante era el del *solemnis ordo iudiciarius*, ampliamente recogido en la Partida Tercera. Este dio lugar al proceso ordinario (antecedente de nuestro actual juicio de mayor cuantía), basado en una concepción contractual del proceso a través de la *litis contestatio*, y por tanto lleno de formalismos y lentitud.

Sin embargo, la ineficacia de un proceso complejo, lento y caro como el anterior para hacer frente a las necesidades diarias de justicia obligó a crear un nuevo tipo procesal, en el que, en aras de la economía procesal, se extirpaba, entre otras actuaciones, la *litis contestatio*. A pesar de su rapidez, este nuevo juicio no dejaba de ser plenario y ordinario, por lo que se le denomina “juicio plenario rápido ordinario”, o también “proceso abreviado o sumario indeterminado” (pues no estaba pensado para casos particulares), entendiéndose aquí la sumariedad en el sentido de la sumariedad cuantitativa que explica Guasp como

contrapuesta a la cualitativa²³, o de la sumariedad formal de la que habla Fairén como opuesta a la material²⁴. Es decir, se trata de un proceso “sumario” como sinónimo de abreviado (o acelerado respecto al proceso ordinario general), no como contrario de plenario. Aclarado lo anterior, y para no inducir a error al emplear el término de “sumario” en sentido distinto del que generalmente tiene en la técnica jurídica, a partir de ahora nos referiremos a dicho proceso con la denominación de “juicio plenario rápido (abreviado o acelerado) ordinario”.

El origen de este juicio plenario rápido ordinario se encuentra en el Derecho Canónico (a través de las decretales del Papa Clemente V, *Saepe Contingit* en 1306 y *Dispendiosam* en 1311) y en el Dº mercantil de las ciudades italianas del siglo XIV.

Las principales características del mismo eran: supresión de formalidades innecesarias; autoridad del Juez en la dirección del proceso; suavización del principio de preclusión en aras de la elasticidad; breves plazos para prueba y para dictar sentencia; limitación o supresión de apelaciones independientes de resoluciones interlocutorias (mostrando una inspiración más próxima a la bula *Saepe Contingit*, del Papa Clemente V (1306), ampliamente recibida a través de los canonistas y estatutarios italianos en toda Europa); y sobre todo, predominio de la oralidad.

Este nuevo proceso se recibió en España a través de dos vías: la del proceso mercantil y la del proceso civil. Parece evidente que estos juicios plenarios rápidos civil y mercantil españoles dieron lugar, de un lado, al actual juicio verbal²⁵, de otro, y siguiendo a

²³ GUASP DELGADO, Jaime; *Derecho Procesal Civil*, págs. 78, 617 y 618. Instituto de Estudios Políticos, 2ª edición, 1961. Madrid.

²⁴ FAIRÉN GUILLÉN, *El Juicio...cit.*, págs. 55 y 56.

²⁵ De la misma opinión DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado...cit.*, págs. 418 y ss.; FAIRÉN GUILLÉN, *El...cit.*, pág. 93 y nota marginal nº 247.

Fairén, al de menor cuantía, e incluso, indirectamente, al intermedio de pequeña cuantía o juicio de cognición²⁶.

A- ORDENANZAS DE VALENCIA (1283)²⁷

Iniciamos aquí la introducción en España del juicio plenario rápido ordinario en el proceso mercantil.

Esta se produjo a través de los Consulados de Comercio, primero en la Corona de Aragón y luego en la de Castilla. En concreto, el primer paso se dio en las Ordenanzas concedidas por Pedro III a Valencia en 1283.

B- CONSULADO DE PALMA DE MALLORCA (1343) Y CONSULADO DE BARCELONA (1347)²⁸

Fue en estos dos Consulados donde se da el siguiente paso para la recepción del juicio plenario acelerado ordinario mercantil en España, pues en ellos se recoge el contenido de las Ordenanzas de Valencia.

C- FUERO IN CAUSIS DEL REINO DE ARAGON (1362)²⁹

Dado por Pedro II en Monzón, a través de él el proceso plenario abreviado mercantil entra en el Reino de Aragón para cuantías de hasta 20 sueldos, ampliándose ésta progresivamente en Fueros posteriores:

²⁶ FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., pág. 93.

²⁷ Referencia tomada directamente de MONTERO AROCA, Juan; ORTELLS RAMOS, Manuel; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis; Derecho Jurisdiccional, Tomo II (Proceso Civil 1º), Cap. VIII, B) Juicios plenarios rápidos ordinarios, págs. 524 y 525. José María Bosch Editor, 1994, Barcelona.

²⁸ Ver nota anterior

²⁹ Fueros y Observancias del Reino de Aragón, Libro III, ediciones de 1624 y 1667, así como las de Savall y Penen; FAIRÉN GUILLÉN, El Juicio...cit., págs. 95, 96 y 97.

- Libro III de la Recopilación Foral- "Statuimus, et ordinamus, que in causis pecuniariis summam XX sol. laccen: non excedentibus, procedi valeat, et debeat sine scriptis simpliciter summarie, et de plano, sola facti veritate attenta."

D- LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR (1347-1370)

Finalmente, este juicio plenario acelerado ordinario mercantil cristaliza en las Ordenanzas de la antigua forma judicial del Consulado del Mar, cuyo Capítulo XXXVI rezaba así:

-“Com deven esser determinats los plets per les consols, en el Orde Judiciari de la cort des consols de mar de Valencia.

Les cónsols, per carta del senyor rey, han poder quels plets e qüestions que davant ells se menen, hoyen en aquelles per si deguda, determenen breument, sumaria e de pla, sens brugit e figura de juy, sola facti veritatis attenta, segons que de ús e custum de mar és acostumat de fer.”³⁰

La traducción castellana que publicó Capmany:

-“Cómo deben ser determinados los pleytos por los Consules.

Los Consules por cédula del Señor Rey tienen autoridad de oír los pleytos y questionones que ante ellos se introducen, y decirlos difinitivamente, breve, sumaria y llanamente, sin estrépito y figura de juicio, sola facti veritate attenta, es decir, atendida sola la verdad del hecho, según se ha acostumbrado a hacer a uso y estilo del mar.”³¹

Se pone de manifiesto en estas palabras, como explica Fairén, el indudable parentesco del juicio rápido aquí recogido con los creados por los canonistas en la

³⁰ VALLS Y TABERNER, Consolat de Mar, Vol. II, 1931, Barcelona.

³¹ CAPMANY Y DE MONPALAU, Antonio; Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona o Libro del Consulado del Mar. Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1797, Madrid.

clementina Saepe contingit y por los diversos textos estatutarios italianos del siglo XIV(“simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura judicii”).³²

Como vemos, en el Consulado del Mar se recoge ya definitivamente el juicio plenario rápido ordinario en su modalidad mercantil, ordenando a los cónsules que juzguen “breve, sumaria y llanamente, sin estrépito y figura de juicio, atendida sola la verdad del hecho”, palabras que recuerdan a la Saepe Contingit y a los Estatutos italianos del s. XIV.

E- LEY DICTADA POR LOS RR.CC. EN LAS CORTES DE TOLEDO DE 1480³³

En lo que a la jurisdicción civil respecta, aparte de los juicios que aparecen en Las Partidas con claridad no excesiva, este juicio plenario abreviado ordinario, influenciado por los Estatutos italianos y aún por el Consulado del Mar, aparece en una Ley dictada por los RR.CC., D. Fernando y D^a Isabel, en Toledo en 1480:

- “Jurisdicción al Consejo para conocer de todos los negocios que vinieren a él; y cuyo despacho se entienda convenir al Real servicio.

Porque acaece algunas veces que vienen al nuestro Consejo algunos negocios y causas civiles y criminales, que brevemente, a menos costa de las partes y bien de los hechos, se podrian expedir y despachar en el nuestro Consejo, sin hacer dellas comisión; es nuestra merced, y ordenamos y mandamos, que los del nuestro Consejo tengan poder y jurisdicción, cada que entendieren que cumple a nuestro servicio y al bien de las partes, para conocer de los tales negocios, y los ver y librar, y determinar simplemente y de plano, y sin estrépito y figura de juicio, solamente sabida la verdad; y que de cualesquier sentencias y determinaciones que ellos dieren e hicieren, no haya lugar apelación ni

³² FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 81 y 82; le apoyan MONTERO AROCA, ORTELLS RAMOS y GÓMEZ COLOMER, Derecho...cit., pág. 525.

³³ Texto original consultado en FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 83 y ss. .

agravio, ni alzada, nulidad, ni otro remedio ni recurso alguno, salvo suplicación para ante Nos, para que se revea en el dicho nuestro Consejo; y que de la sentencia o determinación que dieren en grado de revista no pueda haber ninguno de los dichos remedios y recursos, mas que aquello sea executado; pero que en este caso haya lugar la ley hecha por el Rey don Juan nuestro bisabuelo en las Cortes de Segovia, que habla sobre la fianza de las mil y quinientas doblas.”

Se trata de la Ley VII de las Cortes de Segovia de 1390 (Ley I, Tít. XXII, Lib. XI de la Nueva Recopilación), por la que se intentaba poner fin “a la malicia de aquellos que suplican por alongar los pleytos”.

Es un intento de desgravar al Consejo Real, evitando la interposición de recursos; tendencia que también se plasmó, en otra Ley, dictada en las mismas Cortes de Toledo de 1480, por la que se determinaba que “las apelaciones de sentencias hasta en cantidad de veinte mil maravedís vayan a los Regimientos de los pueblos”. Su cuantía fue elevada en las Cortes de Madrid de 1604, por Felipe III, a 30.000 maravedís, y por Carlos III en la Resolución al Consejo de 31 de julio y Cédula de éste de 5 de noviembre de 1778 hasta 40.000 maravedís.

En resumen: el juicio plenario rápido ordinario, en su modalidad civil, aparece ya por fin en Castilla de forma clara (anteriormente existían algunas regulaciones parecidas pero no demasiado precisas en Las Partidas) a través de esta Ley de 1480 dada por los RR.CC. en Toledo, en la que se ordena al Consejo que despache ciertas causas, las de menor importancia, “brevemente, a menos costa de las partes y bien de los hechos”, “sin hacer dellas comisión”, y de nuevo se libren “simplemente y de plano, y sin estrépito y figura de juicio, solamente sabida la verdad”. Se suprime en ellos la posibilidad de cualquier tipo de recurso, salvo la suplicación bajo fianza de 1.500 doblas, según la Ley

VII de las Cortes de Segovia de 1390. Por otro lado, y también para descargar al Consejo Real de la interposición de recursos, otra Ley toledana de 1480 encomienda las apelaciones de los asuntos de hasta 20.000 mrvs. a los Regimientos de los pueblos, cuantía posteriormente elevada.

F- ORDENAMIENTO DE MONTALVO U ORDENANZAS REALES DE CASTILLA (1485)³⁴

Según estas Ordenanzas, serán los Alcaldes los encargados de juzgar como jueces ordinarios (L. I, T. XV, L. II). Sin embargo, es en su Libro III “Del orden que se ha de tener en los juicios y pleitos civiles y criminales”, donde encontramos alguna referencia a un plenario rápido, esta vez no en función de la cuantía del asunto, sino de la materia (en juicios de los arrendadores sobre sus alcavalas):

- L. XIX, T. II, L. III- “Que los Arrendadores no emplazen mas de una vez cada semana, y como han de emplazar.

... Y mandamos que los Arrendadores puedan emplazar á qualesquier personas sobre las dichas alcavalas en cada Lugar delante un Alcalde de los ordinarios, ... Y que el Alcalde que hoviére de conoscer de los tales pleitos, que los libre sumariamente sabida solamente la verdad, y que todavía el Alcalde no reciva la demanda por escripto. Pero si el Alcalde la recibiere por escripto, que el demandado sea tenido de contestar la demanda dentro de los nueve dias, só pena de confiesso.”

³⁴ LOS CODIGOS ESPAÑOLES, concordados y anotados; Tomo 6, Ordenanzas Reales de Castilla, recopiladas y compuestas por Alfonso Díaz de Montalvo, mandado por los RR.CC., págs. 247 y ss.. Imprenta de la Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra, 1849, Madrid.

Por otro lado, también se recoge el orden de los procesos ordinarios para que estos sean expedidos brevemente (L. I, T. IV, L. III “La orden que se debe tener en los pleitos para que brevemente sean expedidos”).

Resumiendo: las Ordenanzas Reales de Castilla ordenaban a los alcaldes librar “sumariamente sabida solamente la verdad” los asuntos en materia de los arrendadores sobre sus alcavalas, pudiendo en esos casos recibir las demandas por o sin escrito. En su afán por promover una justicia más vivaz, estas Ordenanzas también se preocupan de que el mismísimo proceso ordinario se expida más brevemente.

G- LEY DE 21 DE JULIO DE 1494, DADA POR LOS RR.CC. EN MEDINA DEL CAMPO (BURGOS)³⁵

En Castilla, la entrada del juicio plenario rápido ordinario mercantil se produjo con la concesión por los RR.CC., en 1494, al Prior y Cónsules de Burgos, de jurisdicción para conocer de los debates entre mercaderes, con amplio marco de competencia objetiva, y a través de un procedimiento plenario acelerado (pues no se admitía ninguna cognición posterior más amplia), que se desarrollaba breve y “sumariamente”, sin dar lugar a largas ni dilaciones ni plazos de abogados, con un sistema completo de medios de impugnación. De acuerdo con Hevia de Bolaños, se trataba de un juicio de equidad, aunque progresivamente fue transformándose en un juicio de derecho.³⁶

Reproducimos el texto de la Ley en sus dos primeros párrafos:

-“Acatando quanto cumple al nuestro servicio, y al bien y pro de nuestros Reynos de conservar el trato de la mercadería, y como en algunas partes de nuestros Reynos y en los Reynos comarcanos los mercaderes tienen sus consules, que hacen y administran

justicia en las cosas de mercaderías y entre mercader y mercader; fue acordado, que en quanto nuestra merced y voluntad fuese, debíamos de proveer en la forma y manera siguiente.

Por la presente, damos licencia, poder y facultad y jurisdicción a Prior y Consules de los mercaderes de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así sobre trueque y compras, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre afletamento y naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros Reynos como fuera dellos, así para que puedan conocer y conozcan de las diferencias y debates, y pleytos pendientes entre los susodichos, como de todas las otras cosas que se acaescieren de aquí adelante, para que los libren y determinen breve y sumariamente según estilo de mercaderes, sin dar lugar a largas ni dilaciones ni plazos de abogados.

2. Otrosí mandamos, que de la sentencia o sentencias que así dieren los dichos Prior y Consules entre las partes, si alguna dellas apelare, que lo pueda hacer para ante nuestro Corregidor que agora es, o fuere en la dicha ciudad de Burgos, y no para ante otra parte: al qual dicho Corregidor mandamos, que conozca de la dicha apelación; y para della conocer, y la determinar, tome consigo dos mercaderes de la dicha ciudad, los que a él le pareciere de que hombres de buenas conciencias; los quales hagan juramento de se haber bien y fielmente en el negocio que hubieren de entender, guardando la justicia a las partes y conociendo y determinando la causa por estilo de entre mercaderes, sin dar lugar a luengas de malicias, ni a plazos ni a dilaciones de los Abogados; y si los dichos Corregidor

³⁵ Texto original tomado de FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 86 y ss. .

y dos mercaderes confirmaren la dicha sentencia, que así fuere dada por los dichos Prior y Consules, mandamos, que della no haya apelacion ni agravio ni ningun otro recurso alguno...”

En Castilla, este proceso mercantil pasa de esta Ley dada en Burgos a las Ordenanzas de Madrid, Sevilla, San Sebastián (en opinión de Montero³⁷), y también a las de Bilbao (1737) y Burgos (1766), siendo objeto de análisis más adelante estas dos últimas, por ser las de mayor influencia.

Como vemos, esta Ley dada en Medina del Campo en 1494 introduce, como juicio de equidad en principio, el juicio plenario rápido ordinario mercantil en Castilla, encargando al Prior y Cónsules de Burgos que conozcan de los pleitos entre mercaderes “breve y sumariamente”, “sin dar lugar a largas ni dilaciones ni plazos de abogados”. La apelación de la sentencia la conocerá el Corregidor de dicha ciudad junto con dos mercaderes por él elegidos, y contra su decisión no cabrá recurso. Este juicio mercantil castellano es recogido posteriormente en las Ordenanzas de Bilbao (1737) y Burgos (1766).

H- LEY DICTADA POR D^a JUANA Y D. CARLOS EN LAS CORTES DE MADRID DE 1534³⁸

Esta Ley ordenaba una tramitación leve para los juicios que versaren sobre cantidades hasta 1.000 maravedies:

- “Modo de proceder en pleytos civiles, y sobre deudas hasta mil maravedís, sin forma de proceso ni tela de juicio.

³⁶ HEVIA DE BOLAÑOS, Juan; Curia Philipica, págs. 446 y ss.. 1797, Madrid.

³⁷ MONTERO AROCA, junto a ORTELLS RAMOS y GÓMEZ COLOMER, D^o...cit., pág. 525.

³⁸ Texto original tomado de FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 91 y ss. .

Mandamos, que en los pleytos civiles, y sobre deudas que fueren de cantidad de mil maravedís y de ahí abaxo, porque en los tales haya toda la brevedad, no haya orden ni forma de proceso, ni tela de juicio ni solemnidad alguna; salvo que, sabida la verdad sumariamente, la Justicia proceda en pagar lo que se debiere y que no se asiente por escrito sino la condenación ó absolución; y que no se admitan escritos y alegaciones de Abogados; y que en las tales causas, no haya apelación ni restitución, ni otro remedio alguno; y que el Escribano ante quien pasare, no pueda llevar de derechos por todo el tal proceso mas de medio real; y encargamos á los Jueces, que con toda brevedad, lo despachen: lo qual todo no se entienda en los casos y penas de ordenanzas.”

Posteriormente, como veremos, su cuantía de 1.000 maravedíes se irá aumentando.

Por otra parte, Fairén Guillén ha querido ver en esta Ley de 1534 un posible acercamiento de las materias civil y mercantil, pues el ámbito de este juicio se extendía no solamente a asuntos civiles, sino también “sobre deudas”, queriéndose incluir con esta expresión litigios de carácter comercial que sobrepasando la cantidad antes mencionada serían objeto de tratamiento procedimental especial³⁹.

En resumen: esta Ley madrileña de 1534 ordena, para los asuntos civiles (y parece que también para los mercantiles) hasta 1.000 mrvs. una tramitación breve, sin solemnidades, “sabida la verdad sumariamente”, sin escritos ni alegaciones de abogados y sin posibilidad de recurso. Posteriormente se aumentará su cuantía.

³⁹ FAIRÉN GUILLÉN, EL...cit., pág. 92.

I- NUEVA RECOPIACION (1567)⁴⁰

Este cuerpo legal dedica sus Libros II y III a las leyes y tribunales y su Libro IV a los procedimientos judiciales.

Se limita a recoger las anteriores leyes ya reproducidas:

- La Ley de 1480, dada por los RR.CC. en las Cortes de Toledo, que introduce en Castilla el juicio plenario rápido en lo civil, pasó a ser reproducida en esta Nueva Recopilación en su Ley XXII, Tit. IV, Lib. II.

- La Ley de 1494, dada por los RR.CC. en Medina del Campo, que introduce el juicio plenario rápido mercantil en Castilla, se recoge en las Leyes I y II, Tit. XIII, Lib. III de esta Recopilación.

- La Ley de 1534, dictada por D^a Juana y D. Carlos en las Cortes de Madrid, se recoge a su vez en dos leyes del Tit. IX, Lib. III:

* Ley XIX- otorga al juicio de 1534 el tope máximo de 400 maravedíes.

* Ley XXIV- ese tope se establece en 1.000 maravedies.

Por tanto, esta Nueva Recopilación recoge las anteriores Leyes que introducían o estaban relacionadas con el juicio plenario abreviado ordinario en sus modalidades civil y mercantil castellanas.

J- ORDENANZAS DE BILBAO (1737) Y ORDENANZAS DE BURGOS (1766)⁴¹

Ya hemos dicho anteriormente cómo el juicio plenario acelerado mercantil, introducido en Castilla por la Ley de 1494, es posteriormente desarrollado en varias

⁴⁰ NUEVA RECOPIACION de las Leyes de España, dividida en IX Libros, mandada formar por FELIPE II. Impresa en Madrid, 1567.

⁴¹ Textos originales tomados de FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 88 y ss. .

Ordenanzas, siendo de mayor influencia las de Bilbao, después recogidas en las del Consulado de Burgos.

Las Ordenanzas de Bilbao, publicadas por Felipe V en 1737, desarrollan las normas procesales de este proceso mercantil rápido en los párrafos VI, VII y VIII del Capítulo I, dedicado a “La jurisdicción del Consulado, sus reales privilegios, y orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia”:

-Cap.I, Párrafo VI- “Por quanto en dicho Consulado deben determinarse los pleytos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados, como y por las razones que se previene y manda por dichos Privilegios y Ley Real, ni guardar la forma o orden del Derecho; se ordena, que siempre que qualquiera persona pareciere en dicho Consulado a intentar qualquiera accion, no se le admitan ni puedan admitir demandas ni peticiones algunas por escrito, sin que ante todas las cosas el Prior y Consules hagan parecer ante sí a las partes, si buenamente pudieren ser habidas; y oyéndolas verbalmente sus acciones y excepciones, procurarán atajar entre ellos el pleyto y diferencia que tuvieren con la mayor brevedad; y no lo pudiendo conseguir, les admitan sus peticiones por escrito; con que no sean dispuestas, ordenadas ni firmadas de Abogados, como se ha practicado, y ha sido y es de ordenanza. Y procurando en quanto a esto evitar malicias, si se presumiere que la demanda, respuesta, o otra peticion y libelo fuere dispuesta de Abogado, no la admitirán hasta que bajo juramento, declare la parte, no haberla hecho ni dispuesto Abogado. Y habiendose de dar al pleyto, por no haberse podido comprobar ni ajustar verbalmente, se proveerá a la demanda o petición del actor primero que a otra alguna del reo.”

Parágrafo VII: “Atendiendo a los fines arriba expresados, de que en los pleytos y diferencias se haga justicia breve sumariamente, y solo sabida la verdad y guardada la buena fe; para mejor conseguirlo, se ordena, que como se ha acostumbrado y acostumbra, y ha sido y es ordenanza, en los procesos que se hicieren en el Juzgado de dicho Consulado, así en primera instancia como en grado de apelación ante Corregidor y Cólegas, y Corregidor y Re-cólegas en los autos que se hubieren de dar, y en las sentencias que se pronunciaren, no se haya de tener ni se tenga consideración a nulidad de lo actuado, ineptitud de demanda, respuesta, ni otra qualquiera formalidad ni orden de Derecho; pues, en qualquiera estado que se sepa la verdad, se ha de poder determinar y sentenciar, y para ello tomar de oficio los testigos que convengan, y los juramentos de las partes que les parezcan a los Jueces, de manera que mejor se averigüe la verdad, y puedan pasar a su determinación y sentencia.”

Parágrafo VIII: “Y respecto de que se ha experimentado, que en los pleytos que se siguen en dicho Consulado algunas de las partes suelen apelar para ante Corregidor y Cólegas de autos interlocutorios, consiguiendo inhibir a Prior y Cónsules maliciosamente, solo con el fin de dilatar y molestar a las otras partes, pervirtiendo la verdad y orden a que en dicho Juzgado se debe atender; para evitar los inconvenientes y perjuicios que de esto resultan, se ordena, que de aquí adelante ninguna pueda apelar de ante Prior y Cónsules, sino de sentencia difinitiva, o auto interlocutorio que tenga fuerza de tal, o que de él resulte daño irreparable; y que la apelación, que en contravencion de esto se interpusiere, no valga, ni el Prior y Cónsul se inhiban, ni puedan ser inhibidos del conocimiento de la causa, sino que todavía conozcan de ella hasta sentenciarla difinitivamente, como se ha acostumbrado y acostumbra, y ha sido y es también de ordenanza.”

Las Ordenanzas de Burgos, dictadas por Carlos III en San Ildefonso, por Cédula de 15 de agosto de 1766, reproducen en su Capítulo II las de Bilbao.

En este juicio mercantil se procedía igualmente “breve y sumariamente por estilo de entre mercaderes, sin abrir nuevos términos para dilatorias ni probanzas, ni admitir libelos ni escritos de Abogados”⁴². Sus características, como explica Fairén, eran las de un juicio plenario rápido; sin litis contestatio; con predominio del principio oficial del Juez, que podía dar por concluso el pleito en cuanto adquiriese convicción de la verdad; con restricción de las apelaciones interlocutorias; todo ello con fines de concentración y averiguación de la verdad material⁴³. Esto hizo que Hevia De Bolaños lo califique de juicio de equidad⁴⁴.

Resumiendo: las Ordenanzas de Bilbao y Burgos desarrollan el juicio plenario rápido ordinario mercantil. Se regula un juicio breve y sumario, sin dilaciones, ni escritos de Abogados; es obligatoria la previa conciliación ante el Prior y Cónsules; no se admite ninguna formalidad, como la nulidad de lo actuado; el Juez, en cualquier momento, puede dictar sentencia, pudiendo para lo cual tomar de oficio testigos y juramentos a las partes; de la sentencia del Prior y Cónsules se admite apelación ante el Corregidor y Cólegas (o Re-Cólegas), mas no contra autos interlocutorios, salvo que de ellos dimanen daños irreparables. Dicho juicio pasa de las Ordenanzas de Bilbao a las de Burgos, siendo calificado de juicio de equidad por la doctrina.

⁴² Una mayor extensión sobre su procedimiento puede encontrarse en FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 89 y 90.

⁴³ FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 90 y 91.

⁴⁴ HEVIA DE BOLAÑOS, Curia...cit., pág. 446; también al respecto FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., nota marginal nº 239.

K- REAL CEDULA DE 6 DE OCTUBRE DE 1768⁴⁵

Amplía el ámbito de aplicación del juicio civil rápido de 1534, establecido posteriormente en 400 y 1.000 mrs. en la Nueva Recopilación.

En concreto, esta Real Cédula, en su artículo 1 párrafo 6, prevenía que los Alcaldes de Cuartel de Madrid pudieran conocer por los trámites de dicho juicio verbal civil, de causas de hasta 500 reales de cuantía:

-“División de Madrid en ocho cuarteles; y establecimiento de los alcaldes de barrio.

6: ... Y declaro, que la cantidad para los juicios verbales, de que puede y debe conocer cada Alcalde en su cuartel, ha de ser hasta quinientos reales vellon en lugar de la de cien reales.”

Por tanto, esta Real Cédula de 1768 amplía el juicio plenario rápido ordinario civil (también llamado juicio verbal civil) a 500 rs. para los alcaldes de cuartel de Madrid.

L- REAL RESOLUCION DE 18 DE DICIEMBRE DE 1796⁴⁶

Esta Real Resolución afecta a la jurisdicción militar, pues ordenó a los juzgados militares que no formaran procesos por intereses pecuniarios que no pasaran de 500 rs. en España y de 100 pesos en Indias, evacuándose precisamente dichos puntos en juicios verbales, de cuyas determinaciones no hubiera restitución, recurso ni otro remedio.

⁴⁵ Ley IX, T. XXI, L.III de la Novísima Recopilación.

⁴⁶ DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., pto. 244, pág. 450, Libro Tercero; nota marginal nº 2, pág. 186, Tomo V, Novísima Recopilación.

M- NOVISIMA RECOPIACION (1805)⁴⁷

Dedica esta recopilación su Libro IV y V a la organización de los Tribunales y Consejos y su Libro XI al procedimiento civil.

Recoge las Leyes ya agrupadas en la NR (Nueva Recopilación), así como las dictadas con posterioridad. Ahora citaremos, además de las ya mencionadas al tratar de la NR y de las posteriores, otras, también anteriores a la NR, pero que no fueron en su momento objeto de mención, por ser de menor importancia y por razones de claridad expositiva de la introducción del juicio plenario abreviado ordinario en España:

- La Ley I, Tít. V, Lib. IV de esta Novísima Recopilación recoge la Ley XXII, T. IV, L. II de la NR, que plasmaba a su vez la Ley toledana de 1480.

- La Ley VIII, T. III, L. XI se hace eco de las Leyes XIX y XXIV, T. IX, L. III de la NR, que recogían la Ley madrileña de 1534.

- La Ley V, T. III, L. XI recoge otra Ley del año 1534 dada por D. Carlos y D^a Juana en Madrid, anteriormente recogida por la NR en su L. XI, T. III, L. IV, la cual ordenaba no llevar a las Audiencias las demandas inferiores a 10.000 mrs, para evitar gastos y vejaciones a los demandados:

“En las Audiencias no se ponga por caso de Corte demanda que no exceda de diez mil maravedís.

Porque somos informados, que á causa de llevar á las nuestras Audiencias por caso de Corte muchos pleytos de pequeña cantidad, son vexados y fatigados nuestros súbditos, haciendo en seguimiento dellos muchas costas y gastos; por ende, por lo obviar en alguna manera, mandamos, que como antes de agora no podian ir á las dichas Audiencias pleytos de seis mil maravedís y dende abaxo por nueva demanda, de aquí adelante no puedan

⁴⁷ NOVISIMA RECOPIACION de las Leyes de España, dividida en XII Libros, mandada formar por

ponerse demandas de diez mil maravedís y dende abaxo, sino de diez mil maravedís arriba.”

- La Ley VII, T. III, L. XI recoge una Ley dada de nuevo por D. Carlos y D^a Juana, en Alcalá, el 3 de marzo de 1543, recogida con anterioridad como parte de la L. L, T. IV, L. III de la NR, en la que se dispone que despachen brevemente los Alcaldes, sin sujeción a formalidades, las demandas que presenten de palabra los mismos interesados, por ahorrarse gastos de Letrado y Procurador:

“La demanda puesta de palabra, y no por escrito, se admita para excusar costas.

Si alguno quisiere poner alguna demanda por palabra, ó hacer algun otro pedimento, por excusar costas del Letrado y Procurador, mandamos, que los Alcaldes mayores (de los Adelantamientos), porque los pleytos se despachen brevemente, admitan el pedimento ó demanda que alguno quisiere poner de palabra, aunque no la traiga por escrito.”

- La Ley V, T. II, L. IX plasma las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y de Burgos de 1766, que recogían el juicio mercantil de la Ley castellana de 1494 (ésta previamente había sido recogida ya en las Ls. I y II, T. XIII, L. III de la NR).

- Por su parte, la Ley IX, T. XXI, L. III, a la que remite la Ley X, T. XXI, L. III (a la que a su vez remite el párrafo 15 de la L. I, T. XIII, L. V), recogió la Real Cédula de 1768, ampliatoria de la cuantía del juicio civil rápido de 1534.

- La Ley XI, T. XX, L. XI recoge una Ley dada por Carlos III en 1778, según la cual se encomiendan las apelaciones de estos juicios verbales a los Ayuntamientos, porque “el seguir su apelación en el Consejo, Audiencias ó Chancillerías, era de gran costa y vexacion á las partes, y muchos, por evitarlas, desamparaban su justicia y causas”. Esta

Ley amplía a 40.000 mrs. la cuantía de esas apelaciones que la L. X, T. XX. L. XI establecía en 30.000 (recogen la L. XIX, T. XVIII, L. IV y L. XLIII, T. XXV, L. IV de la NR, que a su vez plasmaban una de 1604 dada en Madrid por Felipe III) y la L. VIII, T. XX, L. XI en 20.000 (recoge las L. VII y XVIII, T. XVIII, L. IV de la NR, las cuales se hacían eco de una de 1480, dada en Toledo por los RR.CC. Originalmente, encomendaba estas apelaciones a los Regimientos de los pueblos.):

“Los Ayuntamientos de los pueblos conozcan de las apelaciones de las sentencias de sus Justicias hasta en cantidad de quarenta mil maravedís.

...; y que sus Cabildos ó Ayuntamientos conozcan en adelante de las sentencias apeladas de las Justicias ordinarias de sus respectivos pueblos, hasta en la cantidad de quarenta mil maravedís; ...”

Por tanto, esta Novísima agrupa las Leyes ya recogidas en la NR sobre el juicio rápido civil y mercantil, con sus reformas y aumentos de cuantía posteriores, así como otras que, también recogidas en la NR, establecen cuantías por debajo de las cuales no pueden llevarse los pleitos a las Audiencias, disponen que conozcan los Alcaldes brevemente y sin formalidades de las demandas interpuestas de palabra para ahorrarse gastos de Letrado y Procurador, y encomiendan las apelaciones de dichos juicios verbales a los Ayuntamientos.

N- CONSTITUCION DE CADIZ DE 19 DE MARZO DE 1812⁴⁸

Este texto constitucional dedica su Título V (arts. 242 a 308) a la Administración de Justicia; en concreto, el Capítulo I de dicho Título se ocupa de los Tribunales y el Capítulo II de la Administración de Justicia en lo civil.

De la Constitución de Cádiz cabe destacar que logra la independencia de la judicatura en la aplicación de las leyes, pues se crea el tercer poder del Estado, el judicial, implantándose así la separación de los tres poderes; además, se establecen en todos los pueblos alcaldes de elección popular, cuya jurisdicción se extendería a los negocios leves en lo contencioso; también se fijan en cada cabeza de partido Jueces de letras con su Juzgado correspondiente para ejercer la jurisdicción ordinaria en 1ª instancia, que antes se había ejercido por alcaldes mayores o corregidores nombrados por el Gobierno; se erigen Audiencias territoriales, que conocerían de los pleitos civiles de los Juzgados inferiores de su demarcación, en 2ª y 3ª instancia; junto a ello, el art. 244 (Cap. I) proclama el principio de uniformidad procesal en todo el Reino y los arts. 280 a 285 (Cap. II) establecen como necesaria la conciliación como trámite previo indispensable para toda demanda por negocio civil o por injurias, encomendando su ejercicio al Alcalde, con dos hombres buenos, designados uno por cada parte, y ordenando que en todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a lo sumo tres instancias y tres sentencias definitivas.

El Real Decreto de 16 de septiembre de 1837 otorgó vigencia a este Título V, con rango de Ley ordinaria, sobreviviendo así a los avatares del texto constitucional.

⁴⁸ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Marcelo; Diccionario de la Administración Española, Tomo 2 (C-Const), Voz Constitución Política (1812), págs. 980-996. J. López Camacho, impresor; 4ª edición, 1886, Madrid.

V- LEYES DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

A- ANTECEDENTES LEGALES:

1- REGLAMENTO DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE 9 DE OCTUBRE DE 1812⁴⁹

Las Cortes de Cádiz dictaron este Reglamento, en cuyos Capítulos II y III se designaba como cuantía, hasta la cual debían conocer en juicio verbal los Jueces de Primera Instancia o los Alcaldes en las localidades en que no existieran los primeros, la de 500 rs. (igual que en la Real Cédula de 1768 y en la Real Resolución de 1796 sobre jurisdicción militar) en la Península e Islas adyacentes y la de 100 pesos en Ultramar:

-Cap. II, Art. IX- “De las demandas civiles que no pasen de quinientos reales de vellón en la Península e Islas adyacentes, y de cien pesos fuertes en Ultramar, y de lo criminal sobre palabras y faltas livianas, que no merezcan otra pena que alguna advertencia, reprehensión o corrección ligera, no conocerán los Jueces de partido sino por lo respectivo al pueblo de su residencia, y a prevención con los Alcaldes del mismo. Y así unos como otros determinarán los negocios de semejante clase precisamente en juicio verbal, y sin apelación ni otra formalidad que la de asentarse la determinación con expresión sucinta de los antecedentes, firmada por el juez y Escribano, en un libro que deberá llevarse para este efecto.”

-Cap. III, Art. V- “Los Alcaldes conocerán además en sus respectivos pueblos de las demandas civiles que no pasen de quinientos reales de vellón en la Península e Islas

Apreciaciones tomadas de LASSO GAITE, Crónica...cit., Tomo 2, Cap. Primero, pág. 3; ampliadas en DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., ptos. 246 y 247, págs. 91 y 92, Introducción.

⁴⁹ Consultado el texto original en FAIRÉN GUILLEN, El...cit., Cap. VII, pág. 102.

adyacentes, y de cien pesos fuertes en Ultramar, y de los negocios criminales sobre injurias o faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna reprehensión o corrección ligera, determinando unas y otros en juicio verbal. Para este fin, en las demandas civiles referidas y en las criminales sobre injurias se asociarán también a los Alcaldes con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, y después de oír al demandante, y al demandado, y el dictamen de los dos asociados, dará ante el Eſcribano la providencia que sea justa; y de ella no habrá apelación ni otra formalidad que asentarla con expresión de los antecedentes en un libro que deberá llevarse para los juicios verbales, firmando el Alcalde, los hombres buenos y el Eſcribano.”

Se trata de un nuevo tipo de juicio para causas de escasa entidad, común a las civiles y criminales, cuyo precedente inmediato, según Lasso Gaité, se encuentra en la L. VIII, T. III, L. XI de la Novísima Recopilación⁵⁰.

Por tanto, este Reglamento de 1812 establece que conocerán en juicio verbal los Jueces de Primera Instancia o los Alcaldes (acompañados de dos hombres buenos), en donde estos existieran, de las causas civiles hasta 500 rs. en la Península e Islas adyacentes y 100 pesos en Ultramar y de las criminales livianas, sin apelación, ni más formalidad que la de asentar la decisión con expresión sucinta de los antecedentes en un libro que se llevará a tal efecto y para dichos juicios, firmando el Juez o Alcalde, los hombres buenos, en su caso, y el Eſcribano. Como vemos, se unen en este juicio los asuntos civiles y criminales.

2- CODIGO DE COMERCIO DE 30 DE MAYO DE 1829⁵¹

En cuanto al juicio verbal mercantil, el Código de Comercio de Sainz de Andino, en su último Título “De los procedimientos judiciales en las causas de comercio” (arts. 1205 a 1219), recogió un procedimiento ordinario más extenso y otro, llamado “de menor cuantía” (primera vez que aparece este nombre), pero en realidad verbal, pues únicamente se redactaba un acta por escrito. Contra la resolución en él dictada no cabía ulterior recurso, teniendo ésta calidad de ejecutiva.

Se trata de causas mercantiles de las que conocen los Tribunales de Comercio, acompañados del Letrado-Consultor, hasta la cuantía de 1.000 rs., y sólo en los lugares en que estos no existieran, los Juzgados ordinarios hasta 500 rs.:

-Art. 1209- “En los negocios mercantiles de menor cuantía será verbal la instrucción, redactándose sólo un acta en que se expresarán los nombres del demandante y demandado, sus pretensiones respectivas, el resultado breve de las pruebas que presentaren, y la resolución judicial, que se llevará a efecto por el procedimiento de apremio, sin admitirse recurso alguno contra ella.”

-Art. 1210- “Son causas de menor cuantía las demandas cuyo interés no exceda de mil reales vellón en los Tribunales de Comercio y quinientos en los Juzgados ordinarios.”

Puede verse claramente cómo este C.co. de 1829 recoge el juicio verbal mercantil de las Ordenanzas de Bilbao y de Burgos, posteriormente recogidas en la Novísima. Sin embargo, se le da el nombre de “menor cuantía”, pues efectivamente era “menor” respecto al ordinario extenso. Se trataba de asuntos mercantiles hasta 1.000 y 500 rs., de los que conocían los Tribunales de Comercio y Juzgados ordinarios (si no existían los anteriores), respectivamente. En cuanto al procedimiento, la instrucción era verbal, redactándose por

⁵⁰ LASSO GAITE, Crónica...cit., Tomo 2, nota marginal nº 4.

escrito nada más que un acta en la que sucintamente se recogían los nombres de las partes, sus pretensiones, resultado de las pruebas y resolución judicial. Esta era irrecurable y se ejecutaba por el procedimiento de apremio.

3- LEY DE ENJUICIAMIENTO SOBRE LOS NEGOCIOS Y CAUSAS DE COMERCIO DE 24 DE JULIO DE 1830

Se promulga esta Ley de Enjuiciamiento mercantil, en la Granja de San Ildefonso, como provisional hasta que se aprobara el “Código de Enjuiciamiento” que preveía el art. 1219 del C.Co. .

Dedica su Título XII al procedimiento en los negocios de menor cuantía, y en cuanto a su contenido, sigue las líneas trazadas por el C.Co. de 1829, determinando mejor el procedimiento en los juicios verbales mercantiles, ya que, propiamente, como ya hemos adelantado, el juicio de “menor cuantía” era un juicio verbal y de equidad, recogido en acta y sin recursos, correspondiendo su conocimiento a los Tribunales de Comercio hasta 1.000 rs. de cuantía, y si no pasaba de 500 podían conocer los Juzgados ordinarios (Juzgados de Primera Instancia o Alcaldes, en defecto de los de Primera Instancia), si no existían los anteriores. Se inicia con memorial dirigido al Prior del Tribunal o Juez ordinario, y en vista de ello, se cita al demandado, señalando día y hora para el juicio (arts. 444 a 457).⁵²

Contribuyó esta Ley de Enjuiciamiento mercantil, explican Lasso y Fairén, a sistematizar el procedimiento, acabando con el imperio de las prácticas locales, así como a la evolución y unificación de los procesos civil y mercantil.⁵³

⁵¹ Texto original tomado de FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., pág. 105.

⁵² Para un estudio más pormenorizado de la regulación del juicio verbal de “menor cuantía” ver GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro; MONTALBÁN, Juan Manuel; Tratado Académico- Forense de los Procedimientos Judiciales. Tomo II, págs. 59 a 62. Imprenta de D.F. Sánchez, 2ª edición, 1856, Madrid.

⁵³ LASSO GAITE, Crónica...cit., Tomo 2, pág. 8; FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., pág. 105.

Es decir, desarrolla esta Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830 el procedimiento de este juicio verbal mercantil de “menor cuantía” más pormenorizadamente. Contribuye, junto con el C.Co. de 1829, a la sistematización, evolución y unificación de los procesos civil y mercantil.

4- REALES DECRETOS DE 21 DE ABRIL DE 1834⁵⁴ Y 23 DE JUNIO DE 1835⁵⁵

Tal y como explica De Vicente y Caravantes, después de que el art. 3 del R.D. de 21 de abril de 1834 ordenase que los Alcaldes ordinarios de todos los pueblos cesaran en el ejercicio del poder judicial, éste otro, de 1835, somete a dichos Alcaldes el conocimiento de los pleitos civiles, cuya cuantía no excediera de 200 rs., así como el de los negocios sobre injurias livianas:

- Art. 3º del RD 21-4-1834- “Los alcaldes ordinarios de todos los pueblos cesarán desde luego en el ejercicio del poder judicial, que hasta el presente hubieran desempeñado, y remitirán los procesos y expedientes de justicia que pendieren en sus Juzgados, á los jueces letrados de las cabezas de partido para su continuación y fallo con arreglo á las leyes; exceptuándose solamente el caso en que no tenga el partido juez nombrado, pues entonces los alcaldes ordinarios conocerán de los negocios contenciosos hasta que tome posesión el juez letrado que yo nombraré para aquel partido.”

⁵⁴ MARTÍNEZ-ALCUBILLA; Diccionario...cit., voz Justicia (1834-1835), pág. 840, Tomo 6 (I-Kilo).

⁵⁵ Tomado directamente de DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., pto. 190, pág. 203, Libro Primero.

5- REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO RESPECTIVO A LA REAL JURISDICCION ORDINARIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1835⁵⁶

Este Reglamento, además de regular el clásico juicio ordinario extenso (hoy “juicio de mayor cuantía”) y dos clases de juicios verbales (en función de los distintos Jueces a quienes tocaba su conocimiento), introducía un juicio escrito intermedio entre el ordinario y el verbal (“simplificando y abreviando los trámites cuanto lo permitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad”), que aparece como el antecedente claro de nuestro actual “juicio de menor cuantía”.

En lo que toca al juicio verbal, los Caps. II y III regulan dos tipos:

1º Al referirse a los Alcaldes y juicios de paz o conciliaciones, atribuye a aquellos junto a sus Tenientes, aparte de la conciliación, que se declara necesaria, el conocimiento de las cuestiones civiles, cuya cuantía no exceda de 10 duros (200 reales) en la Península e Islas adyacentes y de 30 duros (600 reales) en Ultramar, y de las penales de injurias leves (art. 31)⁵⁷:

-Cap. II Secc. 2ª-“Alcaldes y Tenientes de Alcalde como Jueces ordinarios”

Art. 31- “Los Alcaldes y Tenientes de Alcalde son además jueces ordinarios en sus respectivos pueblos para conocer, a prevención con el Juez Letrado de 1ª Instancia, donde le hubiere, de las demandas civiles cuya entidad no pase de diez duros en la Península e Islas adyacentes, y de treinta en Ultramar, y de los negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna represión o corrección ligera, determinando unos y otras en juicio verbal.”

⁵⁶ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (Reg. 26 Setiembre 1835), pág. 844, Tomo 6.

⁵⁷ Tabla de equivalencias: 1 real = 20 maravedies; 1 duro = 20 reales = 400 maravedies; 1 peso = 2 duros = 40 reales = 800 maravedies.

2º En el otro, se extiende la competencia exclusiva de los Jueces de Primera Instancia a las cuestiones que, pasando de las sumas anteriores, no excedieran de 25 duros (500 reales) en la Península e Islas adyacentes y 100 duros (2.000 reales o 50 pesos) en Ultramar (art. 40):

-Cap. III- “De los jueces letrados de primera instancia”

Art. 40- “Podrán estos jueces en el pueblo de su residencia conocer en juicio verbal, á prevención con los alcaldes y los tenientes de alcalde, de las demandas civiles y negocios criminales sobre injurias y faltas livianas comprendidos en el artículo 31: y sólo á los jueces letrados competirá, respecto á todo su partido ó distrito, conocer en igual juicio de aquellas demandas civiles que, pasando de las cantidades expresadas en dicho artículo, no excedan de 25 duros en la Península e islas adyacentes, y de 100 en Ultramar.

Para todos estos juicios verbales los jueces letrados observarán respectivamente las mismas formalidades que prescribe á los alcaldes y tenientes de alcalde el citado artículo 31.”

Para la sustanciación de estos juicios verbales no se señalaban trámites ni recurso, dejando al prudente arbitrio del juzgador la determinación del que debía seguirse.

En resumen: el Reglamento de 1835 establece, en función de quien conozca, dos clases de juicio verbal. En el primero conocen los Alcaldes y sus Tenientes, a prevención con los Jueces de Primera Instancia, hasta la cuantía de 200 rs. (y 600 en Ultramar), así como los asuntos criminales más leves. En el segundo conocen los Jueces de Primera Instancia hasta 500 rs. (y 2.000 en Ultramar), de forma exclusiva si las causas pasan de las cantidades establecidas para el primer tipo de juicio verbal. Para estos juicios verbales no se señalan trámites, ni recurso, dejando estas cuestiones al prudente arbitrio del juzgador, por lo que se puede calificar a estos juicios verbales como juicios de equidad.

6- LEY DE SUSTANCIACION DE NEGOCIOS DE MENOR CUANTIA DE 10 DE ENERO DE 1838 E INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO CIVIL CON RESPECTO A LA REAL JURISDICCION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1853

Esta Ley de 1838 no afecta al juicio verbal, pues únicamente regula más pormenorizadamente el actual de “menor cuantía”, ya aparecido en el Reglamento Provisional de 1835, como intermedio entre el verbal de equidad y el escrito extenso de “mayor cuantía”, y del cual no vamos a ocuparnos aquí por no ser éste el objeto de nuestro estudio.⁵⁸

Por otra parte, también el juicio de mayor cuantía está siendo objeto de intentos de supresión de trámites y acortamiento de plazos, a través de la conocida como Instrucción del Marqués de Gerona de 1853⁵⁹ (supone el primer sistema procesal moderno español), pero once meses más tarde queda en suspenso, en virtud del R.D. de 18 de agosto de 1854. Esta Instrucción resultará ser el más inmediato antecedente de nuestra primera Ley de Enjuiciamiento Civil.

B- LEY DE BASES DE 13 DE MAYO DE 1855⁶⁰

Es el prelude de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil española. En ella se reconocen ocho Bases:

⁵⁸ Para mayor información sobre este juicio FAIRÉN GUILLÉN, El...cit., págs. 107 a 113; DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., pto. 255, págs. 94 y 95, Introducción; LASSO GAITE, Crónica...cit., págs. 10 a 12, Tomo II.

⁵⁹ Un más extenso estudio de la Instrucción de 1853 puede encontrarse en LASSO GAITE, Crónica...cit., págs. 43 a 55, Cap. IV, Tomo II; DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., pto. 258, págs. 96 y 97, Introducción.

⁶⁰ DE VICENTE Y CARAVANTES examina la aplicación de cada una de estas Bases en la LEC de 1855 en su Trtdo....cit., ptos. 261 a 299, págs. 98 a 122, Introducción.

-Art. 1-“El Gobierno procederá inmediatamente á ordenar y compilar las leyes y reglas del enjuiciamiento civil, con sujeción á las bases siguientes:

1ª Restablecer en toda su fuerza las reglas cardinales de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes, introduciendo las reformas que la ciencia y la experiencia aconsejan, y desterrando todos los abusos introducidos en la práctica.

2ª Adoptar las medidas más rigurosas para que en la sustanciación de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias para la defensa de los litigantes y el acierto en los fallos.

3ª Procurar la mayor economía posible.

4ª Que la prueba sea pública para los litigantes que tendrán el derecho de presentar contra interrogatorios.

5ª Que las sentencias sean fundadas.

6ª Que no haya más que dos instancias.

7ª Facilitar el recurso de nulidad cuanto sea necesario para que alcancen cumplida justicia todos los litigantes, y se uniforme la jurisprudencia en todos los tribunales, consultando siempre el orden gerárquico de estos.

8ª Hacer extensiva la observancia de la nueva ley á todos los tribunales y juzgados, cualquiera que sea su fuero, que no la tengan especial para sus procedimientos.”

C- LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 5 DE OCTUBRE DE 1855 ⁶¹

Esta primera Ley de Enjuiciamiento Civil española se divide en dos partes, la primera trata de lo relativo a la jurisdicción contenciosa (arts. 1 a 1206) y la segunda de lo

⁶¹ LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, edición oficial, 1855, Madrid; los comentarios a ésta han sido tomados de GÓMEZ DE LA SERNA Y MONTALBÁN, Trtdo...cit.,

concerniente a la jurisdicción voluntaria (1207 a 1413), más dos disposiciones finales. Es en el Título XXIV de la primera parte (arts. 1162 a 1180), donde se trata de los juicios verbales.

Haciendo referencia a estos, el art. 1162 establecía que el conocimiento de toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda de 600 rs., corresponde en 1ª instancia a los Jueces de Paz y en 2ª a los Jueces de Primera Instancia de los partidos. En la aplicación de esta LEC a Cuba y Puerto Rico, según Manresa y Navarro, se aceptó la cuantía de 600 escudos (1.000 pesetas), pues ésa era la cantidad que venía rigiendo en aquellas islas desde 1853⁶².

-Art. 1162- “Toda cuestión entre partes, cuyo interés no esceda de seiscientos reales, se decidirá en juicio verbal.

El conocimiento de este juicio en la primera instancia corresponde a los Jueces de paz: en la segunda á los Jueces de primera instancia de los partidos.”

Por otro lado, se dictaron reglas a seguir en el procedimiento del juicio verbal, que hasta entonces había sido un tanto arbitrario.

De este modo, el art. 1163 prohibía la apelación directa contra la decisión del Juez de Paz sobre si correspondía juicio verbal en función del valor o interés de lo que se litigaba, pues esta cuestión se decidiría en la apelación que se planteara contra la sentencia definitiva en la 2ª instancia (apelación diferida), declarando la nulidad del juicio si resultaba ser su interés mayor de 600 rs. . Según el art. 1164, el Juez de Primera Instancia del partido no podía hacer de oficio esta declaración, pues era necesario que se reclamara ante él la nulidad, así como que la parte que hiciera la reclamación se hubiera opuesto en la

págs. 56 a 59, Tomo II; y de DE VICENTE Y CARAVANTES, Trdo...cit., ptos. 248 a 282, págs. 456 a 468, Libro Tercero.

⁶² MANRESA Y NAVARRO, Comentarios...cit., pág. 863, Introducción, Cap. IV, Tomo III.

1ª instancia a que siguiera la sustanciación de la demanda en juicio verbal. Sin embargo, nada se decía del caso en que el valor del negocio litigioso fuera indeterminado, de forma que no se pudiese fijar; por ejemplo, si se tratase del reconocimiento de un censo, o de una petición de una herencia: parece que entonces no se debía conocer en juicio verbal⁶³.

Los siguientes arts., hasta el 1180, fijan el orden del procedimiento (interposición por escrito y contenido de la papeleta de demanda, citación a comparecencia, diligencia de recibo ..., celebración de la comparecencia, facultad de acudir con otra persona para que hable en su nombre, celebración del juicio en rebeldía, sentencia, notificación a las partes, apelación y ejecución).

La demanda se ha de interponer precisamente por escrito (sin ser necesaria la previa conciliación, según el art.201⁶⁴), no siendo como antes potestativo el hacerlo de este modo o de palabra, y se ha de redactar en una papeleta firmada por el actor, o por un testigo a su ruego, si no pudiese firmar, y creemos que lo mismo sucedía cuando no supiere.

Esta papeleta ha de contener el nombre, profesión u oficio del demandante y demandado, la pretensión que se deduce, la fecha en que se presente al juzgado y la firma del actor o de un testigo a su ruego, como ya dejamos dicho. El actor acompañará además copia de la papeleta, suscrita de la misma manera que ésta (arts. 1165 y 1166).

Recibida la papeleta, el Juez dispondrá la convocación de las partes a una comparecencia, y aunque no se le fija un término preciso para decretarlo, se establece que lo haga a la mayor brevedad. Al convocarlas, señalará día y hora al efecto por providencia que se extenderá a continuación de la demanda, así como la citación se redactará enseguida de la copia de aquélla, y deberá entregarse al demandado (art. 1167). Este debe firmar la

⁶³ Tal es la opinión de GÓMEZ DE LA SERNA Y MONTALBÁN (ver nota nº 61).

⁶⁴ Art. 201: "Antes de promover un juicio debe intentarse la conciliación ante el Juez de paz competente. Esceptúanse: 1º los juicios verbales....".

diligencia de recibo para hacer constar la entrega, y si no pudiere, y en nuestro concepto también en el caso de que no supiere, lo hará un testigo por él: aquella diligencia se extenderá a continuación de la providencia en que se hubiere ordenado la convocación para el juicio (art. 1168).

Cuando el demandado residiere en otro lugar que el del Juez de Paz que le emplace, se dirigirá oficio al del punto en que se hallare, para que tenga efecto la cita, y a su continuación se extenderá la diligencia de la entrega de la copia y la citación (art. 1169).

El máximo del término que se concede para celebrar la comparecencia es el de seis días contados desde la convocación, a no ser que el demandado residiere en un lugar distinto del en que se halle establecido el Juzgado, pues en este caso se aumentará el término con un día más por cada cuatro leguas que diste el lugar del juicio del de la residencia del demandado (art. 1170). El señalamiento para comparecer es irrevocable y sólo puede alterarse por justa causa alegada y probada ante el Juez de Paz (art. 1171).

La comparecencia comienza con la exposición del demandante, manifestando el objeto de su petición y las razones en que la apoya; contesta el demandado en los mismos términos, se admiten las pruebas de uno y otro, el Juez las examina, y enterado de ellas, se extiende la oportuna acta que firmarán todos los concurrentes y testigos, y se unirán a los autos los documentos que se presenten (arts. 1174 y 1175).

En relación a la postulación, hay que decir que, en juicio verbal, no son necesarios ni Abogado ni Procurador (arts. 13 y 19), aunque el art. 1172 admitió que a las comparecencias de estos juicios pudieran concurrir, acompañando a los interesados y para hablar en su nombre, la persona que estos eligieran, aunque fuera Letrado, mas no en concepto de tal por prohibirlo expresamente el art. 19. Esta concurrencia no es necesaria, como lo era la de los hombres buenos que requería la antigua práctica en estos juicios, así

es que la antigua LEC no prescribía que el Juez oyera el dictamen de aquellos como antes se exigía respecto de estos:

-Art. 13- “La comparecencia en juicio será siempre por medio de Procurador, con poder declarado bastante por un Letrado. El poder se acompañará precisamente con el primer escrito, sin que se permita en ningún caso la protesta de presentarlo. Podrán sin embargo comparecer los interesados directamente: 3º En los juicios verbales.”

-Art. 19- “Los litigantes serán dirigidos por Letrados, hábiles para funcionar en el territorio del Juzgado ó Tribunal que conozca de los autos. Sin su firma, no podrá proveerse sobre ninguna solicitud que se aduzca. Esceptúanse solamente: ... 3º Los juicios verbales, ...”

Aunque puede suceder que las pruebas alegadas no den bastante luz para instruir el ánimo del Juez, y que las partes ofrezcan la presentación de nuevos documentos o testigos, no se expresa en la LEC si el Juez tendrá facultad de celebrar otra comparecencia a fin de poder dictar el fallo con el necesario conocimiento. También guarda silencio acerca de lo que debería practicarse si el demandado reconviniere al actor por una cantidad superior a la suma de seiscientos reales, aunque lo lógico es que, si no pasaba de tres mil, debía ventilarse esta cuestión en un juicio de menor cuantía, y en uno de mayor si excedía de esta cantidad⁶⁵.

Si el demandado no comparece, continuará el juicio en su rebeldía sin volver a citarle; pero en este caso, creen Gómez de la Serna y Montalbán⁶⁶, que el Juez debía también oír al actor en el día señalado para la comparecencia, y admitirle las pruebas que presentase (art. 1173).

⁶⁵ Tal es la opinión de GÓMEZ DE LA SERNA Y MONTALBÁN (ver nota nº 61).

⁶⁶ Ver nota anterior.

Muy breve es el término que se concede para dictar sentencia en esta clase de juicios, pues ésta debe pronunciarse al día siguiente de celebrada la comparecencia. La sentencia se notificará en forma a las partes, y será apelable en ambos efectos (arts. 1176 y 1177).

Interpuesta la apelación se remitirán los autos con citación de las partes al Juzgado correspondiente de Primera Instancia, y recibidos que sean en él, el Juez oír a los litigantes en una comparecencia con sujeción a las reglas expuestas ya en este Título, y dictará sentencia en el mismo día. Contra ella no se da ningún recurso, sin embargo parece que no debía cerrarse la puerta al de nulidad (arts. 1178 y 1179).

La ejecución de la sentencia corresponde al Juez de Paz, para cuyo efecto se devolverán a éste los autos con certificación de aquélla (art. 1180).

Como puede observarse, esta LEC de 1855, tuvo la virtud de poner por fin orden en el juicio verbal (arts. 1162 a 1180), fijando solemnidades y términos, y de introducir la revisión de las sentencias en él dictadas. En esta ocasión la competencia será hasta 600 rs. para los Jueces de Paz en 1ª instancia y para los Jueces de Primera Instancia en la 2ª.

D- PROYECTOS DE REFORMA O PROPOSICIONES DE LEY (1855- 1880)⁶⁷

Entre 1855 y 1880 se formularon varias proposiciones de reforma de la LEC .

En cuanto al juicio verbal, cabe destacar algunas:

- la de Casanueva, de 1 de marzo de 1866, en la que se propone elevar el límite del juicio verbal a 100 escudos y ampliar a 3 días el plazo para dictar sentencia.

Esta proposición fue tomada en consideración y pasó a la Comisión del Congreso para ulterior dictamen.

- la de Danvila, de 15 de abril de 1867, en la que se propone que el que tuviera derecho a ejecutar a un deudor, dentro del límite de 600 rs., pudiera también embargarle provisionalmente.

No fue tomada en consideración por el Congreso.

- Moraza redactó una proposición de Ley, que anunció en el Congreso el 27 de mayo de 1877, pero desistió de promover, en la que se pedía la reforma de los arts. 1162, 1174, 1176 y 1179 sobre el juicio verbal, señalando trámites al caso de tachas a los testigos que depongan en dicho juicio y concediendo al Juez 3 días para dictar sentencia.

Los expuestos, son simples proyectos o proposiciones de ley que no tuvieron mayor repercusión en el Derecho positivo. Casi todos solían ir encaminados a una elevación de la cuantía del juicio verbal, a una mayor regulación de algún determinado aspecto procedimental o a la ampliación del plazo para dictar sentencia.

E- REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBRE Y REAL ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1855 ⁶⁸

El R.D. de 22 de octubre separó por fin las funciones jurisdiccional y administrativa, antiguamente reunidas en los Alcaldes. De esta forma, estableció que eran los Jueces de Paz los encargados de ejercer las funciones judiciales a ellos confiadas, pero con absoluta separación de las administrativas que se dejaron a los Alcaldes. Se exigió así, mayor número de cualidades e imparcialidad en los Jueces de Paz que las que se requerían en los Alcaldes (arts. 1º a 7º). Sin embargo, atribuía el nombramiento de estos nuevos Jueces a los regentes de las Audiencias (arts. 7º y 8º).

⁶⁷ LASSO GAITE. Crónica...cit., págs. 122 a 124, Cap. VI, Tomo II.

Por RO de 12 de noviembre se dictaron reglas para que tuviera el más exacto cumplimiento lo previsto en el RD.

F- REAL ORDEN DE 2 DE ENERO Y REAL DECRETO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1856⁶⁹, Y REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBRE DE 1858⁷⁰

El hecho de que el nombramiento de los Jueces de Paz se atribuyera a los regentes de las Audiencias, produjo reclamaciones y quejas, porque dichos regentes basaban sus nombramientos en informes cuyos autores (los Gobernadores Provinciales) atendían más a consideraciones políticas que a la conveniencia del principio judicial.

Debido a esto, por RO de 2 de enero de 1856 se suspendió la ejecución del Decreto y Orden de 1855, siguiendo los Alcaldes en el despacho de todo lo que a los mencionados Jueces encomendaba la LEC, hasta nueva resolución, la cual se dictó finalmente por R.D. de 28 de noviembre de 1856, adoptándose nuevas disposiciones sobre el nombramiento de dichos Jueces y modo de ejercer sus funciones (arts. 1º a 7º).

Finalmente, estas disposiciones fueron en parte modificadas por el RD de 22 de octubre de 1858, mandando que hubiera un solo Juez de Paz en todos los pueblos con Ayuntamiento que no tuvieran Juez de Primera Instancia y el mismo número de Jueces de Paz que de Primera Instancia en las poblaciones en que estos funcionarios existieran, junto con dos suplentes para cada Juzgado de Paz (arts. 1º a 9º).

⁶⁸ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (1855), nota marginal nº 1, pág. 910, Tomo 6; más datos en DE VICENTE Y CARAVANTES, Trtdo...cit., ptos. 190 y ss., págs. 203 y ss., Libro Primero, así como ptos. 245 y 246, págs. 451 a 454, Libro Tercero.

⁶⁹ Ver nota anterior.

⁷⁰ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (1858), págs. 914 y 915.

G- REAL DECRETO-LEY SOBRE UNIFICACION DE FUEROS DE 6 DE DICIEMBRE DE 1868 ⁷¹

Por este Decreto se unificaron los fueros especiales en el ordinario, suprimiéndose por tanto los Tribunales especiales, y sobre todo los Tribunales de Comercio (arts. 10 y ss.) y los Juzgados de Hacienda (art. 8):

-Título I- “De la refundición de los Fueros especiales en el ordinario.”

Art. 1º- “Desde la publicación del presente decreto, la jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer: ...7º De los negocios de Hacienda...8º De los negocios mercantiles...”

-Título IV- “De la supresión de los Juzgados Especiales de Hacienda.” (arts. 8º y 9º).

Art. 8º- “Se suprimen los Juzgados especiales de Hacienda.

Los negocios de esta clase se sustanciarán con arreglo á lo que disponen las leyes comunes.”

-Título V- “De la supresión de los Tribunales de Comercio y reforma del procedimiento actual en los juicios que pasan ante esta jurisdicción” (arts. 10º a 30º).

Art. 10º- “Se suprimen los Tribunales especiales de Comercio.

Conforme á lo prescrito en el párrafo 8º del art. 1º, la jurisdicción civil y ordinaria será competente: 1º Para conocer en todas las contestaciones judiciales sobre obligaciones y derechos precedentes de negociaciones, contratos y operaciones mercantiles, ya estén comprendidas en las disposiciones del C.Co. por reunir los caracteres determinados en él, ya en las leyes especiales. 2º Para intervenir en los actos de jurisdicción voluntaria que se

⁷¹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (1868), págs. 933 y ss. , Tomo 6.

fundan en las disposiciones del mismo Código, ó que se refieran á las obligaciones que se mencionan en el párrafo anterior.”

De esta forma, con la unificación de los Fueros especiales en el ordinario, y en concreto con la supresión de los Tribunales de Comercio, desaparece el juicio verbal mercantil que había surgido del Derecho Canónico y los Estatutos italianos del siglo XIV, y que estaba en este momento recogido en el C.Co. de 1829 y en la L.E. mercantil de 1830.

H- LEY PROVISIONAL SOBRE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL DE 23 DE JUNIO-15 DE SEPTIEMBRE DE 1870 ⁷²

El artículo 270 párrafo 3º de esta Ley de 1870, eleva el interés de que puede conocerse en juicio verbal a la suma de 250 pts. (1.000 rs.), atribuyendo su conocimiento en 1ª instancia a los Jueces Municipales, que de esta forma sustituyen a los de Paz, y encomendando en su art. 273.4º su conocimiento en 2ª instancia a los Tribunales de Partido, compuestos por tres Jueces⁷³:

-Cap. II - “De las atribuciones de los jueces municipales.”

Art. 270- “Corresponderá a los jueces municipales en materia civil: ...3º Conocer en primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto no exceda de 250 pesetas.”

-Cap. IV- “De las atribuciones de los Tribunales de partido.”

Art. 273- “Corresponderá a los Tribunales de partido en materia civil: ...4º Conocer en segunda instancia: De los juicios verbales. De las recusaciones de los jueces municipales contra los autos de primera instancia en que se haya denegado la recusación.”

⁷² MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (Ley org. del Poder judicial. 1870), págs. 941 y ss. , Tomo 6.

Además, en su Título VIII Capítulo III (arts. 461 a 471), se regula la sustanciación de las recusaciones en los juicios verbales (y juicios de faltas). La recusación, en estos juicios, se propondrá en el mismo acto de la comparecencia (art. 461). En vista de la recusación, el Juez Municipal, si la causa alegada fuere de las expresadas en el art. 428 y cierta, se dará por recusado, pasando el conocimiento de la demanda o de la falta a su suplente (art. 462). Cuando el recusado no considerare legítima la recusación, pasará el conocimiento del incidente a su suplente, haciéndolo constar en el acta. Contra este auto no habrá ulterior recurso (art. 463). En este caso, el suplente hará comparecer a las partes, y en el mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan cuando la cuestión sea de hechos (art. 464). Recibida la prueba, o cuando por tratarse de cuestión de derecho no fuere necesaria, el Juez Municipal suplente resolverá sobre si ha o no lugar a la recusación, en el mismo acto si fuere posible. En ningún caso dejará de hacerlo dentro del segundo día. De lo actuado y del auto se hará mención en el acta que se extenderá (art. 465). Contra el auto del Juez suplente declarando haber lugar a la recusación no se dará recurso alguno, mientras que contra el que la deniegue habrá apelación para ante el Tribunal de Partido (art. 466). Esta apelación se interpondrá verbalmente en el acto mismo de la comparecencia, cuando el Juez suplente declarare no haber lugar a la recusación. Cuando usare de la facultad de diferir la resolución dentro del segundo día, se interpondrá la apelación en el acto mismo de la notificación, cuando fuere personal; en otro caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a ella, se interpondrá también verbalmente ante el Secretario del Juzgado, haciéndose constar por diligencia (art. 467). Sin embargo, cuando no se apelare dentro de los términos anteriormente señalados, el auto del Juez suplente será firme (art. 468). En el Tribunal de Partido se dará cuenta en la primera audiencia sin admitir escritos ni formar

⁷³ Un estudio más amplio puede encontrarse en DE VICENTE Y CARAVANTES, *Trtdo...cit.*, nº 190 a 214,

apuntamiento, pudiendo los interesados o sus apoderados hacer verbalmente las observaciones que estimen, previa la venia del presidente del Tribunal. Este pronunciará su auto inmediatamente cuando fuere posible, pero en ningún caso después de los dos días siguientes a aquél en que se le hubiere dado cuenta. Contra su auto no habrá ulterior recurso (art. 469). Cuando el auto fuere confirmatorio, se condenará en costas al apelante (art. 470). Declarada procedente la recusación por auto firme y remitidos los antecedentes con el auto al Juzgado Municipal, en el caso de que haya habido apelación, entenderá el suplente en el conocimiento del negocio. Sin embargo, declarada improcedente por auto también firme, el Juez recusado volverá a entender en el negocio (art. 471).

Las recusaciones de los Secretarios Municipales se regulan, en cambio, en el Cap. IV del Tít. IX (arts. 557 a 564), de forma que el art. 560 dice que en las recusaciones de Secretarios de Juzgados Municipales, instruirá y fallará la pieza de recusación el mismo Juez Municipal donde sólo hubiere uno. Si hubiere dos, el del Juzgado a que no pertenezca el recusado; y si tres o más, el que siga en el orden oficial a aquél a que perteneciere. Si perteneciere al último en orden, entenderá de la misma el primero. El art. 561, sigue diciendo que cuando la recusación fuere admitida, se condenará en costas al recusado, y si se desestimare, al recusante. Según el art. 562, cuando el auto que admita la recusación sea firme, el recusado será reemplazado por su sustituto, y siendo Secretario u oficial de Sala en Juzgado Municipal, o de Instrucción, o Tribunal de Partido, no percibirá derechos de ninguna clase desde que se hubiere interpuesto la recusación, o desde que siéndole conocida la causa alegada no se separó del conocimiento del negocio. Sin embargo, cuando se desestimare la recusación por auto firme (art. 563), volverá el auxiliar recusado a ejercer sus funciones, y si éste fuere Secretario u oficial de Sala del Juzgado Municipal

correspondiente a las actuaciones practicadas en el pleito, haciendo igual abono al que haya sustituido al recusado. Además, no podrán los auxiliares ser recusados después de citadas las partes para sentencia, ni tampoco durante la práctica de alguna diligencia de que estuvieren encargados (art. 564).

Sobre la postulación, establece que ésta no es preceptiva (art. 856.3º), aunque el art. 858 dispone que tanto los Procuradores como los Abogados podrán asistir, con el carácter de auxiliares de los interesados cuando estos quisieran valerse de ellos, pero en estos casos, si hubiere condenación en costas a favor del que se hubiere valido de uno u otro, no se comprenderán en ellas los derechos de aquél, ni los honorarios de éste.

En resumen: esta L.P.O.P.J. de 1870 eleva la cuantía del juicio verbal a 250 pts. (1.000 rs.), encomendando la 1ª instancia a los Jueces Municipales, que sustituyen a los de Paz, y la 2ª instancia a los Tribunales de Partido (antes Jueces de Primera Instancia de los partidos). En ellos se establece no necesaria la postulación, aunque en el caso de que se opte por ella, el Abogado y Procurador actuarán sólo con carácter de auxiliares del interesado. También se regula específicamente en esta Ley la tramitación de las recusaciones en los juicios verbales, tanto del Juez como del Secretario Municipal.

I- ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1870 ⁷⁴

Establece esta Orden que los Tribunales de Partido, que conocían del juicio verbal en 2ª instancia, pasan a ser Jueces de Primera Instancia (art. 3º), y los Jueces de Paz, que eran los que anteriormente a los Municipales conocían del juicio verbal en 1ª instancia, pasan a ser Municipales, adquiriendo este nombre y ejerciendo por tanto sus funciones (art. 4º):

-Art. 3º-“Que corresponden á los jueces de primera instancia las atribuciones que en la ley orgánica se asignan á los Tribunales de partido ó sus presidentes, ó á cualquiera de los jueces que los han de componer.”

-Art. 4º-“Que los jueces de paz deben ejercer las atribuciones que en la ley referida se declaran propias de los jueces municipales, cuyo nombre también deben usar.”

J- LEY DE BASES DE 21 DE JUNIO DE 1880, PARA LA REFORMA DE LA LEC⁷⁵

Esta Ley de Bases, en su art. 1º, autoriza al Gobierno a reformar y publicar una nueva LEC, con sujeción a 19 Bases.

La que más directamente hace referencia al juicio verbal es la Base 1ª:

-Art. 1º Base 1ª-“Adoptar una tramitación que abrevie la duración de los juicios, tanto cuanto permitan el interés de la defensa y el acierto de los fallos, estableciendo al efecto reglas fijas y preceptos rigurosos para que no se consientan escritos ni diligencias inútiles; para que se observen los términos judiciales y sean eficaces los apremios, sin permitir en ningún caso más de uno, y para que se hagan efectivas las multas del litigante que diere lugar á ellas.”

⁷⁴ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Justicia (1870), págs. 1.008 y 1.009, Tomo 6.

⁷⁵ Texto original tomado de VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos; Doctrina y Jurisprudencia de la LEC, págs. XLI y ss. . Editoriales de Derecho Reunidas (EDERSA), 2ª edición, 1984, Madrid.

K- LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 3 DE FEBRERO DE 1881 ⁷⁶

La actual LEC se estructura en tres Libros, de los cuales, el Cap. IV del Tít. II (“De los Juicios Declarativos”) del Libro II (“De la Jurisdicción Contenciosa”) se dedica al juicio verbal, artículos 715 a 740.

Se establece que hasta la cuantía de 250 pts. conozca en juicio verbal (juicio ordinario declarativo según el art. 482.3º) (art. 486), en 1ª instancia el Juez Municipal, aunque la demanda se funde en documento con fuerza ejecutiva (art. 715), y en 2ª el Juez de Primera Instancia (art. 732):

-Art. 486-“Toda cuestión ente partes, cuyo interés no exceda de 250 pesetas, se decidirá en juicio verbal.”

-Art. 715-“Los jueces municipales son los únicos competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de 250 pesetas, aunque se funde en documento que tenga fuerza ejecutiva.”

-Art. 732-“Esta sentencia es apelable en ambos efectos para ante el juez de primera instancia del partido a que corresponda el Juzgado municipal...”

Sin embargo, se exceptúan (art. 716):

1º Las demandas de tercería y demás que sean incidentales de otro juicio, en cuyo caso se practicará lo prevenido en el art. 488 (se ventilarán por los trámites establecidos para el juicio declarativo que corresponda, según la naturaleza o cuantía de la cosa litigiosa, aunque si ésta no excediere de 250 pts., y la demanda fuere incidental de un juicio del que conozca el Juez de Primera Instancia, decidirá éste la reclamación en juicio verbal, sin ulterior recurso).

⁷⁶ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Enjuiciamiento Civil (Ley de 1881), págs. 469 y ss. , Tomo 4 (Deu-Extra).

2° Las que se deduzcan por reconvencción en los juicios de mayor y de menor cuantía, las cuales se ventilarán y decidirán, conforme a lo prevenido en los artículos 544 (las excepciones y reconvencciones se discutirán al mismo tiempo y forma que la cuestión principal, y serán resueltas con ésta en la sentencia definitiva, salvo la excepción perentoria de cosa juzgada, si es la única que se objeta a la demanda, de forma que si lo pide el demandado puede sustanciarse por los trámites de los incidentes) y 688 (si el demandado formulare reconvencción, se dará traslado al actor para que la conteste dentro de los 4 días siguientes, limitándose a lo que sea objeto de la misma).

El art. 717 dispone que cuando el Juez Municipal estime que es incompetente para conocer de la demanda por razón de la materia o de la cuantía litigiosa, dictará auto, a continuación de la demanda y en la misma papeleta, declarándolo así, y previniendo al demandante que haga uso de su derecho ante quien y como corresponda, siendo este auto apelable en ambos efectos para ante el Juez de Primera Instancia del partido.

Según el art. 718, cuando no se conforme el demandado con la cuantía de la cosa litigiosa, se procederá del modo prevenido en el art. 496 (decidirá el Juez Municipal oyendo a las partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio, y contra su fallo declarándose competente no se dará apelación, pero si se interpusiere de la sentencia definitiva, podrá el Juez de Primera Instancia declarar la nulidad del juicio, si resultare ser el interés mayor de 250 pts., mientras que contra el auto en el que el Juez Municipal declare no ser de su competencia la cuantía o materia litigiosa, se dará el recurso de apelación en ambos efectos para ante el Juez de Primera Instancia del partido).

A partir del art. 720 se regula el orden del procedimiento (art. 719).

Los juicios verbales no están sujetos a repartimiento (art. 436, cuyo cumplimiento se aseguró mediante RD de 22 de septiembre de 1885), ni a conciliación (art. 460. 1°):

-Art. 436-“No estarán sujetos á repartimiento los juicios verbales, los de desahucio, ni los demás negocios que sean de la competencia de los jueces municipales.

Donde haya dos o más, cada uno conocerá de los que correspondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas en los arts. 62 y 63 (reglas para determinar la competencia), con apelación al Juzgado de primera instancia del mismo distrito, en el que se repartirán entre sus Escribanías.”

-Art. 460.1º-“Ante de promover un juicio declarativo, deberá intentarse la conciliación ante el juez municipal competente. Exceptúanse: 1º Los juicios verbales...”

La demanda se interpondrá en una papeleta extendida en papel común, la cual contendrá los nombres, domicilios y profesiones u oficios del demandante y demandado/s, la pretensión que se deduce, la fecha en que se presente al Juzgado y la firma del que la presente o de un testigo a su ruego, si no pudiere o no supiere firmar, acompañando el demandante tantas copias de esta papeleta, suscritas del mismo modo, cuantos sean los demandados (art. 720) (el art. 523 dispone que, con exclusión del art. 514 que habla del caso de sostenimiento por una de las partes de la falsedad de un documento de influencia notoria en el pleito, las disposiciones de las Secciones Tercera (“De la presentación de documentos”) y Cuarta (“Copias de los escritos y documentos, y su objeto”) del Título II, Libro II no serán aplicables al juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones especiales).

Presentada la papeleta con las copias, el Juez Municipal, dentro del segundo día, dictará providencia a continuación de la demanda, convocando a las partes a una comparecencia, señalando día y hora al efecto, y notificándose al demandante (art. 721). En cambio, la citación del demandado para la comparecencia se hará por el Secretario o Alguacil del Juzgado, entregándole la copia de la papeleta de demanda, a continuación de

la cual habrá extendido el Secretario la cédula de citación, expresando en ella la fecha de la providencia, y el día, hora y local en que deba comparecer, con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no compareciere (art. 722). A continuación de la providencia (art. 723), se hará constar la entrega de la papeleta y citación del demandado por medio de diligencia, que firmará éste o un testigo a su ruego, si no supiere. Caso de no ser hallado en su domicilio, firmará la diligencia la persona que reciba la papeleta, observándose lo prevenido en los arts. 263 (las notificaciones se firmarán por el actuario y por la persona a quien se hicieren; si ésta no supiere o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo; si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella en su caso, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el actuario; estos testigos no podrán negarse a serlo, bajo la multa de 5 a 25 pts.) y 268 (la cédula para las notificaciones será entregada al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido; se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se hará constar el nombre, estado y ocupación de la persona que reciba la cédula, su relación con la que deba ser notificada, y la obligación que aquélla tiene, y le hará saber el actuario, de entregar a ésta la cédula así que regrese a su domicilio, o de darle aviso si sabe su paradero, bajo la multa de 5 a 25 pts.; dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona que reciba la cédula, y si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el art. 263).

Cuando el demandado residiere en otro lugar que el del Juez Municipal que lo emplace, se dirigirá oficio al del punto en que se hallare, acompañando la copia de la papeleta y cédula de citación, para que ésta tenga efecto. A continuación del oficio, que se

devolverá sin dilación al Juez requirente, se extenderá la diligencia de la entrega de la copia y la citación (art. 724).

Cuando no sea conocido el domicilio del demandado, se hará la citación por medio de edictos, que se fijarán en el lugar del juicio y en el de su última residencia, pudiendo el Juez ampliar en este caso el término de la comparecencia, sin que pueda exceder de veinte días. También se publicarán los edictos en los periódicos oficiales, cuando el Juez lo estime necesario (art. 725).

Entre la citación y la celebración de la comparecencia, deberá mediar un término que no baje de veinticuatro horas ni exceda de seis días. En los casos en que el demandado no residiere en el lugar del juicio, se aumentará el término con un día más por cada veinte kilómetros de distancia (art. 726).

El señalamiento hecho para la comparecencia no podrá alterarse sino por justa causa, alegada y probada ante el Juez Municipal, o por conformidad de ambas partes (art. 727).

Si no compareciere el demandante en el día y hora señalados, se le tendrá por desistido de la celebración del juicio, condenándole en todas las costas y a que indemnice al demandado que hubiere comparecido, los perjuicios que le haya ocasionado. En el acta que se extenderá, el Juez, oyendo al demandado, fijará prudencialmente y sin ulterior recurso el importe de dichos perjuicios, sin que puedan exceder de 50 pts., a no ser que aquél los renunciare. No renunciándolos, se exigirán con las costas por la vía de apremio (art. 728).

No compareciendo el demandado, se continuará el juicio en su rebeldía, sin volver a citarlo (art. 729).

La comparecencia se celebrará ante el Juez y el Secretario en el día señalado. En ella expondrán las partes por su orden lo que pretendan y a su derecho conduzca, y después se admitirán las pruebas pertinentes que presentaren, uniéndose a los autos los documentos. A esta comparecencia podrá concurrir, acompañando a los interesados y para hablar en su nombre, la persona que elijan. De su resultado se extenderá la oportuna acta, que firmarán todos los concurrentes, y los que hubieren declarado como testigos (art. 730).

Celebrada la comparecencia (art. 731) el Juez, a continuación del acta, dictará sentencia definitiva en el mismo día o en el siguiente. Si el demandado hubiere deducido reconvencción por cantidad mayor de 250 pts., el Juez, en la misma sentencia, hará la reserva de derechos que previene la regla 4ª del art. 63 (el Juez principal conocerá de la reconvencción si no pasa de la cuantía límite de su competencia; si pasa, el actor puede interponer la demanda en donde corresponda).

Esta sentencia es apelable en ambos efectos para ante el Juez de Primera Instancia del partido a que corresponda el Juzgado Municipal. La apelación podrá interponerse en el acto de la notificación de la sentencia, en cuyo caso el Secretario lo consignará en la diligencia, o dentro de los tres días siguientes por comparecencia ante el Juez Municipal (art. 732).

Admitida la apelación, se remitirán los autos al Juzgado de Primera Instancia, emplazando a las partes por término de ocho días para que comparezcan, si les conviniere, a usar de su derecho (art. 733).

No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se declarará desierto el recurso, con costas, mandándose de oficio devolver los autos al Juzgado Municipal para la ejecución de la sentencia (art. 734).

Si se presentare en tiempo el apelante, lo cual se hará constar por diligencia, acordará el Juez de Primera Instancia la convocación de las partes a una comparecencia en el día y hora que señalará, procediéndose con sujeción a las reglas antes establecidas. Si no hubiese comparecido el apelado, se le citará en estrados para dicho acto (art. 735).

Extendida el acta de la comparecencia, o diligencia de no haberse presentado las partes, en el mismo día o en el siguiente dictará el Juez sentencia definitiva, confirmando o revocando la apelada, con imposición de las costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el art. 496 (art. 736). Por su parte, el art. 496 dispone que cuando en los juicios verbales hubiere duda sobre la cuantía litigiosa, la decidirá el Juez Municipal oyendo a las partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio; contra su fallo declarándose competente no se dará apelación, pero si se interpusiere de la sentencia definitiva, podrá el Juez de Primera Instancia declarar la nulidad del juicio si resultare ser el interés mayor de 250 pts.; contra el auto en el que el Juez Municipal declare no ser de su competencia la cuantía o materia litigiosa, se dará el recurso de apelación en ambos efectos para ante el Juez de Primera Instancia del partido.

Dictada la sentencia, se devolverán los autos al Juzgado Municipal dentro del segundo día, con testimonio de ella para su ejecución. Cuando haya habido condena en costas, el actuario pondrá nota circunstanciada de las mismas al pie del testimonio, para su exacción, si no le hubieren sido satisfechas (art. 737).

Recibido el testimonio con los autos en el Juzgado Municipal, se procederá por los trámites prevenidos para la ejecución de las sentencias (arts. 919 a 950), pero reduciendo los términos de modo que en ningún caso excedan de la mitad del tiempo de los allí establecidos (art. 738).

En cuanto a las tercerías (art. 739), se reguló que si en la ejecución de la sentencia se entablare alguna tercería de dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, la decidiría el mismo Juez Municipal por los trámites anteriormente establecidos para el juicio verbal, cuando el valor de lo reclamado no excediese de 250 pts. . Si excediere de esta cuantía, debería presentarse la demanda en el Juzgado de Primera Instancia, para que se ventilara por los trámites del juicio declarativo que correspondiese. En este caso, el Juez de Primera Instancia ordenaría al Municipal que suspendiese sus procedimientos hasta que recayese sentencia en el juicio de tercería, si ésta fuera de dominio, y si fuere de mejor derecho, hasta que consignase en la Caja de Depósitos el importe de los bienes, si se hubieren vendido.

En lo concerniente a la defensa por pobre (art. 740), se dispuso que cuando en estos juicios alguno de los litigantes la solicite, conocerá de este incidente el mismo Juez Municipal, por los trámites del juicio verbal, dando audiencia al Fiscal Municipal, que a este fin será citado para la comparecencia, y sujetándose, para instruir y fallar el incidente, a las reglas establecidas en los arts. 13 a 50 (Libro I, Tít. I, Secc. II “De la defensa por pobre”).

Sobre la necesidad de postulación en los juicios verbales, hay que decir que, según los arts. 4 y 10, ésta no es preceptiva, sin embargo, el art. 11 dispone que en estos juicios, tanto Procuradores como Abogados, puedan intervenir con el carácter de auxiliares de los interesados, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de ellos. En estos casos, si se condena en costas a favor del que se valió de Procurador o Letrado, no se comprenderán en ellas los derechos de aquél, ni los honorarios de éste.

En cuanto a la recusación del Juez Municipal, ésta se regula en los arts. 218 a 233. En los juicios verbales y demás que conocen en 1ª instancia los Jueces Municipales, la

recusación se propondrá en el acto mismo de la comparecencia (art. 218). Si se trata de causa del art. 189 y cierta, pasará el conocimiento de la demanda a quien deba reemplazarle (según el art. 220, el otro Juez Municipal si existe, o el de más antigüedad, o el de más edad, o su suplente). Si no considera legítima la recusación, lo consignará en el acta, y pasará también a quien corresponda. Contra estas resoluciones no existe recurso (art. 219). Si no ha considerado legítima la recusación, el nuevo Juez fijará comparecencia dentro de los seis días siguientes. En ella oír a las partes y recibirá las pruebas (art. 221). El nuevo Juez decidirá en la misma comparecencia o en los dos días siguientes (art. 222). Contra el auto estimatorio de la recusación no cabe recurso, mas contra el desestimatorio cabe apelación ante el Juez de Primera Instancia del partido (art. 223). La apelación se interpondrá verbalmente en la misma comparecencia ante el Juez Municipal suplente, o, también verbalmente, en la notificación de la resolución dentro de los dos días siguientes, o en las veinticuatro horas posteriores a la misma (art. 224). Si se apela, se citará a las partes ante el Juez de Primera Instancia en los ocho días posteriores, oyendo en la comparecencia a las partes y dictando resolución en ella, o en los dos días siguientes. Contra ese auto no habrá recurso (arts. 225 y 226). Si el auto confirma la recusación se condena en costas al apelante (art. 227), pero si la deniega se condena al recusante, imponiéndole multa de 25 a 50 pts., y aplicándose el art. 213 ("Cuando no se hicieren efectivas las multas respectivamente señaladas en el artículo anterior, sufrirá el multado la prisión por vía de sustitución y apremio, en los términos que para las causas por delitos establece el Código penal.") (art. 228). Si se declara procedente la recusación, conocerá del asunto el suplente del Juez Municipal, pero si se declara improcedente, conocerá el Juez recusado (art. 229). Si la recusación se propone en acto de conciliación, producirá el efecto de darse por intentado el acto sin ulterior procedimiento (art. 230). Si es recusado el Juez Municipal que

está conociendo por delegación del de Primera Instancia, la recusación se propondrá ante éste por escrito, el cual se remitirá al Juez Municipal para que reconozca o no la causa como cierta, decidiendo el Juez de Primera Instancia (art. 231).

Sobre la recusación del Secretario Municipal (art. 241), en ésta se procederá en la forma establecida para la recusación de los Jueces Municipales, instruyendo y fallando el expediente de recusación el propio Juez Municipal del recusado.

En cuanto a la competencia, hay que decir que el art. 84 dispone que las inhibitorias se propondrán siempre por escrito, con firma de Letrado, pero se exceptúan a esta regla las que se refieren a los juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 250 pts., pudiéndose proponer y sustanciar por medio de comparecencia ante el Juez Municipal, o mediante escrito sin necesidad de firma de Letrado, pero oyendo por escrito al Fiscal Municipal.

En cuanto a los embargos preventivos, según el art. 1397, corresponderá a los Jueces de Primera Instancia decretar los embargos preventivos, cuando se pidan para asegurar el pago de una deuda que exceda de 250 pts. Sin embargo, si la deuda no excede de dicha cantidad, podrán decretarlo los Jueces Municipales, si se pidiere al tiempo de proponer la demanda reclamando el pago de aquélla. De acuerdo con el art. 1398, en caso de urgencia, también podrá decretarlo el Juez Municipal, aunque exceda de 250 pts., pero remitiendo las diligencias inmediatamente al Juez de Primera Instancia.

Como última peculiaridad del juicio verbal, los arts. 785 y 786 establecen que contra las sentencias firmes recaídas en estos juicios, de que conocen los Jueces Municipales en 1ª instancia, también se prestará audiencia al demandado condenado en rebeldía, si concurren todas estas circunstancias: que la citación para la comparecencia al juicio verbal le haya sido hecha por edictos, o por cédula entregada a sus parientes, familiares, criados o vecinos; que solicite la audiencia dentro de tres meses, a contar desde

la notificación en estrados de la sentencia que haya causado ejecutoria; que acredite cumplidamente no haberle sido entregada la cédula de citación, por haberlo impedido una causa no imputable al mismo, o que cuando se publicaron los edictos se hallaba ausente del pueblo, sin haber regresado a él durante la sustanciación del juicio. En este caso, el Juez de Primera Instancia, a cuyo partido corresponda el Juzgado Municipal, conocerá del incidente por los trámites establecidos para los juicios verbales, y decidirá sin ulterior recurso, si procede o no que sea oído el litigante condenado en rebeldía, comunicándolo al Juez Municipal para su cumplimiento.

Por tanto, en su redacción originaria, la actual LEC no introdujo demasiadas novedades, respecto de la de 1855, sobre el procedimiento del juicio verbal, pero, como explica Manresa, se aclararon dudas y suplieron omisiones en el mismo Capítulo IV del Título II del Libro II, como las relativas a las tercerías (art. 739) y a la defensa por pobre (art. 740), y en otros lugares cuestiones como las de competencia (art. 84), recusación del Juez Municipal (arts. 218 y ss.) y de su Secretario (art. 241), embargos preventivos (art. 1397)...⁷⁷. Esta LEC estableció en 250 pts. la competencia de los Jueces Municipales en 1ª instancia y Jueces de Primera Instancia del partido en 2ª.

L- REFORMAS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL HASTA NUESTROS DIAS:

1- RESOLUCIONES DE 7 DE MARZO Y DE 23 DE JUNIO DE 1882, SOBRE PAPELETAS DE LOS JUICIOS VERBALES ⁷⁸

En la Resolución de 7 de marzo de 1882, se dispone que no obstante el art. 720 de la LEC, las papeletas a que se refiere, deben extenderse en papel de 75 céntimos, clase 12.

Otra resolución de 23 de junio del mismo año, dice que ha de presentarse la papeleta precisamente en papel de la clase 12, sin poder hacerlo en papel común, ni aun con la obligación de reintegrar.

2- CODIGO DE COMERCIO DE 22 DE AGOSTO DE 1885⁷⁹

En este Código, se establece en su art. 84 un juicio verbal de hasta 1.500 pts. para las cuestiones suscitadas en las ferias, del que conocerá el Juez Municipal de la localidad donde se celebre la misma, eligiéndolo el demandante si existiera más de uno (es el llamado fuero de feria):

- Art. 84-“Las cuestiones que se susciten en las ferias sobre contratos celebrados en ellas, se decidirán en juicio verbal por el Juez municipal del pueblo en que se verifique la feria, con arreglo a las prescripciones de este Código, siempre que el valor de la cosa litigiosa no exceda de 1.500 pts..

⁷⁷ MANRESA Y NAVARRO, Comentarios...cit., pág. 863, Cap. IV, Tomo III.

⁷⁸ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Enjuiciamiento Civil (1882-1884), pág. 653, Tomo 4.

⁷⁹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit., voz Código de Comercio (1885), págs. 412 y ss., Tomo 2 (C-Cons).

Si hubiere más de un Juez municipal, será competente el que eligiere el demandante.”

Según explica la Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio, de 18 de Marzo de 1882, firmada por el Ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso Martínez, se consideran ferias y mercados las “reuniones públicas en donde los negociantes pueden dar fácil salida a sus mercancías y los consumidores hallar las que no les ofrece el comercio sedentario”.

Conforme ya vimos en la LEC de 1881, la cuantía máxima de que conoce un Juez Municipal a través de un juicio verbal en este momento es de 250 pts.. Esto significa que se extiende el juicio verbal más allá de sus límites (hasta 1.500 pts.) para las cuestiones suscitadas en ferias y mercados. Y así lo explica la Exposición de Motivos, cuando determina “el procedimiento que debe seguirse para la resolución de las cuestiones que suscite la inteligencia y ejecución de dichos contratos, que será el establecido para los juicios verbales, aunque la cuantía de la cosa litigiosa exceda de la marcada en la Ley, siempre que no pase de las 1.500 pesetas, y la competencia para el conocimiento de estos juicios, que se atribuye al Juez municipal del pueblo en que se celebre la feria”.

Acto seguido, la Exposición explica: “Estas disposiciones, nuevas completamente en nuestra legislación, son aplicables indistintamente a las ferias y mercados, con el propósito de facilitar la contratación mercantil y asegurar su cumplimiento de un modo sencillo y rápido”.

Resumiendo, el Código de Comercio de 1885 extiende hasta 1.500 pts. la aplicación del juicio verbal para las cuestiones producidas en ferias y mercados, siendo competente para conocer de él el Juez Municipal de esa localidad, pudiendo elegirlo el demandante si hubiera más de uno.

3- LEY DE 5 DE AGOSTO DE 1907, SOBRE JUSTICIA MUNICIPAL ⁸⁰

Esta Ley reorganizó la Administración de Justicia en los Juzgados Municipales, creando el Tribunal Municipal, compuesto de Juez de esta clase y dos adjuntos (art. 1):

-Art. 1º-"En cada término municipal habrá un Juzgado municipal constituido por un juez, un fiscal y un secretario, con sus suplentes respectivos y el número de dependientes que fuere necesario para el servicio.

En los mismos términos municipales funcionará, en los casos determinados en la presente ley, un Tribunal municipal compuesto del juez con dos adjuntos.

En las poblaciones donde exista más de un Juzgado de primera instancia, el número de Juzgados y Tribunales municipales será igual al de aquéllos, salvo casos excepcionales que apreciará el Ministro de Gracia y Justicia, oyendo á las Salas de gobierno respectivas."

Por hacer referencia esta Ley a los Jueces Municipales, también reforma la cuantía (art. 18.1º), competencia (arts. 18 y 21 a 23), trámites de la recusación (arts. 13 a 15), declaración de pobreza (art. 24) y apelaciones de los juicios verbales (arts. 27 y 28).

En cuanto a la cuantía y competencia, el art. 18.1º establece que los Tribunales Municipales conocerán en 1ª instancia de las demandas cuyo valor no pase de 500 pts., disponiendo en los arts. 21, 22 y 23 que estos conocerán en juicio verbal de los asuntos civiles de su competencia, no admitiendo reconvenciones, ni tercerías por cuantía que exceda de la misma (500 pts.), y dictando resolución definitiva en el mismo acto del juicio, o si no fuera posible, dentro de los 3 días siguientes:

⁸⁰ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín Jurídico-Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia, Apéndice de 1907 (Legislación-Justicia municipal), Justicia, págs. 300 y ss. . Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1907, Madrid.

-Art. 18.1º-“Los Tribunales municipales conocerán en primera instancia en materia civil: 1º De las demandas cuyo valor no pase de 500 pesetas...”

En la apelación, admitida ésta, se remitirán los autos al Juez de Primera Instancia emplazando a las partes en 10 días, y una vez personado el apelante, el Juez señalará día para la vista, en la que se dilucidarán todas las cuestiones, pudiendo el apelado adherirse a la apelación y practicarse diligencias para mejor proveer en el plazo de 10 días. La sentencia se dictará en los 3 días siguientes, sin que quepa recurso. Si se trata de apelación por vicio esencial causante de indefensión, el Tribunal se limitará a dejar sin efecto la sentencia y reponer los autos al estado en que se cometió la falta (art. 28).

La recusación se planteará antes de la celebración del juicio, debiéndose alegar todas las causas conocidas, y dejando mientras en suspenso el juicio verbal; si ésta no se acepta, decidirá de plano el Juez de Primera Instancia, sin ulterior recurso, pero imponiendo multa al recusante de 10 a 50 pts. .

Cuando en estos juicios se solicite la defensa por pobre, conocerá el Tribunal Municipal en juicio verbal, oyendo al Abogado del Estado o al Fiscal Municipal por su delegación, y observando los arts. 15 y ss. de la LEC .

En resumen, esta Ley de 1907 crea los Tribunales Municipales (Juez Municipal más dos adjuntos), los cuales conocerán en 1ª instancia del juicio verbal, cuya cuantía se eleva a 500 pts. Se amplían ciertos plazos, como el establecido para dictar sentencia, tanto en 1ª instancia como en apelación (hasta tres días). Además, vuelven a regularse cuestiones como la recusación municipal, declaración de pobreza y apelación del juicio verbal.

4- LEY DE 19 DE MAYO DE 1908, CREANDO LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES ⁸¹

Esta Ley crea los Tribunales Industriales, compuestos por Juez de Primera Instancia, 6 jurados y 2 suplentes (art. 3), introduciendo esenciales reformas en esta materia de juicios verbales, pues aunque no fija cuantía a los asuntos sometidos al conocimiento de dicho nuevo Tribunal, estableció un procedimiento especial dentro del tipo del juicio verbal adoptado para los asuntos entre obreros y patrono (arts. 17 a 34):

-Art. 3º-“El Tribunal se compondrá del juez de primera instancia, presidente; de tres jurados y un suplente, designados por el litigante obrero entre los que figuren en la lista elegida por los patronos, y de tres jurados y un suplente, designados por el litigante patrono entre los que figuren en la lista elegida por los obreros.”

La postulación no es necesaria, por lo que si se utiliza Procurador y Abogado, sus derechos y honorarios serán de cuenta de ese litigante (art. 4). Presentada la demanda, se citará en 6 días a las partes para intentar conciliación. Intentada en vano, el Juez citará a las partes a una comparecencia dentro de los 8 días siguientes, en la que se practicarán las pruebas y serán oídas las partes. Celebrada la vista, el Tribunal deliberará y publicará en el acto la sentencia. Si hubiere empate de votos, se celebrará nueva vista en el plazo de 5 días ante el mismo Tribunal, 2 jurados y 2 suplentes más. Si hubiere de nuevo empate, decidirá el Presidente con voto de calidad. Cabe apelación en el plazo de 5 días ante el Tribunal Pleno (Juez, más 14 jurados, más 4 suplentes). Cabe recurso de nulidad ante la Audiencia Territorial, en cualquiera de las dos instancias, en cuatro casos (art. 30). Para lo no previsto en la Ley, se estará a la LEC (art. 34).

⁸¹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1908 (Legislación-Tribunales Industriales), Fábricas e Industrias, págs. 235 y ss. .

Como vemos, esta Ley de 1908 crea los Tribunales Industriales, encomendándoles un procedimiento especial, para los asuntos entre obreros y patrono, dentro del tipo de juicio verbal. En él la postulación sigue siendo no necesaria, pero introduce la conciliación previa, regula el procedimiento, introduce un sistema para el caso de empate de votos, cabe apelación en 5 días ante el Tribunal Pleno, y recurso de nulidad en cuatro casos ante la Audiencia Territorial (en ambas instancias).

5- LEY DE 23 DE JULIO DE 1908, SOBRE PRESTAMOS USURARIOS ⁸²

La Ley de Azcárate modificó también lo referente a la cuantía y competencia, en cuanto que atribuye a los Jueces de Primera Instancia el conocimiento de las demandas sobre nulidad de los préstamos con usura, cualquiera que sea la cuantía de tal préstamo. Para los que no excedan de 500 pts. se admite la apelación ante la Audiencia Territorial, la cual se sustanciará en la forma establecida para los incidentes (art. 12):

-Art. 12-“Para entender en las demandas en que se pida la nulidad de los contratos á que se refiere esta ley serán los competentes los jueces de primera instancia, cualquiera que sea la cuantía del préstamo, y se tramitarán los litigios, según las reglas del procedimiento vigente, en relación con su cuantía, y en lo que no exceda de 500 pesetas, admitirán para ante la Audiencia territorial respectiva las apelaciones que se entablen en el tiempo y forma que establece la ley de Justicia municipal respecto de las sentencias recaídas en los juicios verbales. Estas apelaciones se sustanciarán en la forma establecida para los incidentes.”

Por tanto, encomienda esta Ley el conocimiento sobre la nulidad de préstamos usurarios a los Jueces de Primera Instancia (hubiera sido a los Tribunales Municipales hasta 500 pts., según las reglas ordinarias), cualquiera que sea la cuantía, y siguiendo los

trámites del juicio verbal si corresponde según ésta, admitiéndose en este caso (hasta 500 pts.) apelación ante la Audiencia Territorial, siguiéndose en ella los trámites de los incidentes.

6- REAL DECRETO DE 30 DE OCTUBRE DE 1923 ⁸³

Este RD de la Presidencia del Directorio Militar suprime los adjuntos del Tribunal Municipal, transmitiendo su función al Juez de esta misma clase (art. 1º):

-Art. 1º-“Quedarán suprimidos en 1º de Enero próximo los Tribunales municipales, que reguló la ley de 5 Agosto 1907, y derogadas cuantas disposiciones de ellas les afectan.

Las funciones actualmente encomendadas á los citados Tribunales por la expresada ley, serán, á partir de la indicada fecha, de la competencia de los Juzgados municipales, observándose, en lo posible, las reglas de procedimiento que la misma contiene.”

7- REAL DECRETO-LEY DE 12 DE FEBRERO DE 1924 ⁸⁴

Elevó a 1.000 pts. la cuantía de las demandas de que debe conocer el Juzgador Municipal (art. 1º), modificando, por tanto, el art. 18.1º de la Ley de Justicia Municipal, de 5 de agosto de 1907, que la fijaba en 500 pts. :

-Art. 1º-“El párrafo 1º y el número 1º del art. 18 de la ley de Justicia municipal de 5 Agosto 1907 quedan redactados en la forma siguiente: Los Juzgados municipales conocerán en primera instancia en materia civil: Primero. De las demandas cuyo valor no pase de 1.000 pesetas.”

⁸² MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1908 (Legislación), Interés del dinero, págs. 304 y 305.

⁸³ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1923 (Legislación), Enjuiciamiento Civil, págs. 669 y 670.

⁸⁴ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1924 (Legislación), Enjuiciamiento Civil, pág. 73.

Dicho de otro modo, esta Ley de 1924 eleva hasta 1.000 pts. la cuantía del juicio verbal.

8- DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1932, SOBRE TIMBRE DEL ESTADO⁸⁵

El art. 108 de esta Ley ordena se extiendan las papeletas de los juicios verbales en papel timbrado, de la clase que corresponda a la cuantía litigiosa:

-Art. 108-“Los escritos de los interesados ó de sus representantes en toda clase de juicios, las providencias, autos y sentencias de los Jueces y Tribunales ordinarios y contencioso-administrativos, en todos sus grados, que se dicten durante la sustanciación y hasta la terminación definitiva de cualquier negocio civil sometido ó que se someta á la jurisdicción contenciosa, ó que tenga por objeto la formalización de la demanda, así como las compulsas literarias (creemos quiere decir literales), ó en relación que se libren, incluso las que expidan los Notarios por mandato judicial para asunto contencioso, se extenderán, sin excepción alguna, en papel timbrado de un mismo precio, y con arreglo á la cuantía de la cosa evaluada ó cantidad material y determinada del litigio, con sujeción á la escala siguiente:

CUANTIA DEL JUICIO	TIMBRE: CLASE	PRECIO
Hasta 100,00 pesetas.....	13ª.....	0,25
Desde 100,01 - hasta 1.000.....	12ª.....	0,75”

⁸⁵ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1932 (Ley del Timbre). Nueva Ley del Timbre, Decreto 18 Abril, págs. 433 y ss. .

9- LEY DE 21 DE MAYO DE 1936, SOBRE COMPETENCIA EN LOS JUICIOS VERBALES CIVILES ⁸⁶

Contiene esta Ley un único artículo, que pasamos a transcribir:

-Art. único- “En los juicios verbales civiles de la competencia de los Juzgados Municipales, será Juez competente, con exclusión de cualquier otro y salvo el caso de sumisión expresa, el del domicilio del demandado o el del lugar donde esté sita la cosa inmueble objeto de la relación jurídica.

Sólo podrá pactarse la sumisión para ante el Juez del propio y habitual domicilio de cualquiera de los contratantes, o el del lugar donde esté sita la cosa inmueble.

Cuando alguno de los contratantes y litigantes accione por medio de representante legal, voluntario o cesionario, regirá el domicilio del representado o cedente, considerándose como cesión toda acción ejercitada al amparo del párrafo 2º del art. 1158 del C.C. .

Los Jueces Municipales examinarán de oficio y con intervención del Fiscal su propia competencia, repeliendo la demanda cuando la presentación de la misma no se ajuste a las normas de esta Ley.”

Por tanto, se establecen en esta Ley normas sobre competencia en los juicios verbales, en concreto, a favor del Juez Municipal del domicilio del demandado o donde esté sito el inmueble, admitiéndose la sumisión expresa solamente a favor del Juez del domicilio habitual de cualquiera de los contratantes o el del lugar donde esté sito el inmueble. Además, el Juez Municipal, con intervención del Fiscal, examinará de oficio su propia competencia.

⁸⁶ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1941 (Legislación), Enjuiciamiento Civil, pág. 438.

10- LEY DE BASES DE LA JUSTICIA MUNICIPAL DE 19 DE JULIO DE 1944 ⁸⁷

En la Base II se determina la existencia de tres clases de Juzgados: los de Paz, los Municipales y los Comarcales:

-Base II-“Denominación y jerarquía de los Juzgados.

Para la administración de Justicia municipal existirán tres clases de Juzgados: 1ª Juzgados Municipales, que radicarán en las capitales de provincia y Municipales de más de veinte mil habitantes.- 2ª Juzgados Comarcales, que se constituirán en los Municipios que sean centros o capitales de comarca.- 3ª Juzgados de Paz, que ejercerán sus funciones en los Municipios donde no hubiere Juzgados Municipales ni Comarcales.

Para la computación del número de habitantes se tendrá en cuenta el que figure en el Censo oficial de España como población de derecho.

Los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz quedan subordinados en el orden gubernativo y judicial a los de Primera Instancia, en los términos que establece la presente Ley. Los de Paz lo estarán además, a los Juzgados Comarcales, dentro de los límites que se señalan en las normas reguladoras de su privativa competencia.”

En su Base IX, restablece para el juicio verbal el antiguo límite de 250 pts., pero creando un nuevo tipo de juicio declarativo, el de cognición, cuya cuantía máxima se fija en 3.000 pts. . De esta forma, se encomienda a los Jueces de Paz el conocimiento y fallo de los juicios verbales en 1ª instancia hasta 250 pts. (Base IX A) d)), a los Comarcales el de los juicios de cognición en 1ª instancia hasta 3.000 (Base IX B) c)), y a los Municipales, en el territorio de su jurisdicción, los mismos asuntos que a los anteriores (Base IX C)); la 2ª instancia de estos tres Jueces, a los de Primera Instancia (Base IX E));

⁸⁷ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1944 (Legislación-Justicia municipal). Justicia,

-Base IX-“De la competencia.

A) Serán competentes los Jueces de Paz:

d) De la sustanciación y fallo, en primera instancia, de los juicios verbales civiles en cuantía no superior a 250 pesetas.

C) Los Jueces Municipales en el territorio a que alcance su jurisdicción serán competentes para entender en los asuntos que los apartados anteriores atribuyen a los de Paz y a los Comarcales, y estarán encargados del Registro Civil en el territorio que comprenda su jurisdicción.

Salvo los casos en que las leyes procesales dispongan otra cosa, la competencia de los Jueces Municipales, cuando sean varios los que actúen en un mismo término, se determinará por el reparto, sin que los que sean parte en los negocios civiles puedan someterse a la jurisdicción de uno determinado.

E) De los recursos de apelación y de queja contra las sentencias y resoluciones que en el ámbito de su respectiva competencia dicten los Jueces de Paz, Comarcales y Municipales, conocerán los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.”

Finalmente, la Base XII autoriza al Ministro de Justicia para que, por Decreto, desarrolle las precedentes Bases.

Como puede apreciarse, la Ley de Bases de la Justicia Municipal disminuye la cuantía del juicio verbal, que estaba en 1.000 pts., hasta 250, encomendando su conocimiento en 1ª instancia a los Jueces Municipales, o a los de Paz, donde no existan los primeros, y en 2ª instancia a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

11- REAL DECRETO-LEY DE 24 DE ENERO DE 1947 ⁸⁸

Las anteriores Bases fueron desarrolladas por este Decreto, sobre competencia de los órganos de la Justicia Municipal.

En concreto, el art. 5 B) determina competentes a los Juzgados de Paz para la sustanciación en 1ª instancia, fallo y ejecución de los juicios verbales civiles de cuantía no superior a 250 pts. :

-Cap. II-“Competencia de los Juzgados de Paz.

Art. 5º-En materia civil serán competentes los Juzgados de Paz:

B) Para la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los juicios verbales civiles de cuantía no superior a 250 pesetas.”

Por otro lado, el art. 8 C) hace lo propio con los Juzgados Municipales y Comarcales para la sustanciación en 1ª instancia, fallo y ejecución, por los trámites del juicio verbal, de aquellos asuntos de cuantía no superior a 1.000 pts. que correspondan a la capitalidad del Juzgado Municipal o Comarcal y de los que excedan de 250 pts. sin pasar de 1.000, correspondientes a Juzgados de Paz dependientes de los mismos:

-Cap. III-“Competencia de los Juzgados Municipales y Comarcales.

Art. 8º-En materia civil, los Jueces Municipales y Comarcales serán competentes:

C) Para la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución, por los trámites del juicio verbal, de aquellos asuntos de cuantía no superior a 1.000 pesetas que correspondan a la capitalidad del Juzgado Municipal o Comarcal y de los que excedan de 250 pesetas sin pasar de 1.000, correspondientes a Juzgados de Paz dependientes de los mismos.”

⁸⁸ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1947 (Legislación-Competencia de los Jueces de la Justicia Municipal), Justicia, págs. 92 y ss. .

Por tanto, se establece competentes en la 1ª instancia de los juicios verbales a los Jueces de Paz hasta 250 pts. y a los Municipales o Comarcales hasta 1.000, o desde 251 a 1.000, en el territorio correspondiente a Juzgados de Paz dependientes de los mismos.

12- LEY DE 17 DE JULIO DE 1948 ⁸⁹

Esta Ley sobre competencia modifica a la de 21 de mayo de 1936.

Contiene cuatro artículos, que a continuación pasamos a reproducir:

-Art. 1º-"En los juicios verbales y en los procesos de cognición, cuyo conocimiento corresponde a los Jueces Municipales, Comarcales y de Paz, la sumisión expresa de las partes sólo podrá hacerse en favor del Juez del propio y habitual domicilio de cualquiera de los contratantes, si se tratase del ejercicio de acciones personales, o el del lugar de situación de la cosa, cuando se trate de acciones de naturaleza real sobre bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre los mismos.

En defecto de sumisión expresa, se estará a las reglas de competencia establecidas en la LEC"

-Art. 2º-"En el caso del artículo anterior, la representación legal o voluntaria, la cesión de créditos o el pago por cuenta de otro, no determinarán alteración de competencia por razón de domicilio, que, en esos supuestos, será, según los casos, el del representado, cedente o acreedor beneficiado por el pago."

-Art. 3º-"Los Jueces Municipales, Comarcales y de Paz examinarán de oficio su propia competencia, con intervención del Ministerio Fiscal, cuando, invocándose por el actor la sumisión expresa de las partes, no resulte ajustada a lo dispuesto en el art. 1º."

⁸⁹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1948 (Legislación), Enjuiciamiento Civil, pág. 556.

-Art. 4º-“Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los preceptos contenidos en la presente Ley.”

Por tanto, se establecen de nuevo las reglas de competencia en los juicios verbales, en este caso, a favor de los Jueces Municipales, Comarcales o de Paz pactados en sumisión expresa, siempre que sea el del domicilio habitual de cualquiera de los contratantes si se trata de acción personal, o de situación del inmueble cuando se trate de acciones de naturaleza real sobre éste. En defecto de sumisión expresa, se estará a la LEC . También ahora los anteriores Jueces examinarán de oficio su propia competencia junto con el Ministerio Fiscal, pero, se añade, si la sumisión expresa invocada por el actor no se ajusta a lo anteriormente dicho.

13- DECRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1952 ⁹⁰

Este Decreto desarrolla las normas procesales en la Justicia Municipal, fijando en sus arts. 20 al 25, ambos inclusivos, las correspondientes al juicio verbal, en la siguiente forma:

-Art. 20-“Todos los asuntos de carácter civil distintos de los aludidos en el artículo precedente, de la competencia de los Juzgados de Paz, y los que se planteen ante los Juzgados Municipales y Comarcales, cuando la cuantía de estos últimos no exceda de 1.000 pesetas, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal o de mínima cuantía a que se refiere el Capítulo IV del Título II del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.”

⁹⁰ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1952 (Legislación-Justicia Municipal: Procedimiento), Enjuiciamiento Civil y Criminal, págs. 737 y ss.; MANRESA Y NAVARRO, Comentarios...cit., págs. 864 a 866, Cap. IV, Tomo III.

-Art. 21-“No se admitirán en el mismo reconvenciones ni tercerías por cuantía que exceda de 250 ó 1.000 pts., según que conozca del juicio un Juzgado de Paz o un Juzgado Municipal o Comarcal. Si se admitieran pruebas que no sean practicables en el acto, el plazo para evacuarlas no podrá exceder de doce días, excepto cuando hubiere de otorgarse el extraordinario de prueba, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los recursos que se entablen en las cuestiones incidentales de la propia competencia de los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz, se sustanciarán después de la decisión final y juntamente con las que contra ésta se utilicen.

Las diligencias inútiles serán costeadas por el Juez y Secretario actuantes, o por uno de ellos, según decida el Juez de Primera Instancia, a petición de partes.”

-Art. 22-“El Juzgado, en el acto del juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, dictará resolución definitiva, la cual será apelable en ambos efectos, para ante el Juez de Primera Instancia en el acto de la notificación, consignándolo el Secretario en esta diligencia, o dentro de los tres días siguientes por escrito o por comparecencia ante el Secretario.”

-Art. 23-“Cuando en estos juicios se solicite defensa por pobre, conocerá el Juzgado Municipal en juicio verbal, oyendo al Abogado del Estado o al Fiscal Municipal, Comarcal o de Paz por su delegación, y observando los arts. 15 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

-Art. 24-“Denegada la admisión de la apelación, si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación el apelante manifestare por escrito propósito de recurrir en queja ante el Juzgado superior, se le expedirá certificación del auto denegatorio, con emplazamiento por diez días, dando conocimiento al Juzgado superior, en cuyo término el apelante, con presentación del testimonio, podrá alegar por escrito ante éste las razones por

las que la apelación debiere ser admitida, y el Juzgado de Primera Instancia, previo informe del inferior, resolverá sobre ello dentro del segundo día.

Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juez Municipal, Comarcal o de Paz correspondiente, para ejecución de la sentencia.”

-Art. 25-“Admitida una apelación, se remitirán los autos al Juez de Primera Instancia, con emplazamiento de las partes por diez días, sin perjuicio de los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para la apelación en los juicios de desahucio por falta de pago de alquileres.

Personado en tiempo el apelante, el Juez señalará día para la vista, dejando entretanto los autos de manifiesto a las partes en la Secretaría. En un solo acto, en el día señalado, se dilucidarán las cuestiones pendientes, incidentales o principales, pudiendo el apelado adherirse a la apelación, y quedará el negocio concluso para sentencia.

Si alguna de las partes pidiese alguna pertinente diligencia de prueba que no se hubiese practicado en primera instancia por causa no imputable a quien la solicita, podrá el Juez acordarla, para mejor proveer, dentro del plazo máximo de diez días.

Las sentencias se dictarán, sin ulterior recurso dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista o a las diligencias para mejor proveer.

Si la revocación se fundare en vicio esencial de forma que causare indefensión del apelante, el Juzgado se limitará a dejar sin efecto la sentencia apelada y reponer los autos al estado en que se cometió la falta.”

En resumen: se establece en 250 y 1.000 pts. la cuantía del juicio verbal, según conozcan el Juez de Paz o el Municipal o Comarcal, con el mismo límite para las tercerías y reconvenções. Existe un límite máximo de 12 días para la práctica de la prueba (salvo el término extraordinario). Los recursos de las cuestiones incidentales se resuelven

juntamente con el recurso de la decisión final (ésta se dictará en el mismo acto del juicio o en los 3 días siguientes), contra la que cabe apelación en ambos efectos ante el Juez de Primera Instancia (se regula también el procedimiento en la apelación). Si se solicita defensa por pobre conocerá el Juez Municipal en juicio verbal, oyendo al Abogado del Estado o Fiscal que corresponda, por su delegación, y siguiendo las normas de la LEC . Cabe además queja ante el Juzgado superior contra la denegación de la admisión de la apelación, regulándose sus plazos y trámites.

14- LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 ⁹¹

Eleva a 250 pts. el límite máximo en juicio verbal de los perjuicios que el demandante debe pagar al demandado en caso de no comparecer al juicio (antes 50 pts.), modificando así el art. 728 de la LEC :

-Art. 1º-“Los arts. ..., 728, ...de la LEC, quedarán redactados en la forma siguiente:

Art. 728. Si no compareciere el demandante en el día y hora señalados, se le tendrá por desistido de la celebración del juicio, condenándole en todas las costas y a que indemnice al demandado que hubiere comparecido los perjuicios que le haya ocasionado.

En el acta que se extenderá, el Juez, oyendo al demandado, fijará prudencialmente, y sin ulterior recurso, el importe de dichos perjuicios, sin que puedan exceder de 250 pesetas, a no ser que aquél los renunciase. No renunciándolos, se exigirán, con las costas, por la vía de apremio.”

Reforma también, los arts. 36, relativo a la defensa por pobre, 212 y 228, sobre recusación:

⁹¹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...cit., Apéndice de 1952 (Legislación-Reforma de la LEC), pags. 756 y ss. .

-Art. 36-“La declaración de pobreza hecha en favor de cualquier litigante no le librára de la obligación de pagar las costas en que haya sido condenado, si se le encontrasen bienes en que hacerlas efectivas.

No encontrándose bienes en que hacer efectivas las costas, siempre que en la sentencia se hiciese pronunciamiento de haber el declarado pobre procedido con manifiesta mala fe, se le hará sufrir el apremio personal a razón de un día de arresto por cada 50 pesetas de costas que dejare de satisfacer, no pudiendo exceder, en ningún caso, de 30 días, siendo de seis meses en caso de reincidencia.”

-Art. 212-“Además de la condenación en costas, expresada en el artículo anterior, se impondrá al recusante una multa de 250 pesetas cuando el recusado fuere Juez de Primera Instancia, de 500 cuando fuere Presidente o Magistrado de Audiencia y de 1.000 cuando fuere Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo.

No obstante, cuando la resolución que decida el expediente de recusación declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, las multas se podrán elevar del duplo al quíntuplo.”

-Art. 228-“Siempre que se deniegue la recusación, se condenará en las costas al recusante y, además, se le impondrá una multa de 100 pesetas, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 y en el 213.”

Por tanto, mediante esta Ley se modifica el art. 728 de la LEC, elevando a 250 pts. el límite máximo que el demandante indemnizará al demandado en caso de no comparecer al juicio. Asimismo, modifica otros artículos que también afectan al juicio verbal, y hablamos de ellos al tratar la LEC, como son el art. 36 (sobre defensa por pobre) y el 212 y 228 (sobre recusación).

15- LEY 46/1966, DE 23 DE JULIO ⁹²

A través de esta Ley se mantiene la cuantía máxima de que conocerán en juicio verbal los Jueces de Paz en 1ª instancia en 250 pts., y se eleva la de los Jueces Municipales y Comarcales hasta 10.000 pts. (art. 4.1 de esta Ley); en 2ª instancia siguen conociendo los Jueces de Primera Instancia. Por tanto, esta Ley modifica los arts.486, 715 y 496 de la LEC(art.1º):

-Art. 4º-"Los Jueces Municipales o Comarcales serán competentes:

Primero.- Para la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución por los trámites del juicio verbal de aquellos asuntos de cuantía no superior a 10.000 pesetas que correspondan a la capitalidad del Juzgado Municipal o Comarcal y de los que excedan de 250 pesetas, sin pasar de 10.000, correspondientes a Juzgados de Paz dependientes de los mismos."

Sin embargo, también modifica los arts. 728, 730 a 733, 735 y 739 de la LEC(art. 1º).

En el art. 728 se eleva a 250 ó 1.000 pts. el límite máximo por el que el demandante debe indemnizar al demandado en caso de no comparecer, según se conozca ante el Juez de Paz, o Municipal o Comarcal (anteriormente el límite se estableció sólo en 250 pts., y antes de esto, en la LEC originaria, en 50 pts.).

El art. 730 dispone ahora que los interesados podrán concurrir acompañados para hablar en su nombre de la persona que elijan, que deberá, eso sí, reunir la condición de Procurador o Letrado en ejercicio (antes podía tratarse de persona lega en Derecho).

En el art. 731 se amplía el plazo para dictar sentencia hasta los 3 días siguientes a la comparecencia (según establecía el art. 22 del Decreto de 21 de noviembre de 1952),

⁹² ARANZADI, Repertorio Cronológico de Legislación, 1966, B.O.E. 25 Julio 1966 (núm. 176), R. 1391,

disponiéndose además que no se admitirán reconvenções ni tercerías por cuantías superiores a las del art. 715, según los casos, y que en los juicios verbales fundados en título ejecutivo, las costas se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubiesen sido totalmente rechazadas, salvo que el Juez, motivándolo, entendiére justificado el planteamiento de la acción u oposición.

En el art. 732 se establece ahora, que si la apelación no se ha interpuesto en el acto de la notificación de la sentencia, puede hacerse en los 3 días siguientes mediante escrito o comparecencia ante el mismo Secretario, según se dispuso en el art. 22 del Decreto de 1952 (antes durante estos 3 días siguientes podía hacerse sólo mediante comparecencia ante el Juez Municipal).

De acuerdo con el art. 733, admitida la apelación, se remitirán los autos al Juzgado de Primera Instancia, emplazando a las partes por término de diez días para que comparezcan, si les conviniere, a usar de su derecho.

Se añaden dos nuevos párrafos al art. 735, de acuerdo con el art. 25 del Decreto de 1952: “En el acto de la comparecencia (ante el Juez de Primera Instancia en apelación) se dilucidarán las cuestiones pendientes, incidentales o principales, pudiendo el apelado adherirse a la apelación, y quedará el negocio concluso para sentencia”; “si alguna de las partes pidiera una diligencia de prueba que no se hubiera practicado en 1ª instancia por causa no imputable a quien la solicite, podrá el Juez acordarla, para mejor proveer, dentro del plazo máximo de 10 días”.

Lógicamente, en el nuevo art. 739 se está a los límites máximos de 250 y 10.000 pts., según los casos, para saber si, planteada en la ejecución de la sentencia tercería de

dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, conocerá de ésta el mismo Juez que ejecutaba o uno distinto (el que corresponda según la cuantía).

En cuanto a la comparecencia en juicio, se establece que en los juicios verbales ante los Jueces de Paz (hasta 250 pts.) y ante los Jueces Municipales y Comarcales de cuantía inferior a 5.000 pts., podrán los interesados comparecer por sí mismos (art. 4.2 de la LEC), o con Procurador o Abogado actuando como auxiliares, en cuyo caso, la condena en costas a favor de quien se haya valido de estos, no comprenderá ni los derechos de aquél ni los honorarios de éste, salvo que la residencia habitual de la parte representada y defendida sea distinta del lugar en que se tramite el juicio (art. 11, en relación con el art. 10.2 de la LEC). Sin embargo, en los juicios verbales de cuantía entre 5.000 y 10.000 pts., la intervención de Letrado es preceptiva, según el art. 10 de la LEC, y la de Procurador facultativa (art. 4.2).

En resumen: se eleva a 10.000 pts. la cuantía máxima de los juicios verbales en que conocen los Jueces Municipales o Comarcales; se aumenta también a 250 o 1.000 pts. la indemnización máxima del demandante al demandado en caso de no comparecer, según conozca Juez de Paz, o Municipal o Comarcal, respectivamente. En los juicios verbales de cuantía inferior a 5.000 pts., podrán las partes concurrir por sí mismas o acompañadas de Procurador o Abogado (nunca de persona lega en Derecho), actuando como auxiliares (salvo que la residencia de la parte sea distinta del lugar del juicio); sin embargo, en los juicios verbales de 5.000 a 10.000 pts. la intervención de Letrado es preceptiva y la de Procurador facultativa. Se está también a los nuevos límites de 250 y 10.000 pts. para saber si conocerá el mismo Juez que ejecutaba la sentencia, de la tercería planteada sobre los bienes embargados. Junto a estas novedades, se repiten asimismo determinadas cuestiones ya recogidas en el Decreto de 21 de noviembre de 1952.

16- LEY DE BASES 42/1974, DE 28 DE NOVIEMBRE, ORGANICA DE LA JUSTICIA ⁹³

La llamada Justicia Municipal cambia de nombre en virtud de esta Ley de Bases, cuyo texto articulado parcial se aprueba posteriormente mediante R.D. 2104/1977, de 29 de julio, y es derogada por Ley 11/1978, de 20 de febrero.

De esta forma, los Juzgados Municipales y Comarcales, se agrupan bajo la denominación genérica de Juzgados de Distrito (Base 7ª y 9ª):

-Base 7ª-“De la planta y ordenación territorial de los Tribunales y Juzgados.

22. El ejercicio de la función jurisdiccional se llevará a cabo por los órganos que a continuación se especifican, con la sede y jurisdicción territorial que se determinan:

9º Los Juzgados de Partido, para los órdenes civil y penal, extenderán su jurisdicción al territorio que se disponga en la demarcación judicial. Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen podrá disponerse la separación de estos Juzgados en civiles y penales, otorgando a cada uno de ellos las funciones del orden judicial respectivo.

10º Los Juzgados de Distrito extienden su jurisdicción, en el orden civil y penal, al territorio de uno o varios municipios, y radicarán en las poblaciones que se señalen.

11º Los Juzgados de Paz, uno o varios en cada término municipal, o agrupación de municipios, donde no existan Juzgados de Partido o de Distrito.”

-Base 9ª-“De las atribuciones y competencia de los órganos judiciales.

46. Corresponderá a los Juzgados de Partido:

1º En el orden civil:

⁹³ ARANZADI, Repertorio...cit., 1974, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 30 noviembre 1974 (núm.287), R. 2419, págs. 3399 y ss. .

c) El conocimiento en segunda instancia de los procesos civiles tramitados en primera por los Juzgados de Distrito del Partido Judicial, salvo aquéllos cuya competencia en apelación esté atribuida a las Audiencias Territoriales o Provinciales.

48. Corresponde a los Juzgados de Distrito:

1º En el orden civil:

a) El conocimiento, fallo en primera instancia y ejecución de los asuntos que les atribuyan las Leyes procesales.

b) Las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados de Paz de su territorio.”

Por tanto, esta Ley agrupa a los Juzgados Municipales y Comarcales en Juzgados de Distrito, y a los Juzgados de Primera Instancia los denomina Juzgados de Partido. De esta guisa, la 1ª instancia de los juicios verbales corresponderá a los Juzgados de Paz o de Distrito, según las cuantías y jurisdicción ya vistas, y la 2ª instancia a los de Distrito o de Partido, según quien fuera el Juez que conoció en la 1ª.

17- LEY 34/1984, DE 6 DE AGOSTO, DE REFORMA URGENTE DE LA LEC ⁹⁴

Se realiza una nueva elevación de la cuantía del juicio verbal hasta 50.000 pts. (art.486 de la LEC), de manera que, en 1ª instancia, los Jueces de Paz conocerán en juicio verbal de las demandas cuya cuantía no exceda de 5.000 pts. y los Jueces de Distrito de las de hasta 50.000 pts.(art. 715 de la LEC), siendo los Jueces de Primera Instancia los encargados de conocer en todo caso de los juicios verbales en 2ª instancia (subsiste el art. 732 en la redacción dada por la Ley de 1966).

⁹⁴ ARANZADI, Repertorio...cit., 1984, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 7 agosto 1984 (núm. 188), R. 2040, págs. 4062 y ss. .

-Art. 17-“En el Cap. IV del Tít. II del libro segundo se modifican los arts. que se citan, cuya redacción será la siguiente: ...

Art. 715- Los Jueces de Distrito serán competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de cincuenta mil pesetas. Los Jueces de Paz conocerán, por los mismos trámites, de las demandas cuya cuantía no exceda de cinco mil pesetas.

No se admitirán en estos juicios reconvencciones ni tercerías por cuantías que excedan de las señaladas en el párrafo precedente.”

Así, esta Ley de 1984, modifica los arts. 486, 715, 717, 719, 721, 724, 727, 728, 731, 733, 734 y 737 a 740, relativos al juicio verbal.

En los arts. 717, 719, 721, 724, 727, 734, 737 y 738 se sustituye de la antigua redacción “Juez Municipal” por “Juez de Distrito o de Paz”.

En el art. 728 se eleva el tope máximo del perjuicio que el demandante deberá indemnizar al demandado, hasta 2.500 pts. cuando entendieren los Jueces de Paz y hasta 10.000 cuando los de Distrito (anteriormente 250 y 1.000 pts., respectivamente).

El nuevo art. 731 se reduce a un solo párrafo, en el que se dispone (como ya se ordenaba en el Decreto de 1952 y en la Ley de 1966) que “celebrada la comparecencia, el Juez, a continuación del acta, dictará sentencia en el mismo día, o, a no ser posible, dentro de los tres siguientes”. Por tanto, se suprimen los otros dos párrafos de su anterior redacción.

En cambio, en el nuevo art. 733 sucede lo contrario, pues se añaden dos párrafos más, en los que se dispone que “denegada la admisión de la apelación, si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación el apelante manifestare por escrito propósito de recurrir en queja ante el Juzgado superior, se le expedirá certificación del auto

denegatorio, con emplazamiento por diez días, dando conocimiento al Juzgado superior, en cuyo término el apelante, con presentación del testimonio, podrá alegar por escrito ante éste las razones por las que la apelación debiere ser admitida, y el Juez de Primera Instancia, previo informe del inferior, resolverá sobre ello dentro del segundo día. Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juez de Distrito o de Paz correspondiente para ejecución de la sentencia”.

También en el nuevo art. 739 se reforman los antiguos límites de 250 y 10.000 pts. por los de 5.000 y 50.000 pts, según los casos, para saber si, planteada en la ejecución de la sentencia tercería de dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, conocerá de ésta el mismo Juez que ejecutaba u otro distinto.

Al art. 740 se le da una nueva redacción: “Cuando en estos juicios se solicite el beneficio de justicia gratuita, conocerá el propio Juzgado de Distrito o de Paz, oyendo al Abogado del Estado o al Fiscal, por su delegación.”

En lo que a la postulación en estos juicios se refiere, debe decirse que en los nuevos arts. 4.2º y 10.2º, en sus dos facetas, representación técnica y asistencia Letrada, ésta se convierte en facultativa para los juicios verbales (independientemente de la cuantía), pero actuando Procurador o Abogado como auxiliares, pues se mantiene en vigor el art. 11 de la LEC (por tanto, sin poder incluirse en las costas el pago de sus derechos u honorarios, salvo que la residencia habitual de la parte representada y defendida sea distinta del lugar en que se tramita el juicio).

Como vemos, se eleva la cuantía de los juicios verbales a 5.000 y 50.000 pts., según conozcan los Jueces de Paz o de Distrito, respectivamente. En 2ª instancia, conocerá en todo caso el Juez de Primera Instancia. La postulación será facultativa en cualquier juicio verbal, actuando, en su caso, el Procurador o Abogado, con el carácter de auxiliar (salvo

que la residencia de la parte sea distinta del lugar del juicio). Se eleva el tope de la indemnización del demandante al demandado en caso de no comparecer, a 2.500 o 10.000 pts., según qué Juez conozca. Se mantiene el plazo máximo de 3 días para dictar sentencia, que establecía el Decreto de 1952 y la Ley de 1966. Se está también a las nuevas cuantías de 5.000 y 50.000 pts. para saber si planteada en la ejecución tercera sobre los bienes embargados, conocerá o no el mismo Juez. La solicitud del beneficio de justicia gratuita la conocerá el mismo Juez de Paz o de Distrito, oyendo al Abogado del Estado o Fiscal, por su delegación. Se regula también el recurso de queja ante el Juzgado superior, para el caso de denegación de admisión de la apelación.

18- LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL⁹⁵ Y LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE PLANTA JUDICIAL⁹⁶

Esta nueva LOPJ sustituye a la anterior de 1870.

En lo que a nosotros interesa, la LOPJ de 1985 suprime los Juzgados de Distrito, transformándolos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Exposición de motivos en su apartado V, párrafos 1 y 2 y art. 26):

-Exposición de motivos, apartado V, párrs. 1 y 2-“El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas, sobre las que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción..., Audiencias Provinciales...

⁹⁵ ARANZADI, Repertorio...cit., 1985, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 2 julio 1985 (núm. 157), R. 1578, págs. 2997 y ss. .

⁹⁶ ARANZADI, Repertorio... cit., 1988, Vol. IV, 1ª edición, B.O.E. 30 diciembre 1988 (núm. 313), R. 2606, págs. 6285 y ss. .

La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. Así, se democratiza el procedimiento de designación de los Jueces de Paz; se suprimen los Juzgados de Distrito, que se transforman en Juzgados de Primera Instancia o de Instrucción; ...; se atribuyen competencias en materia civil a las Audiencias Provinciales...”

-Art. 26-“El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,..., Audiencias Provinciales,...”

Por tanto, para conocer de los juicios verbales serán competentes los Jueces de Paz y los de Primera Instancia e Instrucción (se suprimen los de Distrito), cuyas funciones jurisdiccionales al respecto, se establecen en los arts. 100.1 y 85.1º y 3º de la LOPJ, respectivamente.

La demarcación y planta judicial de estos órganos jurisdiccionales se regula más concretamente en la Ley de este nombre, Ley 38/1988, de 28 de diciembre, ordenando además, en su art. 42.2, que en el plazo de 1 año desde su promulgación, el Gobierno, oído el C.G.P.J., efectúe la conversión de los citados Juzgados de Distrito, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3ª de la LOPJ:

-Art. 42.2 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial-“En el plazo de un año, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley, el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuará la conversión de los actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción o, en su caso, de Paz, con arreglo a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

Posteriormente, mediante el RD 122/1989, de 3 de febrero, por el que se acuerdan medidas para la efectividad de la planta judicial, se establece la fecha del 28 de diciembre de 1989 para llevar a cabo dicha conversión (arts. 19, 21, 22, 23 y 30).

Finalmente, la misma se realizará a través de las normas contenidas en los Acuerdos de 3 de noviembre y 13 de diciembre de 1989.

19- LEY 10/1992, DE 30 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA PROCESAL ”

A través de esta Ley de 1992 se realiza la, hasta ahora, última elevación de la cuantía del juicio verbal, a 80.000 pts. (art. 486):

-Art. 1º.48-“El artículo 486 queda redactado de la forma siguiente: Toda cuestión entre partes cuyo interés pase de 80.000 pesetas y no exceda de 800.000 se decidirá en juicio de cognición, y en juicio verbal si no supera las 80.000 pesetas.”

En 1ª instancia, conocerán en juicio verbal, los Jueces de Primera Instancia de las demandas cuyo interés no exceda de 80.000 pts. y los Jueces de Paz de las que no excedan de 8.000. Se sigue además insistiendo en que en estos juicios no se admitirán reconvencciones ni tercerías por cuantías superiores a las anteriormente señaladas (art. 715):

-Art. 1º.54-“El artículo 715 queda redactado de la forma siguiente: Los Jueces de Primera Instancia serán competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de 80.000 pesetas. Los Jueces de Paz conocerán, por los mismos trámites, de las demandas cuya cuantía no exceda de 8.000 pesetas.

No se admitirán en estos juicios reconvencciones ni tercerías por cuantías que excedan de las señaladas en el párrafo precedente.”

En 2ª instancia, en su caso, conocerá de la apelación el Juzgado de Primera Instancia si en la 1ª conoció el Juez de Paz, o la Audiencia Provincial correspondiente si en la 1ª instancia conoció el Juez de Primera Instancia del partido.

Además de los arts. 486 y 715, se modifican también los arts. 717, 719, 721, 724, 727, 728 y 732 a 740 de la LEC .

En el art. 717 se dispone que “el Juez examinará de oficio su propia competencia objetiva y territorial, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero. De estimarse incompetente, dictará auto declarándolo así. Este auto será apelable en ambos efectos”.

En el art. 719 la expresión “Distrito” se sustituye por “Primera Instancia”, y en los arts. 721, 724 y 727 se suprime la expresión de “Distrito o de Paz”.

El nuevo art. 728 eleva el límite máximo de los perjuicios que el demandante, en caso de no comparecer, deberá indemnizar al demandado comparecido, a 4.000 pts. cuando entendieren los Jueces de Paz (antes 2.500) y a 20.000 pts. cuando los de Primera Instancia (antes 10.000).

En el art. 732 se fija en qué casos cabrá apelación en el juicio verbal, de forma que se establece que las sentencias dictadas en dichos juicios (a los que se refiere el art. 715) no serán susceptibles de recurso de apelación cuando hayan resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito, mientras que contra las sentencias dictadas en procesos, distintos de los anteriormente mencionados, que deban seguirse por los trámites del juicio verbal, podrá interponerse el recurso de apelación en ambos efectos dentro del plazo de 5 días a partir del siguiente al de su notificación, desde el cual se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.

⁹⁷ ARANZADI, Repertorio...cit., 1992, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 5 mayo 1992 (núm. 108), R. 1027, págs.

Los arts. 733 a 736 quedan redactados de la forma siguiente:

-Art. 733-“El recurso se interpondrá por escrito que se presentará ante el órgano que hubiese dictado la resolución que se impugne, en el que se expondrán las alegaciones en las que se base la impugnación. Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión, acreditando haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que fuese ya imposible la reclamación.

En el escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que le hubiesen sido indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento la oportuna reserva, y de las admitidas que no hubiesen sido practicadas por causas que no le sean imputables.”

-Art. 734-“Admitida la apelación, el Juez dará traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días y transcurrido el mismo, se hayan o no presentado escritos de impugnación o adhesión, elevará en los dos días siguientes al órgano competente, los autos originales con todos los escritos presentados.

En los escritos de interposición del recurso o de impugnación o adhesión del mismo fijarán las partes un domicilio para notificaciones en la sede del órgano competente para conocer del recurso.”

-Art. 735-“Denegada la admisión de la apelación, si dentro del día siguiente al de la notificación el apelante manifestare por escrito su propósito de recurrir en queja, se le

expedirá certificación del auto denegatorio, con emplazamiento por diez días, en cuyo término el apelante, con presentación de testimonio, podrá alegar por escrito ante el Juez o la Audiencia las razones por las que la apelación debiera ser admitida y el órgano judicial, previo informe del Juez, resolverá sobre ello dentro del segundo día.

Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juez para ejecución de la sentencia.”

-Art. 736-“Recibidos los autos por el órgano competente para decidir la apelación, si no se hubiese propuesto prueba, dictará sentencia en el plazo de diez días, confirmando o revocando la apelada con imposición de costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el artículo 496 y mandará devolver aquellos al Juez.

Cuando estime que ello es necesario, podrá acordar la celebración de vista, citando a las partes. Si el recurso contiene proposición de prueba, se resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta, y en el mismo acto se señalará día para la vista dentro de los quince siguientes. En este caso la vista se celebrará empezando por la práctica de la prueba. A continuación las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.”

Por su parte, en el art. 737 se estableció que “cuando corresponda conocer de la apelación a la Audiencia Provincial, ésta se constituirá con un solo Magistrado”. Sin embargo, este nuevo precepto fue declarado inconstitucional en la S.T.C. 254/1994, de 21 de septiembre, de forma que en estos casos, la Sala de la Audiencia deberá constituirse con tres Magistrados, en vez de con uno sólo.

La Ley de 1992 deja sin contenido a los arts. 738 y 740, de forma que, por un lado, la ejecución de la sentencia seguirá los trámites generales de los arts. 919 a 950 LEC, y por

otro, la solicitud de Justicia gratuita se solventará por las normas de los arts. 13 a 50 LEC, estableciendo el art. 22 que ésta se considerará como un incidente del proceso principal, sustanciándose en pieza separada por los trámites del juicio verbal, con audiencia de las demás partes y del Abogado del Estado, y según el art. 4.4º, sin necesidad de Procurador.

Por último, el art. 739 ya no habla de 5.000 y 50.000 pts. como límites para saber si, planteada en la ejecución de la sentencia tercería de dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, conocerá de ésta el mismo Juez que ejecutaba u otro distinto, sino de 8.000 pts., de forma que en caso de exceder de tal cantidad, entablada la tercería, el Juez ordenará al inferior que suspenda el procedimiento, hasta que recaiga sentencia en el juicio de tercería, si ésta fuere de dominio, y si ésta fuere de mejor derecho, que consigne en la entidad de crédito correspondiente el importe de los bienes, si se enajenaren.

En cuanto a la postulación, ésta, al igual que en la Ley de 1984, es facultativa en los juicios verbales (arts. 4.2 y 10.2), pero si se utiliza Procurador o Abogado, estos actuarán con el carácter de apoderados o como auxiliares, sin incluirse en las costas el pago de sus derechos u honorarios respectivos, salvo que la residencia habitual de la parte representada y defendida sea distinta del lugar en que se tramite el juicio (art. 11).

Por tanto, esta última Ley de 1992, establece que conocerán de la 1ª instancia de los juicios verbales los Jueces de Paz hasta 8.000 pts. y los Jueces de Primera Instancia hasta 80.000. y de la 2ª instancia los Juzgados de Primera Instancia o la Audiencia Provincial, según si en la 1ª conoció el Juzgado de Paz o Juzgado de Primera Instancia, respectivamente. El Juez examinará su propia competencia objetiva y territorial, sin que sean aplicables las normas generales sobre sumisión expresa o tácita, y dictando auto apelable en ambos efectos. La postulación sigue siendo facultativa, actuando Procurador o Abogado, en su caso, como apoderado o auxiliar (salvo que el lugar de residencia de la

parte sea distinta del lugar del juicio). Se eleva el tope de la indemnización a 4.000 o 20.000 pts., que el demandante pagará al demandado en caso de incomparecencia, según qué Juez conozca, respectivamente. También se regula el procedimiento de la apelación, que se interpondrá en el plazo de 5 días a partir del siguiente al de la notificación; sin embargo, ésta no cabe en caso de acciones personales basadas en derechos de crédito. Además se dice que, cuando de la apelación conozca la Audiencia Provincial, ésta podrá constituirse con un solo Magistrado, pero este punto ha sido declarado inconstitucional por STC 254/1994, de 21 de septiembre, por lo que en estos casos la Audiencia deberá constituirse con tres Magistrados. Junto a esto, se estará a los nuevos límites para saber qué Juez conocerá de la tercera planteada en la ejecución sobre los bienes embargados; si excede de la competencia de dicho Juez, el que deba conocer le ordenará que suspenda el procedimiento hasta que recaiga sentencia en el juicio de tercera de dominio o se consigne, en tercera de mejor derecho, el importe de los bienes embargados, si han sido enajenados.

20-LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA⁹⁸

Esta Ley modifica los trámites para la solicitud del beneficio de justicia gratuita, y por tanto, afecta también al juicio verbal, pues dicha solicitud planteada en esta clase de juicio se regulaba ya por las reglas generales de los arts. 13 a 50 de la LEC, ambos inclusive, artículos que esta Ley de 1996 deroga en su Disposición Derogatoria única (apartado a)), junto al art. 4.4º que establecía la no necesidad de Procurador en estos incidentes:

⁹⁸ ARANZADI, Repertorio...cit., 1996, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 12 enero 1996 (núm. 11), R. 89, págs. 106 y ss. .

-Disposición derogatoria única-“Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley, y en particular:

a) De la Ley de Enjuiciamiento Civil:

-El inciso primero del número 4º del artículo 4, cuando dice “justicia gratuita”.

-Los artículos 13 a 50, ambos inclusive.

...”

En concreto, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita traslada el reconocimiento del derecho a sede administrativa, pues son ahora, primero los Colegios profesionales, los que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y después las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que como nuevos órganos administrativos, en cuya composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso, son las formalmente responsables de la decisión final (Exposición de Motivos, V.Actuación administrativa).

Esta Ley se complementa con su posterior Reglamento, introducido por el RD 2103/1996, de 20 de septiembre.

TITULO SEGUNDO

DERECHO COMPARADO

I - SISTEMAS JURIDICOS

Como explica Castán Tobeñas y recoge Aragonesees Alonso, el estudio del Derecho extranjero mediante la comparación, cotejo o confrontación de sistemas jurídicos distintos nos permitirá mejorar el conocimiento de nuestro propio Derecho⁹⁹.

Los sistemas jurídicos que nos son más afines son el sistema latino (que comprende a Francia, Italia, Portugal y los países iberoamericanos) y, por su significado en nuestra construcción doctrinal, el sistema germánico (que comprende a Alemania y Austria).

No obstante, en esta brevisima introducción al Derecho Comparado en la materia que nos ocupa, haremos referencia solamente a algunos de esos ordenamientos.

II- SISTEMA JURIDICO LATINO

A- FRANCIA¹⁰⁰

El Nuevo Código de Procedimiento Civil francés (Nouveau Code de Procédure Civile), aprobado por D. nº 75-1123, de 5 de diciembre de 1975, en su Libro II ("Disposiciones particulares a cada jurisdicción") dedica el Subtítulo I del Título I al

⁹⁹ CASTÁN TOBEÑAS, José; Reflexión sobre el Derecho Comparado y el método comparativo, Discurso de apertura de los Tribunales de 16 de septiembre de 1957, págs. 55 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Pedro; Proceso y Derecho Procesal (Introducción), pág. 548 y nota marginal nº 887. EDESA, 2ª edición, 1997, Madrid.

¹⁰⁰ CODES DALLOZ, Nouveau Code de Procédure Civile et Code de l'Organisation Judiciaire, Jurisprudence Générale Dalloz, 24ª édition, 1988, Paris; VINCENT, Jean; GUINCHARD, Serge; Procédure Civile, Dalloz, 24ª édition, 1996, Paris.

proceso ante el tribunal de gran instancia y el Título II (arts. 827 a 852-1) al proceso ante el tribunal de instancia, siendo este segundo proceso de menor rigor formal que el primero, por lo que a aquél nos referiremos. Junto a estos, se regulan otros procesos en materias concretas y especiales como la mercantil y la laboral.

En cuanto al proceso ante el tribunal de instancia, la competencia ante éste no se regula en el Código de Procedimiento, sino en el Libro III, Título II del Código de Organización Judicial (Code de l'Organisation Judiciaire), el cual se integra por normas legislativas y reglamentarias. En concreto, este tribunal conocerá, según D. n° 85-422, de 10 de abril de 1985, de los asuntos personales y mobiliarios hasta 13.000 Francos en última instancia y hasta 30.000 en 1ª solamente (R. 321-1). Ya en el Código de Procedimiento, se establece que las partes se defenderán ellas mismas, aunque tienen la facultad de hacerse asistir o representar por un abogado, su cónyuge, pariente en línea recta o colateral hasta el tercer grado, persona encargada de su servicio personal o de su empresa o por un funcionario de la Administración si se trata de una Administración territorial u organismo público, aunque si el representante no es abogado debe justificar poseer un poder especial (arts. 827 y 828). El proceso puede iniciarse por la citación a conciliación y, en su defecto, a juicio, salvo la facultad del demandante de intentar la conciliación antes de la citación, y puede igualmente comenzar con la entrega al Secretario de una demanda conjunta o por la presentación voluntaria de las partes ante el Juez (art. 829).

La demanda para intentar previamente la conciliación puede hacerse verbalmente o por notificación simple, indicando nombres y apellidos, profesiones y direcciones de las partes y objeto de la pretensión (art. 830). El Secretario convoca al demandante del mismo modo (art. 831) y al demandado por notificación simple, mencionando el nombre... del demandante, objeto de la demanda y lugar, día y hora en que se intentará la conciliación

(art. 832). Las partes deben presentarse a ésta en persona (art. 833). En defecto de conciliación, el Juez da al demandante un boletín de no-conciliación, a no ser que se juzgue ya directamente si las partes consienten, procediéndose entonces según las reglas de la presentación voluntaria (art. 834). Este intento de conciliación interrumpe la prescripción sólo si el auto de comparecencia (“assignation”) se dicta en los dos meses siguientes (art. 835). Este debe contener una serie de extremos obligatorios (lugar, día y hora en que se intentará la conciliación, si no se ha intentado ya; el negocio o caso juzgado; el nombre, apellidos y dirección de una persona domiciliada en Francia elegida por el demandante, si éste reside en el extranjero; nombre del representante del demandante,...) (arts. 836 y 56). La vista se fijará al menos quince días después (art. 837), debiendo alguna de las partes ratificar el auto de comparecencia al menos ocho días antes de la audiencia (art. 838). En caso de urgencia, el Juez puede acortar estos plazos (art. 839). Ya en la vista, el Juez intentará conciliar a las partes (art. 840) y si éstas no se avienen, se pasa inmediatamente a juicio, o en caso de no ser posible, se fija una nueva vista, avisando entonces el Secretario por escrito a las partes que no hubieran sido ya avisadas verbalmente (art. 841). El procedimiento es oral, de forma que las pretensiones que las partes ya habían formulado por escrito, son anotadas o consignadas en un proceso verbal (art. 843). El Juez invitará a las partes a hacer las alegaciones y presentar los documentos que estimen oportunos, y resolverá (art. 844).

Hemos dicho que el proceso puede también iniciarse mediante demanda conjunta de ambas partes o presentación voluntaria de éstas ante el Juez (art. 845) para la celebración de un proceso verbal, el cual seguirá las normas de la demanda conjunta del art. 57 (art. 846). De nuevo en este caso, el Juez intentará primero conciliar a las partes.

En casos de urgencia, el Juez del tribunal de instancia podrá, dentro de los límites de su competencia, ordenar las medidas necesarias para evitar algún daño inminente o molestia manifiestamente ilícita (art. 848 y ss.).

Por último, cabe apelación ante la Corte de este nombre (art. R. 211-1 del Código de Organización Judicial), y posterior casación ante la Corte de este otro nombre para las decisiones dictadas en última instancia (arts. 604 y ss.).

B- ITALIA¹⁰¹

El Código de Procedimiento Civil italiano (Codice di Procedura Civile), promulgado por RD nº 1443, de 28 de octubre de 1940, en vigor desde 21 de abril de 1942 (y posteriormente reformado), entre los procesos de cognición (Libro II), establece un proceso-tipo llamado procedimiento ante el tribunal (Título I “Del procedimento davanti al tribunale”, arts. 163 a 310), el cual desarrolla en siete Capítulos a través de una introducción, instrucción y decisión de la causa. A continuación, regula dos procesos más sencillos, los procedimientos ante el pretor y ante el juez de paz (Título II “Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace”, arts. 311 a 322).

El Cap. I (arts. 311 a 313) de este Título II contiene las disposiciones comunes a ambos procedimientos. El art. 311 remite al procedimiento ante el tribunal (proceso-tipo) para lo no regulado en los procedimientos ante el pretor y el juez de paz, sin embargo, se dictan normas particulares para regular algunos aspectos de estos dos últimos, debido al carácter monocrático del Juez (ya no se trata de un órgano colegiado) y al limitado valor de

¹⁰¹ IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, commentato con la Giurisprudenza a cura di Francesco Bartolini e Pietro Dubolino. Editrice La Tribuna, 4ª edizione, 1995, Piacenza; DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, Serie: Manuali Giuridici. Edizioni Simone, 1992; Codice di Procedura Civile, spiegato Articolo per Articolo, e principali leggi complementari, con formule dei principali atti, aggiornato al D. Lgs. 19-2-1998, nº 51

las controversias en ellos discutidas, ya que en los arts. 7 y 8 se fija la competencia de estos dos Jueces (de los de paz y del pretor, en 5 y 50 millones de liras respectivamente). El art. 312, sobre los poderes instructores del Juez, dispone que éste podrá ordenar de oficio la prueba testifical, cuando las partes, en la exposición de los hechos se hubieran referido a personas que pudieran conocer la verdad. Por último, el art. 313 establece que, interpuesta querella por falso documento relevante para la decisión, el pretor o juez de paz suspenderá el juicio hasta que se resuelva el relativo procedimiento, o actuará conforme al art. 225 sobre el procedimiento ante el tribunal.

El Cap. II (arts. 314 y 315) se ocupa de las normas especiales para el procedimiento ante el pretor, preveyéndose dos modalidades de pronunciamiento de la sentencia. La primera es recogida en el art. 314, según el cual el pretor, una vez terminada la instrucción y tratamiento de la causa, invita a las partes a exponer y cambiarse conclusiones y memorias de réplica, depositando su sentencia en la Secretaría dentro de los treinta días siguientes. En la segunda, según el art. 315, el pretor, si no ha actuado conforme al artículo anterior, puede ordenar la inmediata discusión oral de la causa, al término de la cual pronunciará sentencia, dando lectura del fallo y de una concisa exposición de las razones de hecho y de derecho de la decisión. En este caso, la sentencia se entiende publicada e inmediatamente depositada en Secretaría.

El Cap. III regula las especialidades del procedimiento ante el juez de paz. La demanda puede proponerse mediante citación a comparecencia a audiencia fija y también verbalmente, en cuyo caso se notifica a costa del actor para la comparecencia a la vista (art. 316). Debe contener simplemente la indicación del Juez y de las partes, la exposición de los hechos, la indicación del objeto y de la causa petendi (no de los fundamentos de

(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado). I Codici Esplicati, collana ideata e diretta

derecho ni de la indicación de las pruebas) (art. 318 párr. 1º). Las partes pueden acudir a juicio personalmente sin necesidad de Procurador en las causas de hasta 1 millón de liras, y en otros casos, cuando estén autorizadas a ello. También pueden hacerse representar por cualquier persona con mandato escrito, el cual comprende también poder para transigir y consentir la conciliación (art. 317). Los términos para comparecer se reducen a la mitad respecto a los previstos ante el tribunal y el pretor (art. 318 párr. 2º). La constitución de las partes puede hacerse tanto en la Secretaría como en la audiencia, depositando la citación o presentándola al Juez (art. 319). En general, las partes tienen menos cargas y más amplios poderes. Así, por ejemplo, no es necesaria la contestación a la demanda (“comparsa di risposta”), y se dice que, a causa del menor rigor formal, las partes pueden más fácilmente modificar pretensiones, excepciones y conclusiones. En la primera audiencia el juez de paz interroga libremente a las partes e intenta la conciliación. Si se avienen, se sigue el artículo 185 en su último párrafo (se forma proceso verbal de lo convenido y éste constituye título ejecutivo), pero si no el Juez invita a las partes a precisar definitivamente los hechos en que se basa la demanda, defensas y excepciones, a presentar los documentos y a pedir los medios de prueba que estimen pertinentes. El Juez puede fijar por una sola vez nueva vista para ulteriores prácticas y solicitudes de prueba (art. 320). Cuando considera la causa madura para la decisión, el juez de paz invita a las partes a precisar sus conclusiones y discutir la causa, depositando la sentencia en la Secretaría del Juzgado dentro de los quince días siguientes (art. 321). La sentencia es recurrible en apelación en treinta días ante la Corte de este nombre, siempre y cuando la sentencia del juez de paz no haya sido dictada en equidad (art. 339), y después cabe casación ante esa otra Corte (art. 360). La sentencia en equidad es permitida por el art. 113 para causas de escaso valor (hasta dos millones)

conocidas por el Juez de Paz, siendo entonces la misma inapelable. La equidad, en general, es aceptada para la primera y segunda instancia cuando se trate de derechos disponibles de las partes y éstas así lo soliciten de común acuerdo (art. 114).

Sin embargo, la reforma operada por el D. Lgs. 19-2-1998 n° 51, que institucionaliza el juez único de primer grado, deroga lo que acabamos de decir respecto al pretor, pasando el conocimiento de estos asuntos al procedimiento ante el tribunal. Esta reforma está vigente pero no es todavía eficaz, a la espera de que el Parlamento apruebe la Ley que fija la fecha de la misma.

C- PORTUGAL¹⁰²

El Código de Processo Civil portugués, aprobado por Decreto-Ley n° 44.129, de 28 de diciembre de 1961, y posteriormente reformado, establece un sistema procesal muy parecido al español.

En primer lugar, su art. 461 dispone que los procesos pueden ser comunes o especiales. Entre los primeros, que se regulan en el Tít. II ("Do processo de declaração", arts. 467 a 800) del Libro III ("Do processo"), encontramos el proceso ordinario (Subtítulo I, arts. 467 a 782), el proceso sumario (Subtítulo II, arts. 783 a 792) y el proceso sumarísimo (Subtítulo III, arts. 793 a 800) (art. 462).

En segundo lugar, se regula la competencia de los distintos tribunales: los tribunales inferiores conocerán de los asuntos de hasta el valor expresamente designado (art. 68), en los lugares en que los haya; los tribunales de comarca en primera instancia de los asuntos a partir del valor del que conocen los inferiores y de cualquier valor si en ese lugar no existe tribunal inferior (art. 69), y en segunda instancia de los recursos

presentados contra decisiones dictadas por los inferiores (art. 70); los tribunales de 2ª instancia (“as Relações”) de todos los asuntos en segunda instancia seguidos en primera en proceso sumario ante los tribunales de comarca (arts. 71 a) y 462.1); y por último, el Tribunal Supremo conocerá de los recursos interpuestos contra decisiones dictadas por “as Relações” y la segunda instancia de los asuntos seguidos en primera en proceso ordinario ante los tribunales de comarca (arts. 72 a) y 462.1).

Según lo anterior, el proceso ordinario se emplea si el valor de la causa excede del de la alzada ante “a Relação”, el sumario si no excede de dicho valor y el sumarísimo si este valor no pasa de la mitad del fijado para la alzada ante el tribunal de comarca y la acción se destina al cumplimiento de obligaciones pecuniarias, a indemnización por daño o a entrega de cosas muebles (art. 462.1). Todos estos valores se establecen en el art. 20º de la Ley nº 82/1977, de 28 de diciembre, Orgánica de los Tribunales.

Ocupándonos ya del proceso sumarísimo, por padecer éste menos formalismos que el resto de los procesos comunes, y por tanto encontrar en él mayores similitudes con el juicio verbal español objeto de nuestro estudio, debemos decir que el art. 464 dispone como supletorias de este sumarísimo las normas del proceso sumario primero y, en su defecto, las del proceso ordinario. Y entrando en su regulación particular, contenida en ese Libro III Tit. II Subt. III (arts. 793 a 800) ya mencionados, en este proceso sumarísimo el actor, en su petición inicial, expondrá su pretensión y los fundamentos de ella, indicará el nombre y domicilio del demandado (“reo”) y los testigos y requerirá la constitución (“depoimento”) de la parte (art. 793). A continuación el demandado es citado para, en plazo de ocho días, contestar, bajo pena de ser condenado inmediatamente a lo pedido, acompañando a la contestación la lista de testigos y pidiendo su constitución en parte (art.

¹⁰² CODIGO DE PROCESSO CIVIL, anotado por Fernando Luso Soares, Duarte Romeira Mesquita, Wanda

794). Si el demandado no contesta se le condenará a lo pedido, siguiéndose mientras tanto lo dispuesto en el art. 784 respecto a los efectos de la falta de contestación en el proceso sumario, salvo si se trata de incapaces o personas colectivas, en cuyo caso se siguen las reglas generales; si el demandado contesta, la contestación se notifica al actor y se fija el día para la vista en los diez siguientes (art. 795). En el art. 796 se establecen las reglas para la audiencia y los efectos de la no comparecencia de las partes: si el demandado, habiendo contestado, no comparece a la vista ni se hace representar, será condenado a lo pedido, salvo que justifique la causa o pruebe, por documento suficiente, que la obligación no existe; si falta el actor y no justifica la falta, puede el demandado pedir la absolución de la instancia; comparecidos los dos, el Juez intentará conciliarlos, y si no se consigue interrogará a los testigos, que no pueden exceder de seis por cada parte; los abogados pueden hacer una breve alegación oral y se dicta sentencia verbal, sucintamente fundamentada; si el demandado no ha contestado o no comparece, se juzga la causa con o sin su intervención; los testigos pueden ser presentados directamente por las partes, sin necesidad de notificación, aunque pueden las partes así pedirlo; el Juez puede practicar diligencias para mejor proveer suspendiendo el juicio y fijando día para practicar aquéllas, aunque el juicio debe terminar en quince días; cualquier valoración es hecha por un único perito. En cuanto a los recursos que en este proceso se susciten para ante el tribunal de comarca, a estos se les aplicará, en cuanto aplicable, lo dispuesto para los seguidos ante “a Relação”, salvo lo expresamente prescrito a continuación (art. 797). Si se interpuso apelación pero el Juez entiende que lo que cabe es un recurso de “agravo”, conocerá él mismo, pidiendo a las partes que hagan sus alegaciones en ocho días si todavía no lo habían hecho; sin embargo, si entiende que no puede conocer del recurso, expondrá

sucintamente sus razones, dando 48 horas al abogado del recurrente para que diga lo que estime oportuno y decidiendo la cuestión previa (art. 798). El plazo para la sentencia final del recurso es de quince días (art. 799), contra la cual no cabe recurso, salvo los casos del art. 628.2 (violación de las reglas de la competencia internacional, competencia en razón de la materia o funcional, cosa juzgada), en los que cabe recurso de “agravo” a interponer directamente ante el Tribunal Supremo (art. 800).

D- IBEROAMERICA

1- MEXICO¹⁰³

El proceso civil ordinario más sencillo y abreviado que se establece en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es el juicio sumario (Tit. VII Cap. I, arts. 430 a 442), cuya regulación, en el párrafo 1º del art. 442, se remite supletoriamente a la del juicio ordinario. Sus diferencias con éste último consisten en:

- El juicio sumario es siempre oral (art. 435), el ordinario puede ser escrito u oral (art. 299).
- En el sumario no puede existir término extraordinario de prueba, en el ordinario sí (arts. 301 y 442).
- En el ordinario hay término especial para ofrecer pruebas, en el sumario se ofrecen en los escritos de demanda y contestación (arts. 290 y 434).

¹⁰³ CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, comentado y concordado, con Jurisprudencia, Tesis y Doctrina, por Jorge Obregón Heredia. Editorial Porrúa, 3ª edición, 1987, México.

- En los sumarios sólo pueden admitirse la compensación y la reconvención cuando el objeto o materia sobre las que versen deba tramitarse en juicio sumario.
- Las apelaciones en los juicios sumarios son admitidas sólo en el efecto devolutivo, en tanto que en el juicio ordinario puede ser admitido este recurso en ambos efectos (arts. 695 y 700).
- El juicio sumario sólo interrumpe su procedimiento por las excepciones de incompetencia y la falta de personalidad (art. 438).
- En los sumarios, la sentencia definitiva se debe pronunciar en la misma audiencia, o en un plazo de tres días, en cambio, en el juicio ordinario, se debe dictar en un plazo de ocho días, después de la citación para definitiva (arts. 425, 435 y 439).
- En los juicios sumarios los incidentes son resueltos en la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia (art. 440).
- En el sumario no existe el término de gracia, sólo como caso único, lo puede conceder el juez en los juicios ejecutivo e hipotecario (art. 442).

También se prevé la existencia de una especialidad para determinadas materias (las de las fracciones VI, VII y XVI del art. 430) del juicio sumario, llamado “juicio sumarísimo”, en cuyo caso no se requieren más solemnidades que oír a las partes, primero al demandante o actor, en seguida los demandados, recibir en ese orden sus pruebas en el acto mismo, y dictar allí la resolución concisa; si estuviere el secretario, procederá el juez, con dos testigos de asistencia; todo el juicio se hará constar en una sola acta, cuando termine en un solo día (art. 432).

2- ARGENTINA¹⁰⁴

Su Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 17.454, recoge en el Libro II Tít. I Cap. I (arts. 319 a 322) tres clases de procesos de conocimiento ordinarios: juicio ordinario, juicio sumario y juicio sumarísimo, remitiéndose supletoriamente los dos últimos a su anterior respectivo. También recoge los casos en que estos se aplican.

La regulación del juicio sumarísimo se encuentra en el Tít. III Cap. II (al final del Libro II), en el art. 498: “En los casos en que se promoviere juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiere, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso sumario, con estas modificaciones: 1) no serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvención; 2) todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de la demanda, y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que serán de cinco días; 3) para la prueba que sólo pueda producirse en audiencia, ésta deberá ser señalada para dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo; 4) no procederá la presentación de alegatos; 5) sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiere ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo; 6) en el supuesto del

¹⁰⁴ CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, y normas complementarias; textos ordenados, anotados y actualizados por el Dr. Antonio José Giangrasso. Ediciones Depalma, 11ª edición, 1989, Buenos Aires.

art. 321, inc. 2, la demanda rechazada, únicamente podrá reproducirse si tuviere lugar un nuevo acto, cuya reparación no pueda obtenerse por vía de ejecución de sentencia.”

III- SISTEMA JURIDICO GERMANICO: ALEMANIA¹⁰⁵

La Zivilprozessordnung (ZPO) alemana, de 30 de enero de 1877, con sus modificaciones posteriores, regula solamente dos tipos de procesos ordinarios, a los que no asigna ninguna denominación, sino solamente procedimiento ante los Landgerichte (“Verfahren vor den Landgerichten”) y procedimiento ante los juzgados de primera instancia (“Verfahren vor den Amtsgerichten”), con la particularidad de que, a falta de una parte general o común, todos los momentos del proceso se ordenan en torno al primero de dichos procedimientos por lo que al regular el juicio ante los juzgados de primera instancia hay una remisión al otro, más diez artículos propios (arts. 495 a 510 c).

Los tribunales que componen la organización alemana, en orden de menor a mayor importancia jerárquica, son, en primer lugar, los tribunales de primera instancia que, por el lugar que ejercen sus funciones, cabe llamar municipales (“Amtsgerichte”), atribuyéndoseles las causas de valor inferior; en segundo lugar, los tribunales territoriales (tribunales colegiados de tres magistrados), al frente de cada distrito (“Landgericht”), con atribuciones fundamentalmente de primera instancia en Sala Civil o Mercantil, y órgano de apelación respecto de los Amtsgerichte en la mayoría de los asuntos; en tercer lugar, los tribunales territoriales superiores (“Oberlandesgericht”), órganos de apelación respecto de los “Landgerichte” y también de los citados “Amtsgerichte” cuando deciden asuntos de paternidad y filiación y Derecho de familia, como también son órganos de tercera instancia

¹⁰⁵ GUASP. Derecho ...cit., págs. 90 y ss.; PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Leonardo; Tratado de Derecho Procesal Civil (Proceso declarativo y proceso de ejecución), Tomo I, págs. 170 y ss.. Editorial Aranzadi, 2ª edición, 1985, Pamplona; ZIVILPROZESSORDNUNG, Beck-Texte im dtv, 1997, München.

en asuntos decididos en apelación de los “Amtsgerichte” por los citados “Landgerichte”; en cuarto lugar, el Tribunal de la Federación o Tribunal Supremo (“Bundesgerichtshof”) conoce principalmente de los recursos de casación; todo ello sin perjuicio de la existencia de diversos tribunales especiales.

TITULO TERCERO
FUNDAMENTO JURIDICO, PRINCIPIOS, TIPOS, NATURALEZA JURIDICA Y
CONCEPTO
DEL JUICIO VERBAL

I- INTRODUCCION

En este Título Tercero, trataremos de centrar dogmáticamente el juicio verbal en nuestro ordenamiento procesal civil.

Para ello, estudiaremos: su fundamento jurídico (base sobre la que estriba el Derecho¹⁰⁶), por referirse éste a las razones y motivos de la existencia del juicio verbal; los principales principios que lo informan (criterios fundamentales y de carácter técnico que inspiran las normas de detalle que regulan los diversos tipos del proceso civil¹⁰⁷); sus distintos tipos (grados en que se distribuyen elementos de una misma condición o especie¹⁰⁸); su naturaleza jurídica (esencia y propiedades características de cada concepto jurídico¹⁰⁹); y por fin, su concepto (definición en la que se establece con exactitud, claridad y concisión el significado de alguna materia jurídica¹¹⁰), al que podremos llegar después del análisis de los anteriores aspectos.

¹⁰⁶ OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliastrea SRL. 1982, Buenos Aires.

¹⁰⁷ RIBÓ DURÁN, Luis; Diccionario de Derecho. 1995, Barcelona.

¹⁰⁸ Ver nota nº 106.

¹⁰⁹ Ver nota anterior.

II- FUNDAMENTO JURIDICO

El fundamento jurídico o razones históricas y actuales de la existencia del juicio verbal son de tres clases: de carácter subjetivo, objetivo y de la actividad. Analizaremos la aparición de cada una de las tres a lo largo de la Historia hasta el momento actual.

A- RAZONES DE CARACTER SUBJETIVO

Son los motivos, que centrándose en la cualidad de los sujetos, cimientan la necesidad de un tipo de proceso en el que se acorten los plazos y se supriman formalidades. Pueden hacer referencia al órgano jurisdiccional y a las partes.

1- ORGANO JURISDICCIONAL

Se ha ido viendo como este juicio ha sido casi siempre competencia de los Jueces más inferiores. En concreto, conocían de él: los jueces pedáneos y defensor de la ciudad en el Derecho Romano; magistrados o próceres inferiores en el Derecho Germánico; defensores, vilicos o prepósitos y pacis adsertores, en el Fuero Juzgo; alcaldes en el Fuero Real, Las Partidas, Ordenanzas Reales de Castilla, Ley de 3 de marzo de 1543, Constitución de 1812, RD de 1835 y RO de 1856; Cónsules en el Consulado del Mar; Consejo Real en la Ley de 1480; Prior y Cónsules de Burgos en la Ley de 1494; Prior y Cónsules en las Ordenanzas de Bilbao y de Burgos; alcaldes de cuartel de Madrid en la Real Cédula de 1768; Jueces de Primera Instancia o alcaldes en el Reglamento de 1812; Tribunales de Comercio o Juzgados ordinarios en el C.Co. de 1829; alcaldes y tenientes de alcalde o Jueces de Primera Instancia en el Reglamento de 1835; Jueces de Paz en la LEC de 1855, RD de 22 de octubre de 1855, RD de 1856 y Ley de Bases de 1944; Jueces

¹¹⁰ Ver nota anterior.

Municipales en la Ley de 1870, Orden de 1870, LEC de 1881 y RD de 1923; Tribunales Municipales en la Ley de 1907; Tribunales Industriales en la Ley de 19 de mayo de 1908; Juzgados de Primera Instancia en la otra Ley de 1908; Juzgados de Paz o Municipales y Comarcales en el RD de 1947, Decreto de 1952 y Ley de 1966; Juzgados de Paz o Juzgados de Distrito en la Ley de 1984; y Juzgados de Paz o de Primera Instancia en la Ley de 1992. Por su parte, también en el Derecho Comparado conocen del juicio ordinario más abreviado los órganos inferiores: el Tribunal de Instancia en Francia, el Juez de Paz y el Pretor en Italia, los tribunales inferiores o los de Comarca en Portugal, y los Jueces de Primera Instancia en Alemania.

2- PARTES

En algunas Leyes, sobre todo en los primeros Fueros, este juicio surge por la especial cualidad de las partes (a este motivo responde la “*ratione miserabilium personarum*” de la que habla Fairén¹¹¹). De esta forma: en el Fuero Juzgo se decía que los defensores conocerían de los pleitos entre labradores y campesinos y los vilicos o prepositos de las diferencias entre los vecinos de las villas o lugares subalternos; en Las Partidas se establecía un juicio más abreviado para las reclamaciones entre personas pobres y un juicio de equidad a propósito de los peregrinos y romeros; con la Ley de 1480 se incorpora a Castilla el juicio rápido mercantil, para conocer precisamente “de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader”; y la Ley de 1908 establece un procedimiento especial dentro del tipo del juicio verbal, para los asuntos entre patrono y obreros.

B- RAZONES DE CARACTER OBJETIVO

Son las razones relacionadas con el objeto del juicio, siendo la más frecuente el hecho de que se trate de asuntos de pequeña entidad, es decir, de escasa importancia o valor (son las “*ratione parva quantitatis*” y “*ratione parvii prejudicii*” mencionadas por Fairén¹¹²). Así, se conoce en juicio rápido hasta estas cantidades: 300 sueldos en el Derecho Romano; pleitos de corta entidad, sin especificar la cuantía, en el Derecho Germánico; 500 áureos en el Fuero Juzgo; 10 maravedíes en el Fuero Real y Las Partidas; 20 sueldos en el Fuero in Causis aragonés; 20.000, 30.000 y 40.000 mrvs., para las apelaciones ante los Regimientos de los pueblos, en una Ley de 1480, y ante los Ayuntamientos en las Leyes de 1604 y 1778, respectivamente; 1.000 mrvs. en la Ley de 1534, establecido este tope posteriormente en 400 y 1.000 mrvs. de nuevo, en la Nueva Recopilación; 500 reales en España y 100 pesos en Indias, en la R. Resolución de 1796 y en el Reglamento de 1812; 1.000 o 500 rs. en el C.Co. de 1829 y L.E. Mercantil de 1830; 200 rs. en el RD de 1835; 200 y 600 rs. en España y Ultramar respectivamente, o 500 y 2.000, en el Reglamento de 1835; 600 rs. en España y 600 escudos en Cuba y Puerto Rico, en la LEC de 1855; 250 pts. en la Ley de 1870 y LEC de 1881; 500 pts. en la de 1907; 1.000 pts. en el RD-Ley de 1924; 250 pts. en la Ley de 1944; 250 o 1.000 en el RD-Ley de 1947 y en el Decreto de 1952; 250 o 10.000 en la Ley de 1966; 5.000 o 50.000 en la de 1984; y 8.000 u 80.000 pts. en la Ley de 1992. Ya en el Derecho Comparado también se trata de causas de valor inferior. En concreto, las cuantías son: en Francia, 13.000 Francos si es en última instancia, o 30.000 si es en 1ª; y en Italia, 5 millones de Liras si conoce el Juez de Paz, o 20 millones si conoce el Pretor.

¹¹¹ FAIRÉN GUILLÉN, El ...cit., págs. 46 y ss. y nota nº 73.

¹¹² Ver nota anterior.

También puede suceder que la razón objetiva, en lugar de centrarse en la escasa cuantía, se centre en la materia del pleito: en los asuntos sobre mercaderías y demás materias mercantiles, en todas las Leyes que adoptan el juicio verbal mercantil (Ordenanzas de Valencia, Consulados de Palma de Mallorca y de Barcelona, Consulado del Mar, Ley de 1494, Ley de 1534, Ordenanzas de Bilbao y de Burgos, C.Co. de 1829 y L.E. Mercantil de 1830); en asuntos sobre alcavalas, en el Ordenamiento de Montalvo; en asuntos laborales industriales en la Ley de 19 de mayo de 1908; y en asuntos sobre la nulidad de los préstamos con usura, si corresponde según la cuantía, en la Ley de 23 de julio de 1908.

Sin embargo, aparte de estas razones objetivas ya vistas, pueden existir otras, que, también de carácter objetivo, responden a diferentes finalidades: la de “meter paz entre las partes” por los mandaderos de paz del Fuero Juzgo; la de despachar los asuntos “a menos costa de las partes y bien de los hechos”, en la Ley de 1480; la de poner fin “a la malicia de aquellos que suplican por alongar los pleytos”, al establecer la fianza de las 1.500 doblas mediante la Ley de 1390; la de intentar desgravar al Consejo Real y evitar el gran coste y vejación de las partes, al prohibir la interposición de recursos en el Consejo, Audiencia o Chancillería, en las Leyes de 1480, 1604 y 1778; la de “evitar malicias” al no admitir escritos de Abogados, mejor averiguar la verdad al poderse pasar a la determinación y sentencia del asunto en cualquier momento en que se sepa la verdad, y evitar dilatar y molestar a las partes y pervertir la verdad y orden al prohibir la apelación de los autos interlocutorios, en las Ordenanzas de Bilbao y de Burgos, es decir, se persigue la finalidad de concentrar y averiguar la verdad material; la de evitar gastos y vejaciones a los demandados, al no consentir que se lleven las demandas de escaso valor a las Audiencias, en la otra Ley de 1534; la de ahorrarse gastos de Letrado y Procurador, en la de 1543; la de

“procurar la mayor economía posible”, en la Ley de Bases de 1855; la de unificar los fueros especiales en el ordinario al suprimir el juicio verbal mercantil, en el RD-Ley de 1868. Puede observarse como, para conseguir la mayoría de estas finalidades, se recurre a unas determinadas pautas procedimentales de tiempo y forma, que, a su vez, podrían dar lugar a razones de la actividad.

C- RAZONES DE LA ACTIVIDAD

Se trata de las razones relacionadas con la actividad procedimental, pudiendo hacer referencia al lugar, tiempo o forma de la misma. Sin embargo, la más predominante es la necesidad de urgencia y rapidez (“*ratione urgentia necessitatis*” citada por Fairén¹¹³), motivo en relación con el tiempo del procedimiento. Consecuencias directas de esta necesidad de rapidez son determinadas características de forma que se adoptan en casi todas las Leyes, como son la brevedad, simplicidad y oralidad en el procedimiento, y que a su vez, pueden constituir por sí mismas, también, motivos de la existencia del juicio verbal relacionados con la forma procedimental.

1- LUGAR

No existe ninguna razón, en ninguna Ley, para la adopción del juicio verbal, basada en el lugar en donde deba éste desarrollarse.

Lo único que se puede apuntar aquí es que el lugar donde se ha producido el daño será en general el criterio determinante del órgano competente, ya que será en ese lugar donde se conozca la causa (pero esto no debe confundirse con que sea el lugar el criterio determinante de la adopción del verbal).

2- TIEMPO

Ya hemos dicho que la necesidad de urgencia, rapidez y brevedad es el más común de los motivos basados en la actividad procedimental. Esta razón aparece en las siguientes Leyes: Las Partidas (“porque los pleitos pequeños se puedan librar mas aína, sin gran costa”, “los libren lo mas ayna, e lo mejor que pudieren e sopieren, sin escatima e sin alongamiento”); Consulado del Mar (“breve, sumaria y llanamente”); Ley de 1480 (“algunos negocios y causas civiles..., que brevemente, ..., se podrian expedir y despachar en el nuestro Consejo, sin hacer dellas comisión”); Ordenamiento de Montalvo (“que los libre sumariamente”); Ley de 1534 (“porque en los tales haya toda la brevedad”); Ordenanzas de Bilbao y Burgos (“deben determinarse los pleytos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente”, “procurarán atajar entre ellos el pleyto y diferencia que tuvieren con la mayor brevedad”); Ley de 1543 (“porque los pleytos se despachen brevemente”); Ley de Bases de 1855 (“que en la sustanciación de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias”); y Ley de Bases de 1880 (“que abrevie la duración de los juicios”).

3- FORMA

Son los motivos de la existencia del juicio verbal basados en la forma de la actividad procedimental. Así en: la Ley de 1480 (“y los ver y librar, y determinar simplemente y de plano, y sin estrépito y figura de juicio, solamente sabida la verdad”); el Reglamento de 1812 (“determinarán los negocios de semejante clase precisamente en

¹¹³ Ver nota anterior.

juicio verbal, y sin apelación ni otra formalidad que la de asentarse la determinación con expresión sucinta de los antecedentes... en un libro”).

Sin embargo, estas razones sirven además para asegurar determinados fines (que como ya vimos constituían motivos objetivos): en las Ordenanzas de Bilbao y de Burgos, con el fin de evitar malicias, se dice “con que no sean dispuestas, ordenadas ni firmadas de Abogados”, con el de mejor averiguar la verdad que “en cualquier estado que se sepa la verdad, se ha de poder determinar y sentenciar, y para ello tomar de oficio los testigos que convengan, y los juramentos de las partes que les parezcan a los Jueces”, y con el de evitar los inconvenientes y perjuicios que resultan de dilatar y molestar a las otras partes y pervertir la verdad y orden del procedimiento, que “ninguna pueda apelar de ante Prior y Cónsules, sino de sentencia definitiva, o auto interlocutorio que tenga fuerza de tal, o que de él resulte daño irreparable”; y en la Ley de 1543, con el fin de ahorrarse gastos de Letrado y Procurador se dispone que “la demanda puesta de palabra, y no por escrito, se admita para excusar costas”.

Estas razones están también íntimamente ligadas con las de tiempo, de forma que, a más de razones de la existencia del juicio verbal en sí mismas, se las puede considerar como los medios para conseguir las segundas. Así sucede en: Las Partidas (“pero pleytos y ha que pueden ser juzgados sin escrito, por palabra tan solamente”); Consulado del Mar (“llanamente, sin estrépito y figura de juicio, atendida sola la verdad del hecho, según se ha acostumbrado a hacer a uso y estilo del mar”); Ordenamiento de Montalvo (“sabida solamente la verdad, y que todavía el Alcalde no reciva la demanda por escripto”); Ley de 1494 (“según estilo de mercaderes, sin dar lugar a largas ni dilaciones ni plazos de abogados”); Ley de 1534 (“no haya órden ni forma de proceso, ni tela de juicio ni solemnidad alguna; salvo que, sabida la verdad sumariamente, ... y que no se asiente por

escrito sino la condenación ó absolución; y que no se admitan escritos y alegaciones de Abogados; y que... no haya apelación ni restitución...”); Ordenanzas de Bilbao y Burgos (“la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados, ..., ni guardar la forma o orden del Derecho”, “oyéndolas verbalmente”, “por estilo de entre mercaderes, sin abrir nuevos términos para dilatorias ni probanzas, ni admitir libelos ni escritos de Abogados”); Ley de 1543 (“sin sujeción a formalidades”); Ley de Bases de 1855 (“adoptar las medidas más rigurosas para que en la sustanciación de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias para la defensa de los litigantes y el acierto en los fallos”); Ley de Bases de 1880 (“adoptar una tramitación que abrevie la duración de los juicios, tanto cuanto permitan el interés de la defensa y el acierto de los fallos...”).

III- PRINCIPIOS

Después de establecer el fundamento jurídico o razones de la existencia del juicio verbal, podemos referirnos a los principios que lo informan, destacando sólo los principales de este juicio, ya que junto a estos se encuentran lógicamente también los principios jurídico-naturales propios de todo proceso (imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional, dualidad, igualdad y contradicción) y los técnicos de cualquier proceso civil (principio dispositivo, impulso de oficio, principio de preclusión atenuado por el de eventualidad, publicidad...).

A- ORALIDAD

Este principio atiende a la forma de materializarse las actuaciones procesales. Es la nota que mejor distingue a este juicio, y a ella se debe la denominación legal de “juicio

verbal”. No obstante, de acuerdo con el art. 120.2 CE, es este principio de oralidad el que debería predominar en todo proceso.

B- CONCENTRACION

La oralidad lleva aparejada la concentración procesal, ya que la sustanciación del juicio debe realizarse mediante una única comparecencia o audiencia oral. Por tanto, la Ley aspira a que en una sola audiencia se realice todo el juicio, aunque se admiten dos excepciones que desvirtúan la unidad de acto (la imposibilidad de practicar en el acto alguna de las pruebas propuestas y admitidas y la concesión de plazo extraordinario de prueba).

C- INMEDIACION JUDICIAL

La oralidad y concentración conllevan irremediablemente la inmediación judicial, encaminada a la relación directa de los litigantes con el Juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. Es decir, constituye el medio de que el órgano jurisdiccional conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, ya que todas ellas han de realizarse en su presencia.

D- INFORMALIDAD O SENCILLEZ

Se trata de la supresión de formalidades innecesarias, de forma que se apura al máximo las aspiraciones de economía de trámites.

Este principio de informalidad o sencillez de trámites tiene su fundamento en que se trata de asuntos de pequeña cuantía y especial necesidad, como hemos ido apreciando a lo largo de la evolución histórica del juicio verbal. Ello nos hace pensar entonces que

quizás (al igual que en muchos de sus antecedentes históricos procesales) deberían usarse en el criterios de equidad para la resolución del conflicto (aunque tomando las medidas necesarias para garantizar la audiencia y la defensa de las partes), sobre todo cuando resulta competente un Juez de Paz, debido a su carácter de Juez lego.

E- CELERIDAD O BREVEDAD

Se acortan además los plazos, hasta llegar también a un máximo de economía de tiempo.

F- ECONOMIA EN SENTIDO Estricto

La sencillez y la brevedad facilitan la consecución de la economía en el coste del proceso.

IV- TIPOS

A- INTRODUCCION

El ordenamiento español recoge numerosos procesos civiles¹¹⁴, que pueden clasificarse en atención a distintos criterios:

¹¹⁴ En relación a la proliferación de diversos procesos civiles pueden consultarse varios autores: FAIRÉN GUILLÉN, Víctor; Reducción y simplificación de los tipos procesales, en Revista de Derecho Procesal, 1954, pág. 145; El juicio ordinario, los plenarios rápidos y los sumarios, en "Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1955, pág. 373; Juicio ordinario, plenarios rápidos, sumario y sumarísimo, en "Temas del ordenamiento procesal", Madrid, 1969, pág. 823; La sistematización de los procedimientos declarativos españoles, en la misma obra, pág. 747; El proceso ordinario, sumario y sumarísimo, en Revista de Derecho Judicial, 1969, núm. 37, pág. 11; GUASP, Jaime; Reducción y simplificación de los procesos civiles especiales, en Anuario de Derecho Civil, 1951, pág. 411; HERCE QUEMADA, V.; La proliferación de tipos procedimentales en primera instancia, en Revista de Derecho Procesal, 1965, III, pág. 119; MUÑÍZ PECES, Reducción de los tipos procedimentales civiles (reforma procesal), en Revista de Derecho Procesal, 1961, pág. 211.

- en función de lo que se solicita del órgano jurisdiccional: declarativos, si se solicita una declaración de voluntad; de ejecución, si se solicita una manifestación de voluntad;
- en función del objeto del proceso: ordinarios, cuando se utilizan para hipótesis generales; especiales, cuando tienen un objeto procesal específico¹¹⁵;
- según el efecto que la sentencia produzca: plenarios, si la sentencia produce pleno efecto de cosa juzgada material; sumarios, si no lo produce plenamente, sólo limitado;
- en función de la extensión del conflicto: singulares, si sólo pretenden la satisfacción de pretensiones de carácter particular; universales, si afectan a todo un patrimonio.

Hecha esta breve clasificación general (meramente orientativa), hemos de remitirnos a los tipos de juicio verbal.

Además del juicio verbal ordinario, existen varios procesos especiales que siguen su procedimiento, con o sin especialidades. Estos procesos especiales son de aplicación preferente sobre los ordinarios, ya que lo especial prima sobre lo general (art. 481 LEC), salvo si son sumarios, en cuyo caso podrá el demandante elegir entre el especial o el ordinario que corresponda.

A continuación trataremos primero los procesos especiales que remiten al juicio verbal^{*1}, para pasar después al juicio ordinario.

¹¹⁵ Existen numerosas monografías relativas a los procesos civiles especiales, como por ejemplo las de MONTÓN REDONDO, Alberto; *Procedimientos Civiles Especiales*. Ediciones Universidad de Salamanca, 1982; TOMÉ PAULE, José; *Lecciones de Procesos Civiles*. Ed. Colex, 2ª edición, 1998, Madrid; entre otras muchas.

^{*1} En el Proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Pleno del Congreso el 23 de septiembre de 1999, la mayoría de estos procesos especiales han dejado de serlo y se conocen entonces estos supuestos a través de los procesos declarativos, es decir, a través del Juicio Ordinario o a través del Juicio Verbal.

B- PROCESOS ESPECIALES QUE REMITEN AL JUICIO VERBAL

Pueden remitir al juicio verbal sin más especificaciones o a aspectos concretos del procedimiento, estableciendo especialidades para el resto del mismo.

En todo caso, como procesos especiales que son, sus regímenes jurídicos no se determinan en función de la cuantía (como sucede en el juicio verbal ordinario), sino según razones jurídico-materiales. Debido a esto, aunque alguno de ellos se remita al procedimiento del juicio verbal en bloque, no hay que olvidar que nos encontramos ante hipótesis jurídico-materiales concretas, por lo que la aplicación de dicho procedimiento no está exenta de matizaciones (pues de otro modo el legislador no hubiera creado para ese caso un proceso especial, permitiendo entonces la aplicación del ordinario que correspondiera en toda su extensión), sobre todo en cuestión de competencia, postulación y recursos (así por ejemplo, al no aplicarse la división por cuantías, si no se especifica cosa en contrario, será competente el JPI, por ser el que tiene plenitud de jurisdicción de acuerdo con el art. 85.1º LOPJ), y serán por tanto estos tres aspectos los que destacaremos en cada uno de los procesos especiales que estudiaremos.

Se los puede clasificar, según traten sobre Derecho de Personas, de Cosas, de Obligaciones o de Familia¹¹⁶.

¹¹⁶ Clasificación tomada de ARAGONESES ALONSO, Pedro; Programa y Esquemas para su desarrollo del Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, págs. 8 y ss., 1998, Madrid.

1- DERECHO DE PERSONAS

- **Proceso sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen¹¹⁷ *2**

Se regula en la LO 1/1982, de 5 de mayo. Pese a que parte de la doctrina¹¹⁸ entiende que seguiría el procedimiento del juicio verbal, si corresponde según la cuantía de la indemnización solicitada y no se opta por el procedimiento incidental modificado por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (art. 9.1 y Disposición Transitoria 2ª) (por tanto, se adoptaría el verbal por motivos de pequeña cuantía y perjuicio), entendemos, junto a Guasp y Aragoneses Alonso¹¹⁹, que la opción hecha por el citado art. 9.1 a las “vías procesales ordinarias” debe interpretarse únicamente a favor del juicio de menor cuantía, por su carácter de proceso común (484.4º LEC) y por ser la acción principal ejercitada la solicitud de protección de los derechos de la personalidad, aunque pueda acumularse a ella la pretensión de resarcimiento del daño, por lo que la cuantía de la indemnización pretendida no puede estimarse como criterio determinante de la adecuación del procedimiento.

¹¹⁷ ARANZADI, Repertorio...cit., 1982, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 14 mayo 1982 (núm. 115), R. 1197, págs. 2016 a 2018.

^{*2} Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio ordinario (art. 249.1.2º del Proyecto mencionado), siendo siempre parte el Ministerio Fiscal, como corresponde a la tutela de un derecho fundamental, y teniendo su tramitación carácter preferente.

¹¹⁸ Así por ejemplo, DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Miguel Angel; Derecho Procesal Civil, Tomo IV, # 69, pto. 8, págs. 192 y ss.. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 4ª edición, 1995, Madrid: “Como expresamente dispone el art. 9.1 LO 1/1982, es opcional o facultativo seguir el cauce del procedimiento civil previsto en la Ley 62/1978, de manera que, con las singularidades relativas a legitimación, caducidad de la acción y medidas cautelares, la protección que brinda la LO 1/1982 se puede impetrar por “las vías procesales ordinarias”, que no son otras que los juicios declarativos que correspondan según la cuantía de la indemnización que se pretenda obtener y, en caso de no solicitarse indemnización ni otra condena económica evaluable, el juicio de menor cuantía (art. 484 LEC).”

¹¹⁹ GUASP DELGADO, Jaime; Derecho Procesal Civil, Revisada y adaptada a la legislación vigente por Pedro Aragoneses, Tomo II, pág. 54. Editorial Civitas, S.A., 4ª edición, 1998, Madrid.

- **Proceso para la rectificación de noticias inexactas**¹²⁰ *3

Se regula en la LO 2/1984, de 26 de marzo. Este proceso sigue los trámites del juicio verbal (entendemos que por razones de urgencia en la rectificación de la información difundida que pueda perjudicar a alguna persona, pues este daño es mayor cuanto más tiempo pase sin que se rectifique), aunque con algunas modificaciones (art. 6), pues su carácter especial (debido a que está creado para una hipótesis jurídico-material concreta) determina alteraciones sobre el régimen del juicio verbal ordinario.

De esta forma, la competencia objetiva se atribuye a los JPI (art. 4), y dentro de estos la competencia territorial viene determinada, efectivamente, a favor del Juzgado del domicilio del perjudicado o el del lugar donde radique el medio de comunicación, sin que puedan alterarse tales criterios por sumisión expresa o tácita de las partes, dado que el Juez de oficio y sin audiencia del demandado puede declarar in limine litis la inadmisibilidad de la demanda, si se considera incompetente (art. 5). En cuanto a la postulación, no es, en cambio, preceptiva la asistencia ni de Abogado, ni de Procurador (art. 5). En cuanto a los efectos jurídicos-procesales, debe tenerse en cuenta que el art. 8 de la LO establece que “no serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que dicte el Juez en este proceso, salvo el auto al que se refiere el párrafo segundo del artículo 5, que será apelable en ambos efectos, y la sentencia que lo será en un solo efecto, dentro de los tres y cinco días siguientes, respectivamente, al de su notificación, conforme a lo dispuesto en las secciones primera y tercera del título VI del libro II de la LEC. La apelación contra el auto a que se refiere el artículo 5 se sustanciará sin la audiencia del demandado”. Algún sector de la

¹²⁰ ARANZADI, Repertorio...cit., 1984, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 27 marzo 1984 (núm. 74), R. 841, págs. 1893 y 1894.

*3 Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo (art. 250.1.9º del Proyecto mencionado).

doctrina entiende que debería regir para estos recursos el régimen aplicable a los mismos en el juicio verbal ordinario¹²¹.

2- DERECHO DE COSAS

- **Interdictos**

Se ha discutido mucho el porqué de la protección posesoria (en cambio, nadie discute el de la protección de la propiedad), y ello porque, si la posesión es un simple hecho: ¿cómo es posible su protección por medios jurídicos?

Ihering clasifica las doctrinas que procuran contestar a esta cuestión en dos grupos¹²²:

A) Teorías absolutas: la principal es la de la inviolabilidad de la voluntad, sustentada por Gaus: “la posesión es la voluntad incorporada a la materia; es así que la voluntad personal merece defensa; luego la posesión merece defensa”.

B) Teorías relativas: las más importantes son dos:

a) Se basa en la necesidad de impedir la violencia, considerando los interdictos posesorios como acciones nacidas del delito o perturbación, cometidos contra el poseedor, y constituir también medidas de policía encaminadas a mantener el orden público, impidiendo a todos el tomarse la justicia por su mano.

b) La que funda la posesión en la propiedad, considerando la tutela posesoria como un complemento necesario de la protección del dominio.

¹²¹ GUASP, Derecho...cit., Tomo II, pág. 61.

¹²² Teorías tomadas de SENTÍAS BALLESTER, César: Tratado Práctico de Interdictos I. Epígrafe I-11-4, págs. 5 y 6. Colección Nereo, 1978, Barcelona.

En realidad, estas teorías se complementan entre sí y justifican ampliamente la protección posesoria, de lo que se deriva el reconocimiento de la figura del proceso posesorio, el cual no tiene en nuestro Derecho carácter común, pues no queda remitido a hipótesis generales e indeterminadas, sino a hipótesis jurídico-materiales concretas¹²³. Dicho de otra forma, la posesión es un fenómeno de orden jurídico sustantivo en cuya derivación procesal se encuentran manifestaciones especiales, apartadas, por lo tanto, del ámbito del proceso ordinario. Cabe hablar, pues, con absoluto rigor de concepto, de un proceso posesorio, como figura singular y especial.

En cuanto a la competencia objetiva para conocer de los interdictos, mucho se ha venido discutiendo por la doctrina en los últimos tiempos. Nada se dice en la Ley del grado judicial a que jerárquicamente corresponda intervenir en un interdicto; incluso, en alguna ocasión se ha pretendido deducir de este silencio la aplicabilidad de las reglas sobre competencia cuantitativa, lo cual llevaría a la consecuencia, antes de la promulgación de la actual LOPJ, de la posibilidad de que órganos de la Justicia Municipal interviniesen, hasta ciertos límites de valor, en un proceso interdictal¹²⁴. Mas esta opinión olvida que la división por cuantías opera sólo, normalmente, respecto a los procesos ordinarios y no respecto a los procesos especiales. Los procesos especiales, si nada se dice a este respecto, quedan atribuidos, en su primera instancia, al grado de los Jueces de este nombre, ya que en él reside lo que suele llamarse la plenitud de jurisdicción¹²⁵, en virtud de lo dispuesto en el art.

¹²³ GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 88 y ss..

¹²⁴ Tal opinión era por ejemplo, entre otros, la de ALÍO y CAMARGO, citados por ARAGONESES ALONSO, Pedro; en su Técnica Procesal. Proceso de Cognición y Juicio Verbal, Introducción, pág. 26. Editorial Aguilar, 1955, Madrid.

¹²⁵ Ya coincidían en esta opinión, en contra de los anteriormente mencionados, autores como SENTÍS MELENDO, MIGUEL Y ROMERO, MOSQUERA Y RODRÍGUEZ SOLANO, principalmente, citados de nuevo por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., Introducción, págs. 26 y ss.. Otros argumentos esgrimidos por estos autores a favor de la competencia del JPI frente a los Juzgados Municipales eran que en la regulación de la competencia de estos últimos no se hacía referencia a los juicios de interdictos, o que los

85.1º de la citada LOPJ. Por lo tanto, la competencia objetiva para un interdicto reside, en todo caso, en el grado de los JPI.

De lo anteriormente expuesto en relación a la competencia de los interdictos no debe quedar duda de que estos son procesos especiales (en la actualidad la doctrina es unánime) y así se deduce claramente del art. 481 LEC, en el que se dispone que “toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada en esta Ley tramitación especial, será ventilada y decidida en el juicio ordinario declarativo que corresponda”, pues los interdictos sí poseen una regulación específica en el Título XX del Libro II de la LEC (arts. 1631 a 1685). Sin embargo, tradicionalmente ha venido existiendo una amplia discusión sobre si los interdictos eran o no procesos especiales¹²⁶.

A diferencia de la mayoría de procesos especiales que siguen los trámites del juicio verbal ordinario (con matizaciones, como ya hemos visto), los interdictos no son procesos plenarios, es decir, la sentencia dictada no produce efecto de cosa juzgada material (esto mismo sucede, como veremos, en otros procesos que siguen en parte los trámites del verbal), y por tanto, puede volver a plantearse sobre la misma cuestión el proceso declarativo ordinario y plenario que corresponda según la cuantía, pues no se han querido hacer inatacables las consecuencias de una tramitación caracterizada por su indudable ligereza y sencillez (SSTS 2-1-1893, 8-5-1893, 20-12-1912, 11-7-1940, 24-11-1948, 4-6-1962, 12-3-1963...). Dicho de otro modo, los interdictos son procesos especiales sumarios, entendiendo ahora la sumariedad en sus dos sentidos, pues son tanto procesos sumarios

arts. 1670 y 1685 LEC, al tratar de las apelaciones de los juicios interdictales, hablan de su remisión a las Audiencias, lo que supone que en primera instancia conocen los Jueces de este nombre.

¹²⁶ Así se recogía en diversos artículos de la Revista de los Tribunales. Por ejemplo, ALÍO: El sentido común y los interdictos (1927) y Reflexiones sobre los interdictos (1928); BERNAL: El sentido común y los interdictos (1928); CAMARGO: El sentido común y los interdictos (1928) y Algo más sobre los interdictos y el sentido común (1928); MIGUEL Y ROMERO: El sentido común y los interdictos (1929); MOSQUERA: Los interdictos y la Ley de Enjuiciamiento Civil (1928); SENTÍS MELENDO: El sentido común y los

cuantitativos (de tramitación rápida y urgente, al igual que el resto de los procesos especiales que siguen los trámites del juicio verbal), como procesos sumarios cualitativos (no producen efecto de cosa juzgada material).

Debemos añadir, que el motivo de que sigan en parte la sustanciación del juicio verbal, es que se trata de procedimientos protectores, de índole contenciosa, que exigen un desarrollo urgente, preferencial y simple.

1. Interdicto de adquirir⁴

Pretende la obtención de la posesión basada en un título sucesorio. Se regula en los artículos 1633 a 1650 LEC. La competencia en este interdicto corresponde al JPI (art. 85.1º LOPJ) del lugar en que estén sitos los bienes o aquel en que radique la testamentaria o abintestato o el domicilio del finado (art. 63.14 LEC), regla que entendemos no es susceptible de modificación por sumisión. En cuanto a la postulación, rigen las reglas generales de los arts. 3 y 10 LEC, siendo por ello preceptiva la intervención de Procurador y Abogado (STS 19-10-1912), a pesar de que el art. 1644 parece que dispensa de ella para la comparecencia en juicio verbal ante el Juez. La sentencia que pone fin al interdicto es apelable en ambos efectos, aunque sin posibilidad de casación, por no tratarse de resolución definitiva, según se deduce del art. 1687 LEC.

interdictos (1927 y 1928); todos ellos citados en la bibliografía de la Introducción de la obra de ARAGONESES ALONSO Técnica...cit., págs. 65 y 66.

2. Interdictos de retener y recobrar^{*5}

Pretenden la conservación o recuperación de la posesión actual, respectivamente (son estos los interdictos posesorios propiamente dichos). Su regulación se encuentra en los artículos 1651 a 1662 LEC. Introduce modificaciones en la tramitación del juicio verbal ordinario. La competencia está atribuida al JPI (art. 85.1º LOPJ) del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto (art. 63.15 LEC), sin que quepa sumisión por ser éste fuero exclusivo. Se exige postulación profesional, por no exceptuada, a pesar de la dispensa de la concurrencia al juicio verbal de los defensores de las partes (art. 1644 LEC). Según el art. 1657, la sentencia es apelable en ambos efectos (ante la AP), aunque no hay posibilidad de casación contra la decisión de la apelación, pues el proceso interdictal está expresamente excluido, como posesorio, de los que tienen acceso a tal recurso, en virtud del art. 1687 LEC.

3. Interdicto de obra nueva^{*6}

Se quiere, con la adopción de medidas urgentes, evitar el perjuicio que pudiera causar lo que la Ley llama obra nueva. Se regula en los artículos 1663 a 1675 LEC. Se sigue el procedimiento del juicio verbal con la forma establecida en los artículos 1644 y ss.. En este interdicto interviene el JPI del lugar en que esté sita la cosa objeto del mismo, en aplicación de las reglas ya conocidas en los interdictos anteriores (arts. 85.1º LOPJ y 63.15 LEC). La postulación se fija de acuerdo con las reglas generales (es decir, es preceptiva), igual que se ha visto en la clase anterior de interdictos. La sentencia es

^{*4} Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo (art. 250.1.3º del Proyecto mencionado), que no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto).

^{*5} Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo (art. 250.1.4º del Proyecto mencionado), que no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto).

apelable, según el art. 1688 LEC, pero no es susceptible de recurso de casación, como los restantes interdictos; sin embargo, difiere el régimen de la apelación en uno y otro caso en cuanto que la sentencia que alce la suspensión es apelable en ambos efectos, mientras que la sentencia en que se acuerda la ratificación es apelable en un solo efecto (art. 1669 LEC).

4. Interdicto de obra ruinosa^{*7}

Se pretende también la adopción de medidas urgentes que eviten el perjuicio que pudiera causar una construcción u otro objeto en ruinas. Se regula en los artículos 1676 a 1685 LEC. La competencia corresponde, al igual que en los interdictos de retener y recobrar y en el de obra nueva, al JPI del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto (arts. 85.1º LOPJ y 63.15 LEC). También aquí la postulación es obligatoria, aunque cuando el interdicto tenga por objeto la demolición de una obra ruinosa, se dispensa a las partes de la postulación para acudir al juicio verbal, igual que en los anteriores interdictos. La sentencia que se dicta en el caso del interdicto de obra ruinosa, cuando se trate de la demolición de la misma, es apelable en ambos efectos, a tenor del art. 1684, pues la adopción de medidas precautorias se resuelve mediante auto no apelable (art. 1681 LEC); sin embargo, no cabe casación, en el caso de que la sentencia fuese apelable, por aplicación de lo establecido, con carácter general, para todos los procesos posesorios (art. 1687 LEC).

- **Proceso para la división de la cosa común**

Se regula en los artículos 402 a 406 C.C.. Sigue los trámites del juicio verbal ordinario si corresponde según la cuantía, teniendo en cuenta las reglas concernientes a la

^{*6} Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo (art. 250.1.5º del Proyecto mencionado), que no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto).

división de la herencia (artículos 1051 a 1081 C.C.). Ello nos hace pensar que cuando se adopta la sustanciación del verbal, se debe a razones de la pequeña cuantía y por tanto pequeño perjuicio del proceso.

Debido a que la regulación de este proceso resulta ciertamente insuficiente, sólo puede deducirse que se le aplicarán las normas del ordinario que correspondiere según la cuantía. En caso de corresponder el juicio verbal, se le aplicarán sus reglas (y por tanto, también en materia de competencia, postulación y recursos).

- **Proceso en materia de propiedad intelectual¹²⁷ *⁸**

Se regula en el RD-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo). La Ley sólo hace referencia en su art. 142.1º a que se seguirá el “juicio declarativo correspondiente”. Esto es interpretado por algún sector de la doctrina como que se seguirá el procedimiento del juicio verbal, si corresponde según la cuantía de la indemnización solicitada¹²⁸ (en este caso, el verbal se adoptaría por el pequeño perjuicio y cuantía). Por el contrario, otro sector¹²⁹ entiende que en todo caso deben seguirse los cauces del menor

⁷⁷ Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo (art. 250.1.6º del Proyecto mencionado), que no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto).

¹²⁷ ARANZADI, Repertorio...cit., 1996, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 22 abril 1996 (núm. 97), R. 1382, págs. 5006 a 5034.

⁷⁸ Este proceso dejará de ser especial, pues se deroga el art. 142 de la Ley de Propiedad Intelectual, Texto Refundido por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que lo recogía (Disposición Derogatoria, punto 2.14 del citado Proyecto), y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo si la acción versa exclusivamente sobre reclamación de cantidad y corresponde por la cuantía, pues en otro caso se conocerá en juicio ordinario (art. 249.1.4º del Proyecto mencionado).

¹²⁸ Ésta es la opinión de Juan Luis GÓMEZ COLOMER, en su obra con MONTERO AROCA, Juan; ORTELLS RAMOS, Manuel; y MONTÓN REDONDO, Alberto; Derecho Jurisdiccional, Tomo II Proceso Civil, pág. 704. José María Bosch Editor, S.A., 1995, Barcelona: “La LPInt no crea ningún proceso especial en esta materia, sino que se limita a consignar especialidades. El procedimiento adecuado será por tanto el ordinario que corresponda por la cuantía y, en caso de no poder calcularse, el juicio de menor cuantía (art. 484.3º LEC)...”.

¹²⁹ Así por ejemplo, tal es la postura de ARAGONESES ALONSO en la obra de GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 74 y 75.

cuantía, por analogía con la Ley de Patentes y porque el menor cuantía es el proceso común (484.4º LEC). Nos inclinamos por esta última postura porque el criterio de determinar el proceso en función de la cuantía de la pretensión que constituye su objeto es el factor que se aplica como criterio delimitador de los juicios declarativos ordinarios, pero cuando la especialidad del proceso viene dada por circunstancias jurídico-materiales, es este contenido objetivo el que debe tenerse en cuenta al calificar la naturaleza del proceso y, como consecuencia de ello, su régimen jurídico. Además, la solicitud de indemnización es accesoria a la pretensión principal, que es la declaración del órgano competente de la condena al cese de la infracción del derecho de propiedad intelectual, por lo que no puede basarse en dicha indemnización la determinación del procedimiento a seguir.

- **Procesos de equidad para suplir e impugnar acuerdos y para la adaptación de estatutos en materia de propiedad horizontal y proceso para el incumplimiento de las obligaciones de pago del art. 9 e) y f), a partir de la citación para juicio oral¹³⁰**
“9:

Se trata de procesos especiales, pues, como ya hemos visto, han sido creados para hipótesis jurídico-materiales concretas, como es la de un tipo de propiedad especial (pues goza de una peculiar ordenación): la horizontal.

¹³⁰ ARANZADI, Repertorio...cit., 1960, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 23 julio 1960 (núm. 176), R. 1042, págs. 1218 y ss.; 1988, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 27 febrero 1988 (núm. 50), R. 420, pág. 1040; y B.O.E. 8 abril 1999 (núm. 84), R. 7858, págs. 13104 y ss..

⁹ En general, estos procesos dejarán de ser especiales y los supuestos que regulan se conocerán en juicio ordinario (art. 249.1.8º del Proyecto mencionado).

1. Cuando la mayoría necesaria para la obtención de acuerdos válidos no se pueda lograr en el seno de la comunidad:

Su regulación se encuentra en el artículo 17.3 (párrafo III) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, artículo que ha sido modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril. Se sigue un procedimiento sencillo, a modo del verbal, para simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal. En cuanto a la competencia objetiva, ésta corresponde a los JPI, conforme a la regla general del art. 85.1º LOPJ; por lo que se refiere a la competencia territorial, ésta se atribuye al órgano judicial del lugar donde esté sita la finca, regla que por su carácter especial no debe ser susceptible de modificación por sumisión. Nada dice la Ley respecto a la postulación; la doctrina, en general, entiende que no es preceptiva la representación por Procurador ni la intervención de Letrado, por la simplicidad del procedimiento equiparable al juicio verbal; puede llegarse a la misma conclusión por aplicación extensiva del supuesto del art. 21. Nada dice la Ley respecto a los recursos, aunque podría pensarse que sí que cabe, pues así se dispone respecto del procedimiento regulado en el art. 21.

2. Impugnación de acuerdos:

Se recoge este proceso en el artículo 18 de la Ley 49/1960. Creemos que se sigue un procedimiento igual al anterior (por las mismas razones), a pesar de que en el art. 18.1 se establece que los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los Tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general. Por tanto, es aplicable en él el mismo régimen jurídico que en el supuesto anterior, aunque teniendo en cuenta las normas concretas sobre legitimación, caducidad de la acción y suspensión del acuerdo impugnado, establecidas en el art. 18.

3. Adaptación de los estatutos a la LPH

Se recoge esta posibilidad en la DT 1ª de la LPH, y sigue el mismo régimen de los dos casos anteriores. Entendemos que subsiste esta DT, por no haber sido especialmente derogada por la nueva Ley de 1999, aunque su remisión al antiguo art. 16.2 debe ahora entenderse hecha al 17.3.

4.A partir de la citación para juicio oral, en caso de oposición del demandado en el procedimiento por incumplimiento por algún propietario del pago de las obligaciones contenidas en el art. 9 e) y f) ^{*10}

Este proceso se regula en el art. 21 para los casos de incumplimiento de las obligaciones de los apartados e) y f) del art. 9, estableciéndose en su apartado 8 (párrafo I), que si el deudor se opusiere alegando razones para negarse al pago, en todo o en parte, el Juez, previo traslado al demandante del escrito de oposición, seguirá la tramitación del juicio verbal (debido a motivos de rapidez) a partir del momento de la citación para juicio oral. La competencia corresponderá exclusivamente al Juez (de PI, según regla general del art. 85.1º LOPJ) del lugar donde se halle la finca, no siendo obligatoria la postulación (art. 21.3). La sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosa juzgada (art. 21.10). Cabe recurso, según el art. 21.12.

^{*10} Para este proceso en concreto, además del juicio ordinario ya citado (art. 249.1.8º del Proyecto) podrá acudir al proceso monitorio (proceso especial, de acuerdo con el Proyecto), cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos (art. 812.2.2º del Proyecto), en cuyo caso, si existe oposición por parte del deudor, se resolverá el asunto definitivamente en el juicio declarativo que corresponda, procediendo el órgano jurisdiccional de inmediato a convocar la vista del juicio verbal, si éste es el que corresponde (art. 818 del Proyecto). Esta opción entre el juicio ordinario y el proceso monitorio se establece mediante reforma del art. 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (Disposición Final Primera, punto 1 del Proyecto). Sobre el proceso monitorio puede consultarse la monografía de CORREA DELCASSO, J. P., El proceso monitorio, JM Bosch Editor, 1998, Barcelona.

- **Procesos sobre derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad**^{*11}

Otras instituciones que por su especialidad jurídico-material pueden ocasionar el nacimiento de procesos especiales son los derechos reales inscritos en el Registro (en este caso, el de Propiedad, pues en lo que a nosotros interesa, solamente los procesos especiales que surgen de los derechos inscritos en él tienen relación con el juicio verbal).

- 1. Proceso sobre anotaciones preventivas del artículo 57 L.H.**

Se pretende la anotación de legados o derecho hereditario por mandato judicial. Se regula en el artículo 57 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946. Se siguen los trámites del juicio verbal, también por razones de rapidez y simplicidad. Debido a su especialidad, serán competentes siempre los JPI, conforme a la regla general del art. 85.1º LOPJ y a la LH. Por la misma razón, creemos que es necesaria la postulación, según las reglas generales.

- 2. Proceso sobre anotaciones preventivas del artículo 61 L.H.**

Se persigue la anotación del derecho del acreedor refaccionario, en el caso de que la finca objeto de la refacción estuviere sujeta a cargas o derechos reales inscritos. Se regula en los artículos 61 L.H. y 157 a 160 R.H., de 14 de febrero de 1947. Se siguen los trámites del juicio verbal, si la oposición por parte de los titulares de los derechos reales inscritos sobre la finca, recae sobre las obras. La adopción del verbal se debe también aquí a

^{*11} En general, los procesos en que los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad demandan la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación, dejarán de ser especiales y se conocerán en juicio verbal declarativo (art. 249.1.7º del Proyecto mencionado). Estos procesos no tendrán efecto de cosa juzgada (art. 447.3 del Proyecto).

motivos de celeridad. La competencia objetiva recae en los JPI, conforme al art. 157 RH y a la regla general del art. 85.1º LOPJ. La postulación es preceptiva, pues no se establece lo contrario.

3. Proceso sobre la “acción de devastación” del artículo 117 L.H.

Se quiere evitar o remediar el daño causado por el dueño de la finca hipotecada sobre esta última, a fin de que la hipoteca no resulte insuficiente. Su regulación se encuentra en el art. 117 L.H., el cual remite a los artículos 720 y ss. LEC. La adopción del juicio verbal se motiva ahora en la necesidad de una actuación urgente que evite males mayores sobre la finca hipotecada, o remedie los ya producidos. También en este proceso será competente el JPI (art. 85.1º LOPJ) y la postulación es preceptiva, según las reglas generales.

3- DERECHO DE OBLIGACIONES

- **Juicio sobre responsabilidad civil de funcionarios judiciales (Jueces y Magistrados) y miembros del Ministerio Fiscal^{*12}**

Su regulación la encontramos en los artículos 411 a 413 de la LOPJ y 903 y ss. de la LEC. De nuevo, en este proceso, encontramos dividida la doctrina, esta vez por la diferente interpretación del art. 412 LOPJ, cuando establece que esta responsabilidad civil podrá exigirse “en el juicio que corresponda”. Una parte entiende que dicha expresión se refiere al declarativo ordinario que corresponda, de forma que al derogar dicho artículo de

^{*12} Al derogar el Proyecto (Disposición Derogatoria, punto 1) los artículos de la LEC que regulaban este proceso, queda sólo aplicable la LOPJ, en tanto ésta no sea modificada, y por tanto se aplicará el declarativo que corresponda según la cuantía de la indemnización.

la LOPJ al 910 LEC, que dispone que este proceso seguirá los trámites del juicio de mayor cuantía (por ser la LOPJ posterior a la LEC), encontramos que este proceso especial seguiría el procedimiento del verbal si correspondiese por la cuantía (412 LOPJ y 903 LEC); (de nuevo en este caso se adoptaría el juicio verbal por razones de pequeña cuantía y perjuicio). En este sentido son las palabras de De La Oliva¹³¹: “ En cuanto al procedimiento que se ha de seguir, consideramos que el art. 910 Lec., en el que se fija siempre el JMC, ha de estimarse derogado por el art. 412 LOPJ, que habla de “el juicio que corresponda”. No es sólo que esta locución resulte poco compatible con el citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil –que hay que suponer que era conocido al elaborar y aprobar la LOPJ-, sino que, en si misma, la expresión “el juicio que corresponda” da idea de diversidad procedimental y ésta, a su vez, responde mejor al principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), rebajando algo el privilegio de los jueces.... Por todo lo cual, el procedimiento será, a nuestro entender, el del juicio declarativo que corresponda según la cuantía de la reclamación dineraria. Aunque la Ley 10/1992 no ha dejado sin contenido el art. 910 LEC, persistimos en este criterio: consideramos de mayor fuerza los argumentos que se acaban de exponer”. Sin embargo, otra parte de la doctrina no interpreta de igual manera las palabras del mencionado art. 412, por lo que entiende plenamente vigente el art. 910 LEC cuando establece que se aplicará el procedimiento del juicio de mayor cuantía, y ello a pesar del 903 LEC (que habla de juicio ordinario), ya que el 910 es más específico que este último¹³². Entendemos más acertada la última interpretación, entre otras cosas,

¹³¹ DE LA OLIVA SANTOS junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho...cit., Tomo IV, # 68, pto. 13, págs. 148 y 149.

¹³² Por ejemplo, GUASP, Derecho...cit., Tomo II, pág. 270: “El procedimiento para exigir responsabilidad civil a Jueces, Magistrados y Fiscales se ventila en *juicio ordinario*, según la declaración general del artículo 903. El artículo 910 detalla esa prescripción al decir que, cualquiera que sea el Tribunal que deba conocer de la responsabilidad civil, el juicio se sustancia por los trámites establecidos para el ordinario de mayor cuantía. Por lo tanto, en cuanto al procedimiento no hay más especialidad que la de la alteración de las cifras ordinarias, ya que cualquier clase de cuantía que se exija con concepto de daños y perjuicios se ventila por el

porque resulta más lógico que se juzgue la responsabilidad civil de tales funcionarios a través de un juicio, como es el de mayor cuantía, que ofrece más garantías que las que pudiera ofrecer cualquier otro declarativo ordinario, y en especial el juicio verbal.

- **Juicios de desahucio de la legislación común**^{*13}

Son de aplicación a los litigios relativos a contratos traslativos del uso y disfrute no regulados ni en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ni en la Ley de Arrendamientos Rústicos (arts. 1561 y ss. LEC). La especialidad se debe a la propia singularidad del arrendamiento en el llamado Derecho sustantivo, derivado de la repercusión social que éste tiene. Se sustanciarán, por motivos de urgencia, por los trámites establecidos para los verbales, con algunas especialidades (arts. 1570 y ss. LEC). En concreto, la competencia objetiva corresponde a los JPI, según la regla general (art. 85.1º LOPJ) y la competencia territorial al JPI del lugar donde esté sito el inmueble (es el llamado *forum rei sitae* del art. 63.11 LEC), sin que pueda ser alterada por sumisión (así se establece en la STS Sala 1ª 29-10-1993, en la que el Ponente Sr. Almagro Nosete explica que los fueros territoriales del art. 63 LEC son inderogables en general, refiriéndose especialmente al 63.11 relativo a los desahucios¹³³); la postulación es no preceptiva, pues así expresamente se recoge en los arts. 4.2º y 10.2º LEC (los supuestos en los que según estos artículos resulta la intervención de

juicio ordinario menciónado", o incluso GIMENO SENDRA, Vicente (citado por DE LA OLIVA SANTOS, en la pág. 148 ya mencionada), junto a CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín; MORENO CATENA, Víctor, y ALMAGRO NOSETE, José; Derecho Procesal, Tomo I, Vol. II, págs. 313 y 314. Editorial Tirant Lo Blanch, 1986, Barcelona.

^{*13} Al derogar el Proyecto (Disposición Derogatoria, punto 1) los artículos de la LEC que regulan estos juicios de desahucio de la legislación común, los mismos dejan de existir como tales, dejan de ser especiales y se conocen o bien en juicio verbal declarativo si se trata del desahucio por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o por extinción del plazo fijado contractualmente, de una finca dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería (art. 250.1.1º del Proyecto mencionado), o si se pretende la recuperación de la plena posesión de una finca cedida en precario (art. 250.1.2º del Proyecto), o bien en juicio ordinario en los demás casos (art. 249.1.6º del Proyecto). El juicio verbal mediante el que se

Procurador y Abogado preceptiva, no afectan a este juicio de desahucio de la legislación común); en cuanto a la recurribilidad de la sentencia, ésta es apelable en ambos efectos para ante la AP dentro del tercer día (art. 1583 LEC), con una posible casación posterior, si la cuantía excede de seis millones de pts., salvo que se trate de falta de pago (debiendo cumplir el demandado para interponer la apelación o casación la obligación de pago de los arts. 1566 y 1567 LEC). Una de las principales diferencias con el verbal, es que se trata de procesos sumarios porque debido a que se limita la cognición, la defensa y los medios de prueba, se produce una ausencia de la plenitud de los efectos de la cosa juzgada; tal es la postura de la mayoría de la doctrina y parte de la jurisprudencia (SSTS. 22-3-95, 17-3-69, 22-6-79). Sin embargo, Guasp y Tomé Paule¹³⁴ opinan que son procesos plenarios, pues producen el efecto de cosa juzgada material (SSTS. 21-12-1913, 8-7-1914, 14-3-56, 7-11-80). Toda esta discusión es también aplicable a los demás juicios de desahucio. De todas formas, si los desahucios son o no sumarios, no es cuestión que deba ser tratada en este trabajo, por lo que no entraremos más allá, quedando simplemente apuntada la disensión doctrinal y jurisprudencial que existe acerca de la cuestión.

- **Reclamación de justiprecio de las labores y plantíos**^{*14}

Si el demandado en el juicio de desahucio anterior hubiere reclamado labores, plantíos u otra cosa que haya quedado en la finca y no pueda de ésta separarse, hasta el límite que resulte del avalúo hecho por peritos, se conocerá dicha reclamación en juicio

pretenda el desahucio o recuperación de finca, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler, no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto), aunque sí lo tendrá el desahucio por precario.

¹³³ Dicha sentencia es citada por ARAGONESES ALONSO, Programa y Esquemas...cit., pág. 20.

¹³⁴ GUASP, Derecho...cit., Tomo II, pág. 229; y TOMÉ PAULE, José; Lecciones...cit., págs. 154 y ss..

^{*14} Al derogar el Proyecto (Disposición Derogatoria, punto 1) los artículos de la LEC que regulan este juicio de reclamación de justiprecio de las labores y plantíos, el mismo deja de existir, deja de ser especial y se conoce en el proceso declarativo que corresponda según la cuantía.

verbal con las modificaciones de los arts. 1604 y ss. LEC (las mismas razones que en los desahucios motivan aquí la adopción del verbal). Como el art. 1606 establece competente al mismo Juez que hubiere conocido del desahucio, la competencia en este proceso (al igual que en el juicio de desahucio ya visto) se atribuye al JPI (art. 85.1º LOPJ) del lugar de situación del inmueble (art. 63.11 LEC), sin posibilidad de sumisión (ver STS 29-10-1993, ya citada, en lo que se refiere al art. 63 LEC en general).

- **Procesos arrendaticios urbanos de la L.A.U.**¹³⁵ ¹⁵

Se aplican sólo a litigios sobre contratos de arrendamiento regulados en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. La especialidad se debe, como ya dijimos, a la singularidad jurídica del arrendamiento y a su gran repercusión social. En caso de que se interponga la demanda por:

1. Precario, extinción del plazo de arriendo o resolución del mismo por falta de pago de las cantidades a que se refiere la causa 1ª del artículo 27.2 L.A.U.

Se sustanciará el proceso por el procedimiento establecido en los arts. 1570 y ss. LEC para el juicio de desahucio de la legislación común (art. 39.3 L.A.U.), es decir, se sustanciará por los trámites del verbal con especialidades. La competencia corresponderá al

JPI del lugar donde se halle la finca, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión (art.

¹³⁵ ARANZADI, Repertorio...cit., 1994, Vol. IV, 1ª edición, B.O.E. 25 noviembre 1994 (núm. 282), R. 3272, págs. 9053 y ss..

¹⁵ Estos procesos dejarán de ser especiales y se conocerán en juicio verbal declarativo si se trata del desahucio por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o por extinción del plazo fijado contractualmente, de una finca dada en arrendamiento, ordinario o financiero (art. 250.1.1º del Proyecto mencionado), o si se pretende la recuperación de la plena posesión de una finca cedida en precario (art. 250.1.2º del Proyecto), o bien en juicio ordinario en los demás casos (art. 249.1.6º del Proyecto). Precisamente, la Disposición Derogatoria, punto 2.6º del Proyecto suprime los arts. 38 a 40 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. -El juicio verbal mediante el que se pretenda el

38 LAU). La intervención del Procurador sólo es preceptiva en los desahucios de locales de negocio y establecimientos mercantiles (art. 4.2 LEC); en cambio, la intervención de Abogado sólo es preceptiva en los juicios de desahucio por falta de pago de la renta de locales de negocio (art. 10.2 LEC); no se nos alcanza a conocer el porqué de esta discordancia en el régimen de la postulación, pues hay, paradójicamente, una prevalencia de la representación técnica en juicios que se tramitan verbalmente y en los que la actividad del Procurador es muy reducida, sobre la dirección letrada, en juicios que aunque teóricamente fáciles pueden presentar dificultades en la práctica. La realidad es que dada la complejidad de las actuaciones judiciales y de la regulación de los arrendamientos, aunque el procedimiento sea más o menos sencillo, debería ser preceptiva tanto la representación técnica como la dirección letrada en todos los juicios de desahucio. Las sentencias serán apelables en ambos efectos de conformidad con lo establecido en el art. 1583, debiendo tener muy especialmente en cuenta lo establecido en los arts. 1566 y 1567; contra las sentencias dictadas por la Audiencia no cabe recurso de casación (art. 1687.3 LEC).

2. Ejercicio exclusivo de acciones para determinar la existencia y cuantías de rentas o importes que deba pagar el arrendatario, cualquiera que sea la cuantía litigiosa

Se trata de una acción merodeclarativa. Se seguirán en este caso los trámites del juicio verbal (art. 39.4 L.A.U.). Sin embargo, su conocimiento se atribuirá en todo caso al JPI del lugar de situación de la finca (art. 38 LAU), salvo sometimiento a arbitraje. Conforme a lo dispuesto en los arts. 4 y 10 LEC, son preceptivas la intervención de Procurador y Letrado, ya que la referencia de dichos artículos al juicio verbal debe entenderse exclusivamente referida, como ya dijimos, al juicio verbal ordinario. La

desahucio o recuperación de finca, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler, no tendrá efecto

sentencia es susceptible de recurso de -apelación conforme a lo dispuesto en el art. 733.2 LEC, sin que sea aplicable el párrafo 1º del mismo artículo por tratarse, como hemos dicho, de un proceso especial y, además, porque en ningún caso las acciones que en él pueden ejercitarse pertenecen al tipo de aquéllas a las que se refiere dicho párrafo; no cabe casación por no estar comprendido en ninguno de los casos del art. 1687 LEC, ni estar expresamente admitido en ningún otro precepto legal.

En estos dos casos se adopta la sustanciación del verbal de nuevo por razones de urgencia y rapidez.

- **Juicio de desahucio de la L.A.R.**¹³⁶ *¹⁶

Se trata igualmente de un proceso especial por razones jurídico-materiales.

Se siguen los trámites de los arts. 1570 a 1582 LEC relativos al desahucio, con algunas especialidades (es decir, los del juicio verbal con modificaciones), en el caso de desahucio por falta de pago de las rentas convenidas o cantidades asimiladas a ellas, en los arrendamientos rústicos de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril (art. 128 L.A.R.). De nuevo se adopta el verbal por motivos de urgencia. La competencia corresponde a los JPI del lugar

de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto), aunque sí lo tendrá el desahucio por precario.

¹³⁶ ARANZADI, Repertorio...cit., 1981, Vol. I, 1ª edición, B.O.E. 30 enero 1981 (núm. 26), R. 226, págs. 526 y ss. y 1992, Vol. II, 1ª edición, B.O.E. 5 mayo 1992 (núm. 108), R. 1027, págs. 3790 y ss..

*¹⁶ Estos procesos dejarán de ser especiales y se conocerán en juicio verbal declarativo si se trata del desahucio por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o por extinción del plazo fijado contractualmente, de una finca dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería (art. 250.1.1º del Proyecto mencionado), o si se pretende la recuperación de la plena posesión de una finca cedida en precario (art. 250.1.2º del Proyecto), o bien en juicio ordinario en los demás casos (art. 249.1.6º del Proyecto). Precisamente, la Disposición Derogatoria, punto 2.7º del Proyecto suprime los arts. 123 a 137 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos. El juicio verbal mediante el que se pretenda el desahucio o recuperación de finca, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler, no tendrá efecto de cosa juzgada (art. 447.2 del Proyecto), aunque sí lo tendrá el desahucio por precario.

donde se halla la finca (arts. 85.1º LOPJ y 123 LAR); es preceptiva la representación por Procurador (art. 4.2º LEC), aunque no, sin que se comprenda la razón de la exclusión, la dirección de Abogado (art. 10.2º LEC), salvo que no haga uso del derecho a defenderse por sí mismo (art. 125 LAR), en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el art. 11 LEC; la sentencia dictada en primera instancia es susceptible de apelación conforme al art. 1583 LEC, pero no de casación (de acuerdo con el art. 1687.3 LEC)

- **Proceso sobre préstamos usurarios¹³⁷ *¹⁷**

Se regula en el art. 12 de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley Azcárate). La existencia de un proceso especial en esta materia tiene su fundamento en la importancia social que el legislador quiso atribuir a las anulaciones de esta clase de préstamos. Se seguirá el procedimiento del juicio verbal si corresponde según la cuantía. Por tanto, se adopta el verbal por razones de pequeña cuantía y perjuicio. El órgano jurisdiccional que interviene en esta clase de procesos es siempre el JPI, a tenor del art. 12 de esta Ley, y no cabe sumisión para alterar la competencia territorial.

- **Proceso relativo a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor¹³⁸**

Se regula en las Disposiciones adicionales 1ª, 2ª y 3ª de la LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. Es especial porque la propia DA 1ª establece que se aplicará este proceso, cualquiera que sea su cuantía, para atender un caso singular y

¹³⁷ Ver nota nº 82.

^{*17} Este proceso dejará de ser especial y el supuesto que regula se conocerá en juicio verbal declarativo si corresponde por la cuantía, ya que se deroga el art. 12 de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre préstamos usurarios, que lo recogía (Disposición Derogatoria, punto 2.4º del Proyecto mencionado).

concreto¹³⁹. Si unimos a su carácter especial la característica de que es plenario, debemos llegar a la conclusión de que tal juicio verbal especial tiene carácter imperativo, de forma que las partes no tienen opción de elegir entre acudir a él o al juicio declarativo ordinario que corresponda por la cuantía de la indemnización; tal es el parecer de la mayoría de la doctrina¹⁴⁰ y de la jurisprudencia (SSAAPP Granada 10-9-1992, Murcia 24-11-1992, Santander 7-9-1993, Orense 15-11-1993, Castellón 14-1-1994, La Coruña 14-1-1994, Málaga 25-3-1994, Valencia 9-7-1994, entre otras). Este proceso civil, según la DA 1ª, se decidirá en juicio verbal, aunque con especialidades¹⁴¹. Entre ellas, la de la competencia, que corresponderá, cualquiera que sea la cuantía, a los JPI del lugar donde se causaron los daños (DA 1ª nº 2), sin que quepa sumisión, pues se trata de una norma de ius cogens, según la cual el Juez examinará de oficio, no sólo la competencia objetiva (según la regla general del art. 74 LEC), sino también su propia competencia territorial. La postulación profesional es preceptiva, tanto respecto de la intervención del Procurador como del Letrado, conforme a lo dispuesto en los arts. 3 y 10 LEC, ya que la exclusión que señalan los apartados 2º del artículo 4, respecto del Procurador, y 2º del artículo 10, en relación con la intervención del Abogado, se refiere a los juicios verbales ordinarios¹⁴²; sin embargo, ha sido ampliamente discutido por la jurisprudencia si la no obligatoriedad de postulación que

¹³⁸ ARANZADI, Repertorio...cit., 1989, Vol. III, 1ª edición, B.O.E. 22 junio 1989 (núm. 148), R. 1352, págs. 3922 a 3933.

¹³⁹ Más específicamente se explican las razones por las que se trata de un proceso especial por GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 282 y 283.

¹⁴⁰ Así por ejemplo: SANTOS VIJANDE, Jesús María; La intervención forzosa de Abogado y Procurador en el "juicio verbal del automóvil". Límites legales y constitucionales de la autodefensa, Cap. IV, págs. 211 y ss., EDERSA, 1997, Madrid, en donde se trata exhaustivamente este punto y se cita abundante bibliografía al respecto; SEGOVIA LÓPEZ, Luis; Responsabilidad civil por accidente de circulación, págs. 421 y ss., EDERSA, 1998, Madrid; MONTERO AROCA, Juan; El juicio verbal de tráfico (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios), págs. 30 y ss., Tirant Lo Blanch, 1999, Valencia; REVILLA GONZÁLEZ, José Alberto; El juicio verbal por daños en la circulación de vehículos a motor (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios), págs. 39 y ss., Colección dirigida por Víctor Moreno Catena. Tirant Lo Blanch, 1999, Valencia.

¹⁴¹ SEGOVIA LÓPEZ recoge las especialidades procesales de este proceso con relación al verbal ordinario, en Responsabilidad...cit., pág. 422.

rige en el verbal ordinario era de aplicación al juicio verbal de tráfico. De esta forma, la mayor parte de las AAPP se han inclinado por la postulación preceptiva, aunque matizando en algunos casos que la necesidad de Abogado sólo existe si la cuantía de la reclamación excede de 80.000 pts., es decir la cuantía máxima del juicio verbal, y que la intervención de Procurador sólo lo es cuando aquélla excede de 800.000 pts, es decir, el límite máximo del juicio de cognición (así, por ejemplo las SSAAPP Pontevedra 16-6-1997, Segovia 28-10-1996 y 31-12-1993, Baleares S. 3ª 5-2-1996, Tarragona S. 1ª 20-7-1995, Albacete S. 1ª 19-5-1995, Pontevedra S. 1ª 25-4 y 12-7-1995, Alicante S. 4ª 14-3-1995, entre otras muchas); creemos que tal postura no es absolutamente correcta, pues si bien las citadas sentencias admiten que el juicio verbal de tráfico no es un juicio verbal ordinario, es decir, es un proceso especial, y por tanto no se le aplican las normas del segundo relativas a la postulación, aplican a su vez una distinción en función de un criterio cuantitativo creemos que no aplicable a un proceso especial, pues precisamente la especialidad se base en criterios jurídico-materiales, y no cuantitativos. Otra jurisprudencia recoge que no es precisa la intervención ni de Abogado ni de Procurador, y por lo tanto no pueden incluirse sus honorarios ni derechos en la tasación de costas, salvo en el supuesto del art. 11, pues aplican en toda su extensión los arts. 4.2º y 10.2º LEC al considerar a este proceso un juicio verbal ordinario más (SSAAPP Granada S. 3ª 19-1-1995, Badajoz S. 1ª 19-12-1994, Burgos S. 3ª 30-12-1992, Huelva 22-12-1992, Bilbao S. 1ª 21-12-1992, Barcelona S. 16ª 27-4-1992 y S. 11ª 15-9-1992, entre otras), criterio éste pensamos que absolutamente erróneo, pues ya explicamos que su especialidad puede deducirse claramente de la propia DA 1ª que lo regula. Otra jurisprudencia, en cambio, (la menos cuantiosa, a pesar de que este criterio creemos que es el más acertado) sostiene que la asistencia de Abogado y

¹⁴² GUASP, Derecho...cit., Tomo II, pág. 283; y DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo IV, pág.

Procurador es preceptiva en todo caso por las razones anteriormente expuestas (SSAAPP Pontevedra 10-9-1996, Barcelona S. 12ª 27-7-1995 y S.14ª 12-9-1994, Oviedo S. 1ª 22-6-1995, 6-6-1994, 23-4-1993 y 11-4-1994, y Valencia S. 2ª 19-2-1993 y Autos AAPP Asturias 28-5-1992 y Oviedo S. 5ª 11-3-1992). Una visión más amplia del tema de la postulación en este juicio verbal de tráfico, así como más datos jurisprudenciales han sido plasmados por Santos Vijande (que centra precisamente en este tema de la postulación su monografía), Segovia López, Montero Aroca y Revilla González¹⁴³. Contra la sentencia cabe recurso de apelación, aunque, al tratarse de un juicio especial, entendemos que no son de aplicación los límites establecidos en el art. 732 LEC, sobre la “inapelabilidad de las sentencias cuando hayan resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito”, pues así lo aclara además el párrafo 2º del art. 732 LEC (“contra las sentencias dictadas en procesos, distintos de los mencionados en el párrafo anterior, que deban seguirse por los trámites del juicio verbal, podrá interponerse el recurso de apelación en ambos efectos dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, desde el cual se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes”)¹⁴⁴. La anterior postura es la que consideramos más acertada, mas no ha faltado la jurisprudencia discrepante (no así la doctrina, que es unánime al calificar a este proceso de especial), y de esta forma, tras unos primeros años (los posteriores a la reforma de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal) en que se asistió a una jurisprudencia en todos los sentidos, pues se discutía si cabía o no el recurso de apelación, según se entendiera excluida o incluida respectivamente la responsabilidad civil extracontractual

181.

¹⁴³ SANTOS VIJANDE, La intervención forzosa...cit.; SEGOVIA LÓPEZ, Responsabilidad...cit., págs. 443 y ss.; MONTERO AROCA, El juicio verbal...cit., págs. 263 y ss.; REVILLA GONZÁLEZ, El juicio verbal...cit., págs. 95 y ss..

¹⁴⁴ Así también DE LA OLIVA SANTOS, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho...cit., Tomo IV, pág. 183.

derivada de accidentes de circulación dentro del concepto de “acciones personales basadas en derechos de crédito” que establece el art. 732.I LEC, ya que se entendía que este proceso era un juicio verbal ordinario (en el primer sentido: SSAAPP Lérida 16-11-1993 y Murcia 20-12-1995; en el segundo sentido: SAP Ávila 2-11-1995 y Autos AAPP Málaga S. 4ª 20-1-1993 y Oviedo S. 5ª 26-2-1993), en los últimos años la gran mayoría de la jurisprudencia menor se ha inclinado por entender que en el juicio verbal del automóvil cabe el recurso de apelación siempre que la cuantía de lo reclamado exceda de las 80.000 pts. (criterio cuantitativo que ya hemos expuesto consideramos desacertado aplicar al presente proceso), y ello independientemente de lo que se opine respecto de la naturaleza ordinaria o especial de ese juicio verbal (SSAAPP Asturias 25-5-1995, Badajoz 7-4-1998, Córdoba 14-1-1998, La Coruña 4-11-1997, Huesca 18-6-1996, Jaen 27-2-1997, Pontevedra 26-6-1996, Toledo 23-4-1996 y Vizcaya 9-5-1996, entre otras muchas). Todas estas posturas y jurisprudencia han sido recogidas y explicadas de nuevo por Segovia López, Montero Aroca y Revilla González, entre otros. Debemos recordar que otra especialidad de este proceso en relación a la apelación es que antes debe procederse a la consignación del importe de la condena.

Todas estas características han merecido serias críticas en cuanto que la remisión al juicio verbal, por su radical simplicidad limita los plenos derechos procesales de las partes, y puede resultar peligroso para la seguridad jurídica de las reclamaciones en cantidades particularmente elevadas, al no poder unificarse las diversas posturas de las AAPP con la jurisprudencia del TS debido a la imposibilidad de interponer recurso de casación. Sin embargo, el TC, en Auto 334/1991, de 29 de octubre, determinó que este juicio no resulta inconstitucional, por no producir indefensión, ni atentar al principio de igualdad, ya que el proceso verbal, regulado en los arts. 715 a 740 LEC, puede dar cumplida satisfacción al

derecho a la tutela judicial efectiva, la brevedad de los plazos requerirá una concentración del esfuerzo del órgano jurisdiccional para resolver la cuestión litigiosa y de las partes para formular sus alegaciones y proponer la práctica de las pruebas, pero ello no significa en modo alguno que se limite el conocimiento del órgano judicial, ni que las partes se vean impedidas de articular la defensa de sus pretensiones¹⁴⁵. El hecho de que las resoluciones recaídas en este juicio no sean susceptibles de recurso de casación tampoco vulnera el art. 24.1 CE, pues el sistema de recursos pertenece al ámbito de disponibilidad del legislador, y no forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva el derecho al recurso de casación en los supuestos en que no esté legalmente previsto.

Encontramos de nuevo que es la necesidad de rapidez y la urgencia lo que hace que se sigan los trámites del verbal.

- **Proceso para la formalización judicial del arbitraje¹⁴⁶**

Su regulación se halla en los arts. 38 a 44 de la Ley de Arbitraje 36/1988, de 5 de diciembre. Se pretende la designación o nombramiento de los árbitros cuando no se logra el acuerdo entre las partes; por tanto, su especialidad se debe a que está pensado para supuestos singulares y concretos. Este proceso especial se tramita por el juicio verbal (art. 39.3), con alguna modificación. Interviene el JPI (art. 85.1º LOPJ) del lugar donde deba dictarse el laudo y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados. Las partes deben actuar por medio de Procurador y de Letrado, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 3 y 10 LEC, ya que aunque se tramite según veremos conforme a las formalidades del juicio verbal, no se trata de un

¹⁴⁵ Sobre las implicaciones constitucionales respecto a la postulación de este juicio verbal del automóvil puede consultarse a SANTOS VIJANDE, La intervención forzosa...cit., Cap. V, págs. 279 y ss..

juicio verbal ordinario sino, como hemos dicho, de un proceso especial, con su régimen propio, aunque se siga el procedimiento establecido para las pretensiones de ínfima cuantía. El proceso no termina por sentencia, sino por auto, susceptible de apelación sólo si establece que no procede realizar el nombramiento (art. 42.3); contra la resolución de la AP no cabrá recurso alguno. Parece que otra vez es la celeridad el motivo de la adopción del verbal, junto a la voluntad de simplificar, como dice la Exposición de Motivos de dicha Ley, el procedimiento arbitral.

4- DERECHO DE FAMILIA

- **Proceso de alimentos provisionales**^{*18}

Se regula en los arts. 1609 a 1617 LEC. Como siempre, se trata de un proceso especial por razones jurídico-materiales. Se adoptan los trámites del juicio verbal seguido en los interdictos de retener y recobrar (art. 1611, en relación con los arts. 1651 a 1662 LEC), con determinadas modificaciones. En cuanto al órgano jurisdiccional, la intervención se atribuye, en todo caso, a un JPI, por tratarse de un proceso especial cualquiera que sea la cuantía de lo que se reclame, conforme a la regla general del artículo 85.1º LOPJ; la competencia territorial habrá que atribuirla al Juez del lugar en que tenga su domicilio aquél a quien los alimentos se pidan, es decir, al Juez del domicilio del demandado, por aplicación estricta de la regla 21 del artículo 63 LEC (ver STS 29-10-1993, ya citada), ya que el error material que en este caso puede advertirse, por haber

¹⁴⁶ ARANZADI, Repertorio...cit., 1988, Vol. IV. 1ª edición, B.O.E. 7 diciembre 1988 (núm. 293), R. 2430, págs. 5765 a 5772.

¹⁸ Este proceso dejará de ser especial y se conocerá en juicio verbal declarativo la solicitud de alimentos debidos por disposición legal o por otro título (art. 250.1.8º del Proyecto). Se derogan los artículos de la LEC

omitido la competencia del Juez del asunto principal, cuando los alimentos se piden incidentalmente, no enerva la aplicación del fuero del domicilio cuando los alimentos se piden autónomamente, en el correspondiente juicio. En relación con la postulación, la representación por Procurador tiene carácter facultativo (art. 4.4 LEC); en cambio, la dirección letrada es obligatoria, al no estar comprendido este proceso en las excepciones del art. 10 LEC. Si se conceden los alimentos, la sentencia es apelable en un solo efecto, y, si se niegan los alimentos, es apelable en ambos efectos, mas en todo caso subsiste la norma de la apelabilidad; contra la resolución dictada en el recurso de apelación no cabe recurso de casación por haberse modificado el art. 1690 LEC que lo permitía. Se trata de un proceso sumario, en el sentido de que la sentencia en él dictada no produce efecto de cosa juzgada, pues siempre queda a salvo la posibilidad de promover el juicio plenario de alimentos definitivos. Como vemos, de nuevo se adopta el verbal por razones de urgencia y rapidez.

C- JUICIO VERBAL ORDINARIO

Es el regulado principalmente en los artículos 482.4, 486 y 715 a 740 LEC^{*19}; también denominado proceso de ínfima cuantía. Será este juicio verbal el objeto del presente trabajo.

que lo regulaban (Disposición Derogatoria, punto 1 del Proyecto). Este proceso tendrá efecto de cosa juzgada.

V- NATURALEZA JURIDICA DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO

De todos estos tipos de procesos con tramitación verbal ya vistos, sólo el juicio verbal ordinario es general, es decir, se usa para cualquier clase de asunto. Los demás son procesos especiales por razones jurídico-materiales que se dan para casos concretos.

En este epígrafe vamos a tratar de la naturaleza jurídica del juicio verbal ordinario (objeto del presente trabajo), la cual viene dada por la concurrencia de las siguientes notas:

A- ES UN PROCESO O JUICIO

Esto es así porque el juicio verbal, al igual que todos los demás procesos, es un sistema heterocompositivo para la resolución de conflictos (es decir, estos son solucionados por un tercero distinto de las partes, utilizando la razón) en el que el tercero es un órgano estatal específicamente instituido al efecto (un órgano jurisdiccional). Así se distingue el proceso del arbitraje, en el que el tercero que resuelve es un sujeto privado.

Dicho de otra forma, el juicio verbal, como proceso, es una institución jurídica que tiene por objeto la satisfacción pública de pretensiones.

B- CIVIL

Además es un proceso civil, porque estas pretensiones, por la materia sobre la que recaen, afectan al ordenamiento jurídico privado.

C- DECLARATIVO O DE COGNICION

Se trata de un proceso civil declarativo o de cognición (art. 482.4º LEC, en relación con el 481), en función de la clase de pretensiones procesales que a través de él se

¹⁹ Regulado principalmente en los arts. 248, 249 y 437 a 447 del Proyecto de nueva LEC, aprobado por el

satisfacen. Las pretensiones de cognición son aquéllas en las que lo que se solicita del órgano jurisdiccional es una declaración de voluntad. Se contraponen a las de ejecución, en las que se solicita del órgano una manifestación de voluntad (dan lugar a los procesos de ejecución).

D- ORDINARIO

Es ordinario (art. 482.4º LEC, en relación con el 481) porque, al contrario que los procesos especiales que tienen un objeto procesal específico, está pensado para hipótesis generales.

E- PLENARIO^{*20}

Al igual que todos los procesos ordinarios, la sentencia del juicio verbal produce efecto de cosa juzgada material, es decir, dicha sentencia es inatacable a través de un proceso nuevo. Por el contrario, los procesos sumarios (sumarios cualitativos para Guasp) no producen este efecto, y por tanto, la Ley admite que con posterioridad se pueda plantear un proceso plenario.

F- SINGULAR

Es además un proceso singular porque a través de él únicamente se pretende la satisfacción de alguna/s pretensión/es de carácter particular. Se contrapone a los

Pleno del Congreso el 23 de septiembre de 1999.

^{*20} En el Proyecto de nueva LEC el juicio verbal no se configura siempre como proceso plenario, sino que en determinados supuestos es sumario, es decir, carece de efectos de cosa juzgada. En concreto, esto es así cuando se pretenda: la tutela sumaria de la posesión; el desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler; la efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito; otras pretensiones de tutela que la Ley califique como sumarias (art. 447. 2 y 3 del Proyecto).

universales, cuyos conflictos son más extensos por afectar a un total patrimonio, hasta tal punto que absorben en su ámbito las pretensiones que corresponden a un proceso singular (arts. 161.3º y 4º LEC).

G- APLICABLE A LA SATISFACCION DE PRETENSIONES NO SUJETAS A ALGUN TIPO DE PROCESO ESPECIAL

Ello se debe a que como lo especial prima sobre lo general, en el caso de que pudiera aplicarse algún proceso especial, éste primaría sobre el juicio verbal ordinario (art. 481 LEC). Sin embargo, esto sólo es así si el proceso especial es plenario, pues en ese caso este último es de aplicación preferente sobre el ordinario (es decir, es obligatorio), pero si el proceso especial es sumario, entonces el demandante puede elegir entre él y el juicio verbal ordinario.

H- EN CUANTIA MINIMA O INFIMA (HASTA 80.000 PTS.)^{*21}

Este proceso se aplica cuando la reclamación sea de hasta 80.000 pts. (art. 486 LEC), y de ahí que a este juicio verbal también se le conozca con las denominaciones de “proceso de mínima o infima cuantía”. A esta nota precisamente se refiere Guasp cuando califica al juicio verbal de sumario cuantitativo como equivalente a juicio abreviado.

VI- CONCEPTO DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO^{*22}

Tras haber analizado los anteriores aspectos del juicio verbal (fundamento jurídico, principios, tipos y naturaleza jurídica), podemos ya aproximarnos al mismo a través de su concepto o definición.

^{*21} En el Proyecto se establece la cuantía máxima de 500.000 pts. (art. 250.2). Sin embargo, junto a este criterio cuantitativo, existen otros cualitativos en los que también se aplica el juicio verbal declarativo (art. 250.1); en concreto, se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las siguientes demandas: 1º las que, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractualmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca; 2º las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca; 3º las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario; 4º la que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute; 5º las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva; 6º las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande; 7º las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación; 8º las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título; 9º las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales; 10º las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos; 11º las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

^{*22} El juicio verbal es un proceso civil, declarativo, ordinario, plenario o sumario, y singular, aplicable a la satisfacción de pretensiones que no se conozcan conforme a la Ley mediante algún tipo de proceso ordinario

El juicio verbal es un proceso civil, declarativo, ordinario, plenario y singular, aplicable a la satisfacción de pretensiones que no se conozcan conforme a la Ley mediante algún tipo de proceso especial , en cuantía mínima o ínfima (hasta 80.000 pts).

o especial , en cuantía mínima o ínfima (hasta 500.000 pts), y a la satisfacción de las pretensiones recogidas en el art. 250.1 del Proyecto aprobado por el Pleno del Congreso el 23 de septiembre.

SEGUNDA PARTE
REGIMEN JURIDICO^{147 148}

TITULO PRIMERO
REQUISITOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

I- REQUISITOS EN GENERAL PARA LA PRIMERA INSTANCIA

Pasamos a examinar los requisitos para la primera instancia.

A- SUBJETIVOS

El primer grupo de requisitos son los concernientes a los sujetos del proceso, es decir, al órgano jurisdiccional y a las partes.

1- DEL ORGANO JURISDICCIONAL¹⁴⁹

Se trata de los requisitos que deben concurrir en el órgano jurisdiccional para iniciarse y entrar a conocer un juicio verbal, en primera instancia.

¹⁴⁷ En general, en esta Segunda Parte dedicada al régimen jurídico, seguiremos la sistemática del Profesor GUASP, Derecho...cit., empleada y perfeccionada por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit. y resumida en su esencia por este último autor en su Programa y Esquemas...cit..

¹⁴⁸ Múltiples formularios útiles en la práctica forense del juicio verbal pueden hallarse, entre otras obras, en la de VILLANUEVA Y SANTAMARÍA, Pablo; Proceso de Cognición y Juicios Verbal y de Desahucio, págs. 229 a 264. Editorial Aranzadi, 3ª edición (actualizada y puesta al día en legislación, jurisprudencia y formularios), 1985, Pamplona.

¹⁴⁹ Como obra base hemos consultado en este punto de los requisitos del órgano jurisdiccional a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 91 y ss., en materia de jurisdicción, y págs. 116 y ss., en materia de competencia.

I- JURISDICCION^{150*}23

El órgano jurisdiccional encargado de un juicio verbal, como cualquier órgano que vaya a conocer de un procedimiento, necesita tener atribuida jurisdicción.

A- CONCEPTO

La jurisdicción puede definirse como la función estatal para la satisfacción jurídica de pretensiones¹⁵¹.

Debe tenerse en cuenta que existen también jurisdicciones supraestatales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), infraestatales (Tribunal de las Aguas de Valencia) y extraestatales (jurisdicción eclesiástica).

Este concepto de jurisdicción permite trazar con cierta seguridad la línea divisoria entre ella y las restantes funciones esenciales del Estado: la legislativa y la administrativa. Mientras la función legislativa tiene por objeto la producción de normas jurídicas nuevas y la función administrativa el cumplimiento de fines de interés general, la función jurisdiccional tiene por objeto la satisfacción de una pretensión comparándola con normas ya existentes.

B- NATURALEZA

La naturaleza de la jurisdicción puede verificarse desde el ámbito del Derecho Político y desde el del Derecho Procesal¹⁵².

¹⁵⁰ Un amplio análisis de la misma puede hallarse realizada por MONTÓN REDONDO, Alberto: *Iniciación al Estudio del Derecho Procesal* (Conceptos básicos y fuentes). Ediciones Universidad de Salamanca, 1987, Salamanca.

^{*23} Se regula en los arts. 36 y ss.. Proyecto.

¹⁵¹ Concepto tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 91 y ss..

¹⁵² Así lo explica GUASP, en su obra Derecho...cit., Tomo I, págs. 94 y 95.

Para el Derecho Político, la jurisdicción es uno de los Poderes del Estado, en concreto el Poder Judicial, reconocido en el art. 117 CE, según el cual la jurisdicción emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. También de acuerdo con el art. 3 LOPJ, la función jurisdiccional se ejerce exclusivamente por los Juzgados y Tribunales previstos en la Ley (es la llamada jurisdicción ordinaria), aunque con las especialidades del Tribunal del Jurado (art. 125 CE). Tampoco han de olvidarse otras potestades jurisdiccionales reconocidas por la CE a otros órganos, esto es, la jurisdicción militar (arts. 117.5 CE y 3.2 LOPJ), el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE)^{*24}, el TC (art. 159 CE) y el caso singular del Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana (art. 125 CE, en relación con el art. 19.3 LOPJ); además, en virtud de los tratados internacionales suscritos por España, se reconoce la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la Comisión y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Todo ello pone de relieve que la jurisdicción se perfila como una función única y exclusiva, dualidad de caracteres que garantiza su esencial imparcialidad. Esta función jurisdiccional es además independiente, en el sentido de que su ejercicio se halla sometido tan sólo a la Ley (arts. 117 CE y 1 LOPJ), de forma que puede apuntarse que la jurisdicción es una institución específica, es decir, dedicada exclusivamente a la realización del fin que le es propio.

Para el Derecho Procesal, la jurisdicción constituye un verdadero requisito del proceso, cuya falta impide entrar en el examen del fondo de la pretensión formulada. Entre los requisitos procesales, la jurisdicción ocupa el primer puesto y debe examinarse, como más tarde veremos, de oficio o a instancia de parte y en primer lugar. Faltando la

^{*24} Ver art. 37 Proyecto.

jurisdicción no puede practicarse válidamente ninguna de las restantes actividades procesales.

C- CLASES

Aunque la función jurisdiccional es una, ésta se confía a diversos conjuntos de funcionarios en función de distintas materias, de forma que cabe hablar no de distintas clases de jurisdicción, sino de órdenes jurisdiccionales diversos (art. 9 LOPJ). Así, habrá que distinguir la jurisdicción Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Social. Ésta es la llamada jurisdicción ordinaria, en oposición la militar y la eclesiástica, que son jurisdicciones especiales y a la internacional, que es supraestatal.

Ahora bien, dentro de los cuatro órdenes jurisdiccionales integrados en la jurisdicción ordinaria, el orden civil, en el que se conoce el proceso de ínfima cuantía que actualmente nos ocupa, viene a constituir el orden común o residual, pues de acuerdo con el art. 9.2 LOPJ el orden civil posee vis atractiva sobre los demás, ya que conocerá de cualquier pretensión no atribuida a cualquier otro orden jurisdiccional o jurisdicción especial.

D- EXTENSION

En sentido amplio, tienen jurisdicción todos los órganos que integran el Poder Judicial, pues de acuerdo con los arts. 117.3 CE y 2.1 LOPJ, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. Este contenido amplio de la jurisdicción se extiende con carácter general a todas las materias, a todas las personas y a todo el territorio español (art. 4 LOPJ).

En sentido estricto, refiriéndonos sólo a la jurisdicción civil, que es la que conoce del juicio verbal, ésta se extiende, como ya anteriormente apuntamos, a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado respecto a asuntos de Derecho privado y, en general, a las cuestiones que no correspondan a otros órdenes judiciales^{*25}.

E- LIMITES

Esta extensión tan amplia de la jurisdicción civil se ve, sin embargo, acotada por una serie de límites que clasificaremos según tengan relación con los sujetos, objeto o actividad del proceso^{*26}.

a- SUBJETIVOS: INMUNIDAD DE JURISDICCION

Ya hemos visto que la jurisdicción de los Jueces y Tribunales se extiende en principio a todas las personas (art. 4 LOPJ). Sin embargo, se exceptúan los casos en que la persona goce de inmunidad de jurisdicción y ejecución establecidos por el Derecho Internacional Público (art. 21.2 LOPJ)^{*27}. Esta inmunidad, de acuerdo con los Tratados de Viena de 18 de abril de 1961 sobre relaciones diplomáticas, y de 24 de abril de 1963 sobre relaciones consulares, afecta básicamente a Jefes de Estado y diplomáticos extranjeros, si bien esta regla no incluye normalmente los litigios de carácter patrimonial y depende en buena medida del principio de reciprocidad.

En cambio, las personas que gozan de inmunidad de jurisdicción pueden demandar en España, aunque entonces podrían resultar demandadas por medio de reconvencción,

^{*25} Ver art. 37.2 Proyecto.

^{*26} Consultar art. 36.1 Proyecto.

^{*27} Consultar art. 36.2.1º Proyecto.

siempre que ésta sea conexa con la demanda principal y no sobrepase los límites competenciales del Juez del juicio verbal.

b- OBJETIVOS

En cuanto a los límites a la jurisdicción civil que pueden surgir respecto al objeto del proceso, podemos citar la prejudicialidad, la competencia internacional y el arbitraje.

1- PREJUDICIALIDAD^{*28}

^{*28} La prejudicialidad se halla regulada en los arts. 40 a 43 Proyecto:

“Artículo 40. Prejudicialidad penal.

1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurren las siguientes circunstancias:

1º Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil.

2º Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto, una vez que los autos estén pendientes sólo de sentencia.

4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.

5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordará la suspensión, o se alzarla la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el documento sea separado de los autos.

6. Las suspensiones a que se refiere este artículo se alzarán cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación.

7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querrela de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes.”

“Artículo 41. Recursos contra la resolución sobre suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal.

1. Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá interponer recurso de reposición. La solicitud de suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación.

2. Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión se dará, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal.”

“Artículo 42. Cuestiones prejudiciales no penales.

1. A los solos efectos prejudiciales, los Tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.

2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la Ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, los tribunales civiles suspenderán el curso de las actuaciones, antes de dictar sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial.”

“Artículo 43. Prejudicialidad civil.

Quando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante providencia decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Aunque ya hemos explicado que la jurisdicción civil se extiende en general a todas las cuestiones de Derecho privado y solamente a éstas, hemos de apuntar dos excepciones.

La primera hace referencia a que la acción civil que se deriva del hecho delictivo puede ser conocida por los órganos que integran el orden penal.

La segunda se refiere a las cuestiones prejudiciales heterogéneas, es decir, aquellas cuestiones de naturaleza sustantiva (no procesal) distinta de la del proceso principal, que constituyen antecedentes lógicos de la sentencia. Si la cuestión prejudicial que se plantea en el proceso civil no es penal, el órgano civil conocerá también de ella (ésta es la llamada prejudicialidad no devolutiva) (art. 10.1 LOPJ). Sin embargo, si la cuestión es penal, determinará la suspensión del proceso principal civil, mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca (ésta es la prejudicialidad devolutiva) (arts. 10.2 LOPJ, 114 LECr y 362, 514 y 1804 LEC). En esta prejudicialidad devolutiva podría entenderse que existe la discrepancia de que mientras la LOPJ, la LECr y el art. 514 LEC establecen la suspensión del procedimiento civil en el estado en que se encontrara cuando se promueva la cuestión, el art. 362 LEC establece que la prejudicialidad penal provoca sólo la suspensión del fallo; sin embargo, la realidad es que el art. 362 habla de suspensión del fallo porque recoge el supuesto de que este caso de prejudicialidad devolutiva se produzca en el trámite de dictar sentencia (no en vano se encuentra encuadrado en la Sección Primera -dedicada a las sentencias- del Título VIII del Libro I de la LEC).

Contra la providencia que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la

2- COMPETENCIA INTERNACIONAL

La falta de competencia internacional del órgano jurisdiccional civil español supone otro límite jurisdiccional objetivo.

Por lo tanto, en el caso de que se presente un asunto civil con un elemento de extranjería, el órgano jurisdiccional deberá poseer además competencia internacional (es decir, el asunto deberá estar atribuido a la jurisdicción española). Ésta está regulada en lo relativo a esta materia civil en los tratados internacionales ratificados por España y en su defecto en el art. 22 LOPJ^{153*29}. Entre los tratados, el más importante es el Convenio de Bruselas sobre competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones civiles y comerciales de 27 de septiembre de 1968, en vigor en España desde el 1 de febrero de 1991. Tanto el Convenio de Bruselas como el art. 22 LOPJ, establecen el criterio general de atribución de competencia a los órganos y tribunales españoles del domicilio del demandado, aceptando asimismo la sumisión expresa y tácita.

Junto a estos criterios, recogen una serie de competencias exclusivas del Estado español y una serie de fueros alternativos en materias concretas a elección del demandante.¹⁵⁴

3- ARBITRAJE

El arbitraje es otro de los límites a la jurisdicción civil.

suspensión cabrá presentar recurso de apelación.”

¹⁵³ Para un amplio estudio del art. 22 LOPJ puede verse la obra de GONZÁLEZ GRANDA, P.; *Extensión y Límites de la Jurisdicción Española. Análisis sistemático del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*. JM Bosch Editor, 1992, Barcelona.

^{*29} Art. 36.1 Proyecto (art. 36.2.2º y 3º).

¹⁵⁴ Sobre el tratamiento procesal de la competencia internacional puede consultarse la obra de SANTOS VIJANDE, Jesús María; *Declinatoria y “Declinatoria Internacional”*. Tratamiento procesal de la competencia internacional. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1991, Madrid.

Por tanto, para que un órgano jurisdiccional civil entre a conocer del asunto (en este caso de un juicio verbal) debe también tenerse en cuenta que no exista entre las partes convenio arbitral, es decir, que no exista compromiso de resolución por árbitros o amigables compondores, ya que el arbitraje excluye la jurisdicción (art. 11.1 de la Ley de Arbitraje, de 6 de diciembre de 1988), a no ser que las partes hayan renunciado al mismo expresa o tácitamente (art. 11.2 de la Ley 36/1988).

c- DE LA ACTIVIDAD

Son los límites que afectan a los distintos aspectos de la actividad jurisdiccional: lugar, tiempo y forma.

1- TERRITORIALES

Por un lado, los órganos jurisdiccionales españoles sólo tienen jurisdicción, es decir, sólo pueden realizar actos procesales en territorio español (arts. 51 LEC, y 4 y 21.1 LOPJ). Para realizarlos fuera de España, se deberá recurrir a la cooperación o auxilio judicial internacionales, cuya regulación se contiene en los arts. 276 a 278 LOPJ y en el art. 300 LEC^{*30}. Sin embargo, el verdadero contenido del auxilio judicial internacional se encuentra en los tratados y, en su defecto, en el principio de reciprocidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas internas. Con carácter general se puede decir que el procedimiento para solicitar y recibir auxilio judicial internacional se lleva a cabo mediante

^{*30} En el Proyecto se halla en el art. 177:

“Artículo 177. Cooperación judicial internacional.

1. Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable.

2. A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles.”

las llamadas comisiones rogatorias a través de un sistema de comunicación directa entre los órganos interesados.

Por otro lado, cada órgano jurisdiccional concreto sólo puede realizar actos procesales (los cuales suponen la manifestación de su jurisdicción) en su circunscripción, en su sede y en su local, entendiendo por tales el territorio o demarcación donde puede realizar dichos actos, la población donde está situado y el edificio que ocupa, respectivamente. Fuera del territorio del órgano jurisdiccional hay que acudir a la técnica de la cooperación o auxilio judicial interno^{*31}, recogido en los arts. 273 a 275 LOPJ, y 284 y ss. LEC^{*32}. Este auxilio interno entre órganos jurisdiccionales españoles puede ser

^{*31} Ver al respecto el art. 129 Proyecto:

“Artículo 129. Lugar de las actuaciones del juicio.

1. Las actuaciones del juicio se realizarán en la sede del órgano jurisdiccional, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.
2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda, mediante auxilio judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia.

También podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

^{*32} En el Proyecto se recoge en los arts. 169 a 176:

“Artículo 169. Casos en que procede el auxilio judicial.

1. Los tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio en las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica.
2. Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede esta Ley de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas.
3. También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribunal que las haya ordenado, pero dentro del partido judicial o circunscripción correspondiente.

4. El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente.

Sólo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del Juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en el párrafo anterior.”

“Artículo 170. Órgano al que corresponde prestar el auxilio judicial.

Corresponderá prestar el auxilio judicial al Juzgado de Primera Instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse. No obstante lo anterior, si en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado de Paz, y el auxilio judicial consistiere en un acto de comunicación, a éste le corresponderá practicar la actuación.”

“Artículo 171. Exhorto.

preceptivo, cuando el acto tiene que realizarse fuera de la circunscripción del órgano, o discrecional, cuando tiene que llevarse a cabo fuera de la sede pero dentro de la

1. El auxilio judicial se solicitará por el tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido al tribunal que deba prestarlo y que contendrá:

1º La designación de los tribunales exhortante y exhortado.

2º La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.

3º La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores.

4º La indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa.

5º Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en la que éste finaliza.

6º Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos.

2. La expedición y autorización de los exhortos corresponderá al Secretario Judicial.”

“Artículo 172. Remisión del exhorto.

1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción.

2. No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser el propio litigante o Procurador habilitado para actuar ante el tribunal que deba prestar el auxilio.

3. Las demás partes podrán también designar Procurador habilitado para actuar ante el Juzgado que deba prestar el auxilio, cuando deseen que las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto les sean notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesada en el cumplimiento del exhorto, cuando no haya solicitado que se le entregue éste a los efectos previstos en el apartado anterior. Tales designaciones se harán constar en la documentación del exhorto.

4. Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante.”

“Artículo 173. Cumplimiento del exhorto.

El órgano jurisdiccional que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del plazo señalado.

Cuando no ocurriese así, el tribunal exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiere, el tribunal que haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno correspondiente al tribunal exhortado.”

“Artículo 174. Intervención de las partes.

1. Las partes y sus Abogados y Procuradores podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto.

No obstante, las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto sólo se notificarán a las partes que hubiesen designado Procurador para intervenir en su tramitación.

2. Si no se hubiera designado Procurador, no se harán a las partes otras notificaciones que las que exija el cumplimiento del exhorto, cuando éste prevenga que se practique alguna actuación con citación, intervención o concurrencia de las partes, y las que sean precisas para requerir de éstas que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel cumplimiento.”

“Artículo 175. Devolución del exhorto.

1. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción.

2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remitirán por correo certificado o se entregarán al litigante o al Procurador al que se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes.”

“Artículo 176. Falta de diligencia de las partes en el auxilio judicial.

circunscripción, en cuyo caso el órgano puede optar por trasladarse al lugar donde tenga que ser realizado el acto (art. 268.2 LOPJ) o bien comisionar a otro órgano de su mismo grado o inferior. El procedimiento que se sigue en el auxilio interno es a través de exhortos, que se pueden remitir por correo.

2- TEMPORALES

En cuanto a los límites de la jurisdicción que afectan a aspectos temporales de la actividad, podemos hacer referencia a que la jurisdicción sólo podrá intervenir en tanto estén vigentes las normas a que su implantación se debe.

En lo que respecta al tiempo de la actividad jurisdiccional, éste será analizado más adelante al tratar de los requisitos de la actividad en el juicio verbal (arts. 182 y ss. LOPJ), pero podemos mencionar ahora que en general se trata de una actividad jurisdiccional que tiende a una mayor rapidez que en el resto de procesos ordinarios, por ser uno de los principios que rigen el verbal el de la celeridad y brevedad.

3- FORMALES

Por razón de la forma existen límites de la jurisdicción, en cuanto que ésta sólo puede funcionar del modo que se establece en la CE y en las Leyes (arts. 4 LOPJ y 1 LEC), quedando por tanto fuera de su ámbito normal la posibilidad de dictar instrucciones de carácter general o particular (ni a sus inferiores) sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico (art. 12.3 LOPJ).

El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será corregido respecto del final del plazo establecido, respectivamente, en el apartado segundo del artículo 172 y en el apartado segundo del artículo anterior.”

En cuanto a la forma de los actos jurisdiccionales, también ésta será estudiada en el apartado de los requisitos de la actividad, aunque podemos ahora resaltar la oralidad que predomina en este proceso verbal (pues, como ya vimos, también éste es uno de los principios que lo rigen).

II- COMPETENCIA^{*33}

Junto a la jurisdicción, la competencia es otro de los requisitos que debe concurrir en el órgano jurisdiccional.

La competencia son las concretas atribuciones que corresponden a cada órgano jurisdiccional, y en nuestro Derecho existen tres criterios que sirven para determinarla, los cuales dan lugar a otros tantos tipos de competencia: objetiva, funcional y territorial.

A- COMPETENCIA OBJETIVA

Supone la atribución del conocimiento de un asunto a un grado determinado de la organización jurisdiccional, para conocer en 1ª o única instancia, en atención al objeto del proceso, es decir, atribución a un tipo o clase de Jueces, dentro de los que integran el orden jurisdiccional civil.

La competencia objetiva se determina a su vez por dos criterios distintos: por razón de la materia sobre la que versa el proceso (criterio que no se aplica a nuestro juicio verbal, pues afecta sólo a los procesos especiales) y por razón de la cuantía o valor de lo que el actor solicita (único criterio competencial objetivo en nuestro proceso de mínima cuantía) (art. 54 LEC).

^{*33} Se regula en los arts. 44 y ss. Proyecto.

En cuanto a la competencia objetiva por razón de la materia ya hemos dicho que este criterio no afecta a la determinación positiva del órgano competente de un juicio verbal ordinario, ya que como este criterio se centra en la materia sobre la que versa el proceso, el mismo sólo es aplicable a la determinación competencial de algunos procesos especiales^{*34}.

Se determina la competencia objetiva en el juicio verbal ordinario en cambio en función de la cuantía. Se entiende por cuantía el valor de lo que el actor o demandante pide en su demanda.

La determinación de este valor se lleva a cabo en aplicación de las reglas que se contienen en el art. 489 LEC, en el que se establecen hasta 17 criterios diferentes. La regla general es que el valor o cuantía de un proceso depende del valor o cuantía de la pretensión, y a su vez, la cuantía de la pretensión se establece combinando los dos elementos que la integran, es decir, la petición y el fundamento, en el lugar y en el tiempo en que la pretensión se deduce. Por tanto, esta regla general se concreta a lo largo de las 17 reglas del 489 LEC^{*35}.

^{*34} No sucede esto en el nuevo juicio verbal regulado por el Proyecto, ya que en los casos del art. 250.1 en que es aplicable el juicio verbal en función de criterios materiales, el órgano resultará competente en virtud de criterios también materiales.

^{*35} La nueva regulación para determinar la cuantía se encuentra en los arts. 251 y 252 Proyecto:

“Artículo 251. Reglas de determinación de la cuantía.

La cuantía se fijará según el interés económico de la demanda, que se calculará de acuerdo con las reglas siguientes:

1ª Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada.

2ª Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles, con independencia de que la reclamación se base en derechos reales o personales, se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase.

Para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, si no es posible determinar el valor por otros medios, sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que conste en el catastro.

3ª La anterior regla de cálculo se aplicará también:

1º A las demandas dirigidas a garantizar el disfrute de las facultades que se derivan del dominio.

2º A las demandas que afecten a la validez, nulidad o eficacia del título de dominio, así como a la existencia o a la extensión del dominio mismo.

3º A aquellas otras peticiones, distintas de las establecidas en los dos casos anteriores, en que la satisfacción de la pretensión dependa de que se acredite por el demandante la condición de dueño.

4º A las demandas basadas en el derecho a adquirir la propiedad de un bien o conjunto de bienes, ya sea por poseer un derecho de crédito que así lo reconoce, ya sea por cualquiera de los modos de adquisición de la propiedad, o por el derecho de retracto, de tanteo o de opción de compra; cuando el bien se reclame como objeto de una compraventa, tiene preferencia como criterio de valoración el precio pactado en el contrato, siempre que no sea inferior en el caso de los inmuebles a su valor catastral.

5º Cuando el proceso verse sobre la posesión, y no sea aplicable otra regla de este artículo.

6º A las acciones de deslinde, amojonamiento y división de la cosa común.

4ª En los casos en que la reclamación verse sobre usufructo o la nuda propiedad, el uso, la habitación, el aprovechamiento por turnos u otro derecho real limitativo del dominio no sujeto a regla especial, el valor de la demanda se fijará atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que gire el impuesto para la constitución o transmisión de estos derechos.

5ª El valor de una demanda relativa a una servidumbre será el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más de cinco años. En otro caso, se estimará por las reglas legales establecida para fijar el precio de su constitución al tiempo del litigio, cualquiera que haya sido el modo de adquirirla, y, a falta de ellas, se considerará como cuantía la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla segunda de este artículo sobre bienes muebles e inmuebles.

6ª En las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho real de garantía, el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos.

7ª En los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma.

8ª En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos.

Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo.

9ª En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo los que tienen por objeto la reclamación de rentas vencidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato. No obstante, cuando se reclame la posesión del bien arrendado se estará a lo dispuesto por la regla tercera de este artículo.

10ª En aquellos casos en que la demanda verse sobre valores negociados en Bolsa, la cuantía vendrá determinada por la media del cambio medio ponderado de los mismos, determinado conforme a la legislación aplicable durante el año natural anterior a la fecha de interposición de la demanda, o por la media del cambio medio ponderado de los valores durante el periodo en que éstos se hubieran negociado en Bolsa, cuando dicho periodo fuera inferior al año.

Si se trata de valores negociados en otro mercado secundario, la cuantía vendrá determinada por el tipo medio de negociación de los mismos durante el año natural anterior a la interposición de la demanda, en el mercado secundario en el que se estén negociando, o por el tipo medio de negociación durante el tiempo en que se hubieran negociado en el mercado secundario, cuando los valores se hayan negociado en dicho mercado por un periodo inferior al año.

El tipo medio de negociación o, en su caso, la media del cambio medio ponderado, se acreditará por certificación expedida por el órgano rector del mercado secundario de que se trate.

Si los valores carecen de negociación, la cuantía se calculará de acuerdo con las normas de valoración contable vigentes en el momento de interposición de la demanda.

11ª Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía consistirá en el coste de aquello cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que en este caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de instarse el cumplimiento, se pretende también la indemnización.

Una vez determinada la cuantía del proceso, y en función de ella, se atribuye la competencia objetiva (por razón de la cuantía) para conocer del juicio verbal: a los Juzgados de Paz hasta 8.000 pts. (48,081 Euros) en las poblaciones donde existieren y a los JPI desde 8.001 a 80.000 pts. (480,809 Euros) donde existieren los de Paz o hasta 80.000 donde no existieren (arts. 486 y 715 LEC)³⁶.

En relación a la cuantía, podemos plantear el problema de la posibilidad de reclamar en el proceso de ínfima cuantía una cosa litigiosa de un valor superior a 80.000

El importe o cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer, y ello incluso si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento.

12ª En los pleitos relativos a una herencia o a un conjunto de masas patrimoniales o patrimonios separados, se aplicarán las reglas anteriores respecto de los bienes, derechos o créditos que figuren comprendidos en la herencia o en el patrimonio objeto del litigio.”

“Artículo 252. Reglas especiales en casos de procesos con pluralidad de objetos o de partes.

Cuando en el proceso exista pluralidad de objetos o de partes, la cuantía de la demanda se calculará de acuerdo con las reglas siguientes:

1ª Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor. Idéntico criterio se seguirá para el caso de que las acciones estén acumuladas de forma eventual.

2ª Si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas. Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe si lo fuera.

Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos.

Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas.

3ª Cuando en una misma demanda se acumulen varias acciones reales referidas a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa.

4ª Cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación se tomará en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en que se estará al valor total de la misma. Si el importe de alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá éste del cómputo de la cuantía.

5ª No afectarán a la cuantía de la demanda, o a la de la clase de juicio a seguir por razón de la cuantía, la reconvencción ni la acumulación de autos.

6ª La concurrencia de varios demandantes o de varios demandados en una misma demanda en nada afectará a la determinación de la cuantía, cuando la petición sea la misma para todos ellos. Lo mismo ocurrirá cuando los demandantes o demandados lo sean en virtud de vínculos de solidaridad.

7ª Cuando la pluralidad de partes determine también la pluralidad de las acciones afirmadas, la cuantía se determinará según las reglas de determinación de la cuantía que se contienen en este artículo.

8ª En caso de ampliación de la demanda, se estará también a lo ordenado en las reglas anteriores.”

³⁶ Ahora será el JP hasta 15.000 pts. donde existiere (salvo los casos del art. 250.1) y el JPI en los casos del 250.1 y desde 15.001 a 500.000 donde exista JP o hasta 500.000 donde no exista (arts. 45 y 47).

pts.¹⁵⁵. A este efecto, pueden distinguirse tres casos: que ambas partes convengan en reducir dicho valor para así alterar el proceso aplicable y someterse al juicio verbal, en cuyo caso se trataría de un fraude de las normas competenciales, que al ser de orden público, no pueden modificarse por voluntad de las partes; que el demandante unilateralmente fragmente su pretensión en varias cuantías inferiores a 80.000 pts., para así acogerse a varios juicios verbales, en lugar de conocerse toda la reclamación en un proceso ordinario superior, lo cual supone asimismo fraude a las normas competenciales de cuantificación del objeto; o, por último, que el demandante renuncie al exceso, siendo tal renuncia al ejercicio de la acción por el resto totalmente lícita, conforme al art. 6.2 CC.. De los tres supuestos anteriores, deducimos que la limitación de la pretensión sólo es posible si se renuncia al exceso, y no en otro caso.

B- COMPETENCIA TERRITORIAL

Con arreglo a este criterio se atribuye el conocimiento de un asunto a un órgano jurisdiccional concreto, con preferencia frente a los del mismo grado.

Para determinar la competencia territorial en la mayoría de los procesos (no así en el verbal) la Ley establece dos criterios: el criterio convencional y el criterio de los fueros legales.

El criterio convencional se basa en la regla general de la prorrogabilidad de las normas que determinan la competencia territorial, lo que significa que, en principio, las partes son libres de establecer a través de la sumisión expresa o tácita los Jueces del lugar que deben conocer del asunto, bajo algunas condiciones, siendo la principal que el órgano tenga jurisdicción y competencia objetiva para conocer del mismo. Sin embargo, esta regla

¹⁵⁵ Problema explicado en parte por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 112 y 113; y por DE LA

de la sumisión (expresa y tácita), en principio vigente para cualquier tipo de proceso, se ha visto invalidada para el juicio que nos ocupa mediante el art. 717 LEC: "... sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero..."³⁷.

Por tanto, en el proceso de mínima cuantía o juicio verbal el fuero territorial es improrrogable, lo que significa que no cabe el acuerdo de las partes para establecer la competencia territorial.

Creemos acertada la supresión de la sumisión, pues en ciertos casos en que una de las partes tiene una especial posición y fuerza frente a la otra, como es el caso de las grandes compañías en sus contratos de adhesión frente a los consumidores y usuarios, puede manipularse la sumisión de manera que ésta llegue a ser una cláusula contractual abusiva para la parte débil¹⁵⁶, y especialmente en los asuntos de pequeña cuantía, en los que puede suponer un verdadero trastorno (sobre todo económico) el tener que desplazarse hasta el lugar impuesto por la parte preponderante. De esta guisa, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993) añade en su DA 1ª una DA (también 1ª) a la L. 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en cuyo apartado 27 estima como cláusula abusiva, y por tanto nula (según el art. 10 bis.2,

ESCALERA GAYÉ, Tratado...cit., pág. 43.

³⁷ Así sigue establecido en el art. 54.1 Proyecto donde se dice: "...Tampoco será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal".

¹⁵⁶ De tal opinión es también FERNÁNDEZ LÓPEZ, en su obra junto a DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo I, # 13, pto. 3, nota marginal nº 3, pág. 413: "En nuestro país y en el momento presente sería erróneo pensar que es más "progresista" o más adecuado al principio de autonomía de la voluntad otorgar naturaleza prorrogable a las normas de competencia territorial. Que ésta sea o no prorrogable, es una opción del Legislador que en nada atañe al principio dispositivo. Podría decirse incluso, que la prorrogabilidad de la competencia territorial conlleva un cierto arcaísmo en la concepción del proceso. Piénsese, por ejemplo, en la proliferación de contratos de adhesión, o en los contratos realizados por las entidades de crédito con un clausulado rígido y en los que la facultad de prorrogar la competencia territorial

también introducido en esta última Ley por la del 98), “la previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar de cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si fuera inmueble...”.

La justificación a la fijación de la competencia territorial de forma inderogable la ofrece la Exposición de Motivos de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal: “En materia de competencia territorial, se elimina como primera regla para determinarla la de la sumisión de las partes en determinados procesos. En efecto, los datos disponibles vienen demostrando que una muy notable proporción de los asuntos civiles dirimidos en algunas ciudades procede de otros partidos judiciales, residenciándose allí en virtud de pactos de sumisión que, sobre perjudicar generalmente al contratante más débil, distorsionan las cargas competenciales de algunos órganos jurisdiccionales en razón del único e inaceptable criterio de la comodidad de una de las partes”. Totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Fernández¹⁵⁷ cuando, en su análisis de este fragmento de la Exposición de Motivos, califica a las tres justificaciones expuestas de inadecuadas y no acertadas, ya que explica que la primera justificación es errónea porque “la protección de la parte apriorísticamente declarada “más débil” podría justificar la exclusión de la sumisión expresa –y no para el verbal ..., sino para todos los juicios-, pero en ningún caso la exclusión de la sumisión tácita (además de que debería venir acompañada con la fijación, como inderogable de la competencia del domicilio del demandado)”, mientras que el segundo argumento, verdadera razón de la reforma, expone, “es absolutamente extraprocesal y puede producir un efecto peor del que pretende evitar. De un lado porque el

puede provocar graves abusos que conduzcan de facto a una auténtica indefensión. Por ésta y otras razones, en la mayoría de los países europeos se tiende a convertir la competencia territorial en improrrogable”.

número de órganos jurisdiccionales de cada partido ha sido ya ajustado en función de la litigiosidad “real” y ésta incluye la que proviene de los pactos de sumisión expresa y tácita. De otro, porque la “descongestión” de “algunas ciudades” (fundamentalmente Madrid y Barcelona), sólo puede hacerse “congestionando” los partidos judiciales que se encuentran en la periferia o ámbito de influencia de esas ciudades y éstos están, como regla, aún más “congestionados” que los que se trata de descongestionar”. Por último, explica cómo la tercera justificación no es argumento alguno, pues así “lo pone de relieve el también reformado art. 71, pues ninguna razón, salvo la comodidad de quienes favorece, abona la peculiar norma de competencia territorial contenida en el art. 71 LEC”¹⁵⁸.

a- CRITERIO DE LOS FUEROS LEGALES

El criterio de los fueros legales es el único criterio determinante de la competencia territorial en el juicio verbal, pues ya hemos visto que el convencional no es aplicable en él, en virtud del art. 717 LEC; se trata de reglas legales para la atribución de dicha competencia y se encuentran en los arts. 62, 63 y 71 LEC^{*38}.

¹⁵⁷ FERNÁNDEZ LÓPEZ, en su obra con DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo I, # 13, pto. 4, nota marginal nº 4, págs. 414 y 415.

¹⁵⁸ Recordemos que actualmente esta norma competencial es recogida prácticamente de forma idéntica por el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

^{*38} En el Proyecto existe un fuero general para las personas físicas (art. 50), un fuero general para personas jurídicas y entes sin personalidad (art. 51), y una serie de fueros especiales para los supuestos de los arts. 249.1 y 250.1 (art. 52), complementado con una norma para determinar la competencia en el caso de acumulación de acciones y caso de pluralidad de demandados (art. 53):

“Artículo 50. Fuero general de las personas físicas.

1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho territorio.

2. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.

3. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.”

“Artículo 51. Fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad.

1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

2. Los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad."

"Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

1º En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles será tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.

2º En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor.

3º En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.

4º En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.

5º En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en que estos residan.

6º En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.

7º En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.

8º En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en que radique la finca.

9.º En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños.

10. En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del domicilio social.

11. En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.

12. En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.

13. En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.

14. En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.

15. En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial.

En el art. 62 se establecen los fueros generales, que se ordenan en función de la naturaleza jurídica de la acción que se ejercita en el proceso:

- si la acción es personal, es competente el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y en su defecto (si no se ha establecido lugar) el del domicilio del demandado, o el lugar de celebración del contrato, a elección del demandante; si la demanda tiene que dirigirse contra varios demandados que tienen su domicilio en lugares distintos, cuando no exista lugar destinado al cumplimiento de la obligación, será competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante;

- si se ejercita una acción real, hay que distinguir según su objeto sea un bien mueble o semoviente, o un bien inmueble. Si es mueble o semoviente, la competencia se atribuye al lugar donde se encuentren, o el domicilio del demandado a elección del demandante. Si es inmueble, será competente el Juez del lugar donde éste se encuentre, y si la acción se ejercita sobre varias cosas inmuebles o sobre una, pero que esté situada sobre distintas circunscripciones, será competente el Juez de cualquiera de los lugares en cuya circunscripción se halle, a elección del demandante;

- si se ejercita una acción mixta, será competente el Juez del lugar donde se encuentren los bienes, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

2. Cuando las normas del apartado anterior de este artículo no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente.”

“Artículo 53. Competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados.

1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquél que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente.

2. Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.”

El art. 63 establece los fueros legales especiales para 27 casos determinados, sobre todo de procesos especiales (y por tanto, no aplicables al juicio verbal, salvo el 63.4º, relativo a la demanda reconvenzional).

Por último, el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, establece competentes para los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, a los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en capital de provincia, Ceuta o Melilla, y, según la Disposición Adicional 4ª.3 de dicha Ley, en los que sean parte las CC.AA. o entidades de Derecho público dependientes de las mismas, además de a los anteriores, también a los de la capital de la CA correspondiente, en el caso de que la misma no sea capital de provincia. Como vemos, ésta es la antigua norma de competencia que establecía el art. 71 LEC, que ha sido derogado por esta Ley de 1997, mediante su Disposición Derogatoria única apartado b), en sus párrafos II, III y IV.

b- ALTERACION POR CONEXIÓN

La conexión¹⁵⁹ (acumulación de materias litigiosas por identidad de alguno o algunos de sus elementos) puede ser una causa modificadora de la competencia en el sentido de que, cuando se da, produce, además de otros efectos, la competencia (*forum connexitatis*) a favor del Juez que la tenga para conocer de aquellos extremos que guardan conexión con el discutido. La Ley no la regula expresamente, sino que da sólo indicaciones fragmentarias sobre ella al ordenar la competencia y, con más amplitud, la figura de la acumulación^{*39}.

¹⁵⁹ Seguimos en esta figura procesal a lo dicho de ella por GUASP, en su obra *Derecho...cit.*, Tomo I, págs. 126 y 127.

^{*39} Ver en la nota anterior el art. 53.1 Proyecto.

Para conocer los desplazamientos que la conexión produce en la determinación normal de la competencia deben distinguirse tres hipótesis:

- Si ninguna de las materias conexas ha sido hasta entonces deducida en un proceso, la competencia para entender de ellas la tiene el Juez que deba conocer de la materia principal, a la que se subordina la accesoria, criterio que, a falta de una expresa declaración general de la Ley, ha sido construido por la jurisprudencia del TS. El carácter principal o accesorio se fija, a su vez, atendiendo a razones de calidad o naturaleza, a razones de cantidad o número, y en su defecto a elección del demandante.

- Si una de las materias conexas ha sido ya deducida en un proceso y otra no, entonces el Juez competente para conocer de la primera adquiere también competencia para intervenir en la segunda.

- Finalmente, si las varias materias conexas han sido ya deducidas en procesos distintos, el Juez competente para conocer de ellas será el que primero hubiera comenzado a actuar (*forum praeventionis*), a no ser que alguna de las materias goce de *vis attractiva* (art. 171 LEC).

La conexión no puede modificar los criterios delimitadores de la jurisdicción, ni tampoco, en principio, los de la competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía (arts. 153, 154.2º y 3º, 63.4º y 715 LEC), ni la competencia funcional (165 LEC). Sin embargo, la competencia objetiva por razón de la cuantía puede quedar alterada en cuanto a su cifra mínima, de forma que un asunto de hasta 80.000 pts., en principio atribuible en juicio verbal al JPI (o Juez de Paz hasta 8.000), podría ser conocido por un órgano superior, en función de su conexión con otro asunto y según el valor total de lo acumulado (arts. 155 y 63.4º LEC). También modifica la competencia territorial.

C- COMPETENCIA FUNCIONAL

En la medida en que a lo largo de un procedimiento pueden intervenir varios órganos jurisdiccionales simultánea o sucesivamente, se hace preciso determinar a qué órgano corresponde conocer de cada cuestión procesal.

Por tanto, la competencia funcional es aquel criterio por el cual se atribuye a un órgano jurisdiccional el conocimiento de un aspecto parcial de un proceso pendiente. Éste es el motivo de que la competencia funcional no sea determinante del aspecto general del proceso, sino de determinados actos en concreto, por lo que no trataremos en este momento el criterio de la competencia funcional, sino que lo iremos exponiendo en cada uno de los aspectos procesales en que su análisis se haga necesario.

Sin embargo, a modo de adelanto general, podemos apuntar que a la competencia funcional se refiere la Ley en el art. 55 LEC, del cual se puede derivar la regla de que el Juez que es competente para conocer de la acción (es decir, el que posee competencia objetiva y territorial), es competente también para conocer de las excepciones y de todas las incidencias que se produzcan en un proceso. Además, de este art. 55 se pueden señalar otros criterios de competencia funcional, y en concreto iremos viendo quién es competente para conocer de los recursos, llevar a cabo la ejecución de la sentencia, y resolver las cuestiones de competencia en un juicio verbal^{*40}.

^{*40} El artículo que regula esta cuestión en el Proyecto es el 61:

“Artículo 61. Competencia funcional por conexión.

Salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.”

2- DE LAS PARTES¹⁶⁰

A continuación nos fijaremos, tras los requisitos que deben concurrir en el órgano jurisdiccional para entrar a conocer de un juicio verbal, en los que deben concurrir en los otros sujetos del proceso, es decir, en las partes, demandante y demandado, o dicho de otro modo, en quien pretende y frente a quien se pretende.

I- CAPACIDAD

Es éste el primero de los requisitos de las partes. Se divide en capacidad para ser parte y capacidad procesal.

A- CAPACIDAD PARA SER PARTE^{*41}

Se trata de la aptitud genérica para poder actuar en un proceso.

La regla general es que goza de esta aptitud genérica toda persona física o jurídica, ya que equivale a la personalidad jurídica del Derecho Civil.

Por tanto, tratándose de personas físicas (o naturales) tendrán capacidad para ser parte quienes tengan personalidad de acuerdo con lo expuesto en el Código Civil (arts. 29,

¹⁶⁰ Para los requisitos de las partes hemos seguido a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 169 y ss..

^{*41} La capacidad para ser parte se halla recogida en el art. 6 Proyecto:

“Artículo 6. Capacidad para ser parte.

1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

1º Las personas físicas.

2º El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.

3º Las personas jurídicas.

4º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.

5º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.

6º El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.

7º Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades, que no habiendo cumplido los requisitos

30 y 32 CC), es decir, todo nacido con figura humana que viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno (teniendo en cuenta en la aplicación de estos artículos lo dispuesto en el art. 7.1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 y publicada en el BOE de 5-1-91). El no nacido (*nasciturus*) también tendrá personalidad jurídica para los efectos que le sean favorables, siempre que posteriormente nazca con las mencionadas condiciones. Por ello, se plantea la cuestión de si podría dirigirse la demanda contra el *nasciturus*: parece que no, pues sería considerarle nacido para un efecto desfavorable¹⁶¹; también podría discutirse si la posición de demandante podría traer a los *nascituri* algún efecto desfavorable como la imposición de costas, lo que haría cuestionarse esta posibilidad para el concebido no nacido. Por otro lado, la personalidad jurídica se extinguirá con la muerte de la persona.

En cuanto a las personas jurídicas, éstas tendrán capacidad para ser parte desde el momento en que con arreglo a Derecho queden válidamente constituidas (arts. 35 y 38 CC). Puede distinguirse en ellas, las que son de Derecho público (Estado, CC.AA., Provincia, Municipio, Iglesia, Servicios públicos autónomos...), y las que son de Derecho privado (sociedades civiles, art. 35 CC; sociedades mercantiles; arts. 35 CC y 116 CCo; y sociedades de hecho aceptadas por la jurisprudencia del TS).

Existen, sin embargo, entes que sin tener personalidad jurídica propia reconocida, actúan de hecho con independencia de los elementos particulares que los integran. Son las llamadas uniones sin personalidad (por ejemplo, las Juntas o Comités) y las masas de bienes (p. ej., la herencia yacente o la masa de bienes de un concurso o quiebra). De ellas

legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.”

no puede decirse que tengan capacidad para ser parte, pues son entes sin personalidad, pero actuarán en su sustitución los sujetos más especialmente relacionados con ellos (los dirigentes de la Junta o Comité, los administradores del concurso, el síndico de la quiebra, el albacea de la herencia yacente), y no como representantes, sino como sustitutos de los titulares futuros e indeterminados de las relaciones jurídicas en juego¹⁶².

Caso especial es el de la llamada propiedad horizontal, en la que, la comunidad de propietarios, sin gozar de personalidad jurídica, actúa representada por el Presidente de la misma, de acuerdo con el art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, de 21 de julio de 1960, reformada por Ley 8/1999, de 6 de abril (STS 15-1-88).

¹⁶¹ De tal opinión es también DE LA OLIVA SANTOS, en su obra junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho...cit., Tomo I, # 15, pto. 12, pág. 486.

B- CAPACIDAD PROCESAL^{*42}

Es la aptitud específica para actuar en un proceso.

La capacidad procesal equivale a la capacidad de obrar del Derecho Civil.

A este requisito se refiere el art. 2 LEC, cuando dispone que sólo podrán comparecer en juicio quienes estén en la plenitud de sus derechos civiles, lo que significa que, tratándose de personas físicas, tendrán capacidad procesal los mayores de edad (18 años) o emancipados que no estén incapacitados por una sentencia judicial (arts. 2 LEC y 315 CC).

Acabamos de decir que a los mayores de edad se equiparan los emancipados, los cuales pueden serlo por matrimonio (art. 314.2º CC), por concesión de quienes ejerzan la patria potestad (art. 314.3º CC), o por concesión judicial (arts. 314.4º y 321 CC).

¹⁶² Un desarrollo más amplio puede encontrarse a cargo de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 172 y ss.; y DE LA OLIVA SANTOS, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, en Derecho...cit., Tomo I, págs. 487 y ss..

^{*42} La capacidad procesal se regula en los arts. 7 y 8 Proyecto:

“Artículo 7. Comparecencia en juicio y representación.

1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del párrafo anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley.
3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.
4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4.º del apartado primero del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 5º del apartado primero del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7.º del apartado primero y el apartado segundo del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.”

“Artículo 8. Integración de la capacidad procesal

1. Cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado segundo del artículo anterior y no hubiere persona que legalmente le represente o asista para comparecer en juicio, el tribunal le nombrará, mediante providencia, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior y en los demás en que haya de nombrarse un defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste hasta que se produzca el nombramiento de aquél.

En todo caso, el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal.”

En el caso de que alguna parte careciera del pleno ejercicio de la capacidad procesal, habrá de actuar a través de sus representantes legales (art. 2 LEC). En concreto, deben actuar por medio de representante que supla su incapacidad procesal: los hijos no emancipados que se hallen bajo la potestad de padre y madre (arts. 154.2º y 162 CC), los hijos declarados incapaces por enfermedad o deficiencias de carácter físico o psíquico (art. 171 CC), y los demás supuestos en que se necesita tutor y que se recogen en los arts. 213, 225 y 262 CC.

En cuanto a la sustitución, será: del representante cuando se trate de no emancipados con intereses opuestos (art. 181 CC), ausencia legal (art. 183 CC), causantes de hecho (art. 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal); y en sustituciones especiales, como hasta la constitución del órgano representativo (art. 2º EOMF) y en el proceso de incapacitación (art. 207 CC).

Cuando se trata de personas jurídicas, no se trata de suplir la incapacidad, sino de que éstas deberán actuar siempre a través de sus representantes necesarios: el Estado, organismos autónomos y órganos constitucionales¹⁶³ por medio de Letrados integrados en los servicios jurídicos del Estado o, en su caso, por Abogado especialmente designado al efecto (art. 447.1 LOPJ); las CC.AA. y Entes Locales a través de Letrados integrados en los servicios jurídicos de dichas Administraciones Públicas o, en su caso, por Abogado colegiado (art. 447.2 LOPJ), aunque las CC.AA. pueden también actuar por Abogado del Estado, a través de los términos que se establezcan reglamentariamente (arts. 447.2 LOPJ y 1.3 Ley 52/1997, de 27 de noviembre); la Administración de la Seguridad Social a través de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (art. 1.2 Ley 52/1997, de 27 de noviembre); las corporaciones no territoriales, por los que determinen sus estatutos (art. 37

CC); las entidades públicas empresariales reguladas en el Capítulo III del Título III y Disposiciones Adicionales 8ª, 9ª y 10ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por medio de Abogado del Estado (si existe el oportuno convenio), salvo que sus disposiciones específicas establezcan otra previsión al efecto (art. 1.4 Ley 52/1997, de 27 de noviembre); la Iglesia, formada por distintas personas jurídicas, por el que sea el Superior dentro de cada una de ellas (Canon 113 del Código Canónico de 25 de enero de 1983); las asociaciones por quien determinen sus estatutos (art. 37 CC); las fundaciones por quien dispongan las reglas de su institución (art. 37 CC); y las personas jurídicas de Derecho privado, dependiendo del tipo de sociedad, si son colectivas o comanditarias ver art. 148 CCo., y si son anónimas el art. 76 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989.

II- LEGITIMACION EN CAUSA^{*43}

Es el segundo requisito que debe concurrir en las partes procesales para poder actuar en juicio.

Puede definirse como la vinculación específica que une a las partes con el objeto en un proceso concreto¹⁶⁴.

Es posible clasificarla en función de varios criterios: por la posición de las partes, por el objeto, por el momento de nacimiento del derecho y obligación, o por la pluralidad de sujetos.

¹⁶³ En general, estos supuestos se regulan en el Capítulo I de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

^{*43} Se halla regulada en los arts. 10 y ss. Proyecto.

¹⁶⁴ Concepto tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 176 y ss., y ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 173 y ss..

Por la posición de las partes, es decir, según se trate de la legitimación de una u otra parte, será ésta activa o pasiva. Será activa cuando se trata de la legitimación del demandante o parte actora, es decir, la necesidad de que la demanda sea propuesta por determinada persona. Será pasiva cuando nos referimos a la legitimación del demandado, o dicho de otro modo, la necesidad de que la demanda sea dirigida frente a determinada persona.

También puede clasificarse por el objeto, es decir, en función de la relación de la parte (demandante o demandado) con el objeto del proceso: será entonces directa o indirecta.

La legitimación será directa cuando corresponde con la titularidad activa o pasiva, según se trate de la titularidad del demandante o demandado, de la relación jurídica deducida en el litigio de que se trate^{*44}. De este modo, lo más normal es que la legitimación activa del demandante coincida con la titularidad de un derecho subjetivo y la pasiva del demandado con la titularidad de una obligación, aunque esto no siempre es así. Un caso especial de legitimación en parte directa es aquel en el que más que una titularidad plena lo que se tiene es una apariencia de titularidad, ya que no se actúa en función de un derecho, sino de un interés legítimo, individual o colectivo, protegido por los arts. 24.1 CE (“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”) y 7.3 LOPJ (“Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente

habilitados para su defensa y promoción”)^{165*45}. Así por ejemplo, en la STC 214/1991, de 11 de noviembre, una demandante judía es considerada legitimada para ejercitar una acción de protección civil del derecho al honor, por poseer interés legítimo para ello debido a su condición de miembro del pueblo judío (grupo o ente sin vinculación jurídica)¹⁶⁶.

En cuanto a la legitimación indirecta, existen otros casos en que el ordenamiento jurídico admite que una persona pueda actuar como parte en un proceso concreto, aunque no sea titular directo o sujeto de la relación jurídica. Esto puede ocurrir en dos hipótesis

^{*44} Esto es lo que se establece en el art. 10 Proyecto.

¹⁶⁵ Véase en este punto la monografía de BUJOSA VADELL, L.; La Protección Jurisdiccional de los Intereses de Grupo. JM Bosch Editor, 1995, Barcelona.

^{*45} Lo relativo a este punto se recoge en los arts. 11 y 15 Proyecto:

“Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.”

“Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.

1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la

distintas: la representación voluntaria y la sustitución procesal. En la representación voluntaria o apoderamiento el legitimado indirecto (apoderado) actúa en nombre del verdadero sujeto de la relación jurídica (poderdante) (art. 1709 CC). A través de la sustitución procesal¹⁶⁷ el legitimado indirecto (sustituto) no actúa en nombre ajeno, sino en nombre propio; de esta forma, el sustituto, que es la verdadera parte procesal (y no el sustituido), defiende intereses que pertenecen a quien no puede o no quiere hacerlos valer, por no estar aún determinado el verdadero titular o por inacción o negligencia, protegiendo al mismo tiempo, con ello, un interés propio (como en los supuestos de los arts. 507, 1111 y 1869 CC)^{*46}.

personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta Ley.”

¹⁶⁶ Con mayor detalle se recoge este caso en GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 179.

¹⁶⁷ En este punto consultar, entre otras, la monografía de RAMOS MÉNDEZ, Francisco; La Sucesión Procesal. 1974, Barcelona.

^{*46} La sucesión procesal se regula en los arts. 16 a 18 Proyecto:

“Artículo 16. Sucesión procesal por muerte.

1. Cuando se transmita «mortis causa» lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste, a todos los efectos.

Comunicada al tribunal, por cualquier parte o por su sucesor, la defunción de cualquier litigante, el tribunal suspenderá el proceso y, previo traslado a las demás partes, acreditados la defunción y el título sucesorio y cumplidos los trámites pertinentes, tendrá, en su caso, por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teniéndolo en cuenta en la sentencia que se dicte.

2. Cuando la defunción de un litigante conste al tribunal y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, se permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días.

Acordada la notificación, se suspenderá el proceso hasta que comparezcan los sucesores o finalice el plazo para la comparecencia.

3. Cuando el litigante fallecido sea el demandado y las demás partes no conocieren a los sucesores o éstos no pudieran ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguirá adelante declarándose la rebeldía de la parte demandada.

Si el litigante fallecido es el demandante y sus sucesores no se personan por cualquiera de las dos primeras circunstancias expresadas en el párrafo anterior, se entenderá que ha habido desistimiento, salvo que el demandado se opusiere, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 20.

Si la no personación lo es por la tercera circunstancia enumerada, se entenderá que la parte demandante renuncia a la acción ejercitada.”

“Artículo 17. Sucesión por transmisión del objeto litigioso.

1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El tribunal proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las actuaciones y oír por diez días a la otra parte.

Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el tribunal, mediante auto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él.

La legitimación en función del nacimiento del derecho u obligación, es decir, de la relación jurídica, puede ser clasificada en originaria y derivativa. La legitimación será originaria cuando el derecho u obligación tiene su origen en la persona del titular que lo ejercita (art. 504 LEC, en relación con el art. 522). La legitimación será derivada o derivativa cuando se afirma ser titular de un derecho u obligación que originariamente pertenecía a otra persona, pero que se ha transmitido de modo singular o universal (art. 503, en relación con el 522 LEC).

En cuanto a la pluralidad de sujetos¹⁶⁸, puede ocurrir que concurren en una misma posición jurídica de parte activa y/o pasiva más de una persona legitimada en igual medida en el proceso, surgen, por un lado, el llamado litisconsorcio (activo, pasivo o mixto)¹⁶⁹, el cual puede ser voluntario o forzoso, y por otro, la intervención de terceros, principal o provocada; si por el contrario esa pluralidad de partes legitimadas no lo está en igual medida, nos encontramos ante la intervención adhesiva^{170*47}.

2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposición a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolverá por medio de auto lo que estime procedente. No se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvencción, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa.

Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente continuará en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos.”

“Artículo 18. Sucesión en los casos de intervención provocada.

En el caso a que se refiere la regla 4ª del apartado segundo del artículo 14, de la solicitud presentada por el demandado se dará traslado a las demás partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco días, decidiendo a continuación el tribunal, por medio de auto, lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o no de la sucesión.”

¹⁶⁸ Más ampliamente se recoge este tema en GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 190 y ss.

¹⁶⁹ Sobre el litisconsorcio puede leerse, entre otros trabajos, el de SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel; Concepto y Regulación Positiva del Litisconsorcio, en “Revista de Derecho Procesal”, 1971, págs. 573 y ss..

¹⁷⁰ Véase la monografía de MONTERO AROCA, Juan; La Intervención Adhesiva Simple. 1982, Barcelona.

*47 En cuanto a la pluralidad de sujetos pueden encontrarse en el Proyecto los arts. 12 a 15:

“Artículo 12. Litisconsorcio.

1. Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir.

2. Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.”

“Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados.

1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.

En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos.

2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.

3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.”

“Artículo 14. Intervención provocada.

1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1ª El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, antes del día señalado para la vista.

2ª El tribunal oír al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que proceda. Acordada la notificación, se emplazará al tercero para contestar a la demanda en la misma forma y en idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del demandado. Si se tratase de un juicio verbal, el tribunal por medio de providencia hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.

3ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda quedará en suspenso desde la solicitud a que se refiere la regla 1.ª y se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.

4ª Si comparecido el tercero, el demandado considerare que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.”

“Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.

1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la

En el litisconsorcio voluntario la pluralidad de partes está igualmente legitimada para actuar en el proceso. Al litisconsorcio voluntario se refiere el art. 156 LEC cuando dice que “podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir”. Es precisamente el término “podrán” el que sirve para reconocer el carácter facultativo o voluntario de este litisconsorcio, que tiene su fundamento en el principio de economía procesal. Aunque la Ley parece exigir como único requisito que las acciones se basen en un mismo título o causa, se ha entendido por la jurisprudencia que al litisconsorcio voluntario le son de aplicación las reglas del art. 154 LEC, relativo a la acumulación de acciones. Según este último artículo, no podrán acumularse: las acciones que se excluyan mutuamente; las que tengan que sustanciarse en procesos de distinta naturaleza; y aquellos casos en los que el Juez que sea competente para conocer de la acción principal, sea incompetente para conocer de las acciones acumuladas. El litisconsorcio voluntario determina la unidad, pero no la uniformidad de las actuaciones procesales, lo que significa que aunque se trata de un proceso único que será resuelto en una única sentencia, las partes no necesariamente tienen que actuar de forma coordinada. Así, por ejemplo, las alegaciones y las pruebas que formulen favorecen o perjudican sólo a quien las realiza.

También en el litisconsorcio necesario o forzoso la pluralidad de partes actuantes en una misma posición jurídica está legitimada en igual medida. Se produce cuando es la Ley la que exige la existencia de esta pluralidad, y su fundamento es doble: evitar resoluciones contradictorias que podrían ser dictadas si se plantearan procesos diferentes (éste es el principio de armonía procesal); evitar la indefensión o vulneración del principio de

personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos

audiencia en la medida en que podrían quedar alcanzadas por los efectos de la sentencia personas que no fueran oídas en el proceso por no haber sido demandadas. El litisconsorcio forzoso puede ser propiamente o impropiaamente necesario.

Cuando tiene su origen en una norma de Derecho material, al litisconsorcio necesario se le denomina litisconsorcio legal o propiamente necesario (ej.: art. 1139 CC, según el cual la deuda en las obligaciones indivisibles sólo podrá hacerse efectiva procediendo contra todos los deudores). La actuación realizada por uno de los litisconsortes que produzca efectos favorables repercutirá a los demás, mientras que los actos que sean perjudiciales sólo perjudicarán a su causante. El problema principal del litigio radica en que la jurisprudencia del TS ha ido aumentando los casos en que las demandas deben plantearse forzosamente contra varias personas.

Al litisconsorcio que viene impuesto jurisprudencialmente se le denomina litisconsorcio impropiaamente necesario. Algunos de los casos creados jurisprudencialmente que pueden afectar al juicio verbal, son: si se trata de impugnar la validez de un testamento, habrá que demandar a todos los coherederos; si se pretende declarar la nulidad de un acto o de un contrato en que hayan intervenido varias personas habrá que demandar a todas; en los casos de cotitularidad de derechos habrá que presentar la demanda frente a todos si la sentencia pudiera afectarles. El único punto donde quiebra la jurisprudencia es el relativo a las obligaciones solidarias, en las que se permite plantear la demanda contra uno sólo. De los anteriores casos podemos sacar aspectos comunes por los que se establece siempre un litisconsorcio impropiaamente necesario: cuando existan varias personas que puedan resultar afectadas o alcanzadas por el fallo (SSTS de 29-5-81 y de 5-11-85), o tengan interés legítimo y evidente en el resultado del pleito, o tengan interés

puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta Ley.”

en impugnar las peticiones del actor (STS de 3-10-77), o cuando existan varios implicados en una relación jurídica que sea inescindible o indivisible (STS de 10-3-80).

Por último, la intervención de terceros es otro tipo de pluralidad de sujetos. En sentido técnico, terceros son aquellas personas que sin ser en principio parte de un proceso, poseen un interés jurídicamente protegible en el objeto y resultado del pleito. Puede ser provocada o voluntaria (principal o adhesiva).

La intervención provocada tiene lugar cuando la intervención del tercero se produce a instancia de alguna de las partes, de forma que la persona hasta entonces ajena al proceso es llamada por el demandante o por el demandado. A esto se le denomina litisdenunciación. Estos son los casos más relevantes que existen en nuestro Derecho: en garantía, hecha por el comprador al vendedor en caso de que alguien demande la titularidad de la cosa vendida (1482 CC); la hecha por el coheredero demandado al resto de los coherederos no demandados, cuando el acreedor exige el pago de la totalidad de la deuda a uno sólo de los coherederos (1084.2 CC); y la realizada por el usufructuario o arrendatario al propietario de la cosa, convirtiéndose este último, si se persona, en litisconsorte activo o pasivo, según la posición procesal del usufructuario o arrendatario (511 y 1559 CC).

La intervención voluntaria principal consiste teóricamente en la afirmación por parte del tercero de que él es el titular del objeto litigioso, o que posee un derecho preferente sobre él. La concurrencia de sujetos en una misma posición jurídica también se produce en un plano de igualdad. Esta intervención no está admitida en nuestro Derecho, aunque lo que sí se admite es, en la fase de ejecución, las llamadas tercerías de dominio o de mejor derecho (arts. 1532 y 1543 LEC). En lo que respecta al juicio verbal, en él no cabrán tercerías que excedan de la cuantía límite de la competencia del Juez que esté

conociendo de la ejecución (trataremos de las tercerías en el verbal al llegar a la fase de ejecución) (arts. 715 y 739), y si son incidentales de otro juicio, se ventilarán por el verbal si corresponde según la naturaleza o cuantía de la cosa litigiosa (arts. 488 y 716.1º).

La intervención voluntaria adhesiva se produce cuando un tercero, al que se denomina coadyuvante, apoya la posición jurídica del demandante o demandado. La intervención del coadyuvante puede tener lugar desde el momento en que se presenta la demanda hasta que la sentencia adquiere firmeza. La única característica importante es que el coadyuvante no puede actuar con independencia de la parte, ya que es un caso de pluralidad de partes subordinadas, es decir, la parte y el coadyuvante que concurren en la misma posición procesal no están en un plano de igualdad.

III- POSTULACION

Éste es el tercer y último requisito a concurrir en las partes procesales, junto a la capacidad y legitimación.

La regla general es que se descompone en representación técnica (Procurador) y asistencia letrada (Abogado) y que tanto uno como otro aspecto son necesarios para actuar en juicio. Sin embargo, una de las excepciones que la LEC recoge es la del juicio verbal, en el que ni la representación técnica del Procurador, ni la asistencia letrada del Abogado son preceptivas (arts. 4.2º y 10.2º LEC)^{*48}, de forma que las partes pueden comparecer por sí mismas, pues ya recae en ellas el tercer requisito de la postulación sólo con reunir los dos primeros (capacidad y legitimación). Esto parece tener su explicación en que el juicio

^{*48} Esto es también así en el Proyecto de nueva LEC, pero sólo para los juicios verbales que no excedan de 150.000 pts. (arts. 23.2.1º y 31.2.1º). En esos casos el litigante sólo podrá comparecer por sí mismo o a través de Abogado o Procurador (art. 31.3 Proyecto).

verbal no entraña, en principio, dificultad técnica alguna que requiera la intervención de Procurador y Abogado, pues se trata del proceso civil declarativo ordinario más sencillo.

A pesar de la facultativa postulación en el juicio verbal, creemos que, en caso de utilización de la misma por parte de la parte demandante, debería facilitarse a la contraria la misma intervención profesional, conforme al principio de “igualdad de armas procesales”, derivado del de igualdad ante la Ley (art. 14 CE), pues en caso contrario puede producirse indefensión (art. 24.1 CE).

A- REPRESENTACION TECNICA^{*49}

^{*49} Como resumen, podemos apuntar que la representación técnica es no preceptiva en los juicios verbales sólo hasta 150.000 pts. (art. 23.2.1º Proyecto), pero si se hace uso de ella solamente podrá ser representante el Procurador legalmente habilitado para actuar ante el tribunal de que se trate (ya no se contempla la posibilidad de la representación mediante factor mercantil). En este último caso, se mantiene la no inclusión de los derechos del Procurador en las costas si se condena al que no se valió de él, salvo si el domicilio de la parte representada es distinta del lugar en que se tramita el juicio (con las limitaciones del art. 394.3) o si el Juez aprecia temeridad en la conducta del condenado (art. 32.5). Se añaden además otras normas relativas a la representación por Procurador:

“Artículo 24. Apoderamiento del Procurador.

1. El poder en que la parte otorgue su representación al Procurador habrá de estar autorizado por Notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del tribunal que haya de conocer del asunto.
2. La escritura de poder se acompañará al primer escrito que el Procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento «apud acta» deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación.”

“Artículo 25. Poder general y poder especial.

1. El poder general para pleitos facultará al Procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquéllos.

El poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente.

2. Será necesario poder especial:

1º Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.

2º Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3º En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.

3. No podrán realizarse mediante Procurador los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse personalmente por los litigantes.”

“Artículo 26. Aceptación del poder. Deberes del Procurador.

1. La aceptación del poder se presume por el hecho de usar de él el Procurador.

2. Aceptado el poder, el Procurador quedará obligado:

1º A seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las causas expresadas en el artículo 30.

2º A transmitir al Abogado elegido por su cliente o por él mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.

Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, hará lo que requiera la naturaleza o índole del asunto.

3º A tener al poderdante y al Abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los Procuradores de las demás partes.

4º A trasladar los escritos de su poderdante y de su Letrado a los Procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el artículo 276.

5º A recoger del Abogado que cese en la dirección de un asunto las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.

6º A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada.

7º A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los Abogados.”

“Artículo 27. Derecho supletorio sobre apoderamiento.

A falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el Procurador, regirán las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil aplicable.”

“Artículo 28. Representación pasiva del Procurador.

1. Mientras se halle vigente el poder, el Procurador oír y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.

2. También recibirá el Procurador, a efectos de notificación y plazos o términos, las copias de los escritos y documentos que los Procuradores de las demás partes le entreguen en la forma establecida en el artículo 276.

3. En todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existirá un servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores. La recepción por dicho servicio de las notificaciones y de las copias de escritos y documentos que sean entregados por los Procuradores para su traslado a los de las demás partes, surtirá plenos efectos. En la copia que se diligencie para hacer constar la recepción se expresará el número de copias entregadas y el nombre de los Procuradores a quienes están destinadas.

4. Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona.”

“Artículo 29. Provisión de fondos.

1. El poderdante está obligado a proveer de fondos al Procurador, conforme a lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato.

2. Si, después de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su Procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél apremiado a verificarlo.

Esta pretensión se deducirá en el tribunal que conozca del asunto, el cual dará audiencia al poderdante por el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.”

“Artículo 30. Cesación del Procurador.

1. Cesará el Procurador en su representación:

1º Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en los autos. Se entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro Procurador que se haya personado en el asunto.

Si, en este último caso, el Procurador que viniere actuando en el juicio suscitare cuestión sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representación que se atribuya el que pretenda sustituirle, el tribunal, previa audiencia de la persona o personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, resolverá la cuestión por medio de auto.

2º Por renuncia voluntaria o por cesar en la profesión o ser sancionado con la suspensión en su ejercicio.

En los dos primeros casos, estará el Procurador obligado a poner el hecho, con anticipación y de modo fehaciente, en conocimiento de su poderdante y del tribunal. En caso de suspensión, el Colegio de Procuradores correspondiente lo hará saber al tribunal.

Mientras no acredite en los autos la renuncia o la cesación y se le tenga por renunciante o cesante, no podrá el Procurador abandonar la representación de su poderdante, en la que habrá de continuar hasta que éste provea a la designación de otro dentro del plazo de diez días. Transcurridos éstos sin que se haya designado nuevo Procurador, se tendrá a aquél por definitivamente apartado de la representación que venía ostentando.

3º Por fallecimiento del poderdante o del Procurador.

En el primer caso, estará el Procurador obligado a poner el hecho en conocimiento del tribunal, acreditando en forma el fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los herederos o causahabientes del finado, se estará a lo dispuesto en el artículo 16.

Cuando fallezca el Procurador, se hará saber al poderdante la defunción, a fin de que proceda a la designación de nuevo Procurador en el plazo de diez días.

4º Por separarse el poderdante de la pretensión o de la oposición que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder, si fuese para él determinadamente.

2. Cuando el poder haya sido otorgado por el representante legal de una persona jurídica, el administrador de una masa patrimonial o patrimonio separado, o la persona que, conforme a la ley, actúe en juicio representando a un ente sin personalidad, los cambios en la representación o administración de dichas personas jurídicas, masas patrimoniales o patrimonios separados, o entes sin personalidad no extinguirán el poder del Procurador ni darán lugar a nueva personación.”

“Artículo 32. Intervención no preceptiva de Abogado y Procurador.

1. Cuando no siendo preceptiva la intervención de Abogado y Procurador el demandante pretendiese comparecer en juicio con asistencia y representación, lo hará constar así en la demanda. Igualmente, el

demandado pondrá en conocimiento del tribunal esta circunstancia en el plazo de cinco días desde que se le notifique la demanda o se le cite para vista, dándose cuenta al actor en el plazo de tres días.

2. Recibida la notificación de la demanda, si el demandado pretendiera valerse también de Abogado y Procurador, lo comunicará al tribunal dentro del día siguiente, suspendiéndose por un máximo de siete días los plazos para contestar la demanda o para la citación a vista. En esos siete días el demandado designará Abogado y Procurador de confianza o solicitará el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita comunicándolo al tribunal. Hecha la designación de Abogado y Procurador, o una vez nombrados de oficio, empezarán a correr los plazos para contestar la demanda o para la celebración de la vista.

3. Si el demandante quisiera valerse también de Abogado y Procurador, lo comunicará al tribunal en el día siguiente a la recepción de la notificación en la que consta la intención del demandado. A partir de ese momento, se le otorgarán siete días para que los designe de confianza o solicite el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, con los efectos y consecuencias prevenidas en el número anterior, aunque en este caso no se suspenderá plazo alguno.

4. En la notificación en que se comunique a una parte la intención de la parte contraria de servirse de Abogado y Procurador, se le informará del derecho que les corresponde según el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a fin de que puedan realizar la solicitud correspondiente.

5. Cuando la intervención de Abogado y Procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado tercero del artículo 394 de esta Ley.”

“Artículo 33. Designación de Procurador y de Abogado.

1. Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del Procurador y del Abogado que les hayan de representar y defender en juicio.

2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe Abogado, Procurador o ambos profesionales, cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al tribunal que actuará defendida por Abogado y representada por Procurador.

Estas peticiones se harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.”

“Artículo 34. Cuenta del Procurador.

1. Cuando un Procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, presentará ante el tribunal en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame.

2. Presentada la cuenta, se mandará que se requiera al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.

Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el tribunal examinará la cuenta y las actuaciones procesales, así como la documentación aportada y dictará, en el plazo de diez días, auto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al Procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

El auto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

3. Si el poderdante no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la cuenta, más las costas.”

Con representación técnica nos referimos a la intervención de Procurador¹⁷¹ en el juicio verbal, aunque, dice la Ley, la representación técnica en él es no preceptiva (4.2º LEC). Explica Guasp¹⁷² que la excepción del juicio verbal a la obligatoriedad de actuar mediante Procurador se apoya no sólo en la simplicidad de la tramitación de estos juicios, sino asimismo en el temor a que la intervención forzosa del Procurador, con la consiguiente originación de gastos, resulte desproporcionada para la cuantía económica del litigio¹⁷³. Por tanto, la representación técnica en este juicio verbal no es necesaria, aunque, si facultativamente se hace uso de ella, solamente Procurador habilitado en esa población (ninguna otra persona distinta, salvo el factor mercantil con apoderamiento inscrito en el Registro Mercantil para los actos propios de su mandante, según el art. 4 LEC) podrá asistir en este juicio a los interesados con el carácter de apoderado, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de él (11 LEC). En este último caso (en el que se hayan valido de él), sigue el art. 11, si hubiere condena en costas a favor del que se haya valido de Procurador, no se comprenderán en ellas los derechos de éste, salvo que la residencia habitual de la parte representada sea distinta del lugar en que se tramite el juicio.

Desaparece, explica Guasp¹⁷⁴ el recelo sentido por el Derecho positivo hacia los apoderamientos no conferidos a Procuradores en el caso del factor mercantil, en el que el otorgamiento de la representación se ha hecho generalmente con anterioridad al planteamiento de la contienda judicial y además este otorgamiento se halla sometido al régimen de publicidad que supone la inscripción en un Registro; que esta característica de

¹⁷¹ Sobre la figura del Procurador en general y la Procuraduría es importante consultar la monografía de Díez RIAZA, Sara; *La Procuraduría*. Serie Estudios Jurídicos N.S.. Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 1997, Madrid

¹⁷² GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo I (Arts. 1 al 459), Art. 4, pág. 133, M. Aguilar Editor, 1943, Madrid.

¹⁷³ También explica las causas en que se basa la postulación facultativa en el juicio verbal Díez RIAZA, *La Procuraduría* (cit.), págs. 257 y ss..

¹⁷⁴ GUASP, *Comentarios...cit.*, Tomo I, Art. 4, pág. 137.

la publicidad ha sido decisiva en el pensamiento de la Ley puede demostrarse observando que no se contenta con exceptuar, sin más, al factor, el cual en todo caso debe constar con un poder de su principal, inscrito, sino que exige, con una insistencia que en nuestro Derecho Mercantil parece innecesaria, que el apoderamiento conste inscrito en el Registro.

En cuanto a la representación del Estado, sus Organismos autónomos y órganos constitucionales, tener en cuenta lo establecido al respecto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (en general, dispone esta Ley que la misma corresponde a la Abogacía del Estado). En el art. 2 de la misma Ley se establece que los Abogados del Estado podrán asumir también la representación de autoridades y empleados públicos, cuando los procedimientos se sigan por actos y omisiones relacionados con el cargo.

B- ASISTENCIA LETRADA ^{*50}

De igual modo que en la intervención de Procurador, tampoco la asistencia letrada del Abogado en el juicio verbal es preceptiva (10.2º LEC); su intervención, facultativa, será con el carácter de auxiliar (11 LEC). Sin embargo, de nuevo en este caso, si hubiere condena en costas a favor del que se haya valido de Abogado, no se comprenderán en ellas los honorarios de éste, salvo que la residencia habitual de la parte o defendida sea distinta del lugar en que se tramite el juicio. A pesar de esto, podemos encontrar la STC¹⁷⁵, Sala 1ª, 47/1987, de 22 de abril, sobre asistencia letrada gratuita en proceso que no exija la actuación de Abogado, y además, más adelante veremos, al tratar de la asistencia jurídica gratuita, como la nueva Ley 1/1996, de 10 de enero, que la regula, establece la posibilidad de la gratuidad de la asistencia jurídica también en procesos en los que, como en el verbal, la misma no es preceptiva.

^{*50} De nuevo, como resumen diremos que la asistencia letrada es no preceptiva sólo en los juicios verbales hasta 150.000 pts. (art. 31.2.1º), pero si se hace uso de él será Abogado habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto, en cuyo caso no se incluirán sus honorarios en la condena en costas del no defendido, salvo temeridad de este último o que el domicilio del defendido se halle en lugar distinto del lugar en que se tramita el juicio (con las limitaciones en este último caso del art. 394.3 Proyecto). Otros artículos que hacen referencia a la defensa técnica: arts. 32, 33 (ya transcritos) y 35:

“Artículo 35. Honorarios de los Abogados.

1. Los Abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos.

2. Presentada esta reclamación, se mandará que se requiera al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.

Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado segundo del artículo anterior.

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el Abogado acredite la existencia de presupuesto previo escrito aceptado por el impugnante y se dictará auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Dicho auto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta, más las costas.”

¹⁷⁵ Citada por DE LA OLIVA SANTOS en su obra junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho...cit., Tomo I, # 16, pto. 38, pág. 527.

En relación a la defensa en juicio del Estado, sus Organismos autónomos y órganos constitucionales, es la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, la que debe tenerse en cuenta (dispone esta Ley que dicha defensa corresponde en general a la Abogacía del Estado). De igual forma que en el caso de la representación, dispone el art. 2 de esta Ley que los Abogados del Estado podrán asumir la defensa de autoridades y empleados públicos cuando los procedimientos se sigan por actos y omisiones relacionados con el cargo.

B- OBJETIVOS¹⁷⁶

Analizados los requisitos subjetivos (del órgano jurisdiccional y de las partes), estudiamos ahora los que deben concurrir en el objeto del proceso, es decir, en la pretensión, que puede ser definida como la petición fundada que un sujeto dirige frente a otro para que sea resuelta por el órgano jurisdiccional.

De ello podemos deducir que la pretensión u objeto del proceso, en realidad, es una acción afirmada a través de una demanda; y por esto, para el análisis de la posibilidad, idoneidad y causa de la pretensión, incluiremos en parte el de la acción¹⁷⁷.

Analizaremos solamente los aspectos de la pretensión que tienen que ver con su objeto (posibilidad, idoneidad y causa), pero no hay que olvidar, aunque no los trataremos aquí por haber sido ya objeto de estudio o porque lo serán más adelante, los requisitos de la misma en relación a los sujetos (jurisdicción, competencia y compatibilidad subjetiva en cuanto al órgano jurisdiccional; capacidad, legitimación y postulación facultativa para el

¹⁷⁶ En lo que se refiere a los requisitos objetivos, nos hemos guiado por lo expuesto por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 201 y ss., y especialmente por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 187 y ss..

¹⁷⁷ Así lo hace ARAGONESES ALONSO, en su obra Técnica...cit., párrafo 14, págs. 187 y ss..

demandante; y capacidad para ser parte y legitimación para el demandado) y en conexión con la actividad (lugar, tiempo y forma).

Por último, podemos añadir que puede haber una única pretensión o varias. Los casos de pluralidad de pretensiones¹⁷⁸ en nuestro Derecho son: la acumulación de acciones^{179*51}, la ampliación de la demanda, la reconvención⁵² y la acumulación de

¹⁷⁸ Para un mayor estudio de esta cuestión puede consultarse a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 227 y ss..

¹⁷⁹ Véase en este punto la obra de FONS RODRÍGUEZ, C.; La Acumulación Objetiva de Acciones en el Proceso Civil. JM Bosch Editor, 1998, Barcelona.

⁵¹ Regulada para el caso del juicio verbal en el art. 438.3 y 438.4 Proyecto (en general, se restringe):

“Artículo 438. Reconvención y acumulación de acciones

3. No se admitirá en los juicios verbales la acumulación de acciones, salvo las excepciones siguientes:

1ª La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda en todo caso el juicio verbal.

2ª La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial de ella.

3ª La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando los juicios versen sobre arrendamientos.

4. Podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 72 y en el apartado primero del artículo 73 de la presente Ley.”

También se regula la acumulación de acciones en general en los arts. 71 a 73:

“Artículo 71. Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones. Acumulación eventual.

1. La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia.

2. El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí.

3. Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras.

4. Sin embargo de lo establecido en el apartado anterior, el actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles, con expresión de la acción principal y de aquélla otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada.”

“Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones.

Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del objeto y del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.”

“Artículo 73. Admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones. Casos especiales de acumulación necesaria.

1. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso:

1º Que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal.

2º Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo.

3º Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir.

autos^{*53} (siempre dentro de los límites competenciales que existen en el juicio verbal). La pluralidad de pretensiones se produce por la conexión existente entre ellas, es decir, por la identidad de alguno o algunos de sus elementos, de forma que la armonía y economía procesal así lo aconsejan. El caso de la acumulación de autos será estudiado más adelante como uno de los superincidentes que se pueden producir en el desarrollo anormal del juicio verbal.

1- POSIBILIDAD

Es el primero de los requisitos objetivos.

2. Cuando la demanda tenga por objeto la impugnación de acuerdos sociales se acumularán de oficio todas las que pretendan la declaración de nulidad o de anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración y que se presenten dentro de los cuarenta días siguientes al en que se hubiera presentado la primera.

En todo caso, en los lugares donde hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartirán al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.

3. También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes, para casos determinados.

4. Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, se requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendiera mantener por el actor, se acordará el archivo de la demanda sin más trámites.”

^{*52} La reconvencción en el juicio verbal también se restringe (art. 438.1 Proyecto):

“Artículo 438. Reconvencción y acumulación de acciones.

1. En ningún caso se admitirá reconvencción en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.

En los demás juicios verbales sólo se admitirá la reconvencción cuando ésta se notifique al actor al menos cinco días antes de la vista, no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvencción y las que sean objeto de la demanda principal.”

^{*53} Se recoge en los arts. 74 y ss. Proyecto, y en concreto, la del juicio verbal se regula en el art. 80:

“Artículo 80. Acumulación de procesos en juicio verbal.

1. En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la Sección siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulación se hará en el acto de la vista, en forma oral.

En este caso, las demás partes que asistan al acto manifestarán, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulación solicitada y se resolverá sobre ella en la misma vista.

2. Cuando los procesos estén pendientes ante distintos tribunales, la solicitud de suspensión formulada en juicio verbal se hará según lo dispuesto en el apartado anterior y se sustanciará, en cuanto sea posible, conforme a las normas contenidas en la Sección tercera de este Capítulo.”

I- DE LA ACCION

Para que la acción pueda prosperar, es necesario que sea posible. Tal posibilidad requiere¹⁸⁰, por un lado, la existencia de requisitos constitutivos de la relación material, y por otro, la inexistencia de hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la misma. Constituyen estos, por tanto, requisitos de prosperabilidad.

A- EXISTENCIA DE REQUISITOS CONSTITUTIVOS MATERIALES

Los requisitos constitutivos son las condiciones necesarias para obtener el bien que se pretende conforme al Derecho objetivo. Debe, por ello, el que va a intentar un proceso, comprobar si los hechos jurídicamente relevantes (causa petendi) en que apoya su petición cumplen todas las exigencias que el Derecho objetivo señala para obtener el bien pretendido.

B- INEXISTENCIA DE HECHOS IMPEDITIVOS MATERIALES

Es el supuesto de otra norma tal que impida a la norma constitutiva desplegar su eficacia y, por tanto, producir el resultado jurídico pedido por el actor. Así, por ejemplo, las normas que excluyen la existencia del contrato por falta de unos requisitos esenciales...etc.

C- INEXISTENCIA DE HECHOS EXTINTIVOS MATERIALES

Se trata de que no exista una contranorma tal que, ya producido el efecto jurídico de la constitución, lo suprima. Así, el cumplimiento, la consignación, la condonación de la deuda, el cumplimiento de la condición resolutoria...etc.

D- INEXISTENCIA DE HECHOS EXCLUYENTES MATERIALES

En este caso no se trata de que exista la relación jurídico-material, ni tampoco que no se produzca ningún hecho que la impida o la extinga, sino que no haya ningún hecho que enerve o paralice la pretensión del demandante, ya que la acción plenamente apta para conseguir el efecto jurídico pretendido puede ser atacada mediante lo que la doctrina italiana denomina “excepción en sentido propio o sustancial”, es decir, aquella forma de defensa del demandado que consiste en un contraderecho tendente a impugnar y a anular el derecho de acción. Por ejemplo: prescripción, compensación, retención, vicios del consentimiento...etc.

II- DE LA PRETENSION

Además de la acción, también debe ser posible la acción afirmada, es decir, la pretensión, que debe ser viable tanto desde el punto de vista físico como jurídico¹⁸¹.

Son los llamados requisitos de admisibilidad.

A- POSIBILIDAD FISICA

Resulta obvio para la viabilidad de la pretensión que se ejercita que ésta sea físicamente posible, o sea, materialmente practicable, o que tenga unos mínimos visos de seriedad.

¹⁸⁰ Así lo explica ARAGONESES ALONSO, en Técnica...cit., párrafo 14, pág. 191.

B- POSIBILIDAD JURIDICA

Por último, la pretensión debe ser jurídicamente viable, es decir, no pueden existir excepciones procesales que pongan de manifiesto la existencia de algún óbice u obstáculo procesal que impida dictar sentencia sobre el fondo.

a- COSA JUZGADA

Nos referimos a la necesidad de que la pretensión no haya sido ya agotada, ya que la cosa juzgada es el obstáculo producido al haber sido resuelta por resolución firme una controversia idéntica a la que se pretende iniciar. La identidad se determina por los tres elementos: sujetos, causa de pedir y petitum¹⁸². Han de coincidir los tres para que pueda excluirse el segundo proceso.

b- LITISPENDENCIA

La pretensión que se ejercita no ha de estar ya pendiente, es decir, no debe haber litispendencia. Ésta es el impedimento producido por la constitución de un proceso anterior todavía pendiente en que se cuestione el mismo objeto procesal; la identidad se determina en la misma forma que la cosa juzgada.

c- ILICITUD

Otro obstáculo es que la pretensión, aún siendo nueva, sea ilícita, es decir, contraria a la moral, a la ley u al orden público.

¹⁸¹ Así lo recoge ARAGONESES ALONSO, en Técnica...cit., párrafo 14, pág. 193.

¹⁸² Los dos últimos pueden encontrarse analizados por ORTELLS RAMOS, en su obra junto a MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER y MONTÓN REDONDO, Derecho...cit., Tomo II, págs. 86 y ss..

2- IDONEIDAD

La idoneidad es el segundo requisito de la pretensión procesal¹⁸³.

Consiste en que el objeto del proceso sea igual a su homónimo previsto por la Ley.

I- ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO

Se trata de que el procedimiento que se solicita se corresponda con el señalado por el legislador para la acción que se hace valer. En concreto el procedimiento del juicio verbal corresponderá para acciones que provengan de derechos cuya valoración económica no supere las 80.000 pts. y no tengan previsto en la Ley otro tipo de proceso especial (arts. 481, 482.4º, 486 y 715 LEC)^{*54}. Por eso no se admiten ni reconvenciones ni tercerías que excedan de tales límites (488 y 715 LEC).

II- CONEXIÓN ENTRE PRETENSION Y ACCION

Es también necesario tener en cuenta que entre la pretensión que se formula y la acción en que se basa debe existir la conexión necesaria para que, justificando la verdad de las afirmaciones hechas mediante la prueba, se obtenga la tutela que el Derecho le otorga.

III- TEORIA DE LA SUSTANCIACION

Por último, precisar que la pretensión ha de individualizarse con la descripción de los hechos básicos coincidentes en el caso concreto con los que forman el supuesto de hecho legal de las normas que invoca, y de los que depende el derecho a la acción.

3- CAUSA

Es éste el último de los requisitos del objeto del proceso.

Es el porqué de la pretensión, es decir, el motivo o razón por la que aquélla nace. Podemos decir que no se exige para ello más que un interés personal directo y legítimo (art. 24 CE), o, dicho de otro modo, basta con la no satisfacción extraprocésal.

C- DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL

Hemos llegado por fin al último grupo de requisitos a concurrir, junto con los subjetivos y objetivos ya vistos, en el proceso del juicio verbal.

Se trata de los requisitos de la actividad procedimental, la cual se desarrolla a través de los actos procesales (entendiendo por ellos las actuaciones judiciales). Se trata del lugar, tiempo y forma de los mismos.

1- LUGAR

Este requisito de los actos procesales ha sido ya analizado al tratar los límites territoriales de la jurisdicción. Sin embargo, lo recordaremos muy resumidamente.

I- REGLA GENERAL

La regla general es que la actividad procedimental se desarrollará en la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional (art. 268.1 LOPJ).

¹⁸³ La idoneidad viene recogida por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 193 y ss..

II- EXCEPCIONES

Sin embargo, cuando el acto procesal se deba realizar fuera de la sede pero dentro de la circunscripción, el órgano se trasladará o comisionará a otro a través del llamado auxilio judicial discrecional (arts. 268.2 LOPJ y 285 LEC); mientras que cuando el acto se lleve a cabo fuera de la circunscripción, se acudirá al auxilio judicial preceptivo (arts. 274.1 LOPJ y 285 LEC), salvo cuando se trate de diligencias de instrucción o prueba que no perjudiquen la competencia del correspondiente Juez o Tribunal y venga justificado por razones de economía procesal (275 LOPJ)^{*55}.

2- TIEMPO

En cuanto al tiempo, los actos procesales se realizarán en días y horas hábiles (por lo general) y en los plazos y términos fijados por la Ley, que, por lo general, se acortan en el juicio verbal (debido, como ya vimos, al principio de celeridad o brevedad que le afecta) hasta el extremo de concentrarse la sustanciación del mismo, salvo dos excepciones, en una única comparecencia (principio de concentración).

Por un lado, se consideran días hábiles todos los del año, salvo domingos, festivos y el mes de agosto (excepto las actuaciones que se declaren urgentes por las leyes procesales), que es cuando existen vacaciones judiciales. A instancia de parte, el órgano judicial que conozca del proceso puede habilitar un día en principio inhábil, cuando se trate de algún tipo de acto cuya demora pudiera ocasionar graves perjuicios al interesado (arts. 182.1, 183, 184.2 LOPJ y 256 y 259 LEC). Además, son horas hábiles las comprendidas entre las 8'00 horas y las 20'00 horas (salvo que la Ley disponga lo contrario), aunque no

^{*54} Hasta 500.000 pts. o en los supuestos del art. 250.1 Proyecto.

^{*55} Ver al respecto los arts. 169 a 177 Proyecto ya transcritos al tratar de los límites territoriales de la jurisdicción.

hay que confundir esta habilidad horaria con el horario de despacho (fijado por la Administración) y con las horas de audiencia (que fija cada Juzgado o Tribunal) (arts. 182.2 y 184.2 LOPJ; 256 y 259 LEC)^{*56}.

Por otro lado, un término consiste en el señalamiento de un momento concreto para la realización de un acto, mientras que un plazo supone establecer un lapso de tiempo durante el cual el acto puede llevarse a cabo. En concreto, para las citaciones se fija un término y para los emplazamiento un plazo. En el juicio verbal, el llamamiento al demandado para comparecer y contestar se realiza a través de una citación (722 y ss. LEC). Para computar el plazo, la regla es que éste empezará a contar desde el día siguiente al que se reciba la notificación; se descuentan los días inhábiles y el día del vencimiento se incluye completo hasta las 24'00 hs. (si han pasado las 20'00 hs. o las horas de despacho, existen Juzgados de Guardia). Si el plazo estuviera fijado por meses, se computa de fecha a fecha, sin descontar los días inhábiles. En tema de plazos, tener en cuenta la vigencia en

^{*56} Al respecto de días y horas hábiles en el Proyecto podemos hallar los arts. 130 y 131:

“Artículo 130. Días y horas hábiles.

1. Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles.
2. Son días hábiles todos los del año, excepto los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.

3. Se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa.

Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.”

“Artículo 131. Habilitación de días y horas inhábiles.

1. De oficio o a instancia de parte, los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.

2. Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial.

3. Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior serán hábiles los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles.
4. Contra las resoluciones judiciales de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno.”

Tener en cuenta que la Disposición Derogatoria, punto 2.22 del Proyecto suprime el Decreto-Ley 5/1973, de 17 de julio, sobre declaración de inhábiles, a efectos judiciales, de todos los días del mes de agosto.

nuestro Derecho del principio de preclusión e improrrogabilidad de los mismos (arts. 301 y ss. LEC y 185 LOPJ)^{*57}.

^{*57} Sobre plazos y términos hallamos en el Proyecto los arts. 132 a 136:

“Artículo 132. Plazos y términos.

1. Las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas.
2. Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin dilación.
3. La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan.”

“Artículo 133. Cómputo de los plazos.

1. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.

No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.

2. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.

Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado segundo del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los domingos y festivos.

3. Los plazos señalados por meses o por años, se computarán de fecha a fecha.

Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

4. Los plazos que concluyan en domingo u otro día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.”

“Artículo 134. Improrrogabilidad de los plazos.

1. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.

2. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.”

“Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales.

1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en la Secretaría del tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido.

2. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia.

3. Los Secretarios Judiciales o los funcionarios designados por ellos pondrán diligencias para hacer constar el día y hora de presentación de las demandas, de los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio.

4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación. También podrá hacerse constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.

5. Cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en el tiempo establecido conforme a la ley.

Sin embargo de lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, éstos habrán de hacerse llegar al tribunal dentro de los tres días siguientes al envío efectuado según el párrafo anterior.

Si el acto procesal trata de la formulación de la pretensión, el requisito del tiempo tiene importancia en cuanto deberán tenerse en cuenta las normas del Derecho material sobre la caducidad o prescripción de la acción que se ejercita.

3- FORMA

En lo referente a la forma de la actividad procedimental, deben tratarse dos extremos básicos: lo relativo a la oralidad o escritura del acto y lo referente al lenguaje que puede utilizarse en las actuaciones judiciales.

En cuanto a lo primero, aunque en los procesos civiles la forma de los actos es generalmente escrita, de todos ellos, es en el juicio que nos ocupa en el que más predomina el principio de oralidad, el cual se pone de manifiesto especialmente en la comparecencia ante el Juez (de ahí su nombre de verbal). Por lo tanto, la oralidad conlleva irremediablemente consigo otros principios, como el de concentración, publicidad o inmediación judicial (229 y 232.1 LOPJ)^{*58}.

6. En cuanto al traslado de los escritos y documentos, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Segundo, pero podrá aquél efectuarse, a los Procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece.”

“Artículo 136. Preclusión.

Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda.”

^{*58} En referencia a estos puntos, se recogen en el Proyecto los arts. 137 y 138:

“Artículo 137. Presencia judicial en declaraciones, pruebas y vistas.

1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente.

2. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto.

3. La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.”

“Artículo 138. Publicidad de las actuaciones orales.

1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública.

En cuanto al idioma^{*59}, el art. 231 LOPJ establece que los funcionarios judiciales tienen el deber de usar el castellano, pero pueden usar la lengua oficial de la CA respectiva, si ninguna de las partes se opusiera, alegando desconocimiento de ella que pudiera causar indefensión.

Las partes, Procuradores, Abogados, testigos y peritos pueden utilizar la lengua oficial de la CA sin necesidad de traducción, salvo que lo pida una de las partes alegando

2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.

3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oír a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.”

^{*59} Sobre este punto, hallamos en el Proyecto los arts. 142 y 143:

“Artículo 142. Lengua oficial.

1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.

2. Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.

3. Las partes, sus Procuradores y Abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

5. En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.”

“Artículo 143. Intervención de intérpretes.

1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.

De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial y será firmada también por el intérprete.

2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sordomuda y supiera leer, se empleará la escritura, y si supiere escribir, podrá valerse de la escritura. En el caso de que no sepa leer ni escribir, se nombrará el intérprete adecuado, conforme se dispone en el expresado apartado.

De las actuaciones que se practiquen en relación con los sordomudos se levantará también la oportuna acta.

indefensión, si el acto tiene que producir efectos fuera de la CA, o si el Juez lo manda o así lo dispone la Ley.

Si hay que realizar traducción y quien la pide es una de las partes del proceso, los gastos de la misma corren a cargo de aquél que no se exprese en castellano. Sin embargo, si la traducción la ordena el órgano jurisdiccional, los gastos corren a cargo del Estado.

Si se trata de un idioma extranjero, su utilización no se considera en la Ley como una facultad, sino como un caso de imposibilidad de uso de una lengua oficial española, y así, se establece que las declaraciones orales se harán por medio de intérprete, y que los documentos que se presenten en lengua extranjera deberán ser acompañados de una traducción privada, a no ser que la parte contraria la impugnase, en cuyo caso será exigible una traducción oficial por la oficina de interpretación de lenguas.

En las actuaciones orales, el órgano podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla.

Aparte estos aspectos generales sobre la forma de cualquier acto, habrá de estarse a las distintas formalidades que para los diversos actos exige nuestro Derecho.

TITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO Y EFECTOS
EN LA PRIMERA INSTANCIA

II- PROCEDIMIENTO EN LA PRIMERA INSTANCIA

Con carácter general, el procedimiento del juicio verbal (en primera y segunda instancia) es el camino o conjunto de actos sucesivos y coordinados entre sí para la resolución de controversias cuyo contenido económico no sea superior a 80.000 pts.^{*60}

El procedimiento del juicio verbal, regulado sobre todo en el Capítulo IV del Título II del Libro II de la LEC (arts. 715 a 740, ambos inclusive)^{*61}, forma, junto a los sujetos y el objeto, el proceso de ínfima cuantía, más conocido como juicio verbal. Para lo no específicamente regulado en sus normas rige, como proceso tipo que es, lo recogido en el juicio de mayor cuantía, ya que la regulación de este juicio parcialmente considerada es de aplicación supletoria a aquellos aspectos parciales no contemplados en otro proceso; he aquí una de las principales quiebras del juicio verbal, ya que la remisión al mayor cuantía (juicio lento, repleto de formalismos y solemnidades) trae consigo una serie de incongruencias e inconvenientes (sobre todo en materia de prueba) en un proceso como el verbal basado, entre otros, en los principios de oralidad, celeridad y sencillez. Rigen en él los principios de todo proceso civil, y en especial, los de oralidad, publicidad, concentración e inmediación judicial, ya examinados en el Título Tercero de la Primera Parte de este trabajo.

^{*60} En el Proyecto, que no sea superior a 500.000 pts. (salvo los casos del art. 249.1) y en los supuestos del art. 250.1.

Tras haber analizado los requisitos del juicio verbal ordinario, nos ocupamos ahora de su procedimiento en la primera instancia. Estudiaremos, por lo tanto, sin ánimo exhaustivo, los posibles trámites que en él pueden sucederse, siguiendo para ello el orden cronológico más factible desde las actuaciones previas al inicio del proceso, hasta una posible aclaración de la sentencia, analizando la iniciación, desarrollo (normal y anormal) y terminación (normal y anormal) del juicio verbal.

A- ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA

Con carácter previo a la presentación de la demanda, o papeleta de demanda en su caso, pueden tener lugar una serie de actuaciones previas: el agotamiento de la vía administrativa, la conciliación o las diligencias preliminares, respectivamente.

1- AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

A la demanda (o papeleta) debe preceder, como presupuesto en sentido estricto, la reclamación previa en la vía gubernativa¹⁸⁴ cuando, según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la acción fundada en Derecho privado se dirija contra cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de Ley (art. 120 de la Ley 30/92).

Planteada la reclamación previa se interrumpirá el plazo para el ejercicio de la acción judicial, que volverá a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificación expresa de la resolución o, en su caso, desde que se entienda desestimada por

¹⁸⁴ En el Título III del Libro II del Proyecto (arts. 437 a 447), aunque le es aplicable también los Libros I, el resto del II (salvo el Título II), y el III.

el transcurso del plazo de tres meses (silencio administrativo negativo). De esta forma, no podrá deducirse la pretensión ante la jurisdicción correspondiente hasta que la Administración no resuelva o transcurra dicho plazo sin resolver (art. 121 L. 30/92).

El procedimiento de tal reclamación previa se encuentra regulada en los arts. 122 a 124 LRJ-PAC.

2- CONCILIACION

La conciliación es un acto previo a la presentación de la demanda, a través del cual, generalmente, se pretende evitar un proceso¹⁸⁵.

A partir de 1984 (véase Ley 34/1984, de 6 de agosto de Reforma de la LEC, arts. 460 y ss.), la conciliación es un acto facultativo, cuya celebración depende exclusivamente de la voluntad del solicitante. A pesar de su aparente escasa utilidad, en la práctica sustituye al requerimiento notarial, más costoso económicamente, y propende a evitar una eventual condena en costas, en su día, por litigar infundada y temerariamente. Nótese, a efectos de simple recordatorio, que con anterioridad a la reforma operada por la Ley 34/1984 citada, el acto de conciliación era presupuesto necesario y previo a ciertas clases de procesos (por ejemplo, juicios de mayor y menor cuantía), salvo las excepciones que la propia LEC contemplaba (entre otros varios, demandas contra el Estado y demás organismos de él dependientes).

En cuanto a su desarrollo (arts. 460 a 480 LEC), la conciliación se solicita mediante la presentación de una papeleta, en la que se designarán los datos identificadores de las partes, la pretensión, la fecha y la firma, sin preceptiva postulación, ante el JP o JPI del

¹⁸⁴ Para mayor estudio de esta cuestión puede consultarse la obra de GUASP, *Derecho...cit.*, Tomo I, págs. 573 y ss..

lugar donde tenga el demandado su domicilio (coincide en principio, por tanto, con la competencia en el juicio verbal). Si citadas las partes a la vista no comparecen o lo hace sólo una de ellas, el acto se habrá intentado sin efecto, condenando en costas al no compareciente, o al solicitante en el caso de que ninguna hubiera comparecido. Si comparecen los dos y no se llega a un acuerdo, la conciliación se habrá celebrado sin avenencia, mientras que si existe acuerdo, éste tendrá la eficacia de un título ejecutivo, salvo que la cuantía de lo convenido excede de la competencia del Juez interviniente, sea de Primera Instancia o de Paz, en cuyo caso tendrá sólo el valor de un documento público y solemne que, aún no permitiendo su ejecución directa, ostentase rango probatorio relevante en el posterior juicio declarativo. La admisión a trámite de la papeleta de conciliación interrumpe la prescripción adquisitiva y extintiva, retrotrayéndose los efectos al momento de la presentación de aquélla.

En ningún caso (art. 460 LEC) podrá intentarse la conciliación cuando una de las partes sea una Administración Pública, o un menor o incapacitado para la libre administración de sus bienes; o se trate de un juicio de responsabilidad civil de Jueces y Magistrados (supuesto de proceso especial que sigue los trámites del verbal); o se trate de materia no susceptible de transacción o arbitraje, esto es, materia indisponible, según los arts. 1804 CC y 1 y 2 b) de la Ley de Arbitraje.

Respecto a la impugnación de lo convenido en este acto de conciliación, podrá ejercitarse la acción de nulidad de los contratos, mediante demanda a interponer ante el Juez competente, dentro de los 15 días siguientes a la celebración del acto, y se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda a su cuantía (por el juicio verbal hasta 80.000 pts.) (art. 477 LEC).

¹⁸⁵ Un mayor estudio de la conciliación puede hallarse realizada por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs.

3- DILIGENCIAS PRELIMINARES^{186*62}

Son ciertas actuaciones previas a la interposición de la demanda que se pueden solicitar del Juez por quien pretenda demandar a otro para averiguar algún dato relativo a la personalidad (capacidad y legitimación) del futuro demandado, para determinar dónde se encuentra la cosa mueble que el futuro demandante pretende reclamar, o para solicitar la exhibición de determinados documentos que pueden ser importantes para el futuro proceso.

A estas diligencias se refieren los arts. 497 y ss. de la LEC, estableciéndose cinco supuestos en los que, con carácter tasado o de *numerus clausus*, pueden ser solicitadas¹⁸⁷.

565 y ss..

¹⁸⁶ En este punto puede consultarse la obra de ÁLVAREZ ALARCÓN, A.; Las Diligencias Preliminares del Proceso Civil. JM Bosch Editor, 1997, Barcelona.

^{*62} Se recogen en los arts. 256 y ss.:

“Artículo 256. Clases de diligencias preliminares y su solicitud.

1. Todo juicio podrá prepararse:

1º Por petición de que la persona a quien se dirigirá la demanda declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.

2º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.

3º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.

4º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder.

5º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder.

6º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.

7º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.

2. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos, con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar.

3. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares. Al pedir éstas, dicho solicitante ofrecerá caución para responder tanto de tales gastos como de los daños y perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se perderá, en favor de dichas personas, si, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.

B- INICIACION : LA DEMANDA

Como en el resto de los procesos, es el demandante el que solicita el inicio del proceso verbal a través de lo que en buena técnica se denomina demanda.

No cabe en el juicio verbal la iniciación anormal del proceso por el órgano jurisdiccional, pues ésta cabe sólo en ciertos procesos especiales sucesorios y concursales (la prevención de oficio del abintestato y la adopción de medidas cautelares en ciertos casos de quiebra).

Estudiaremos, por tanto, la demanda, como único acto de iniciación del juicio verbal.

1- CONCEPTO DE DEMANDA

La demanda es, por consiguiente, el acto típico y ordinario de iniciación procesal, es decir, aquella declaración de voluntad del demandante por la que éste solicita que se dé vida al proceso y que comience su tramitación¹⁸⁸.

Sin embargo, en ella no siempre se contiene la pretensión fundamentada u objeto del juicio verbal, ya que en el proceso de ínfima cuantía la pretensión puede fundamentarse más tarde, en el trámite de la comparecencia ante el órgano jurisdiccional.

Es necesario, por tanto, distinguir entre la petición de iniciación procesal (la demanda) y la petición de fondo (la pretensión procesal).

La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 64 de esta Ley."

¹⁸⁷ Recoge estos supuestos y un mayor estudio sobre los mismos GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 575 y ss..

¹⁸⁸ Éste es el concepto dado por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 281.

2- TIPO DE DEMANDA

Dependiendo de si la pretensión se fundamenta o no en la demanda del juicio verbal, estaremos en presencia de la demanda mixta (o compleja) o de la demanda pura (o simple), respectivamente¹⁸⁹. Optar por una u otra en el proceso verbal, será decisión del demandante, aunque ha de recalcarse que para la iniciación del mismo el ordenamiento jurídico sólo requiere la segunda (art. 720 LEC)^{*63}.

Si la demanda es mixta, también llamada compleja, además de contener la pretensión u objeto procesal, incluirá su fundamentación, como así lo exige, en principio, el art. 524 LEC, mediante los denominados fundamentos de derecho.

En cambio, si la demanda es pura o simple, contendrá como siempre la pretensión, pero no su fundamentación, como así permite el art. 720 LEC, que menciona la pretensión que se deduce como uno de los contenidos de la demanda, pero no la fundamentación de la misma.

Para diferenciarla de la demanda mixta (la que sí contiene la fundamentación del objeto), a la demanda pura se le da el nombre de papeleta de demanda, nombre que no debe inducir a pensar que dicha papeleta no es una verdadera demanda, ya que sí cumple el fin real de toda demanda, el de iniciación del proceso. De esta guisa, su diferencia con la demanda compleja es de orden puramente formal.

¹⁸⁹ Tal clasificación de la demanda puede encontrarse en la obra de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 284.

^{*63} Lo mismo ocurre en el Proyecto, en el que basta con presentar demanda sucinta regulada en el art. 437.1, aunque para cantidades inferiores a 150.000 pts. la misma se puede presentar incluso en los impresos de que habla el art. 437.2. Sin embargo, el demandante puede optar en ambos casos por presentar demanda al estilo del juicio ordinario, regulada en el art. 399:

“Artículo 437. Forma de la demanda

1. El juicio verbal principiará mediante demanda sucinta, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

2. En los juicios verbales en que se reclame una cantidad inferior a ciento cincuenta mil pesetas, el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el tribunal correspondiente.”

La posibilidad de presentar la simple papeleta inicial y reservarse su fundamentación para el momento de la comparecencia establecida en la LEC, se corresponde con la sencillez de trámites de este juicio de ínfima cuantía y con su naturaleza de juicio “verbal”. Cuando vayan a intervenir profesionales en el juicio, no por eso queda excluida la posibilidad de iniciar el procedimiento mediante papeleta (posibilidad que ha podido ser utilizada en algunos casos como hábil estrategia por el Abogado del demandante).

La iniciación mediante papeleta de demanda no ha suscitado hasta el momento reproches de inconstitucionalidad. En unas Jornadas sobre el “Juicio Verbal civil del automóvil” ha sido debatida esta cuestión por los profesores González-Cuéllar y Garberí Llobregat¹⁹⁰. Éste último consideró que la iniciación del juicio verbal mediante papeleta es contraria al sistema de garantías constitucionales de nuestro proceso civil, al poder crear indefensión para el demandado que puede acudir a la comparecencia sin saber con exactitud sobre qué pretensión tiene que contestar. De acuerdo con Vázquez Sotelo¹⁹¹, que realiza un breve comentario a estas Jornadas, la brillante argumentación no resulta convincente. El demandado sabe sobre qué se va a celebrar el juicio a cuya comparecencia se le cita, conoce cuál es el objeto sobre el que tiene que contestar, conoce también, en esencia, cuál es la pretensión del demandante, y debe ir preparado para defenderse. Nadie puede alterar los datos fundamentales identificadores del litigio y la comparecencia del art. 730 está regulada con exquisito respeto a la igualdad de las partes (“igualdad de armas procesales”). La doctrina ha reputado siempre ajustada a la tramitación “verbal” del juicio

¹⁹⁰ GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás y GARBERÍ LLOBREGAT, José; Jornadas sobre el “Juicio Verbal civil del automóvil”; 29 de noviembre de 1993, San Sebastián.

¹⁹¹ VÁZQUEZ SOTELO, José Luis; Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia. Dirección José Luis Albácar López, Tomo II (Arts. 460 a 1480), Art. 740, págs. 580 y 581. Editorial Trivium, S.A., 2ª edición, Junio 1994, Madrid.

esta modalidad de la “papeleta de demanda”. Si porque en un trámite oral y concentrado se pueden producir sorpresas para una parte el método se considera inconstitucional, habría que asimismo considerar inconstitucional la misma oralidad a la que la Constitución se remite expresamente como principio predominante en las actuaciones procesales (art. 120 CE). Debe mantenerse, en consecuencia, la validez de la “papeleta” impulsora del juicio verbal civil como una de sus notas caracterizadoras, a cuya técnica puede acudir el demandante, si así lo desea.

Por otro lado, no es menos cierto que actualmente cada vez se utiliza más la demanda mixta en estos juicios, para así evitar que se alargue excesivamente la comparecencia y facilitar la labor del Juzgador. A favor de la fundamentación en el acto de iniciación del proceso, debemos decir que ésta sí debe recogerse en las demandas de los ya vistos procesos verbales especiales.

De todo lo anterior, cabe colegir que, aunque en la actualidad debe mantenerse la validez de la papeleta de este juicio verbal (“lege data”), para futuras reformas (“lege ferenda”) debería tenderse a una mayor especificación y fundamentación en la demanda inicial, aunque de la manera más breve posible (en respeto de los principios de sencillez y celeridad que lo informan), de forma que el demandado no tenga duda razonable de lo que se pretende, pues parece ser ésta la evolución natural que está teniendo el juicio verbal.

3- REQUISITOS DE LA DEMANDA

Según se opte por la demanda o la simple papeleta, los requisitos que cada una debe cumplir variarán, en el sentido de que, los de la demanda compleja, al ir incorporada a ella la fundamentación de la pretensión, podemos dividirlos en subjetivos, objetivos y de actividad, según tengan relación con los sujetos, el objeto o la actividad, respectivamente

(524 LEC), mientras que los de la demanda pura o papeleta son de muy simple formulación, pues la misma sólo exigirá la presentación de un escrito en el que, detallando los sujetos y el objeto genérico del proceso, se solicitará su iniciación o comienzo (720 LEC).

Volviendo a los requisitos de la demanda mixta¹⁹², los recordaremos brevemente, al ser los mismos en parte ya considerados como requisitos de la pretensión.

I- SUBJETIVOS

Los requisitos relativos a los sujetos afectan al órgano jurisdiccional y a las partes.

En cuanto al órgano jurisdiccional, la demanda ha de interponerse ante un órgano que tenga jurisdicción y que sea competente.

En cuanto al demandante, es obvio que la demanda ha de proceder de quien tenga capacidad para ser parte y procesal y de quien se halle en una posición tal con el objeto del litigio que goce de legitimación activa (el requisito de la postulación, como sabemos, no es necesario en este juicio verbal, pero si se usa Procurador o/y Abogado, estos deberán estar profesionalmente habilitados para asumir su representación o/y su dirección técnica, según se trate de uno u otro, debiendo acompañar en el caso de la representación el correspondiente poder, salvo si la misma se otorga apud acta, debidamente aceptado y bastantado).

En cuanto al demandado, la demanda ha de dirigirse contra un sujeto pasivo concreto con capacidad para ser parte y legitimación pasiva, pero no hace falta que tenga capacidad procesal ni el requisito de la postulación, en el caso de hacer uso de ella por ser

¹⁹² Hace referencia a ellos ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 205 y ss..

facultativa, ya que su defecto corresponde remediarlo al demandado en su ulterior comparecencia, y no al demandante.

II- OBJETIVOS

Los requisitos relativos al objeto de la demanda se traducen en la necesidad de que sea objetivamente posible, idónea y justificada por el simple interés del demandante, debido a su carácter de acto procesal.

III- DE LA ACTIVIDAD

Por último, los requisitos de la actividad que la demanda lleva consigo se desdoblan en las tres dimensiones ya conocidas: lugar, tiempo y forma.

El requisito del lugar se refiere a que la demanda se interpondrá en la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional al que va dirigida.

En cuanto al tiempo, la demanda se lleva a cabo en cualquier día y hora, por no ser un acto sujeto a las reglas de habilidad del tiempo; sin embargo, la fecha de presentación de una demanda sí puede tener importancia, por ejemplo, debido a la prescripción de una situación jurídica, pero ésta no es una limitación temporal que opere dentro del proceso, sino que pertenece al Derecho material (sí que existe alguna limitación temporal desde el punto de vista procesal, como las establecidas en los arts. 1618.1º y 1653 LEC, respecto a los juicios de retracto e interdictos, pero evidentemente ninguna de ellas afecta a la presentación de la demanda en un juicio verbal ordinario).

En lo referente a la forma, la demanda debe expresarse en castellano o, en su caso, en la lengua de la CA correspondiente (art. 231.3 LOPJ) y en lenguaje escrito, no siendo válida en nuestro Derecho por lo general una petición formulada en un idioma extranjero u

oralmente, y esto último aunque domine, como sucede en nuestro proceso de ínfima cuantía, el principio de la oralidad, pues, dada la importancia del acto, su formulación oral acarrearía graves inconvenientes; no lo permite por tanto el art. 720 LEC cuando dispone que la demanda se interpondrá en una papeleta extendida en papel común.

4- CONTENIDO O ESQUEMA DE LA DEMANDA

La demanda contendrá, siguiendo el esquema fijado en la práctica forense¹⁹³ de encabezamiento, cuerpo, suplico, fecha y firma, los requisitos anteriormente vistos. La demanda se adaptará totalmente a esta estructura si contiene la fundamentación de la pretensión, es decir, si es una demanda mixta o compleja, pero carecerá del cuerpo, si no la contiene, por ser una simple papeleta o demanda pura^{*64}.

I- ENCABEZAMIENTO

En el encabezamiento se incluye: una invocación genérica del órgano jurisdiccional; la determinación de las partes activa y pasiva, mediante sus nombres, apellidos, domicilios (imprescindible si, como explica el art. 4 LEC en su último párrafo,

¹⁹³ El mismo se recoge por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 286 y ss..

^{*64} Consultar el art. 437 Proyecto (ya transcrito) en lo que a contenido mínimo de la demanda del juicio verbal se refiere. Junto a lo allí expuesto, de acuerdo con el art. 253, el actor deberá también expresar en su demanda la cuantía:

“Artículo 253. Expresión de la cuantía en la demanda.

1. El actor expresará justificadamente en su escrito inicial la cuantía de la demanda. Dicha cuantía se calculará, en todo caso, conforme a las reglas de los artículos anteriores.

La alteración del valor de los bienes objeto del litigio que sobrevenga después de interpuesta la demanda, no implicará la modificación de la cuantía ni la de la clase de juicio.

2. La cuantía de la demanda deberá ser expresada con claridad y precisión. No obstante, podrá indicarse en forma relativa, si el actor justifica debidamente que el interés económico del litigio al menos iguala la cuantía mínima correspondiente al juicio ordinario, o que no rebasa la máxima del juicio verbal. En ningún caso podrá el actor limitarse a indicar la clase de juicio a seguir, ni hacer recaer en el demandado la carga de determinar la cuantía.

3. Cuando el actor no pueda determinar la cuantía ni siquiera en forma relativa, por carecer el objeto de interés económico, por no poderse calcular dicho interés conforme a ninguna de las reglas legales de

no se utiliza Procurador, para poder dirigirles las necesarias notificaciones) y profesiones u oficios, así como la determinación del Procurador (debiéndose mencionar que se acompaña el correspondiente poder debidamente aceptado y bastanteado, excepto si la representación se otorgase apud acta) y/o representante legal o voluntario del demandante, si lo hubiere; la indicación del procedimiento; y la indicación genérica de la pretensión que se deduce.

II- CUERPO

El cuerpo de la demanda (parte de la que carece la papeleta de demanda) consta de dos grandes apartados, redactados en párrafos separados y numerados: los hechos en que se basa la pretensión y fundamentos de derecho de la misma, divididos a su vez en fundamentos jurídico-procesales y jurídico-materiales (estos últimos relativos al fondo del asunto).

Los fundamentos jurídico-procesales recogen los requisitos procesales de admisibilidad de la demanda, es decir: la jurisdicción y competencia objetiva y territorial del órgano jurisdiccional; la capacidad para ser parte y legitimación indirecta de las partes, y capacidad procesal y postulación si la hubiere del demandante; la posibilidad, la idoneidad o adecuación del procedimiento del juicio verbal y la causa; los requisitos de tiempo y forma de la demanda (es decir, por escrito, en idioma oficial y en párrafos separados y numerados, según exige el art. 524 LEC); y por último, la documentación y copias de los arts. 503, 504 y 515 LEC, así como, en el caso de haberse hecho, como trámite facultativo que es, la certificación de haberse intentado sin efecto la conciliación (caso de incomparecencia), o de haberse celebrado sin avenencia, o con avenencia pero excediendo la cuantía de la competencia del Juez que la celebró.

determinación de la cuantía, o porque, aun existiendo regla de cálculo aplicable, no se pudiera determinar

Los fundamentos jurídico-materiales tratan de subsumir los hechos en las normas materiales aplicables a los mismos, o, dicho de otra forma, se recogen los requisitos de prosperabilidad de la acción, es decir: la existencia de requisitos constitutivos materiales (entre ellos, la legitimación directa o titularidad de las partes); la inexistencia de hechos impositivos, extintivos y excluyentes materiales; y por último, otros aspectos como existencia de posibles intereses y adjudicación de las costas.

III- SUPLICO

En el suplico o pie de la demanda se recogen las peticiones esenciales y accesorias (que se le tenga por personado, se admita a trámite la demanda, se le dé traslado, y se condene al demandado al pago del principal, intereses y costas).

Las eventuales solicitudes meramente instrumentales o secundarias se abandonan a la vieja rúbrica del otrosí (recibimiento a prueba, exhortos de citaciones, señalamiento de archivos, desglose del poder si existe).

IV- FECHA Y FIRMA

Tras una respetuosa reclamación de Justicia, se concluye con la fecha, es decir, la expresión del lugar y el tiempo, y la firma, del que presenta la demanda o de un testigo a su ruego, si no pudiere o no supiere firmar (art. 720 LEC), es decir, del propio demandante, ya que no se exige la postulación en este juicio, o del Procurador y/o Abogado (con nombre, apellidos y número de colegiado) si los hubiere, por ser ésta facultativa.

aquella al momento de interponer la demanda, ésta se sustanciará conforme a los cauces del juicio ordinario.”

5- DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

A la demanda del juicio verbal, basta con acompañar tantas copias de la misma^{*65}, suscritas del mismo modo, es decir, firmadas por el que las presente (demandante), o por

^{*65} Lo mismo ocurre en el Proyecto, y para ello pueden verse los arts. 273, 264 y 265.4:

“Artículo 273. Presentación de copias de escritos y documentos.

De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en los juicios se acompañarán tantas copias literales cuantas sean las otras partes.”

“Artículo 264. Documentos procesales.

Con la demanda, la contestación o, en su caso, al comparecer a la vista de juicio verbal, habrán de presentarse:

1º El poder notarial conferido al Procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue «apud acta».

2º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.

3º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.”

“Artículo 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto.

1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

1º Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.

2º Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado segundo del artículo 299, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.

3º Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.

4º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 339. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el artículo 337.

5º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.

2. Sólo cuando las partes, al presentar su demanda o contestación, no puedan disponer de los documentos, medios e instrumentos a que se refieren los tres primeros números del apartado anterior, podrán designar el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registro, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación.

Si lo que pretenda aportarse al proceso se encontrara en archivo, protocolo, expediente o registro del que se puedan pedir y obtener copias fehacientes, se entenderá que el actor dispone de ello y deberá acompañarlo a la demanda, sin que pueda limitarse a efectuar la designación a que se refiere el párrafo anterior.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda.

4. En los juicios verbales, el demandado aportará los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes a que se refiere el apartado primero en el acto de la vista.”

Otras normas en materia de copias son:

“Artículo 274. Traslado por el tribunal de las copias a las otras partes interesadas, cuando no intervengan Procuradores.

Cuando las partes no actúen representadas por Procurador, firmarán las copias de los escritos y documentos que presenten, respondiendo de su exactitud, y dichas copias se entregarán por el tribunal a la parte o partes contrarias.”

“Artículo 275. Efectos de la no presentación de copias.

En los casos a que se refiere el artículo anterior, la omisión de la presentación de copias de los escritos y documentos no será motivo para dejar de admitir unos y otros.

Dicha omisión se hará notar a la parte, que habrá de subsanarla en el plazo de cinco días. Cuando la omisión no se remediare dentro de dicho plazo, el Secretario Judicial expedirá las copias de los escritos y documentos a costa de la parte que hubiese dejado de presentarlas, salvo que se trate de los escritos de demanda o contestación, o de los documentos que deban acompañarles, en cuyo caso se tendrán aquéllos por no presentados o éstos por no aportados, a todos los efectos.”

“Artículo 276. Traslado de copias de escritos y documentos cuando intervenga Procurador.

Traslado por el tribunal del escrito de demanda y análogos.

1. Cuando todas las partes estuvieren representadas por Procurador, cada uno de estos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al tribunal.

2. El Procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de notificaciones a que alude el apartado tercero del artículo 28, la copia o copias de los escritos y documentos, que irán destinadas a los Procuradores de las restantes partes y litisconsortes. Un Secretario Judicial u oficial designado recibirá las copias presentadas, que, una vez fechadas y selladas, entregará al encargado del servicio, debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado el traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y documentos que se presenten al tribunal.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación cuando se trate del traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda originar la primera comparecencia en juicio. En tales casos, el Procurador habrá de acompañar copias de dichos escritos y de los documentos que a ellos se acompañen y el tribunal efectuará el traslado conforme a lo dispuesto en los artículos 273 y 274 de esta Ley. Si el Procurador omitiere la presentación de estas copias, se estará a lo dispuesto en el último inciso del artículo 275.

“Artículo 277. Efectos de la omisión del traslado mediante Procurador.

Cuando sean de aplicación los dos primeros apartados del artículo anterior, no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas.”

“Artículo 278. Efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos.

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la forma establecida en el artículo 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas.”

“Artículo 279. Función de las copias.

1. Las pretensiones de las partes se deducirán en vista de las copias de los escritos, de los documentos y de las resoluciones del tribunal, que cada litigante habrá de conservar en su poder.

2. No se entregarán a las partes los autos originales, sin perjuicio de que puedan obtener, a su costa, copias de algún escrito o documento.”

“Artículo 280. Denuncia de inexactitud de una copia y efectos.

Si se denunciare que la copia entregada a un litigante no se corresponde con el original, el tribunal, oídas las demás partes, declarará la nulidad de lo actuado a partir de la entrega de la copia si su inexactitud hubiera podido afectar a la defensa de la parte, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien presentare la copia inexacta.

El tribunal, al declarar la nulidad, dispondrá la entrega de copia conforme al original, a los efectos que procedan en cada caso.”

Sin embargo, si se exigen en determinados casos especiales los documentos a que se refiere el art. 266:

“Artículo 266. Documentos exigidos en casos especiales.

Se habrán de acompañar a la demanda:

1º Las certificaciones y testimonios que acrediten haber terminado el proceso y haberse en él reclamado o recurrido cuando se interponga demanda de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados por daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones, con dolo, culpa o ignorancia inexcusable.

2º Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda.

3º Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por el ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere.

un testigo a su ruego si no pudiere o supiere firmar, o por Procurador y/o Abogado si los hubiere, cuantos sean los demandados (720 in fine LEC).

El art. 720 se refiere expresamente al tipo de demanda pura o papeleta, pero se seguirán las mismas reglas en caso de presentarse una demanda sustanciada, pues así se deduce del art. 522 LEC cuando dispone que con exclusión de lo ordenado en el art. 514, las disposiciones de la Sección Tercera y la Sección Cuarta (reglas generales sobre presentación de documentos y copias de los escritos y documentos, y su objeto, respectivamente) no son aplicables al juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones especiales¹⁹⁴.

Sin embargo, aunque es suficiente, como acabamos de ver, con acompañar a la demanda las copias de ésta, si se quiere es posible, en el caso de tratarse de una demanda compleja, acompañar también los documentos a que se refieren los arts. 503 y 504, es decir, el poder que acredite la representación del Procurador (salvo que se haga apud acta) si éste actúa como tal (quizá sea ésta la mejor solución si nos basamos en el art. 3.II LEC), los documentos que acrediten la legitimación indirecta y todos aquellos documentos en que la parte funde su derecho, y todo ello junto a sus copias correspondientes, tantas como otras partes litigantes (arts. 515 y 516 LEC)^{*66}. En el caso de que el poder y los

4º El documento en que conste fehacientemente la sucesión «mortis causa» en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión.

5º Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de la demanda.”

¹⁹⁴ Explica GUASP que el art. 522 LEC (antiguo 523) está justificado porque las exigencias de los arts. 503 y 515 en materia de presentación de documentos y en materia de copias “obedecen a la aplicación de los principios de preclusión y de escritura y carecen de sentido en aquellos procedimientos donde tales criterios no rijan. Esto es lo que ocurre precisamente en los llamados juicios verbales, tipos de proceso en que impera la oralidad y la concentración contrarias a las máximas antes señaladas”, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, Volumen I, Primera Parte (Arts. 460 al 549), Art. 523, pág. 224. M. Aguilar Editor, 1945, Madrid.

^{*66} Igual ocurre en el Proyecto, pues en el juicio verbal el demandante puede optar por presentar con sus copias los documentos de los arts. 264 y 265 junto a la demanda.

documentos, junto con sus copias, no se hayan aportado con la demanda mixta, se aportarán en la comparecencia posterior ante el Juez regulada en el art. 730 LEC.

C- PRESENTACION DE LA DEMANDA¹⁹⁵

Tras la redacción de la demanda, ésta ha de presentarse.

La presentación de la demanda (mixta o pura) es un simple acto material por el cual el demandante, o cualquier otra persona en su nombre (como el Procurador si lo hubiere), la entrega al órgano receptor de la misma. No obstante, este acto tiene una gran significación procesal por cuanto al momento de la presentación de la demanda se retrotraen los efectos que la admisibilidad de la misma producen (la litispendencia), según la más reciente jurisprudencia del TS.

Analizaremos cada uno de los diferentes aspectos de esta presentación.

1- QUIÉN

Al ser la demanda el acto de iniciación del proceso por el cual una persona llamada actor pide la tramitación de su pretensión, es indudable que es tal persona la que ha de hacer su presentación, bien personalmente, bien por medio de su representante técnico si lo hubiere, pero como tal acto no entraña la realización de ninguna declaración de voluntad, consistiendo simplemente en la entrega material del documento que contiene la demanda, parece indudable que es innecesaria la presentación personal, pudiendo hacerse por medio de simple mandatario, pudiendo éste ser cualquier persona mayor de catorce años, entendiéndose que, según dispone el art. 268 LEC en materia de recepción de notificaciones, ésta es la edad a partir de la cual se posee capacidad de atendibilidad de los actos.

2- ANTE QUIÉN

Es necesario que la demanda se presente ante el órgano encargado de la recepción de la misma. Éste variará según que en la población de que se trate exista un único Juzgado o una pluralidad de ellos (de la misma categoría).

La regla general es que, existiendo un Juzgado único, el órgano receptor será el Secretario judicial de ese Juzgado (arts. 283 y 284 LOPJ).

Sin embargo, si son varios los Juzgados de la misma categoría, existen varias posibilidades a la hora de determinar el órgano receptor. De esta forma, la demanda podrá presentarse en la oficina de reparto del Juzgado Decano (167 LOPJ) o en el registro general si lo hubiera (272 LOPJ).

Junto a ello, puede ocurrir que nos encontremos fuera de las horas de servicio, ya que la demanda puede presentarse las 24 horas del día, en cuyo caso podremos acudir al buzón fechador, si existiere, o al Juzgado de Guardia (arts. 41.1 y 41.4 del Reglamento 5/1995, de 7 de Junio, del CGPJ). En el caso de poblaciones en que no exista más que un Juzgado, al no haber uno de guardia, ni en muchos supuestos buzones en el local, creemos, junto a Aragoneses Alonso¹⁹⁶, que puede obviarse tal inconveniente, o bien presentándola en el propio domicilio del Secretario o de su sustituto legal, o, en el caso excepcional de que esto no sea posible, deberá acreditarse la entrega ante autoridad o funcionario público que esté obligado a tal recepción y que pueda certificar de la misma (por ejemplo, Notario, oficina de Correos...etc.).

¹⁹⁵ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 21, págs. 224 y ss..

3- CUÁNDO

El problema del tiempo de la presentación de la demanda no es un problema procesal, como ya vimos, sino de Derecho material (posible prescripción, caducidad ...). Por tanto, la presentación de la demanda puede hacerse en cualquier día y hora, pero teniendo en cuenta lo expuesto respecto del lugar de la presentación, es decir, según quien sea el órgano receptor.

Con todo, lo normal es que la presentación tenga lugar en días y horas hábiles (art.182 LOPJ), en horas de audiencia (188 LOPJ), y en horas de trabajo o despacho (arts. 189 LOPJ y 6, 9 y 11 del Reglamento de 1995).

4- CÓMO

Ninguna formalidad especial se exige para el acto de presentación de la demanda; basta, como ya indicamos, con la simple entrega material.

5- RECIBO

En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que se presenten, con expresión de la fecha y la hora de su presentación (arts. 283.2 LOPJ y 41 Reglamento de 1995).

El art. 250 LEC establece que se dará recibo a la parte, a costa de la misma, siempre que ésta lo reclame; pero esto no quiere decir que se le dará recibo sólo si lo reclama, pues prevalece la LOPJ, por ser posterior, al utilizar el término “en todo caso”.

¹⁹⁶ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 21, págs. 225 y 226.

6- DONDE

Ya hemos visto que el lugar de presentación depende de las circunstancias de ante quién se presente; no obstante, el supuesto general es que el lugar sea el órgano jurisdiccional competente y la Secretaría de dicho Juzgado (arts. 283 y 284 LOPJ).

7- DOCUMENTACION DEL ACTO^{*67}

El Secretario u Oficial habilitado documentará el acto haciendo constar el día y la hora de presentación a través de las diligencias de constancia, que serán autorizadas por él con media firma (arts. 283.1 y 280.2 LOPJ, 41 Rglmto. 1995 y 252 LEC).

Las sentencias de 14-2-1928 y 18-5-1932 establecen que “la fecha de presentación de los escritos debe acreditarse mediante diligencia de fedatario, para garantía de los derechos de las partes”.

D- REPARTO¹⁹⁷

A continuación de la presentación de la demanda se procederá a su reparto, ya que, los JPI no permitirán que se curse ningún negocio si no constare en él la diligencia de repartimiento; en el caso de que no constare dicha diligencia, no se podrá dictar otra providencia que la de que pase al repartimiento (arts. 431 LEC y 33 y ss. Rglmto. 1995)^{*68}.

^{*67} Puede verse al respecto el art. 145.1.1º Proyecto:

“Artículo 145. Fe pública judicial.

1. Corresponde al Secretario Judicial, con el carácter de autoridad, dar fe de las actuaciones procesales que se realicen en el tribunal o ante éste, donde quiera que se constituya, así como expedir copias certificadas y testimonios de las actuaciones no secretas ni reservadas a las partes interesadas.

Concretamente, el Secretario Judicial:

1º Dará fe, por sí o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que les acompañen.”

¹⁹⁷ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 22, págs. 229 y ss..

^{*68} Las reglas sobre reparto vienen establecidas en los arts. 68 a 70 Proyecto:

“Artículo 68. Obligatoriedad del reparto. Tratamiento procesal.

La obligatoriedad del reparto viene establecida por el art. 430 LEC, cuando dispone que todos los negocios civiles, así de la jurisdicción contenciosa como de la voluntaria, serán repartidos entre los JPI, cuando haya más de uno en la población. Sin embargo, las primeras diligencias en el proceso, que, a juicio del Juez sean de índole tan urgente que su dilación dé motivo fundado para temer que se irroguen irreparables perjuicios a los interesados, podrán acordarse y llevarse a efecto por cualquiera de los Jueces ante quienes se solicite, aunque luego que se practique la diligencia urgente se pasará el negocio al repartimiento, sin que esto pueda dilatarse por más de tres días (art. 432 LEC).

Establece el art. 167 LOPJ que donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena

1. Todos los asuntos civiles serán repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya más de uno en el partido. La misma regla se aplicará a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando estén divididas en Secciones.

2. Los tribunales no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto si no constare en él la diligencia correspondiente. En caso de que no conste dicha diligencia, se anulará, a instancia de cualquiera de las partes, cualquier actuación que no consista en ordenar que el asunto pase a reparto.

3. Contra las decisiones relativas al reparto no procederá la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podrá impugnar la infracción de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentación del escrito o de la solicitud de incoación de las actuaciones.

4. Las resoluciones perjudiciales dictadas por tribunales distintos de aquél o aquéllos a los que correspondiese conocer según las normas de reparto se declararán nulas a instancia de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el trámite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracción de las normas de reparto y dicha infracción no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior."

"Artículo 69. Plazo en que debe efectuarse el reparto.

Los asuntos serán repartidos y remitidos al Juzgado o Sección que corresponda dentro de los dos días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las actuaciones."

"Artículo 70. Medidas urgentes en asuntos no repartidos.

Los Jueces Decanos y los Presidentes de Tribunales y Audiencias podrán, a instancia de parte, adoptar las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable."

administración de Justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobación.

El reparto se realizará bajo la supervisión del Juez Decano, asistido por un Secretario, y le corresponderá a aquél resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

A pesar de la obligatoriedad del reparto, podemos apreciar la excepción del art. 84 CCo de 1885, en lo que se ha dado en llamar “fuero de feria”¹⁹⁸. Tal artículo establece que las cuestiones que se susciten en las ferias sobre contratos celebrados en ellas, se decidirán en juicio verbal por el Juez Municipal del pueblo en que se verifique la feria, con arreglo a las prescripciones de dicho Código, siempre que el valor de la cosa litigiosa no exceda de 1.500 pts., y si hubiere más de un Juez Municipal, será competente el que eligiere el demandante, sin entrar a turno de repartimiento. Lógicamente, donde dice Juez Municipal debe entenderse actualmente JPI; en cuanto a la cuantía de 1.500 pts., la misma no ha sido modificada desde la promulgación del Código, lo que nos hace pensar que debe aplicarse por extensión en este artículo la cantidad de 80.000 pts., por tratarse de un juicio verbal y ser ésta hoy día la cuantía máxima del mismo. Por tanto, la excepción a la necesidad de reparto en este juicio verbal se aplicaría ahora hasta 80.000 pts., en localidades sede de partido en las que exista más de un JPI y se celebren ferias.

Dicho todo lo anterior, pasaremos a analizar las principales cuestiones del repartimiento: concepto, requisitos y documentación.

1- CONCEPTO

De lo anteriormente visto, se puede definir el reparto como la acción de distribuir, entre los varios órganos jurisdiccionales de igual grado que existen en algunas poblaciones, los negocios de que son competentes.

2- REQUISITOS

Examinaremos, como es de rigor, los requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad.

En cuanto a los requisitos subjetivos, el Secretario Decano de cada población, juntamente con el Juez Decano, constituyen los elementos subjetivos del repartimiento.

En lo referente a los elementos objetivos hay que determinar las poblaciones y asuntos sujetos a reparto. Venimos diciendo que el reparto se da en las poblaciones donde existe más de un Juzgado de la misma clase, es decir, en el caso del juicio verbal más de un JPI (ya que no existirán más de un JP en la misma población). Además, también dijimos que cualquier asunto civil (y por tanto, también los que deban conocerse a través del juicio verbal) se deberá repartir (art. 430 LEC), aunque podrán llevarse a cabo sin previo repartimiento las primeras diligencias que sean urgentes (432 LEC).

Sobre los requisitos de la actividad: el lugar es la Sala de Audiencia del Juzgado Decano; el tiempo es el de la primera sesión siguiente a la entrega de la demanda; la forma del reparto tiene varias fases sucesivas y necesarias que serán objeto de anotación (presentación del negocio, clasificación del negocio, reparto propiamente dicho y cubrimiento de turno de todos los Juzgados de igual grado).

¹⁹⁸ Esta excepción es recogida por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 22, pág. 240.

3- DOCUMENTACION^{*69}

Para documentar el reparto del asunto existen libros y fichero, acta y nota.

Los libros y fichero son necesarios para controlar el reparto: libro de inmatriculación, libro de registro de turnos, libro de certificaciones literales de las actas de reparto, fichero de clasificación del asunto.

El acta de reparto se levantará de cada sorteo realizado, uniéndose al asunto repartido.

Consecuencia lógica de la obligatoriedad del reparto es la de justificar que dicha diligencia se ha efectuado, por lo que el Juez Decano suscribirá una nota a continuación de la demanda, que acredite su realización (para poder ser admitida a trámite) y que será firmada asimismo por el Secretario.

Téngase en cuenta, hoy en día, la incidencia de la informatización en el desempeño de tales cometidos, de forma tal que ésta aporta rapidez y seguridad en la realización de tales funciones.

E- RECEPCION DE LA DEMANDA EN EL JUZGADO¹⁹⁹

Tras el reparto, la recepción de la demanda es el acto puramente material por el que se admite la misma en el Juzgado al que le haya correspondido tras el reparto (si lo hubiera

^{*69} Pueden verse al respecto los arts. 145.1.2º y 146.3 Proyecto:

“Artículo 145. Fe pública judicial.

1. Corresponde al Secretario Judicial, con el carácter de autoridad, dar fe de las actuaciones procesales que se realicen en el tribunal o ante éste, donde quiera que se constituya, así como expedir copias certificadas y testimonios de las actuaciones no secretas ni reservadas a las partes interesadas.

Concretamente, el Secretario Judicial:

2º Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal.”

“Artículo 146. Documentación de las actuaciones.

3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garantías a que se refiere el apartado quinto del artículo 135 de

habido). Se documenta con una diligencia de constancia extendida por el Secretario (arts. 280 y 283 LOPJ).

F- DACION DE CUENTA^{200*70}

A continuación tiene lugar la dación de cuenta, que es el acto procesal por el que el Secretario, o quien haga sus veces, informa al Juez de la pretensión recibida en su Secretaría, a fin de que éste resuelva lo procedente.

El Secretario dará cuenta al Juez del escrito y documentos (si existen) presentados, en el mismo día de su presentación o al siguiente día hábil (284.1 LOPJ).

La dación de cuenta se hará oralmente, por el orden de presentación de los escritos, sin otra anteposición que la de los que sean urgentes o tengan reconocida preferencia por la Ley (286.1 LOPJ).

G- ACTUACIONES POSTERIORES: DESARROLLO NORMAL

Tras las actuaciones previas, presentación de la demanda, reparto, recepción en el Juzgado y dación de cuenta, sigue el proceso con una serie de actuaciones posteriores, también denominadas de desarrollo, que nos conducirán hasta las de desarrollo anormal y las de terminación de la primera instancia del juicio verbal.

esta Ley. También podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos.”

¹⁹⁹ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 23, págs. 247 y 248.

²⁰⁰ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 24, págs. 249 y 250.

^{*70} Al respecto, hallamos el art. 178 Proyecto:

“Artículo 178. Dación de cuenta.

1. Para el despacho ordinario darán cuenta los Secretarios Judiciales a la Sala, al ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día de su presentación o en el siguiente día hábil. Lo mismo harán respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia judicial.

2. También se dará cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos, así como de las diligencias de ordenación que se hubieren dictado.

1- EXAMEN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ : RESOLUCIONES Y RECURSOS^{201*71}

El examen de la demanda por el Juez es aquel acto (primero tras la dación de cuenta del Secretario) por el cual el órgano jurisdiccional califica la demanda, decretando su admisibilidad o inadmisibilidad. Para ello, examina si se cumplen los requisitos de admisibilidad e imparcialidad examinables de oficio en el juicio de que tratamos. También controla la no existencia de dos cuestiones de fondo concretas (que la pretensión no se base en las llamadas obligaciones naturales).

Con carácter general, en la resolución que el Juez dicte (admitiendo o inadmitiendo la demanda) se contendrá si la misma es o no firme, y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello (art. 248.4 LOPJ). Además, podrá también aclararse algún concepto oscuro o suplirse cualquier omisión que contenga (art. 267 LOPJ).

I- DILIGENCIA DE REPARTIMIENTO

Éste es el primero de los requisitos procesales que el Juez controlará de oficio in “limine litis”, pues aunque no es propiamente un requisito de la demanda, es indudable que su falta conduce a su inadmisión y a la corrección del defecto.

3. Siempre que sea necesario por el volumen de asuntos pendientes, el Secretario Judicial, previo consentimiento del Presidente o del Juez, podrá delegar la dación de cuenta en funcionario del tribunal o Juzgado.”

²⁰¹ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO. Técnica...cit., Capítulo V, págs. 251 y ss. y párrafo 88, págs. 614 y 615, y Programa y Esquemas...cit., págs. 25 y 50.

⁷¹ A este examen hace referencia el párrafo I del art. 440.1 Proyecto cuando dispone que: “El Tribunal, en el plazo de cinco días, previo examen de su jurisdicción y de su competencia objetiva y, cuando proceda, territorial...”.

Ya vimos que el art. 431 LEC exige que conste junto con la demanda la diligencia de reparto, salvo la excepción en el juicio que nos ocupa del fuero de feria del art. 84 CCo.

A- SI NO CONSTA

Finaliza el art. 431 LEC, en su último párrafo, diciendo que en el caso de que no conste dicha diligencia de reparto, no podrá el Juez dictar otra providencia que la de la inadmisión a trámite de la demanda y que pase al repartimiento, sin posibilidad de recurso^{*72}. Esta providencia será una resolución de mera tramitación (ya que no resuelve ningún problema procesal, sino que ordena el cumplimiento de un mero trámite), se dictará en el acto de dar cuenta el Secretario, o a lo más dentro de los dos días siguientes (art. 316 LEC), se documentará mediante su extensión en los autos con la firma del Juez y Secretario que la autoriza (arts. 251 y 252 LEC) y se notificará a los interesados (documentando esta última también en autos por medio de diligencia).

Si se dicta cualquier otra diligencia que no sea esta providencia creemos que no hará nulo el proceso, pero sí dará lugar a responsabilidades disciplinarias (arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466 LOPJ), civiles (arts. 411 y ss. LOPJ) y penales (arts. 405 y ss. LOPJ), en su caso.

Sin embargo, podrán practicarse las primeras diligencias del proceso si tienen carácter urgente, pasando luego el negocio al repartimiento, sin que esto pueda dilatarse por más de tres días (art. 432 LEC).

B- SI CONSTA

Si la diligencia de reparto consta junto a la demanda, se continúa en el examen de la misma.

II- RATIFICACION

La ratificación es el acto por el que el demandante confirma su intención de iniciar el proceso. Ésta sólo se exige cuando la parte demandante no actúa representada por Procurador o Letrado, ya que se entiende que el acto de la entrega del poder o la comparecencia confiriendo la representación apud acta equivalen a la ratificación.

Lógicamente, la ratificación no es un requisito a examinar en la demanda, pero sí un requisito a exigir para la admisibilidad de la misma (motivo por el que le damos esta ubicación). El análisis debe, pues, dirigirse a determinar la forma en que se hace la comparecencia. Por tanto, siempre que la comparecencia no sea por profesional, la ratificación será necesaria.

^{*72} Ver los arts. 68 a 70 Proyecto relativos al reparto, ya transcritos al tratar del mismo.

III- INCOMPATIBILIDADES SUBJETIVAS: ABSTENCION^{*73}

Tanto los Jueces, como los Secretarios y demás funcionarios judiciales (Oficiales, Auxiliares y Agentes) deberán abstenerse del conocimiento del asunto sin esperar a que se

^{*73} En relación a la abstención de funcionarios judiciales (incluidos Fiscales) encontramos en el Proyecto los arts. 99, 100, 102, 103, 104 y 106:

“Artículo 99. Ámbito de aplicación de la Ley y principio de legalidad.

1. En el proceso civil, la abstención y la recusación de Jueces, Magistrados, así como la de los miembros del Ministerio Fiscal, los Secretarios Judiciales, los peritos y el personal al servicio de la Administración de Justicia, se regirán por lo dispuesto en este Título.

2. La abstención y, en su caso, la recusación de los indicados en el apartado anterior sólo procederán cuando concurra alguna de las causas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para la abstención y recusación de Jueces y Magistrados.”

“Artículo 100. Deber de abstención.

1. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.

2. El mismo deber tendrán el Secretario Judicial, Oficial, Auxiliar o Agente judicial, el miembro del Ministerio Fiscal o el perito designado por el Juez en quienes concurra alguna de las causas que señala la Ley.”

“Artículo 102. Abstención de Jueces y Magistrados.

1. La abstención del Magistrado o Juez se comunicará, respectivamente, a la Sección o Sala de la que forme parte o al tribunal al que corresponda la competencia funcional para conocer de recursos contra las sentencias, que resolverá en el plazo de diez días. La comunicación de la abstención se hará por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.

2. La abstención de Juez o Magistrado suspenderá el curso del proceso en tanto no se resuelva sobre ella.

3. Si el tribunal a que se refiere el apartado primero de este artículo no estimare justificada la abstención, ordenará al Juez o Magistrado que continúe el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusación. Recibida la orden, el tribunal dictará providencia poniendo fin a la suspensión del proceso.

4. Si se estimare justificada la abstención por el tribunal competente según el apartado primero, el abstenido dictará auto apartándose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un tribunal colegiado, el auto, que no será susceptible de recurso alguno, lo dictará la Sala o Sección a que pertenezca el que se abstenga.

En ambos casos, la suspensión del proceso terminará, respectivamente, cuando el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la Sala o Sección a que pertenecía el abstenido.

5. La abstención y la sustitución del Juez o Magistrado que se ha abstenido serán comunicadas a las partes, incluyendo el nombre del sustituto.”

“Artículo 103. Abstención de los Secretarios Judiciales.

1. Los Secretarios Judiciales se abstendrán por escrito motivado dirigido al Juez o Magistrado, si se tratare de un Juzgado, o al Presidente, si se trata de una Sala o Sección. Decidirá la cuestión, respectivamente, el Juez o Magistrado, por una parte, o la Sala o Sección, por otra.

2. En caso de confirmarse la abstención, el Secretario Judicial que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deberá aquél continuar actuando en el asunto.”

“Artículo 104. Abstención de los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

1. La abstención de los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia se comunicará por escrito motivado al Secretario del tribunal en que se siga el proceso, que decidirá sobre su procedencia.

2. En caso de ser estimada la abstención, el Oficial, Auxiliar o Agente en quien concurra causa legal será reemplazado en el proceso por quien legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habrá de continuar actuando en el asunto.”

“Artículo 106. Abstención de los miembros del Ministerio Fiscal.

La abstención de los miembros del Ministerio Fiscal se regirá por las normas establecidas en su Estatuto Orgánico.”

les recuse, si concurre en ellos alguna de las causas legales de los arts. 219 y 220 LOPJ (arts. 217, 221.1, 461.1 y 462.1 LOPJ y 190 LEC).

De ahí deriva la necesidad del examen de este requisito, que no es un presupuesto procesal de admisibilidad, sino una garantía de actuación imparcial del órgano jurisdiccional.

La incompatibilidad se refiere, pues, a la especial situación en que puede encontrarse un Juez (y demás funcionarios judiciales) en relación con el objeto del proceso, las partes, sus representantes o defensores (estos dos últimos en el caso de que los hubiera en el juicio verbal). En nuestro Derecho, las causas de abstención (y recusación) están tasadas en la Ley y la crítica más relevante que cabe formular es que tan sólo se refieren a los Abogados y Procuradores cuando existe un vínculo matrimonial o familiar.

A- SI EXISTEN

Si existe alguna incompatibilidad subjetiva de los arts. 219 y 220 LOPJ, el Juez dictará auto estableciendo la abstención, sin posibilidad de recurso para las partes (245 b) LOPJ y 190 LEC).

La abstención será motivada dándose cuenta justificada al Presidente de la Audiencia, el cual lo comunicará a la Sala de Gobierno correspondiente; si en el plazo de cinco días no recibe orden de continuar en el proceso, o si la abstención es confirmada expresamente, el Juez lo notificará a las partes y será sustituido conforme a los arts. 207 y ss. LOPJ, remitiendo, en su caso, las actuaciones al que deba sustituirle (arts. 221.2, 222 LOPJ y 216 LEC). Sin embargo, si la abstención no es confirmada, el Juez debe continuar con el conocimiento del proceso, sin perjuicio del derecho de las partes a recusarlo en cuanto tuvieran conocimiento de la causa legal (223.1 LOPJ) y de la imposición al Juez, si

hubiera suficiente motivo para ello, de la sanción disciplinaria (arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466 LOPJ) que proceda, elevándolo en este caso a conocimiento del CGPJ para que se haga constar en el expediente personal del Juez a los efectos que corresponda (221.3 LOPJ).

Para la abstención del Secretario Judicial y Oficiales, Auxiliares y Agentes se aplicarán los arts. 461.1 y 462.1 LOPJ, respectivamente.

El acto se documenta, como siempre, mediante la inserción en los autos de la resolución, la diligencia de notificación y la de remisión de los oficios al sustituto.

B- SI NO EXISTEN

Si en el órgano jurisdiccional no existen incompatibilidades subjetivas se continúa con el examen de la demanda.

IV- JURISDICCION

Definida la jurisdicción, en sentido amplio, como la función estatal para la satisfacción jurídica de pretensiones, y en sentido propio como presupuesto procesal, la falta de ésta entraña la inexistencia de un requisito subjetivo del órgano jurisdiccional. Se trata de un requisito procesal examinable de oficio por el órgano jurisdiccional y su falta hace inadmisibile la demanda.

Como requisito subjetivo del órgano jurisdiccional, el Juez del juicio verbal debería en principio tener en cuenta que concurriesen en él todos los requisitos que examinamos al tratar de la jurisdicción y que no exista ninguno de los posibles limites a la misma; sin embargo, no todos estos requisitos y limites son examinables de oficio, siéndolo sólo que el asunto no esté atribuido a jurisdicción especial (51 LEC), que se trate de un negocio de

Derecho privado y por tanto atribuido al orden jurisdiccional civil (9.2 LOPJ), que esté atribuido a la jurisdicción española, es decir, que el Juez español tenga competencia internacional (Convenio de Bruselas de 1968 y art. 22 LOPJ), aunque éste es un límite no siempre examinable de oficio, y que se cumplan los requisitos jurisdiccionales de territorio, tiempo y forma.

En cuanto a la competencia internacional (cuando se presente un asunto con algún elemento extranjero), parece que ésta sólo podrá ser examinada de oficio por el Juez español si el litigio versa sobre una materia que, según el art. 22 LOPJ, atribuiría, a contrario sensu, competencia exclusiva a los Tribunales de otro país, o cuando un tratado internacional atribuya la competencia directamente y de modo exclusivo a los órganos jurisdiccionales de otro Estado, y ello, debido a que por tratarse de competencias exclusivas de otro Estado, la sentencia que hipotéticamente dictara el Juez español no sería ejecutable en el Estado donde debiera tener efectividad. En cambio, en todos los demás casos en que no se trata de competencias exclusivas, puesto que la sumisión tácita es punto de conexión suficiente para conceder competencia internacional a los Jueces españoles (art. 22.2º LOPJ), y como quiera que la sumisión tácita del demandado se produce por el mero hecho de comparecer en juicio y no impugnar la jurisdicción del Juez español (no confundir esta sumisión internacional con la nacional que establece la competencia territorial, que ya vimos no cabe en el juicio verbal), resulta inevitable concluir que el Juez no puede, de oficio y limine litis, abstenerse de conocer. Si presentada la demanda ante un Juez español, éste pudiera abstenerse de oficio, imposibilitaría la sumisión tácita del demandado e impediría que surgiera un punto de conexión suficiente (la propia sumisión tácita) que fundase por si sola la jurisdicción de la que en principio carecía. Consecuencia

lógica sería que, transcurrido el plazo que la Ley otorga al demandado para comparecer, el Juez pueda abstenerse de oficio si la personación de aquél no ha tenido lugar.

Sobre la existencia de un compromiso válido de resolución arbitral del conflicto (otro de los límites de la jurisdicción), ésta será difícilmente examinable de oficio en este momento, ya que el demandado, que podría poner de relieve su existencia, todavía no ha comparecido. Por ello, podemos decir que el arbitraje, en principio, no debe ser obstáculo a la admisión de la demanda²⁰².

Debido a que en virtud de los Tratados de Viena de 1961 y 1963 en ciertos casos los funcionarios diplomáticos y consulares sí pueden ser demandados, y en otros el Estado de que son nacionales puede renunciar a la inmunidad, no parece tampoco que la inmunidad de jurisdicción del sujeto demandado (otro límite de la jurisdicción) deba ser apreciada de oficio²⁰³.

En general para todos estos requisitos y límites de la jurisdicción, cuando proceda la abstención de oficio, la facultad de abstenerse corresponde a todos los Jueces y Tribunales que conozcan del proceso, y, aunque éste es el primer momento en que pueden poner de manifiesto su falta de jurisdicción, pueden y deben ejercitar la abstención en cualquier momento en que adviertan la falta (sea en primera o segunda instancia), ya que la jurisdicción es inderogable.

Llegados a este punto, debemos mencionar que, a pesar de la aparente claridad de la delimitación de las funciones del Estado y de las atribuciones de cada orden jurisdiccional, pueden surgir conflictos de jurisdicción y competencia, que serán analizados más adelante cuando tratemos del desarrollo anormal del procedimiento.

²⁰² véase ARAGONESES ALONSO. Técnica...cit., párrafo 6, pág. 110.

²⁰³ Tal es también la opinión de FERNÁNDEZ LÓPEZ, junto a DE LA OLIVA SANTOS: Derecho...cit., Tomo I, pág. 353.

A- SI CREE NO TENER JURISDICCION

Si examinada de oficio la jurisdicción, el Juez cree no poseerla para el negocio de que se trate (porque no corresponda a la jurisdicción ordinaria, no se trate de un asunto civil, o sea una competencia exclusiva de otro Estado), dictará un auto (por tanto, motivado) en el que se indicará la jurisdicción u orden jurisdiccional que se estime competente, es decir, con jurisdicción suficiente (arts. 245 b) y 9.6 LOPJ y 369 LEC); el Juez resolverá, a su vez, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal (9.6 LOPJ) ^{*74}.

Este auto será susceptible de recurso de apelación en “ambos efectos” (devolutivo y suspensivo) en el plazo de cinco días, de acuerdo con el art. 385 in fine de la LEC, ya que se trata de un auto que pone término al juicio, haciendo imposible su continuación (384.2º LEC). En este caso de la jurisdicción, y en todos aquellos que trataremos a continuación (competencia objetiva, territorial...) en los que se dicte un auto que ponga término al juicio, haciendo imposible su continuación, la expresión “apelación en ambos efectos” es utilizada impropriamente por la Ley, como sucede con frecuencia, ya que habiéndose negado el Juzgado a conocer y tramitar la demanda, no tiene sentido hablar de efecto suspensivo; en realidad lo que la expresión quiere indicar es que la apelación “subirá en los propios autos” en lugar de formarse el testimonio de particulares para el recurso. El demandante tiene también la otra opción de interponer su demanda ante el nuevo Juez que él crea competente o ante el que el Juez que se abstuvo le indicara.

Dicho auto, junto con su notificación, se extiende, como de costumbre, en los autos, con la firma del Juez y Secretario que lo autoriza (arts. 251 y 252 LEC).

^{*74} Según el art. 38 Proyecto, tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional, la abstención se acordará de oficio con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.

Conforme ya dijimos antes, esta declaración de oficio por parte del órgano jurisdiccional de su falta de jurisdicción puede hacerse en cualquier momento del proceso hasta la sentencia firme, y no solamente en el momento del examen de la demanda del que ahora tratamos. En ese caso, lo actuado hasta que se produjo la declaración de falta de jurisdicción será nulo de pleno derecho (art. 238.1º LOPJ).

B- SI CREE TENER JURISDICCION

Si después de estudiar los distintos aspectos de la jurisdicción que son examinables de oficio en este momento, el Juez se considera con suficiente jurisdicción, continuará en el examen de la demanda.

V- COMPETENCIA OBJETIVA

La incompetencia objetiva es la carencia de un presupuesto procesal de admisibilidad de la demanda, porque la cuantía o la materia objeto del pleito estén excluidas del conocimiento del grado jurisdiccional ante el que se ejercita la pretensión.

Las normas legales sobre competencia objetiva, al igual que las de jurisdicción, son improrrogables (de ius cogens), es decir, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Por ello, la concurrencia de este requisito subjetivo debe ser examinado de oficio por el Juez (717 LEC), y su abstención puede producirse en cualquier momento del proceso (en 1ª o 2ª instancia), deviniendo nulo lo actuado hasta entonces (238.1º LOPJ).

A- POR RAZON DE LA MATERIA

En este caso el Juez determinará si existen normas concretas y especiales para regular la cuestión que ante él se presenta. Esta competencia prima sobre la referida por

razón de la cuantía, por lo que si el Juez estimase que no tiene competencia por razón de la materia, no tendría competencia objetiva, aunque sí gozase de la de aquella.

a- SI SE CREE INCOMPETENTE

Si el Juez se cree incompetente por razón de la materia, dictará auto (arts. 245 b) LOPJ y 369 LEC) así declarándolo, previa audiencia no vinculante del Ministerio Fiscal (en principio, no dice la Ley nada de que sea necesaria audiencia de las partes) y previsión a las partes que usen su derecho ante quien corresponda; este auto será apelable en “ambos efectos” en plazo de cinco días (arts. 717, 74, 384.2º y 385 in fine LEC). Como siempre, el actor puede optar entre apelar o interponer su demanda ante el Juez competente^{*75}.

Ya hemos dicho que la declaración de incompetencia podrá producirse en cualquier estado del proceso, no solamente en el examen de la demanda, declarándose la nulidad de todo lo actuado (art. 74 LEC).

El acto se documenta con la extensión en autos de la resolución y notificación, conteniendo las firmas correspondientes (arts. 251 y 252 LEC).

b- SI SE CREE COMPETENTE

Si el Juez se cree competente por razón de la materia, continuará su examen de la demanda.

B- POR RAZON DE LA CUANTIA

El análisis de la competencia por razón de la cuantía ofrece dos aspectos:

^{*75} Según el art. 48 Proyecto, la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio tan pronto como se tenga conocimiento de ella, oyendo a las partes y al Ministerio Fiscal en plazo de diez días, y dictando auto en que se indicará la clase de órgano competente.

Uno por el cual el Juez examina si la cuantía afirmada por el demandante en su demanda entra dentro de sus límites competenciales, es decir, en el proceso de que tratamos, si la cuantía no es superior a 8.000 pts. si se trata de un JP, o a 80.000 si se trata de JPI (o si aún siéndolo se ha renunciado al exceso). Si la cuantía es indeterminada (sin haberse fijado un límite máximo no superior a 80.000 pts.) o de más de 80.000 pts. también corresponderá al JPI, pero no a través del juicio verbal.

El otro es aquél en el que el Juez disiente de la valoración dada a la pretensión por el actor, en razón a que éste no se ha ajustado a los criterios legales del art. 489 LEC para la determinación de la cuantía; ello obligará al órgano jurisdiccional a revisarla, aunque sin entrar en valoraciones que pudieran tener relación con cuestiones de fondo (no examinables ahora).

a- SI SE CREE INCOMPETENTE

Conforme establece el art. 491 LEC, el JPI dará al juicio la tramitación que corresponda de acuerdo a lo solicitado por el actor, a no ser que se crea incompetente por razón de la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así por medio de auto (arts. 245 b) LOPJ y 369 LEC), apelable en “ambos efectos” en el plazo de cinco días, previniendo al actor para que use de su derecho ante el Juez competente (arts. 491, 717, 384.2º y 385 in fine LEC). Aquí no será preceptivo el informe del Ministerio Fiscal^{*76}. Como vemos, en lugar de apelar, el demandante tiene la opción de presentar su demanda ante el Juez que estime competente.

Se deduce de lo anterior que el JPI nunca podrá, en principio, declararse incompetente por la cuantía, salvo que en esa población existiera un JP y el asunto no

superara las 8.000 pts.. Y ello, debido a que es el JPI el poseedor genérico de la competencia por razón de la cuantía, para cualquier tipo de proceso declarativo ordinario (salvo en el juicio verbal hasta 8.000 pts. si existe JP).

De nuevo recordamos que debido al carácter imperativo de las normas de competencia objetiva por razón de la cuantía, su falta podrá manifestarse de oficio en cualquier momento del proceso, declarando nulo lo anteriormente actuado (238.1º LOPJ).

El auto y su notificación se extenderán con las firmas previstas en los arts. 251 y 252 LEC.

b- SI SE CREE COMPETENTE

En este caso proseguirá el examen de la demanda.

VI- COMPETENCIA TERRITORIAL, DE OFICIO

Aunque, en principio, en el resto de procesos ordinarios la competencia territorial no es examinable de oficio por tratarse de normas prorrogables sujetas a la voluntad de las partes (salvo alguna pequeña excepción en el juicio de cognición), en el juicio verbal sí lo es, ya que así lo ordena el art. 717 LEC; y ello es debido a que en esta clase de procesos no son aplicables, como ya expusimos al tratar del requisito subjetivo de la competencia territorial, las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero (art. 717 LEC).

⁷⁶ Ver nota anterior (art. 48 Proyecto), teniendo en cuenta que al JPI corresponde la cuantía de 500.000 pts. y

A- SI SE CREE INCOMPETENTE

Si tras la aplicación de los fueros legales del art. 62 LEC (único criterio territorial aplicable al juicio verbal), el Juez se considera incompetente territorialmente, dictará auto (245 b) LOPJ y 369 LEC) declarándolo así, apelable en “ambos efectos” (717 y 384.2º LEC) en el plazo de cinco días (385 in fine LEC) y expresando el órgano que se entienda competente (51.2 LOPJ). Nada dice la Ley sobre si debe dársele traslado al Ministerio Fiscal, aunque Miguel Angel Fernández²⁰⁴ entiende que sí, fundamentándolo en el art. 9.6 LOPJ^{*77}. Entendemos también que este auto podrá dictarse de oficio en cualquier estado del juicio (por ser la competencia territorial en este proceso inderogable), aunque en este caso no resultará nulo lo actuado hasta ese momento, ya que el art. 238.1º LOPJ sólo declara la nulidad para los actos realizados sin jurisdicción o sin competencia objetiva o funcional, pero no sin competencia territorial, a la vez que el art. 115 LEC declara la validez de lo actuado con falta de competencia territorial.

De lo anterior podemos colegir que una vez más el demandante tiene la alternativa de solicitar la devolución de los documentos que haya podido presentar para replantear de nuevo la demanda ante el órgano que resulte territorialmente competente, o impugnar el auto de incompetencia para intentar que el superior, con un criterio distinto, pueda considerar competente al Juzgado y ordene al Juez admitir y sustanciar la demanda.

De nuevo, el auto y su notificación se extenderán para dejar la debida constancia con las firmas de los arts. 251 y 252 LEC.

al JP la de 15.000 pts..

²⁰⁴ FERNÁNDEZ LÓPEZ, junto a DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo I, pág. 416.

^{*77} Conforme al art. 58 Proyecto, cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas (recordemos que, según el art. 54.1, en el juicio verbal no cabe la sumisión), el tribunal examinará de oficio su competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda (art. 440.1) y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que carece de competencia territorial para conocer del asunto, lo declarará así mediante auto, remitiendo las actuaciones al tribunal que considere

B- SI SE CREE COMPETENTE

Continuará con el examen de la demanda.

VII- CAPACIDAD PARA SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL

Hay que señalar que la doctrina no es unánime a la hora de determinar si la capacidad es o no un requisito examinable de oficio, y ello, porque a juicio de algunos, no existe ninguna norma en los procesos ordinarios, salvo para el juicio de menor cuantía y el juicio de cognición, que establezca la posibilidad de que el Juez aprecie por si mismo la falta de capacidad de alguna de las partes. Quizá, esa norma general que algunos no reconocen sería la del art. 2 LEC cuando establece que “sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”, ya que ésta es una norma de Derecho imperativo, cuya vigilancia corresponde al Juez.

Por tanto, si llegamos a la conclusión de que la capacidad de las partes es un requisito examinable de oficio, el Juez, después de estimarse competente, examinará si las partes tienen la capacidad para ser parte y procesal para comparecer en juicio y ser citadas válidamente. Indudablemente, la capacidad procesal sólo podrá examinarla el Juez sobre la base de los hechos afirmados por la parte actora^{*78}.

A- SI SE ESTIMA INEXISTENTE

Si el Juez estima que alguna de las partes no tiene capacidad suficiente, dictará auto (arts. 245 b) LOPJ y 369 LEC), susceptible de recurso de reposición en el plazo de tres

territorialmente competente, y si fuesen de aplicación fueros electivos, el tribunal estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos.

días (art. 380 LEC) y contra el auto que lo resuelva apelación en “ambos efectos” (ya que hace imposible la continuación del juicio) en cinco días (arts. 384.2º y 385 LEC).

El auto y su notificación se documentará en autos, con las firmas correspondientes (251 y 252 LEC).

B- SI SE ESTIMA EXISTENTE

El Juez continuará con el control de la demanda.

VIII- LEGITIMACION

La legitimación o vinculación específica entre las partes con el objeto procesal, ya vimos que puede ser directa o indirecta. El problema para su control de oficio por el Juez radica en la determinación de su naturaleza jurídica, es decir, si la legitimación es un requisito relativo al fondo del asunto, o si por el contrario se trata de un verdadero requisito procesal.

Se ha entendido que la legitimación directa es una cuestión generalmente vinculada al fondo del asunto, lo que significa que ni puede ser examinada de oficio, ni puede resolverse in limine litis.

En cambio, la legitimación indirecta tiene carácter procesal, pero a pesar de ello, la jurisprudencia entiende que lo único que el Juez puede examinar de oficio in limine litis es, si con la demanda y contestación se han presentado los documentos que la acreditan. Pero como en el juicio verbal no es necesario presentar dichos documentos (aunque en lugar de papeleta se interponga demanda mixta), y además la contestación del demandado no tiene lugar hasta la comparecencia, el Juez en el juicio verbal no examinará en este momento

⁷⁸ Nos saca de toda duda el Proyecto, al determinar en su art. 9 que la falta de capacidad para ser parte y de

tampoco la existencia de legitimación indirecta, quedando su control diferido al acto del juicio.

IX- POSTULACION

Como a tenor de los arts. 4.2º y 10.2º LEC, ni la representación técnica por medio de Procurador, ni la asistencia letrada son preceptivas, solamente si se hace uso de ella y la persona comparece representada o/y asistida por quien no reúna el carácter de Procurador o/y Abogado o factor mercantil, en su caso, o la firma de Letrado que conste en la demanda no es legible, o el poder que se acompaña (si se decidió aportarlo en este momento) no es legal o suficiente²⁰⁵, salvo que la representación se otorgue mediante comparecencia apud acta, podrá el Juez inadmitir provisionalmente la demanda, hasta que se subsane el defecto (art. 243 LOPJ) (STC 213/1990, de 20 de Diciembre y STS 20-2-90). Podría pensarse que en lugar de conceder plazo para subsanar, el Juez, en vista de que la postulación no es obligatoria, podría admitir la demanda sin tener en cuenta ni la representación ni la asistencia defectuosas, pero creemos que ello podría dar lugar a indefensión, pues la parte puede tener interés en que en la comparecencia hable por ella su Procurador o Abogado (730.IV LEC), y acudiría a la misma desconociendo este defecto.

La resolución que el Juez dictaría en caso de mandar subsanar el defecto, sería una providencia (369 LEC y 245 a) LOPJ), contra la cual cabría recurso de reposición en el plazo de tres días (377 LEC). Si las partes no subsanan el defecto, podría pensarse en dos posibles soluciones: que el Juez dictara auto inadmitiendo definitivamente la demanda a trámite (369 LEC y 245 b) LOPJ), contra el cual cabría reposición en tres días (380 LEC) y

capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.

²⁰⁵ Sobre qué se entiende por ilegalidad e insuficiencia del poder puede consultarse a DÍEZ RIAZA, La Procuraduría (cit.), págs. 312 y ss..

apelación en “ambos efectos” en cinco (384.2º y 385 in fine LEC), o bien que admitiera la demanda, ya que la postulación no es necesaria, sin tenerla en cuenta por ser defectuosa, pudiendo la parte en la comparecencia acreditar nueva postulación en forma suficiente (creemos más acertada esta segunda posibilidad en el juicio que nos ocupa).

De nuevo la resolución que se dicte se incorporará junto a su notificación en autos, con las firmas correspondientes (251 y 252 LEC),

X- POSIBILIDAD DEL OBJETO

El siguiente requisito a examinar en la demanda es que el objeto, es decir, la pretensión sea posible, tanto desde el punto de vista físico como jurídico, refiriéndonos en este último caso a la no existencia de cosa juzgada, litispendencia e ilicitud.

En cuanto a la apreciación de oficio de la cosa juzgada o litispendencia, aunque estos son óbices procesales, es muy poco probable que el órgano jurisdiccional los aprecie, y menos en limine litis, ya que lo ordinario será el desconocimiento de estas cuestiones por el Juez hasta que la parte interesada lo ponga de manifiesto, pues ella será la que normalmente los conozca.

Sobre la posibilidad física y jurídica por ilicitud también difícilmente podrá ser rechazada la demanda en base a ellos, salvo que la pretensión por un lado sea claramente imposible materialmente o carezca indudablemente de la menor seriedad, o por otro que sea contraria a la moral, ley u orden público, como por ejemplo que entrañe un ilícito penal, en cuyo caso, además de rechazar la demanda, se pondrá en conocimiento del Juzgado de Instrucción competente, o se deducirá testimonio que encabece las correspondientes actuaciones sumariales a prevención .

Para tratar todos los aspectos relativos al requisito de la posibilidad del objeto procesal, digamos que no son susceptibles de examen ex officio por el Juez, a los efectos de admisibilidad o no de la demanda, los requisitos que hacen referencia a la posibilidad de la acción, puesto que estos constituyen propiamente el fondo del proceso. Sin embargo, aunque, como decimos, las cuestiones de fondo no deben ser objeto de examen a limine litis por el Juez, existen dos cuestiones materiales que sí deben ser analizadas. Además, a la hora de examinar una demanda, debe comenzarse por ellas. En concreto, los dos casos materiales cuya inexistencia tiene que ser controlada es que el objeto de la demanda no sea una obligación natural: el caso de que se solicite en la demanda que se cumpla la promesa de matrimonio, dado que el art. 42 CC dice que una reclamación en estos términos no será admitida a trámite porque la promesa no produce obligación de contraer matrimonio, ni de cumplir lo estipulado para el caso de no celebración del mismo, aunque este caso no puede darse en el juicio verbal, pues, al no existir proceso especial para conocer del mismo, habría de acudir al de menor cuantía; y el caso de que lo que se reclame sea lo que se hubiera ganado en un juego de suerte, envite o azar, pues el art. 1798 CC establece que en estos casos no se concederá acción, lo que según la jurisprudencia equivale a que la demanda no será admitida a trámite. Sin embargo, la jurisprudencia más moderna entiende que hay que distinguir entre juegos permitidos y prohibidos, limitando la inaccesión a los segundos, aunque quizás lo más correcto sea, en caso de duda, admitir a trámite la demanda y decidir en la sentencia lo relativo a la naturaleza del juego. Por tanto, en nuestro Derecho la regla, en cuanto al fondo del asunto, es que todas las demandas deben ser admitidas, únicamente con las dos excepciones ya señaladas.

A- SI SE CREE IMPOSIBLE EL OBJETO

Si el Juez cree imposible el objeto dictará auto (245 b), 11.2 LOPJ y 369 LEC) no admitiendo a trámite la demanda, contra el cual cabrá reposición en tres días (380 LEC) y posterior apelación en “ambos efectos” en cinco (384.2º y 385 in fine LEC).

Sin embargo, si se trata de una pretensión que sea imposible físicamente o no revista los caracteres de mínima seriedad haciéndola inatendible, la resolución será una simple providencia declarando no haber lugar a la admisión de la demanda.

La resolución y su notificación se incorporará a los autos.

B- SI SE CREE POSIBLE EL OBJETO

Se continuará con el control de la demanda.

XI- ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO

La inadecuación del procedimiento es una situación que debería dar lugar a la inadmisión a trámite de la demanda, por falta de adaptación del procedimiento elegido por las partes al procedimiento indicado por el legislador.

Por tanto, en principio, el Juez puede y debe analizar de oficio la inadecuación de procedimiento. Esta obligación no surge de precepto procesal alguno, pero es admitida por la jurisprudencia del TS, según la cual el examen de las normas procesales y, entre ellas, las que se refieren al procedimiento seguido, tienen un marcado carácter de orden público, por lo que ex officio pueden ser analizadas por el Tribunal (STS 27-3-92). Sin embargo, esto es sólo en principio, pues la más reciente jurisprudencia del TS ha introducido una serie de “correcciones” o matizaciones que debilitan en extremo el carácter público de la adecuación de procedimiento. De esta forma, el Juez no puede apreciar de oficio la

inadecuación de procedimiento si tiene competencia objetiva y funcional para conocer de ambos procedimientos, salvo si el procedimiento inadecuado tiene menos garantías que el adecuado previsto por la Ley, como ocurre con el juicio verbal respecto a los demás procesos ordinarios. De esto se deduce que, según el TS, no ha lugar a apreciar de oficio la inadecuación de procedimiento cuando ninguna ventaja se deriva a las partes, de forma que debe interpretarse la adecuación de procedimiento de una manera superadora a tenor del art. 11 LOPJ (STS 10-10-91).

Por lo tanto, si el demandante plantea un juicio verbal ante JPI y por la cuantía corresponde otro proceso ordinario (cognición, menor cuantía o mayor cuantía), en principio el Juez no podría apreciar de oficio, según reciente jurisprudencia, la inadecuación de procedimiento, pues el JPI tiene competencia objetiva y funcional para conocer también de esos otros procesos; sin embargo, al tratarse el juicio verbal de un proceso con menos garantías que los demás ordinarios, el JPI, según la anterior teoría, sí apreciaría de oficio la citada inadecuación. Ninguna duda existe en cambio sobre la apreciación de oficio en caso de que se plantease el juicio verbal ante JP, ya que en ese caso, si corresponde otro proceso distinto, ese Juez no tendrá competencia, por lo que sí apreciará de oficio esa inadecuación y rechazará in limine litis la demanda.

A- SI SE CREE INADECUADO EL PROCEDIMIENTO

Si se dan las circunstancias debidas para que el Juez aprecie ex officio la adecuación de procedimiento y éste resulta inadecuado, dictará, igual que en el caso de

incompetencia por razón de la cuantía, auto (245 b) LOPJ y 369 y 491 LEC), apelable en “ambos efectos” en cinco días (491, 717, 384.2º y 385 in fine LEC)^{*79}.

El auto y su notificación se incorporan a los autos.

B- SI SE CREE ADECUADO EL PROCEDIMIENTO

Se prosigue el examen de la demanda.

XII- FORMA DE LA DEMANDA Y COPIAS

El art. 720 LEC establece la posibilidad de que en lugar de demanda (mixta), se presente simple papeleta de demanda (pura), extendida en papel común. No obstante, recoge cada una de las menciones que en ella deben constar (nombres, domicilio y profesión u oficio del demandante y demandado o demandados; pretensión que se deduce; fecha en que se presenta al Juzgado; y firma del que la presente o de un testigo a su ruego, si no pudiese o no supiere firmar). Estas menciones han de entenderse como el contenido

^{*79} En cuanto al control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía ha de verse el art. 254 Proyecto: “Artículo 254. Control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía.

1. Al juicio se le dará inicialmente la tramitación que haya indicado el actor en su demanda.

No obstante, si a la vista de las alegaciones de la demanda el tribunal advirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda, el tribunal, mediante providencia, dará al asunto la tramitación que corresponda, sin estar vinculado por el tipo de juicio solicitado en la demanda.

2. Si, en contra de lo señalado por el actor, el tribunal considera que la demanda es de cuantía inestimable o no determinable, ni aun en forma relativa, y que por tanto no procede seguir los cauces del juicio verbal, deberá, mediante providencia, dar de oficio al asunto la tramitación del juicio ordinario, siempre que conste la designación de Procurador y la firma de Abogado.

3. Se podrán corregir de oficio los errores aritméticos del actor en la determinación de la cuantía. También los consistentes en la selección defectuosa de la regla legal de cálculo de la cuantía, si en la demanda existieran elementos fácticos suficientes como para poder determinarla correctamente a través de simples operaciones matemáticas.

Una vez calculada adecuadamente la cuantía, se dará al proceso el curso que corresponda.

4. En ningún caso podrá el tribunal inadmitir la demanda porque entienda inadecuado el procedimiento por razón de la cuantía. Pero si la demanda se limitare a indicar sin más la clase de juicio que corresponde, o si, tras apreciarse de oficio que la cuantía fijada es incorrecta, no existieren en aquélla elementos suficientes para calcularla correctamente, no se dará curso a los autos hasta que el actor no subsane el defecto de que se trate.

El plazo para la subsanación será de diez días, pasados los cuales se archivará definitivamente la demanda.”

mínimo que debe recogerse en la demanda, de forma que puede ampliarse, si se opta por una demanda compleja.

Asimismo recoge el art. 720 en su último párrafo, que el demandante acompañará tantas copias de esta papeleta, suscritas del mismo modo, cuantos sean los demandados (720 LEC).

En cuanto a los documentos, ya vimos que en el juicio verbal no son necesarios presentarlos junto a la demanda (522 LEC) (SSTS 18-4-1905, 31-12-34, 25-9-51 y 10-10-52).

A- SI CARECE DE FORMA O NO SE APORTAN COPIAS^{*80}

Si carece la demanda de los requisitos formales recogidos en el art. 720 LEC, el Juez dictará providencia no admitiendo provisionalmente a trámite la demanda hasta que se subsanen los defectos o se presenten las copias en el plazo improrrogable que él determine (11.3 LOPJ). Contra ella cabe reposición en tres días (376 y 377 LEC) y posterior apelación en un sólo efecto (o en dos) (381 LEC), salvo si se trata de falta de copias, en cuyo caso no cabe recurso (argumento, art. 518 LEC en conexión con el 720 in fine, ya que aunque el 522 explica que este art. 518 no sería de aplicación al verbal, no existe ninguna disposición especial sobre esta cuestión aplicable al mismo).

La resolución y su notificación se incorporan a los autos.

B- SI POSEE FORMA ADECUADA Y SE APORTAN COPIAS

Finaliza el examen de la demanda por el Juez y se pasa a su admisión a trámite.

2- ADMISION A TRAMITE DE LA DEMANDA^{206*81}

⁸⁰ Sobre los efectos de la no presentación de copias puede consultarse el art. 275 Proyecto, ya mencionado al tratar de la documentación de la demanda.

²⁰⁶ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 89, págs. 615 y 616.

⁸¹ El art. 440 Proyecto regula la admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para la vista:

“Artículo 440. Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista.

1. El tribunal, en el plazo de cinco días, previo examen de su jurisdicción y de su competencia objetiva y, cuando proceda, territorial, dictará providencia en la que ordenará, en su caso, la admisión de la demanda y su traslado al demandado y citará a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, debiendo mediar diez días, al menos, desde el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte.

En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se prevendrá a demandante y demandado de lo dispuesto, en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el tribunal a la vista para que declaren en calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación.

2. En los casos del número 7.º del apartado primero del artículo 250, en la citación para la vista se apercibirá al demandado de que, en caso de no comparecer, se dictará sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor. También se apercibirá al demandado, en su caso, de que la misma sentencia se dictará si comparece al acto de la vista, pero no presta caución, en la cuantía que, tras oírle, el tribunal determine, dentro de la solicitada por el actor.

3. En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el tribunal indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado cuarto del artículo 22 de esta Ley.”

La comunicación se hará por medio del Procurador, si lo hubiere, y si no habrá de estarse al art. 155:

“Artículo 155. Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por Procurador. Domicilio.

1. Cuando las partes no actúen representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes.

2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares como

domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax o similares.

El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

4. Si las partes no estuviesen representadas por Procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158.

Tras el examen de la demanda, el Juez, si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad e imparcialidad de la misma, la admitirá a trámite.

I- RESOLUCION

Establece el art. 721 LEC que, presentada la papeleta (o demanda) con las copias, el Juez, dentro del segundo día, dictará providencia (245.1 a) y 248.1 LOPJ) a continuación de la demanda, convocando a las partes a una comparecencia, señalando día y hora al

5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.”

Sobre los actos de comunicación judicial pueden consultarse los arts. 149 y ss..

Se regulan, sin embargo, casos especiales de inadmisión de la demanda:

“Artículo 439. Inadmisión de la demanda en casos especiales.

1. No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo.

2. En los casos del número 7.º del apartado primero del artículo 250, no se admitirán las demandas en los casos siguientes:

1º Cuando en ellas no se expresen las medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere.

2º Si, salvo renuncia del demandante, que hará constar en la demanda, no se señalase en ésta la caución que, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 64, ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio.

3º Si no se acompañase a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.

3. No se admitirán las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario si el arrendador no indicare las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio.

4. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado primero del artículo 250, cuando la acción ejercitada se base en el incumplimiento de un contrato de venta de bienes muebles a plazos, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento

de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 16 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, así como certificación de la inscripción de los bienes en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de inscripción en el mismo. Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado tercero de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

5. Tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se cumplan los requisitos de admisibilidad, que, para casos especiales, puedan establecer las leyes.”

efecto, conforme a lo prevenido en el art. 726 LEC. Esta providencia se incorporará a los autos.

II- NOTIFICACION Y CITACION AL DEMANDANTE

Lógicamente, esta providencia habrá de notificarse al demandante, como así ordena el art. 721 in fine LEC, y ello se hará a través del Procurador que ostente su representación, si lo hubiere, o mediante el envío de la notificación al domicilio del demandante que constare en la papeleta, si no se presenta él mismo en el Juzgado (264 LEC); también caben los otros tipos de notificación por cédula, que analizaremos al tratar del llamamiento al demandado. La notificación se hará el mismo día de su fecha o publicación y, no siendo posible, en el siguiente (260 LEC). Asimismo, la notificación se hará constar en el rollo.

Como vemos, es a través de esta notificación como se realiza la citación del demandante.

III- CONTENIDO

El contenido de la citación al demandante, consecuencia de la admisión a trámite de la demanda, es complejo, pues dicha citación persigue no sólo la comparecencia del demandante, sino también la formulación de su pretensión en el acto del juicio.

IV- EFECTOS^{*82}

Según la más reciente jurisprudencia del TS, la admisión a trámite de la demanda produce el efecto de la litispendencia, aunque retrotrayéndose sus consecuencias al

^{*82} Se regulan los efectos de la pendencia del proceso en los arts. 410 y ss. Proyecto. Esta regulación no difiere sustancialmente de la actual.

momento de la presentación de la demanda; se apoyan para ello en los arts. 1973, 1100 y 1109 CC y 944 CCo.

Los concretos efectos que produce la litispendencia son de dos clases: procesales y materiales.

A- EFECTOS PROCESALES

En primer lugar, cuando existe litispendencia no se puede plantear otro proceso que sea idéntico.

En segundo lugar, se produce la *perpetuatio iurisdictionis*, que es una ficción jurídica, según la cual los datos a partir de los que se fijaron la jurisdicción y competencia permanecen invariables, aunque en la realidad hubieran cambiado.

En tercer lugar, la *perpetuatio legitimationis*, que es también una ficción jurídica, pero en este caso relativa a la legitimación de las partes.

En último lugar, la prohibición de la *mutatio libelli*, es decir, la prohibición de que una vez presentada la demanda sea modificado su objeto. Esta prohibición no se considera incompatible con la ampliación de la demanda, especialmente en procesos orales como el juicio verbal, en el que la demanda no supuso desarrollo completo de la pretensión.

B- EFECTOS MATERIALES²⁰⁷

En primer término, la litispendencia produce la interrupción de la prescripción (arts. 1945, 1946, 1973 CC y 944 CCo.) siempre que no hubiese habido conciliación previa.

En segundo lugar, la constitución en mora del deudor (1100 y 1101 CC).

²⁰⁷ Han sido tomados de FERNÁNDEZ LÓPEZ, en su obra junto a DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho...cit.*, Tomo II, págs. 294 y ss., así como de MONTERO AROCA, en su obra junto a ORTELLS RAMOS, GÓMEZ COLOMER y MONTÓN REDONDO, *Derecho...cit.*, Tomo II, págs. 149 y ss..

En tercer lugar, a partir de ese momento el deudor vendrá obligado a pagar los intereses legales (1108 y 1109 CC).

Asimismo, la restitución de frutos por el deudor de mala fe (451 y 1945 CC).

En quinto lugar, la deuda solidaria sólo podrá pagarse al acreedor demandante (1142 CC).

En sexto lugar, pueden también producirse efectos registrales, si se solicita y obtiene la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad (art. 42.1ª LH), aunque con efectos sólo desde la anotación.

Por último, el objeto mediato de la pretensión se convierte técnicamente en una cosa litigiosa, de forma que su posible enajenación se condiciona al cumplimiento de unas reglas especiales (1291.4º y 1535 CC).

3- LLAMAMIENTO AL DEMANDADO^{208*83}

Dispone el art. 722 LEC que la citación del demandado para la comparecencia se hará por el Secretario o Alguacil del Juzgado, entregándole la copia de la papeleta de

²⁰⁸ Se sigue el esquema utilizado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 90, págs. 616 y ss..

^{*83} En este punto nos interesan los arts. 155 (ya mencionados), 156 y 274:

“Artículo 156. Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio.

1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado tercero del artículo 155.

Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.

2. En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso.

3. Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado primero resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación de la segunda forma establecida en el apartado primero del artículo 152, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 158.

4. Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, la comunicación se llevará a cabo mediante edictos.”

“Artículo 274. Traslado por el tribunal de las copias a las otras partes interesadas, cuando no intervengan Procuradores.

Cuando las partes no actúen representadas por Procurador, firmarán las copias de los escritos y documentos que presenten, respondiendo de su exactitud, y dichas copias se entregarán por el tribunal a la parte o partes contrarias.”

demanda (o demanda), a continuación de la cual habrá extendido el Secretario la cédula de citación, expresando en ella la fecha de la providencia y el día, hora y local en que deba comparecer, con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no compareciere. Asimismo establece el art. 723 LEC que a continuación de la providencia se hará constar la entrega de la papeleta y citación del demandado por medio de diligencia, que firmará éste, o un testigo a su ruego si no supiere.

Los distintos aspectos que hacen referencia al llamamiento al demandado se recogen en los arts. 722 a 726 LEC.

I- TIPO^{*84}

^{*84} En este punto son interesantes, entre otros, los arts. 158, 160, 161, 162, 164 y 165 Proyecto:

“Artículo 158. Comunicación mediante entrega.

Cuando, en los casos del apartado primero del artículo 155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161.”

“Artículo 160. Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes.

1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el Secretario Judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y

unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción.

2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los previstos en el apartado tercero del artículo 155.

3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado primero, cédula de emplazamiento para que las personas a que se refiere el apartado primero de este artículo comparezcan en dicha sede a efectos de ser notificados o requeridos o de dárseles traslado de algún escrito.

La cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.”

“Artículo 161. Comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o de cédula.

1. La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.

La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el Secretario Judicial o funcionario que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.

2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el Secretario Judicial o funcionario designado le amonestará de la obligación que impone el apartado anterior.

Si insistiere en su negativa, el funcionario actuante le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal o a efectos fiscales o según Registro oficial o publicaciones de Colegios profesionales, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de la misma, o a darle aviso, si sabe su paradero.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el Secretario Judicial o funcionario designado procurará averiguar si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación.

Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 156.”

El llamamiento al demandado en el juicio verbal se hace por medio de una citación (722 LEC). Ya vimos al tratar del requisito del tiempo en la Primera Parte de este estudio, que en la citación se fija un término, es decir, un momento concreto (al contrario que en los emplazamientos en el que se fija un plazo).

El contenido de la cédula de citación, en parte regulado por el art. 722 LEC (fecha de la providencia, día, hora y local de la comparecencia, y prevención de seguirse el juicio en su rebeldía en caso de no comparecer), viene recogido en el art. 272 LEC. Según éste, la cédula de citación contendrá: el Juez que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído; el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación; el objeto de la misma y la parte que la hubiese solicitado; el sitio, día y hora en

“Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

1. Cuando los juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda.

Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquéllos habrán de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos o en la forma prevista en los artículos anteriores, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señale para cada caso.”

“Artículo 164. Comunicación edictal.

Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiese conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiese hallarse ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado segundo del artículo 157, el tribunal, mediante providencia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios del Juzgado o tribunal.

Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Oficial del Estado o en un diario de difusión nacional o provincial.”

“Artículo 165. Actos de comunicación mediante auxilio judicial.

Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse según lo dispuesto en el artículo 161 de esta Ley por tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al tribunal para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las causas de la dilación.”

que deba comparecer el citado; y la prevención de que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, terminando con la fecha y firma del actuario.

La citación del demandado (al igual que la del demandante) puede ser de varios tipos, en función de su situación y paradero y de a quien se le entregue la cédula, pero en todo caso habrá de asegurarse en la medida de lo posible su recepción por los destinatarios, y así lo ha declarado de forma reiterada la jurisprudencia constitucional, que en numerosas sentencias resalta la especial transcendencia de este llamamiento para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24 CE. Siendo su objeto garantizar que todas aquellas personas que puedan resultar afectadas por lo resuelto en un proceso judicial tengan la posibilidad de acceder al mismo y a los recursos legalmente establecidos en condiciones para ser oídas y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, según lo previsto en las leyes procesales. Los órganos judiciales tienen, pues, un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal a fin de asegurar en lo posible su recepción por los notificados, dándoles así la ocasión de defenderse (por todas, SSTC 167/92, 103/93, 316/93, 317/93, 334/93, 108/94, 325/94, 108/95 y 148/95).

A- CITACION PERSONAL O EN PROPIAS MANOS

Se trata de la citación hecha directamente al propio interesado, en el Juzgado (si allí compareciere) o en su domicilio.

También son de aplicación en este punto, los arts. 262 y ss., relativos a las notificaciones y citaciones (según el art. 270 LEC), en donde se establece que las citaciones (y notificaciones) se practicarán por el Escribano, Secretario u Oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se realicen,

y dándole en el acto copia literal de ella firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera y recogiendo todo ello en la diligencia. Dicha lectura se hará en la Escribanía o en el local destinado a tal fin, si allí comparecen los interesados; no compareciendo, se hará en el domicilio de la persona que deba ser notificada, a cuyo fin lo designará el demandante, según el art. 720 LEC en la papeleta o demanda (art. 264 LEC).

Ya hemos dicho que la citación se firmará por el actuario, y además por la persona a quien en principio se hiciese, aunque no siempre.

a- SI PUEDE Y SABE FIRMAR

Si la persona a quien se realiza la citación puede y sabe firmar, y además quiere, será ésta la que firme, junto con el actuario, la cédula (arts. 263.I y 723 LEC).

b- SI NO PUEDE O NO SABE FIRMAR

Si la persona citada no puede o no sabe firmar lo hará, a su ruego, un testigo, cuyas circunstancias personales se harán constar (arts. 263.II y 723 LEC).

c- SI NO QUIERE FIRMAR

Suprimidos los párrafos II y III del art. 263 LEC, por la Ley 30/92, de 30 de Abril, ha quedado sin cubrir el supuesto de que el citado se niegue a firmar. Creemos que entonces firmará sólo el funcionario actuante.

B- CITACION A TRAVES DE FAMILIAR, CRIADO O VECINO

Si el interesado no comparece en la Secretaría del Juzgado o no es encontrado en su domicilio, la citación se hará mediante cédula entregada a familiar, criado o vecino en el domicilio de la persona que deba ser notificada, a cuyo fin lo designará el demandante, según el art. 720, en su papeleta o demanda.

Igualmente, la cédula habrá de ser firmada por el actuario y la persona que la reciba, que será el familiar más cercano o criado mayor de catorce años que se encuentre, o, en su defecto, el vecino más próximo (arts. 266 y 268.I y III LEC). Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se hará constar el nombre, estado y ocupación de la persona que reciba la cédula, su relación con la que deba ser notificada, y la obligación que aquélla tiene de entregarle la cédula así que regrese a su domicilio, o de darle aviso si sabe su paradero, bajo multa de 25 a 100 pts. (art. 268.II LEC).

a- SI PUEDE Y SABE FIRMAR

Si la persona hallada en el domicilio quiere, puede y sabe, firmará ella misma (junto al actuario) (arts. 268.III y 723 LEC).

b- SI NO PUEDE O NO SABE FIRMAR

Si el que se encuentre en el domicilio (un familiar, criado mayor de catorce años o vecino) no pudiese o supiese firmar, lo hará un testigo a su ruego, cuyas circunstancias personales se harán constar en dicha diligencia (arts. 268.III en relación con el 263.II y 723 LEC).

c- SI NO QUIERE FIRMAR

De nuevo aquí la supresión de los dos últimos párrafos del art. 263 LEC deja sin cubrir el caso de que la persona hallada en el domicilio se negase a firmar. De lo que se deduce de la Ley, parece que firmará sólo el actuario.

C- CITACION MEDIANTE COOPERACION JUDICIAL

En el supuesto de que el demandado no resida en el lugar donde se ha presentado la demanda, se aplicará lo dispuesto en el art. 724, el cual establece que, cuando el demandado residiere en otro lugar que el del Juzgado que conozca del asunto, se dirigirá oficio al del punto en que se hallare, acompañando la copia de la papeleta y cédula de citación para que ésta tenga efecto. A continuación del oficio, que se devolverá sin dilación al Juez requirente, se extenderá la diligencia de la entrega de la copia y la citación.

Realmente, no se tratará de un oficio, sino de un exhorto, pues la comunicación va dirigida a otro órgano jurisdiccional, y el contenido del mismo lo recoge el art. 287: la designación del órgano exhortante, la del órgano exhortado, las actuaciones cuya práctica se interesa (en este caso la citación del demandado) y el término o plazo en que habrán de practicarse las mismas. Como se puede apreciar, se trata éste de un caso de cooperación judicial, regulada como ya vimos en los arts. 284 y ss. LEC y 273 y ss. LOPJ.

En este supuesto, en el que la residencia del demandado se encuentra fuera de la circunscripción del Juzgado (entendemos que debe ser fuera de la circunscripción, pues siendo dentro de la misma y fuera de la sede y no presentándose personalmente el interesado en la Secretaría, la citación se hará en su domicilio por medio de cédula, y no por correo certificado con acuse de recibo, como dice el art. 261 para el caso de fuera de la sede, ya que se trata de la citación de una de las partes y de ella depende la personación en

las actuaciones), será de aplicación lo dispuesto en el art. 726 in fine, o sea, que el plazo entre la citación y la comparecencia se aumentará a razón de un día más por cada veinte kilómetros de distancia (creemos, sin embargo, que a pesar del aparente carácter imperativo de este último párrafo, pues la Ley emplea la expresión “se aumentará”, el mismo debe actualmente interpretarse como una facultad del Juez, no como una obligación, ya que no tendría sentido tener imperativamente que aumentar el plazo en un día por cada veinte kilómetros, teniendo en cuenta los avanzados medios de transporte que hoy día existen; además, por esta misma razón, parece más oportuno que este aumento fijado en la Ley sea utilizado como tope máximo).

D- CITACION MEDIANTE EDICTOS

Establece el siguiente artículo (el 725), que cuando no sea conocido el domicilio del demandado se hará la citación por medio de edictos, que se fijaran en el lugar del juicio y en el de su última residencia. También se publicarán los edictos en los periódicos oficiales, cuando el Juez lo estime necesario. De igual forma lo dispone así el art. 269: “Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notificación fijando la cédula en el sitio público de costumbre, e insertándola en el “Diario de avisos” donde lo hubiere, y si no en el “Boletín Oficial” de la provincia (hoy BO de la Comunidad Autónoma). También podrá acordar que se publique la cédula en la “Gaceta de Madrid” (hoy BOE), cuando lo estime necesario”. Resumiendo todo ello: la cédula edictal se fija en el tablón de anuncios del Juzgado y se publica en el BO de la Comunidad Autónoma, pudiendo también publicarse, si el Juez lo estima conveniente, en el BOE, o incluso en algún periódico que tenga una tirada importante.

De la jurisprudencia, se puede apuntar claramente que la citación (y en general la notificación) edictal viene a ser medio (y también remedio) procesal a utilizar sólo como corrección o recurso último de comunicación del órgano judicial con las partes litigantes cuando se agoten los medios normales, es decir, es un recurso subsidiario (SSTS 18-1 y 5-4-91 y 26-5 y 2-9-93; y del TC 2-12-88 y 20-7 y 27-11-89).

En estos casos, también el Juez podrá aumentar el plazo existente entre citación y comparecencia, sin que pueda exceder ahora de veinte días.

II- CONTENIDO

El contenido del llamamiento al demandado en el juicio verbal, a diferencia del juicio de mayor cuantía, es (como ya vimos en el de la citación al demandante) complejo, ya que su fin no es sólo la comparecencia del demandado, sino también la contestación. Así se deduce del art. 730.II, cuando explica que a la comparecencia a la que se convoca o cita a las partes, éstas no sólo acudirán, sino que expondrán, por su orden, lo que pretendan y a su derecho conduzca.

Por lo tanto, el contenido o finalidad de este llamamiento es para comparecer y contestar en el mismo acto del juicio.

III- PLAZO

De acuerdo con el párrafo I del art. 726, el plazo entre la citación y la celebración de la comparecencia no podrá bajar de veinticuatro horas, ni exceder de seis días.

Sin embargo, hemos ido comprobando al examinar los distintos tipos de citaciones, cómo ese plazo de entre veinticuatro horas y seis días podía ser ampliado. En concreto, si el domicilio del demandado se hallare fuera del lugar del Juzgado (o sea, fuera de la

circunscripción) se aumentará (o podrá aumentarse, pensamos nosotros) en función de un día más por cada veinte kilómetros de distancia (art. 726.II LEC), y si no fuere conocido, el Juez podrá ampliar el plazo hasta la comparecencia, sin que pueda exceder de veinte días (art. 725.I LEC).

4- ALTERACION DEL SEÑALAMIENTO PARA LA COMPARECENCIA ^{*85}

^{*85} Sobre la solicitud de nuevo señalamiento de vista hallamos el art. 183 Proyecto:

“Artículo 183. Solicitud de nuevo señalamiento de vista.

1. Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución del tribunal que atienda a la situación.

2. Cuando sea el Abogado de una de las partes quien considerare imposible acudir a la vista, si se considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, el tribunal hará nuevo señalamiento de vista.

3. Cuando sea la parte quien alegue la situación de imposibilidad, prevista en el apartado primero, el tribunal, si considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, adoptará una de las siguientes resoluciones:

1ª Si la vista fuese de procesos en los que la parte no esté asistida de Abogado o representada por Procurador, el tribunal efectuará nuevo señalamiento.

2ª Si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por Abogado o representada por Procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, el tribunal efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista.

En particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para responder al interrogatorio regulado en los artículos 301 y siguientes, el tribunal efectuará nuevo señalamiento, con las citaciones que sean procedentes. Lo mismo resolverá cuando esté citada para interrogatorio una parte contraria a la que alegase y acreditase la imposibilidad de asistir.

4. Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el tribunal manifieste y acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el primer apartado de este precepto, el tribunal, si acepta la excusa, decidirá, oídas las partes en el plazo común de tres días, si deja sin efecto el señalamiento de la vista y efectúa uno nuevo o si cita al testigo o perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada.

Si el tribunal no considerase atendible o acreditada la excusa del testigo o del perito, mantendrá el señalamiento de la vista y lo notificará así a aquéllos, requiriéndoles a comparecer, con el apercibimiento que prevé el apartado segundo del artículo 292.

5. Cuando el tribunal, al resolver sobre las situaciones a que se refieren los apartados anteriores, aprecie que el Abogado, el litigante, el perito o el testigo han procedido con dilación injustificada o sin fundamento alguno, podrá imponerles a multa de hasta cien mil pesetas, sin perjuicio de lo que resuelva sobre el nuevo señalamiento.”

Sobre la posible suspensión de vistas y nuevo señalamiento consultar los arts. 188 y 189 Proyecto:

“Artículo 188. Suspensión de las vistas.

1. La celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse, mediante providencia:

1º Por impedir la continuación de otra pendiente del día anterior.

2º Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por indisposición sobrevenida del Juez o del Secretario Judicial, si no pudiese ser sustituido.

3º Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Tribunal.

4º Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del tribunal, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.

5º Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta del Abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.

6º Por tener el Abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia.

En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso y, en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno.

No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para que aquélla se acuerde de produce con más de tres días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento.

Según se desprende del tenor del art. 727 LEC, el señalamiento hecho por el Juez para la comparecencia ante él, no podrá, en principio, alterarse. El precepto, además de atenerse a lo que debe ser norma general, responde a la exigencia de especial celeridad en este juicio.

No obstante, son posibles dos motivos de modificación: por justa causa y por conformidad de ambas partes.

I- POR JUSTA CAUSA

El primer motivo de alteración será el que exista una justa causa, que, además, deberá ser alegada por la parte a que interese y probada ante el Juez (727 LEC).

II- POR CONFORMIDAD DE AMBAS PARTES

El segundo posible motivo de alteración de la comparecencia será la conformidad de ambas partes (727 LEC).

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal con preso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

7º Por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con la dispuesto por esta Ley.

2. Toda suspensión que el Tribunal acuerde se comunicará inmediatamente a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición.

Artículo 189. Nuevo señalamiento de las vistas suspendidas.”

“1. En caso de suspensión de la vista se hará el nuevo señalamiento al acordarse la suspensión y, si no fuere posible, tan pronto como desaparezca el motivo que la ocasionó.

5- COMPARECENCIA O JUICIO: POSIBLES CONDUCTAS

Ante la citación del Juez a la comparecencia, los sujetos del procedimiento (órgano jurisdiccional, demandante y demandado) pueden adoptar distintas conductas: comparecer o no comparecer²⁰⁹.

Si comparecen todos se dará paso al acto del juicio propiamente dicho, lo cual será objeto de estudio en el siguiente apartado.

I- NO COMPARECER^{*86}

A- EL JUEZ O EL SECRETARIO

Si alguna de las personas integrantes del órgano jurisdiccional que deben estar presentes en el acto del juicio (como son el Juez y el Secretario) no comparece, se producirá la imposibilidad total de celebrarse la comparecencia, según se desprende del párrafo I del art. 730 LEC.

En tal caso, entendemos habrá de fijarse una nueva comparecencia, con la correspondiente citación de las partes, sin perjuicio de las posibles responsabilidades disciplinarias en que dichas autoridades incurriesen (arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466 LOPJ), de no mediar causa justificada y suficiente para su incomparecencia.

2. El nuevo señalamiento se hará para el día más inmediato posible, sin alterar el orden de los que ya estuviesen hechos.”

²⁰⁹ Se sigue el esquema empleado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 91, págs. 619 y 620.

^{*86} La inasistencia de las partes a la vista del juicio verbal está regulada en el art. 442 Proyecto:

“Artículo 442. Inasistencia de las partes a la vista.

1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se le tendrá en el acto por desistido a aquel de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.

B- EL DEMANDANTE

La siguiente posibilidad es que comparezcan todos, menos el demandante (sin haber agotado y justificado oportunamente la “causa justa” que le haya impedido comparecer), acreditándose esta incomparecencia en el acta que se extenderá en los autos. Las consecuencias de esta situación están recogidas en el art. 728 LEC, a saber: se le tiene por desistido, se le condena en todas las costas, e indemnizará al demandado, si éste último hubiere comparecido, los perjuicios ocasionados.

a- SE LE TIENE POR DESISTIDO

La primera consecuencia de la no comparecencia del demandante en el día y hora señalados, es que se le tendrá por desistido de la celebración del juicio (728.I LEC).

El desistimiento normalmente es el acto de disposición del demandante por el que abandona la pretensión ejercitada, provocando la terminación del proceso mediante un auto que no se pronuncia sobre el fondo, y que no tiene por tanto eficacia de cosa juzgada, lo que significa que el demandante podrá volver a plantear de nuevo la demanda en un futuro.

Es éste un desistimiento presunto, pues se deriva de una conducta prevista legalmente, como es la incomparecencia del demandante.

El hecho de que dicha incomparecencia lo trate la Ley como un caso de desistimiento, sin que conceda al demandado el derecho a oponerse a él (como correspondería a su bilateralidad desde el momento del llamamiento al demandando) y a solicitar que se prosiga el juicio en ausencia del actor (supuesto de rebeldía del demandante) significa que para la Ley la papeleta (ya que solamente ésta se regula en el 720) no es propiamente una demanda, al no estar sustanciada, sino un simple escrito

2. Al demandado que no comparezca se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su

introdutorio; al quedar la verdadera formulación de la demanda para el acto del juicio, no será posible continuar sin la presencia del actor, ya que el demandado ignora las razones y motivos de la pretensión. Según la opinión de algunos autores, como Vázquez Sotelo²¹⁰, si en lugar de papeleta se hubiese presentado un escrito más detallado, equivalente a una demanda sustanciada, la Ley contiene términos hábiles que permitirían plantear una solución distinta de la regulada en el art. 728 para el supuesto de incomparecencia del actor. Creemos entender se refiere a que en esos casos, o bien el juicio podría proseguir en ausencia del actor, pues ya no haría falta su presencia para fundamentar la demanda, o bien el desistimiento tendría que ser aceptado por el demandado, aplicando así la teoría de la bilateralidad del mismo, pues como explica la mayoría de la doctrina, el desistimiento es bilateral desde el momento del llamamiento del demandado (en este caso a través de citación, no de emplazamiento). Otros autores, como Guasp²¹¹, son de la opinión que el desistimiento exige aceptación de la otra parte sólo si se produce después de contestada la demanda (no es éste el caso). Creemos, sin embargo, que el desistimiento del juicio verbal regulado en el 728, es decir, el producido por la incomparecencia del actor, no necesitará aceptación por parte del demandado porque se ha producido por un defecto de carácter procesal y, por tanto, falta el interés del demandado en oponerse a la pretensión.

b- SE LE CONDENA EN TODAS LAS COSTAS

La segunda consecuencia de la incomparecencia del actor, según el art. 728.I LEC, es que se le condenará en todas las costas. Ello, además, es una consecuencia lógica del hecho de considerar al demandante desistido, pues la regla general es que el desistimiento

curso.”

²¹⁰ VÁZQUEZ SOTELO, Ley...cit., Tomo II, Art. 740, pág. 585.

²¹¹ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 496.

obliga a imponer las costas a la parte que desista, en base a la interpretación analógica de los arts. 410 (según el cual al tener por desistido al recurrente se le condenará en las costas ocasionadas por la interposición del recurso) y 849, no discutida normalmente en nuestra práctica judicial.

Estas costas (junto con la indemnización de que trataremos a continuación) se exigirán por la vía de apremio.

c- INDEMNIZARÁ AL DEMANDADO, SI HUBIERE COMPARECIDO, LOS PERJUICIOS OCASIONADOS

La tercera consecuencia derivada de la incomparecencia del demandante es que éste deberá indemnizar al demandado, siempre y cuando este último hubiera comparecido, los perjuicios ocasionados (728.I LEC).

Sin embargo, el demandado podrá renunciar a dicha indemnización. Y así:

1- SI EL DEMANDADO RENUNCIA

Si el demandado renuncia en ese momento a su derecho a percibir la indemnización por los perjuicios causados, caben dos opciones, cuyos efectos en la práctica son iguales: que el Juez no fije dichos perjuicios o que, fijados, no se exijan.

2- SI EL DEMANDADO NO RENUNCIA

Si el demandado no renuncia a ellos, el Juez procederá a fijar dichos perjuicios.

- MOMENTO, LUGAR Y MODO EN QUE SE FIJA EL IMPORTE

El momento en que los perjuicios son fijados es en la misma comparecencia ante el Juez.

El lugar es en la Sala de Audiencias donde se celebre la comparecencia, fijándose su importe en el acta que se extenderá de la misma.

En cuanto al modo en que se fija la indemnización, lo hará el Juez, en expresión de la Ley “prudencialmente”, simplemente oyendo al demandado. Queda su fijación, por tanto, al prudente arbitrio y ponderación del Juez.

- GASTOS Y PERJUICIOS QUE SE COMPRENDEN

Los gastos y perjuicios que comprende la indemnización son todos aquellos que se hayan ocasionado al demandado con motivo de su asistencia a la comparecencia fallida (día de trabajo perdido, gastos de viaje...etc.).

- CANTIDADES LIMITE

No obstante, el importe de los perjuicios ocasionados tiene topes o cantidades máximas de las que no podrá exceder la indemnización fijada por el Juez.

A- SI ENTIENDE UN JUEZ DE PAZ

Cuando el juicio fuera a celebrarse ante un JP (por tratarse de una cuantía no superior a 8.000 pts. en poblaciones donde no existiera JPI), la cuantía de la indemnización no podrá exceder de 4.000 pts., es decir, de la mitad de la cuantía máxima posible del juicio verbal ante un JP.

B- SI ENTIENDE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

Cuando sea un JPI el que esté conociendo del proceso (por tratarse de cuantías de 1 a 80.000 pts., si no existiere JP, o de 8.001 a 80.000, si existiere) la indemnización no podrá superar las 20.000 pts..

- POSIBILIDAD DE RECURSO

Según apostilla el art. 728 (“...fijará...sin ulterior recurso...”), la recurribilidad de la decisión por la que el Juez fija el importe de la indemnización, es nula. No cabe, por tanto, ningún tipo de recurso en contra de la misma.

- EXIGIBILIDAD

Siempre y cuando el demandado no renuncie (en ese supuesto nos encontramos), la indemnización será exigible (junto con las costas) por la vía de apremio.

C- EL DEMANDADO^{*87}

También puede suceder que el que no compareciere fuese el demandado.

En este caso, se continuará el juicio en su rebeldía, sin volver a citarlo (729 LEC)²¹². Éste es el tratamiento procesal que corresponde a la incomparecencia del demandado en el caso de que no alegue y pruebe justa causa que se lo haya impedido. No obstante la expresión legal, el demandado tendrá que volver a ser citado si se solicita como medio de prueba su confesión judicial, con el apercibimiento de que se le tendrá por confeso si no compareciere a la segunda citación (593 LEC).

^{*87} Sobre la rebeldía encontramos en el Proyecto los arts. 496 y ss..

En los casos de pluralidad de partes, la situación de rebeldía se producirá sólo para el litisconsorte no comparecido, por lo que la parte que efectivamente compareciere no aprovechará formal ni materialmente al ausente.

Son requisitos para que exista la rebeldía: la existencia de un llamamiento previo y válido, la incomparecencia a la citación y la declaración judicial de rebeldía, que en el caso del juicio verbal se producirá en el mismo acto del juicio y por lo tanto se contendrá en el acta.

La situación de rebeldía termina en el momento en el que el demandado se persone, pudiéndolo hacer en cualquier estado del proceso. Sin embargo, en base al principio de preclusión, no se retrotraerán las actuaciones que hayan tenido lugar en su ausencia (art. 766 LEC).

Analizaremos a continuación los efectos que dicha rebeldía producirá. Son estos:

a- FICTA CONTESTATIO

El primer efecto de la declaración de rebeldía es que se tendrá por contestada la demanda (art. 528.II LEC), y esta contestación ficticia (*ficta contestatio*), lejos de implicar una conformidad del demandado, se entiende en nuestro Derecho como oposición a la pretensión del demandante, ya que, toda pretensión está resistida en lo que no está admitida. No conlleva, sin embargo, actitudes de combate (excepciones de fondo) o de ataque (reconvención). De este modo, la rebeldía del demandado, no lleva consigo que el demandante quede dispensado, por la incomparecencia de su adversario, de alegar y probar

²¹² Sobre la rebeldía véanse, entre otras las monografías de VERGÉ GRAU, Juan; *La Rebeldía en el Proceso Civil*. JM Bosch Editor, 1989, Barcelona; y de SAMANES ARA, Carmen; *La Tutela del Rebelde en el Proceso Civil*. JM Bosch Editor, 1993, Barcelona.

el derecho que invoca, y el Juez, en la sentencia definitiva, que no difiere en nada de una sentencia ordinaria, puede darle la razón o no.

Supone la declaración de rebeldía, por tanto, en lo que a efectos materiales se refiere, la pérdida de oportunidades procesales.

b- NOTIFICACIONES EN ESTRADOS

El segundo efecto que produce la declaración en rebeldía del demandado es la alteración en el régimen de las notificaciones, pues, según dispone el art. 281 LEC (de igual forma el 528.II en el juicio de mayor cuantía, proceso tipo o matriz en nuestro Derecho), cuando sea declarado en rebeldía un litigante no comparecido en el juicio después de citado en forma, no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca, y todas las providencias (y demás resoluciones) que de allí en adelante recaigan en el pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacerse, se notificarán y ejecutarán en los estrados del Juzgado o Tribunal, salvo los casos en que otra cosa se disponga. Estas notificaciones, citaciones y emplazamientos, continúa el 282, se verificarán leyendo las providencias (resoluciones) que deban notificarse, o en que se haya mandado hacer la citación, en la audiencia pública por el Juez o Tribunal que las hubiere dictado, y a presencia de dos testigos, los cuales firmarán la diligencia, que para hacerla constar, se extenderá en los autos, autorizada por el actuario. Entendemos, sin embargo, que hoy en día ya no hace falta la firma de testigos, por cuanto el art. 281.2 LOPJ establece que la plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos.

Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados y las cédulas de citaciones (y emplazamientos) que se hagan en los mismos, se publicarán además por edictos, que

deberán fijarse en la puerta del local donde celebren sus audiencias los Jueces o Tribunales, acreditándolo también por diligencia (283.I LEC). En cuanto a los edictos, nos remitimos a lo ya expuesto en las citaciones por edictos, al tratar del llamamiento al demandado. La sentencia que se pronuncie en el juicio seguido en rebeldía, conforme veremos más adelante, será notificada personalmente al litigante rebelde, cuando pueda ser habido, si así lo solicitare la parte contraria (769.I y 770 para la segunda instancia). Otras excepciones a las notificaciones en estrados, encontrándose el demandado rebelde, son las de los arts. 1484 en relación con el 1485 y el 1540 LEC.

Es claro que las notificaciones en estrados son frecuentemente notificaciones ficticias. No basta ello, sin embargo, a tenor de la STC 83/83, de 21 de Octubre, para considerarlas constitucionalmente ilícitas por contrarias a los derechos que el art. 24 CE garantiza, pues el proceso civil, como institución orientada a la satisfacción de pretensiones, no puede articularse en términos tales que el servicio al principio “audiatur et altera pars” se alcance a costa de sacrificar el derecho de quien ejercitó la acción, de demorar indefinidamente la satisfacción de su pretensión.

c- MEDIDAS CAUTELARES

A petición del demandante se pueden adoptar contra el demandado medidas cautelares, tales como la retención de sus bienes muebles de toda clase y el embargo de los inmuebles, en cuanto se estimen necesarios para asegurar lo que sea objeto del juicio (762 LEC). La retención o embargo practicados a consecuencia de la declaración en rebeldía continuarán hasta la conclusión del juicio (art. 765 LEC), salvo que compareciere y pidiere que se alce la retención o el embargo de sus bienes, alegando y justificando cumplidamente no haber podido comparecer en el juicio por fuerza mayor insuperable; la solicitud que con

este objeto se presente se sustanciará como incidente en pieza separada, sin que se suspenda el curso de la demanda principal (art. 768 LEC).

Sobre la retención, ésta se hará en poder de la persona que tenga a su disposición o bajo su custodia los bienes muebles en que haya de consistir, ya sea el mismo demandado o un tercero, si por su arraigo ofreciere garantías suficientes, a juicio del Juez, para responder de ellos; si no las ofreciere, y exigidas no las prestare, se constituirán los muebles en depósito, entendiéndose de cuenta y riesgo del litigante rebelde (art. 763 LEC).

En cuanto al embargo de los inmuebles, se llevará a cabo expidiendo mandamiento por duplicado al Registrador de la Propiedad correspondiente, para que efectúe anotación preventiva sobre los bienes, con prohibición absoluta de venderlos, gravarlos ni obligarlos; uno de los ejemplares, después de cumplimentado, se unirá a los autos para que surta en ellos los efectos oportunos (art. 764 LEC).

A estas medidas cautelares son de aplicación las medidas relativas al embargo preventivo común de los arts. 1407 y ss. y las de los arts. 1447 a 1454 LEC. Los efectos registrales del embargo de inmuebles puede encontrarse en los arts. 42, 44 y 71 a 73 LH.

d- RECURSO ESPECIAL DE AUDIENCIA AL REBELDE

Como una de las consecuencias a que puede dar lugar la declaración de rebeldía del demandado, podemos incluir el recurso especial de audiencia al rebelde, que procede cuando el demandado hubiera permanecido constantemente en rebeldía durante todo el proceso (773 LEC).

Más que un recurso es una acción autónoma de impugnación, pues su finalidad es rescindir sentencias firmes.

Se regula en los arts. 773 y ss. LEC, con especial referencia en nuestro caso al 785 y 786, relativos a la rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía por el JP en el juicio verbal (hasta 8.000 pts).

En este momento, nuestra única intención es recordar que este “recurso especial” es una posible consecuencia de la declaración de rebeldía del demandado, pero su análisis en profundidad (requisitos, procedimiento...etc.) se hará mas adelante, al tratar de los recursos que caben contra la sentencia firme, dentro de la parte de este trabajo destinada a los efectos (tanto de la primera, como de la segunda instancia).

D- NI EL DEMANDANTE NI EL DEMANDADO

El último supuesto es que no comparezcan ni demandante ni demandado.

El caso de incomparecencia de ambas partes no está regulado como tal en nuestra LEC, a pesar de ser posible. Debe resolverse esta posibilidad tratándola igualmente (aunque como veremos, no del todo) que cuando el actor no comparece (art. 728 LEC), esto es:

a- SE TIENE POR DESISTIDO AL DEMANDANTE

Al igual que en el supuesto de incomparecencia del demandante, la primera consecuencia de la no comparecencia de ambas partes es que se tendrá por desistido al actor. Por tanto, a todo lo explicado sobre el desistimiento en aquel punto nos remitimos.

b- SE CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE

De nuevo, la segunda consecuencia de la incomparecencia de demandante y demandado es, al igual que en el supuesto de incomparecencia del actor, la condena en

costas del primero, como vimos, consecuencia lógica del desistimiento. También aquí nos remitimos a lo dicho en aquel punto sobre la condena en costas del actor.

c- NO EXISTE INDEMNIZACION AL DEMANDADO

La única diferencia con el supuesto de incomparecencia del demandante es que, en este caso, el actor no tendrá que indemnizar al demandado los perjuicios ocasionados, ya que éste último tampoco ha comparecido, y el art. 728.I considera necesario, para condenar a dicha indemnización, la presencia del demandado.

II- COMPARECER TODOS: ACTO DEL JUICIO^{*88}

Si por el contrario comparecen tanto el órgano jurisdiccional como las partes del proceso (demandante y demandado) se celebrará el acto del juicio propiamente dicho, regulado en el art. 730 LEC.

^{*88} El Proyecto regula una serie de actuaciones previas a la vista en casos especiales (art. 441):

“Artículo 441. Actuaciones previas a la vista, en casos especiales.

1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º del apartado primero del artículo 250, el tribunal llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repunte conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante.

Si nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión; pero en caso de que se presentaren reclamantes, previo traslado de sus escritos al demandante, se le citará, con todos los comparecientes, a la vista, sustanciándose en adelante las actuaciones del modo que se dispone en los artículos siguientes.

2. Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes incluso de la citación para la vista, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de la vista.

La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 64 de esta Ley.

3. En los casos del número 7.º del apartado primero del artículo 250, el tribunal, tan pronto admita la demanda, adoptará las medidas solicitadas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar en todo caso el cumplimiento de la sentencia que recayere.

4. En el caso del número 10.º del apartado primero del artículo 250, el Tribunal, al admitir la demanda, ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo previsto en esta Ley. Cuando, al amparo de lo dispuesto en el número 11.º del apartado primero del artículo 250, se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, el Tribunal ordenará, al admitir la demanda, el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición del demandado a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de las medidas por caución.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se emplazará al demandado por cinco días para que se persone en las actuaciones, por medio de Procurador, al objeto de anunciar su oposición a la demanda por alguna de las causas previstas en el apartado tercero del artículo 444. Si el demandado dejare transcurrir el plazo sin anunciar su oposición, o si pretendiera fundar ésta en causa no comprendida en el apartado tercero del artículo 444, se dictará, sin más trámites sentencia estimatoria de las pretensiones del actor.

Cuando el demandado anuncie su oposición a la reclamación con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior, se citará a las partes para la vista y, si el demandado no asistiera a la misma sin concurrir justa causa o asistiera, pero no formulara oposición o pretendiera fundar ésta en causa no comprendida en el apartado tercero del artículo 444, se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de las pretensiones del actor. En estos casos el demandado, además, será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un mínimo de 30.000 pesetas.

Contra la sentencia que se dicte en los casos de ausencia de oposición a que se refieren los dos párrafos anteriores no se dará recurso alguno.”

Por ser este acto ante el Juez el núcleo central del proceso de ínfima cuantía, y para contemplar las distintas vicisitudes que pueden irse sucediendo en él, será objeto de estudio individualizado en el siguiente apartado.

6- DESARROLLO DEL JUICIO : CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA ^{*89}

^{*89} El desarrollo de la vista del juicio verbal se recoge en el art. 443 Proyecto:

“Artículo 443. Desarrollo de la vista.

1. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda si ésta se hubiera formulado conforme a lo previsto para el juicio ordinario.
2. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la acumulación de acciones que considerase inadmisibles, a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
3. Oído el demandante sobre las cuestiones a que se refiere el apartado anterior, así como las que considerare necesario proponer acerca de la personalidad y representación del demandado, el tribunal resolverá lo que proceda y si manda proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar contra la sentencia que en definitiva recaiga. Por su parte, el demandante podrá apelar si el tribunal, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declina el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entiende que debe poner fin al asunto.
4. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, suscitadas, se resolviese por el tribunal la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 429.”

Existen también en el art. 444 unas reglas especiales sobre el contenido de la vista para ciertos supuestos del art. 250.1:

“Artículo 444. Reglas especiales sobre contenido de la vista.

1. Cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago.
2. En los casos del número 7.º del apartado primero del artículo 250, el demandado sólo podrá oponerse a la demanda si, en su caso, presta la caución determinada por el tribunal en cualquiera de las formas previstas en el apartado segundo del artículo 64 de esta Ley.

La oposición del demandado únicamente podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:

- 1º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.
 - 2º Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
 - 3º Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.
 - 4º No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.
3. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado primero del artículo 250, la oposición del demandado sólo podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:
- 1ª Falta de jurisdicción o de competencia del tribunal.
 - 2ª Pago acreditado documentalmente.
 - 3ª Inexistencia o falta de validez de su consentimiento, incluida la falsedad de la firma.
 - 4ª Falsedad del documento en que aparezca formalizado el contrato.”

La comparecencia es, como ya se ha indicado, el trámite fundamental del juicio de ínfima cuantía.

En ella, ante el órgano jurisdiccional, las partes formulan y delimitan el objeto del proceso, desarrollan las actividades básicas del litigio, de alegación y prueba, y elaboran, en definitiva, el material que ha de servir al Juez para su decisión final.

I- CONSTITUCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL

La comparecencia habrá de realizarse ante el órgano jurisdiccional autor de la citación, a cuyo fin éste tendrá que constituirse, según explica el párrafo I del art. 730 LEC, con el Juez (de Primera Instancia o de Paz, según hubiera correspondido) y su Secretario en el día, hora y lugar señalados.

II- POSIBLE POSTULACION^{*90}

Conforme ya vimos al tratar de la postulación, en el juicio verbal no se exige la mediación forzosa de un profesional, si la parte quiere comparecer y defenderse por sí misma, pero no se permite a los litigantes valerse de terceros no profesionales que intervengan en su lugar, si no son Letrado o Procurador. Así lo dispone el art. 730.IV, cuando dice que a esta comparecencia podrá concurrir, acompañando a los interesados y para hablar en su nombre, la persona que elijan, que deberá reunir la condición de Letrado o Procurador en ejercicio.

Se olvida el mencionado art. 730.IV del supuesto de la comparecencia a través de factor mercantil (que anteriormente ya recogimos), lo cual supone una excepción a lo previamente dicho, pues podrá este factor, sin ser Procurador, ostentar la personalidad de

sus mandantes en los actos comprendidos en el giro o tráfico del establecimiento o empresa, siempre y cuando su apoderamiento conste inscrito en el Registro Mercantil, a tenor de lo dispuesto en el art. 4 LEC.

III- RATIFICACION

Conforme adelantamos a la hora de examinar la demanda, la ratificación es el acto por el que el demandante confirma su intención de iniciar el proceso, es decir, que no ha variado su voluntad. Sólo se exige cuando la comparecencia no se haga a través de profesional, en cuyo caso se convierte en un requisito de admisibilidad de la demanda, por lo que de no producirse, se dictará providencia (sin posibilidad de recurso) inadmitiendo la misma (que será firmada por el Juez y Secretario, extendida en los autos y notificada a los interesados, extendiéndose asimismo esta notificación). De esta forma, si el actor comparece representado por profesional la ratificación ya se produjo anteriormente al otorgar el poder o conferir la representación apud acta.

IV- POSIBLE TRANSACCION JUDICIAL

La transacción judicial es un negocio jurídico por virtud del cual las partes de un proceso, mediante concesiones recíprocas, ponen fin al pleito ya comenzado (art. 1809 CC).

Aunque en principio puede tener lugar en cualquier momento del proceso, a modo recordatorio la encuadramos ahora (al principio de la comparecencia); será más profundamente estudiada al tratar de las formas de terminación anormal del mismo.

^{*90} Nos remitimos a lo dicho al respecto en el análisis de la postulación como requisito de las partes.

V- ALEGACIONES INICIALES O DE INTRODUCCION

Comienza propiamente la comparecencia, una vez que el acto ha sido abierto por el Juez, con las alegaciones iniciales, también llamadas de introducción²¹³, a través de las cuales intervienen las partes del modo que establece el art. 730 LEC cuando, al principio de su párrafo II, prescribe que en la comparecencia expondrán las partes, por su orden, lo que pretenden y a su derecho conduzca.

En materia de alegaciones, queremos poner de manifiesto que abogamos por un aumento de las facultades de dirección del órgano jurisdiccional, a fin de aclarar y encauzar las dudas que, debido a la posible falta de postulación profesional, puedan suscitarse a las partes legas en Derecho en el desarrollo del proceso.

Hablará primero la parte actora y después la demandada.

A- EL DEMANDANTE PUEDE OPTAR POR:

En primer lugar, el actor, o la persona que hable en su nombre, puede optar por fundamentar su pretensión (y ratificar su demanda), denunciar la falta de algún requisito del demandado, desistir o renunciar.

a- FUNDAMENTAR SU PRETENSION (O RATIFICAR LA DEMANDA)*⁹¹

La primera opción que tiene la parte actora en esta comparecencia es la de fundamentar la pretensión procesal meramente mencionada en la papeleta (art. 730.II). Esto supone que la pretensión que ahora se formula y fundamenta deberá encuadrarse en la referencia genérica del objeto del proceso que se incluye en la papeleta de demanda que era meramente preparatoria. Por tanto, es ahora cuando se expresa la auténtica reclamación

de fondo que constituye la pretensión procesal. De todas formas, si ya se presentó la demanda debidamente fundamentada (pues se hizo uso de una auténtica demanda mixta o compleja), puede el actor simplemente remitirse a lo contenido en ella, es decir, simplemente ratifica su escrito de demanda.

Tendrá el demandante que aportar en este momento los documentos con sus copias a que hacen referencia los arts. 503, 504, 515 y 516 LEC, si estos no se han adjuntado ya con la demanda (como vimos que era posible), de forma que según va afirmando los hechos en que apoya su pretensión va presentando los documentos²¹⁴ (en cuanto al poder del Procurador, lo más correcto sería presentarlo acompañando al primer escrito, de acuerdo con el art. 3.II LEC, pero también puede presentarlo en el acto de la comparecencia).

No debemos olvidar que si además el actor comparece por si mismo (sin hacer uso de la facultativa postulación) deberá obligatoriamente ratificarse en su demanda ante el Juez, conforme a lo ya expuesto con anterioridad.

b- DESISTIMIENTO

El desistimiento²¹⁵ es un modo anormal de terminación de un proceso en virtud de una actividad del demandante, consistente en una declaración de voluntad, por la cual se aparta del proceso comenzado, sin renunciar a la posibilidad de iniciarlo de nuevo.

Ha sido ya en parte analizado como uno de los efectos producidos por la incomparecencia a juicio del demandante (art. 728.I LEC), aunque aquél era un desistimiento presunto derivado de una conducta procesal prevista legalmente.

²¹³ Trata de estas alegaciones de introducción GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 295.

²¹⁴ Nos remitimos a lo dicho al respecto en el art. 443 Proyecto, ya citado.

²¹⁵ Así también lo expone ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 92, pág. 620.

Aunque el desistimiento puede tener lugar en principio en cualquier momento, generalmente se produce al principio de la comparecencia, motivo por el que queremos mencionarlo en este lugar. Sin embargo, será más profundamente examinado, en cuanto a sus requisitos, efectos... al tratar de la terminación anormal del juicio verbal.

c- RENUNCIA

La renuncia²¹⁶ es (al igual que el desistimiento) un modo anormal de terminación de un proceso en virtud de una actividad del demandante, consistente en una declaración de voluntad por la que (a diferencia del desistimiento) hace dejación del derecho que fundamenta su petición con carácter irrevocable.

Al igual que en el desistimiento, mencionamos ahora esta forma de terminación anormal del proceso por ser éste el momento más frecuente de producirse, pero será más ampliamente tratada en aquel apartado.

B- EL DEMANDADO PUEDE OPTAR POR:

Finalizadas las alegaciones iniciales de la parte actora, será el turno del demandado o persona que hable en su nombre, pudiendo optar entre contestar o no contestar²¹⁷.

a- NO CONTESTAR

Si el demandado, habiendo comparecido, opta por no contestar, no se le considerará en rebeldía (como ocurre, según el art. 729 LEC, en caso de su incomparecencia), y por tanto, no se aplicarán los efectos que, como vimos, la misma conlleva (ficta contestatio,

²¹⁵ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 43, págs. 375 y ss..

²¹⁶ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 44, págs. 394 y ss..

notificaciones en estrados, medidas cautelares y recurso especial de audiencia al rebelde). Simplemente seguirá adelante el juicio, precluyendo para el demandado las actuaciones de que no haga uso. Dicho de otro modo, comparecer y no contestar (a tenor del art. 541 LEC) evita la declaración de rebeldía, pero se produce la preclusión de este trámite, de forma que, al igual que sucedía en la ficta contestatio (uno de los efectos de la rebeldía), la misma equivale a oposición, pues en nuestro Derecho toda pretensión está resistida en lo que no está admitida.

Evidentemente, ésta es una situación solamente teórica, pues en la práctica quien comparece suele desear contestar (y por lo tanto, así lo hace).

b- CONTESTAR

Si el demandado contesta, puede elegir entre allanarse, plantear oposición a la pretensión deducida por el demandante, o incluso ir más allá planteando él mismo una pretensión contra el actor, es decir, reconvenir.

1-ALLANAMIENTO

El allanamiento²¹⁸ es un modo anormal de terminación de un proceso, en virtud de una actividad del demandado consistente en una declaración de voluntad por la cual muestra su conformidad con la petición del demandante.

No debe confundirse el allanamiento con el reconocimiento de hechos, ya que el demandado puede admitir o reconocer los hechos sin que por ello se admita la pretensión. De esta forma, mientras que el allanamiento termina el proceso en un sentido

²¹⁷ Las distintas opciones con que cuenta el demandado que decide comparecer se hallan recogidas por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 399 y ss..

²¹⁸ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 48, págs. 424 y ss..

necesariamente victorioso para el actor, la admisión de los hechos puede, en su caso, restar alguna posibilidad de defensa al demandado, pero nunca conllevar la certeza de que por dicho acto la resolución ha de tener un contenido determinado.

Aunque lo adelantamos ahora por ser el momento más normal de producirse, analizaremos el allanamiento más adelante por tratarse de una forma de terminación anormal del proceso.

2- OPOSICION^{219*}92

Cuando el demandado decide oponerse, lejos de aquietarse ante la petición que la pretensión del actor contiene o reconocerla expresa o tácitamente, se defiende de ella, resistiéndola o combatiéndola (aunque sin llegar a atacarla, pues entraríamos dentro del tercer supuesto, el de la reconvención).

Pasaremos a continuación a definir y analizar los distintos aspectos de la oposición del demandado, centrándonos especialmente en sus dos tipos o clases: oposición procesal y oposición material o sobre el fondo.

- CONCEPTO

Por tanto, podemos definir la oposición, como aquella declaración de voluntad por la que el demandado reclama del órgano jurisdiccional, frente al actor, la inactuación de la pretensión de éste²²⁰.

²¹⁹ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 49, págs. 431 y ss..

^{*92} Nos remitimos a lo dicho al respecto en los arts. 443 y 444, ya mencionados.

²²⁰ Concepto tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 219.

- REQUISITOS

Los requisitos de la oposición (y en general de la contestación a la demanda) son, en términos generales, los mismos que los que vimos debe cumplir la demanda.

Podemos, por tanto, (igual que hicimos en el estudio de los requisitos de la demanda) dividirlos para su análisis en requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

Son los requisitos que afectan a los sujetos del proceso, es decir, al órgano jurisdiccional y a las partes.

En cuanto al órgano jurisdiccional, el JP o JPI que esté conociendo del proceso pendiente es el órgano jurisdiccional que conoce de la oposición, ya que ésta (como una de las posibilidades de la contestación a la demanda) no es más que un trámite del procedimiento que ha de seguirse para la sustanciación y decisión del proceso que mediante la presentación de la demanda se inició. Así se deduce del art. 55 LEC.

En cuanto a las partes, al ser éstas las mismas que en la demanda, deberán gozar de los mismos requisitos que en ella, aunque teniendo en cuenta que al ser ahora el demandado el sujeto activo y el demandante el sujeto pasivo, el primero deberá reunir los mismos requisitos de capacidad (de parte y procesal) que requería el segundo en la demanda (ya que las legitimaciones activa y pasiva están intercambiadas), así como los correspondientes a su postulación, si de ella hiciere uso. Al ser por tanto las mismas, no es necesario ahora volver a detallar las circunstancias que identifican y califican a las partes. Por último, según el art. 531 LEC, si son varios los demandados y hacen uso de las mismas excepciones, deberán litigar unidos y por tanto presentar una única oposición; si lo hacen

separadamente (siendo las mismas excepciones) el Juez les obligará a que en lo sucesivo litiguen unidos y bajo una misma dirección.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

El art. 540 LEC remite al art. 524, pues el primero establece que el demandado formulará la contestación (y por tanto la oposición, como una de las posibles formas de contestación que existen) en los términos prevenidos para la demanda (mixta o compleja).

De esta forma, los requisitos objetivos de la oposición son, pues, los ya indicados con relación a la demanda (posibilidad, idoneidad y causa), con la salvedad de que aquí no es necesaria la determinación del objeto litigioso que viene determinado por aquélla.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Por último, los requisitos de la actividad se refieren, como ya sabemos, al lugar, tiempo y forma de la oposición.

En cuanto al lugar, la oposición se plantea en el mismo sitio en que se esté celebrando la comparecencia, es decir, en la Sala de Audiencias del órgano que está conociendo del proceso.

En relación al tiempo, la oposición se formula en la comparecencia, a continuación de la primera intervención del demandante.

Sobre la forma de la oposición, ésta se hará, igual que la demanda, en castellano o, en su caso, en la lengua de la CA (art. 23.1 LOPJ); sin embargo, la oposición en este juicio se hará oralmente, conforme al principio de oralidad que domina la comparecencia ante el Juez.

- TIPOS

Los medios de oposición pueden ser de distintos tipos, clasificables en razón a diversos criterios: por el tiempo en que pueden ser planteados, por el contenido que se permite, por el grado de negación o afirmación que realiza el demandado respecto a lo alegado por el demandante, y, por último, por los elementos a que afectan.

A- POR EL TIEMPO EN QUE PUEDE SER PLANTEADA

Según el momento del proceso en que la oposición puede ser planteada, ésta puede ser concentrada o dispersa.

a- CONCENTRADA

Si todos los medios de defensa deben articularse en un solo acto procesal, que será la contestación a la demanda. Éste es el caso de la oposición en el juicio verbal, que deberá plantearse necesariamente en la primera intervención del demandado durante la comparecencia (art. 730.II LEC).

b- DISPERSA

Si por el contrario el procedimiento legal permite plantear los medios de oposición en actos distintos, se trata de una oposición dispersa. No es el caso del juicio verbal.

B- POR EL CONTENIDO

Según la Ley limite o no los medios de defensa a utilizar, estaremos en presencia de una oposición restringida o libre, respectivamente.

a- LIBRE

La oposición será libre cuando permita al demandado utilizar cualquier medio de defensa procesal a su alcance. Esto es lo que sucede en el juicio verbal, ya que la Ley en él no limita la defensa del demandado, como sucede en otros procesos.

b- LIMITADA O RESTRINGIDA

En algunos procesos sucede que la Ley limita los medios de defensa del demandado, permitiéndole sólo utilizar algunos. Esto no ocurre en el juicio verbal ordinario.

C- POR EL GRADO DE AFIRMACION O NEGACION DEL DEMANDADO

La Ley impone al demandado la carga de pronunciarse sobre los hechos alegados por el demandante, de forma que aquél puede admitir los hechos, contestar con evasivas, negar los hechos o afirmar hechos contrarios.

a- ADMISION DE LOS HECHOS

El demandado puede admitir los hechos, en cuyo caso el proceso quedará circunscrito a un problema estrictamente jurídico.

b- EVASIVAS

El demandado puede también optar por responder con evasivas, en cuyo caso el Juez deberá tener por ciertos los hechos relatados por el demandante.

c- NEGACION DE LOS HECHOS

Si el demandado niega la existencia de los hechos narrados por el actor, éste último tendrá la carga de probarlos, salvo que estén amparados por una presunción legal o sean notorios.

d- AFIRMACIONES CONTRARIAS: EXCEPCIONES

Por último, el demandado puede realizar afirmaciones contrarias a las hechas por el demandante, de forma que el primero plantea excepciones contra el segundo. Así, quien excepciona incorpora al proceso afirmaciones distintas, lo que determina la normal consecuencia de que pese sobre él la correspondiente carga de la prueba.

D- POR LOS ELEMENTOS A QUE AFECTA

En función de los elementos a que afecta, la oposición puede ser procesal o sobre el fondo²²¹.

a- OPOSICION PROCESAL

La oposición procesal es aquella que tiene por objeto negar el derecho al proceso del demandante, poniendo de manifiesto la falta de algún requisito procesal o la existencia de algún óbice procesal, es decir, algún obstáculo o impedimento del proceso.

Será este tipo de oposición la que el demandado deberá alegar en primer lugar (antes de entrar en el fondo del litigio).

²²¹ Esta es la clasificación de la oposición recogida por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 49, págs. 431 y ss..

1- LEGALIDAD DE SU CITACION Y TRASLADO DE LA PAPELETA O DEMANDA

En primer lugar, el demandado puede y debe examinar si su citación y el traslado de la demanda o papeleta de demanda han sido realizados en forma (según lo establecido en los arts. 722 a 726 LEC, ya examinados al tratar del llamamiento al demandado), ya que la citación que no cumpla los requisitos legales es nulo (art. 279 LEC).

Sin embargo, de poco servirá esta denuncia del demandado en este momento, pues, según dispone el art. 279 LEC, cuando la persona citada defectuosamente (en este caso el demandado) se persone en los autos (cosa que ya ha ocurrido a estas alturas del proceso), surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho ajustándose a las disposiciones de la Ley, sin perjuicio de la corrección disciplinaria establecida en el art. 280 LEC para el funcionario responsable de tal defecto.

2- REQUISITOS PROCESALES

A continuación examinará el demandado si la demanda (ya fundamentada) cumple los requisitos procesales y de orden, que indicábamos había de tener en cuenta el demandante como requisitos de la demanda, es decir: la compatibilidad subjetiva del Juez (o resto del órgano jurisdiccional), jurisdicción, competencia (tanto objetiva como territorial), capacidad para ser parte y procesal, legitimación, representación técnica y dirección técnica (si se hizo uso de ellas); si el litisconsorcio cumple los requisitos que exige la Ley, si existe cosa juzgada, litispendencia o el objeto es ilícito; si los hechos aducidos son idóneos para la petición que se formula, la adecuación del procedimiento, el

reparto en su caso^{*93}, el tiempo en que haya sido presentada (cuando éste sea un requisito procesal de admisibilidad); si se cumplen los requisitos formales que exige la Ley, la reclamación previa en la vía gubernativa cuando sea necesaria, la documentación y copias de la demanda y la ratificación en su caso.

El demandado podrá examinar y denunciar la falta de todos los requisitos indicados anteriormente, incluso aquellos que debió el Juez examinar de oficio^{*94}.

Especial mención merece la oposición consistente en la disconformidad del demandado con la cuantía de la cosa litigiosa, pues se regula en concreto en los arts. 718 y 496 LEC^{*95}. Esta oposición será tratada, en cuanto a su tratamiento procesal especial, más tarde. A pesar de que por razones sistemáticas la incluyamos entre la oposición procesal, hay quien la califica de incidente especial en este juicio verbal, ya que la misma produce en él la paralización del proceso principal, y por eso la volveremos a mencionar en el apartado de los superincidentes o incidentes especiales

^{*93} Ver el art. 68 Proyecto, ya citado al tratar del reparto.

^{*94} De acuerdo con los arts. 39 Proyecto, el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje la controversia. Asimismo, conforme a los arts. 49, 59 y 63 y ss., el demandado podrá poner de manifiesto mediante declinatoria la falta de competencia objetiva y territorial. La declinatoria se podrá presentar también ante el órgano del domicilio del demandado, en el plazo de los cinco primeros días tras la citación para la vista, suspendiéndose el curso del asunto principal. A la declinatoria se acompañarán los documentos o principios de pruebas en que la parte funde su derecho, con copias para cada litigante. Se dará plazo de cinco días para que estos hagan alegaciones y el órgano resolverá también en cinco días mediante auto, contra el que cabrá reposición si el mismo rechaza la falta de competencia internacional, jurisdicción o competencia objetiva (sin perjuicio de alegarlo en la apelación de la sentencia definitiva) o rechaza la sumisión del asunto a arbitraje, o cabrá apelación si el auto pone fin al proceso (art. 66). No cabrá recurso si se trata de la competencia territorial (art. 67).

^{*95} En el Proyecto se regula esta cuestión en el art. 255.3:

“Artículo 255. Impugnación de la cuantía y de la clase de juicio por razón de la cuantía.

b- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

La oposición material es aquella mediante la que se pone de manifiesto la falta de algún requisito relativo al fondo del asunto, es decir, la falta de algún requisito de prosperabilidad de la pretensión.

El demandado, después de denunciar la falta de requisitos procesales, atacará el fondo del litigio a través de este tipo de oposiciones, y ello a pesar de que existieran defectos procesales, aunque en este caso, con carácter eventual, para el caso de que no prosperen aquellos.

Esta oposición material puede basarse en la falta de un requisito de prosperabilidad de la acción, o en el ejercicio de una excepción sustancial²²².

1- INEXISTENCIA DE ALGUN REQUISITO CONSTITUTIVO DE LA RELACION JURIDICO-MATERIAL

Ya dijimos (al tratar de la posibilidad de la acción dentro de los requisitos objetivos del proceso) que los requisitos constitutivos son las condiciones necesarias para obtener el bien que se pretende conforme al derecho objetivo. Por ello, la inexistencia de alguno de estos requisitos será una de las oposiciones materiales que el demandado puede alegar para que no prospere la acción.

La inexistencia de un requisito constitutivo de la relación jurídico-material puede ocurrir: o porque no son ciertos los hechos que se invocan y a los que condiciona la Ley la prosperabilidad de la acción, o porque, aun siendo ciertos, no existe una norma que conceda a tales hechos la consecuencia pretendida por el actor.

3. En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía en la vista, y el tribunal resolverá la cuestión en el acto antes de entrar en el fondo del asunto previo trámite de audiencia del actor.”

En el primer supuesto, la pretensión contenida en la demanda se resiste mediante la simple negación total o parcial de los hechos aducidos por el actor. El efecto principal que produce tal forma de oposición es que la carga de la prueba, salvo la existencia de una presunción legal, corresponde al demandante (como ya vimos), ya que, conforme a lo dispuesto en el art. 1214 CC, incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento.

Respecto a la existencia o inexistencia de una norma de la que se deduzca el efecto jurídico pretendido, podemos distinguir entre que se trate de una norma legal nacional, una norma consuetudinaria o una norma extranjera. Si se trata de una norma legal nacional, debemos recordar que el Juez tiene el deber de conocer y aplicar de oficio el Derecho (*iura novit curia*), pero la parte puede facilitar su tarea aportándole los materiales interpretativos que conducen a la tesis defensiva que sustenta. Si por el contrario se trata de una costumbre, el demandado puede oponerse a ella negando o bien su existencia, o bien los requisitos necesarios para que la misma sea aplicable (falta de Ley aplicable al caso, vigencia y práctica de la misma...). Por último, puede tratarse de una norma no nacional, en cuyo caso corresponderá a la parte que la invoque alegarla y probarla, pues el Juez no tiene deber de conocer el Derecho extranjero.

2- EXISTENCIA DE ALGUN HECHOS IMPEDITIVO DE LA RELACION JURIDICO-MATERIAL

Al igual que en el primer tipo de oposición material, ya vimos en qué consistía un hecho impeditivo: aquél por el cual se impide a la norma constitutiva desplegar su eficacia.

²²² Así lo explica ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 49, págs. 434 y ss..

De esta forma, el demandado puede hacer uso de él para evitar el resultado jurídico pedido por el actor.

La carga de la alegación y prueba de estos hechos impeditivos recae en el demandado (art. 1214 CC).

3- EXISTENCIA DE ALGUN HECHO EXTINTIVO DE LA RELACION JURIDICO-MATERIAL

Hecho extintivo (ya lo explicamos) es aquél hecho por el que se suprime el efecto jurídico de la constitución, a pesar de ya haberse producido (así, por ejemplo: el cumplimiento, la consignación, la condonación...etc.). Es el tercer tipo de oposición sobre el fondo que el demandado puede emplear.

Al igual que los impeditivos, los hechos extintivos deben ser alegados y probados por el demandado (art. 1214 CC).

4- EXISTENCIA DE ALGUN HECHO EXCLUYENTE DE LA RELACION JURIDICO-MATERIAL: EXCEPCION EN SENTIDO PROPIO

Ya sabemos que con el término hecho excluyente nos referimos a aquél que enerve o paralice la pretensión del demandante (por ejemplo: la prescripción, la compensación, la violencia, el dolo...etc.). Son precisamente estos hechos excluyentes los que la doctrina denomina excepciones en sentido propio o estricto, y pueden ser usadas por el demandado contra la acción del demandante. Son, por tanto, el cuarto tipo de oposición material.

También aquí es el demandado quien tiene la carga de alegarlos y probarlos (art. 1214 CC). Sin embargo, a diferencia de los hechos anteriores, el Juez no podrá apreciarlos de oficio a la hora de estudiar la sentencia, por lo que, hasta que el demandado no declare

querer ejercitar la excepción y haga uso de su derecho impugnativo, la acción existe y produce sus efectos.

- TRATAMIENTO PROCESAL^{*96}

Analizaremos ahora cuál es el tratamiento procesal de la oposición (tanto procesal como material), es decir, cómo y en qué momento del proceso se resuelve.

A- OPOSICION PROCESAL

Nos referimos sólo al tratamiento de la oposición procesal (sin incluir, por tanto, a los incidentes, que serán analizados más adelante cuando tratemos del desarrollo anormal del proceso).

Según de qué tipo de oposición procesal se trate, ésta se resolverá con carácter previo a la resolución del resto del proceso, o por el contrario se resolverá en la sentencia definitiva, con carácter previo al análisis del fondo del asunto²²³.

a- RESOLUCION PREVIA MEDIANTE AUTO

La única oposición procesal que se resolverá con carácter previo al resto del proceso, y por tanto sin posibilidad de continuar entre tanto la marcha del juicio, será la que consiste en la disconformidad del demandado con la cuantía de la cosa litigiosa propuesta por el demandante.

Según lo establecido en el art. 718 LEC, se procede del modo prevenido en el art. 496 LEC. Por su parte, el art. 496 previene que cuando en los juicios verbales haya duda

^{*96} Recordemos que en el Proyecto el tratamiento de la oposición procesal se unifica, de manera que la misma se resuelve en el acto de la vista, antes de entrar en el fondo del asunto y previo trámite de audiencia de las partes para fijar los hechos (ver arts. 255.3 y 443, anteriormente mencionados).

sobre la cuantía litigiosa, se oiga a las partes en el acto de la comparecencia para el juicio; contra su fallo declarándose competente y que el procedimiento es el idóneo, no se dará apelación. Sin embargo, si se interpusiere de la sentencia definitiva hay que distinguir: si del juicio conoció un JP, el JPI (argumento en el art. 85.3 LOPJ) puede declarar la nulidad del juicio, si resultare ser la cuantía mayor de la que se atribuye al Juzgado de Paz; si del juicio conoció un JPI, tal declaración la realizará la AP (art. 82.4 LOPJ) y normalmente declarará la nulidad por inadecuación del procedimiento, ya que aunque se rebase la cuantía del límite máximo del juicio verbal, el JPI, resulta competente al tener atribuida la competencia objetiva con carácter general.

Si el Juzgado de Paz declara, lo que hará mediante auto, no ser de su competencia la cuantía de la materia litigiosa, se dará recurso de apelación en ambos efectos ante el JPI del Partido.

Pudiere darse el caso, sin duda excepcional, de que se iniciara un juicio verbal de más de 8.000 pts. ante un JPI y que el incidente se resolviera señalando que la cuantía era inferior a esa cifra y que por razón de la competencia territorial correspondería conocer a un Juzgado de Paz del Partido. En este caso, el auto declarándose incompetente el Juzgado de Primera Instancia podía ser susceptible de recurso de apelación ante la AP, que resolvería en definitiva.

b- RESOLUCION EN LA SENTENCIA DEFINITIVA

El resto de la oposición procesal se resolverá en la sentencia definitiva (por tanto, sin que se paralice el proceso), aunque con carácter previo al fondo del asunto.

²²³ Hace esta aclaración también ARAGONESES ALONSO. Técnica...cit., párrafo 92. pág. 620.

B- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

La oposición material se resolverá siempre en la sentencia definitiva, si, en principio, no se estima previamente ninguna oposición procesal.

Sin embargo, ya veremos, al llegar al análisis del proceso en el momento de dictar sentencia por el Juez, cómo la falta de alguno de los requisitos procesales no es obstáculo para entrar a examinar el fondo de la cuestión principal.

- EFECTOS²²⁴

En general, introducida la oposición en el proceso, su efecto fundamental es el de delimitar el objeto procesal, con imposibilidad, en principio, de un cambio ulterior, estableciendo los límites dentro de los cuales la pretensión procesal ha de ser correctamente manejada, lo que vincula al Juez, que no podrá desconocerlos, positiva o negativamente, sin incurrir en incongruencia.

Por otro lado, ya vimos cómo la negación del demandado de los hechos alegados por el actor conlleva que recaiga sobre este último la carga de la prueba, mientras que la excepción hace que la carga probatoria de lo alegado en ellas sea para el demandado.

En cuanto a los efectos que producirá la oposición si se estima, debe distinguirse según se trate de oposición procesal o de fondo.

A- OPOSICION PROCESAL

Si la oposición procesal resulta estimada, ésta producirá la absolución en instancia del demandado.

B- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

Si la oposición material viene a ser estimada, producirá la absolución definitiva del demandado.

3- RECONVENCION^{225*97}

Ya explicamos que, además de conformarse u oponerse, el demandado puede optar por reconvenir, es decir, ejercitar a su vez una pretensión contra el actor.

A continuación, definiremos y analizaremos los distintos aspectos de la reconvención.

- CONCEPTO

La reconvención puede definirse como la posición de ataque realizada por el demandado contra el demandante mediante el ejercicio de una pretensión nueva, deducida al contestar la demanda en el juicio provocado por éste.

- REQUISITOS

Los requisitos de la reconvención coinciden en general con los del proceso principal, salvo la legitimación activa y pasiva, que están invertidas.

Como siempre, dividiremos los requisitos para su estudio en subjetivos, objetivos y de la actividad.

²²⁴ En general, son recogidos por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 226.

²²⁵ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 50, págs. 449 y ss.; véase la monografía de GUTIÉRREZ SANZ, M.R.; La Reconvención en el Proceso Civil Español. JM Bosch Editor, 1993, Barcelona.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos, hay que distinguir según se trate de requisitos del órgano jurisdiccional o de las partes.

En cuanto al órgano jurisdiccional, de acuerdo con el párrafo I del artículo 63.4º y con el art. 55 LEC, será competente para conocer de una reconvención el mismo Juez que viene entendiendo de la demanda principal. Sin embargo, a pesar de este principio general, hay reglas básicas de jurisdicción y competencia que no pueden alterarse. De esta forma, no cabe formular reconvención si, al tener ésta que someterse al mismo Juez que la demanda principal, se modificasen con ello algunas normas que deberían ser aplicadas según las reglas generales a esta nueva pretensión. Por tanto, no cabe alterar en la reconvención el requisito de la jurisdicción, ni el de la competencia objetiva, tanto por razón de la materia (art. 542.III LEC), como por razón de la cuantía, aunque esta última sólo en su cifra máxima (arts. 63.4º párrafo II y 715.II LEC). Por el contrario, sí pueden modificarse en la reconvención las disposiciones sobre competencia objetiva cuantitativa en su tope mínimo, y así lo demuestran los arts. 63.4º y 716 LEC, así como las que se refieren a la competencia territorial. Que el tope mínimo de la competencia cuantitativa se pueda modificar, no influye en principio en este juicio verbal, ya que no existe un juicio con menores límites cuantitativos.

En lo relativo a las partes, éstas han de gozar de las normales capacidad, legitimación y postulación. Sobre la legitimación, hay que observar que ésta se atribuye siempre a las partes del proceso inicial, obrando en las mismas calidades que allí, pero atribuyendo la legitimación activa al sujeto pasivo y la legitimación pasiva al sujeto activo

⁹⁷ Nos remitimos a lo expuesto al respecto en los requisitos objetivos del juicio verbal. Recordemos que la reconvención en este proceso se restringe (ver art. 438.1 Proyecto, ya citado).

de la pretensión originaria, por lo que no sería admisible una segunda reconvención a cargo del actor reconvenido: “reconventio reconventionis non admititur”.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

En cuanto a los requisitos objetivos de la reconvención, el objeto de ésta, igual que el de la pretensión principal, debe ser posible, idóneo y con causa.

Es evidente que la pretensión del demandado, por lo mismo que constituye un caso de acumulación, tendrá que ser compatible con el objeto inicial del proceso, pero no por ello será necesario que el primero verse sobre el mismo objeto litigioso que el segundo, ni que tengan conexión entre ambos (se sigue, como veremos, el sistema de la reconvención inconexa).

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Nos queda, por último, analizar los requisitos de la actividad reconvencional, en las tres dimensiones ya sabidas: lugar, tiempo y forma.

Sobre el lugar, la reconvención debe formularse en el mismo sitio donde se sigue el proceso principal del juicio verbal.

En relación al tiempo, la reconvención ha de formularse en el mismo trámite de la comparecencia, durante la primera intervención del demandado, sin que sea admisible después.

En cuanto a la forma de la reconvención, ésta no debe sujetarse a ninguna fórmula determinada, es decir, se admite la reconvención implícita o no expresa (que luego veremos). Simplemente, deberá hacerse en castellano o lengua de la CA (art. 23.1 LOPJ) y

además oralmente, de acuerdo ordena el principio de oralidad que impera en toda la comparecencia de este juicio verbal.

- TIPOS

Las reconvenciones pueden clasificarse en función de su contenido y en función de su estructura.

A- POR SU CONTENIDO

Según el contenido de la reconvención, ésta puede ser conexa o inconexa.

a- CONEXA

La reconvención será conexa cuando guarde relación con la pretensión planteada por el demandante. La reconvención en el juicio verbal puede ser de este tipo, pero no es necesario.

b- INCONEXA

Se tratará de reconvención inconexa cuando no guarde ninguna relación con la pretensión del actor. Este tipo de reconvención es admitida en nuestro Derecho.

B- POR SU ESTRUCTURA

En función de su estructura, la reconvención será explícita o implícita.

a- EXPLICITA

La reconvención será explícita cuando se ajuste a la estructura de la demanda sustanciada, o a la de la fundamentación de la pretensión en el juicio que nos ocupa, si se presentó simple papeleta de demanda. No es necesario que la reconvención sea explícita o expresa en este juicio verbal.

b- IMPLICITA

La reconvención será implícita cuando su existencia se deduzca tácitamente porque el demandado solicite algo distinto a la simple absolución o desestimación de la pretensión del demandante. También en el juicio verbal la reconvención puede ser implícita o tácita, pues nada se dice en contrario.

- TRATAMIENTO PROCESAL

La reconvención se formula en la contestación a la demanda, durante la comparecencia, y se resuelve, al mismo tiempo que la primitiva demanda, o aisladamente si se hubiera desistido de ésta, en la sentencia definitiva.

- EFECTOS

Por lo que toca a los efectos del planteamiento de una reconvención, ésta produce la consecuencia esencial de que haya varias pretensiones en un solo proceso, hipótesis de processus simultaneus, común a todas las figuras de acumulación. Por ello, todos los efectos que hemos ido viendo se derivan de la existencia de reconvención, se deben a que su trámite fundamental se desarrolla al mismo tiempo que el tratamiento de la pretensión del actor.

VI- ALEGACIONES DE FIJACION: POSIBLES “REPLICA” Y “DUPLICA” EN ESTE PROCESO

El trámite de réplica y dúplica es propio sólo del juicio más solemne, el de mayor cuantía. No obstante, en la comparecencia del juicio verbal deben admitirse a las dos partes (si éstas desean hacer uso de ellas), unas breves alegaciones de fijación²²⁶ de lo previamente expuesto y respectivamente pretendido, pero debiendo tenerse siempre presente la sumariedad del trámite e imposibilidad de dilaciones excesivas, debido a la especial necesidad de rapidez en el juicio verbal.

Desde un punto de vista material, constituye un trámite dirigido a la fijación definitiva de las alegaciones de las partes, pudiendo originar la modificación o adición de pretensiones y excepciones, pero sin alterar el objeto principal. Al no existir ninguna restricción legal al respecto, es necesario acudir a la jurisprudencia para saber cuándo se considera o no alteración fundamental: no hay alteración de lo principal por aclarar un mero error de derecho (STS 2-4-1970); tampoco, si a pesar de introducirse modificaciones fácticas, se interesa conforme a la pretensión aducida en la papeleta o en el suplico de la demanda sustanciada (STS 30-4-1965); es posible realizar peticiones aclaratorias o complementarias de las inicialmente esgrimidas, siempre que sean compatibles o concordantes con éstas y no alterasen su esencia (SSTS 8-2-1955, 30-3-1962 y 22-5-1963); por tanto, hay alteración fundamental cuando se aclara que se actúa no sólo en nombre propio, sino también en el de otras personas, porque existe una importante variación subjetiva (STS 21-6-1965). De acuerdo con lo expuesto, entendemos que para saber si existe o no modificación de lo fundamental, habrá de estarse a los términos en que se

planteó o se fundamentó la demanda y la contestación a la misma, siendo inadmisibles cualquier rectificación que se refiera a los sujetos intervinientes.

A- ORDEN DE ACTUACION

El orden de actuación es el mismo que se viene siguiendo desde que se comenzó el proceso: primero el actor y después el demandado.

a- EL ACTOR

Inicia el trámite de la “réplica” (usamos esta terminología, a pesar de pertenecer la misma, como ya hemos explicado, al procedimiento del juicio de mayor cuantía) el actor, para puntualizar o precisar cualquier aspecto de su pretensión ante la contestación del demandado, u oponerse a la posible reconvencción que el demandado hubiera hecho valer (sin embargo, ya vimos que no puede el actor volver a atacar al demandado con una nueva pretensión, pues no cabe en nuestro Derecho la reconventio reconventionis).

b- EL DEMANDADO

A continuación, el demandado puede hacer uso de la “dúplica” para un trámite equivalente (al de la “réplica” del actor) respecto de lo alegado por la contraparte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, en cuanto a su equivalencia con la “réplica” del actor, que como éste último no ha tenido oportunidad de formular en ella una nueva pretensión, no se contempla en la “dúplica” la posibilidad de oposición que existía en la “réplica”.

²²⁶ Trata de las mismas GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 295.

B- ARGUMENTOS A FAVOR

Este trámite no está específicamente previsto en la Ley para este juicio verbal, pues el párrafo II del art. 730 LEC sólo dispone que en la comparecencia “expondrán las partes, por su orden, lo que pretendan y a su derecho conduzca”, pero la doctrina lo admite por existir una serie de argumentos a su favor²²⁷.

a- LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD

El principal argumento a favor a tener en cuenta para introducir estos trámites en el juicio verbal, lo podemos encontrar en su legalidad y constitucionalidad, de acuerdo con los principios de contradicción o audiencia bilateral y de igualdad de armas, unido a la prohibición de la indefensión (que podría tener lugar en ausencia de este trámite) que deben imperar en todo proceso (art. 24 CE).

b- CONVENIENCIA Y UTILIDAD

Un segundo argumento a favor de estos trámites es el de su conveniencia y utilidad para la mejor cognición judicial, lo que ayudará a arribar a una mayor justicia en el caso concreto.

c- ANALOGIA CON OTROS PROCESOS

Argumentos de analogía en otros procesos pueden encontrarse en otras comparecencias similares, como la de los actos de conciliación o la de los juicios de interdictos.

d- CONTROL JUDICIAL

Cualquier abuso de alguna de las partes pretendiendo una extensión desmesurada de este trámite o extendiéndolo a aspectos que nada tienen que ver con el juicio, debe ser impedido por el Juez en ejercicio de sus potestades de decisión y control procesal. Puede valorarse este control judicial como un argumento positivo más a la hora de admitir el trámite de “réplica” y “dúplica” en nuestro juicio verbal.

VII- EVENTUAL SUSPENSION DEL JUICIO²²⁷

Cuando, de conformidad con lo que venimos exponiendo, alguna de las partes se haya visto racionalmente sorprendida por el planteamiento de la contraria, de forma que no pueda articular debidamente su defensa o su prueba, puede y debe solicitar la suspensión, en base al art. 24 CE que prohíbe la indefensión en todo caso, y el Juez podrá acordarla cuando a su juicio las razones que se aleguen al efecto sean de alguna entidad, impidiendo que la simple argumentación se utilice con fines dilatorios. En el caso de que fuese procedente, se hará en el acto señalamiento para el día más próximo posible, en atención a las circunstancias concurrentes.

²²⁷ Estos argumentos son recogidos por VÁZQUEZ SOTELO, Ley...cit., Tomo II, Art. 740, pág. 587.

²²⁸ A este respecto ver el art. 193 Proyecto:

“Artículo 193. Interrupción de las vistas.

1. Una vez iniciada la celebración de una vista, sólo podrá interrumpirse:

1º Cuando el tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto.

2º Cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del tribunal y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión.

3º Cuando no comparezcan los testigos o los peritos citados judicialmente y el tribunal considere imprescindible la declaración o el informe de los mismos.

4º Cuando, después de iniciada la vista, se produzca alguna de las circunstancias que habrían determinado la suspensión de su celebración.

2. La vista se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su interrupción.

3. Cuando no pueda reanudarse la vista dentro de los veinte días siguientes a su interrupción se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno señalamiento para la fecha más inmediata posible.

Lo mismo se hará, aunque no haya transcurrido dicho plazo, siempre que deba ser sustituido el Juez ante el que comenzó a celebrarse la vista interrumpida y, tratándose de tribunales colegiados, cuando la vista no

VIII- PRUEBA²²⁸*⁹⁹

La prueba es el siguiente estadio en la comparecencia del juicio verbal.

El recibimiento a prueba normalmente es solicitado por las partes, pero alguna parte de la doctrina²²⁹ entiende que en este juicio debe acordarse de oficio si los hechos son controvertidos, pues así lo da a entender la propia Ley cuando ordena, en el párrafo II del art. 730 LEC, que después de que las partes expongan por su orden lo que pretendan y a su derecho conduzca, se admitirán las pruebas (pertinentes que presentaren), con lo que está aludiendo a la actuación ex officio del órgano jurisdiccional. Esta interpretación es discutible, pero sí es cierto que sería conveniente aumentar las facultades de dirección del órgano jurisdiccional en materia de prueba, a fin de orientar a las partes respecto de los medios de prueba que pueden utilizar, pues recordemos que en este proceso la postulación no es preceptiva, llevando a cabo la práctica de las pruebas personales en forma parecida a

pueda reanudarse con Magistrados de los que ya actuaron en ella en número suficiente para dictar resolución.”

²²⁸ En materia de prueba seguimos a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 300 y ss., basándonos en el esquema empleado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 493 y ss..

*⁹⁹ Establece el art. 443.4 Proyecto, que si no hubiere conformidad sobre los hechos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente; la proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1º del art. 429, referente al juicio ordinario:

“Artículo 429. Proposición y admisión de la prueba. Señalamiento del juicio.

1. Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de la prueba.

Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, citándose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal.”

De acuerdo con el art. 445, en materia de prueba y de presunciones, será de aplicación a los juicios verbales lo establecido en los Capítulos V (arts. 281 a 298) y VI (arts. 299 a 386) del Título I del Libro II. Contra las resoluciones del Tribunal sobre inadmisión de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaron como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán formular protesta a efectos de hacer valer sus derechos en la segunda instancia (art. 446 Proyecto).

²²⁹ VÁZQUEZ SOTELO, Ley...cit., Tomo II, Art. 740, pág. 587.

la establecida para el proceso laboral (véanse los arts. 90 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), pues no resulta coherente a los principios orientadores del juicio verbal que se exijan en él, del modo que se exigen en el mayor cuantía, ciertas cuestiones para su práctica como especialmente la presentación de pliegos de preguntas en las pruebas de confesión y testifical y la insaculación de los peritos en la pericial²³⁰.

A continuación, definiremos la prueba y analizaremos sus requisitos, pasando más tarde a tratar las distintas fases por las que atraviesa.

A- CONCEPTO

La prueba es una actividad complementaria de la puramente alegatoria que tiene por objeto proporcionar al Juez el convencimiento psicológico de que lo alegado es cierto.

B- REQUISITOS

Conforme venimos haciendo, vamos a examinar, en orden a la prueba en general, someramente, los requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad.

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

Como en todo acto procesal, en la prueba aparecen tres clases de sujetos: el activo, el pasivo y el destinatario.

²³⁰ Puede consultarse al respecto de las particularidades de la prueba en el proceso laboral el manual de ALONSO OLEA, Manuel y MIÑAMBRES PUIG, César, Derecho Procesal del Trabajo, págs. 193 y ss., Editorial CIVITAS, novena edición, 1997, Madrid.

1- SUJETO ACTIVO^{*100}

El sujeto activo, como su propio nombre indica, es aquél de quien proceden las actividades probatorias. Por tanto, sujetos activos de la prueba puede ser normalmente cualquiera de las partes, pues la prueba es una actividad que en general, conforme al principio de aportación de parte corresponde a estas últimas. Sin embargo, como más adelante veremos, en nuestro Derecho se recoge la facultad excepcional de que el órgano jurisdiccional pueda también acordar su práctica de oficio a través de las diligencias para mejor proveer.

En cuanto a sobre quien recae la carga de la prueba, ya vimos cómo, en principio, el demandante debe probar los requisitos constitutivos de la pretensión que ejercita y la oposición que plantee frente a una posible reconvencción del demandado, mientras que al demandado compete probar su oposición (hechos impositivos, extintivos y excluyentes o excepciones en sentido propio) y los requisitos constitutivos de la reconvencción, si hiciere uso de ella. Por tanto, puede concluirse que la carga probatoria se distribuye en función de lo alegado por cada parte, y tal es la orientación jurisprudencial seguida en la materia.

2- SUJETO PASIVO

Sujeto pasivo de la prueba es, en consecuencia, quien soporta o sobre quien recaen las actividades probatorias, es decir, la parte contraria a aquélla por cuya iniciativa la prueba se practica.

^{*100} Sobre la iniciativa de la actividad probatoria, ver el art. 282 Proyecto:

“Artículo 282. Iniciativa de la actividad probatoria.

Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley.”

3- DESTINATARIO

Destinatario de la prueba es siempre el Juez: *iudici fit probatio*, pues el que el Juez excepcionalmente, como veremos, asuma la iniciativa de la prueba, no quiere decir que no sea su destinatario, ya que la prueba se practica precisamente para convencer al Juez.

b- REQUISITOS OBJETIVOS^{*101}

Como la actividad probatoria es una actividad complementaria de las alegaciones, se puede decir que el objeto de la prueba son los datos en que consisten las alegaciones. Estos datos pueden ser datos de hecho (alegaciones fácticas) o datos de derecho (alegaciones jurídicas).

Los datos de hecho tienen que ser probados, con tres excepciones: los hechos admitidos incondicionalmente por ambas partes (art. 565 LEC, que se refiere a la llamada “confesión llana”); los hechos presumidos (art. 1250 CC); y los hechos notorios, es decir, aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado grupo social en el lugar y en el tiempo donde se desarrolla el proceso.

Las alegaciones jurídicas, es decir, el Derecho, en base al principio *iura novit curia*, no necesitan ser probadas, siempre que este Derecho esté escrito, sea interno y sea general. Por tanto, tendrán que ser probados: la costumbre, por no estar escrita; el Derecho extranjero, por no ser interno; y el Derecho singular, excepcional o privilegiado, por no ser

^{*101} En cuanto al objeto de la prueba, se debe consultar el art. 281 Proyecto:

“Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba.

1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.

2. También serán objeto de prueba la costumbre y el Derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes.

general. En general, la jurisprudencia viene entendiendo que han de ser probadas todas aquellas normas que no se publiquen en el BOE, o en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas.

c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

La actividad probatoria se descompone, como cualquier otra, en tres grandes dimensiones: lugar, tiempo y forma.

1- LUGAR

En cuanto al lugar, en materia probatoria rigen las reglas generales, es decir, en principio, la prueba deberá practicarse en la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional, siendo de aplicación también las reglas ya vistas sobre el traslado o auxilio judicial, si tuviera que practicarse fuera de alguno de estos territorios.

2- TIEMPO

En lo que se refiere al tiempo, la prueba tiene que practicarse dentro del término ordinario de prueba, pero éste puede ampliarse en determinadas circunstancias, denominándose entonces término extraordinario.

- PLAZO ORDINARIO

Dentro del plazo ordinario de prueba, hay que distinguir entre si son o no pruebas practicables en el acto del juicio.

4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.”

Si son pruebas practicables en el acto del juicio, serán, en consecuencia, practicadas en la comparecencia (art. 730.I y II LEC).

Si por el contrario son pruebas no practicables en la comparecencia, el plazo para evacuarlas no podrá, en principio, exceder de doce días (art. 730.III LEC).

- PLAZO EXTRAORDINARIO

El plazo extraordinario de prueba se regula en los arts. 555 a 562 LEC y se otorgará si hubiere de ejecutarse alguna fuera del territorio nacional (art. 730.III LEC).

Este término extraordinario será de cuatro meses si la prueba hubiere de ejecutarse en Europa, y de seis si fuera en cualquier otra parte del mundo (art. 556 LEC).

La concesión del término extraordinario de prueba comienza con la petición de la parte interesada, en el plazo de tres días (aunque lo normal en este juicio es que la prueba se practique toda el mismo día, si es practicable en el acto del juicio, y por tanto la solicitud debe hacerse en la misma comparecencia) desde que se abre el pleito a prueba (y si, en principio, los hechos hubieren tenido lugar en ese otro país); sigue con la intervención de la parte contraria; y finaliza con la resolución por medio de auto, apelable en un solo efecto (arts. 557 a 560 LEC).

El plazo extraordinario comienza a contarse desde el día siguiente al de la notificación del auto en que se hubiere otorgado, y exige su efectiva utilización bajo la sanción de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios de cuantía limitada, según los arts. 561 y 562 LEC.

3- FORMA

Sobre la forma, debemos apuntar que, además de en castellano o lengua de la CA (art. 23.1 LOPJ), la prueba se hará en general oralmente en cuanto a su solicitud y proposición, aunque algún medio de prueba en concreto necesitará de apoyo escrito.

C- FASES PROBATORIAS

No obstante no aparecer recogidas específicamente en la LEC, que distingue los dos periodos clásicos de proposición y práctica, la doctrina suele distinguir los siguientes estadios o fases probatorias: solicitud de recibimiento del juicio a prueba; recibimiento a prueba; proposición de pruebas en concreto; admisión concreta de pruebas; y práctica de las pruebas.

a- SOLICITUD DE RECIBIMIENTO A PRUEBA

La solicitud de recibimiento a prueba es aquella petición de parte encaminada a que el Juez autorice la apertura de la fase probatoria, con el fin de llevar a su convencimiento aquellos hechos sobre los que no existe conformidad de la parte contraria²³¹.

Esta petición genérica de prueba puede haberse hecho ya en la demanda inicial o dentro de la comparecencia, al deducir la pretensión y la oposición a la pretensión; sin embargo, basta con que en el estado actual del trámite se solicite por las partes. Por tanto, esta solicitud se hará oralmente y en la misma Sala de Audiencias del Juzgado donde se esté celebrando la comparecencia.

b- RESOLUCION JUDICIAL: RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA

Ante la petición de recibimiento del juicio a prueba, el Juez puede adoptar dos actitudes: denegarlo o acordarlo.

1- DENEGACION DEL RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA²³²

Si a la vista de la solicitud formulada verbalmente por las dos o al menos una de las partes, el Juez decide denegar el recibimiento del juicio a prueba por existir conformidad en los hechos y ser ésta innecesaria, así lo resolverá mediante acuerdo verbal, dado el carácter oral de esta etapa de la comparecencia del juicio verbal que analizamos (puede decirse que el acuerdo es un tipo de providencia de carácter no formal para la resolución de las cuestiones que se presentan en las actuaciones orales que requieran este tipo de resolución).

Por tanto, el objeto de esta resolución se constriñe al análisis de la existencia o no de la conformidad sobre los hechos jurídicamente relevantes y a la existencia o no de la petición de recibimiento del juicio a prueba²³³.

Como la inadmisión del juicio a prueba puede causar perjuicio a las partes, el acuerdo denegatorio es recurrible en ambos efectos, conforme a la teoría general del art. 551 LEC. Sin embargo, por analogía con el juicio de cognición (proceso ordinario siguiente al verbal en orden de importancia cuantitativa), el recurso que cabe será el de reposición (art. 55.II Decreto 21-11-1952), sustanciándose éste oyendo a las partes en el mismo acto, y contra la confirmación de esa denegación por parte del Juez deberá de

²³¹ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 62, pág. 499.

²³² Se trata del mismo por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 64, págs. 502 y 503.

manifestar la parte su protesta, requisito indispensable para poder solicitar en su caso, al entablar el recurso de apelación ante el Juzgado superior, el recibimiento del juicio a prueba y se practiquen las que en su caso se propongan. Si por el contrario, el Juez rectifica su acuerdo denegatorio primitivo, nos encontraremos en el siguiente supuesto.

2- RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA²³⁴

Si no existe conformidad en los hechos y al menos una parte lo solicita, el Juez debe recibir el juicio a prueba mediante acuerdo verbal adoptado en la misma comparecencia (igual que en el caso denegatorio visto anteriormente).

El objeto de esta resolución positiva es el mismo que el de la denegatoria.

En lo referente a los recursos, debe entenderse que, contra el acuerdo de recibimiento del juicio a prueba, no se da recurso alguno (art. 551 LEC).

c- PROPOSICION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA^{*102}

La proposición de pruebas en concreto (tercera fase probatoria) es el acto por el que los litigantes solicitan se acuda a uno o varios de los medios de prueba admitidos en Derecho para justificar los hechos sobre los que existe disconformidad²³⁵.

De lo dicho, se desprende que la proposición debe proceder de alguna de las partes, por lo que, ni el Juez ni quien no sea parte puede proponer pruebas.

²³³ Puede consultarse al respecto la obra de PICÓ I JUNOY, J.: El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. JM Bosch Editor, 1995, Barcelona.

²³⁴ Se trata del mismo por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 63, págs. 501 y 502.

^{*102} En cuanto a la forma de proposición de la prueba, ha de consultarse el párrafo I del art. 284 Proyecto:

“Artículo 284. Forma de proposición de la prueba.

La proposición de los distintos medios de prueba se hará expresándolos con separación. Se consignará, asimismo, el domicilio o residencia de las personas que hayan de ser citadas, en su caso, para la práctica de cada medio de prueba.”

²³⁵ Concepto dado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 65, pág. 504.

Es requisito objetivo el que la proposición debe referirse a alguno de los medios permitidos por la Ley, y que además sean pertinentes y útiles al fin al que se encaminan (art. 566 LEC).

La proposición se hará oralmente en la comparecencia ante el Juez, comenzando primero el actor y siguiendo después el demandado. En el caso de que hubiera existido reconvencción, se propone la prueba que tenga relación con el pleito principal en la forma indicada anteriormente, y a continuación se propone la prueba de aquélla, en primer lugar por el demandado (*demandante del pleito reconvenccional*) y después por el demandante (*demandado en la reconvencción*).

En cuanto a los medios de prueba que pueden proponerse en concreto, estos son: la prueba de confesión, la prueba testifical, la prueba pericial, la prueba documental, el reconocimiento judicial y las presunciones (arts. 578 LEC y 1215 CC)^{*103}.

^{*103} Los medios de prueba que el Proyecto recoge son los del art. 299, y como vemos, no se trata de *numerus clausus*:

“Artículo 299. Medios de prueba.

1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:

1º Interrogatorio de las partes.

2º Documentos públicos.

3º Documentos privados.

4º Dictamen de peritos.

5º Reconocimiento judicial.

6º Interrogatorio de testigos.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.”

Uno de estos medios de prueba son los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso (art. 299.2). La proposición y práctica de este nuevo medio de prueba puede encontrarse en la Sección 8ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II (arts. 382 a 384):

SECCIÓN 8.ª

De la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso

“Artículo 382. Instrumentos de filmación, grabación y semejantes. Valor probatorio.

1- CONFESION²³⁶*104

1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte podrá acompañar en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.

2. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido.

3. El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado primero de este artículo según las reglas de la sana crítica.”

“Artículo 383. Acta de la reproducción y custodia de los correspondientes materiales.

1. De los actos que se realicen en aplicación del artículo anterior se levantará la oportuna acta, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones llevadas a cabo, así como, en su caso, las justificaciones y dictámenes aportados o las pruebas practicadas.

El tribunal podrá acordar mediante providencia que se realice una transcripción literal de las palabras y voces filmadas o grabadas, siempre que sea de relevancia para el caso, la cual se unirá al acta.

2. El material que contenga la palabra, la imagen o el sonido reproducidos habrá de conservarse por el tribunal, con referencia a los autos del juicio, de modo que no sufra alteraciones.”

“Artículo 384. De los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso.

1. Los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos como prueba, serán examinados por el tribunal por los medios que la parte proponente aporte o que el tribunal disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su derecho convenga.

2. Será de aplicación a los instrumentos previstos en el apartado anterior lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 382. La documentación en autos se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del Secretario Judicial, que, en su caso, adoptará también las medidas de custodia que resulten necesarias.

3. El tribunal valorará los instrumentos a que se refiere el apartado primero de este artículo conforme a las reglas de sana crítica aplicables a aquéllos según su naturaleza.”

El orden de práctica de los medios de prueba se regula en el art. 300:

“Artículo 300. Orden de práctica de los medios de prueba.

1. Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro distinto, las pruebas se practicarán en el juicio o vista por el orden siguiente:

1º Interrogatorio de las partes.

2º Interrogatorio de testigos.

3º Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.

4º Reconocimiento judicial, cuando no se haya de llevar a cabo fuera de la sede del tribunal.

5º Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.

2. Cuando alguna de las pruebas admitidas no pueda practicarse en la audiencia, continuará ésta para la práctica de las restantes, por el orden que proceda.”

²³⁶ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 319 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 506 y ss.; véase la monografía sobre la materia de BONET NAVARRO, Ángel: La Prueba de Confesión en juicio. JM Bosch Editor, 1979, Barcelona.

¹⁰⁴ La prueba de confesión pasa a denominarse en el Proyecto interrogatorio de las partes (Sección 1ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II). En lo que a su proposición se refiere, podemos citar los arts. 301 y 302.

La confesión es una de las pruebas personales, pues tiene como instrumento a las partes, que puede llevarse a cabo en el proceso.

- CONCEPTO

Con carácter general, confesión es cualquier declaración de las partes que desempeñe una función probatoria dentro del proceso²³⁷. Dicho de otro modo, la prueba de confesión es un modo de valorar el elemento probatorio que resulta de la ciencia propia de la parte como medio de prueba²³⁸.

- NATURALEZA JURIDICA

Se trata, como hemos dicho, de una prueba procesal personal, cuyo instrumento son las partes.

Según el art. 579 LEC, todo litigante está obligado a declarar. Esta expresión legal puede dar lugar a pensar que la confesión es jurídicamente una obligación, cuando lo cierto es que constituye una carga, puesto que la única consecuencia que se puede extraer en caso de incomparecencia de la parte, de negativa a responder, o de responder con negativas, es la de tenerle por confeso, es decir, que el Juez tendrá por ciertos los hechos que le perjudiquen.

- CLASES

La clasificación más relevante de la prueba de confesión es la que distingue entre confesión bajo juramento decisorio o indecisorio. Será de una u otra clase a elección del

²³⁷ Concepto tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 320.

²³⁸ Concepto tomado de PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Leonardo; Exhibición, Tomo I, pág. 256, 1942, citado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., pág. 506.

que la pida. El primer tipo de confesión decide haciendo prueba plena (es decir, será vinculante para el Juez) sobre los hechos que se confiesen, mientras que el segundo tipo es un medio de prueba cuya valoración examinaremos al estudiar la técnica de la sentencia.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

La proposición de la confesión, además de tener que ser pertinente y útil, deberá cumplir, como siempre, una serie de requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

La confesión es un medio de prueba que, como todos, sólo puede pedir quien sea parte en el proceso (arts. 1235 CC y 579 LEC).

Por otra parte, la confesión sólo puede exigirse de quien sea parte. Así se establece en el art. 579 LEC, cuando dispone que “todo litigante está obligado a declarar, bajo juramento, cuando así lo exigiere el contrario”.

Por tanto, la confesión es un acto personalísimo.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

Los requisitos objetivos han de referirse a la posibilidad y licitud de la prueba cuya proposición se pretende. Se requiere por ello: que se concrete a hechos que sean objeto del debate (art. 581 LEC); que se dirijan a obtener la declaración del litigante contrario; que no se refieran a hechos punibles ni a cuestiones acerca de las cuales las partes no puedan transigir cuando se pretenda la declaración bajo juramento decisorio (art. 1237 CC); además de los requisitos formales que en el período de práctica indicaremos.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

En cuanto al lugar, la proposición debe forzosamente hacerse en la Sala de Audiencia del Juzgado competente para conocer del asunto, o por medio de comparecencia o escrito, presentado en la Secretaría del Juzgado encaminado a realizar la proposición de tal medio de prueba, ya que, como veremos posteriormente, la prueba de confesión puede *practicarse en momento distinto del señalado con carácter general*.

En cuanto al tiempo, la regla general es que la confesión se propone durante el término probatorio en la comparecencia, a continuación del acuerdo del órgano jurisdiccional recibiendo el juicio a prueba. Sin embargo, existen algunos casos en que puede proponerse fuera de ese momento: como hemos visto, una de las diligencias preliminares del juicio consiste en pedir declaración jurada, el que pretenda demandar a aquél contra quien se propone dirigir la demanda, acerca de algún hecho relativo a la personalidad de éste, sin cuyo conocimiento no puede entrarse en el juicio, conforme se establece en el art. 497.1º LEC, o también cuando el confesante se encuentre en alguna de las circunstancias del art. 502 LEC; una vez concluido el término probatorio y hasta la declaración del juicio visto para sentencia, puede proponerse la prueba de confesión (art. 579 LEC), aunque con dos limitaciones, que sólo puede pedirse una vez y que no podrá versar sobre hechos que hayan sido objeto previamente de confesión; por último, también puede acordarse, como veremos, para mejor proveer después de la declaración de conclusión del juicio, la prueba de confesión respecto a cualquiera de los litigantes sobre hechos que los Jueces estimen de influencia en la cuestión y no resulten probados, conforme a lo dispuesto en el art. 340.2º LEC.

En lo referente a la forma, la proposición de la prueba de confesión ha de hacerse en forma oral.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y PLIEGO DE POSICIONES

Junto a la proposición genérica de tal medio de prueba debe indicarse: si se quiere que la declaración se haga bajo juramento decisorio o indecisorio (en la práctica el primero está en completo desuso); y la forma y el momento en que la parte presentará el pliego de posiciones (en el proceso laboral las posiciones se proponen in voce, de acuerdo al art. 91.1 Ley de Procedimiento Laboral, y esto mismo debería aplicarse al juicio verbal, debido al principio de oralidad que lo informa).

El pliego de posiciones es la serie de preguntas que se van a formular al confesante. Las posiciones no se formulan de manera interrogativa, sino que son proposiciones afirmativas que adelantan la respuesta y comienzan, según el uso forense, con la fórmula: “Confiese se cierto que...”.

Según el art. 582 LEC, la parte no tiene obligación de presentar el interrogatorio hasta el momento mismo de la práctica de dicho medio de prueba, y esto es lo que normalmente se hace en el juicio verbal, para no perder las ventajas del secreto de las posiciones. Sin embargo, puede optarse también por presentarse en este momento, o incluso presentarse en pliego cerrado para que sea conservado por el Juez sin abrirlo, hasta el momento de absolver las posiciones (párrafo I del art. 582 LEC). Además, no tienen que aportarse copias; según Guasp²³⁹, el art. 581.III LEC configura erróneamente como necesidad, en vez de como facultad, el hecho de presentar las posiciones sin copia.

El interrogatorio o pliego de posiciones, de acuerdo con el art. 581.I LEC, ha de presentarse por escrito para que el Juzgado acuerde unirlo al acta.

Si la confesión que se propone, por algún motivo de peso, no va a poder practicarse a continuación durante la misma comparecencia, habrá de solicitarse por la parte interesada la ampliación del plazo probatorio hasta el máximo de doce días que permite el art. 730.III, así como la práctica del auxilio si fuera necesario porque el confesante residiera fuera de la circunscripción del órgano jurisdiccional.

Si, por otro lado, la confesión debe realizarse fuera del territorio nacional, la parte solicitante deberá pedir la concesión del término extraordinario de prueba (cuatro o seis meses), oyendo a continuación el Juez a la parte contraria (arts. 555 y ss. y 730.III LEC).

2- TESTIFICAL^{240*105}

El testimonio es otra prueba personal, cuyo instrumento son los testigos.

- CONCEPTO

La prueba testifical es aquella por la que los testigos, que son aquellos terceros que sin ser partes conocen el dato a probar de un modo extraprocesal, emiten declaraciones sobre hechos que conocieron con carácter anterior o previo al proceso.

- NATURALEZA JURIDICA

Como hemos dicho, se trata de una prueba procesal personal. Sin embargo, se distingue de la confesión en que el instrumento del testimonio es un tercero, no las partes. Por otro lado, se distingue de la pericia en que ésta recae sobre datos procesales, mientras

²³⁹ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 329.

²⁴⁰ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 336 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 525 y ss..

^{*105} La prueba testifical se denomina en el Proyecto interrogatorio de testigos (Sección 7ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II). En cuanto a su proposición podemos citar los arts. 360 y 362.1.

que el testimonio recae sobre datos extraprocesales en el momento de su aprehensión por el sujeto que luego declara sobre ellos.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

La prueba testifical tiene que cumplir, como cualquier otra prueba, una serie de requisitos (subjetivos, objetivos y de la actividad) para su admisibilidad.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

La prueba testifical es acto de parte.

Sujeto activo será, por tanto, la parte que tenga interés en la proposición de tal medio de prueba. Sujeto pasivo será la parte contraria. Destinatario, el Juez.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

En general, el testimonio se admite en todos los casos, salvo que se halle expresamente prohibido (art. 1244 CC).

En primer lugar, el art. 1248 CC dispone que “por la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, debe evitarse por los Tribunales que queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba por escrito”. Ahora bien, no es exactamente una prohibición para la admisión de la prueba, sino más bien una recomendación.

En segundo lugar, el art. 51 CCo. dispone que la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pts., a no concurrir con alguna otra prueba.

En tercer lugar, el art. 637 LEC establece que sobre los hechos probados por confesión judicial no se permitirá para corroborarlos prueba de testigos a ninguna de las partes.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

El lugar de la proposición ha de ser, según la regla general, la circunscripción, sede, local y Sala de Audiencia del Juzgado.

El tiempo de su proposición será, igual que el de las demás pruebas, el momento inmediatamente siguiente a la declaración judicial del recibimiento del juicio a prueba. Sin embargo, excepcionalmente puede proponerse la prueba testifical con anterioridad al período probatorio, cuando, según el art. 502 LEC, por edad avanzada de algún testigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una ausencia a punto con el cual sean difíciles o tardías las comunicaciones u otro motivo poderoso, pueda exponer al actor a perder su derecho por falta de justificación, en cuyo caso podrá pedir, y el Juez decretará, que sea examinado el testigo o testigos que estén en las circunstancias referidas, con los requisitos generales que para la práctica de la prueba testifical se establecen en los arts. 637 y ss. LEC. Posteriormente al período probatorio, no puede proponerse la prueba testifical, y sólo cabe ya la opción de acordarse de oficio por el Juez a través de una diligencia para mejor proveer (art. 340.4º LEC).

En cuanto a la forma, la proposición del testimonio se hará en forma oral.

**- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA,
INTERROGATORIO DE PREGUNTAS Y LISTA DE TESTIGOS**

Ha de presentarse al proponer tal prueba el interrogatorio (o pliego de preguntas) y la lista de testigos, con sus copias. Por tanto, ambos han de presentarse por escrito (art. 638 LEC).

El interrogatorio de preguntas que se van a formular a los testigos ha de cumplir, conforme al art. 638 LEC, varios requisitos: las preguntas han de hacerse por la parte que pide tal medio de prueba; las preguntas han de referirse a hechos de influencia en el pleito; han de ser claras y precisas; han de numerarse correlativamente. También ahora se redactarán proposiciones afirmativas que suelen comenzar con la fórmula: “Diga ser cierto que...”. Recordemos que en el proceso laboral se prohíbe este interrogatorio de preguntas (art. 92.1 Ley de Procedimiento Laboral), lo cual contribuye a la celeridad y oralidad de la causa, por lo que debería dicho proceso laboral ser tomado de ejemplo para el juicio que nos ocupa.

La lista de testigos, por su parte, ha de contener los siguientes requisitos, según establece el art. 640 LEC: nombre y apellidos de los testigos; su profesión u oficio, vecindad y las señas de su habitación, si le constase. Aunque no se refiere a ello el art. 640, además se acotarán las preguntas que cada testigo tiene que contestar y se aclarará si se encarga la parte proponente de comunicar al testigo el momento para la práctica de la prueba, o si el testigo ha de ser citado judicialmente. En este último caso, el testigo puede residir dentro de la circunscripción del órgano jurisdiccional (art. 643 LEC), o fuera de la misma (art. 656 LEC), en cuyo caso habrán de tenerse en cuenta las disposiciones del auxilio judicial, acompañando al exhorto o despacho el interrogatorio de preguntas y, en sobre cerrado, el de repreguntas admitidas por el Juez; también podrá pedir la parte en este

caso la ampliación del término ordinario de prueba (hasta doce días máximo) o la ampliación al extraordinario si fuere el caso (arts. 555 y ss. LEC).

De las copias del interrogatorio y de la lista se dará traslado a la parte contraria (arts. 638 y 640 LEC) para que formule, si quiere, el interrogatorio de repreguntas (art. 641 LEC), que se redactará igual que el interrogatorio de preguntas, aunque en la práctica se ha acuñado como fórmula para empezar: “Diga ser más cierto que...”. Este interrogatorio de repreguntas se presentará en pliego cerrado o abierto, en cuyo caso quedará bajo custodia y responsabilidad del Juez. Por tanto, del interrogatorio de repreguntas no se presentan copias. En cuanto al momento de presentar las repreguntas, debemos recordar que a pesar de la rapidez del juicio verbal y a pesar de que nada se regula al respecto en la Ley, creemos que el Juez deberá dar plazo a la parte contraria, si ésta así lo pide, para que, a la vista del interrogatorio, formule aquéllas, pues no cabe pensar que esta formulación deba hacerse irreflexivamente sobre la marcha, ya que se incurriría entonces en una probable indefensión que prohíbe el art. 24.1 CE (y además, recordemos que, según se desprende del art. 641 LEC, este interrogatorio de repreguntas deberá presentarse por escrito, exigencia ésta de difícil cumplimiento si el mismo hubiere de confeccionarse en plena comparecencia. Esta exigencia de presentación por escrito es una consecuencia de la aplicación al juicio verbal de las reglas del mayor cuantía; debería, repito, tomarse en consideración la regulación de la práctica de esta prueba en el proceso laboral, en el que no se admiten escritos de preguntas y repreguntas (art. 92.1 Ley de Procedimiento Laboral). Es evidente que esta posibilidad no habrá de presentarse si el demandado se encuentra en rebeldía, pues en este caso este último no va a formular ninguna repregunta, por lo que la práctica de la prueba testifical se hará a continuación de su admisión.

3- PERICIAL^{241*106}

El peritaje es la última de las pruebas personales, aunque en esta ocasión su instrumento son los peritos.

- CONCEPTO

La prueba pericial es aquella por la que el perito, sin ser parte del proceso, declara sobre datos incorporados al mismo en el momento de su captación y para cuya apreciación son precisos conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

- NATURALEZA JURIDICA

Ya hemos apuntado anteriormente que la pericia es una prueba procesal personal porque tiene como instrumento a la persona del perito.

Un problema clásico respecto de este medio de prueba es si los peritos son colaboradores o asesores del órgano jurisdiccional o si se trata de un auténtico medio de prueba. Desde luego, nosotros entendemos, junto a la mayoría de la doctrina, que la pericia es una verdadera prueba, pues el dictamen pericial sirve para aportar datos al proceso y para obtener el convencimiento psicológico del Juez de que lo alegado es cierto.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

Rigen en este punto las reglas generales sobre la proposición de los medios de prueba.

²⁴¹ GUASP. Derecho...cit., Tomo I, págs. 353 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 522 y 523; véase también la monografía de FONT SERRA, E.; La Prueba de Peritos en el Proceso Civil Español. Hispano Europea, 1975, Barcelona.

^{*106} La prueba pericial se denomina en el Proyecto dictamen de peritos (Sección 5ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II). Sobre su proposición, citaremos los arts. 335.1, 336 (salvo 336.4), 337, 338 y 339.

En cuanto a los requisitos subjetivos: sujeto activo es el que propone tal medio de prueba, por interesarle éste (art. 611 LEC); sujeto pasivo es el adversario; y destinatario de la petición es el Juez.

Por lo que se refiere a los requisitos objetivos, la prueba pericial ha de referirse a la apreciación de hechos de influencia en el pleito, y para los que sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos (arts. 610 LEC y 1242 CC).

En cuanto a la actividad: el lugar de proposición será la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional; el tiempo, el siguiente al recibimiento del juicio a prueba en el acto de la comparecencia; y la forma, oral.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECIFICA

Junto a la proposición genérica ha de determinarse lo que haya de ser objeto de la pericia y si han de ser uno o tres los peritos que se nombren (art. 611 LEC).

Hecha la proposición, se oirá en el acto a la parte contraria para que se pronuncie acerca de la pertinencia de este medio de prueba, y en el caso de que la estime pertinente manifieste su conformidad o no con el número de peritos propuestos y si es necesario o no ampliar el objeto de la pericia a otros extremos distintos de los señalados por el proponente (art. 612 LEC).

4- DOCUMENTAL^{242*107}

La prueba documental es una de la pruebas reales que pueden proponerse en el proceso, pues tiene como instrumento una cosa (el documento).

²⁴² GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 362 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 514 y ss..

- CONCEPTO

No existe una concepción unánime respecto del documento.

Según la concepción más estricta (más próxima a la LEC), un documento es aquel medio de prueba que consiste en un objeto material que incorpora la expresión escrita de un pensamiento humano susceptible de ser incorporado al expediente²⁴³.

- NATURALEZA JURIDICA

El documento es un verdadero medio de prueba procesal, puesto que se encamina a lograr la convicción psicológica del Juez. En concreto, pertenece al grupo de las pruebas reales porque se sirve de un objeto físico (el documento), que además, en el caso de esta prueba, es susceptible de ser llevada a presencia judicial. Por último, el documento tiene la característica de ser una prueba preconstituida.

- CLASES DE DOCUMENTOS

Existen varias clasificaciones de los documentos, pero la más usual e importante es la que distingue entre documentos públicos y privados.

Documentos públicos, según el art. 1216 CC, son los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley. La doctrina ofrece un concepto de documento público más concreto, y entiende que lo son aquellos cuya realización final ha autorizado una persona que tiene atribuida la facultad de dar fe de la fecha, de los sujetos intervinientes y de los actos realizados por estos en presencia del

²⁴³ En cuanto a la prueba documental (Secciones 2ª, 3ª y 4ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II), ver los arts. 317, 324, 327 y 328 a 333.

fedatario. La LEC no define los documentos públicos, pero hace una enumeración de ellos en el art. 596, que puede ser reconducida a tres categorías: documentos administrativos (art. 596.3º, 4º y 5º LEC), si están intervenidos por un funcionario que tiene fe pública; documentos judiciales (art. 596.7º LEC), si están dotados de la fe pública del Secretario Judicial; y documentos notariales (art. 596.1º, 2º y 6º LEC) en sentido amplio (equiparables por su eficacia a los documentos públicos), si están autorizados por un Notario o por un fedatario mercantil.

Por el contrario, documentos privados son los que se redactan por los particulares (correspondencia, contabilidad, títulos de crédito o valores, facturas, escrituras privadas, libros de los comerciantes...etc.).

En cuanto a los libros de comercio (arts. 25 a 33 CCo y Decretos de 22 de febrero de 1973 y 20 de julio de 1974), que ya hemos visto pertenecen a la modalidad de documentos privados, se ha de distinguir en ellos los que son facultativos (libro Mayor) de los que son obligatorios, bien para todos los empresarios (libro de Inventarios y Cuentas Anuales y libro Diario, según el art. 25.1 CCo), bien sólo para algunos (libro de Actas, libro de Acciones...)²⁴⁴.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

En cuanto a los requisitos subjetivos: sujeto activo será el litigante que quiera hacer valer tal medio de prueba; sujeto pasivo, la parte frente a quien se hace valer; destinatario, el Juez.

²⁴³ Este concepto es próximo al dado por PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Exhibición (cit.), Tomo I, pág. 267, citado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., pág. 514.

²⁴⁴ Se pueden consultar al respecto los diversos manuales de Derecho Mercantil que existen, como por ejemplo el coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J.; Derecho Mercantil, Volumen I, Capítulo 10 (por David MORÁN BOVIO), págs. 117 y ss., Editorial Ariel, S.A., 4ª edición, 1997, Barcelona.

En este punto, se plantea el problema de la disponibilidad de los documentos, pudiendo distinguirse entre que se trate de documentos públicos, privados o libros de comercio²⁴⁵.

Si se trata de documentos públicos, la Ley dispone su asequibilidad a los ciudadanos con carácter general, pues el art. 105 b) CE establece que la Ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Ha de mediar petición del interesado a la autoridad o funcionario público en cuyo poder se encuentre el documento. Por último, la denegación puede producir una responsabilidad penal, civil o disciplinaria.

Si son documentos privados, habrán de señalarse tres posibilidades: que el documento se halle en poder de la parte a quien interesa, en poder de la parte contraria o en poder de un tercero. Si el documento que se quiere proponer como medio de prueba está en poder de la propia parte, ésta simplemente tendrá la carga de utilizarlo; de ellos se presentarán originales y se unirán a los autos, y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo podrán presentarse por exhibición, para que se ponga testimonio de lo que señalen los interesados (art. 602.I y II LEC). Si el documento está en poder de la parte contraria, creemos que, mediante interpretación a contrario sensu del art. 603 LEC, aquélla tiene obligación de exhibirlo, por lo que en la proposición la parte interesada propondrá el requerimiento de su exhibición por la parte contraria²⁴⁶, con el apercibimiento de que, en caso de no exhibirse, se proceda conforme a lo que haya lugar en Derecho, es decir, se

²⁴⁵ Clasificación y sistemática tomada de ARAGONESES ALONSO, Programa y Esquemas...cit., págs. 35 y ss..

²⁴⁶ Sobre este deber de exhibición por el colitigante y el requerimiento al mismo puede consultarse la obra de PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, Leonardo; Estudios y Comentarios para la Teoría y la Práctica Procesal

puede proceder al registro de libros y papeles del art. 571 LEC (aunque en la práctica, éste no suele practicarse por no resultar efectivo), y si se acredita que tal documento requerido y no exhibido estaba en poder de ese litigante puede pedírsele indemnización por daños y perjuicios y además presumir el Juez que el documento (no exhibido) es favorable a la otra parte. Si el documento está en poder de un tercero, ha de recurrirse al art. 603 LEC (modificado por la Ley 34/1984, de 6 de agosto)²⁴⁷, según el cual sólo se requerirá la exhibición si el Juez entiende que su conocimiento será trascendente a la hora de dictar sentencia, ordenándose entonces la comparecencia personal del tercero, a fin de oírle sobre la posible aportación de los mismos; si el tercero los exhibe voluntariamente, habrá de procederse a hacer el testimonio correspondiente en la Secretaría del Juzgado, si se presenta en ella, o en la casa u oficina del tercero si éste lo exige, actuándose siempre previa citación de las partes, en la forma y con los trámites de los arts. 597 y 599 LEC; si el tercero se niega a su exhibición, el Juez decidirá lo que proceda, no sólo teniendo en cuenta la importancia de los documentos para el proceso, sino también los posibles perjuicios que se puedan causar a dicho tercero, que puede hacer valer su derecho a la intimidad para que el Juez lo valore, aunque la decisión del Juzgador acordando la exhibición es irrecurrible (salvo en amparo constitucional) e imperativa, de tal modo que si el tercero se niega a presentar el documento puede cometer un delito de desobediencia; no trata la Ley el supuesto de que los documentos no sean de la propiedad exclusiva de un tercero, en cuyo caso la actuación dependerá de quién tenga con él la propiedad compartida, pues según sea

Civil, Volumen I, Art. 603, párrafo 25, ptos. 7, 8 y 9, págs. 175 y ss.. Instituto Editorial Reus, 1950, Madrid.

²⁴⁷ Los comentarios a este artículo han sido tomados de SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ricardo; Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia. Dirección José Luis Albácar López, Tomo II (Arts. 460 al 1480), Art. 603, págs. 449 y 450. Editorial Trivium, S.A., 2ª edición, Junio 1994, Madrid.

algún litigante u otro tercero, habrá de conjugarse lo establecido en este artículo 603 con lo dispuesto en el 602 LEC.

En cuanto a los libros de los comerciantes (ya vimos que se trata de documentos privados), tener en cuenta que si no se llevan regularmente esto puede dar lugar a presunción en contra, por lo que existe obligación de presentarlos (art. 32.3 CCo), aunque no físicamente en Secretaría, sino a disposición del Juez en su propia empresa (arts. 605 LEC y 33.2 CCo).

En lo que se refiere a los requisitos objetivos, la proposición de la prueba documental persigue solamente la demostración de los hechos que se contienen en los documentos que se presentan, y no la de eventuales contenidos jurídicos. Para los documentos privados, han de tenerse en cuenta las prescripciones contenidas en los arts. 1225 a 1230 CC, respecto a la eficacia de tal medio de prueba.

Por lo que se refiere al lugar, éste será, como en cualquier otro medio de prueba, el del órgano jurisdiccional.

En lo referente al tiempo, la proposición se hará en la comparecencia. Todos los documentos, incluidos los mencionados en los arts. 503 y 504 LEC, salvo que se hubiera optado por presentarlos junto a la demanda, se presentarán al mismo tiempo que se formulan las alegaciones iniciales, es decir, según se van afirmando los hechos en que se apoya la pretensión u oposición. Sin embargo, veremos como, excepcionalmente, pueden presentarse documentos después del término probatorio, en que se ha de hacer la proposición de prueba, y hasta la citación para sentencia, en determinados casos de inexistencia, desconocimiento o indisponibilidad del documento (art. 506 LEC).

En cuanto a la forma, la proposición se hará oralmente.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECIFICA

Al proponer el referido medio de prueba respecto a los documentos públicos, habrán de hacerse constar determinadas circunstancias recogidas en el art. 597 LEC, para que estos sean eficaces en juicio: que los documentos que se incorporen al pliego sin citación contraria tienen que cotejarse con los originales, previa dicha citación, en el supuesto de que hubiesen sido impugnados expresamente, pues, en otro caso, tales documentos no necesitan cotejo para ser eficaces en juicio; que los que hubieren de llevarse a los autos conforme a lo prevenido en el art. 505, o traerse de nuevo en los casos previstos por el 506, se libren en virtud de mandamiento compulsorio que se expida al efecto, previa citación a la parte a quien haya de perjudicar; que si el testimonio que se pide fuera solamente de parte de un documento, se adicione a él lo que el colitigante señalare, si lo cree conveniente; que los testimonios o certificaciones han de ser dados por el encargado del archivo, oficina, registro o protocolo en que se hallen los documentos, o por el Secretario en cuya Secretaría radiquen los autos y por el del pleito en otro caso. Sin embargo, según el art. 598 LEC, no es necesario el cotejo, salvo prueba en contrario, o que se solicite el cotejo de letras por ponerse en duda la autenticidad del documento que carezca de matriz y no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiere expedido, cuando se trate: de ejecutorias, certificaciones o testimonios de sentencias firmes, expedidas en legal forma por Tribunal que las hubiere dictado; de escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo, y todas aquéllas cuyo protocolo o matriz hubiere desaparecido, o cualquier otro documento público y solemne que por su índole carezca de original o registro con el que pueda comprobarse.

Otra circunstancia que tendrá que hacerse constar respecto a los documentos públicos, es que, cuando se trate de documentos redactados en cualquier idioma que no sea

el castellano^{*108}, tienen que acompañarse con el mismo la traducción y copias de aquél y de ésta. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente, a no ser que se impugne, en cuyo caso ha de remitirse a la Interpretación de Lenguas para su traducción oficial (art. 601 LEC). Si el documento estuviese redactado en la lengua propia de una CA tendrá plena validez y eficacia sin necesidad de traducción, a no ser que tenga que surtir efectos fuera de la circunscripción de que se trate.

Cuando se trate de documento que se encuentre fuera de la circunscripción del órgano jurisdiccional, podrá pedirse ampliación del periodo probatorio hasta un máximo de doce días (art. 730.III LEC), así como la práctica del auxilio si fuera necesario, o la concesión del término extraordinario de prueba, si el documento se encontrase fuera del territorio nacional (arts. 555 y ss. LEC).

En lo que atañe a los documentos privados, establece el art. 602 LEC que los que obren en poder de los litigantes se presentarán originales, y que cuando formen parte de un libro, expediente o legajo podrán presentarse por exhibición para que se ponga testimonio de lo que señalen los interesados. Esto mismo se verificará respecto de los que obren en poder de un tercero, si no quieren desprenderse de ellos.

5- RECONOCIMIENTO JUDICIAL^{248*109}

El reconocimiento judicial es la última de las pruebas reales.

^{*108} Ver al respecto el art. 144 Proyecto.

²⁴⁸ GUASP (que le da la denominación de prueba de monumento), Derecho...cit., Tomo I, págs. 376 y ss.; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., pág. 524.

^{*109} El reconocimiento judicial se recoge en la Sección 6ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II del Proyecto. En cuanto a lo tratado sobre él en este punto, consultar el art. 353.

- CONCEPTO

La prueba de reconocimiento judicial es aquélla que consiste en la percepción directa por el Juez del objeto de la prueba²⁴⁹.

La diferencia del reconocimiento con los otros medios de prueba radica por tanto en que en estos últimos el Juez percibe el objeto de la prueba indirectamente.

Tener en cuenta que esta percepción del Juez puede llevarse a cabo con cualquiera de sus sentidos, y no sólo con el de la vista.

- NATURALEZA JURIDICA

La prueba de reconocimiento judicial constituye una verdadera prueba procesal, puesto que tiende a convencer al Juez de la existencia de un dato procesal, y pertenece al grupo de las pruebas reales, pues tiene como instrumento una cosa.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

En cuanto a los requisitos subjetivos, rigen las normas generales en cuanto al sujeto activo, pasivo y destinatario de cualquier medio de prueba.

En lo referente a los requisitos objetivos, ha de tenerse presente que tal prueba sólo puede solicitarse cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el juez examine por sí mismo algún sitio o la cosa litigiosa, según el art. 633 LEC, o conforme dice el art. 1240 CC, cuando claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.

Los requisitos de la actividad también presentan pocas dificultades: en cuanto al lugar de la proposición, éste será la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional;

el tiempo es también el momento inmediatamente siguiente al del recibimiento del juicio a prueba en el acto de la vista; sobre la forma, la proposición del reconocimiento judicial se hace en forma verbal.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECIFICA

Junto a la proposición genérica, deben hacerse constar dos circunstancias: cuál es el objeto de la prueba, y por qué este medio de prueba es necesario para el esclarecimiento y valoración de los hechos.

Se tendrán en cuenta las reglas del auxilio judicial, si la cosa a reconocer se encuentra fuera de la circunscripción del órgano jurisdiccional, así como las posibles ampliaciones del término probatorio, si fueren necesarias (arts. 730.II y 555 y ss. LEC).

6- PRESUNCIONES²⁴⁹*¹¹⁰

El CC (arts. 1249 a 1253 LEC), y no la LEC, incluye a las presunciones entre los medios de prueba. Que lo sean en realidad es más que discutible, porque las presunciones son operaciones lógicas que se realizan en el momento de valorar los medios de prueba.

Mediante esta operación lógica se deduce la existencia de un hecho, a partir de otro, en virtud del enlace o conexión entre ambos. Por tanto, toda presunción está siempre compuesta por tres elementos: el indicio o base de la presunción, el hecho presumido y el enlace o nexo entre ellos.

²⁴⁹ Concepto próximo al de GOLDSCHMIDT, James; Derecho Procesal Civil, pág. 265, 1936, citado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., pág. 524.

²⁵⁰ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 382 y ss..

*¹¹⁰ Sobre presunciones (Sección 9ª, del Capítulo VI, del Título I, del Libro II) pueden verse los arts. 385 y 386.

Se deroga la regulación que de ellas se recoge en el CC (Disposición Derogatoria, punto 2.1º Proyecto).

Este enlace entre el indicio y el hecho que se presume puede estar fijado por Ley o puede ser fijado por el Juez. En el primer caso, hablamos de presunciones legales, que pueden ser: *iuris tantum*, si admiten prueba en contrario; *iuris et de iure*, si no admiten prueba en contrario. Cuando el enlace viene dado por el Juez, hablamos de presunciones judiciales o presunciones *hominis*, que siempre admiten prueba en contra.

Desde el punto de vista procesal, para que el Juez pueda aplicar los efectos previstos en una norma, o los que él mismo deduzca, es necesario que el indicio o indicios en que se basan hayan sido introducidos en el proceso por las partes y hayan quedado acreditados por otros medios de prueba. Además, las partes deberán alegar la afirmación que se pretende deducir del indicio, o la norma que recoge la presunción.

La parte a quien pueda perjudicar la presunción podrá (si es *iuris tantum*) acreditar por otros medios de prueba que el indicio no existe o que no ha quedado probado ni el indicio, ni el hipotético hecho presumido.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las presunciones, a pesar de ser incluidas por el CC entre los tipos de prueba, no son un auténtico medio de prueba, o al menos que no tienen que proponerse ni practicarse como tales medios.

d- RESOLUCION JUDICIAL: ADMISION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Ante la proposición concreta de pruebas por parte de los litigantes, el Juez puede rechazarlas o admitirlas, entrando así en la siguiente fase probatoria (la cuarta), la admisión concreta de pruebas.

Según el art. 566 LEC, antes de la práctica de la prueba, el Juez debe examinar, de oficio, si las pruebas se acomodan a lo establecido en el artículo anterior, es decir, que se concreten a hechos fijados definitivamente en los escritos instructorios (en este caso en la

comparecencia), o que no hayan sido confesados por la parte a quien perjudiquen, y que al mismo tiempo sean pertinentes y útiles.

1- RECHAZO DE PRUEBAS^{251*111}

La resolución judicial puede declarar no haber lugar a la práctica de algún determinado medio de prueba y ello puede ocurrir por varias razones: porque una regla legal preceptúe que una determinada prueba no sirva para demostrar un determinado hecho, en cuyo caso se dice que la prueba es inadmisibile (el ejemplo más claro es el del art. 51 CCo, que hemos indicado respecto a la prueba testifical en materia de comercio, de cuantía superior a 1.500 pts.); porque se propone una prueba para demostrar tales hechos que, aun cuando se demuestre que son verdaderos, no son interesantes para la decisión, en cuyo caso la prueba es intrascendente o impertinente; o porque se propone una prueba para demostrar hechos cuya existencia o inexistencia estén ya establecidas, en cuyo caso la prueba es inútil.

La resolución rechazando las pruebas propuestas adopta la forma de acuerdo verbal, que no deja de ser una providencia informal, y por tanto sin necesidad de motivarse.

- RECURSO

Contra el acuerdo denegatorio de algún medio de prueba cabe recurso de reposición, que se sustanciará oyendo en el acto a las partes, pudiendo el Juez rectificar o ratificar el acuerdo recurrido.

- PROTESTA^{*112}

En último caso, la parte que haya propuesto la prueba denegada podrá consignar su protesta como requisito indispensable para hacer valer su derecho en la segunda instancia.

2- ADMISION DE PRUEBAS^{252*113}

La admisión concreta de pruebas es aquella resolución judicial por la que el Juez declara la pertinencia de los medios de prueba propuestos y ordena lo necesario para su práctica.

En la admisión ha de valorar el Juez tanto la legalidad de la proposición, en su sentido formal, como la utilidad o pertinencia de la prueba, criterio este último, el de la pertinencia, que se encarga de recordar el art. 730.II LEC, cuando dispone que “después se admitirán las pruebas pertinentes que presentaren”.

También ahora la resolución en que se admitan las pruebas propuestas adoptará la forma de acuerdo verbal.

c- PRACTICA DE LA PRUEBA ADMITIDA^{253*114}

²⁵¹ Trata del mismo ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 67, págs. 532 y 533.

^{*111} Debe tenerse en cuenta el art. 283 Proyecto sobre impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria.

^{*112} Ésta es la única posibilidad en caso de rechazo de pruebas (ver art. 446 Proyecto, ya citado).

²⁵² Trata del mismo ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 66, págs. 531 y 532.

^{*113} Sobre la admisibilidad de la pruebas propuestas, ha de consultarse el art. 285 y sobre ilicitud de alguna prueba admitida el 287.

²⁵³ Trata de la práctica de la prueba ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 68, págs. 533 y ss., y párrafo 93, pág. 625; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 319 y ss..

^{*114} En cuanto a la forma general de practicarse la prueba, ha de estarse a lo dispuesto en el art. 289 (en este artículo se dice claramente que en dicha práctica es inexcusable la presencia judicial).

Las pruebas se practicarán en unidad de acto, y si esto no fuese posible, se practicarán antes de la vista (arts. 290 y ss.), para lo que se regula la anticipación y el aseguramiento de la prueba (arts. 293 a 298), o en todo caso antes de empezar a transcurrir el plazo para dictar sentencia si existiere algún hecho nuevo (art. 286).

Se establecen una serie de sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto (art. 288).

Después de la admisión concreta de pruebas, se inicia la última fase del período probatorio. Aquélla que consiste en su realización práctica.

El art. 730.III LEC distingue entre las pruebas que sean practicables en el acto del juicio y las que no lo sean.

Posteriormente, analizaremos la práctica de cada una de las pruebas en concreto.

1- PRUEBAS PRACTICABLES EN EL ACTO

Las pruebas que sean practicables en el acto se realizarán en el momento de la comparecencia, a continuación de la admisión de las mismas por parte del Juez.

Este criterio se ajusta al principio de concentración, propio del principio de oralidad y de la sustanciación del juicio a base de comparecencias o audiencias orales.

2- PRUEBAS NO PRACTICABLES EN EL ACTO

Conforme al art. 730.III, el plazo para las pruebas que no sean practicables en el acto no podrá exceder de doce días, excepto cuando hubiere de otorgarse el término extraordinario de prueba, de acuerdo con los arts. 555 a 562 LEC, es decir, cuando alguna hubiere de ejecutarse fuera del territorio nacional; este término extraordinario será de cuatro meses si la prueba hubiere de realizarse en Europa y de seis meses si hubiere de practicarse en cualquier otra parte del mundo.

El plazo de prueba, salvo el extraordinario, suele resultar a menudo muy insuficiente. Basta pensar en lo que tarde en cumplimentarse un exhorto en otro partido judicial, incluso cuando no sea geográficamente muy distante. Esta dificultad suele resolverse en la práctica judicial a base de que los Juzgados acceden a practicar como

diligencias para mejor proveer todas aquellas pruebas que, propuestas por las partes, no ha sido posible realizar dentro del plazo ordinario de los doce días.

3- TRATAMIENTO PROCESAL

La práctica o tratamiento procesal dependerá de cada medio de prueba en concreto²⁵⁴.

- CONFESION^{255*115}

Analizaremos la práctica de la confesión en los aspectos de sus requisitos, procedimiento y efectos.

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

Los separaremos, como siempre, en requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad.

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

La prueba de confesión, en principio, se practica a instancia de parte, con la única excepción de lo previsto en el art. 340.2 LEC, respecto de las diligencias para mejor proveer. Además, la confesión sólo puede practicarse a instancia de la parte contraria, y en ningún caso se admite que una parte proponga su propia confesión.

²⁵⁴ Sin embargo, en lo que a los efectos de las pruebas en general se refiere, puede consultarse la obra de MONTÓN REDONDO, Alberto; Valoración de las Pruebas e Interpretación de los Resultados Probatorios. Escritos en homenaje al Profesor Prieto-Castro. Editora Nacional, 1979, Madrid.

²⁵⁵ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 535 y ss.; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 324 y ss..

^{*115} En cuanto a la práctica del interrogatorio de las partes, consultar los arts. 303 a 316 Proyecto.

Respecto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, con carácter excepcional, el art. 587 LEC admite la confesión de terceros cuando se trate de hechos en los que hayan intervenido en nombre de la parte.

Además, la confesión sólo puede realizarse por quien tenga capacidad (art. 1231 CC), para lo cual es necesario distinguir entre personas físicas y jurídicas: si es persona física, si la parte fuera incapaz, se considera que por tratarse la confesión de un acto personalísimo, su falta de capacidad para este acto no puede ser suplida por su representante legal; si es persona jurídica, si es privada, se admite la confesión de su representante necesario, siempre que éste conozca personalmente los hechos sobre los que va a ser interrogado, mientras que si es jurídica pública, la confesión se sustituye por un informe.

b- REQUISITOS OBJETIVOS

Por otro lado, la confesión sólo puede versar sobre hechos, y en ningún caso es un medio de prueba que sirva para acreditar el Derecho, a diferencia de lo previsto en nuestro Derecho histórico, en el que existían dos instituciones semejantes, el juramento, que versaba sobre hechos y Derecho, y la confesión que sólo versaba sobre hechos.

Además, los hechos han de ser personales (art. 1231 CC), es decir, ha de tratarse de hechos en los que la parte haya intervenido, hasta el punto de que, según el art. 587 LEC establece, cuando alguna pregunta se refiera a un hecho que no sea personal, el declarante podrá negarse a confesar sin que su negativa produzca el efecto de tenerle por confeso.

Tampoco serán objeto de confesión los hechos admitidos por ambas partes y los hechos presuntos.

c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

La regla general es que la confesión se practica en la Sala del Juzgado durante el término probatorio en la comparecencia.

Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que si el confesante residiere fuera de la circunscripción del órgano jurisdiccional o fuera del país, la confesión se realizará en el lugar correspondiente y dentro del término de los doce días o del extraordinario, respectivamente, teniendo en cuenta las reglas del auxilio judicial.

Fuera de las circunstancias anteriores, también puede practicarse anticipadamente, después del término probatorio hasta la declaración del juicio visto para sentencia, o después de esta declaración, en los casos y con los requisitos con que ya vimos se podía también proponer la confesión.

En caso de enfermedad u otras circunstancias especiales del litigante que haya de absolver posiciones, el órgano jurisdiccional puede constituirse en casa de dicho interesado, en cuyo caso no podrá concurrir la parte contraria, aunque podrá pedir dentro del tercer día que la confesión se repita para aclarar algún punto dudoso (art. 591 LEC).

Por último, en los pleitos en que sea parte el Estado o alguna Corporación del mismo, la parte propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas por vía de informe por los empleados de la Administración a quienes conciernan los hechos. Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que representa al Estado o Corporación (art. 595 LEC).

En cuanto a la forma, la confesión se practicará oralmente en presencia del Juez y conforme al procedimiento que a continuación expondremos.

B- PROCEDIMIENTO

Propuesta y admitida la prueba de confesión, si por algunas de las causas anteriormente citadas, el confesante no estuviera presente, el Juez ordenará que se le cite con un día de anticipación por lo menos, señalando día y hora para la práctica de la misma. Si no comparece el citado, ni alegare justa causa que se lo impida, se le volverá a citar para el día y hora que se señale nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle por confeso. Si de nuevo no comparece y no existe justa causa para ello, puede la parte pedir que se le tenga por confeso en las posiciones que presente (art. 593 LEC).

Si por el contrario comparece el citado, o el confesante estuviera ya presente, el que haya propuesto la prueba de confesión presentará el pliego de posiciones, a no ser que el Juez lo tuviere ya en su poder (art. 584 LEC). El Juez resolverá previamente sobre la admisión de las preguntas contenidas en el pliego, pudiendo declarar impertinente alguna posición.

Si el Juez declara pertinentes las posiciones exigirá juramento decisorio o indecisorio a la parte que ha de confesar, y, una vez prestado éste, le dirigirá las preguntas contenidas en el pliego.

La contestación ha de ser hecha por el propio declarante, de palabra, a presencia de la parte contraria y de su Letrado, si asistiera, y sin que pueda valerse de ningún borrador de respuestas, aunque se le permitirá que consulte en el acto simples notas o apuntes, cuando, a juicio del Juez, sean necesarios para auxiliar la memoria (art. 585 LEC).

Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo alegar el que las dé las explicaciones que estime convenientes o las que el Juez le pida (art. 586 LEC).

Si se negare a declarar, el Juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso si persiste en su negativa. Si las respuestas fueran evasivas, el Juez, de oficio o a instancia de

la parte contraria, le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos respecto a los cuales sus respuestas no fueran categóricas y terminantes (art. 586 LEC).

Cuando algunas de las preguntas se refieran a hechos que no sean personales del que haya de absolverlas, podrá negarse a contestarlas. Sólo en este caso podrá admitirse la absolución de posiciones por medio de un tercero que esté enterado personalmente de los hechos por haber intervenido en ellos en nombre del litigante interrogado, si éste lo solicita, aceptando la responsabilidad de la declaración (art. 587 LEC).

Cuando concurra al acto el litigante que haya solicitado las posiciones, ambas partes podrán hacerse recíprocamente por sí mismas, sin mediación de sus Letrados ni Procuradores, y por medio del Juez, las preguntas y observaciones que éste admita como convenientes, para la averiguación de la verdad de los hechos, pero sin atravesar la palabra ni interrumpirse (art. 588 LEC). En la práctica, esto da lugar a que la práctica de esta prueba se convierta en un auténtico “circo”.

Cuando dos o más litigantes hayan de declarar sobre unas mismas posiciones, el Juez adoptará las precauciones necesarias, si lo pidiera la parte interesada, para que no puedan comunicarse ni enterarse previamente del contenido de aquéllas (art. 590 LEC).

C- EFECTOS

Sobre los efectos de la práctica de la confesión, han de tenerse en cuenta dos aspectos: la indivisibilidad de la confesión y el tipo de juramento bajo el que la misma se ha hecho.

En cuanto a la regla de la indivisibilidad de la confesión, ésta constituye en principio una garantía para el confesante, en la medida en que cuando se le pide que declare en un proceso resultaría injusto que de su declaración se tomara en cuenta sólo lo

que le perjudique, y no lo que le favorezca. La indivisibilidad además se manifiesta en dos sentidos: respecto del conjunto de su confesión y respecto de cada respuesta a cada una de las posiciones que le formularan. Sin embargo, la indivisibilidad quiebra en tres casos: cuando se trate de hechos diferentes o inconexos entre sí; cuando existen otros medios de prueba que versen sobre parte de los hechos confesados; y cuando se haya confesado algún hecho que sea contrario a la naturaleza o a las Leyes, en cuyo caso éste no se tendrá en cuenta.

Por otro lado, la confesión puede hacerse bajo juramento decisorio o indecisorio. La confesión bajo juramento decisorio hace prueba plena, es decir, la declaración que se haya llevado a cabo será vinculante para el Juez, y ello tanto en lo que le perjudique como en lo que le beneficie. La eficacia de la confesión bajo juramento decisorio no depende del juramento prestado, sino de la sumisión y aceptación de su resultado por la parte proponente. La confesión bajo este tipo de juramento es una manifestación del principio dispositivo, y por eso el CC establece que no podrá versar sobre hechos punibles ni sobre cuestiones sobre las que las partes no puedan transigir (art. 1237 CC). Sin embargo, sí se admite que el juramento decisorio pueda ser deferido a la parte proponente, de forma que si ésta se negara a prestarlo se le podrá tener por confeso (art. 1236 CC). En la confesión bajo juramento indecisorio, el art. 580 LEC dispone que los hechos personales perjudiciales que hayan sido confesados deberán ser tenidos como ciertos. Éste es un caso en el que se ha recogido en el Derecho positivo una máxima de experiencia, según la cual en cuestiones patrimoniales nadie miente en perjuicio propio. Asimismo establece el art. 1232 CC que la confesión hace prueba contra su autor.

- TESTIFICAL^{256*116}

De nuevo, analizamos los requisitos, procedimiento y efectos de su práctica.

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

Según el art. 1245 CC, pueden ser testigos todas las personas que no fueran inhábiles por incapacidad natural o por disposición de la Ley.

Son inhábiles por incapacidad natural (art. 1246 CC): los locos o dementes; los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento depende de la vista y el oído; los menores de catorce años. Sin embargo, el art. 647 LEC en su párrafo II dispone que a estos últimos (a los menores de catorce años) no se les exigirá juramento, lo que significa que los menores de catorce años pueden declarar como testigos, aunque no bajo juramento y por tanto no podrán incurrir en un posible delito de falso testimonio.

Son inhábiles por disposición legal (art. 1247 CC): los que tengan interés directo en el pleito; los ascendientes en los pleitos de sus descendientes, y estos en los de aquellos; el suegro o suegra en los pleitos del yerno o nuera y viceversa; el marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los del marido; los que están obligados a guardar secreto, por su estado o profesión, en los asuntos relativos a su profesión o estado; los especialmente inhabilitados para ser testigos en ciertos actos.

²⁵⁶ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 547 y ss.; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 342 y ss.

^{*116} Por lo que se refiere a su práctica. consultar los arts. 361 y 363 a 381 Proyecto.

En cuanto al número de testigos que pueden intervenir en un proceso, éste es ilimitado, pero si excede de seis, la parte que los proponga tendrá que correr con los gastos de los que excedan por cada pregunta útil (art. 645 LEC).

El testigo podrá ser tanto presencial de los hechos que declara, como de referencia.

b- REQUISITOS OBJETIVOS

El objeto del testimonio lo constituyen hechos concretos que el testigo haya percibido directamente (caso del testigo presencial) o de modo indirecto (caso del testigo de referencia).

Debido a que se trata entonces de percepciones propias, se considera que los testigos son infungibles, es decir, insustituibles. De la infungibilidad de los testigos nace el deber de testificar, que en realidad comprende tres obligaciones: deber de comparecer, de forma que si el testigo no lo hace sin justa causa el Juez puede obligarle a hacerlo hasta el punto de que puede mandar que el testigo sea conducido por la fuerza pública (art. 643 párrafo II LEC); obligación de declarar, pudiendo castigarse el incumplimiento de esta obligación como delito de desobediencia grave previsto en el CP; obligación de declarar la verdad, puesto que en nuestro Derecho se sanciona penalmente el delito de falso testimonio (art. 647.I LEC). El incumplimiento de estos deberes también puede dar lugar a sanciones civiles (art. 1902 CC).

Como contraprestación a las anteriores obligaciones testificales, se prevé en la Ley la posibilidad de que los testigos obtengan una contraprestación económica, que se incluirá en las costas procesales (art. 644 LEC).

c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Normalmente, la prueba testifical se practica en el lugar donde se esté celebrando el acto de la comparecencia, durante el término probatorio, a continuación de la admisión de la prueba.

Sin embargo, cuando los testigos residan fuera de la circunscripción territorial, podrán ser examinados por medio del auxilio (art. 656 LEC), y por tanto, en el lugar correspondiente y dentro del término de los doce días o del extraordinario, si fuere necesario.

También puede la testifical practicarse anticipadamente (art. 502 LEC) en determinados casos, aunque una vez concluido el término probatorio esta prueba no podrá tener lugar, salvo que sea practicada de oficio como diligencia para mejor proveer.

Por último, si por enfermedad u otro motivo que el Juez estime justo, no pudiere algún testigo personarse en la audiencia del Juzgado, podrá recibírsele la declaración en su domicilio a presencia de las partes y de sus defensores (si los hubiere), a no ser que, atendidas las circunstancias del caso, el Juez crea prudente no permitirles que concurren, en cuyo caso podrán enterarse de la declaración en la Secretaría (art. 655 LEC).

En cuando a la forma, la prueba testifical se practicará oralmente, salvo el caso de los sordomudos que sepan leer y escribir del art. 658 LEC, en presencia del Juez y conforme al procedimiento que a continuación analizaremos.

B- PROCEDIMIENTO

Propuesta y admitida la prueba testifical, si hubiera que citarse a algún testigo, así se hará, con dos días de anticipación por lo menos, si lo solicitare la parte interesada (art. 643.I LEC), señalándose la práctica de la prueba por lo menos con tres días de antelación

(art. 642 LEC); la misma tendrá lugar en audiencia pública, a presencia de las partes y sus defensores (si hubiere), en el caso que concurrieren.

Antes de proceder al examen de los testigos, tendrá en cuenta el Juez si en alguno de ellos concurren las circunstancias de inhabilidad para declarar de los arts. 1246 y 1247 CC.

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente y por el orden en que vinieran anotados en las listas, a no ser que el Juez encuentre motivo justo para alterarlo. Los que vayan declarando no se comunicarán con los otros, ni estos podrán presenciar las declaraciones de aquellos; a este fin, el Juez adoptará las medidas que estime convenientes, si alguna de las partes lo solicitare (art. 646 LEC).

Antes de declarar prestará el testigo juramento (salvo el menor de catorce años), en la forma y bajo las penas que las leyes previenen; si manifestase ignorarlas, el Juez le instruirá de las señaladas para el delito de falso testimonio en causa civil (art. 647 LEC).

A continuación, el Juez formulará al testigo las preguntas generales de la Ley: su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio; su condición de pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado, con alguno de los litigantes; si es dependiente o criado del que lo presente o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses o dependencia; si tiene interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante; si es amigo íntimo o enemigo de algunos de los litigantes (art. 648 LEC).

Contestadas tales preguntas, el juez irá leyendo las preguntas del interrogatorio acotadas por la parte y admitidas por el Juez, que deberán ser respondidas de palabra expresando la razón de ciencia de su dicho y sin borrador de respuestas, aunque si puede utilizar notas o apuntes si el caso lo requiriera; terminadas las preguntas, el testigo contestará a las repreguntas en los mismos términos (arts. 649 y 650 LEC).

La reforma de 1984 de la LEC introdujo una novedad en la práctica de la prueba testifical con el fin de dar mayor flexibilidad, estableciéndose que las partes podrán al final del acto formular al testigo aquellas preguntas o repreguntas que considerasen necesarias y que el Juez en el acto también declarase pertinentes y útiles; sin embargo, no podrán interrumpir al testigo en mitad de su declaración (art. 652.I LEC). También podrá el Juez, por sí mismo o a petición de las partes, pedir al testigo cuantas explicaciones crea convenientes para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales hubiese sido examinado (art. 652.II LEC).

Se extenderá por separado la declaración de cada testigo, pero a continuación las unas de las otras (art. 651.I LEC). El testigo podrá leer por sí mismo su declaración, pero si no quisiere hacer uso de este derecho, la leerá el actuario y el Juez preguntará al testigo si se ratifica en ella o tiene algo que añadir o variar, extendiéndose a continuación lo que hubiere manifestado (art. 651.II LEC). Acto seguido la firmará el testigo, si sabe, con el Juez y el actuario, y los demás concurrentes (art. 651.III LEC).

Cuando no sea posible terminar en una audiencia el examen de los testigos de una parte, se continuará en la siguiente o en la que el Juez señale (art. 653 LEC).

Si por cualquier motivo no se presentaren todos los testigos en la audiencia señalada para su examen, a petición de la parte interesada hará el Juez nuevo señalamiento del día y hora en que deban comparecer, haciéndolo saber a las partes (art. 654 LEC).

Cuando haya de verificarse el examen de los testigos fuera del lugar del juicio, al exhorto o despacho se acompañarán las repreguntas en pliego cerrado, que abrirá el Juez al principio del examen (art. 656 LEC).

Si algún testigo no entendiere o no hablare el idioma español, será examinado por medio de intérprete, cuyo nombramiento se hará en la forma prevenida para el de los peritos (art. 657 LEC).

Los sordomudos podrán ser admitidos como testigos en el caso de que, por saber leer y escribir, puedan dar sus declaraciones por escrito (art. 658 LEC).

La prueba testifical puede practicarse conjuntamente con el reconocimiento judicial, cuando la inspección o vista del lugar contribuya a la claridad de su testimonio, si así lo hubiera solicitado previamente la parte a quien interese (art. 636 LEC).

C- EFECTOS

La prueba testifical es una prueba libre, es decir, es una prueba que el Juez apreciará según conciencia (según el art. 659.I LEC, conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración la razón de ciencia que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran) y puede ser desvirtuada por otros medios de prueba.

En este punto relativo a la eficacia probatoria del testimonio, deben tenerse en cuenta dos normas que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia consideran admonitivas (no preceptivas), y que ya expusimos al tratar los requisitos objetivos de la proposición de esta prueba: el art. 1248 CC y el art. 51 CCo..

Por otro lado, en nuestro Derecho la prueba testifical puede impugnarse directamente en el propio proceso en que tiene lugar mediante el sistema de tachas (arts. 660 a 666 LEC).

Las tachas son llamadas de atención que realiza la parte contraria a la que ha propuesto los testigos sobre la posible parcialidad de estos. Las circunstancias por las que cada parte puede tachar a los testigos son las siguientes (art. 660): ser el testigo pariente,

por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil, del litigante que lo haya presentado; ser el testigo, al prestar su declaración, socio, dependiente o criado del que lo presentare (se entenderá por criado o dependiente, para los efectos de esta disposición, el que viva en las casas del litigante y le preste en ellas servicios mecánicos mediante un salario fijo, y por dependiente, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo hubiere presentado por testigo, aunque no viva en su casa); tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante; haber sido el testigo condenado por falso testimonio; ser amigo íntimo o enemigo manifiesto de uno de los litigantes.

Dentro de los cuatro días siguientes al en que se hubieren terminado las declaraciones de los testigos de una parte, podrá cualquiera de ellos ser tachado por la contraria, cuando concurra en él alguna de las causas expresadas en el artículo anterior y no la hubiere confesado en su declaración (art. 661).

En el escrito en que se aleguen las tachas se propondrá, por medio de otrosí, la prueba para justificarlas. Si no se propusiera prueba, se entenderá que se renuncia a ello (art. 662).

La parte a quien interese, podrá impugnar las tachas, dentro de los tres días siguientes al en que se le hubiere entregado la copia del escrito contrario. También podrá proponer, por medio de otrosí, la prueba que le interese, y, no haciéndolo, se entenderá que la renuncia (art. 663).

Cuando ninguna de las partes hubiere propuesto prueba de tachas, se unirán los escritos a los autos sin más trámites, y se tendrán presentes a su tiempo. Si se hubiere articulado prueba, el Juez admitirá la pertinente y mandará practicarla (art. 664).

La prueba de tachas se hará dentro del término que reste del período de práctica de la prueba. Si no quedare el suficiente para ello, el Juez lo prorrogará siempre que sea a

instancia de parte y se pida antes de expirar el término de prueba (según alguna jurisprudencia), para este solo efecto, por el tiempo que estime necesario, sin que en ningún caso pueda exceder la prórroga de diez días (art. 665).

La prueba de tachas se unirá a los autos con la principal, para los efectos que procedan en definitiva (art. 666). Sin embargo, las tachas no impiden que el testimonio sea tenido en cuenta y creído por el sentenciador, si adquiere el racional convencimiento de que el testigo tachado se ha pronunciado verazmente (STS 26-11-1943).

- **PERICIAL**^{257*117}

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos de la pericia, tres circunstancias son de destacar: que los peritos pueden ser tanto personas físicas como jurídicas (es decir, individuales o colegiados) (art. 631 LEC); que se requiere que sean titulados en su profesión, aunque la Ley admite el informe de peritos sin título en determinados casos (art. 615 LEC); que el número de peritos (personas físicas) que pueden intervenir por cada parte en un proceso es de uno o tres (arts. 611 y 613 LEC).

Desde el punto de vista del objeto, ninguna duda cabe de que la prueba pericial puede versar sobre hechos, siendo más discutible que el peritaje pueda versar sobre el Derecho, hasta el punto de que hay quien define la prueba pericial como aquélla en la que se utilizan expertos en materias no jurídicas, en aplicación del principio *iura novit curia*.

²⁵⁷ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 542 y ss.; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 357 y ss..

^{*117} En cuanto a su práctica, ver los arts. 335.2, y 340 a 352 Proyecto.

Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido el peritaje jurídico, sobre todo para acreditar la aplicabilidad de una costumbre o de una norma de Derecho extranjero.

En cuanto a la actividad, la regla general es que la práctica de esta prueba se lleva a cabo durante el término probatorio, sin que pueda haber una pericia anticipada, ni tampoco, salvo como diligencia para mejor proveer, una vez concluido dicho término probatorio. Sin embargo, existe una regla especial según la cual si el peritaje fuera colegiado es admisible como medio de prueba, aunque el informe de los peritos se emita o reciba en el Juzgado, una vez transcurrido el término probatorio (art. 631 LEC). En relación a la forma, el peritaje se hará a través de informe oral o escrito, según la importancia del asunto (art. 627.I LEC), aunque siempre a presencia judicial y según el procedimiento que a continuación analizaremos.

B- PROCEDIMIENTO

Propuesta y admitida la prueba pericial, el Juez designará lo que haya de ser objeto del reconocimiento pericial y si éste ha de practicarse por uno o tres peritos (art. 613.I LEC). Sobre este último extremo, accederá a lo que de común acuerdo hayan propuesto las partes, y en otro caso resolverá mediante acuerdo verbal, sin ulterior recurso, lo que crea conveniente, teniendo en consideración la importancia del reconocimiento y la cuantía del pleito (art. 613.II LEC).

A continuación, el Juez pedirá a la parte que ha pedido la prueba pericial que proponga el perito o peritos, y oír a la parte contraria sobre tal propuesta; si ambas partes están conformes, se designará el perito o peritos así nombrados (art. 614 LEC).

Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de perito o peritos, el Juez insaculará en el mismo acto los nombres de tres por lo menos por cada uno

de los que hayan de ser elegidos, de los que en el partido judicial paguen contribución industrial por la profesión o industria a que pertenezca la pericia, y se tendrán por nombrados los que designe la suerte (art. 616.I LEC). Si no hubiere dicho número, quedará a elección del Juez la designación del perito o peritos, cuyo nombramiento entendemos debe realizarse en el mismo acto de la vista, dado el carácter concentrado de este procedimiento y lo limitado de su período probatorio (art. 616.II LEC). En el proceso laboral (art. 93.1 *Ley de Procedimiento Laboral*) no se aplican las reglas sobre insaculación de peritos, lo que contribuye a su celeridad; pensamos que esto mismo debería aplicarse al juicio verbal.

No se incluirán en el sorteo, ni en su caso podrán ser nombrados por el Juez, los peritos que en el acto de la comparecencia sean recusados^{*118} por cualquiera de las partes, por concurrir en ellos algunas de las causas expresadas en el art. 621 LEC (art. 617 LEC): ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte contraria; haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante; haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo; tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante, o participación en sociedad, establecimiento o empresa contra la cual litigue el recusante; enemistad manifiesta; amistad íntima.

La recusación puede hacerse bien en el acto mismo de la designación y hasta los dos días siguientes a su notificación, cuando ésta se deba a la suerte o por nombramiento del Juez, o por causas posteriores a su nombramiento en todo caso, siempre antes de dar principio el reconocimiento (arts. 619 y 620.II LEC). Al formularse la recusación se manifestará la causa de la misma y los medios de probarla (art. 620.I LEC).

La recusación no será admisible si no se fundare concretamente en alguna de las causas señaladas anteriormente, o no se presentara dentro de los plazos a que hicimos referencia (art. 622 LEC).

Propuesta en forma la recusación, el Juez mandará se haga saber al perito recusado para que en el acto de la notificación manifieste bajo juramento, que le recibirá el actuario, si es o no cierta la causa en que aquélla se funde; si la reconoce como cierta, se le tendrá por recusado, sin más trámites, y será reemplazado por otro de nombramiento del Juez (art. 623 LEC).

Cuando el perito niegue la certeza de la causa de la recusación, mandará el Juez que comparezcan las partes a su presencia, en el día y hora que señalará, con las pruebas de que intenten valerse (art. 624.I LEC). No compareciendo la parte recusante, se le tendrá por desistida de la recusación (art. 624.II). Si no comparecen todas las partes litigantes, el Juez las invitará a que se pongan de acuerdo sobre la procedencia de la recusación, y en su caso sobre el nombramiento del perito que haya de reemplazar al recusado (art. 624.III). Si no se ponen de acuerdo, el Juez admitirá las pruebas que se presenten, uniéndose a los autos los documentos, y acto continuo resolverá lo que estime procedente (art. 624.IV). En el caso de estimar la recusación, el mismo Juez hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo hubieren designado de común acuerdo (art. 624.V). Del resultado de esta comparecencia, a la que podrán asistir también los Abogados de las partes (si los hubiere), se extenderá la oportuna acta, que firmarán los concurrentes (art. 624.VI).

Cuando se desestime la recusación de un perito, será condenado el recusante en todas las costas de este incidente; también podrá ser condenado a que abone, por vía de

¹¹⁸ Sobre la recusación de los peritos, pueden consultarse los arts. 124 a 128 Proyecto. Como novedad, se excluye la recusación del perito aportado por la parte, que sólo podrá ser objeto de tacha.

indemnización a la parte o partes que la hubieren impugnado, la cantidad que el Juez estime, sin que pueda exceder de 200 pts. (art. 625 LEC).

Hecho el nombramiento del perito o peritos, se les hará saber para que acepten el cargo y juren desempeñarlo bien y fielmente, dentro del término que el Juez le señale (art. 618 LEC).

Aceptado el cargo, se señalará día y hora para el reconocimiento pericial (si no fuese posible realizarlo a continuación en la misma comparecencia), en el supuesto de que alguna de las partes lo solicitare; a tal reconocimiento pueden asistir las partes y sus defensores (si los hubiere), haciendo a los peritos las observaciones que estimen oportunas (art. 626 LEC).

En cuanto al dictamen pericial propiamente dicho, los peritos, después de haber conferenciado entre sí a solas, si fueren tres, darán su dictamen razonado, de palabra o por escrito, según la importancia del asunto (art. 627.I LEC). En el primer caso, lo harán en forma de declaración, y en el segundo, se ratificarán con juramento a presencia judicial, y verificándolo en ambos casos acto continuo del reconocimiento, y si esto no fuera posible, en el día y hora que el Juez señale (art. 627.II LEC).

Las partes o sus defensores (si los hubiere) podrán solicitar en el acto de la declaración o ratificación que el Juez exija del perito o peritos las explicaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos (art. 628 LEC).

Cuando sean tres los peritos y estuvieren de acuerdo, darán o extenderán su dictamen en una sola declaración firmada por todos (art. 629.I LEC). Si estuvieran en discordia, se pondrán por separado tantas declaraciones o dictámenes o escritos cuantos sean los pareceres (art. 629.II LEC).

No se repetirá el reconocimiento pericial aunque se alegue la insuficiencia del practicado, o no haya resultado acuerdo o dictamen de la mayoría, y sólo cabrá ya la posibilidad de practicarlo mediante diligencia para mejor proveer (art. 630 LEC).

En los casos en que se haya pedido y admitido el dictamen pericial colegiado, el Juez acordará dirigir una comunicación solicitando a la academia, colegio o corporación oficial que corresponda un informe, y, recibido éste, se unirá a los autos, aunque, como ya dijimos, tal informe se dé o reciba después de transcurrido el término de prueba (art. 631 LEC).

C- EFECTOS

Según dispone en el art. 632 LEC (art. 1243 CC), el órgano jurisdiccional apreciará la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligado a sujetarse al dictamen de los peritos.

Ello supone que, salvo algún caso como el del art. 327 CCo en que es más discutible, la pericia es una prueba libre y de apreciación conjunta con las demás.

- DOCUMENTAL^{258*119}

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

Sobre los requisitos subjetivos de la práctica de la prueba documental, habrá de tenerse ahora en cuenta lo explicado sobre la disponibilidad del documento al tratar de los requisitos de la proposición de dicha prueba.

²⁵⁸ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 539 y ss.; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 369 y ss..

^{*119} Para su práctica, ver los arts. 318 a 323, 325, 326 y 334.

Desde el punto de vista objetivo, es evidente que el documento debe actuar en el proceso como demostración de hechos y no de Derecho, como también ya explicamos en su fase de proposición.

En cuanto a la actividad, la regla general es que el lugar y el tiempo de presentación de los documentos en este juicio verbal será la Sala del Juzgado en que se esté celebrando la comparecencia. Sin embargo, ya apuntamos anteriormente que puede haberse preferido presentar los documentos junto con la demanda (en caso del actor). Incluso, cabe su presentación tras el período probatorio (hasta la sentencia) en los casos del art. 506 LEC: inexistencia del documento, es decir, cuando el mismo sea de fecha posterior; desconocimiento, es decir, cuando la parte jure no haber tenido conocimiento previo de su existencia; indisponibilidad, cuando no haya sido posible adquirir el documento con anterioridad por causas no imputables a la parte interesada, aunque previamente deberá haber hecho la designación del archivo o protocolo en que se encuentre. Otra excepción a la regla general es que el reconocimiento de los libros y papeles de los empresarios se hará en su establecimiento (arts. 605 LEC y 33.1 CCo).

Por lo que se refiere a la forma de practicarse esta prueba, ésta es oral, aunque el documento como tal reviste la forma escrita, y respecto a esta última circunstancia podemos resaltar que si se trata de documento público la Ley admite que se presente copia simple si el interesado manifiesta que carece de copia fehaciente, aunque durante el término probatorio deberá aportarla, pues de lo contrario la copia simple carecerá de efecto probatorio (art. 505 LEC9, mientras que si se trata de documento privado, se deberá aportar original (o fotocopia compulsada), o presentarse por exhibición si forma parte de un libro (extendiéndose testimonio de lo que interese) (art. 602 LEC). Si se trata de libros del empresario, tal exhibición ha de hacerse en presencia del mismo o de la persona que

comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos, pudiéndose ayudar el solicitante del reconocimiento de auxiliares técnicos en el número y forma que el Juez considere oportuno (art. 33 CCo).

B- PROCEDIMIENTO

Como ya vimos al explicar el procedimiento de la proposición de este medio de prueba, en el caso de los documentos públicos pueden ser necesarios tres requisitos: si los documentos han venido al pleito sin citación contraria, se cotejan con los originales previa dicha citación, si expresamente hubiese sido impugnada su autenticidad o exactitud; si los documentos hubieren de llevarse a los autos (copias fehacientes sustitutivas de las simples, primeramente aportadas por manifestarse carecer de otras auténticas) o traerse de nuevo (los que sean admisibles tras el período de prueba), se librarán en virtud de mandamiento compulsorio expedido al efecto, y previa citación de la parte a la que haya de perjudicar, adicionándose al testimonio, si éste fuese parcial, lo que el colitigante señalare en el acto de librarse el mismo; si el documento aportado fuese impugnado y careciese de matriz, será eficaz en juicio, salvo prueba en contrario, que puede ser testimonial, de reconocimiento del autorizante, pericial de cotejo de letras o de otra clase cualquiera, pruebas que se propondrán y practicarán en esta fase.

En lo que al cotejo se refiere, la comprobación de los documentos públicos con sus originales se practicará por el Secretario, a presencia de las partes y sus defensores (en el caso de que los hubiere), si concurrieren (art. 599.I LEC). También puede hacerlo el Juez por sí mismo cuando lo estimare conveniente (art. 599.II). La comprobación o cotejo del documento con el original consiste en una confrontación del documento impugnado con el original indiscutible. El lugar para realizar la comprobación es aquél en que se halle el

documento que se quiere comprobar (art. 599.I). En cuanto al tiempo, habrá de verificarse dentro del período acordado para la práctica de tal medio de prueba. En lo referente a la forma, hay que distinguir la citación a las partes y la diligencia de cotejo. Cuando el cotejo haya de practicarse fuera del lugar del juicio, el Juez ordenará el desglose del documento que ha de ser cotejado, dejando testimonio del mismo en los autos y acordando se libre el correspondiente exhorto.

En cuanto al mandamiento compulsorio, el acuerdo se adopta en el acto mismo siguiente a la admisión de los medios de prueba. La citación se verifica también en el acto, si comparecen las partes, para el día que se señala, y, si no, se acuerda en la forma ordinaria. El mandamiento es una forma de comunicación dirigida a quien está encargado del archivo, ordenándole remita el documento que interesa. Posteriormente, la compulsa se hace en la forma del cotejo.

Cuando el documento impugnado careciere de matriz, puede la parte impugnante pedir la práctica de otras pruebas para demostrar la falsedad del documento; así, puede pedir el reconocimiento del autorizante o la prueba pericial del cotejo de letra, o cualquier otra, las que se practicarán conforme a las disposiciones que para tales medios de prueba se señalan.

En cuanto a los documentos privados, hay que tener en cuenta estos dos supuestos: que la parte contraria los haya admitido o aceptado como legítimos, en cuyo caso la práctica de tal medio de prueba termina con la inserción del documento en los autos; que la parte no los haya reconocido, en cuyo caso, la parte puede pedir el reconocimiento bajo juramento del documento (mediante exhibición del documento en la prueba de confesión) y, con carácter subsidiario, el cotejo de letras (mediante prueba pericial).

C- EFECTOS

Según el art. 1218 CC, los documentos públicos hacen prueba plena, aún contra terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. Además, hacen prueba plena contra los contratantes y sus causahabientes de las declaraciones que en ellos hubieran hecho los primeros.

De acuerdo con el art. 1225 CC, si los documentos privados han sido reconocidos, tendrán el mismo valor que los documentos públicos, pero sólo entre los otorgantes y sus causahabientes, nunca frente a terceros. Si por el contrario, no son reconocidos, son pruebas libres, de apreciación conjunta con las demás pruebas.

En cuanto a la impugnación del documento, ésta puede referirse a tres extremos: a su admisibilidad en el proceso, debido a su presentación extemporánea; a su autenticidad, ya explicada en el apartado anterior; y a su falsedad penal, que provocará una cuestión prejudicial penal devolutiva, con suspensión del proceso civil.

- RECONOCIMIENTO JUDICIAL^{259*120}

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

El objeto del reconocimiento judicial lo constituye la cosa litigiosa, o algún sitio o lugar (art. 633.I LEC). Sin embargo, según la jurisprudencia del TS, el objeto de este medio de prueba comprende: sitios o lugares; cosas, tanto muebles como inmuebles, y ambos en un sentido estático (dónde están) como dinámico (cómo son); y personas.

²⁵⁹ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 546 y 547; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 379 y ss..

^{*120} Sobre la práctica del reconocimiento judicial, pueden citarse los arts. 354 a 359 Proyecto.

En cuanto al lugar, es casi consustancial a este medio de prueba, que tenga que realizarse fuera del local del órgano jurisdiccional, para lo cual habrán de aplicarse las reglas generales, es decir, las del auxilio judicial.

En cuanto al tiempo, este medio de prueba sólo puede practicarse durante el término probatorio, salvo una diligencia para mejor proveer.

B- PROCEDIMIENTO

Si el Juez admite este medio de prueba, para la práctica de la diligencia pueden distinguirse tres situaciones: que se practique como medio de prueba aislado, o conjuntamente, con una prueba testifical, o con una prueba pericial.

En el primer caso, es decir, como medio de prueba aislado (art. 634 LEC), el Juez señalará día y hora para la práctica del reconocimiento, al que podrán asistir las partes y sus defensores (si los hubiere), y además las personas prácticas en el terreno. La práctica de la prueba consiste simplemente en la inspección u observación del objeto de la prueba. Si hubiesen concurrido las partes, podrán realizar de palabra aquellas manifestaciones que considerasen oportunas. El Juez recibirá antes juramento a las personas que hubieren de hacer manifestaciones u observaciones.

Si la prueba se practica junto con una prueba testifical porque se considere importante que la declaración de los testigos se lleve a cabo en el terreno y así lo haya solicitado previamente la parte a quien interese, primero se hará el reconocimiento y, una vez concluido, se practicará la prueba testifical en el mismo sitio (art. 636 LEC).

Si el reconocimiento se practica junto con la prueba pericial, ambos medios se practicarán simultáneamente (art. 635 LEC).

En cualquier caso, del resultado del reconocimiento se levantará un acta que será, como siempre, leída y firmada por los asistentes al acto (art. 634.III LEC).

C- EFECTOS

En principio, la prueba de reconocimiento judicial es una prueba de libre apreciación, pero la jurisprudencia ha establecido la siguiente distinción: si quien practica la prueba es el propio Juez que está encargado del proceso, la prueba es libre (STS 24-2-84); si quien practica la prueba fuese un Juez distinto al que conoce del asunto (art. 1241 CC), como dicha práctica se consigna en un acta autorizada por el Secretario Judicial, habrán de tenerse en cuenta las reglas de la eficacia de los documentos públicos (art. 1218 CC).

IX- ACTA DE LA COMPARECENCIA ^{*121}

Operación complementaria y última de la comparecencia, que tiende a dejar constancia escrita de ella mediante la formación, dada la naturaleza oral, de la documentación correspondiente.

El documento que se extiende a tales efectos es un acta, pues a tenor del art. 730.V LEC “de su resultado se extenderá la oportuna acta”. La constancia de la comparecencia queda garantizada, pues, por la actividad oficial del Secretario, de quien el acta emana, si bien, en esta ocasión, la Ley trata de reforzar la garantía, exigiendo no sólo las firmas de los sujetos del proceso, sino las de todos los que hubieran intervenido en el mismo, ya que el art. 730.V dice que el acta la “firmarán todos los concurrentes y los que hubieren declarado como testigos”, debiendo entenderse que, cuando la comparecencia se fracciona

en momentos distintos, de cada uno de ellos ha de extenderse el acta que corresponda (como ya hemos ido viendo a lo largo de la práctica de las diferentes pruebas y posteriormente recordaremos en el caso de que se produzcan ulteriores comparecencias), con las firmas de los que intervinieren en cada uno de tales períodos.

7- ULTERIORES COMPARECENCIAS

Como hemos repetidamente anunciado, las pruebas que no se hayan podido realizar en la primera sesión, se practican en la segunda o sucesivas comparecencias, a través de las cuales se desarrolla todo el hilo procedimental de este juicio verbal. Las normas del art. 730 LEC sobre celebración de la primera comparecencia se aplican a las siguientes (que, normalmente, tienen como contenido proseguir con la práctica de la prueba admitida). Por tanto, se levantará nueva acta, que se unirá a la de la primera comparecencia, de cada una de las ulteriores que se celebren.

8- EXPIRACION DEL PLAZO PROBATORIO: DACION DE CUENTA

La expiración del término de prueba es aquella actuación por la cual se anota en los autos el hecho del transcurso del plazo probatorio, dando cuenta al Juez de tal hecho²⁶⁰.

Se trata, pues, de un acto de documentación y de un acto de dación de cuenta que se rigen por las reglas generales. Es, pues, sujeto activo el Secretario; lugar, la Secretaría del Juzgado y la Sala de Audiencia del mismo; tiempo de la anotación, el día en que el hecho se produce, y de la dación de cuenta, en el mismo día o en el siguiente.

¹²¹ Ver los arts. 145 a 148 Proyecto. Como novedad, las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

²⁶⁰ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 70, pág. 558.

9- DECLARACION DE CONCLUSION DEL JUICIO: VISTO PARA SENTENCIA

Como no existe en este juicio el trámite de alegaciones finales o de conclusión, destinado en los juicios declarativos más solemnes a realizar el resumen de las pruebas, la Ley dispone que, celebrada la comparecencia (es decir, acabado el término probatorio), el Juez, a continuación del acta, dictará sentencia (art. 731 LEC). Mas previamente, se declarará mediante acuerdo verbal (providencia informal) concluso el juicio, trámite que se realiza pronunciando el Juez la fórmula legal de “Visto para Sentencia”.

H- DESARROLLO ANORMAL DEL PROCEDIMIENTO : CRISIS PROCESALES²⁶¹

Bajo la denominación de crisis procesal hay que entender todas aquellas alteraciones que el proceso experimenta respecto de lo que constituiría su desarrollo normal.

Las crisis o anomalías del proceso pueden afectar a cualquiera de sus tres elementos, es decir, a los sujetos, al objeto y a los actos, y por ello se distingue entre: crisis subjetivas, crisis objetivas y crisis de la actividad.

1- CRISIS SUBJETIVAS²⁶²

El primer grupo de crisis procesales que hay que analizar es aquél que, por referirse a alguno de los sujetos que intervienen en un proceso, lleva el nombre de crisis subjetivas. Ahora bien, como los sujetos fundamentales de todo proceso son, de un lado, el Juez, y de otro, las partes, puede haber crisis subjetivas del proceso referidas a cada uno de ellos.

²⁶¹ En relación a las crisis procesales hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 456 y ss; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., Capítulo XIX, págs. 635 y ss., y Programa y Esquemas...cit., págs. 51 y ss..

I- ANOMALIAS QUE AFECTAN AL ORGANO JURISDICCIONAL

Una anomalía procesal relativa al Juez se produce cuando alguna de las circunstancias que determinan su posición en el proceso experimenta una alteración.

Esta alteración puede referirse a la jurisdicción o competencia que determinaron el conocimiento del Juez concreto. Cuando esta modificación se produce por razones de derecho, ha de entenderse que la innovación legal ha de prever la suerte de los procesos en curso, y ello podrá hacerlo la reforma o bien confirmando su tratamiento procesal primitivo o bien imponiendo el que se deriva de su nueva índole. Cuando la modificación se deba a razones de hecho (como, por ejemplo, el cambio de domicilio del demandado durante el proceso), se acude a la ficción jurídica de la *perpetuatio iurisdictionis* (que ya analizamos como uno de los efectos procesales de la admisión a trámite de la demanda), de forma que se evita la eventualidad de esta posible crisis, ya que se entiende que las circunstancias de hecho que fijan la competencia del Juez son las que existen en el momento de presentación de la demanda.

Esta alteración del órgano jurisdiccional también puede referirse a algún acaecimiento en las personas físicas que lo componen de tal magnitud que repercuta en la suerte del proceso en marcha. El caso más importante de este supuesto sería el de la sustitución del Juez o Magistrado por motivo de su fallecimiento, traslado, jubilación, separación, suspensión o enfermedad. La sustitución se hará de acuerdo con lo dispuesto en las normas orgánicas sobre Jueces o Magistrados suplentes o sustituidos o prórrogas de jurisdicción. Sin embargo, tal sustitución tiene importantes repercusiones, como es la posible recusación del nuevo Juez, supuesto que analizaremos un poco más adelante,

²⁶² GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 457 y ss..

dentro de las crisis objetivas. Por ello, la LOPJ trata, en la manera de lo posible, de evitar dicha sustitución, siempre y cuando el impedimento no surgiera antes de la vista de forma que ésta no pudiera celebrarse.

II- ANOMALIAS QUE AFECTAN A LAS PARTES

También se originan anomalías procesales del tipo de las crisis subjetivas por alteración de las circunstancias relativas a las partes: pérdida de la capacidad para ser parte, pérdida de la capacidad procesal, pérdida de la legitimación activa o pasiva, y pérdida de la postulación.

A- PERDIDA DE LA CAPACIDAD PARA SER PARTE

Es el caso de pérdida de la capacidad para ser parte de alguno de los litigantes, es decir, de su personalidad procesal. La categoría engloba tanto la muerte de las personas naturales^{*122} como la extinción (disolución y liquidación) de las personas jurídicas. El fenómeno que entonces se produce, prescindiendo de los raros casos en que la pérdida lleva consigo la extinción del proceso, es el de la sucesión procesal, es decir, el de la entrada en el proceso de partes distintas en sustitución de las que hasta entonces litigaban.

El Derecho positivo contempla este caso como un supuesto de terminación del poder del Procurador, visión excesivamente simplista y limitada. En tal hipótesis, a tenor del art. 9.7, se exige: que el Procurador ponga el hecho en conocimiento del Juez o Tribunal para que se tenga por terminada su representación, pues hasta que no se dicte la providencia correspondiente ésta continua; y que el Juez o Tribunal llame a juicio a los sucesores de las partes fallecidas, fijándoles un plazo para que se personen en los autos (si

no lo han hecho antes), lo que podrán verificar, como es lógico, por medio del mismo Procurador (si lo hubiere), con nuevo poder, o de Procurador distinto. Si no comparecen se efectuará “lo que haya lugar”, según afirma vagamente la Ley, lo que será, sin duda, la declaración o constitución de una situación de rebeldía, con los distintos efectos que tiene según que proceda del demandante (análoga al desistimiento) o del demandado (continuación del proceso) y según que se dé en la primera instancia, en apelación o en un recurso de otra clase.

B- PERDIDA DE LA CAPACIDAD PROCESAL

Es el caso de pérdida de la capacidad procesal de alguno de los litigantes, es decir, de su aptitud para realizar válidamente actos procesales; dicho de otro modo, cuando el litigante, en principio capaz, pierde su capacidad durante el proceso. Pertenecen también a esta categoría los supuestos de alteración en las personas que remediaban la incapacidad del litigante.

El Derecho positivo español configura estas especies, igual que las anteriores, como causas de terminación del poder del Procurador. Por ello dice el art. 9.5 que cesa la representación del Procurador “por haber terminado la personalidad con que litigaba su poderdante”. La expresión es imperfecta porque el concepto de personalidad, literalmente entendido, dejaría fuera las hipótesis, que ahora interesan, de pérdida de la capacidad procesal. Pero, a salvo esta inconveniencia de lenguaje, el pensamiento legal en cuanto al tratamiento de la presente crisis se ve claro, ya que se reconoce que provoca un cambio en el sujeto que actúa, y que habrá que contar con un poder de quien comience a remediar al nuevo incapaz o de quien sustituya a quien ya lo era.

^{*122} Consultar el art. 16 Proyecto, ya citado al tratar de la sucesión procesal.

Ha de hacerse notar que es también crisis de esta clase la recuperación, no ya la pérdida, de una capacidad procesal que antes no existía. Si el interesado recobra la capacidad, por ejemplo, si el menor de edad llega a la mayor edad durante la pendencia de un proceso, es evidente que el planteamiento subjetivo de éste no puede seguir como hasta entonces. Aunque nada diga el Derecho positivo, será preciso entender que en tales hipótesis cesa la representación del Procurador que actuaba por quien remediaba al que fue incapaz y que habrá de llevarse a los autos nuevo poder otorgado por la parte en persona.

C- PERDIDA DE LA LEGITIMACION ACTIVA O PASIVA

Es el supuesto de pérdida de la legitimación activa o pasiva de alguno de los litigantes. La legitimación es necesaria para que un determinado proceso se desarrolle válidamente, pero puede ocurrir que, existiendo en un principio, se pierda durante el curso del litigio. Ello sucederá especialmente cuando desaparezcan las circunstancias en que se basaba la titularidad activa o pasiva de las relaciones jurídicas deducidas en juicio: por ejemplo, el propietario deja de serlo, el tenedor o detentador no lo es ya, el acreedor o el deudor pierden esta condición. No cabe duda de que se está aquí ante una crisis procesal subjetiva de naturaleza afín a las anteriores.

El fenómeno no es conocido con carácter general por nuestra legislación, a no ser que se le englobe en la imprecisa rúbrica de la pérdida de la personalidad de que antes se ha hablado. Sin embargo, el caso más importante, teórica y prácticamente, de pérdida de la legitimación, sí se recoge, también como causa de cesación de la representación del Procurador, en la LEC. El art. 9.4 dice, en efecto, que esta representación cesa “por haber trasladado a otro el mandante sus derechos sobre la cosa litigiosa”: al trasladar estos

derechos se pierde la titularidad de la relación jurídica discutida y, por ende, la legitimación que en la misma se basaba.

Lo primero que se deduce de la norma legal transcrita es que la enajenación del bien litigioso es posible en nuestro Derecho: criterio que se confirma además en vista de lo preceptuado en los arts. 1459.5 (que prohíbe al personal judicial, Abogados y Procuradores, comprar los bienes y derechos que estuvieran en litigio ante el Tribunal en que se ejerzan las respectivas funciones), y 1535 (que reconoce la venta de los créditos litigiosos) del CC. Pero sería erróneo deducir de estas prescripciones que la enajenación del bien litigioso no está sujeta a restricción alguna; por el contrario, se exige para ella la audiencia de la parte contraria y el reconocimiento de la enajenación, por providencia o auto firme, según el art. 9.4 LEC, a lo que el CC añade que son rescindibles los contratos sobre cosas litigiosas cuando se celebren por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente (art. 1291.4).

Si tales requisitos se cumplen, entonces, efectivamente, surge una crisis procesal por pérdida de la legitimación, que se traduce en la necesidad de que cambie el sujeto a que la enajenación afecta y venga a juicio el adquirente del objeto litigioso^{*123}; en caso contrario, la continuación del proceso no sería válida por falta del requisito procesal de la legitimación. Si aquellos requisitos no se cumplen, entonces el proceso no queda afectado y se sigue válidamente entre las partes primitivas, cualquiera que sea la eficacia que extraprocesalmente haya de darse a la enajenación, sirviendo para explicar este fenómeno de la permanencia de las partes iniciales el concepto de la *perpetuatio legitimationis*, que es otra de las repercusiones o consecuencia de la figura general de la litispendencia.

D- PERDIDA DE LA POSTULACION^{*124}

Es el caso de pérdida de la postulación, esto es, de la circunstancia de que ciertos profesionales forenses puedan representar y dirigir a las partes procesales.

Cesando la representación del Procurador, se produce una crisis procesal, siempre que sea ésta la causa y no el efecto del verdadero acaecimiento crítico. Según se sabe, la LEC enumera tales casos de cesación en el art. 9, pero muchos de ellos no son más que el reflejo de los sucesos que determinan verdaderamente la crisis. Como hipótesis que haya que mencionar en este apartado, sólo se deben considerar, por lo tanto: la muerte, la cesación y la renuncia del Procurador, y la revocación del poder.

La muerte del Procurador (art. 9.7 LEC) obliga al Juez o Tribunal a ponerla de oficio en conocimiento del litigante, para que éste, dentro del plazo que se fije, comparezca con nuevo Procurador, bajo apercibimiento de “lo que haya lugar”.

La cesación del Procurador en su oficio (art. 9.2 LEC) obliga a éste a poner el hecho en conocimiento de sus poderdantes, judicial o notarialmente, con anticipación, y hacerlo constar en los autos, pues hasta que no se le tenga por cesado continua en su representación, lo que, sin embargo, puede no resultar procedente en los casos de cesación forzosa, para los que sería preferible recoger la misma solución que en los de muerte del Procurador.

A la renuncia del Procurador a la representación que ostenta o “desistimiento voluntario” (art. 9.2 LEC) le es plenamente aplicable el sistema de la cesación.

La revocación del poder que haga el poderdante (art. 9.1 LEC) puede ser expresa o tácita; la primera exige que conste en los autos y ha de entenderse que impone la

^{*123} Ver el art. 17 Proyecto, ya mencionado al tratar de la sucesión procesal.

^{*124} Ver el art. 30 Proyecto, ya citado al tratar de la representación procesal.

comparecencia de nuevo Procurador sin solución de continuidad; la segunda, se entiende tan pronto como se persone en los autos otro Procurador con nombramiento posterior.

Cesando la dirección del Letrado se produce igualmente una crisis procesal subjetiva. Ha de observarse aquí, igualmente, que la crisis no será tal si esta cesación es consecuencia de otro acaecimiento procesal distinto: por ejemplo, de la terminación del litigio, normal o anormalmente. Ahora bien, por la flexibilidad con que en nuestro Derecho se realiza el nombramiento y la separación de Letrados, esta alteración no suscita dificultades, ya que en cualquier momento es admisible el cambio de Abogado, sin que ello ejerza, en principio, otras repercusiones sobre el curso del proceso.

2- CRISIS OBJETIVAS : INCIDENTES¹²⁵

El segundo grupo de crisis procesales es el que, por referencia al objeto del proceso, puede recibir la denominación de crisis objetivas, también conocidas como incidentes.

El ordenamiento jurídico intenta evitar en la manera de lo posible la alteración del objeto del proceso a través de la prohibición de la *mutatio libelli*. Sin embargo, el criterio restrictivo no puede llevar hasta el extremo de extinguir toda clase de cambios objetivos²⁶³.

Así, distinguiremos entre cuestiones incidentales que dan lugar a incidentes que no tienen señalada tramitación especial y cuestiones incidentales que dan lugar a incidentes con tramitación especial o específica, los llamados superincidentes.

I- SIN TRAMITACION ESPECIFICA

Las cuestiones incidentales que no tienen señalada tramitación especial son, en un primer examen, reconducidas al grupo principal y resueltas en el trámite de dictar sentencia

sobre el fondo, pero con anterioridad a ello, por lo que todas las cuestiones que son reguladas por el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts., 741 a 761), para casi toda clase de juicios, son resueltas en el juicio de ínfima cuantía (así como también en el de inferior cuantía o cognición) dentro del trámite normal, sin duda por el carácter concentrado del procedimiento y por la consideración innegable de que cualquiera que fuese la tramitación que se quisiera dar al incidente, nunca resultaría más rápida que la del juicio principal²⁶⁴.

II- DE TRAMITACION ESPECIFICA : SUPERINCIDENTES

No obstante el criterio general mantenido sobre la tramitación y resolución conjunta de los incidentes en la fase declarativa del juicio verbal, los denominados superincidentes o incidentes de tramitación especial se resuelven mediante un procedimiento específico y concreto (distinto para cada supuesto de superincidente), produciendo efectos, bien de paralización del pleito principal para su tramitación y resolución previa, bien de simultánea tramitación en pieza separada, según los supuestos.

Son superincidentes o incidentes especiales en este juicio los siguientes: la recusación, los conflictos de jurisdicción, sus homónimos de competencia, las cuestiones de competencia, la acumulación de autos, la prejudicialidad excluyente, en cierta manera la determinación de la cuantía litigiosa y el beneficio de justicia gratuita.

El incidente especial de determinación de la cuantía litigiosa ya fue expuesto al analizar el trámite procesal de la oposición del demandado^{*126}; el del beneficio de justicia gratuita será tratado más adelante, con ocasión de los efectos económicos del proceso; por

^{*125} En cuanto a las cuestiones incidentales, ver los arts. 387 a 393 Proyecto.

²⁶³ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 463.

²⁶⁴ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., pág. 637.

ello, analizaremos aquí los restantes superincidentes: recusación, conflictos de jurisdicción y de competencia, cuestiones de competencia, acumulación de autos y prejudicialidad excluyente, ya mencionados.

A- RECUSACION^{265*127}

Tras haberse realizado el llamamiento al demandado, cualquiera de las partes tiene ya conocimiento de cual va a ser el órgano jurisdiccional, atribuido mediante reparto, que va a conocer del litigio. Por tanto, a partir de ese momento hasta el de visto el caso para sentencia (art. 193.I LEC), cualquiera de las dos podrá, tan pronto como tenga conocimiento de la concurrencia de la causa legal, recusar al Juez, Secretario o demás funcionarios judiciales (Oficiales, Auxiliares o Agentes), si previamente no se han abstenido (arts. 217, 461.1 y 462.2 LOPJ y 188 LEC). Así lo establecen los arts. 223.1 LOPJ y 192 LEC, de forma que la recusación se propondrá en el primer escrito que presente el recusante, cuando la causa en que se funde fuere anterior al pleito y tenga conocimiento de ella (por tanto, creemos que, en el caso del demandante, sólo podrá recusar en su papeleta inicial si se tratara de una población en que sólo existiere un órgano jurisdiccional civil –JP o JPI–, de forma que ya supiese quién iba a conocer de su pleito); cuando fuere posterior o, aunque anterior, no hubiese tenido antes conocimiento de ella el recusante, la deberá proponer tan pronto como llegue a su noticia. No justificándolo así, se desestimarà la recusación.

^{*126} Consultar en el Proyecto, el art. 255.3, ya expuesto al tratar de la oposición procesal.

²⁶⁵ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 96, págs. 642 y ss.; Programa y Esquemas...cit., pág. 52.

^{*127} En cuanto a la recusación en el nuevo Proyecto, consultar los arts. 99, 101 (ya citados) y 107 a 123. También los arts. 190, 191 y 192 sobre recusación después del señalamiento de la vista o de la vista misma.

La recusación, al igual que la abstención, se encuentra regulada por el Capítulo V del Título II del Libro III de la LOPJ (arts. 217 a 228), en lo referente a Jueces y Magistrados, y por los arts. 461 y 462 LOPJ en cuanto a Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales. También son de aplicación algunos de los arts. del Título V del Libro I de la LEC (arts. 188 y ss.), solamente los que no hayan resultado implícitamente derogados por la LOPJ. La recusación del Juez o Magistrado provocará un incidente especial, que, según el art. 201 LEC, no detendrá, en principio, el curso del pleito (aunque en el caso del juicio verbal, como veremos, esto no siempre es así). Su régimen jurídico será, a continuación, objeto de análisis.

Las causas legales de recusación se encuentran tasadas en los arts. 219 y 220 LOPJ (el 189 LEC ha sido implícitamente derogado por ellos). Cuando el recusado sea un JPI, instruirá el incidente el que legalmente le sustituya (224.1 d) LOPJ), y siendo un JP se estará a lo dispuesto en el 224.2. Competente para decidir el incidente será el propio instructor (225.4 LOPJ). Legitimados para plantear la recusación en los asuntos civiles estarán únicamente las partes y el Ministerio Fiscal (218,1º LOPJ). En cuanto a la postulación, si el escrito lo firma el Procurador (en el caso de que se haga uso de él), éste deberá acreditar poder especial, no siendo necesaria la firma de Letrado por no ser preceptiva su intervención en el juicio verbal (223.2 LOPJ). Respecto a la forma, se hará por escrito, documentado en su caso, y firmado por el recusante, que deberá ratificarse a presencia judicial (223.2 LOPJ). Entrando ya en el procedimiento propiamente dicho, formulada la recusación, pasará la causa al conocimiento del sustituto y se remitirá, en su caso, el escrito y documentos de la recusación al instructor del incidente, el cual entregará copia (del escrito y documentos) al recusado, requiriéndole para que en el plazo de tres días informe sobre la recusación (225.1 y 2 LOPJ). Si el recusado aceptare como cierta la

causa de recusación, se resolverá el incidente sin más trámites (225.3 LOPJ). Sin embargo, en el juicio verbal, si el Juez recusado no aceptare en el acto la causa como cierta, pasarán las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal; el instructor acordará que comparezcan las partes a su presencia el día y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, oídas las partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolverá sobre si ha o no lugar a la recusación en el mismo acto (226 LOPJ). La resolución que desestime la recusación acordará devolver el conocimiento del pleito o causa al recusado en el estado en que se hallare. Esta resolución llevará consigo la condena en costas del recusante, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resolución que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podrá imponer a éste una multa de 5.000 a 100.000 pts.; la resolución estimatoria de la recusación apartará definitivamente al Juez o Magistrado del conocimiento del pleito o causa. Continuará conociendo de él, hasta su terminación, aquél a quien corresponda su sustitución (227 LOPJ). Contra la decisión de la recusación no se dará recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa, la posible nulidad de ésta (228 LOPJ).

A la recusación del Secretario será aplicable el Capítulo V, Título II, del Libro III de la LOPJ; la pieza de recusación se instruirá por el propio Juez y se fallará por aquél (461.2 LOPJ). En cuanto a los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales, el Juez adoptará, con audiencia del funcionario, en su caso, las medidas que procedan para garantizar su imparcialidad en las actuaciones judiciales (462.2 LOPJ).

B- CONFLICTOS DE JURISDICCION²⁶⁶

Los conflictos de jurisdicción se plantean entre la Jurisdicción y la Administración y entre la Jurisdicción ordinaria y la militar. En cualquier caso, los conflictos pueden ser positivos si ambos pretenden conocer, o negativos si ninguno quiere conocer del asunto. Los conflictos de jurisdicción se regulan por los arts. 38 a 41 LOPJ y por la LO 2/87, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.

Los conflictos entre Jurisdicción y Administración son resueltos por el Tribunal de Conflictos, que se compondrá por el Presidente del TS, dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y tres Consejeros permanentes del Consejo de Estado (art. 38 LOPJ). Si el conflicto es positivo, puede plantearlo, a lo que a nosotros interesa en este trabajo, el Juez (con alguna limitación si es el de Paz, según el art. 2 de la Ley de Conflictos) o Tribunal (si se tratara de la segunda instancia) del juicio verbal; el procedimiento a seguir está regulado en el Cap. I de la Ley de Conflictos y comienza por la solicitud del Juez de un informe al Ministerio Fiscal, visto el cual, si decide formalizar el conflicto, dirigirá un requerimiento fundado de inhibición, a la vista del cual el órgano requerido dará audiencia a los interesados, resolviendo si mantiene su jurisdicción o se inhibe, todo ello sin recurso alguno. Si es negativo, puede plantearlo el interesado (demandante), en quince días, mediante escrito dirigido al Tribunal de Conflictos.

Cuando el conflicto se plantea entre la Jurisdicción ordinaria y la militar, se resolverá por la Sala de Conflictos, que se compondrá por el Presidente del TS, dos Magistrados de la Sala de lo Militar del TS y dos del orden jurisdiccional en conflicto (en este caso, Civil) (art. 39 LOPJ), a través del procedimiento regulado en el Cap. II de la LOCJ.

²⁶⁶ ARAGONESES ALONSO, Programa y Esquemas...cit., págs. 52 y 53; GUASP, Derecho...cit., Tomo I,

En cuanto a la suspensión del asunto principal, ésta se producirá (en los dos casos de conflictos de jurisdicción) tan pronto como se reciba el oficio de inhibición (arts. 11.1 y 24 LOCJ).

C- CONFLICTOS DE COMPETENCIA²⁶⁷

Los conflictos de competencia son los que se plantean entre órganos que corresponden a distintos órdenes jurisdiccionales. Se regulan en los arts. 42 a 50 LOPJ y se resuelven por una Sala especial del TS, compuesta por el Presidente del TS y por dos Magistrados, uno de cada orden en conflicto (uno de ellos de la Sala de lo Civil). También pueden ser positivos o negativos y además de oficio pueden también ser planteados por el Ministerio Fiscal o a instancia de parte. Podrá ser planteado mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que se refiera a la ejecución del fallo. Su procedimiento se regula en los arts. 45 y ss. LOPJ.

D- CUESTIONES DE COMPETENCIA

Las cuestiones de competencia son aquellos conflictos que se plantean ante la duda en la aplicación de las normas de competencia, de tal forma que dos o más órganos del mismo orden jurisdiccional y de igual grado pretenden intervenir (cuestión positiva) o no intervenir (cuestión negativa).

Como el Juez del juicio verbal puede declararse de oficio competente o incompetente objetiva o territorialmente para conocer del asunto, puede plantearse una de estas cuestiones de competencia (tanto objetiva como territorial) si otro órgano del mismo

págs. 106 y ss..

²⁶⁷ ARAGONESES ALONSO, Programa y Esquemas...cit., pág. 53; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 127 y ss..

orden y grado igualmente se cree competente o incompetente. Es más, en el juicio verbal, estas cuestiones pueden plantearse tanto de oficio como a instancia de parte, a pesar de que el art. 74 LEC diga que “en ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia en los asuntos civiles”.

Establece la Ley que las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales (el superior común de dos JP del mismo partido judicial es el JPI, el de dos JP de distinto partido y misma provincia la AP, el de dos JPI de la misma provincia la AP, el de dos JP o JPI de distintas provincias y misma CA el TSJ, el de dos AP de la misma CA el TSJ, y el de órganos que no tengan otro superior común el TS) (arts. 99, 110 LEC y 51.1 LOPJ). En la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere competente (51.2 LOPJ).

Sin embargo, no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí, ya que el superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, ordenando al inferior que le remita los autos o remitiéndoselos él mismo (52 LOPJ y 82 LEC). El inferior no puede discutir la competencia del superior, sino sólo exponerle las razones que alegue para que el superior resuelva lo que estime procedente (81 LEC). El único posible recurso sería el que las partes acudan a quien esté por encima del superior, si lo hay (83 LEC).

En lo que se refiere a las cuestiones de competencia territorial a instancia de parte, éstas pueden plantearse a través de dos mecanismos. Así pues, las partes pueden suscitar la cuestión de competencia territorial o bien ante el órgano jurisdiccional a quien estiman incompetente, pidiéndole “que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos al

tenido por competente” (declinatoria), o bien ante el órgano jurisdiccional a quien estimen competente, pidiéndole “que dirija oficio al que se estime no serlo para que se inhiba y remita los autos” (inhibitoria) (art. 72 LEC), tratándose, en el primer caso, de una cuestión de competencia simple y en el segundo de un verdadero conflicto entre dos órganos de la Jurisdicción ^{*128}. Los dos medios son incompatibles, es decir, el que opte por uno no puede acudir al otro simultánea o sucesivamente (art. 77), y debe expresar que no lo ha hecho al promover la cuestión, incurriendo en la condena en las costas de la competencia, aunque triunfe en ella, si es falsa su declaración (art. 78). Con carácter general, en la mayoría de los juicios, tanto la declinatoria como la inhibitoria suspenden, en virtud de su planteamiento, el desarrollo de los procesos a que afectan, salvo las medidas de carácter necesario cuya omisión pueda producir perjuicio irreparable (art. 114), pero no invalidan los actos anteriores a su iniciación (art. 115), excepto, como es lógico, la sentencia definitiva si ya se hubiere dictado. Sin embargo, en el juicio verbal las declinatorias se resuelven mediante el sistema que en el mismo vimos está reservado a las excepciones procesales de las partes, es decir, resolución en la sentencia definitiva con carácter previo al fondo del asunto, de forma que no es exigible que el Juez decida sobre su competencia

^{*128} En el nuevo Proyecto sólo se conserva la declinatoria (arts. 59, 63 y ss.), debiendo indicar el nuevo tribunal que se considera competente. Esta declinatoria se puede también presentar ante el tribunal (es decir, órgano) del domicilio del demandado, que lo remitirá al que esté conociendo (si éste es distinto de aquél). La declinatoria se propondrá en los cinco días siguientes a la citación para la vista, suspendiendo el curso del asunto principal. El actor también podrá denunciar la falta de competencia territorial del órgano propuesto por el demandado:

“Art. 60. Conflicto negativo de competencia territorial.

1. Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta de competencia territorial se hubiere adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial.

2. Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiese adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal a quien se remitieran las actuaciones podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando ésta deba determinarse en virtud de reglas imperativas.

3. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al tribunal inmediato superior común, que decidirá por medio de auto, sin ulterior recurso, el tribunal al que corresponde conocer del asunto, ordenando, en su caso, la remisión de los autos y emplazamiento de las partes, dentro de los diez días siguientes, ante dicho tribunal.”

territorial por medio de una resolución anterior y distinta de la precitada sentencia. Aunque ésta es la opinión comúnmente asumida por la doctrina²⁶⁸ y es la que nosotros también seguimos, no ha faltado la discusión debido a que no existe un precepto que específicamente regule esta cuestión para el juicio verbal, de forma que los autores que propugnan esta segunda solución (resolver la declinatoria en el juicio verbal con carácter previo a la sentencia y por lo tanto en resolución distinta a aquélla) lo hacen aplicando las reglas generales de la declinatoria²⁶⁹, apoyándose además en la existencia en este juicio de incidentes de previo pronunciamiento (a modo de ejemplo, cuando haya duda sobre la cuantía litigiosa –art. 496 LEC–, o cuando se plantea la recusación del Juez –art. 226 LOPJ–).

Las inhibitorias se resuelven mediante un sistema mucho más complicado (art. 79). En primer lugar, deben ser propuestas por escrito, con o sin firma de Abogado, ya que el juicio verbal está dispensado de dirección técnica, o mediante comparecencia, aunque siempre con intervención del Ministerio Fiscal (art. 84), ante el Juez o Tribunal a quien la parte estime competente, para que dicho Juez o Tribunal, oído, dentro de tercero día, el Ministerio Fiscal, si no es el propio Ministerio Fiscal quien, como parte, ha propuesto la competencia (art. 85), decida requerir, esto es, “librar oficio inhibitorio” al órgano jurisdiccional que entiende en el asunto (art. 86); contra su negativa cabe recurso de apelación, si procede de un Juez de Paz o Juez de Primera Instancia (art. 87); si se accede al requerimiento, éste se practica por medio de oficio al que ha de acompañar testimonio

²⁶⁸ MANRESA Y NAVARRO, José María; Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I, pág. 447. 1952, Madrid; GUASP, Jaime; Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I, pág. 396. Editorial Aguilar, 1948, Madrid; DE LA ESCALERA GAYÉ, Tratado...cit., 182), pág. 123; ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 663 y 664, y también en Los incidentes en el juicio verbal, Revista de Derecho Procesal, págs. 337 y 338. 2º trimestre, 1951; SOTO NIETO, F.; Derecho vivo: Jurisprudencia comentada, Revista de Derecho Judicial, Tomo I, págs. 538 y 539. 1970, Madrid.

²⁶⁹ Así por ejemplo, SANTOS VIJANDE, Declinatoria...cit., págs. 206 y ss..

del escrito (o comparecencia) en que se haya pedido, de lo expuesto por el Ministerio Fiscal, del auto que se hubiere dictado y de lo demás que el Juez o Tribunal estime conducente para fundar su competencia (art. 88). El requerimiento debe ser contestado por el órgano judicial requerido, el cual, a tal efecto, suspende el procedimiento, oye a las partes que hayan comparecido ante él en un plazo de tres días, y al Ministerio Fiscal si las partes no están conformes con la inhibición (arts. 89 y 90), y dicta auto inhibiéndose o negándose a hacerlo (art. 90); si se inhibe, su resolución, que es susceptible de los mismos recursos que la negativa inicial requirente (art. 91), provoca la remisión de los autos al Juez o Tribunal que hubiera propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes por quince días (art. 92); si se niega, comunica su resolución al requirente, acompañando testimonio de los escritos de los interesados, del Ministerio Fiscal, en su caso, y de lo demás que crea conveniente (art. 93), y exigiendo que se le conteste si queda en libertad o debe remitir los autos al que ha de decidir la competencia (art. 94). Es preciso, por ello, un trámite de insistencia reducido, no obstante, a un auto que ha de dictar, en plazo de tres días, el Juez o Tribunal requirente desistiendo de la inhibitoria o insistiendo en ella (art. 95); si desiste, son admisibles los mismos recursos que en los otros casos de extinción del conflicto (art. 96), y debe comunicarse la resolución, por medio de oficio, al requerido, remitiéndole lo actuado para que lo una a los autos y continúe el procedimiento (art. 97); si insiste, lo comunica, asimismo, al requerido y uno y otro Juez o Tribunal envían sus actuaciones, por el primer correo, al superior a quien corresponda dirimir la contienda (art. 98), con emplazamiento de las partes por diez o cinco días según que la remisión se haga a un órgano colegiado o unipersonal (art. 100). La inhibitoria entra así en sus dos últimas fases dedicadas a sustanciarla y decidirla, fases que tienen la particularidad de desarrollarse ante el inmediato superior común de los dos órganos en conflicto.

La sustanciación y decisión ante un JPI comprende el informe del Ministerio Fiscal en el plazo de tres días, la audiencia de las partes, si se han personado, en una comparecencia que ha de celebrarse en un plazo no superior a seis días, y la emisión de sentencia decidiendo la competencia en el plazo de tres días, sentencia contra la que no cabe recurso alguno (art. 101). La sustanciación y decisión ante una AP, TSJ o TS abarca el informe del Ministerio Fiscal en un plazo de cuatro días (art. 103), la intervención de las partes, si se hubieren personado, mediante instrucción, por tres días improrrogables, y vista, con Abogados o sin ellos, dentro de los ocho días siguientes (art. 104), y la emisión de sentencia en el plazo de cuatro días (art. 105), admitiéndose, si procede de una AP o de un TSJ, recurso de casación, “después de fallado el pleito en definitiva”, y denegándose, si procede del TS, todo recurso (art. 106), si bien, en este último caso, la sentencia ha de publicarse, dentro de los diez días, en el BOE (art. 107). En todos los casos la resolución de la competencia, si no se declara mal formada por vicios de forma (hipótesis silenciada en la Ley), decide a favor de uno de los Jueces o Tribunales en conflicto, no de un tercero; al órgano declarado competente se le remiten las actuaciones y la certificación de la sentencia, y al otro se le comunica la resolución (art. 109); en cuanto a las costas, son de oficio, a no ser que hubiera notoria temeridad, en cuyo caso pueden imponerse a las partes, determinando, en su caso, la proporción en que deban pagarlas, y cuidando el decisor de que se haga efectiva la condena (art. 109).

E- ACUMULACION DE AUTOS²⁷⁰

Lo que se pretende es acumular o reunir pretensiones que se han hecho valer en procesos distintos. El fundamento de la acumulación de autos es la conexión entre las pretensiones deducidas. Se regula en los arts. 160 y ss. LEC^{*129}.

La acumulación de autos sólo cabe entre juicios de la misma naturaleza o clase y no procede cuando están en distintas instancias (art. 165), pudiéndose solicitar en cualquier estado del pleito antes de la citación para sentencia definitiva (art. 163) (definitiva o firme, debería decir este art. 163, para que no pueda pensarse que no cabe acumulación en la última instancia, en la cual ya no puede recurrirse y por tanto la sentencia que se va a dictar será firme; esto es lo que ocurre en la segunda instancia del juicio verbal, en la que sí puede producirse acumulación, aunque siempre respetando que los pleitos estén en la misma instancia).

Se plantea a instancia de parte legítima (art. 160).

Las causas se recogen en el art. 161.

El procedimiento varía según sea el mismo órgano que el que está conociendo de los pleitos que se pretenden acumular o estos se tramiten ante Juzgados o Tribunales diferentes. En el primer caso, el procedimiento se regula en los arts. 168 a 170 LEC. En el segundo, hay que tener en cuenta que el escrito solicitando la acumulación ha de presentarse al órgano jurisdiccional en el que radique el pleito más antiguo (art. 171), siendo en este caso el procedimiento a seguir muy parecido al de la inhibitoria, aunque sin intervención del Ministerio Fiscal (arts. 172 y ss.).

²⁷⁰ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 95, págs. 638 y ss., y Programa y Esquemas...cit., pág. 53; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 236 y ss.

^{*129} En el Proyecto se regula en los arts. 74 y ss., y en concreto, la del juicio verbal se recoge en el art. 80, ya transcrito al tratar de los requisitos objetivos del mismo.

En cualquier caso, si se acuerda la acumulación de autos, las distintas pretensiones inicialmente planteadas en procesos distintos se tramitarán conjuntamente, suspendiéndose en su caso el procedimiento que se encuentre más avanzado hasta que ambos lleguen al mismo estado (art. 184 y ss.).

F- PREJUDICIALIDAD EXCLUYENTE²⁷¹

Hay que tener en cuenta que el sistema español para resolver la cuestiones prejudiciales es un sistema mixto, es decir, mezcla el sistema de integración o prejudicialidad no devolutiva con el de separación o prejudicialidad devolutiva. De esta forma, el art. 10 LOPJ establece que a los solos efectos prejudiciales (es decir, sin efecto de cosa juzgada), los órganos jurisdiccionales resolverán de todas aquellas cuestiones que se les planteen; no obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal determinará la suspensión del procedimiento (es la llamada prejudicialidad excluyente)^{*130}.

Por tanto, la prejudicialidad penal en el proceso civil tiene que ser resuelta por el orden penal según el art. 10 LOPJ, y en ello coinciden los arts. 362 y 514 LEC y 114 LECr. Sin embargo, la posible discrepancia que algunos quieren encontrar entre la regulación de la LOPJ y las Leyes procesales radica en que mientras la LOPJ y la LECr establecen la suspensión del procedimiento civil en el estado en que se encontrara cuando se promueva la cuestión, la LEC (en su art. 362) dispone que la prejudicialidad penal provoca la suspensión del fallo. Sin embargo, al tratar de la prejudicialidad como límite de la jurisdicción ya explicamos que entendemos que no existe ninguna contradicción.

²⁷¹ ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 97, págs. 646 y ss., y Programa y Esquemas...cit., pág. 53; GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 102.

^{*130} En cambio, en el Proyecto de LEC no es solamente la prejudicialidad penal la que puede producir suspensión del proceso civil, y además tampoco la produce siempre (arts. 40 a 43).

Pese a que el art. 10 LOPJ establece como única excepción al sistema de integración la prejudicialidad penal, el mismo tratamiento recibe la prejudicialidad constitucional de normas post-constitucionales²⁷² y la prejudicialidad de Derecho Comunitario.

3- CRISIS DE LA ACTIVIDAD : PARALIZACION DEL PROCESO²⁷³

El tercer y último grupo de crisis procesales es el que hace referencia a la actividad que en el proceso se desarrolla, y en concreto afecta al tiempo de los actos.

De todas las especies de crisis procesales por razón de la actividad, la más importante y que puede afectar al juicio verbal, es la que se produce cuando el proceso no sigue su curso normal por mantener una quietud anormal, esto es, por sufrir lo que cabe llamar genéricamente una paralización.

Las causas de paralización son muy numerosas y pueden sistematizarse empleando otra vez las categorías de los sujetos, del objeto y de la actividad, en cuanto factores determinantes de la paralización de que se trate.

I- INTERRUPCION

Cuando la paralización del proceso se debe a razones que afectan directa y estrictamente a los sujetos procesales, debe hablarse de interrupción del proceso mismo (ej. por cambio del Juez o de las partes por muerte del poderdante o del Procurador, siempre y cuando estos cambios den lugar a una paralización del proceso). Si tras esta paralización el

²⁷² Es importante ver al respecto la obra de PÉREZ GORDO, Alfonso; La Prejudicialidad Penal y Constitucional en el proceso civil. JM Bosch Editor. 1982, Barcelona.

²⁷³ GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 473 y ss..

proceso se reanuda, éste se iniciará desde el principio, ya que los actos anteriores son inválidos.

II- DETENCION

Cuando la paralización del proceso se funda en una razón que afecta al objeto del proceso, entonces se está ante un nuevo supuesto de paralización, menos conocido por la doctrina y el Derecho positivo, pero no menos importante, que puede recibir el nombre de detención procesal (ej. cuando se plantea una cuestión prejudicial penal, que como ya vimos supone una paralización del proceso, pues supone un obstáculo a la continuación del proceso principal). Si tras la detención se reanuda el proceso, comienza a correr un nuevo plazo procesal, no necesariamente el mismo anterior, sino otro distinto, de acuerdo con la transformación objetiva que hay que suponer en el proceso.

III- SUSPENSION

Finalmente, cuando la paralización del proceso se debe a razones derivadas de los actos procesales mismos, independientes de los sujetos y objetos procesales, se está ante una anomalía limitada al acaecimiento procesal estricto, para el que conviene reservar el nombre de suspensión.

La suspensión se puede fundar exclusivamente en dos circunstancias: la fuerza mayor y la voluntad de los litigantes^{*131} que convienen y acuerdan la paralización del

^{*131} Sobre este motivo, ver el art. 19.4 Proyecto:

“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordado, mediante auto, por el tribunal, siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.”

proceso, cuando ello se admite por nuestro Derecho, sin tocar ni la posición de los sujetos ni la del objeto tal como en el procedimiento se ha manifestado.

La fuerza mayor actúa como motivo de suspensión de las vistas, según el art. 323 LEC, que enumera además supuestos de interrupción y de detención del proceso, y según el art. 727 para el caso concreto del juicio verbal, e igualmente es mencionada en los actos de prueba, a tenor del art. 554; la voluntad de los litigantes recoge el resto de hipótesis en las que cabe paralizar el curso de los autos por concorde asentimiento de todas las partes que intervienen en el mismo (así lo señala el art. 727 LEC, referido en concreto a la comparecencia del juicio que nos ocupa). La reanudación del proceso tras esta suspensión, supondrá que éste se retomará en el punto en que se quedase en el momentos de producirse la suspensión, por lo que los actos procesales producidos anteriormente a la misma conservan su validez.

I- TERMINACION²⁷⁴

Llegamos ya a la última fase del procedimiento del juicio verbal, la de terminación.

La terminación puede producirse de manera normal a través de sentencia o de manera anormal por medio de la renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción o caducidad de la instancia.

1- TERMINACION NORMAL : SENTENCIA

La terminación normal de este juicio verbal es una sentencia, a la que pueden preceder o no diligencias para mejor proveer.

²⁷⁴ En general, en la terminación del proceso hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 477 y ss..

Debido a los principios de sencillez, brevedad, inmediación judicial y concentración informadores del juicio verbal, podría plantearse la posibilidad de que la decisión se basase en criterios de equidad. Esta opción tendría su base en una constante histórica (vimos como ya en Las Partidas se establece un juicio de equidad que se mantiene posteriormente con modificaciones en algunas Leyes y Ordenanzas) y en alguno de los ordenamientos procesales extranjeros (en concreto, en el Codice di Procedura Civile Italiano, en sus arts. 113 y 114, ya examinados en la parte de Derecho Comparado de este trabajo).

I- DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER^{275*132}

Antes de dictar sentencia, el Juez puede acordar la práctica de diligencias para mejor proveer.

En realidad, estas diligencias para mejor proveer son una actividad probatoria llevada a cabo por el Juez, ya que el Derecho español permite que excepcionalmente sea también el Juez, cuando así lo estime necesario, quien asuma la iniciativa probatoria. En la práctica, muchas veces estas diligencias para mejor proveer son utilizadas por el Juez para practicar la prueba propuesta por las partes que no fue posible practicar dentro del período probatorio, dado lo breve de su plazo; sin perjuicio de ello, puede el Juez ordenar estas diligencia, cuando, no habiendo quedado pendiente de realización ninguna de las pruebas propuestas, considere conveniente la práctica de alguna prueba que le sugiera su propio celo como juzgador, para así disponer de todo el material probatorio que considere necesario para una adecuada cognición judicial (sin que por ello deba sustituir en bloque la

²⁷⁵ ARAGONESES ALONSO. Técnica...cit., párrafo 72, págs. 567 y ss.; véase al respecto la monografía de MARTÍN OSTOS, Las Diligencias para mejor proveer en el Proceso Civil. 1981. Madrid.

^{*132} Ver el art. 429.1 Proyecto, ya transcrito al tratar de la prueba.

iniciativa probatoria que en el proceso corresponde a las partes conforme al principio de aportación de parte que rige nuestro sistema procesal civil).

El régimen de estas diligencias para mejor proveer está inadecuadamente emplazado en los arts. 340, 341 y 342 LEC (dentro de la Sección III sobre votaciones y fallos del Título VII del Libro I), y tres son las características fundamentales que imprimen a esta excepcional iniciativa del órgano jurisdiccional. Primera, la de producirse en el momento final del proceso, o, como la Ley dice, después de la vista o de la citación para sentencia y antes de pronunciar el fallo. Segunda, la de poder referirse a cualquier clase de pruebas. Tercera, que la resolución y ejecución de estas diligencias es puramente discrecional para el Juez, quien está sujeto, sin embargo, actualmente, a la limitación de un tiempo objetivamente marcado que no puede ser superior al establecido en el proceso para la práctica de la prueba (doce días o el que corresponda si se acordó el extraordinario de prueba).

Además, el art. 342 añade que mientras quedará en suspenso el término para dictar sentencia, desde el día en que se acuerde la providencia para mejor proveer (contra la que no cabe recurso alguno) hasta que sea ejecutada o transcurra el plazo para ello y tres días más, durante los que se pondrán de manifiesto a las partes los resultados de las diligencias, las cuales podrán alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia.

II- SENTENCIA^{*133}

La sentencia es la forma normal de terminación del juicio verbal, por lo que la analizaremos en cada uno de sus aspectos.

A- CONCEPTO

La sentencia es el acto del órgano jurisdiccional en que el Juez emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte con el Derecho objetivo y, en consecuencia, decide estimarla o desestimarla, poniendo fin al proceso.

Puede ocurrir también que el órgano jurisdiccional no pueda entrar a decidir sobre la pretensión porque falte a su juicio algún requisito procesal, dictando entonces una sentencia absolutoria de la instancia.

B- GENESIS

Para que la petición sea atendible, conforme a la obligación estatal de administrar justicia, ésta debe ser admisible y fundada²⁷⁶.

a- ADMISIBILIDAD

En primer lugar, el Juez, antes de entrar en el fondo del asunto, debe examinar si se cumplen los requisitos de admisibilidad de la petición, que prácticamente vienen a ser los mismos que los ya analizados como requisitos de admisibilidad de la demanda, aunque deben añadirse los siguientes: la legitimación, aunque sólo cuando la misma aparezca claramente incumplida de un somero examen del proceso, ya que, al ser un requisito constitutivo de la acción, su examen debe realizarse en el fondo; y cuando haya sido alegada, el resto de la oposición procesal que el demandado pudo haber planteado (requisitos del litisconsorcio, existencia de cosa juzgada, litispendencia o ilicitud del objeto, y reclamación previa en la vía gubernativa).

²⁷⁶ Consultar los arts. 216, 217 y 219 a 221.

Por regla general, la falta de alguno de estos requisitos, tanto de los que son examinables de oficio como los que sólo lo son un vez alegados, hace innecesario continuar el análisis, ya que el Juez debe dictar una sentencia de absolución en la instancia. Sin embargo, alguno de los requisitos que señalábamos como necesarios para la admisibilidad de la demanda no impiden, una vez inobservados, dictar una resolución sobre el fondo: de esta forma, creemos que la falta de reparto no hace al proceso nulo, anulable o inexistente, sino que sólo da lugar a una corrección disciplinaria, a pesar de la derogación por la LO 16/94, de 8 de noviembre, del art. 433 LEC y por la Ley 10/92 de los arts. 434, 435 y 436 LEC, en los que así se expresaba claramente, ya que no existe ningún otro precepto que disponga expresamente lo contrario.

En lo que a la incompatibilidad subjetiva se refiere, si el Juez la observa en este momento, debe abstenerse.

b- FUNDABILIDAD

Cuando la petición es admisible por cumplirse los requisitos anteriores de admisibilidad, se procede al estudio del fondo, es decir, se analiza si la petición es fundada, para lo cual el Juez debe resolver sobre si se da el hecho constitutivo de la acción que el demandante ejercita, y si existen o no hechos impeditivos, extintivos o excepciones sustanciales.

Para el análisis del hecho constitutivo de la acción ejercitada se requiere ver: primero, si la consecuencia jurídica pretendida coincide con la consecuencia jurídica de una norma legal, invocada o no expresamente por la parte (recordemos el principio jurídico “iura novit curia”); segundo, si los hechos alegados coinciden con el supuesto abstracto de

²⁷⁶ Así lo explica ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., págs. 572 y ss..

una norma legal; tercero, si los hechos alegados como constitutivos de la pretensión ejercitada han sido probados. Para esto último, no basta con la simple descripción de la prueba, sino que es necesario efectuar la crítica y apreciación de la misma, lo que, si bien está facilitado por el sistema de apreciación conjunta, ésta nunca puede suponer la innecesariedad de la valoración de cada uno de los elementos probatorios en concreto.

En cuanto a los hechos impeditivos y extintivos, debemos decir que, hayan o no sido alegados por el demandado, el Juez puede apreciarlos de oficio.

Sin embargo, las excepciones sustanciales no pueden ser apreciadas por el Juez hasta que no hayan sido expresamente alegadas por el demandado. En caso positivo, es decir, de ser apreciadas, el Juez examinará si existen contraexcepciones alegadas y probadas por el actor.

En estos supuestos, es decir, existencia de un hecho impeditivo, extintivo, o de una excepción alegada y no destruida, el Juez desestimaré la demanda, dictando sentencia absolutoria sobre el fondo.

El mismo tratamiento dará el Juez al supuesto de reconvencción que implica en realidad, como hemos dicho, la resolución de otro litigio en el mismo procedimiento.

Finalmente, y en función del resultado del juicio, estudiará el Juez lo aplicable al caso en materia de costas, materia que analizaremos más adelante a su debido momento.

C- REQUISITOS INTRINSECOS^{*134}

Conforme se establece en el art. 359 LEC, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Este precepto, en relación con el art. 361, establece la necesidad de exhaustividad de las sentencias, la claridad de las mismas y la congruencia.

Junto a estos tres requisitos intrínsecos de la sentencia, podemos apuntar el de su necesaria motivación, a tenor de lo ordenado por el art. 120.3 CE.

a- MOTIVACION

La conveniencia de motivar, razonar o fundamentar en general todas las resoluciones judiciales se refleja, con una mayor o menor exigencia, en el art. 248 LOPJ.

Sin embargo, cuando se trata de sentencias la fundamentación viene exigida por el art. 120.3 CE. Como ha declarado el TC, la fundamentación tiene relación “de una manera directa con el principio del Estado democrático del Derecho” (art. 1º de la CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional apoyada esencialmente en el

^{*134} Ver al respecto el art. 218 Proyecto:

“Artículo 218. Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación.

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”

carácter vinculante para ésta de la Ley (art. 117.1 CE) (SSTC 55/87, 131/90, 22/94 y 13/95, entre otras).

En definitiva, la motivación permite el control de la actividad jurisdiccional y disminuye la arbitrariedad (SSTC 159/89, 109/92, 22/94 y 28/94, entre otras).

b- CLARIDAD Y PRECISION

Como ya hemos indicado anteriormente, la sentencia debe ser clara y precisa, conforme ordena el art. 359 LEC.

Las sentencias son claras cuando pueden ser comprendidas sin dificultad alguna y, precisas, si utilizan términos y tratan las cuestiones planteadas en forma directa e inequívoca.

A esta claridad y precisión contribuye el II párrafo del ya citado art. 359, cuando dispone que cuando hubiera varios puntos litigiosos, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

c- CONGRUENCIA²⁷⁷

De todos los requisitos intrínsecos que la sentencia debe reunir, quizás es éste de la congruencia el más importante. Como ya vimos, se recoge en el art. 359 LEC.

La congruencia puede definirse como la necesaria correlación que ha de existir entre las peticiones de las partes y la sentencia.

Tiene un doble fundamento: el principio dispositivo y el principio de aportación de parte.

²⁷⁷ Véase al respecto SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel; La Incongruencia Civil y Penal, en "Estudios de Derecho Procesal", págs. 393 y ss. 1969, Barcelona.

Debido al principio dispositivo, se prohíbe al Juez pronunciarse sobre un objeto procesal distinto al determinado por las partes; además, le vincula a los actos de disposición que las partes hagan.

Conforme al principio de aportación de parte, el Juez debe resolver según las alegaciones fácticas y pruebas de las partes, aunque no está vinculado por la calificación jurídica hecha por éstas. De todas formas, a pesar de que según algunos podría considerarse vulnerado el principio contradictorio, el TC ha señalado que no es preceptivo que el órgano jurisdiccional plantee una tercera opinión en lo civil.

Para determinar si existe o no congruencia, hay que comparar las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia. La falta de correlación entre ellos genera un defecto que se denomina incongruencia.

Generalmente, se suelen señalar tres tipos de incongruencia: la incongruencia positiva o por supra petita, que se produce cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido por las partes; la incongruencia negativa o por infra petita, cuando la sentencia otorga menos de lo consentido o admitido por el demandado; y la incongruencia mixta o por extra o ultra petita, cuando la sentencia condena o resuelve por algo distinto de lo pretendido²⁷⁸.

En concreto, para determinar la congruencia deben examinarse los distintos elementos indentificadores de la pretensión, así como la conducta del demandado.

En primer lugar, debe existir correlación o congruencia respecto de las partes del proceso, en el sentido de que la sentencia tiene que extender, pero también limitar sus pronunciamientos a las partes, lo cual significa que la congruencia exige que la sentencia

²⁷⁸ ARAGONESES ALONSO, Pedro; denomina a las dos primeras incongruencia por “ultra petita” y a la tercera incongruencia por “extra petita”. Un amplio estudio de ellas puede encontrarse en la obra de este

no contenga pronunciamientos ni respecto de personas que no son parte del proceso, ni tampoco en calidad diferente a la que actúan.

En segundo lugar, debe existir correlación entre la sentencia y el objeto inmediato y mediato de la pretensión. En cuanto al objeto inmediato, la congruencia exige que la sentencia se pronuncie sobre la clase de tutela solicitada por el demandante, es decir, sería incongruente por ejemplo una sentencia que impusiera una condena al demandado si el demandante solicitó sólo la declaración de un derecho. Respecto del objeto mediato de la pretensión, la sentencia será incongruente si se pronuncia respecto de una conducta distinta a la solicitada, o si se concede una cantidad mayor a la pedida.

En tercer lugar, también debe existir correlación entre la sentencia y la causa de pedir, es decir, la sentencia será incongruente si el órgano jurisdiccional resuelve teniendo en cuenta hechos que integran una causa de pedir distinta a la establecida por el demandante.

En cuarto y último lugar, la correlación o congruencia debe existir también respecto de la conducta del demandado. Por tanto, será incongruente una sentencia absolutoria de la instancia por falta de un requisito procesal examinable sólo a instancia de parte si el demandado no lo ha alegado. También será incongruente la sentencia si absuelve respecto del fondo al demandado en base a excepciones que él no haya alegado.

d- EXHAUSTIVIDAD

El requisito de la exhaustividad hace referencia a que el órgano jurisdiccional tiene el deber de decidir o pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto

autor: Sentencias congruentes. Pretensión, Oposición, Fallo, págs. 89 y ss. y 137 y 138. Editorial Aguilar, 1957, Madrid.

de debate (art. 359 LEC), sin que bajo ningún pretexto pueda aplazar, dilatar o negar la resolución de alguno de ellos (art. 361 LEC).

La falta de exhaustividad se considera un tipo o clase de incongruencia negativa, e incluso la jurisprudencia del TS denomina a veces el defecto de la falta de exhaustividad como incongruencia omisiva o incongruencia por falta de pronunciamiento²⁷⁹.

Sin embargo, la congruencia y la exhaustividad son requisitos distintos en cuanto tienen fundamentos distintos también. Mientras la congruencia tiene como fundamentos los principios dispositivo y de aportación de parte, respecto de la exhaustividad se dice que tiene su fundamento en el art. 1.7 CC, según el cual los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan. El incumplimiento del deber de resolver no supone tanto falta de exhaustividad como un posible delito de denegación dolosa de justicia integrado en el tipo de la prevaricación del art. 357.1 del antiguo CP, que se corresponde con los nuevos arts. 448 y 449.1 del actual CP, aprobado por LO 10/1995, de 23 de noviembre. Por tanto, la falta de exhaustividad supone una omisión del pronunciamiento, no por dolo, sino por error, cuyo fundamento hay que encontrarlo en el art. 359, que según la jurisprudencia del TC debe ser incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (SSTC 14/91 y 28/94, entre otras).

D- TIPOS

Existen varias clasificaciones doctrinales de las sentencias, pero la más apropiada y clarificadora en el juicio verbal que nos ocupa es la que distingue entre sentencias procesales y materiales.

a- SENTENCIAS PROCESALES O ABSOLUTORIAS DE LA INSTANCIA

Las sentencias procesales o absolutorias de la instancia son aquellas que no entran a calificar el fondo porque falta algún requisito procesal que lo impide.

Para ello, el Juez tendrá que examinar los requisitos procesales alegados como medio de oposición por las partes o examinables de oficio, sin necesidad de alegación por las mismas.

El estudio de los efectos de este tipo de sentencias queda remitido al momento en que se analicen los efectos del proceso mismo.

b- SENTENCIAS SOBRE EL FONDO

Si no falta ningún requisito procesal, la sentencia que se dicte en el juicio verbal entrará en el fondo del litigio, pudiendo entonces ser estimatoria o desestimatoria, según acoja la pretensión o la rechace, respectivamente.

1- ESTIMATORIAS

La sentencia sobre el fondo será estimatoria cuando acepte el pronunciamiento que en la pretensión se reclama porque juzgue que existe conformidad entre ella y el Derecho objetivo. Por tanto, se trata de una sentencia en la que se cumplen no sólo los requisitos procesales, sino también los materiales, aunque pueden cumplirse total o parcialmente.

- TOTALMENTE

La sentencia será totalmente estimatoria sobre el fondo si acepta la pretensión en su totalidad.

²⁷⁹ ARAGONESES ALONSO emplea el término de incongruencia por "citra petita", Sentencias...cit., págs.

- PARCIALMENTE

La sentencia sobre el fondo será parcialmente estimatoria cuando o bien se hubieran acumulado varias acciones y sólo se acoja alguna, o bien se hubiera planteado un sola pretensión pero el Juez otorgase menos de lo pedido.

2- DESESTIMATORIAS

La sentencia sobre el fondo será desestimatoria cuando, juzgando que la conformidad entre pretensión y Derecho objetivo no se da, rechaza el pronunciamiento reclamado.

Ello puede suceder cuando no se hayan alegado y probado los requisitos constitutivos, o cuando exista o esté probado algún hecho impeditivo o extintivo, o se haya alegado y probado alguna excepción en sentido propio.

E- PLAZO^{*135}

Establece el art. 731 LEC que el Juez dictará sentencia definitiva en el juicio verbal el mismo día de la comparecencia, a continuación del acta, es decir, el mismo día en que se concluya la práctica de la prueba propuesta u ordenada para mejor proveer.

Sin embargo, si por cualquier motivo ello no es posible, dado lo breve del plazo, se concede en el mismo art. 731 otro dentro de los tres días siguientes.

La fijación de breves plazos para sentenciar se corresponde con la sencillez y brevedad de este juicio, pero no siempre el breve plazo es suficiente, ni su dilación

116 y ss..

^{*135} El nuevo plazo para dictar sentencia, según el Proyecto, será de los diez días siguientes a la terminación de la vista (art. 447.1).

(bastante frecuente) es especialmente relevante, a salvo que pueda incurrirse en una falta de servicio que ocasione responsabilidad disciplinaria, según el art. 414 LOPJ, pues ha de tenerse en cuenta la obligatoriedad de dicho plazo que establece el art. 375 LEC.

F- FORMULA DE LA SENTENCIA

La fórmula de la sentencia se establece en el art. 248.3 LOPJ y consta de un encabezamiento, una motivación y el fallo. Tal fórmula debe completarse, en lo que no contradiga al referenciado art. 248.3 LOPJ, con el contenido del art. 372 LEC.

a- ENCABEZAMIENTO

El encabezamiento, art. 372.1º LEC, tiene por objeto expresar los antecedentes del fallo, y ha de comprender una serie de datos que se refieren a los sujetos del proceso, a su objeto y al lugar, tiempo y forma en que la sentencia se emite.

Respecto a los sujetos, se ha de indicar el órgano jurisdiccional que la pronuncie; y las partes, de las que hay que expresar sus nombres y apellidos, su domicilio o residencia habitual, su profesión u oficio, su carácter y posición que asuman en el proceso y los defensores (Procuradores y Abogados) que actúen por ellas, si los hubiera.

Respecto al objeto, tiene que precisarse el que lo sea del pleito, es decir, puesto que el objeto del proceso está constituido por la pretensión o pretensiones de las partes, la alusión a las mismas; aunque no de un modo detallado, sí de manera genérica que dé idea de su naturaleza.

Respecto a la actividad, se debe señalar el lugar, al cual se refiere expresamente el art. 372.1º, mediante la indicación del punto geográfico en que el proceso se haya desarrollado y se dicte la sentencia; la forma, aunque de ello no habla el precepto que

ahora se analiza, mediante la consignación de la palabra “sentencia” como título de la resolución; y, el tiempo, a que sí alude el art.372.1º, mediante la designación del día, mes y año en que la sentencia se dicta, computados según el calendario gregoriano.

b- MOTIVACION

La motivación, conforme al art. 248.3 LOPJ, se recoge en párrafos separados y numerados, y se estructura en antecedentes de hecho, hechos probados (en su caso), y fundamentos de derecho.

1- ANTECEDENTES DE HECHO

En los antecedentes de hecho, según el art. 372.2º LEC, deben recogerse sucintamente y comenzando con la palabra “resultando”, las pretensiones de las partes y los hechos en que las fundan, que hayan sido alegados oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse.

En el último “resultando”, añade el numero 2º de este art. 372, se consignará si se han observado las prescripciones legales en la sustanciación del juicio, expresándose en su caso los defectos u omisiones que se hubiesen cometido.

2- HECHOS PROBADOS, EN SU CASO

En el apartado correspondiente a los hechos probados(art. 248.3 LOPJ), en el caso de que los hubiera, no se limitará el juzgador a exponer la pura narración de los que él estime como probados, sino que motivará, de manera suficiente y razonable, cómo ha llegado a la convicción acerca del juicio histórico que se recoge en este lugar, destacando muy especialmente la ineficacia de aquellas pruebas que se hayan obtenido directa o

indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales, lo que no impedirá la valoración de los definitivos medios probatorios que resulten de los autos.

3- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En el apartado de los fundamentos de derecho se encuentran no ya los aducidos por las partes, sino sobre todo, las razones y fundamentos legales que estimen procedentes para el fallo, con cita de las Leyes y doctrinas que se consideran aplicables. Se encuentran regulados en el art. 372.3º LEC y comenzarán según éste por la palabra “considerando”. En virtud de los principios de brevedad, sencillez, concentración e inmediación judicial que predominan en el juicio verbal, queremos resaltar que, aunque la sentencia debe respetar los requisitos intrínsecos de motivación, claridad, precisión, exhaustividad y congruencia, los razonamientos que determinan el fallo deben exponerse de forma breve y sencilla.

La necesidad de la motivación tanto del juicio histórico como del juicio valorativo tiene la ventaja esencial de satisfacer de modo más completo las aspiraciones de justicia de las partes, a quienes, en todo caso, bien se estimen o bien se denieguen sus pretensiones, se les dan las razones en que se basa el criterio adoptado, y que integran la satisfacción de la pretensión, estimulándose la preocupación del Juez por el fundamento intrínseco de su fallo y permitiendo una evolución consciente de la interpretación jurisprudencial; ventajas frente a las que carecen de valor los inconvenientes, a veces alegados, de que la motivación disminuye el prestigio de la autoridad judicial, dilata los procesos y es más gravosa para las partes por la mayor extensión de las sentencias.

Si en la sustanciación del juicio se hubieren cometido defectos y omisiones que merezcan correcciones, se apreciarán en el último “considerando” exponiendo, en su caso,

la doctrina que conduzca a la recta inteligencia y aplicación de esta Ley, a tenor del art. 372.3º LEC.

c- FALLO

Finalmente, el fallo (art. 372.4º LEC) encierra la parte dispositiva de la sentencia, su pronunciamiento estricto, que, aunque carece de fórmula legal, pues debe ser expuesto de acuerdo con lo que exijan las circunstancias del caso, comienza, según la práctica dominante, con la expresión de que “fallamos que debemos (declarar, o condenar, o absolver), y (declaramos, condenamos, o absolvemos)”, y termina con la de: “así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Establece el art. 372.4º que el fallo se pronunciará en los términos prevenidos en los arts. 359 y 360, haciendo también, en su caso, la prevenciones necesarias para corregir las faltas que se hubieren cometido en el procedimiento, y si éstas merecieren corrección disciplinaria, podrá imponerse en acuerdo reservado cuando así se estime conveniente.

G- FORMACION DE LA SENTENCIA

Entramos ahora en el proceso de formación de la sentencia, es decir, en los diversos actos que integran las fases de producción y recepción de la misma: redacción, documentación, firma, publicación y notificación a las partes²⁸⁰.

En el juicio que nos ocupa, la sentencia en primera instancia será fallada siempre por un órgano unipersonal: un Juez de Paz o un Juez de Primera Instancia.

a- REDACCION

La redacción consiste en la consignación por escrito de las declaraciones que constituyen el contenido de la sentencia.

Es un acto que corresponde realizar exclusivamente al Juez, nunca al Secretario. El art. 364 LEC dice expresamente que en los Juzgados las sentencias se redactarán por el Juez que las dicte, mirando precisamente a reprimir la viciosa práctica de confiar la realización de un acto tan fundamental a un auxiliar.

b- DOCUMENTACION O EXTENSION

La documentación de la sentencia es la transcripción o extensión de la misma en los autos.

Se trata de un acto de constancia que ofrece la particularidad de no ser una incorporación, pese a que la situación a que se refiere fue verificada por escrito. Corresponde realizarla, como todos los de su clase, al Secretario, si bien no es necesario que la copia proceda de su propia mano.

El art. 364 no alude directamente a este acto, pero sí se refiere a él indirectamente al ordenar que el Juez firme las sentencias después de extendidas en los autos.

c- FIRMA

La firma del Juez consiste en escribir al pie de la sentencia su nombre y apellidos, más un signo acostumbrado o rúbrica, como muestra de la autenticidad de la firma.

²⁸⁰ Estas son las fases que cita GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 487 y 488.

El art. 364 habla del requisito de la firma, al decir que el Juez que dicte sentencias las firmará, pero precisa más en este punto el art. 251, al establecer que los Jueces pondrán su firma entera en los autos y sentencias. Asimismo hace referencia al requisito de la firma el art. 248.3 LOPJ.

d- PUBLICACION

La publicación no es ya, como los anteriores, un acto de producción, sino un acto de recepción del fallo.

Como esta recepción exige que pueda estar presente en su realización cualquiera que lo desee, y no simplemente los destinatarios de las sentencias, se habla de publicidad del acto mismo.

Pese a que el requisito tiene escasa razón de ser hoy, dada la difusión del conocimiento del lenguaje escrito y, si se hubiera de calificar su autenticidad por el cumplimiento que se le da en la práctica, el juicio no podría ser muy favorable, la prescripción se mantiene al decir el art. 364 que el Juez leerá las sentencias en audiencia pública, lo que de manera incomprensible se recoge en el art. 120.3 de la CE, pese a lo cual, sólo excepcionalmente se cumple en casos de especial relevancia.

La publicación se hace constar a continuación en los autos mediante la extensión del acto de constancia correspondiente, a cargo del Secretario, a lo que se refiere el propio art. 364, al indicar que ha de autorizar la publicación el Secretario (o Escribano).

Debemos añadir que en el caso de declararse en rebeldía un litigante, de forma que la sentencia se deba notificar en estrados, ésta, según el art. 283 LEC, se publicará también en edictos, y su parte dispositiva o fallo se insertará además en los periódicos oficiales, uniéndose entonces a los autos un ejemplar de dicho periódico. Han de tenerse en cuenta

también otros preceptos que regulan este supuesto de la rebeldía, como los arts. 769 y ss. LEC.

e- NOTIFICACION A LAS PARTES

Finalmente, la sentencia se notifica, siendo la notificación el último de los actos que comprende su proceso de formación y que tiende, igualmente, a la recepción de la misma, aplicándose a este momento el precepto general del art. 260 sobre notificaciones.

El art. 248.4 LOPJ establece que “al notificarse la resolución a las partes indicará si la misma es o no firme y los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello”.

En el supuesto de notificación en rebeldía tener en cuenta la aplicación de los arts. 283 y 769 y ss LEC.

H- ACLARACION DE LA SENTENCIA

La aclaración de la sentencia es aquel acto por el cual el Juez, bien de oficio, bien a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, aclara algún concepto oscuro o suple cualquier omisión que la sentencia contenga sobre punto discutido en el litigio. Se regula en los arts. 267 LOPJ y 363 LEC, aunque también le es de aplicación el precepto 407 LEC.

Por tanto, la aclaración de la sentencia ha de hacerse por el Juez o Tribunal que la hubiera dictado, aunque puede hacerse de oficio o solicitarse a instancia de parte o del Ministerio Fiscal (267.3 LOPJ y 363.II LEC).

La aclaración de la sentencia ha de referirse únicamente a la aclaración de algún concepto oscuro o alguna omisión, sin que pueda modificarse ni alterarse la sentencia (267.1 LOPJ y 363.I LEC).

El lugar es el del órgano jurisdiccional.

En lo referente al tiempo, ha de hacerse dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, cuando tal aclaración o adicción se haga de oficio, y cuando sea a instancia de parte la petición de ésta ha de realizarse dentro de los dos días siguientes al de la notificación (pues así lo establece el art. 267.3 LOPJ, a pesar de que el 363 LEC establece sólo un día), resolviendo el Juez dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración (267.3 LOPJ y 363.II y III LEC).

En cuanto a la forma, la petición de aclaración puede hacerse en el proceso que estudiamos, por escrito o por simple comparecencia, mientras que la propia aclaración se realizará por medio de auto (art. 407 LEC).

El acto se documenta mediante la incorporación a los autos del escrito solicitando la aclaración y la extensión en los mismos del auto aclaratorio.

No debe confundirse la aclaración de la sentencia con la rectificación de los errores materiales manifiestos y los aritméticos, que podrán ser rectificados en cualquier momento, según se dispone en el art. 267.2 LOPJ.

2- TERMINACION ANORMAL

Junto a la terminación anormal por medio de sentencia, el proceso puede terminar por un acto de voluntad de las partes o por el transcurso del tiempo como consecuencia de una paralización de la actividad procesal.

A iniciativa de la parte demandante pueden darse los supuestos de terminación por renuncia o desistimiento; a iniciativa del demandado, por allanamiento; por acuerdo de ambas partes, por transacción judicial; y por el transcurso del tiempo, por caducidad de la instancia.

I- RENUNCIA²⁸¹*136

La renuncia es la primera de las formas de terminación anormal del proceso a iniciativa del actor.

A- CONCEPTO

La renuncia es un modo anormal de terminación de un proceso en virtud de una actividad del demandante consistente en una declaración de voluntad, por la cual hace dejación del derecho que fundamenta su petición con carácter irrevocable²⁸².

B- REQUISITOS

Los requisitos podemos dividirlos, como de costumbre, en los referentes a los sujetos, al objeto y a la actividad.

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

En cuanto a los requisitos subjetivos, debe recordarse que la renuncia es un acto personal del demandante. Por ello, si actúa en el proceso un representante legal es precisa autorización judicial, y si interviene un representante necesario o voluntario es preciso que

²⁸¹ La misma se trata por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 493 y 494; y ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 44, págs. 394 y ss..

^{*136} Ver para la renuncia los arts. 19.1 y 20.1 Proyecto:

“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.”

“Artículo 20. Renuncia y desistimiento.

1. Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisibile. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.”

²⁸² Tal es el concepto dado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 44, pág. 394.

estén expresamente facultados para renunciar en el poder. Asimismo, si la renuncia no la realiza directamente el actor, el Procurador o representante técnico que actúe deberá tener un poder especial o un poder general con cláusula especial, o en su defecto será necesaria la ratificación de la parte. En el caso del Abogado del Estado, de acuerdo con el art. 7 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, éste precisará autorización expresa de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que deberá, previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.

Además, al ser la renuncia un acto unilateral, no es preciso que la parte contraria muestre su aceptación, ya que carece de interés.

b- REQUISITOS OBJETIVOS

Por lo que se refiere a los requisitos objetivos, es aplicable por analogía a la renuncia procesal el art. 6.2 CC cuando dice que la renuncia de los derechos reconocidos en la Ley sólo será válida cuando no contrarie el interés o el orden público o no perjudique a terceros.

Desde el punto de vista procesal, objeto de la renuncia puede ser tanto el derecho subjetivo privado como la acción concreta que se ejercita, ya que salvo los casos de derechos que se extinguen en una sola acción, como por ejemplo los derechos de crédito, renunciar a la acción no significa necesariamente renunciar al derecho subjetivo privado, aunque sí lógicamente a la inversa, la renuncia del derecho implica necesariamente la renuncia a la acción. Por tanto, si en un proceso en concreto no se señala con claridad cuál es el objeto de la renuncia, habrá que entenderse que es a la acción, por ser ésta una interpretación más favorable para la parte.

Por otro lado, la renuncia puede ser total o parcial. Sin embargo, teniendo en cuenta la indivisibilidad de la acción, la renuncia parcial sólo es posible en los casos de acumulación de acciones, siempre y cuando no estén subordinadas entre sí, de forma que se renuncia sólo a una de ellas.

c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

En cuanto al lugar, habrá que entender que la renuncia se hace en el lugar del juicio.

En lo relativo al tiempo de la misma, ésta puede tener lugar en cualquier instante mientras el proceso esté pendiente, es decir, desde que se presente la demanda hasta la declaración de conclusiones del juicio, aunque como veremos, también es admisible en la segunda instancia.

Sobre la forma que debe tomar, ésta ha de ser expresa y podrá formularse oralmente por medio de comparecencia, dado el carácter oral del juicio verbal, o a través de escrito, como el demandante prefiera.

C- EFECTOS Y COSTAS

En cuanto a los efectos de la renuncia, distinguir según ésta sea total o parcial.

Si la renuncia es total, cualquiera que sea el auto procedimental en que tenga lugar, el proceso termina, dictando el Juez una sentencia sobre el fondo absolutoria para el demandado, es decir, con efecto de cosa juzgada, e imponiendo en principio las costas por entero al demandante en virtud del art. 523.I LEC.

Por otro lado, si la renuncia es parcial, el proceso continua limitándose su objeto a la acción o acciones no renunciadas, y cuando el proceso termine se dictará sentencia que

para ser congruente deberá absolver al demandado respecto de la acción renunciada, imponiendo al actor la parte que le corresponda de costas (art. 523.II LEC).

II- DESISTIMIENTO^{283*137}

El desistimiento es la segunda de las formas de terminación anormal del proceso a iniciativa del actor.

A- CONCEPTO

El desistimiento es un modo anormal de terminación de un proceso en virtud de una actividad del demandante, consistente en una declaración de voluntad, por la cual se aparta del proceso comenzado, sin renunciar a la posibilidad de iniciarlo de nuevo²⁸⁴.

B- REQUISITOS

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

Desde el punto de vista subjetivo, el desistimiento puede ser bilateral²⁸⁵ (caso distinto será el del desistimiento presunto previsto en el art. 728.I LEC para el supuesto de

²⁸³ Trata del desistimiento GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 495 y ss.; y ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 43, págs. 375 y ss..

^{*137} Consultar el art. 19.1 Proyecto, ya citado. Se recoge en los apartados 2 y 3 del art. 20:

“Artículo 20. Renuncia y desistimiento.

2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, el tribunal dictará auto de sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.

Si el demandado se opusiera al desistimiento, el juez resolverá lo que estime oportuno.”

²⁸⁴ Es el concepto dado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 43, pág. 376.

²⁸⁵ Con respecto a la bilateralidad del desistimiento podemos citar la monografía de FAIRÉN GUILLÉN, Víctor: El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia. 1950, Barcelona.

incomparecencia del demandante, ya analizado en su debido lugar) porque se considera injusto que el demandado no tenga ni siquiera la oportunidad de ser oído, ya que le puede interesar que el proceso continúe, que se dicte una sentencia sobre el fondo y no permanecer en una situación de inseguridad jurídica a la espera de la conducta del demandante (por ejemplo porque la deuda haya prescrito o porque ya la haya pagado). El problema está en la determinación del momento a partir del cual surge la bilateralidad del desistimiento. Se barajan dos criterios: desde el momento de la personación del demandado o desde el momento del llamamiento al mismo. Teniendo en cuenta que en el juicio verbal el acto de personación del demandado es conjunto a la contestación a la demanda (730.II LEC), se considera que es preferible el momento del llamamiento para evitar que el demandado realice gastos innecesarios.

Desde el punto de vista subjetivo también, al igual que en la renuncia, y aplicando analógicamente en este caso los arts. 410 y 846 LEC, no es bastante el poder general para pleitos en el supuesto de utilizar Procurador, sino que éste necesitará poder especial o ratificación de la parte. En cambio, no es necesaria ninguna autorización complementaria respecto de los representantes legales, necesarios o voluntarios, salvo el caso del Abogado del Estado, que, según el art. 7 Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, necesitará autorización expresa de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que deberá, previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.

b- REQUISITOS OBJETIVOS

En cuanto al objeto del desistimiento, éste será la pretensión, de forma que siempre y cuando ésta sea divisible, el desistimiento puede ser parcial; en caso contrario habrá de ser total.

Además, el desistimiento no podrá estar sometido a condición, plazo o modo alguno, por lo que deberá ser puro y simple.

c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Ninguna especialidad presenta el lugar.

En cuanto al tiempo, el desistimiento (igual que la renuncia) puede tener lugar en cualquier momento, desde la incoación del juicio hasta la conclusión del juicio o citación para sentencia.

Sobre la forma, el desistimiento podrá ser expreso o presunto siempre y cuando se derive de la conducta prevista legalmente en el art. 728 LEC, sobre la incomparecencia del demandante en este juicio verbal. Podrá también hacerse en este juicio el desistimiento oralmente mediante comparecencia, o por escrito como en el resto de los juicios declarativos. En el caso de hacerse por comparecencia, de ello se dará vista a la parte contraria a los efectos indicados.

C- EFECTOS Y COSTAS

En cuanto a los efectos, si el desistimiento es total el proceso terminará y se dictará un auto sin efecto de cosa juzgada (ya que no entra en el fondo del asunto), mientras que si el desistimiento es parcial el proceso continuará con un objeto limitado.

Las costas se impondrán en su totalidad o en parte al demandante, según el criterio del art. 523 LEC.

III- ALLANAMIENTO^{286*138}

El allanamiento²⁸⁷ es la forma de terminación anormal del proceso a iniciativa del demandado.

A- CONCEPTO

El allanamiento es un modo anormal de terminación de un proceso en virtud de una actividad del demandado consistente en una declaración de voluntad por la cual muestra su conformidad con la petición del demandante²⁸⁸.

No confundir el allanamiento con la conformidad en los hechos, ya que mientras el primero provoca la terminación del proceso, la conformidad con los hechos provoca como único efecto que no habrá prueba y el juicio se limitará a una discusión jurídica.

²⁸⁶ Del allanamiento trata GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 497 y ss.; y ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 48, págs. 424 y ss..

^{*138} Ver el art. 19.1 Proyecto (ya citado). Se regula en el art. 21:

“Artículo 21. Allanamiento.

1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y siguientes de esta Ley.”

²⁸⁷ Respecto al allanamiento puede consultarse la monografía de MÁRQUEZ ROMERO, Pedro; El allanamiento en el proceso civil. Editorial Comares, 1992, Granada.

B- REQUISITOS

Como el allanamiento es considerado el reverso de la renuncia del actor, son aplicables al primero los requisitos ya vistos de la segunda.

C- EFECTOS Y COSTAS

Teniendo de nuevo en cuenta si el allanamiento es total o parcial, al igual que en el supuesto de la renuncia, el allanamiento provocará, con carácter general, una sentencia estimatoria (total o parcial) de la pretensión del demandante, salvo que la pretensión careciera de fundamento, los hechos fuesen manifiestamente falsos, el Juez discrepase de la valoración jurídica realizada por el actor, o el objeto del litigio estuviese sustraído al poder dispositivo de las partes.

Sobre costas, es de aplicación el art. 523.III LEC, según el cual no tienen por qué imponérsele las mismas al demandado si el allanamiento se produjo antes de contestar a la demanda, salvo mala fe del demandado.

IV- TRANSACCION JUDICIAL^{289*139}

La transacción judicial es la forma de terminación anormal de un proceso por acuerdo de ambas partes.

²⁸⁸ Tal es el concepto dado por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit., párrafo 48, pág. 424.

²⁸⁹ La misma es tratada por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 499 y ss..

^{*139} Consultar los apartados 1 (ya citado), 2 y 3 del art. 19 Proyecto:

“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.

A- CONCEPTO

La transacción judicial es un negocio jurídico, por virtud del cual las dos partes del proceso, mediante concesiones recíprocas, ponen fin al pleito ya comenzado (art. 1809 CC).

B- REQUISITOS

Dada la naturaleza jurídico-material y no jurídico-procesal de la transacción, los requisitos de ésta deben ser ordenados por el Derecho material y no por normas procesales; por eso es acertado el criterio de nuestro ordenamiento positivo que incluye la regulación del contrato de transacción dentro del CC, en los arts. 1809 y ss.. En ellos debe buscarse, por lo tanto, la indicación de tales requisitos.

C- EFECTOS Y COSTAS

Para que la transacción judicial ponga fin a un pleito ya comenzado, es necesaria la homologación judicial, que se realiza por medio de un auto en el que el Juez examinará fundamentalmente si lo transigido es susceptible de transacción (es decir, si son derechos renunciables o disponibles).

Es el auto homologando la transacción el que pondrá fin al proceso, cualquiera que sea el momento en que tenga lugar, produciendo esta resolución judicial un efecto afín al de la cosa juzgada, el de la cosa transigida. Además, el auto tendrá eficacia ejecutiva, pues equivale a una sentencia firme de condena.

Existe otro tipo de transacción, la extrajudicial, cuando se concluye fuera del proceso. Esta transacción extrajudicial también puede dar lugar a la extinción o

3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier

terminación anormal del proceso, aunque generalmente a través de otros actos dispositivos anteriormente ya estudiados: la renuncia, el desistimiento o el allanamiento.

En materia de costas se seguirá el criterio general del art. 523 LEC, que analizaremos más profundamente al tratar de los efectos económicos del proceso.

V- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA^{290*140}

La caducidad de la instancia es la forma de terminación anormal de un proceso por transcurso del tiempo.

A- CONCEPTO

La caducidad de la instancia es la manera de terminar anormalmente el proceso por el transcurso de unos plazos legalmente fijados y por la falta de realización durante los mismos de un acto de parte que es necesario para la reanudación del proceso.

B- REQUISITOS

Los requisitos de la caducidad se recogen en los arts. 411 y 412 LEC.

En cuanto a su interpretación, hay que tener en cuenta que el contexto normativo de estos preceptos ha experimentado un cambio tan importante que prácticamente han perdido toda virtualidad. Este cambio se refiere a que en la redacción originaria de la LEC el impulso procesal era una actividad de las partes, pero desde 1924 el impulso se realiza de oficio.

momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia.”

²⁹⁰ De ella trata GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 502 y ss..

^{*140} Para la caducidad de la instancia en general, consultar los arts. 236 a 240 Proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, los requisitos de la caducidad son básicamente dos: que el proceso esté paralizado por una causa dependiente de la voluntad de las partes; y que se produzca el transcurso de los plazos legales, que en la primera instancia en la que nos encontramos es de cuatro años (art. 411 LEC).

Por lo que se refiere al primer requisito, debe decirse que como el impulso es de oficio, solamente existen cuatro casos en los que se puede dar una paralización del proceso por la voluntad de las partes: la suspensión del proceso por petición de ambas partes, en la medida en que el art. 323.5º LEC prevé la suspensión de las vistas de los juicios por acuerdo de ambas partes mediando justa causa; la admisión a trámite de una demanda (o papeleta) con suspensión de su curso en cuanto no se subsanen sus defectos; la entrega al Procurador del demandante (o al demandante mismo si no hubiera Procurador) del exhorto para traslado de la demanda (o papeleta) y llamamiento al demandado; la entrega también al Procurador del demandante (o demandante mismo) del oficio para la publicación en boletines oficiales de la sentencia dictada en rebeldía.

Los casos en que no procede la caducidad se establecen en el art. 412 LEC.

La caducidad se produce ope legis y su declaración es impugnabile por las causas de los arts. 416 y 417 LEC.

C- EFECTOS Y COSTAS

Cumplido el primer requisito y transcurrido el plazo, la caducidad de la instancia se declara de oficio por medio de un auto.

Los efectos varían según la caducidad se haya producido en primera o segunda instancia. Cuando la caducidad se produce en la primera instancia el proceso termina dejando en el auto que declara la caducidad imprejuzgada la acción, es decir, sin efecto de

cosa juzgada. Por tanto, la caducidad en primera instancia no extingue la acción, salvo el supuesto de prescripción (arts. 419 LEC y 1961 y ss. CC).

Las costas siguen el art. 523 LEC.

III- EFECTOS EN LA PRIMERA INSTANCIA²⁹¹

Tras analizar los requisitos y el procedimiento en la primera instancia, pasaremos a estudiar los efectos en la misma.

Existen tres tipos de efectos: los económicos, los jurídico-materiales y los jurídico-procesales.

A- EFECTOS ECONOMICOS

A dos aspectos nos referimos en este apartado de los efectos económicos del juicio verbal: costas y beneficio de justicia gratuita.

1- COSTAS^{292*141}

Analizaremos los distintos aspectos de las mismas.

I- CONCEPTO

Las costas son aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae en las partes y que tienen en un proceso determinado la causa necesaria, inmediata y directa de su producción²⁹³.

²⁹¹ Los mismos se analizan por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, Parte General, Título V, págs. 509 y ss..

²⁹² En materia de costas hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 527 y ss.; pero es importante consultar la obra de HERRERO PEREZAGUA, J.F.; La Condena en Costas. Procesos Declarativos Civiles. JM Bosch Editor, 1994, Barcelona.

II- CRITERIOS

En principio, la regla general es que las costas deben ser pagadas por la parte que las haya originado, y en los casos en que las costas no pueden atribuirse a una sola de las partes se consideran costas comunes y tienen que ser pagadas por mitad. Es decir, la regla general en materia de costas es que cada parte paga las suyas y las comunes por mitad.

Sin embargo, la resolución judicial puede atribuir el pago de las costas a la parte que no las ha originado. Cuando una de las partes tiene que pagar no sólo sus costas, sino también las de la parte contraria hablamos de condena en costas.

En el art. 523 LEC se establecen los criterios para la condena en costas: se establece un criterio principal que se denomina criterio objetivo o criterio del vencimiento, según el cual quien pierde paga; pero se establece un segundo criterio complementario del anterior que es el criterio subjetivo o de temeridad, según el cual puede haber condena en costas cuando se haya litigado infundadamente.

Aunque la regla general de la que parte el art. 523 es que se impondrán las costas a la parte cuyas peticiones hayan sido totalmente rechazadas, la misma es doblemente matizada en la Ley: por un lado, si el Juez estima que concurren circunstancias excepcionales puede no condenar en costas razonándolo debidamente, en cuyo caso cada parte paga sus costas y las comunes por mitad; por otro lado, el que haya sido vencido sólo debe pagar en la parte de costas no sometidas a arancel una tercera parte de la cuantía del proceso (es decir, en el juicio verbal, un máximo de 26.667 pts.), aunque dicha limitación

^{*141} En relación a las costas podemos encontrar en el Proyecto los arts. 241 a 246 (tasación) y 394 a 396 (condena).

²⁹³ Concepto tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 527.

no regirá si el Juez entiende que el que ha sido vencido ha litigado temeraria o infundadamente.

Si el vencimiento es parcial la regla es la general, es decir, cada parte paga sus costas y las comunes por mitad, a no ser que el Juez entienda que deben ser impuestas a una de las partes por haber litigado con temeridad.

Las anteriores reglas son de aplicación en la primera instancia, ya que las de la segunda instancia serán analizadas a su debido momento.

Además, pueden señalarse unas reglas específicas para dos casos de terminación anormal del proceso: en caso de desistimiento y en caso de allanamiento.

En caso de desistimiento, hasta 1984 la jurisprudencia del TS venía entendiendo que las costas debían recaer en el demandante, entre otras cosas, por analogía con los arts. 410, 728.I y 849 LEC. Sin embargo, desde 1984 se considera que como en caso de desistimiento no hay en realidad litigante vencedor no debe ser condenado el demandante. Otra cosa es la aplicación del principio de temeridad, y así se considera que si el desistimiento es anterior a la personación del demandado no habrá temeridad, pero si el desistimiento es posterior podrán serle impuestas las costas al demandante por litigar infundada o temerariamente.

En caso de allanamiento, el art. 523 establece la regla de que si el demandado se allana antes de que transcurra el plazo para contestar a la demanda no habrá condena en costas, salvo que el Juez aprecie mala fe en el demandado.

III- PARTIDAS

En cuanto a las partidas que integran las costas, éstas, en el juicio verbal, son las siguientes: las indemnizaciones a los testigos (art. 644 LEC), los honorarios de los peritos

(art. 423 LEC), los gastos derivados de la práctica de medios de prueba fuera del local del Juzgado, los gastos de auxilio judicial, y la publicación de anuncios o edictos.

No se incluyen en las costas del juicio verbal ni los honorarios de los Abogados ni los derechos de los Procuradores, en el caso de existir estos, por no ser su utilización preceptiva.

IV- TASACION E IMPUGNACION

La liquidación de las costas se lleva a cabo por un procedimiento que se denomina tasación de costas, y que realiza el Secretario judicial (arts. 421 a 429 LEC).

Para hacer la liquidación o tasación es necesario que las partes presenten minutas detalladas de los honorarios de los peritos, pues lo demás se establece legalmente por arancel. A la vista de las minutas, se harán los cálculos que procedan y se les dará vista a las partes. Éstas pueden entender que la liquidación puede ser impugnada, bien por considerar que los honorarios son excesivos, o bien por considerar que son indebidos.

Si una o las dos partes consideran que los honorarios son excesivos, se dará audiencia al perito y después se dará traslado al Colegio profesional al que pertenezca. El Colegio respectivo emitirá un informe, y a la vista del informe el Juez mandará aprobar la tasación de costas, o mandará hacer en ella las modificaciones oportunas.

Las partes pueden entender que los honorarios son indebidos. Se consideran como tales: los derechos u honorarios correspondientes a actuaciones que sean inútiles o no estén autorizadas por la Ley; las partidas de las minutas que no estén detalladas o que se refieran a honorarios no devengados en el pleito; las actuaciones cuyo pago haya de recaer en la parte contraria en su caso. Para la impugnación de honorarios por indebidos se seguirá la tramitación del procedimiento incidental común.

Una vez tasadas de forma definitiva las costas, deben ser pagadas por la parte a quien corresponda. Sin embargo, si las costas no se pagan, la Ley establece que podrán ser exigidas por la vía de apremio, que en este supuesto se denomina procedimiento de exacción de costas.

2- ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA²⁹⁴

El segundo efecto económico que se puede derivar del proceso es el de su gratuidad.

I- CONCEPTO, FUNDAMENTO, REGULACIÓN Y ORIGEN

Se configura la asistencia jurídica gratuita como un derecho subjetivo público y fundamental. Derecho que tiene su base y fundamento en los arts. 14 y 24.1 CE, susceptible por ello, incluso, del amparo constitucional, conforme a lo establecido en los arts. 161 b) y 53.2 CE ²⁹⁵.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita ha sido regulado por la Ley 1/96, de 10 de enero ^{*142}, en desarrollo del art. 119 CE y los arts. 20.2 y 440.2 LOPJ, que remitían a la Ley ordinaria. Su regulación se completa con el RD 2103/96, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

El art. 119 CE dice que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, o respecto de aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. De este

²⁹⁴ En este punto hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 541 y ss.; pero es importante consultar la monografía de BACHMAIER WINTER, Lorena; La Asistencia Jurídica Gratuita. Editorial Comares, 1997, Granada; así como el artículo de GÓMEZ COLOMER, Juan Luis; El Nuevo Régimen del Beneficio de la Asistencia Jurídica Gratuita, en "La Ley", 22 de abril de 1996, págs. 1 y ss..

²⁹⁵ Así lo explica GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 542.

^{*142} Recordar que la Disposición Final Decimosexta del Proyecto reforma el art. 6.6 de esta Ley.

artículo se puede deducir que la gratuidad de la justicia puede tener un doble origen: por disposición legal y por disposición judicial.

Por disposición legal existen normas que reconocen el derecho a litigar gratuitamente a distintos organismos o entidades (por ejemplo, a establecimientos benéficos) independientemente de que tengan o no recursos económicos suficientes.

Por disposición judicial es cuando el derecho a litigar gratuitamente lo concede un órgano jurisdiccional para un proceso determinado.

II- REQUISITOS

Para que se pueda conceder judicialmente el beneficio de justicia gratuita han de concurrir tres requisitos: insuficiencia de recursos económicos, litigar por derechos propios y sostenibilidad de la pretensión (u oposición).

En cuanto a la insuficiencia de recursos económicos, la regla general es que se concederá el beneficio de justicia gratuita a aquél cuyos ingresos no superen el doble del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, el Juez puede conceder el beneficio en atención a las circunstancias familiares del litigante (número de hijos...) si no superan sus ingresos el cuádruplo del salario mínimo interprofesional, aunque no tendrá derecho a que se le nombre Abogado y Procurador de oficio, que como luego veremos, también es posible en el juicio verbal. Además, aunque se haya acreditado no superar el doble del salario mínimo interprofesional, el Juez puede no conceder el beneficio si entiende que el litigante tiene recursos económicos suficientes a la vista de signos externos de riqueza; queda a su criterio en este caso conceder o no el beneficio de justicia gratuita, o conceder la media pobreza, es decir, reducir el beneficio a las tres primeras ventajas que establece el art. 30 LEC.

El segundo requisito será el de litigar por derechos propios, de forma que se excluyen aquellos casos en los que un sujeto ejercita derechos cuya titularidad corresponde a otro. Este requisito responde a la necesidad de evitar fraudes.

El tercer requisito supone que la pretensión, si se trata del demandante, o la oposición, si es el demandado, sea sostenible.

III- VENTAJAS

Según el art. 30 LEC, las ventajas que obtiene el sujeto al que se le reconoce el beneficio de justicia gratuita son: la exención del pago de toda clase de derechos (o tasas judiciales) y de la necesidad de reintegrar el papel, aunque la Ley de Supresión de Tasas Judiciales ha dejado reducida esta ventaja únicamente a lo relativo a la exención del pago de derechos; la inserción gratuita en los periódicos oficiales de los anuncios o edictos que deban publicarse a su instancia; la exención de hacer los depósitos que sean necesarios para recurrir; y que se les nombre Abogado y Procurador del turno de oficio.

Respecto a esta última ventaja ^{*143}, debemos decir que aunque en el juicio verbal la defensa y representación por Abogado y Procurador no son preceptivas, el art. 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dispone que cuando la intervención de estos profesionales no sea obligatoria también podrán incluirse las mismas dentro del beneficio de justicia gratuita si expresamente son requeridas por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

^{*143} Debemos recordar lo que el Proyecto dice al respecto en sus arts. 32 y 33, ya mencionados al tratar de la postulación.

Debemos añadir a las anteriores el resto de ventajas recogidas en el art. 6 de dicha Ley^{*144}.

Además, tener en cuenta que la persona a la que se ha reconocido dicho beneficio puede renunciar a la última ventaja y designar Abogado y Procurador de su elección, y que si no se le ha reconocido el beneficio también puede el Juez solicitar que se le designen Abogado y Procurador del turno de oficio.

IV- PROCEDIMIENTO

En cuanto al procedimiento, hay que señalar que la solicitud del beneficio de justicia gratuita puede tener lugar en cualquier momento, incluso antes de presentar la demanda (o papeleta) del proceso principal, si se trata del demandante. Si la solicitud se hace después de presentar la demanda (o papeleta), si es el demandante, o después de presentar la contestación, si se trata del demandado, habrá de justificarse que los requisitos de la solicitud han sobrevenido con posterioridad.

En cuanto a su tramitación, el beneficio de justicia gratuita se considera técnicamente un superincidente del proceso principal, que se sigue en pieza separada por los trámites del juicio verbal, y con audiencia del Abogado del Estado.

La única particularidad de interés del procedimiento está en relación con la demanda por la que se inicia el superincidente, ya que la Ley exige que en dicha demanda se hagan constar las siguientes circunstancias: los datos relativos a los ingresos del solicitante, lo relativo a sus circunstancias familiares, la pretensión u oposición que se intenta formular en el proceso principal, y identificación de la parte contraria.

^{*144} Recordemos que el número 6 (relativo a la asistencia pericial gratuita) de este art. 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, ha sido modificado por la Disposición Final Decimosexta del Proyecto de nueva LEC.

Tener en cuenta que la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio puede solicitarse por el Juez en instancia de la justicia incluso para la tramitación de este superincidente.

Cuando el beneficio se solicita durante la pendencia del proceso principal la tramitación del superincidente no produce la suspensión de aquél, a no ser que el Juez, de oficio o a petición de las partes, decrete la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de Abogado y Procurador si su intervención fuera requerida en interés de la justicia (art. 16 de la Ley).

Para la designación de Abogado del turno de oficio, el órgano jurisdiccional que lo hubiere requerido se pondrá en contacto con el Colegio de Abogados correspondiente para que designen dos Abogados de dicho turno. El designado en primer lugar examinará la documentación que se le entregue y decidirá si a su juicio la pretensión u oposición que se pretende ejercitar es o no sostenible. Si entiende que lo es asumirá la defensa, pero si entiende que no, lo comunicará al órgano jurisdiccional para que éste remita los antecedentes y la documentación del caso al Colegio de Abogados para que emita un dictamen. Si dicho dictamen es conforme con la opinión del Abogado, se dará traslado al Ministerio Fiscal. En cambio, si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal considerasen sostenible la pretensión u oposición, se entregará la documentación al Abogado designado en segundo lugar, el cual quedará obligado a asumir la defensa. La Ley no regula el caso de que tanto el Colegio como el Ministerio Fiscal estimen insostenible la pretensión u oposición, pero, en general, y aunque el criterio no es unánime, se viene entendiendo que debe ser denegado el beneficio de justicia gratuita.

V- EFECTOS

En cuanto a los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita en las costas procesales, la regla general es que quien hubiera obtenido el beneficio no tiene que pagarlas, incluso si fuese condenado a ello.

A esta regla deben hacerse dos matizaciones: por un lado, si quien obtuvo el beneficio vence en el proceso principal y obtiene una cantidad de dinero, siempre que no haya condena en costas al litigante contrario, deberá pagar las costas suyas, aunque únicamente en cuantía que no exceda de la tercera parte de lo que hubiera obtenido en el proceso principal; y por otro lado, si quien obtuvo el beneficio es condenado en costas, debe pagar las suyas y las de la parte contraria si en los tres años siguientes a la terminación del proceso viniera a mejor fortuna.

B- EFECTOS JURIDICO-MATERIALES²⁹⁶

La eficacia jurídico-material de un proceso hace referencia a las repercusiones que el mismo produce fuera de él.

Estos efectos jurídico-materiales se producen en dos momentos distintos: cuando surge la litispendencia, y cuando el proceso termina con sentencia.

1- EN EL MOMENTO DE LA LITISPENDENCIA

Los primeros efectos jurídico-materiales del proceso se producen en el momento de la litispendencia, que como ya vimos a la hora de analizar los efectos de la admisión a trámite de la demanda, se produce precisamente en el momento de dicha admisión, aunque

²⁹⁶ De estos efectos trata GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 509 y ss..

retrotrayéndose sus consecuencias al de la presentación de la demanda (o papeleta, en el caso del juicio verbal, si se decidió usar ésta) (arts. 1973, 1100 y 1109 CC y 944 CCo).

En cuanto a los efectos materiales concretos que la litispendencia produce, estos fueron ya analizados en los efectos que producía la admisión a trámite de la demanda, y a ellos nos remitimos.

2- EN EL MOMENTO DE LA SENTENCIA²⁹⁷

La eficacia jurídico-material de la sentencia sólo se produce cuando ésta tiene carácter constitutivo, ya que entonces la sentencia crea, modifica o extingue una relación jurídico-material.

En cambio, la sentencia mero-declarativa se limita a constatar la existencia o inexistencia de una situación previa, y la sentencia de condena se limita a imponer coactivamente una obligación preexistente al proceso. Por tanto, ninguno de estos dos últimos tipos de sentencias tienen en realidad efectos jurídico-materiales.

C- EFECTOS JURIDICO-PROCESALES

La eficacia jurídico-procesal tiene una triple manifestación: la firmeza, la cosa juzgada y la ejecutabilidad.

1- FIRMEZA : RECURSOS^{298*145}

La firmeza es la irrecurribilidad o inimpugnabilidad de una resolución judicial.

La firmeza es un efecto que se predica de cualquier resolución judicial (providencia, auto y sentencia) y puede producirse por diversas causas: por la propia naturaleza de la resolución, es decir, cuando una norma legal establece de manera expresa

²⁹⁷ Véase al respecto CIENFUEGOS MATEO, M.; Los efectos de las sentencias. JM Bosch Editor, 1998, Barcelona.

²⁹⁸ De los recursos en general trata GUASP, Derecho...cit., Tomo II, Título II, Capítulo II, págs. 551 y ss..

^{*145} En materia de recursos debe consultarse el Título IV (arts. 448 a 495) y los Títulos V y VI (arts. 496 a 508 y 509 a 516, respectivamente) del Libro II del Proyecto. En lo que al Título IV respecta (recursos propiamente dichos), se establece un Capítulo I sobre disposiciones generales (arts. 448 y 449):

“Artículo 448. Del derecho a recurrir.

1. Contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley.

2. Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta.”

“Artículo 449. Derecho a recurrir en casos especiales.

1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al prepararlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

2. Los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, a que se refiere el apartado anterior, se declararán desiertos, cualquiera que sea el estado en que se hallen, si durante la sustanciación de los mismos el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que vengzan o los que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el pago de varios periodos no vencidos, los cuales se sujetarán a liquidación una vez firme la sentencia. En todo caso, el abono de dichos importes no se considerará novación del contrato.

3. En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al prepararlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada.

4. El depósito o consignación exigidos en los apartados anteriores podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o depositada.

5. En los casos de los apartados anteriores, antes de rechazar o declarar desiertos los recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 231 de esta Ley cuando el recurrente hubiese manifestado su voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades correspondientes, pero no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento de tales requisitos.”

Como resumen, el sistema de recursos en el juicio verbal es el siguiente: contra las resoluciones interlocutorias dictadas en primera (y segunda) instancia, cabe reposición y posterior apelación (si nos encontramos en primera instancia), sólo si dicha resolución ponía fin al proceso; contra la sentencia dictada en primera instancia cabe apelación; contra la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial cabe recurso extraordinario por infracción procesal y contra la resolución que en él se dicte, recurso en interés de la Ley, salvo que se hubiera ejercitado el recurso de amparo ante el TC; contra el auto que inadmite la apelación, el recurso extraordinario por infracción procesal o el de casación, cabe queja.

que contra determinada resolución no cabe recurso alguno; por el agotamiento de los recursos legalmente previstos contra la resolución; o por aquiescencia o conformidad de la parte afectada, que a su vez podría ser tácita, cuando se dejara simplemente transcurrir el plazo para interponer el recurso, o expresa.

Por tanto, vamos ahora a analizar la recurribilidad que cabe contra cada una de las resoluciones que se han venido dictando en el juicio verbal.

I- CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA ^{*146}

Contra la sentencia dictada en primera instancia sólo cabe recurso de apelación en el caso de que no haya resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito. En otro caso, la sentencia que se dicte se convierte directamente en firme.

A- ACCIONES PERSONALES BASADAS EN DERECHOS DE CREDITO

Según establece el párrafo I del art. 732 LEC, las sentencias dictadas en los juicios verbales a los que se refiere el art. 715 LEC no serán susceptibles de recurso de apelación cuando hayan resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito.

Es decir, en estos casos, la sentencia dictada en un juicio será directamente firme, por no ser susceptible de recurso alguno.

Más adelante, cuando expongamos las conclusiones de este estudio, pondremos de manifiesto la conveniencia de mantener, a nuestro parecer, una doble instancia con carácter general en este proceso.

Además, cabrá casación contra la sentencia de segunda instancia dictada por una Audiencia Provincial cuando se cumpla alguno de los motivos del 477.2.

B- ACCIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES

En casos distintos al anterior, es decir, cuando la sentencia no haya resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito, cabe contra ésta, conforme al art. 732.II LEC, recurso de apelación (directa) en ambos efectos dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación.

No cabe, en cambio, en ningún caso, una vez que la apelación es resuelta, recurso de casación en esta clase de juicios a tenor de lo dispuesto en el art. 1689 LEC.

De esta apelación trataremos más profundamente al analizar la segunda instancia del juicio verbal.

II- CONTRA EL AUTO QUE INADMITE LA APELACION^{*147}

Contra el auto que inadmite la apelación planteada contra resoluciones dictadas en primera instancia, puede formularse, a tenor del art. 735 LEC, recurso de queja.

Este recurso de queja será más ampliamente desarrollado a su debido momento en la segunda instancia. A modo de adelanto, diremos que si la primera instancia la conoció un JP, la queja se resolverá por un JPI, y si conoció un JPI, la resolverá una AP.

III- CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA^{*148}

Contra las resoluciones interlocutorias de primera instancia, es decir, contra las resoluciones dictadas durante el juicio en primera instancia, exceptuando la sentencia

^{*146} Contra la sentencia dictada en primera instancia cabe en todo caso apelación (arts. 455 a 467 Proyecto), es decir, ya no se distingue entre acciones personales basadas en derechos de crédito y el resto de acciones.

^{*147} Contra el auto que inadmite la apelación cabe queja (arts. 494 y 495 Proyecto).

^{*148} Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en primera instancia cabe reposición (arts. 451 a 454 Proyecto), y apelación sólo si la resolución pone fin al proceso.

(definitiva o firme), puede formularse, según la resolución que se intente recurrir, recurso horizontal (es decir, recurso de reposición) o recurso vertical (es decir, apelación, directa o diferida).

A- RECURSO HORIZONTAL : REPOSICION²⁹⁹

Contra cualquier resolución dictada en primera instancia frente a la que la Ley lo establezca expresamente, o no establezca otro tipo de recurso (es decir, apelación o queja), cabe plantear recurso horizontal (siempre y cuando no se disponga que la resolución es irrecorrible), es decir, será resuelto por el mismo órgano que lo dictó.

Este recurso horizontal en primera instancia será siempre el de reposición, regulado en el Ley en los arts. 376 y ss. LEC, ya que es siempre un órgano unipersonal el que conocerá del juicio verbal en la presente instancia: el JP o el JPI.

El presente recurso se interpondrá dentro del tercer día citándose la disposición que se entienda infringida (arts. 377 y 380 LEC), y dando nuevo plazo de tres días a la parte o partes contrarias para impugnarlo si lo estiman conveniente (art. 378 LEC).

El recurso de reposición no producirá ni efecto devolutivo, como es lógico al tratarse de un recurso horizontal, ni efecto suspensivo.

Se resolverá en tres días por medio de auto, contra el que más adelante veremos que cabe plantear apelación, que se resolverá conjuntamente con la apelación de la sentencia definitiva (art. 381 LEC).

B- RECURSO VERTICAL : APELACION³⁰⁰

Contra las resoluciones interlocutorias de primera instancia en que así se establezca en la Ley, podrá formularse recurso de apelación, aunque ésta podrá ser o bien directa, o bien diferida.

La apelación es un recurso vertical, pues se resuelve por el órgano superior al que dictó la resolución que se impugna.

Se regula en los arts. 381 y ss. LEC.

Haremos mención de las principales resoluciones contra las que cabe formular apelación (bien directa, bien diferida)³⁰¹, sin que dicha enumeración pretenda ser exhaustiva de ninguna forma.

a- APELACION DIRECTA

Se trata del recurso de apelación que se interpone directamente en ambos efectos, es decir, con el efecto devolutivo propio de un recurso vertical y con el suspensivo de la resolución que se impugna.

Suele interponerse esta apelación directa en general contra resoluciones que hacen imposible la continuación del juicio, y por ello dispone el art. 384.2º LEC que se admitirán en “ambos efectos” las apelaciones que se interpongan contra los autos que pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación. La expresión “en ambos efectos” de

²⁹⁹ De la misma trata GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 556 y ss..

³⁰⁰ Entre otros, podemos citar en este punto las obras de GISBERT POMATA, Marta; Tratado de la Apelación Civil (Doctrina, Jurisprudencia, Formularios), obra dirigida y revisada por Pedro Aragonese Alonso. Editoriales de Derecho Reunidas, 1996, Madrid; y SOLÉ RIERA, Jaume; El Recurso de Apelación Civil. JM Bosch Editor, 2ª edición (revisada y actualizada), Junio 1998, Barcelona.

³⁰¹ Así lo hace también GISBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 800 y ss., aunque no incluye exactamente los mismos supuestos que nosotros, ni los clasifica de igual forma.

este artículo no es del todo acertada, ya que no debería incluirse el efecto suspensivo cuando es el Juez el que se niega a continuar el proceso.

Sin embargo, hemos de distinguir en ellos, los autos contra los que primero habrá de interponerse recurso de reposición de los que no.

1- SIN PREVIA REPOSICION

Estas son las distintas causas por las que se podrá interponer un recurso de apelación directa (en ambos efectos), sin previa reposición.

- POR FALTA DE JURISDICCION

Ya vimos a la hora del examen de la demanda que contra el auto en el que el Juez declare no tener jurisdicción cabrá recurso de apelación en “ambos efectos” en el plazo de cinco días, de acuerdo con el art. 385 in fine LEC, ya que se trata de un auto que pone término al juicio, haciendo imposible su continuación (art. 384.2º LEC).

- POR FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA

Contra el auto en el que el Juez se declare incompetente por razón de la materia o de la cuantía, puede interponerse apelación en “ambos efectos” en el plazo de cinco días, por hacer el mismo imposible la continuación del juicio (arts. 717, 74, 491, 496.III, 384.2º y 385 in fine LEC).

- POR FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Contra el auto en el que el Juez se declare incompetente territorialmente en este juicio verbal, podrá plantearse apelación en “ambos efectos” en cinco días por no ser posible la continuación del juicio (arts. 717, 384.2º y 385 in fine LEC).

- POR INADECUACION DEL PROCEDIMIENTO

Si se dan las circunstancias debidas para que el Juez aprecie de oficio la inadecuación del procedimiento y éste resulta inadecuado, contra el auto en el que así lo declare podrá formularse recurso de apelación en “ambos efectos” en cinco días por ser imposible la continuación del juicio (arts. 491, 717, 384.2º y 385 in fine LEC).

- POR DENEGACION DE LA SOLICITUD DE DILIGENCIA PRELIMINAR

Establece el art. 497 en su último párrafo que la providencia denegando la solicitud de diligencia preliminar será apelable en ambos efectos.

2- CON PREVIA REPOSICION

En estos casos, la apelación en ambos efectos deberá ir precedida de recurso de reposición.

- POR FALTA DE CAPACIDAD : PARA SER PARTE Y PROCESAL

En el caso de que el Juez pueda examinar de oficio la capacidad de las partes, si llega a la conclusión de que aquélla no es suficiente, dictará auto contra el que cabe recurso de reposición en tres días (art. 380 LEC) y posteriormente apelación en “ambos efectos” en

cinco días, ya que se hace imposible la continuación del juicio (arts. 384.2º y 385 in fine LEC).

- POR FALTA DE SUBSANACION DEL DEFECTO EN LA POSTULACION

En el caso de que se use postulación en este juicio y ésta adolezca de algún defecto, si después de que el Juez mandare subsanarlo no se hiciere así, contra el auto en el que se inadmitiere la demanda cabrá reposición en tres días (art. 380) y posterior apelación en “ambos efectos” en cinco días por ser imposible la continuación del juicio (arts. 384.2º y 385 i.f.). Sin embargo, ya explicamos que también es posible la opción de que ante la falta de subsanación del defecto se admita la demanda sin tener en cuenta la postulación por ser defectuosa.

- POR FALTA DE POSIBILIDAD DEL OBJETO

Si el Juez puede examinar la posibilidad del objeto y lo estima imposible mediante auto, contra el mismo cabe reposición en tres días (art. 380) y posterior apelación en “ambos efectos” en cinco días por no poder continuar el juicio (arts. 384.2º y 385 i.f.).

b- APELACION DIFERIDA

Se trata del recurso de apelación que se interpone en un solo efecto, es decir, sólo con el efecto devolutivo propio de un recurso vertical como es éste, pero sin efecto suspensivo, ya que al no suspenderse la resolución que se impugna el proceso continua en primera instancia, de forma que la apelación de dicha resolución se resolverá junto con la apelación principal, es decir, junto con la apelación de la sentencia.

1- CONTRA ALGUNOS AUTOS RESOLUTORIOS DE RECURSOS DE REPOSICION

Establece el art. 381 LEC que contra los autos resolutorios de los recursos de reposición sólo se dará el de apelación, en un solo efecto, que se resolverá conjuntamente con la apelación principal. Sin embargo, el apelante podrá solicitar que la apelación sea admitida en ambos efectos por causarle la resolución recurrida un perjuicio irreparable.

Uno de estos casos sería cuando existen defectos en la papeleta de demanda no subsanados, ya que contra la providencia en la que se inadmita provisionalmente la papeleta a trámite por carecer ésta de los requisitos formales mínimos exigidos en el art. 720 LEC hasta que se subsanen los defectos, puede plantearse reposición en tres días (arts.376 y 377 LEC) y posterior apelación en uno o dos efectos (art. 381 LEC).

2- CONTRA LOS AUTOS QUE PUEDEN RECAER EN LOS INCIDENTES QUE SE PLANTEEN DURANTE LA SUSTANCIACION DEL PLEITO

Conforme al art. 382 LEC, los autos resolutorios de incidentes serán apelables dentro de cinco días.

Lógicamente, en el juicio verbal este precepto se refiere a algunos de los incidentes especiales o superincidentes, pues los que no tienen una tramitación especial ya vimos que se resuelven en la sentencia; y además no a todos, pues en algunos, contra la resolución final no cabe recurso alguno, o incluso cabe apelación directa en ambos efectos, como en el caso del auto en que se declara no haber lugar al requerimiento de inhibición (art. 87 LEC) o al del auto en el que se declara la suspensión del fallo (o del proceso) en la prejudicialidad excluyente (art. 362 LEC).

- EN EL INCIDENTE POR RECUSACION

Según el art. 228 LOPJ, contra la decisión de la recusación no se dará recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa, la posible nulidad de ésta. En realidad se trata de un caso de apelación diferida.

- EN EL INCIDENTE POR ACUMULACION DE AUTOS

Algunos de los autos que se dictan en el incidente por acumulación de autos son susceptibles de apelación en un solo efecto, y así los de los arts. 173, 176, 179 y 181 LEC (185 LEC).

3-CONTRA EL AUTO DECLARANDO LA PERTINENCIA DEL JUICIO VERBAL

Según el art. 496 en su párrafo II, contra el fallo declarándose competente del Juez del verbal en que hubiere duda sobre la cuantía litigiosa, no se dará apelación (directa), pero si se interpusiese de la sentencia definitiva podrá el JPI (o AP) declarar la nulidad del juicio por falta de competencia o inadecuación del procedimiento seguido.

4- EN SUPUESTOS DEL ARTICULO 733 LEC (PREVIA LA OPORTUNA PROTESTA)

Establece el párrafo I del art. 733 LEC, que en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia puede pedirse también la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la 2ª instancia. Deben para ello,

continúa dicho artículo, citarse las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión, acreditando haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que fuese ya imposible la reclamación. Es ésta en realidad una apelación diferida, aunque condicionada a la previa oportuna protesta.

En el párrafo II de dicho art. 733, se dispone que podrá también pedirse la práctica de las diligencias de prueba que le hubiesen sido indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento la oportuna reserva, y de las admitidas que no hubiesen sido practicadas por causas que no sean imputables a dicho recurrente. En este caso a la apelación diferida en el supuesto de prueba indebidamente denegada debe preceder la oportuna reserva.

IV- CONTRA LA SENTENCIA FIRME

Cuando la sentencia es ya firme, no cabe contra ella ningún tipo de recurso, ni ordinario, ni extraordinario. Lo único que puede plantearse, si hubiera motivos para ello, es alguna de las dos acciones autónomas de impugnación o, a lo sumo, un recurso de amparo constitucional o ante los Tribunales Internacionales.

A- ACCIONES AUTONOMAS DE IMPUGNACION

Son aquellas acciones autónomas que sirven para rescindir o impugnar sentencias firmes. Por ello, a pesar de que tradicionalmente se les ha venido dando el nombre de recursos, en la actualidad la mayoría de la doctrina y cada vez más la jurisprudencia las está considerando auténticos procesos o acciones autónomas de impugnación. Nos referimos a la revisión civil y a la audiencia al rebelde.

a- “RECURSO” DE REVISION^{302*149}

La revisión civil puede definirse como un proceso o acción autónoma de impugnación que procede contra sentencias firmes dictadas en cualquier tipo de proceso, del que conoce, por alguno de los motivos tasados en la Ley, la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo, ya que en principio, al tratarse de un juicio verbal, nunca conocerá de la revisión la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, pues ésta sólo conoce en las CC.AA en que así lo disponga el Estatuto de Autonomía correspondiente, y estos sólo lo disponen en materia de Derecho Foral, el cual suele conocerse en los tribunales a través de procesos especiales (arts. 56.1º LOPJ y 1801 LEC).

La revisión civil se encuentra regulada en el Título XXII del libro II de la LEC (arts. 1796 y ss.).

Los motivos que pueden dar lugar a la revisión civil se regulan en el art. 1796 LEC, es decir, son motivos tasados: si después de pronunciada la sentencia firme se recobrasen documentos decisivos que hubiesen sido retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia (según la jurisprudencia, deben ser documentos que existieren y fueran conocidos con anterioridad y que, de haber sido tenidos en cuenta, el fallo hubiera sido distinto); si la sentencia hubiese recaído en virtud de documentos falsos o cuya falsedad hubiese sido declarada después de la firmeza de la sentencia (según la jurisprudencia, la falsedad ha de declararse mediante sentencia penal firme y el documento ha de ser decisivo); si la sentencia fue dictada en virtud del

³⁰² De este “recurso” trata GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 713 y ss.; también pueden consultarse monografías al respecto como la de DOVAL DE MATEO, Juan De Dios; La Revisión Civil. JM Bosch Editor, 1979, Barcelona.

^{*149} En cuanto a la revisión de la sentencia firme, consultar el Título VI (arts. 509 a 516 Proyecto) del Libro II.

testimonio de unos sujetos declarado falso en sentencia penal; si la sentencia se hubiese ganado en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta (si se trata de cohecho, ha de ser declarado en sentencia penal firme).

La revisión está sometida a un plazo absoluto de cinco años, que se computa desde la publicación de la sentencia firme, y un plazo relativo de tres meses que se computa desde que se descubren los documentos o el fraude, o desde que se dicta la sentencia penal firme.

En cuanto al procedimiento, cabe distinguir entre una fase rescindente y una fase rescisoria.

La fase rescindente tiene lugar ante la Sala Primera del TS y comienza con la interposición que tiene que estar fundada en alguno de los motivos señalados en la Ley, acompañándose los documentos justificativos y el documento que acredite haber hecho el depósito previo de 50.000 pts. Si este escrito se admite a trámite, se emplaza a la parte contraria siguiéndose el procedimiento de los incidentes. Se dará también audiencia al Ministerio Fiscal. Si la sentencia final es estimatoria se abre la fase rescisoria.

La fase rescisoria tendrá lugar ante el órgano que haya sido competente en la primera instancia (JP o JPI), ante el que se vuelve a reproducir el proceso, aunque vinculándole las decisiones de la fase rescindente.

b- “RECURSO” DE AUDIENCIA AL REBELDE^{*150}

Para impedir cualquier tipo de indefensión, la Ley prevé un medio de rescisión de sentencias firmes dictadas en cualquier tipo de proceso que contengan pronunciamientos contrarios al demandado rebelde.

Se regula en los arts. 773 y ss. LEC.

En cuanto a los requisitos y plazos que han de cumplirse para que el condenado en rebeldía pueda solicitar la audiencia, ha de distinguirse entre que la sentencia firme en el juicio verbal la haya dictado un JPI o un JP.

Si la sentencia la dictó un JPI, se siguen las reglas generales que sirven para la audiencia en caso de cualquier otro proceso que no sea el juicio verbal, siendo competente para conocer de la fase rescindente la AP a cuyo distrito corresponda dicho JPI (art. 779). Los casos en que se podrá en este supuesto solicitar la audiencia, se encuentran en los arts. 774, 775, 776, y 777. Se seguirá el trámite de los incidentes (art. 778), sin que quepa (en nuestro caso) el recurso de casación que dispone el art. 779, por no ser posible tal recurso en el juicio verbal.

Si la sentencia la dictó un Juez de Paz, competente para la fase rescindente será el JPI a cuyo partido pertenezca el Juez de Paz (art. 786). Los requisitos y plazos que deben concurrir se encuentran en el art. 785. Se seguirán los trámites establecidos para los juicios verbales, sin posterior recurso (art. 786).

Por tanto, el procedimiento, igual que en el caso de la revisión civil, se divide en fase rescindente ante el órgano competente (JPI o AP) en la que se determina si el condenado en rebeldía tiene o no derecho a ser oído, en cuyo caso positivo se abre la fase rescisoria, que tendrá lugar ante el órgano jurisdiccional que conoció en primera instancia (Juez de Paz o JPI).

^{*150} Sobre la acción de rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde, ver el Título V (arts. 496 a 508

B- “RECURSO” DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Por último, contra la sentencia firme dictada en un juicio verbal cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recogido en el art. 53.2 CE, para el caso de que se haya vulnerado alguna de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14, en la Sección 1ª del Capítulo Segundo, o en el art. 30.2 de nuestra Constitución. Dicho recurso se regula en la LOTC, de 3 de octubre de 1979.

C- “RECURSO” ANTE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

Por último, también cabe la posibilidad de acudir, si se cumplen los requisitos necesarios, a los Tribunales Internacionales.

2- COSA JUZGADA^{303*151}

Las resoluciones firmes producen el efecto jurídico-procesal de la cosa juzgada, que a su vez puede tratarse de cosa juzgada formal o de cosa juzgada material.

Proyecto) del Libro II, y fundamentalmente los arts. 501 a 503.

³⁰³ Respecto a la cosa juzgada es importante consultar la monografía de DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; *Sobre la Cosa Juzgada* (Civil, Contencioso-Administrativa y Penal, con examen de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional). Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1991, Madrid.

¹⁵¹ Es de destacar que, conforme a los números 2, 3 y 4 del art. 447 Proyecto, algunas sentencias del juicio verbal carecerán de efecto de cosa juzgada:

“Artículo 447. Sentencia. Ausencia de cosa juzgada en casos especiales.

2. No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión, las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler, y sobre otras pretensiones de tutela que esta ley califique como sumaria.

3. Carecerán también de efectos de cosa juzgada las sentencias que se dicten en los juicios verbales en que se pretenda la efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito.

I- EFECTO DE COSA JUZGADA FORMAL³⁰⁴

Todas las resoluciones firmes producen el efecto de cosa juzgada formal, que puede definirse como la vinculación jurídica que para el órgano jurisdiccional y para las partes produce lo dispuesto en cualquier resolución firme, es decir, la cosa juzgada formal implica la necesidad de atenerse a lo dispuesto en una resolución en el propio proceso en el que ha sido dictada.

II- EFECTO DE COSA JUZGADA MATERIAL^{305*152}

Algunas resoluciones firmes producen también el efecto de cosa juzgada material o cosa juzgada sin más.

A- CONCEPTO

El efecto de cosa juzgada material o cosa juzgada sin más es la inatacabilidad de ciertas resoluciones firmes a través de procesos nuevos, es decir, la imposibilidad de que a través de la iniciación de un nuevo proceso una resolución judicial se oponga a otra³⁰⁶.

B- NATURALEZA JURIDICA Y FUNDAMENTO

En cuanto a la naturaleza jurídica, la cosa juzgada material supone una vinculación de la decisión judicial respecto de otro proceso. Para explicar por qué se produce tal vinculación se han ofrecido tres teorías: la de la presunción de verdad, la material y la procesal.

4. Tampoco tendrán efectos de cosa juzgada las resoluciones judiciales a las que, en casos determinados, las leyes nieguen esos efectos."

³⁰⁴ Se trata del mismo por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 511 y ss..

³⁰⁵ De este efecto trata GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 516 y ss..

^{*152} Ver el art. 222 Proyecto.

La teoría de la presunción de verdad está recogida en el art. 1251 CC, según el cual, contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad sólo será eficaz la sentencia ganada en un juicio de revisión. Esta presunción de verdad iuris et de iure es un residuo histórico de carácter medieval que hoy día no se sostiene, pues se considera que las decisiones judiciales no son declaraciones de verdad, sino de voluntad.

La teoría material dispone que la cosa juzgada justifica su fuerza vinculante porque las sentencias establecen en cada caso cuál es el Derecho entre la partes. Por tanto, el Juez del proceso posterior queda vinculado porque se dice que las relaciones jurídicas son como las sentencias las declaran.

La teoría procesal establece que la cosa juzgada constituye una vinculación de naturaleza jurídico-pública, que tiene su razón de ser en el principio de seguridad jurídica, es decir, en la necesidad de que las relaciones jurídicas alcancen un carácter irrevocable.

C- CONTENIDO: FUNCIONES

La cosa juzgada material o cosa juzgada sin más se manifiesta en dos sentidos o funciones: la función negativa o excluyente y la función positiva o prejudicial.

La función negativa o excluyente supone la imposibilidad de plantear un nuevo proceso idéntico al ya resuelto. Esta función se expresa en el principio “non bis in idem”, que según jurisprudencia del TC, se encuentra implícitamente recogido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

La función positiva o prejudicial supone la vinculación de los órganos jurisdiccionales a lo ya decidido por una resolución cuando en un nuevo proceso se plantee una cuestión parcial previamente decidida.

³⁰⁶ Concepto en parte tomado de GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 516.

D- REQUISITOS

Mientras que la firmeza o irrecurribilidad es un efecto procesal predicable de cualquier tipo de resolución judicial, la cosa juzgada material o cosa juzgada sin más es un efecto exclusivo de los autos y de las sentencias. Más concretamente, producen el efecto de cosa juzgada material las sentencias y autos que deciden sobre el fondo del asunto dictadas en un proceso plenario, como es el juicio verbal.

Lo anterior lleva a examinar la eficacia de las sentencias absolutorias de la instancia. Se afirma que para que exista cosa juzgada material es necesario que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el fondo del asunto, de modo que cuando un órgano jurisdiccional dicta una sentencia absolutoria de la instancia porque entiende que falta algún requisito procesal, es posible un proceso nuevo en el que se haya subsanado el defecto procesal que impidió al órgano jurisdiccional del primer proceso verbal entrar en el fondo del asunto.

Por tanto, en el caso de las sentencias absolutorias de la instancia, no entra en juego la función negativa o excluyente, ya que puede volver a plantearse un proceso idéntico.

Sin embargo, si el defecto procesal no se ha subsanado en el segundo proceso, el demandado podrá alegar y el Juez deberá estimar la excepción de cosa juzgada en el punto relativo al presupuesto procesal, es decir, entraría en juego la eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada.

E- EFECTOS Y LIMITACIONES

Como hemos ido viendo, el efecto de la cosa juzgada material supone que no puede plantearse un nuevo proceso idéntico al ya resuelto y que la decisión judicial es vinculante respecto de otros procesos.

La vinculación en que consiste la cosa juzgada tiene una serie de limitaciones, que pueden ser subjetivas, objetivas o temporales.

En cuanto a los límites subjetivos, la regla general es que la cosa juzgada únicamente produce efectos entre las partes del proceso (*res iudicata inter partes*). El fundamento de esta limitación consiste en evitar que una resolución judicial favorezca o perjudique a quien no ha sido parte en un proceso. Sin embargo, a pesar de esta regla, el art. 1252 CC establece una serie de excepciones, de forma que hay casos en los que la cosa juzgada se extiende a personas que no han sido parte del proceso. De todas las excepciones a la limitación subjetiva de la cosa juzgada que establece este artículo, sólo algunas serán aplicables directamente al juicio verbal, ya que otras cuestiones de dicho artículo se pronunciarán solamente en procesos especiales (testamentarias, cuestiones de estado civil...), aunque sí afectarán al juicio verbal cuando la situación se produzca al contrario, es decir, cuando sea el verbal el segundo proceso, de forma que se verá afectado por lo recaído en dichos procesos especiales. La jurisprudencia del TS ha señalado que para evitar que terceros distintos de las partes se vean afectados por una decisión judicial sin haber sido parte del proceso y por tanto sin haberseles dado la oportunidad de ser oídos, es necesario constituir un litisconsorcio pasivo necesario.

En lo que a los límites objetivos se refiere, la cosa juzgada se extiende a lo que efectivamente haya sido controvertido y decidido en el proceso; lo dudoso es si la cosa juzgada afecta también a las cuestiones decididas implícitamente. Así, mientras algunos

entienden que la cosa juzgada sólo afecta a los pronunciamientos explícitos, otros entienden que también alcanza a los implícitos.

En lo relativo a los límites temporales, en principio la cosa juzgada produce una eficacia indefinida. Sin embargo, puede ocurrir que con el transcurso del tiempo se produzcan hechos nuevos que al afectar a la causa de pedir no impedirán el planteamiento de un segundo proceso.

3- EJECUTABILIDAD^{307*153}

Además de la firmeza y la autoridad de cosa juzgada, la sentencia dictada, si es de condena, es ejecutable.

Para ejecutar la sentencia firme de condena, deben seguirse las normas que para el procedimiento de ejecución de sentencias contiene la LEC en sus arts. 919 y ss., según cuál sea la condena cuyo cumplimiento se ha de exigir al demandado. Sin embargo, tener en cuenta que también cabe pedir la ejecución provisional de la sentencia definitiva de condena dictada en primera instancia. Si se concede, lo que ocurre precisamente en la apelación cuando ésta se admite en un solo efecto, se devuelve entonces el conocimiento del asunto al superior, pero no se suspende, por definición, el cumplimiento de la resolución impugnada, es decir, al tratarse de una sentencia a ejecutar, la ejecución de la misma. Por la reforma llevada a cabo por la Ley 6-8-1984, aunque la apelación se admita en ambos efectos podrá no obstante ser ejecutada provisionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 385 LEC.

³⁰⁷ Un amplio estudio de la ejecución puede encontrarse realizado por GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 685 y ss..

^{*153} En materia de ejecución de sentencia, consultar el Libro III del Proyecto (arts. 517 y ss.).

La ejecución se instará siempre a instancia de parte, y para ella será competente el Juez que hubiere conocido del asunto en primera instancia (art. 919 LEC), que en el juicio verbal será el JP o el JPI (éste es otro aspecto de la competencia funcional).

En el caso de que en la ejecución de la sentencia firme del juicio verbal se dictase el embargo de los bienes, podría plantearse sobre ellos tercería de dominio o tercería de mejor derecho (art. 739 LEC). En general, las tercerías están reguladas en los arts. 1532 a 1543 LEC.

I- TERCERIA DE DOMINIO³⁰⁸

Dispone el art. 739 LEC que si en la ejecución de la sentencia del verbal se entablare tercería de dominio sobre los bienes embargados, la decidirá el mismo Juez (de la ejecución, es decir, el de la primera instancia) por los trámites anteriores establecidos para el juicio verbal cuando el valor de lo reclamado no exceda de la cuantía límite de su competencia. Si excediere de 8.000 pts., conocerá el Juez que resulte competente por la cuantía (es decir, el JPI), por los trámites del juicio que corresponda a la misma. En este caso, entablada la tercería, ordenará al inferior que suspenda el procedimiento (de ejecución) hasta que recaiga sentencia en el juicio de tercería, si ésta fuere de dominio.

II- TERCERIA DE MEJOR DERECHO

Si la tercería que se entablare en la ejecución de la sentencia del juicio verbal fuere de mejor derecho (sobre los bienes embargados), dispone asimismo el art. 739 LEC que se procederá como en el caso anterior. En el supuesto ya visto anteriormente de tener que ordenar el superior al inferior la suspensión del procedimiento de ejecución, ésta tendrá

lugar, en el caso de la tercería de mejor derecho, hasta que se consigne en la entidad de crédito correspondiente el importe de los bienes embargados, si se enajenaren.

³⁰⁸ Véase al respecto VICENTE ROJO, José; Manual Práctico de Tercerías de Dominio. Editorial Práctica de

TITULO TERCERO

REQUISITOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA³⁰⁹

IV- REQUISITOS EN GENERAL PARA LA SEGUNDA INSTANCIA^{*154}

Para continuar el examen del régimen jurídico del juicio verbal, hemos de entrar ahora en la segunda instancia. En ella, al igual que ya lo hicimos en la primera, analizaremos, aunque remitiéndonos en muchos aspectos a lo ya dicho en aquélla, los requisitos, procedimiento y efectos.

Por lo tanto, comenzaremos por el análisis de los requisitos necesarios en la segunda instancia (que, como ya hemos adelantado, coincidirán en gran parte con los de la primera), dividiéndolos, como siempre, en subjetivos, objetivos y de la actividad.

A- SUBJETIVOS

Los requisitos subjetivos se refieren por supuesto al órgano y a las partes.

1- DEL ORGANO JURISDICCIONAL

En la tramitación del recurso de apelación intervienen dos órganos jurisdiccionales, en primer lugar, el mismo órgano que dictó la resolución que se recurre, Juzgado a quo (JP o JPI), y posteriormente, un órgano jerárquicamente superior, denominado Juzgado o Tribunal ad quem (JPI o AP).

Derecho. S.L., 1997, Valencia.

³⁰⁹ En general, en materia de requisitos en la segunda instancia hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 582 y ss.; y GISBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 167 y ss. y 789 y ss..

^{*154} En general, nos remitimos a lo explicado sobre el Proyecto de LEC en la primera instancia.

La aptitud genérica del órgano a quo dentro del recurso de apelación, viene dada en función de la que tenía como órgano de instancia (con independencia de que pueda ser impugnada, y precisamente a través del recurso, su falta de jurisdicción o competencia para conocer en instancia de la pretensión actuada)³¹⁰.

En cuanto al órgano ad quem, la facultad de juzgar o decidir sobre un recurso de apelación vendrá dada en función de que éste tenga jurisdicción, competencia, compatibilidad subjetiva y le sea atribuido el asunto por reparto.

I- JURISDICCION

El órgano ad quem debe, como hemos dicho, tener jurisdicción, es decir, debe pertenecer al orden de la jurisdicción civil ordinaria, a la que se atribuye la materia litigiosa que fue dirimida en la primera instancia.

Es, por tanto, aplicable a la jurisdicción del órgano de la apelación lo dicho sobre el concepto, extensión, naturaleza y requisitos de la jurisdicción en la primera instancia.

II- COMPETENCIA ^{*155}

El órgano ad quem debe también poseer competencia para conocer de la segunda instancia.

En el recurso de apelación no entran en juego las normas de la competencia objetiva determinantes del conocimiento por un grado jurisdiccional en relación con los

³¹⁰ Así lo explica GISBERT POMATA, Tratado...cit., pág. 167.

^{*155} Ver el art. 455.2 Proyecto:

“Artículo 455. Resoluciones recurribles en apelación. Competencia y tramitación preferente.

2. Conocerán de los recursos de apelación:

1º Los Juzgados de Primera Instancia, cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Paz de su partido.

2º Las Audiencias Provinciales, cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de su circunscripción.”

superiores o los inferiores (bien por razón de la materia o la cuantía). Lo mismo ocurre con la competencia territorial, conforme a las reglas que determinan la preferencia entre los Juzgados o Tribunales del mismo grado (sin perjuicio de que, como ya dijimos, se pueda discutir y ser objeto del recurso tanto la competencia objetiva como la competencia territorial del Juez a quo). La competencia viene asignada en base a criterios de funcionalidad.

Funcionalmente, en el sistema actualmente vigente, el conocimiento para la decisión del recurso de apelación viene asignado al órgano judicial inmediato superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida, atendiendo a la misión revisora de esta figura procesal y a su efecto devolutivo.

De esta forma, en el juicio verbal que nos ocupa, contra la sentencia dictada por el JP, el órgano ad quem será el JPI del partido (arts. 85.3 LOPJ) y cuando la sentencia sea dictada por un JPI, el Tribunal ad quem será la AP correspondiente (art. 82.4 LOPJ).

Consecuencia de todo ello es la regla especial que sobre competencia funcional del órgano de apelación establece el art. 61 LEC, cuando dispone que en ningún caso podrán someterse las partes, expresa ni tácitamente, para el recurso de apelación, a Juez o Tribunal diferente de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia, y más aún cuando en el juicio que nos ocupa tampoco era permitida la sumisión en la primera instancia.

Determinada la competencia para conocer de la segunda instancia, debemos señalar que el requisito de la competencia funcional tiene el mismo tratamiento que la falta de jurisdicción o de la competencia objetiva. Entendemos, por ello, que es aplicable lo dispuesto en el art. 9.6º LOPJ. De esta forma, su inexistencia determina la nulidad de pleno derecho, conforme al art. 238.1º LOPJ. La pequeña jurisprudencia ha sido tajante al

establecer que por ser las normas reguladoras de la competencia de carácter necesario o de orden público y sustraídas por ende a la disponibilidad de las partes, tienen que ser fielmente observadas, incluso de oficio, por los Tribunales, ya que lo actuado en contra de ellas, ya sea por defecto o por exceso de poder, es radicalmente nulo de pleno derecho (SAP de Granada 26-1-1976)*¹⁵⁶.

Especial referencia merece la constitución de la AP para conocer de la apelación de un juicio verbal, en el caso de que sea ésta la competente como órgano ad quem por haber sido un JPI el que dictó la sentencia en primera instancia, ya que a tenor del art. 737 LEC, reformado por la Ley 10/92, de 30 de abril, “cuando corresponda conocer de la apelación a la Audiencia Provincial, ésta se constituirá con un solo Magistrado”. Según este artículo, la competencia sigue siendo de la AP, pero se modifica la composición de la Sala, alterando lo dispuesto en el art. 196 LOPJ. Pensamos que con ello se buscaba lograr una mayor celeridad en la resolución de estas apelaciones, al querer evitarse el multiplicar por tres la atención de la Sala en estos asuntos, aunque con ello se perdieran garantías para las partes. Nos encontrábamos ante una situación bastante anómala. La LOPJ no dice nada sobre la posibilidad de que las Audiencias enjuicien con un solo Magistrado, en los asuntos civiles³¹¹.

*¹⁵⁶ El art. 62 Proyecto establece una norma para la apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos:

“Artículo 62. Apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos.

1. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días.

2. Notificado el auto a que se refiere el párrafo anterior, los litigantes dispondrán de un plazo de cinco días para la correcta interposición o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la resolución de que se trate.”

³¹¹ ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara e HINOJOSA SEGOVIA, Rafael: Reflexiones sobre la reforma procesal civil de 1992, pág. 456. Revista de Derecho Procesal, 1992. Criticaron esta reforma por entender que una Ley ordinaria no puede establecer normas sobre constitución de los órganos jurisdiccionales y,

El art. 81.1 LOPJ nos dice que las Audiencias Provinciales “se compondrán de un Presidente y dos o más Magistrados”, pero no de un solo Magistrado. El punto segundo del citado artículo establece una excepción a esa composición: “Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno o dos Magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución lo exija, con el número de Magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala establecerá un turno para cada año judicial”. Como vemos, la previsión legislativa no se refiere al caso que nos ocupa. Se trata precisamente del supuesto contrario. En el artículo siguiente, el 82 LOPJ, en su punto 2º, encontramos un precedente que puede haber inspirado esta reforma en el ámbito procesal civil. El citado precepto se refiere a los asuntos penales y establece: “Para el conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto”. La reforma introducida en el art. 737 LEC rompía con la estructura propia de la AP en el orden procesal civil, aunque es paralela a la que en el art. 82.2 LOPJ se previó para el orden penal.

Tal reforma suscitó una polémica no por su contenido, sino por la forma en que se había llevado a cabo, es decir, por haberse realizado a través de una Ley ordinaria y no una Ley Orgánica³¹². En relación con este problema, se elevaron dos cuestiones de inconstitucionalidad al TC por parte de las Audiencias Provinciales de Lérida y Madrid, por entender que la CE en su art. 122.1 hace una “reserva de Ley Orgánica del Poder

además, porque puede ocurrir que el Magistrado que haya de resolver tenga menos experiencia que el Juez de instancia o no pertenezca a la carrera judicial.

³¹² Ver GARBERÍ LLOBREGAT, José y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás; *Apelación y Casación en el proceso civil*, págs. 89 y ss., Edit. Cóllex, 1994, Madrid, en donde se realiza una exhaustiva crítica a la reforma del art. 737 LEC por la Ley 10/92.

Judicial” para todo lo relacionado con la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.

Efectivamente, si a raíz de esa reserva se redactó la actual LOPJ conteniendo la composición de cada uno de los órganos judiciales, ésta no puede ser modificada por otra Ley ordinaria que modifica a su vez la LEC. Únicamente una reforma que se operara a través de LO permitiría dicha modificación. Y entendemos igualmente que tal reforma se debía encardinar en la propia LOPJ, puesto que abogamos por la unidad de los distintos corpus legislativos³¹³.

Pues bien, en sentencia de 21 de septiembre de 1994 del Pleno del Tribunal Constitucional, se ha estimado las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas, promovidas, respectivamente, como ya dijimos, por la AP de Lérida y la AP de Madrid y declara inconstitucional y, por consiguiente, nulo el art. 737 LEC, al entender que: “...si la Audiencia Provincial ejerce su potestad jurisdiccional en materia civil confiándola a “un solo magistrado”, con ello se afecta decisivamente al tipo abstracto orgánico-funcional de la Audiencia Provincial que ha configurado la LOPJ, lo que sólo puede llevarse a cabo mediante una modificación de ésta... Por lo que cabe estimar, en definitiva, que dicho precepto ha vulnerado la reserva que establece el artículo 122.1 CE y ello ha de conducir por las razones anteriormente expuestas, a la estimación de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad”.

Para futuras reformas abogamos por el mantenimiento de esta norma recogida en el art. 737, pero modificando entonces en este punto la actual LOPJ. Como ya apuntamos en el caso del Juez que conociese de la primera instancia, también el Juez o Magistrado de la

³¹³ El caso más extravagante, aunque no único, es el que se produjo al recoger en una disposición adicional, al modificar el art. 563 CP redactado conforme a la LO 3/1989, la regulación de un “proceso civil” sobre indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por motivo de la circulación de vehículo de motor.

segunda deberá estar facultado para orientar a las partes sobre el contenido de sus intervenciones, pues recordemos que pueden éstas asistir de nuevo a esta instancia sin postulación profesional, aunque teniendo cuidado de no prejuzgar en la realización de esas orientaciones el contenido que pueda tener el fallo.

III- REPARTO

Cuando existen varios órganos superiores, en el mismo grado, de aquél de quien se recurre, se hace necesario proceder al reparto; por ejemplo, porque existan varios JPI en la sede del Partido al que pertenece el JP que dictó la resolución recurrida, o varias Secciones de lo Civil en la Audiencia en cuya provincia radica el JPI recurrido^{*157}.

Pueden existir dos sistemas de repartir los asuntos entre los distintos órganos judiciales, cuando existan varios órganos superiores que pudieran conocer de la apelación: el del sorteo y el de la adscripción. En lo que se refiere a las apelaciones, se reparten en base a un sistema de adscripción; parece ser ésta la forma más correcta, ya que con ello se asegura la uniformidad de criterios.

Sin embargo, la infracción del sistema de reparto entendemos que no debe producir (conforme ya apuntamos al tratar del reparto en la primera instancia) la nulidad de la resolución del órgano ad quem que indebidamente conoció del recurso, ya que los verdaderos requisitos que éste debe reunir son la jurisdicción y la competencia, aunque sí puede dar lugar a una posible corrección disciplinaria (arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466 LOPJ).

IV- COMPATIBILIDAD SUBJETIVA

En cuanto al régimen del personal judicial, por lo que toca a sus repercusiones dentro del ámbito procesal de la apelación, basta con observar que constituye un requisito de la misma la compatibilidad particular del personal judicial con el asunto que ante él se difiere, del modo que establecen las normas sobre abstención y recusación, que reciben aquí aplicación general, aunque con las particularidades que en su momento expondremos, ya que debe tenerse en cuenta el carácter unipersonal o colegiado del órgano.

El régimen de la recusación será tratado más adelante, dentro de las crisis objetivas, pero analizaremos ahora el de la abstención. Nos referimos, claro está, a la abstención del órgano ad quem, ya que el Juez a quo, al ser el mismo que el de la primera instancia, lo normal es que ya se haya abstenido en aquélla. A la abstención del órgano ad quem es en general aplicable lo dicho sobre la abstención en la primera instancia (analizada en el examen de la demanda por el Juez). Sin embargo, tener en cuenta que cuando el que se abstenga en el órgano ad quem forme parte de un órgano colegiado (es decir, de una AP), la comunicación motivada a la Sala de Gobierno correspondiente (la del Tribunal Superior de Justicia) tendrá lugar por conducto del Presidente de la Sala o Sección (art. 221.2 LOPJ).

En cuanto a la abstención del Secretario, será aplicable lo ya dicho al respecto de Jueces y Magistrados (art. 461.1 LOPJ).

En lo que respecta a la abstención de Oficiales, Auxiliares y Agentes, estos están obligados a poner en conocimiento del Juez o Presidente, según se trate de un órgano unipersonal (JPI) o un órgano colegiado (AP) las causas que en ellos concurren y que pudieran justificar su abstención en el pleito o causa (art. 462.1 LOPJ).

^{*157} Ver los arts. 68 a 70 Proyecto, ya mencionados al tratar del reparto en la primera instancia.

2- DE LAS PARTES

Los requisitos subjetivos referentes a las partes que afectan a la segunda instancia son (como en la primera) la capacidad, la legitimación y la postulación.

I- CAPACIDAD

La capacidad es el primer requisito que ha de concurrir en las partes. Igual que en la primera instancia, la capacidad se divide en capacidad para ser parte y capacidad procesal.

Por lo tanto, las partes, tanto la demandante como la demandada que aquí reciben el nombre de recurrente y recurrido, o más concretamente aún, de apelante y apelado, han de gozar de las comunes capacidad para ser parte y capacidad procesal.

En principio, esto vendrá determinado por la aptitud para ser parte y procesal con que se actuara en la primera instancia, por lo que a lo dicho allí nos remitimos, pero no se puede eliminar la hipótesis de que el capaz en la primera instancia no lo sea en la segunda, y a la inversa, que el incapaz en la primera adquiera capacidad en la segunda, cuestiones que deben resolverse de acuerdo con las normas sobre crisis procesales y al momento de su análisis nos remitimos.

II- LEGITIMACION

Al ser ésta el segundo requisito que debe concurrir en las partes, obviamente el apelante habrá de estar legitimado activamente para actuar como tal en la apelación y el apelado habrá de estar legitimado pasivamente para soportarla. En la apelación se da el caso de que tanto uno como otro pueden ostentar ambas posiciones, debido a la posibilidad de que el apelado se adhiera a su vez a la apelación planteada por el apelante,

convirtiéndose en apelado y apelante y lo mismo el apelante mediato (la figura jurídico-procesal de la adhesión a la apelación será objeto de detallado estudio en el apartado relativo al procedimiento en la segunda instancia).

Por otra parte, la situación de apelante o de apelado no tiene que coincidir, obviamente, con la de demandante o demandado. Las situaciones activa y pasiva pueden por ello ser las mismas o estar invertidas en relación con las que mantuvieron en la primera instancia.

En principio, para estar legitimado para interponer un recurso de apelación se requiere ser parte en el proceso y que la resolución del Juez cause perjuicio (SSTS 28-10-71; 21-6-92; y a sensu contrario 12-11-92). Sin embargo, las personas legitimadas para apelar se amplían a otras a quienes sin ser parte en el proceso la resolución les haya causado perjuicio por afectarles su efecto de cosa juzgada. Se hace necesario que aún no siendo parte en el proceso se les permita apelar para que no sufran indefensión y falta de tutela judicial efectiva, consagrada como un derecho en el art. 24.1 CE, que se refiere no sólo al ejercicio de los derechos, sino también a los intereses legítimos (conforme ya vimos al tratar de este requisito en la primera instancia).

Pasivamente sólo están legitimadas las partes litigantes, nunca un tercero sobrevenido, ya que el apelado únicamente puede ser la parte que se haya beneficiado de la resolución recurrida, al vencer en el pleito por estimar el Juez sus pretensiones, o bien que sin habersele concedido todo lo solicitado en la primera instancia, se haya aquietado y por lo tanto consentido la resolución impugnada (STS 23-4-1902).

III- POSTULACION

En relación con la postulación, debe tenerse en cuenta que conforme al art. 4.2º LEC, no es preceptiva la intervención de Procurador en este juicio, por lo que las actuaciones, tanto en la primera como en la segunda instancia, pueden realizarse por los propios interesados o en su caso por factor mercantil, con las especialidades del art. 4 LEC. Tampoco es preceptiva la intervención de Letrado, a tenor del art. 10.2º LEC.

Que los requisitos de la postulación son los mismos en la primera instancia que en la apelación o segunda instancia es la postura jurisprudencial y doctrinal más extendida, por entenderse que la segunda instancia es una fase del mismo proceso (SAP Valladolid 12-7-1969) y tal es también nuestra postura. Sin embargo, no falta quien, como Guasp³¹⁴, sostiene que aún no exigiéndose en la primera instancia el requisito de la postulación, sí es necesario en la segunda, ya que para él la apelación o segunda instancia no es una fase del proceso, sino un nuevo proceso en si mismo, independiente del de la primera instancia. Dicha posición podría tener su base legal en la falta de regulación específica para la segunda instancia en los citados arts. 4 y 10, ya que en la Ley no se expresa con claridad si dichos artículos afectan también a la apelación.

Si seguimos la postura de que al igual que en la primera instancia, tampoco es preceptiva la postulación en la segunda, resulta al menos chocante que, teniéndose que fundamentar el escrito de interposición del recurso (conforme ordena el art. 733 LEC), puede llevar a cabo tal trámite, que ofrece indudables dificultades técnicas, quien no es profesional en Derecho. No se nos diga que las mismas dificultades se ofrecen para explicar en la vista el fundamento de la oposición si se siguiera el sistema anterior a la reforma de 30 abril de 1992, de Medidas Urgentes. Antes de esta reforma, la apelación de

todos los juicios verbales atribuidos a los suprimidos (con poca reflexión) Juzgados de Distritos, eran vistos por el JPI, cuyo titular sin las formalidades propias de un órgano colegiado podía reconducir, en cierto sentido, la exposición de los agravios que a su presencia pudiera realizar el apelante. No parece que el legislador haya meditado la inconveniencia de haber derogado los arts. 22, 24 y 25 del Decreto, aunque el error fundamental ha sido, sin duda, la supresión para estas cuestiones de la competencia de los llamados Juzgados de Distrito. En la generalidad de los países de nuestro entorno la competencia en la primera instancia de los asuntos civiles se distribuye entre dos tipos de órganos distintos, conforme es sobradamente sabido.

De todas formas, ya apuntamos en la primera instancia que aún estando el verbal exceptuado de la necesidad de postulación, podría hacerse uso de ella voluntariamente, e igualmente ocurre en la segunda instancia. En este caso, habrá de hacerse alguna observación.

Respecto a la eficacia del poder del Procurador otorgado válidamente en la primera instancia, la regla principal es que vale también para la segunda, pero no lo será cuando no esté bastantado o no incluya dicha instancia. Sin embargo, los defectos por insuficiencia o ilegalidad son, en principio, subsanables.

Por otro lado, puede que el Procurador que actuó en primera instancia no esté habilitado para actuar ante el Tribunal ad quem, porque la sede del Colegio profesional al que esté adscrito no comprenda la de dicho Tribunal, en cuyo caso no podrá seguir representando a la parte, pues el art. 4 LEC exige que el Procurador esté habilitado en la plaza sede del órgano judicial.

³¹⁴ GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 585 y 586.

En el caso del Abogado, éste también exige la Ley (art. 10 LEC) que esté habilitado para actuar ante el órgano de que se trate, aunque a diferencia del Procurador, los efectos de la habilitación del Letrado se extienden a todas las instancias de un proceso, aunque el Abogado ejerza habitualmente fuera de la sede donde se encuentran los órganos judiciales encargados de dirimir los recursos (art. 22 RD 24-7-82, nº 2090/82, del Estatuto General de la Abogacía Española).

B- OBJETIVOS

El objeto de la segunda instancia, que es la revocación y sustitución de la resolución impugnada o, en su caso, la declaración de nulidad de las actuaciones practicadas, que originen un gravamen al apelante, tiene que cumplir los requisitos objetivos de posibilidad, idoneidad y causa.

1- POSIBILIDAD

La posibilidad, tanto física como jurídica, de la apelación en segunda instancia viene dada en función de la existencia de la misma en la primera instancia, es decir, si el objeto gozó del requisito de la posibilidad en la primera instancia en que se dictó la resolución judicial que se pretende recurrir, en general, también ostentará tal rasgo en la apelación.

Ahora bien, podría darse algún caso excepcional en que, concluida la primera instancia, tal objeto carezca de posibilidad en su realización. La causa de la desaparición de la posibilidad objetiva puede venir provocada por la alteración del estado de hecho sobre el cual se promovió la demanda, lo que haría conveniente la mutación del petitum (por ejemplo, por desaparición de la cosa litigiosa, alteración de su esencia, imposibilidad de

cumplimiento de la prestación...etc). Sin embargo, al tratarse la apelación de una fase dentro del mismo proceso, en principio, no es posible alterar o transformar la demanda.

2- IDONEIDAD

La idoneidad del objeto exige la adecuación entre la pretensión procesal y el carácter del proceso, es decir, debe pretenderse la sustitución y revocación de la resolución impugnada o, en su caso, la nulidad de las actividades practicadas que perjudiquen al apelante, pues éste es el objeto previsto en la Ley.

Para quienes, como Guasp³¹⁵, entienden que la apelación es un proceso distinto del principal de la primera instancia, no bastará con que el objeto de este último proceso sea idóneo para que lo sea el de la apelación. Desde luego, así sucede en el juicio verbal, ya que no todas las sentencias en él dictadas son susceptibles de apelación, sólo las que no resuelvan acciones personales basadas en derecho de crédito (732 LEC)^{*158}, asunto éste de la recurribilidad de la sentencia que hemos de analizar más en profundidad, para lo cual distinguiremos entre la situación que existía antes y después de la reforma de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Medidas Urgentes³¹⁶.

I- HASTA LA REFORMA DE LA LEY 10/92

Hasta la reforma de la Ley 10/92, de 30 abril, de Medidas Urgentes, la sentencia dictada en el juicio verbal siempre se consideró apelable. Y así lo establecía la LEC, aplicando el principio del doble grado jurisdiccional propio de los procesos civiles.

³¹⁵ GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 586 y 587.

^{*158} En el Proyecto todas las sentencias dictadas en la primera instancia de un juicio verbal son susceptibles de apelación.

³¹⁶ Así lo hace y explica cada una de estas dos situaciones VÁZQUEZ SOTELO, Ley...cit., pág. 590.

Dictada la sentencia por el Juez de Paz o Juez de Distrito, conocía de la apelación el JPI correspondiente (el del Partido Judicial o el que resultase por reparto en las ciudades). Más tarde, se inició la confusión³¹⁷ atribuyendo a las Audiencias Provinciales (órganos propios de la Justicia Penal) la competencia funcional para las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados de Distrito, si bien la de los juicios verbales continuó referida a los JPI (un criterio demostrativo de la falta de criterio y de las contradicciones del legislador). Así venía regulada la apelación en los arts. 732 y 733 LEC, tal como quedaron redactadas tras la Reforma Urgente de la Ley 34/84, de 6 de agosto.

II- DESPUES DE LA REFORMA DE LA LEY 10/92

La Ley 10/92, de 30 de abril, es producto de los errores legislativos cometidos en las anteriores reformas³¹⁸, y más concretamente, es consecuencia de la supresión de los Juzgados de Distrito, pues como consecuencia de ella, no sólo han resultado casi siempre competentes en la primera instancia del juicio verbal (salvo los Jueces de Paz, donde los haya) los JPI, que ahora atienden por igual a una demanda de muchos millones que a otra sin apenas significación económica, sino que donde más se han podido observar las consecuencias ha sido en el órgano que, como derivación de lo anterior, ha resultado casi siempre también competente para la segunda instancia (salvo los JPI, en los pocos casos en que en primera instancia conociera el de Paz), las Audiencias Provinciales. Ante las salas de las AP (que siguen denominándose “Secciones”, ahora con menos justificación) se han podido “ver” apelaciones contra sentencias de escasísima cuantía (por ejemplo, cuatro o cinco mil pesetas) en las que “informaban” los propios litigantes, con lo que ello ha conllevado.

³¹⁷ Así lo explica VÁZQUEZ SOTELO, ver nota anterior.

A- SI EL JUICIO HA VERSADO SOBRE RECLAMACION DE CANTIDAD

La Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Procesal 10/92 ha resuelto el problema con criterio tan expeditivo como arbitrario (y para algunos incluso de dudosa constitucionalidad, aunque este punto será analizado un poco más adelante), que ha consistido en suprimir la garantía del doble grado jurisdiccional para los juicios verbales que traten sobre las acciones personales basadas en derechos de crédito, a tenor del párrafo I del art. 732 LEC.

El punto de vista del legislador es que una cuestión exclusivamente dineraria entre partes cuyo importe no excede de 80.000 pesetas no justifica que un segundo órgano jurisdiccional deba revisar el hecho por el que otro intervino en primera instancia, cuya decisión se convierte en firme ipso iure. Viene a suponer por lo menos una arbitraria aplicación del aforismo del proceso romano: “de minimis non cura Praetor”.

En cuanto a la constitucionalidad del precepto³¹⁸, no puede decirse en verdad que la instauración de la única instancia en determinados supuestos pueda vulnerar derecho alguno reconocido en nuestra CE. El TC siempre ha propugnado que aún cuando el derecho al recurso forma parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, nada impide al legislador la exclusión del mismo y, en consecuencia, no pueden considerarse como restricciones del derecho al proceso (STC 214/88, de 14 de noviembre), y que el derecho a recurrir, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que el legislador puede configurar libremente el sistema de recursos (SSTC 37/88, de 3 de marzo y 58/87, de 19 de mayo).

³¹⁸ Ver nota anterior.

³¹⁹ Reflexión tomada directamente de GISBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 792 y ss., quien a su vez lo toma de GUASP (y ARAGONESES ALONSO), Derecho...cit., Tomo II, págs. 635 y ss..

Por tanto, constitucionalmente nada puede objetarse a la limitación de los recursos en determinadas sentencias. Sin embargo, no puede considerarse adecuado que por motivos únicamente de intentar paliar el colapso de trabajo que sufren las Audiencias Provinciales, se recorte el sistema de recursos contra sentencias que por tener un “menor valor” se entiende que “no merecen hacer perder el tiempo” a los órganos de apelación.

Es reprochable la STC 58/86, de 14 de mayo, por entender perfectamente válido el no permitir recursos contra sentencias de pequeña cuantía, puesto que existen en juego principios que requieren mayor atención, en estos momentos, antes que el de igualdad, y olvida el Tribunal que este principio de igualdad es un derecho fundamental, mientras que los otros no son sino principios informadores de nuestro ordenamiento: “La falta de recursos en asuntos de pequeña cuantía es...consecuencia de coordinar las exigencias del principio de igualdad con otros principios constitucionalmente protegidos, y que el legislador ha considerado predominantes, como el de seguridad jurídica o la celeridad de resolución de los conflictos que puede aconsejar la intervención en única instancia”.

Por tanto, las críticas a este recorte impugnativo pueden ser fundamentalmente las siguientes: la posibilidad del arbitrio judicial que puede provocar la interpretación del art. 732 LEC; la pérdida de garantías de lograr una decisión justa al no contar con la posibilidad de recurrir; la posibilidad de que en casos de duda se plantee sobre esta cuestión recursos de amparo, con lo que se sustituye un recurso ordinario y simple por otro más complejo; el carácter antisocial de la norma, ya que, generalmente, los procesos verbales tienen como sujetos a las personas menos pudientes.

El problema técnico que plantea este art. 732.I, es precisar qué se entiende por “acciones personales basadas en derechos de crédito”, para que quede delimitado el campo sobre el que se proyecta la prohibición.

Fue en el informe presentado por el CGPJ al Anteproyecto, en el que se utilizó la fórmula que posteriormente pasaría a la Ley: "...muchas veces los intereses que se ventilan en esta clase de procesos de mínima cuantía no son única y exclusivamente crematísticos, sino que aparecen revestidos de otros valores dignos de una mayor protección jurisdiccional... Por ello, el CGPJ se muestra partidario de que sólo se excluyan del recurso de apelación las demandas a que se refiere el artículo 715 de la Ley Procesal Civil que versen sobre acciones personales fundadas en derechos de crédito, admitiéndose, empero, dicho recurso en todos los demás casos."

Nuestra LEC considera, al tratar de la competencia territorial, que existen en el ámbito civil tres tipos de acciones (art. 62): las acciones personales, las acciones reales y las acciones mixtas. Como no define cuáles son unas u otras, hay que acudir a la doctrina jurisprudencial.

Simplificando una jurisprudencia sobradamente conocida, podemos decir que las acciones reales son las que tienen su origen en un derecho real y que las acciones mixtas son aquéllas que tienen aspectos reales y personales, lo que se produce generalmente en las acciones de división de cosa común, acciones de partición de herencia...etc.. De esta forma, por exclusión llegaríamos a la conclusión de que las que no tienen estos caracteres son acciones personales.

Dentro de las acciones personales se comprenden una multitud de supuestos. Por lo que hay que acudir a las fuentes del Derecho privado, ya que las acciones personales excluidas no son todas, sino las nacidas de derechos de crédito.

La doctrina civilista considera que los derechos de crédito son el contenido del Derecho de Obligaciones. Derecho de crédito y obligación son palabras sinónimas, significan lo mismo. Surge el derecho de crédito cuando determinada persona puede exigir

de otra que observe determinada conducta o realice cierta prestación; una y otra se denominan acreedor y deudor. Por ese especial vínculo que se crea entre acreedor y deudor, a los derechos de crédito se les denomina también derechos personales.

La Sección Quinta de la AP de Oviedo, en Auto 26-2-1993, ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este artículo, manifestando: "...la expresión legal acciones personales basadas en derecho de crédito es reiterativa y no muy afortunada..."

El derecho de crédito es el poder que corresponde al acreedor para exigir del deudor el cumplimiento de la obligación. Este vínculo personal que impone jurídicamente la obligación de cumplir lo que se debe es lo que tiene carácter primordial. Luego, visto el contenido del término "derecho de crédito", se podría entender que el legislador, dentro del art. 732.I, ha englobado todas las obligaciones, o, más propiamente, todas las prestaciones inherentes a los mismos.

Ahora bien, dentro de las obligaciones, hay que distinguir entre: la obligación de entregar una cosa determinada, la obligación de hacer, la obligación de deshacer forzosa y la obligación de pagar una cantidad, ya esté debidamente debida, ya represente el equivalente económico de la prestación directamente debida, ya signifique la indemnización de los daños y perjuicios producidos al acreedor.

Al último grupo es al que al parecer se refiere el art. 732.I. Pero sigamos, porque la acción personal basada en derechos de crédito, no surge sino cuando el deudor incumple su obligación de pagar una suma de dinero, y entonces es en ese supuesto cuando el acreedor puede acudir a la vía judicial para satisfacer su derecho.

Por tanto, "acciones personales basadas en derechos de crédito", no pueden ser más que aquellas acciones surgidas de incumplimiento por parte del deudor del pago de una obligación pecuniaria, ya sea debida directamente, ya represente el equivalente económico

de la prestación directamente debida, ya signifique la indemnización de los daños y perjuicios producidos al acreedor, que no sobrepase la cuantía de 80.000 pts. asignada al juicio verbal ordinario, quedando fuera todos los procesos en los que existen otras obligaciones en juego, pero a los que la Ley les asigna en su tramitación los cauces del juicio verbal, pero no son propiamente juicio verbal, es decir, ordinario, al que se refiere el art. 715 LEC. El ya citado Auto de la AP de Oviedo establece en relación con el art. 732.I que: “Se refiere a pretensiones en las que se ejercita un derecho de crédito fundado en una relación obligatoria de carácter personal, por contraposición a las de naturaleza real, cualquiera que sea su origen: Contractual, cuasi-contractual, derivados de un ilícito penal o de actos u omisiones en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia, como dice el art. 1089 del Código Civil”.

En conclusión, con todo ello, en la práctica se seguirán suscitando dudas acerca de la interpretación de esta expresión y, por ello, tenemos que concluir que además de antisocial, atentatoria al principio de igualdad, la norma es técnicamente defectuosa y justificada exclusivamente en el afán del legislador de los últimos tiempos de evitar trabajo a los Juzgados con infracción manifiesta de lo dispuesto en el art. 24 CE que establece como función primordial de los mismos la garantía de los derechos e intereses legítimos.

B- SI EL JUICIO HA VERSADO SOBRE RECLAMACIONES QUE NO SEAN DINERARIAS

Ahora bien, como el juicio verbal civil, aunque la demanda tenga siempre un valor que no supere las 80.000 pts., puede versar en realidad sobre cuestiones distintas a una reclamación dineraria (por ejemplo, sobre una servidumbre que tenga un valor antiguo que aún actualizado no supere esa cifra) el art. 732 LEC hubo de ser enmendado para precisar a

través de un II párrafo que la supresión de la segunda instancia es sólo para los juicios verbales en los que se resuelva sobre sumas de dinero, manteniéndose la apelación (en ambos efectos, dice dicho precepto), cuando el juicio verbal resuelva sobre acciones distintas a las de reclamación de cantidad de dinero^{*159}.

3- CAUSA

Además de los requisitos ya analizados, posibilidad e idoneidad, se requiere un tercer requisito objetivo, la existencia de una causa, es decir, un interés personal directo y legítimo.

Para apelar basta, por lo tanto, sufrir un perjuicio o gravamen producido por el fallo de la resolución recurrida o por defectos procedimentales en el curso de la sustanciación del pleito que hayan lesionado los derechos de defensa de alguna de las partes. De esto se deduce que no se requieren legalmente motivos tasados para interponer el recurso de apelación.

Lógicamente, ese gravamen existirá sólo cuando no se haya vencido totalmente en la primera instancia.

En resumen, la causa de la apelación es el interés en recurrir, que proviene de un perjuicio o gravamen provocado por la falta de vencimiento total en la sentencia recurrida. Además, este interés ha de ser personal, directo y legítimo.

^{*159} En el Proyecto, la apelación se mantiene para todos los supuestos, es decir, se suprime la distinción

C- DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL

El tercer grupo de requisitos en la segunda instancia es el de la actividad procedimental, que engloba el lugar, el tiempo y la forma de realización de los actos procesales.

1- LUGAR

En cuanto al lugar, rigen las reglas generales (art. 268 LOPJ) y, por tanto, la tramitación de la segunda instancia se desarrollará en la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional competente que, como ya hemos explicado, dependerá, según la fase de la apelación en que nos encontremos, que sea la del Juez a quo o la del órgano ad quem.

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, la posibilidad de que ciertas actuaciones concretas se hayan de practicar fuera de la circunscripción, de la sede o del local, siendo de aplicación, en este caso (como ya vimos en la primera instancia), las normas generales sobre auxilio judicial (arts. 273 a 278 LOPJ).

2- TIEMPO

Es éste el segundo requisito de la actividad. Rigen, como no podía ser de otra manera, las reglas generales en cuanto a la habilidad o inhabilidad de días y horas para la realización de los actos (que ya vimos en la primera instancia), concretadas en los arts. 182 y ss. LOPJ y 256 y ss. LEC.

El carácter procesal del tiempo comienza a partir de la notificación fehaciente de la resolución judicial (de la sentencia definitiva), salvo en los casos en que se haya solicitado la aclaración (arts. 303 y 407 LEC).

actual.

Los plazos dentro del procedimiento de la apelación son perentorios para las partes. Su inobservancia, en términos generales, acarrea la nulidad por preclusión del acto realizado fuera de plazo.

El problema más importante y que trataremos en su momento es el del plazo para la interposición del recurso y su posible o no prorrogabilidad para la subsanación de errores.

Especial importancia tiene el transcurso de los “términos” señalados para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso sin haberlo utilizado, ya que conforme al art. 408 LEC, “quedará de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución judicial a que se refiera, sin necesidad de declaración expresa sobre ello”.

3- FORMA

A pesar de que el juicio verbal es el más oral de todos los procesos declarativos, en la tramitación del recurso de apelación predomina la forma escrita, con alguna concesión al principio de oralidad, como ocurre con la vista y la práctica de pruebas, siendo de destacar que cada reforma que se hace de la tramitación del recurso tiende más a reducir las posibilidades de oralidad, y así ocurrió en la última de ellas, la de la Ley de Reforma Urgente de 30 de abril de 1992, que acentuó el principio de escritura en la segunda instancia, como veremos al estudiar el procedimiento.

Es indudable que la forma escrita facilita el trabajo del Juez o Magistrados, pero se desvirtúa el sistema de la oralidad de este juicio, por lo que creemos que sería conveniente una reforma en aras de incrementar dicha oralidad.

En cuanto al idioma, hay que tener en cuenta el art. 231 LOPJ, que establece las normas sobre la utilización del castellano y otras lenguas oficiales propias de las respectivas CC.AA..

TITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO Y EFECTOS
EN LA SEGUNDA INSTANCIA

V- PROCEDIMIENTO EN LA SEGUNDA INSTANCIA^{320*160}

Tras el análisis de los requisitos, entramos en el procedimiento de segunda instancia, es decir, en el procedimiento por el que se tramitan las apelaciones que se interponen contra sentencias definitivas dictadas en juicios verbales, a que se refiere el art. 732 LEC.

Este procedimiento en la segunda instancia se rige por lo dispuesto con carácter general en los arts. 382 a 400 LEC, y en los arts. 732 a 736 LEC con carácter especial.

Como ya adelantamos al tratar de los requisitos de segunda instancia, la fase de sustanciación del procedimiento se caracteriza porque se tramita parte ante el Juez a quo y parte ante el Juez o Tribunal ad quem, para quien la celebración de la vista oral no es preceptiva, pudiendo directamente entrar a decidir el recurso. Por ello, distinguiremos en nuestro análisis dos fases distintas en base al órgano judicial competente en cada una de ellas: el Juez a quo y el Órgano ad quem. Por último, también añadiremos el desarrollo y la terminación anormal.

³²⁰ Para el procedimiento en la segunda instancia hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 634 y ss.; y GIBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 796 y ss., de quien hemos adoptado también el esquema de esta segunda instancia.

¹⁶⁰ Para el procedimiento en la segunda instancia ha de consultarse el Capítulo III (arts. 455 a 467 Proyecto), del Título IV, del Libro II. Sin embargo, distinguir en él la preparación (ante el órgano que dictó la resolución que se impugna, en el plazo de cinco días desde la notificación, simplemente citando dicha resolución y manifestando la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugnan), interposición

A- FASE PROCEDIMENTAL ANTE EL JUEZ A QUO^{*161}

En la fase procedimental de la apelación sustanciada ante el Juez a quo, que en el juicio verbal puede tratarse del Juez Paz o del Juez Primera Instancia, es decir, el mismo que conoció de la primera instancia, iremos examinando cada uno de los posibles trámites por los que la misma pueda pasar: interposición del escrito del recurso, examen de dicho escrito, trámite de subsanación de defectos, inadmisión o admisión, trámite de adhesión con las posibles conductas del apelado, resolución del Juez a quo, y recursos posibles.

1- INTERPOSICION

Comienza el procedimiento de la segunda instancia mediante la interposición del escrito en que se fundamente el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia, ya sea de fondo o absolutoria en la instancia.

Dicha interposición se regula en el art. 733.I LEC.

Analizaremos a continuación diversos aspectos de interés en la interposición de esta apelación.

I- ANTE QUIÉN

Como se establece al comienzo del párrafo I del art. 733 LEC, el escrito de interposición del recurso de apelación se presentará ante el órgano que hubiese dictado la resolución que se impugne, es decir, el Juez que hubiera conocido del juicio verbal en primera instancia. Dicho de otro modo, el escrito se interpondrá ante el Juez a quo.

(ante el Juez a quo y teniendo que fundamentarla), oposición o impugnación y sustanciación (por tanto, se suprime el concepto de adhesión como tal).

II- TIEMPO

En la interposición del recurso rige el plazo general de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, ya que así lo dispone el art. 732.II LEC cuando dice que "...podrá interponerse el recurso de apelación en ambos efectos dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación...".

Recordamos que en los casos en que se pida aclaración de una sentencia conforme a lo prevenido en el art. 363, el término para interponer el recurso que proceda contra la misma sentencia se contará desde el siguiente día a la notificación del auto en que se haga o deniegue la aclaración (arts. 407 y 303 LEC).

III- FORMA

En cuanto a la forma de la interposición del recurso, ésta debe ser por escrito, pues así se establece en el art. 733.I LEC.

Antes de la reforma de 30 de abril de 1992, el art. 732.II recogía la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la sentencia dictada en un proceso verbal in voce; decía así: "La apelación podrá interponerse en el acto de la notificación de la sentencia, consignándolo el Secretario en la diligencia, o dentro de los tres días siguientes, por escrito o por comparecencia ante el Secretario". De este modo, existían dos formas de interponer el recurso de apelación, oralmente o por escrito. Actualmente, sólo es posible la forma escrita, al no dejar duda alguna al respecto el art. 733.I LEC. Estamos de acuerdo con Aragonese Martínez e Hinojosa Segovia cuando critican esta supresión y exponen que se ha perdido flexibilidad a la hora de interponer el recurso en el juicio verbal³²¹.

¹⁶¹ Ante este órgano se lleva a cabo la preparación, interposición y oposición o impugnación del recurso de apelación o segunda instancia (arts. 457 a 462).

³²¹ ARAGONESES MARTÍNEZ e HINOJOSA SEGOVIA, Reflexiones...cit., pág. 455.

Además, este escrito habrá de ser motivado, conforme se deduce del citado art. 733.I : “...en el que se expondrán las alegaciones en las que se base la impugnación...”. Para facilitar esta motivación, se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia (art. 732.II). De dicha motivación nos ocuparemos en el siguiente apartado.

IV- CONTENIDO

Establece el art. 733 LEC que: “El recurso se interpondrá por escrito que se presentará ante el órgano que hubiese dictado la resolución que se impugne, en el que se expondrán las alegaciones en las que se base la impugnación. Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión, acreditando haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que fuese ya imposible la reclamación.

En el escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que le hubiesen sido indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento la oportuna reserva, y de las admitidas que no hubiesen sido practicadas por causas que no le sean imputables”.

Al escrito de interposición se acompañarán únicamente copias del mismo, conforme al art. 720 LEC.

Respecto a su estructura, el escrito de interposición debe acomodarse a la estructura general de: encabezamiento, cuerpo y suplico.

A- ENCABEZAMIENTO

En cuanto al encabezamiento, éste debe contener los datos relativos a la individualización del órgano jurisdiccional destinatario (es decir, el Juez a quo, que en el juicio verbal será el JP o el JPI), de las partes, y del proceso en que se produce la resolución recurrida. La indicación del órgano ad quem no es necesaria, pues éste se determina por un criterio de competencia funcional (arts. 82.4 y 85.4 LOPJ), e incluso el error en su indicación no constituye un efecto sustancial, sino subsanable (SAP Sevilla 18-3-1969). Un mayor estudio de este encabezamiento ha sido realizado por Gisbert Pomata³²².

B- CUERPO

En el cuerpo se han de exponer: los datos relativos a la sentencia que se recurre, es decir, las fechas en que ha sido dictada y en que ha sido notificada a la parte³²³; las alegaciones en las que base la impugnación; la eventual petición de la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente; la eventual proposición de prueba concreta; la posible petición de que se celebre vista oral; y un domicilio a efectos de notificaciones en la sede del órgano competente para conocer del recurso.

En relación a las alegaciones en las que se base la impugnación, hemos de aclarar que dicha fundamentación se refiere tanto a la forma como al fondo.

³²² GIBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 306 y ss., parágrafo 227.

³²³ GIBERT POMATA, Tratado...cit., pág. 308, parágrafo 229.

Frente a este sistema del escrito de interposición del recurso de apelación motivado se han levantado críticas doctrinales, como la de Serra Domínguez³²⁴, cuando expone que la interposición de la apelación mediante escrito razonado u fundado en Derecho con expresión de la pretensión impugnatoria, es contraria a la misma estructura de la apelación; el Juez a quo tiene una mera función de instrumento para remitir los autos al Tribunal superior; no parece adecuado razonar en un escrito a él dirigido unas cuestiones de fondo que tienen por destinatario a otro Juez. O como explica Vázquez Sotelo³²⁵, dicha referencia se ha realizado con la finalidad de evitar la celebración de la vista conculcando el principio de oralidad que constituye un principio-guía de la CE (art. 120.2). Incluso, como explica Miguel Ángel Fernández³²⁶, aunque la generalidad de la doctrina ha criticado el sistema de la interposición de la apelación en la mayoría de procesos, según el cual ésta se limita a una mera declaración de iniciación, sin articular los motivos que se deducen en el acto de la vista y sin otra sustanciación ante el órgano a quo, debido a que este sistema puede facilitar la interposición de apelaciones sin fundamento alguno y ser utilizado por litigantes temerarios para dilatar el proceso, no es comprensible por ser donde menor justificación tiene que sea precisamente en el juicio verbal donde se introduzca una segunda instancia escrita (y con una interposición motivada, añadimos nosotros), ya que al no resultar en él preceptiva la intervención de Letrado y Procurador, salvo determinados supuestos especiales cuya tramitación lo es por el objeto y no en razón a la cuantía del litigio, si las partes carecen de dirección facultativa, el trámite escrito deviene complejo y resulta de difícil inteligibilidad para una persona no técnica.

³²⁴ ARAGONESES MARTÍNEZ e HINOJOSA SEGOVIA citan en su artículo "Reflexiones..." cit., pág. 455, las palabras de SERRA DOMÍNGUEZ contrarias a esta reforma.

³²⁵ VÁZQUEZ SOTELO, Ley...cit., pág. 592.

³²⁶ FERNÁNDEZ LÓPEZ, junto a DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo II, # 41, pto. 17, nota marginal nº 6, pág. 526.

Sin embargo, la cuestión fundamental, tal y como está redactada la actual Ley, es si el requisito de la motivación a que obliga la Ley es un requisito de forma o de contenido, ya que ello determinará la posibilidad de rechazar el recurso de plano ante la falta de motivación o establecer un mecanismo de subsanación. Aunque existe alguna jurisprudencia menor que establece la admisión del escrito pese a la carencia de motivación (Auto AP de Segovia 231/1993, de 24 de noviembre, que resuelve en un juicio de cognición un recurso de queja planteado contra el auto de inadmisión del recurso dictado por el Juez a quo), la jurisprudencia del TC (STC 231/3, de 15 de enero de 1996, que recoge la STC 64/1992) establece que “el incumplimiento por el apelante de la carga de motivar el escrito de interposición con las alegaciones que sustente la apelación, entraña la inobservancia de un requisito esencial”, es decir, que la falta de motivación conllevaría la inadmisión del recurso por ser este art. 733 una norma de obligado cumplimiento o de *ius cogens*, sin perjuicio del correspondiente recurso de queja que pueda interponerse.

Para cumplir con el requisito de la motivación, habrán de citarse y explicarse todas las circunstancias fácticas y jurídicas que determinen a juicio del apelante la improcedencia de la sentencia recurrida, exponiendo los textos legales y doctrina que estime aplicables al caso.

Asimismo hemos dicho que en este escrito de interposición habrá de recogerse, si así se desea, la petición de la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente, en cuyo caso es preciso que: se cite el precepto que se entiende infringido motivándose adecuadamente; se pruebe que se pidió la subsanación de la falta en el momento de producirse la infracción en la primera instancia, siempre que ello haya sido posible; y finalmente, que se acredite que la infracción no se puede subsanar en la propia segunda instancia (art. 733.I).

También hemos explicado que el recurrente podrá proponer prueba, determinando aquélla que se solicita. Como se aprecia del art. 733.II, parece que sólo en dos supuestos permite la Ley que se pueda solicitar prueba en estas apelaciones: si hubo diligencias de prueba indebidamente denegadas en la instancia, y contra cuya denegación se formuló protesta en el momento oportuno; y si existieron diligencias de prueba admitidas pero no practicadas en la primera instancia por causa no imputable al solicitante. Se observa como nada se dice sobre si podría solicitarse prueba en base al conocimiento de nuevos hechos ocurridos después de solicitarla en primera instancia, o de hechos ocurridos con anterioridad pero de los que no se tenía noticia hasta ahora. Pensamos que debería admitirse esta posibilidad, en base al art. 862 LEC³²⁷. También cabe pensar que dicha petición se puede hacer por medio de otrosí en vez de en el cuerpo del escrito, pues nada dice la Ley a este respecto, y en otros procedimientos así se admite.

También entendemos que, aunque en la Ley no se especifica, habrá de solicitarse en la interposición la petición de que se celebre vista oral, tanto si se ha pedido la admisión y práctica de pruebas como si simplemente se estima conveniente por las circunstancias del caso para la adecuada defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, Fuente Alvarez³²⁸ considera que esta vista nunca se celebrará si ninguna de las partes ha solicitado prueba.

Finalmente, el art. 734.II obliga a incluir en este escrito de interposición de la apelación un domicilio para notificaciones en la sede del órgano competente para conocer del recurso.

³²⁷ De tal opinión es también FERNÁNDEZ LÓPEZ, Miguel Ángel en su obra con RIFÁ SOLER, José María y VALLS GOMBAU, José Francisco; Derecho Procesal Práctico, Tomo IV, pág. 613, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992, Madrid, y en su obra con DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit., Tomo II, 41, pto. 17, pág. 526; así como de FUENTE ÁLVAREZ, Francisco; El nuevo recurso de apelación civil en los juicios verbales y de cognición, Actualidad Jurídica Aranzadi, 15-4-1993, nº 97.

C- SUPPLICO

En el suplico se solicitará que se tenga por interpuesto recurso de apelación contra la sentencia definitiva y, en su caso, con la reiteración de la solicitud de nulidad del juicio desde el momento en que se cometió la infracción de normas o garantías procesales que se denuncia, habiendo causado indefensión al recurrente; igualmente, se reiterará la petición de prueba y de vista oral, cuando se soliciten.

D- LUGAR, FECHA Y FIRMA

Terminará el escrito con el lugar, fecha y firma de la parte o del factor mercantil, en su caso. No se requerirá la firma de Procurador o Abogado, salvo que se haya servido de Procurador voluntariamente o por encontrarse en alguno de los supuestos del art. 11 LEC, e igualmente cuando se haya valido de Letrado.

V- EFECTOS

Los efectos de la interposición del recurso son: abrir la tramitación de la segunda instancia (que evidentemente sólo cabe hacerse a instancia de parte, nunca de oficio, al ser nuestra justicia rogada); evitar la firmeza de la resolución recurrida (art. 408 LEC a sensu contrario); y evitar la ejecución de la resolución recurrida, aunque como veremos más tarde, cabe solicitar la ejecución provisional (art. 385 LEC).

2- EXAMEN DEL ESCRITO DE INTERPOSICION POR EL JUEZ A QUO

Tras la interposición del recurso y su debida dación de cuenta, el Juez a quo examinará el escrito a fin de resolver sobre su admisibilidad o inadmisibilidad.

³²⁸ FUENTE ÁLVAREZ, El nuevo...cit..

En concreto, el Juez a quo ha de examinar: si es competente para conocer de la interposición por tratarse del mismo Juez que dictó la sentencia recurrida; la corrección del número del expediente; si el recurso se interpone por quien está legitimado para ello; si el recurso se interpone en tiempo; si el recurso se ha hecho por escrito y en él figura la firma de la parte o del factor mercantil, en su caso; si se ha fijado un domicilio para notificaciones; y si el escrito contiene la fundamentación del recurso.

En cuanto al requisito de la fundamentación, éste parece ser un requisito sustancial, es decir, no formal, según anteriormente dijimos, cuya ausencia determina la inadmisibilidad del recurso. Sin embargo, la mayor parte de la jurisprudencia del TC viene admitiendo la subsanación de cualquier tipo de defecto en la interposición de un recurso, incluso los no formales (SSTC 39/1988, de 9 de marzo; 92/1990, de 23 de mayo; 109/1991, de 20 de mayo; y 46/1989, de 21 de febrero). Ésta parece ser la práctica habitual de los Juzgados, e incluso algunas Audiencias ya se han pronunciado a favor de la subsanabilidad de este defecto en el escrito de interposición del recurso (Auto AP Segovia, de 16 de abril de 1993, al decidir un recurso de queja planteado contra la inadmisión del recurso de apelación).

Por tanto, parece que un defecto en el contenido del recurso no debe determinar por sí solo la inadmisibilidad del recurso, aunque el Juez deberá ponderar con cuidado las circunstancias del caso (buena fe del recurrente...), según la jurisprudencia del TC.

En cuanto a la falta de domicilio para notificaciones, entendemos que la misma es subsanable, debido a que es un defecto fácil de solucionar.

3- TRAMITE DE SUBSANACION DE DEFECTOS

Examinado el escrito por el Juez a quo y apreciada la falta o defecto de algún requisito del mismo que sea subsanable (es decir, algún requisito formal), se ha de llevar a cabo dicha subsanación, apoyándose, según el TC (SSTC 92/1990, de 23 de mayo; 2/1989, de 18 de enero; 57/1988, de 5 de abril; 21/1990, de 15 de enero; y 213/1990, de 20 de diciembre), en la cláusula general del art. 11.3 LOPJ y en el art. 24 CE.

El Juez a quo a través de providencia manifestará la existencia del defecto apreciado, concediendo un plazo para subsanarlo, que sea suficiente, aunque corto para no infringir ni los principios de celeridad y eficacia del proceso, ni los derechos de la parte contraria. Sin embargo, sólo se podrá dar una oportunidad para la subsanación (STC 25/1991, de 11 de febrero).

4- INADMISION O ADMISION

Tras la interposición del recurso, el examen del escrito y en su caso la subsanación de defectos, el Juez a quo procederá a admitir o inadmitir el mismo.

I- INADMISION : CONSECUENCIAS Y RECURSO

Cuando el Juez a quo entienda que no se cumplen los requisitos procesales exigidos para la interposición de la apelación, y estos no sean subsanables o bien no han sido subsanados en tiempo y forma, inadmitirá ésta y decretará la firmeza de la sentencia recurrida.

Esta inadmisión deberá ser, según el TC (SSTC 199/1988, de 25 octubre; 200/1988, de 26 octubre; y 105/1989, de 8 junio), excepcional y además deberá ser razonada, por lo

que se deduce que la inadmisión habrá de decretarse en auto motivado, a pesar de que el art. 398.I LEC habla de autos o providencias (Auto AP Barcelona 15-9-1989).

Sobre las consecuencias que la inadmisión del recurso de apelación pudiera acarrear, encontramos la posibilidad de recurrir en queja contra ese auto del Juez a quo que inadmite la apelación ante su superior jerárquico, es decir, ante el que le hubiera correspondido ser órgano ad quem (el JPI si el Juez a quo fue el Juez de Paz, y la AP si fue el JPI). Este recurso de queja responde a los peligros que pudieran existir por el hecho de que es el mismo Juez que dicta la sentencia de primera instancia recurrida el que decide sobre la admisión o no del recurso de apelación interpuesto.

Es el art. 735 LEC el que regula este recurso de queja contra la inadmisión de la apelación: “Denegada la admisión de la apelación, si dentro del día siguiente al de la notificación el apelante manifestare por escrito su propósito de recurrir en queja, se le expedirá certificación del auto denegatorio, con emplazamiento por diez días, en cuyo termino el apelante, con presentación de testimonio, podrá alegar por escrito ante el Juez o la Audiencia, las razones por las que la apelación debiera ser admitida y el órgano judicial, previo informe del Juez, resolverá sobre ello dentro del segundo día.

Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juez para ejecución de la sentencia.”^{*162}

Por lo tanto, estos serían los pasos a seguir: plazo de un día para presentar escrito ante el Juez a quo manifestando el propósito de recurrir en queja para ante el Juez o Tribunal ad quem; el Juez a quo admite el escrito, siempre que cumpla con los requisitos necesarios para ello, o bien acuerda subsanar los defectos que se hayan cometido; admitido

^{*162} En el Proyecto se regula en los arts. 494 y 495. Como vemos, la queja también cabe contra la resolución dictada en un recurso extraordinario por infracción procesal o en un recurso de casación en los casos en que éste quepa.

el escrito, se expedirá al recurrente certificación del auto denegatorio de la admisión del recurso de apelación, y en la misma providencia en que así se acuerde, se le emplazará por diez días para que comparezca ante el Juez o Tribunal ad quem; el recurrente dentro del plazo de diez días a contar desde el siguiente en que se le notifica la admisión del recurso de queja y del emplazamiento para ante el Juez o Tribunal ad quem, debe comparecer ante el mismo, con entrega del testimonio, y presentando un escrito que contenga las razones por las que la apelación debiera de ser admitida; el Juez o Tribunal ad quem, previo informe del inferior, resolverá sobre ello dentro del segundo día; desestimada o desierta la queja se pondrá en conocimiento del Juzgado a quo para ejecución de la sentencia; estimada la queja, se pondrá en conocimiento del Juez a quo para que tenga por interpuesto recurso de apelación contra la sentencia definitiva y dé a los autos el curso que corresponda.

II- ADMISION

Interpuesto en tiempo y forma el recurso, o en su caso, una vez subsanada la falta o defecto apreciado, o estimado el recurso de queja planteado contra la inadmisión del mismo, el Juez a quo admitirá la apelación sin más trámite (art. 386 LEC), es decir, sin necesidad de dar traslado a la parte contraria para que exponga lo que estime conveniente a su derecho. A pesar de que el art. 386 no hace mención del tipo de resolución que el Juez a quo deberá dictar para admitir la apelación, se puede deducir de los arts. 369 LEC y 245.1 LOPJ que bastará con dictar una providencia, ya que, según los citados artículos, el auto se dicta en general cuando se deniegue o inadmita lo solicitado por las partes.

Aunque los arts. 734 y 55 LEC no digan nada al respecto, conforme al art. 386 habrá de expresarse si la apelación se admite en uno o ambos efectos. Lógicamente, según

hemos venido exponiendo con anterioridad, en este caso en que nos encontramos (apelación contra la sentencia definitiva dictada en la primera instancia el juicio verbal) la apelación será siempre admitida en ambos efectos (art. 384.1º LEC), es decir, en el efecto suspensivo y en el efecto devolutivo.

El efecto suspensivo (art. 388 LEC) provocará la suspensión de la ejecución de la sentencia apelada hasta que recaiga el fallo del órgano superior (JPI o AP), mientras que el efecto devolutivo (art. 389 LEC), propio de un recurso vertical como es el de apelación, provocará que quede en suspenso la jurisdicción del Juez para seguir conociendo de los autos principales y de las incidencias a que puedan dar lugar. Sin embargo, ambos efectos quedan desvirtuados ante la posibilidad de llevar a cabo la ejecución provisional de la resolución recurrida y por existir aspectos del litigio de los que sí sigue conociendo el Juez a quo. De las excepciones a estos efectos trataremos a continuación.

También hemos de adelantar ahora que, en la misma providencia admitiendo el recurso, el Juez a quo acordará dar traslado a la parte apelada por cinco días, para que presente, si así conviniera a su derecho, escrito de impugnación o adhesión al recurso (art. 734 LEC). De esto último trataremos un poco más adelante.

A- EFECTO SUSPENSIVO. EJECUCION PROVISIONAL DE LA SENTENCIA

La sentencia definitiva dictada en un proceso de ínfima cuantía es ejecutable provisionalmente si reúne los requisitos necesarios para ello que dispone el art. 385 LEC: cuando la sentencia condene al pago de una cantidad líquida o cuya liquidación pueda efectuarse por simples operaciones numéricas a tenor de lo dispuesto en el fallo, o en caso diferente sólo cuando el Juez estime que el perjuicio que pudiera irrogarse con su ejecución no sería irreparable.

Sobre cuándo ha de hacerse esta solicitud, entendemos que al no seguirse en la regulación de esta apelación los mismos trámites procedimentales que en el JMC, no es aplicable a la misma el plazo de seis días que dispone el citado art. 385 LEC, contado a partir de la notificación de la resolución admitiendo el recurso de apelación, ya que, admitido el recurso, el Juez dará traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días para que presenten sus correspondientes escritos de impugnación o adhesión.

Para evitar dilaciones en el procedimiento, entendemos que debe solicitarse por la parte interesada en su respectivo escrito, ya sea el apelante en su escrito de interposición, ya sea el apelado en el de impugnación o adhesión.

B- EFECTO DEVOLUTIVO: EXCEPCIONES

El art. 390 LEC determina los supuestos en los que el Juez a quo sigue conociendo, aunque se esté tramitando la apelación contra la sentencia definitiva: de los incidentes que se sustancien en pieza separada formada antes de admitir la apelación; de todo lo que se refiera a la admisión, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos; y de lo relativo a la seguridad y depósito de personas.

Las dos últimas excepciones son medidas cautelares, cuyo significado y eficacia se vería lógicamente menoscabados si se les priva de ejecución.

C- CONSECUENCIAS DE LA ADMISION DE APELACIONES IMPROCEDENTES

La providencia admitiendo el recurso puede ser revisada por el órgano ad quem, incluso de oficio (SSTC 90/1986, de 2 julio; 187/1989, de 13 noviembre; y 152/1989, de 2 octubre).

Sin embargo, adelantamos que no es posible en este proceso del juicio verbal el recurso de casación contra la sentencia dictada en la apelación del mismo.

5- ADHESION O IMPUGNACION

Tras la admisión del recurso de apelación, el apelado tiene la posibilidad de presentar su escrito de impugnación o adhesión al recurso de la contraparte (art. 734.I LEC).

I- CONDUCTAS DEL APELADO

De esta forma, el apelado puede adoptar dos posturas: no presentar escrito o presentarlo.

A- NO PRESENTA ESCRITO

El apelado puede dejar transcurrir el plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de la providencia admitiendo el recurso y dándosele traslado para que presente su correspondiente escrito, sin llevarlo a cabo.

B- PRESENTA ESCRITO

El cometido de este escrito puede ser diverso: el apelado puede no adherirse al recurso de la contraparte, pero sí alegar lo que estime conveniente, ya que éste es el único

momento procesal en que el apelado puede manifestar lo que estime oportuno para defender sus intereses, ya que la vista oral no es preceptiva; también puede el apelado adherirse al recurso, además de oponerse a la apelación de la contraparte; por último, puede el apelado, sin realizar alegaciones en contra de las expuestas por el apelante, adherirse al recurso.

En relación a las alegaciones que puede realizar el apelado, éstas pueden referirse a los fundamentos en que el apelante base su recurso, a la petición de declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado indefensión al apelante, a la proposición de prueba del apelante, a la solicitud de vista oral, y a la falta de un requisito insubsanable en el recurso del apelante pese a la cual se ha admitido a trámite el recurso.

En relación a la adhesión, ésta la realiza el apelado en este escrito sin que la Ley especifique la necesaria concurrencia de ningún requisito más, aunque se ha de entender que habrá de justificarla igual que se ha exigido al apelante motivar su interposición.

Aunque la Ley tampoco lo diga, podrá el apelado en este escrito proponer pruebas en los mismos términos que hemos visto para el apelante, así como pedir que se celebre vista oral.

En el escrito de impugnación o adhesión, al igual que en el de interposición, el apelado habrá de fijar un domicilio para notificaciones en la sede del órgano competente para conocer del recurso (art. 734.II LEC).

El escrito se presentará, según el art. 734.I, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la providencia admitiéndose el recurso y dándosele traslado del escrito de interposición del apelante.

II- RESOLUCION DEL JUEZ A QUO

Distinguiremos lo que procede en los dos supuestos señalados en el apartado anterior, es decir, según si el apelado presentara o no presentara escrito de impugnación o adhesión.

A- SI EL APELADO NO PRESENTÓ ESCRITO

Si transcorre el plazo de cinco días sin que el apelado presente escrito, el Juez a quo dictará una providencia acordando se eleven los autos al órgano ad quem en los dos días siguientes, con todos los escritos presentados (art. 734.I LEC).

B- SI EL APELADO PRESENTÓ ESCRITO

Si el apelado presentó escrito, el Juez a quo pasará a examinar la admisibilidad del mismo.

Si entiende que no se ha cumplido con algún requisito imprescindible (como puede ser el tiempo) inadmitirá el escrito a través de un auto en el que se expongan los motivos de tal decisión. En la misma resolución acordará se eleven los autos al órgano ad quem en los dos días siguientes, con todos los escritos presentados (art. 734.I).

Si admite el escrito, de acuerdo con Fernández López³²⁹ “aun cuando no se encuentra previsto en la LEC, entendemos, debe darse traslado de la adhesión al apelante a fin de que manifieste lo conducente a su derecho, pues, caso contrario, podría alegarse indefensión. Este traslado lo será antes de elevar las actuaciones a la Audiencia (o al Juez Primera Instancia) por un corto plazo y a los solos efectos de la adhesión interpuesta”. Máxime si posteriormente no se celebra vista oral y el apelante, por tanto, no va a poder

pronunciarse sobre la adhesión del apelado en ningún momento del procedimiento. Después de evacuado este traslado, el Juez acordará se eleven los autos al órgano ad quem en los dos días siguientes, con todos los escritos presentados.

III- RECURSOS

Las dos situaciones relacionadas con el escrito de adhesión o impugnación en que cabría interponer algún tipo de recurso serían cuando el apelante estima que se ha producido una admisión improcedente del escrito y cuando el apelado entiende que se ha producido una inadmisión del escrito de impugnación o adhesión que él estima procedente.

A- CONTRA LA ADMISION IMPROCEDENTE

Contra la providencia admitiendo el escrito de adhesión o impugnación cabe, al amparo del art. 376 LEC, interponer recurso de reposición. Contra el auto desestimatorio de la reposición cabrá recurso de apelación en un solo efecto, conforme al art. 381.I LEC.

Ahora bien, como ya está interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia definitiva y en el juicio verbal la regla es la de no admitir apelaciones contra las resoluciones interlocutorias que no paralizan el proceso, esta apelación tendría que acumularse. El inconveniente es que, conforme a las reglas generales, los escritos de interposición de un recurso de apelación, salvo en el caso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio verbal ordinario, no tienen que ser fundadas, puesto que la fundamentación del recurso se lleva a cabo en el acto de la vista. Por ello, y para evitar una posible indefensión, la parte debería llevar a cabo tal fundamentación en el escrito

³²⁹ FERNÁNDEZ LÓPEZ, en su obra con RIFÁ SOLER y VALLS GOMBAU, Derecho...cit., Tomo IV, pág. 622.

interponiendo el recurso, del que habría, en virtud del principio de contradicción, que dar traslado a la parte contraria.

B- CONTRA LA INADMISION

Si lo que sucede es que el escrito ha sido inadmitido, se puede distinguir entre los recursos que caben contra el auto inadmitiendo el escrito que contiene sólo una oposición y contra el auto que no admite el escrito que (se oponga o no) contiene una adhesión a la apelación.

En ambos casos entendemos que podría seguirse la solución ya explicada para el supuesto anterior y además, en el segundo caso cabría aplicar también el recurso de queja que podría interponerse contra la inadmisión del escrito de interposición, aplicándose de esta forma analógicamente el art.735 LEC, ya que en realidad la adhesión es un verdadero recurso de apelación (aunque proveniente de la contraparte o parte originariamente apelada) (STC 199/1988, de 25 de octubre).

B- FASE PROCEDIMENTAL ANTE EL ORGANO AD QUEM^{*163}

Esta fase procedimental ante el órgano ad quem se regula en el art.736 LEC, el cual establece: “Recibidos los autos por el órgano competente para decidir la apelación, si no hubiese propuesto prueba, dictará sentencia en el plazo de diez días, confirmando o revocando la apelada con imposición de las costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el artículo 496 y mandará devolver aquéllos al Juez.

^{*163} Ante este órgano se lleva a cabo la sustanciación del recurso de apelación o segunda instancia (arts. 463 a 465 Proyecto).

Cuando estime que ello es necesario, podrá acordar la celebración de vista, citando a las partes. Si el recurso contiene proposición de prueba, se resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta, y en el mismo acto se señalará día para la vista dentro de los quince siguientes. En este caso la vista se celebrará empezando por la práctica de la prueba. A continuación las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones”.

Por tanto, recibidos los autos por el órgano ad quem, que en el caso del juicio verbal será el JPI o la AP, según si el Juez a quo fuera el JP o el JPI respectivamente, la tramitación de la apelación o segunda instancia puede ser de dos modos distintos, dependiendo de si la/s parte/s ha/n propuesto o no prueba en su/s correspondiente/s escrito/s. Además de estos dos supuestos, analizaremos sus posibles consecuencias (notificación de la vista, posibles situaciones desde la citación para la vista y celebración de ésta) y por último la decisión.

1- SI LA/S PARTE/S NO HA/N PROPUESTO PRUEBA

En este supuesto, el órgano decisorio de la apelación dictará sentencia en el plazo de diez días (art. 736.I LEC). Sin embargo, el párrafo II de este art. 736 determina que el órgano ad quem, cuando estime que ello es necesario, podrá acordar la celebración de vista, citando a las partes.

Por lo tanto, la vista oral no es un trámite preceptivo en la segunda instancia del proceso de ínfima cuantía, supresión operada por la Ley 10/92, en contra del principio de oralidad que rige en este juicio, y que además proclama como principio general el art. 120.2 CE.

Como vemos, el legislador ha optado por considerar que una vez que se motiva el escrito inicial de interposición, no es menester que haya vista en el recurso, ya que el cometido que tiene este trámite procesal en nuestro ordenamiento es el de que las partes delimiten el objeto de su impugnación y aleguen lo que consideren conveniente a favor de sus pretensiones.

Sin embargo, este planteamiento no es el más idóneo, pues no existen motivos que apoyen la supresión de la vista en un recurso de apelación. No es incompatible un escrito de interposición motivado con una vista en la que las partes dejen concretados definitivamente sus pedimentos o bien únicamente se ratifiquen en lo ya manifestado en el escrito inicial, tras la práctica de las pruebas admitidas, en su caso³³⁰.

Sin embargo, para futuras reformas sería aconsejable establecer la obligatoriedad de la vista oral, especialmente si se opta, como así explicamos más conveniente, por la no exigencia de fundamentación del escrito de interposición de la apelación.

2- SI LA/S PARTE/S HA/N PROPUESTO PRUEBA

Recibidos los autos en el órgano ad quem, si el recurso contiene proposición de prueba, se resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta, y en el mismo acto se señalará día para la vista dentro de los quince siguientes (art. 736.II LEC).

Recordemos que el órgano ad quem admitirá la/s prueba/s solicitada/s cuando la/s propuesta/s se refiera/n a diligencias de prueba indebidamente denegadas en primera instancia, siempre que se hubiese formulado en su momento la oportuna reserva, y las admitidas en esa instancia que no se hubiesen practicado por causas no imputables a su solicitante (art. 733.II LEC).

En la misma providencia en la que admita todas o parte de las pruebas propuestas, el órgano ad quem fija el día de celebración de la vista oral y acuerda se cite a las partes (art. 736.II).

3- NOTIFICACION A LAS PARTES DE LA CITACION PARA LA VISTA

El art. 736 LEC, en su párrafo II, dispone que el órgano ad quem, cuando estime que es necesario, podrá acordar la celebración de vista, citando a las partes.

La notificación de la providencia y la citación a las partes con el señalamiento hecho se lleva a cabo conforme a las reglas generales (arts. 260 y ss. LEC) y tiene, según el TC (SSTC 166/1989, de 16 de octubre; y 156/1992, de 19 octubre), especial importancia, por cuanto la falta de citación para ser oído en un acto o trámite tan importante como el de la vista de un recurso, donde se han de alegar las razones de la defensa de la parte, supone infringir el principio de contradicción propio de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en su aspecto más esencial, así como producir indefensión³³¹.

4- SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIRSE DESDE LA CITACION

Desde la citación para la vista pueden producirse distintas situaciones: por un lado, las partes, en este tipo de apelación, no podrán solicitar la sustitución de la vista y el informe oral por escritos de alegaciones que establece el art. 876 LEC para el JMC; por otro lado, puede producirse un anticipo del señalamiento ya acordado para la vista; además, la Ley determina que cuando concurren las circunstancias del art. 323 LEC o se

³³⁰ De esta opinión son también GARBERÍ LLOBREGAT y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, *Apelación...cit.*, pág. 50.

³³¹ Tales son las palabras de ARAGONESES MARTÍNEZ, *Revista de Derecho Procesal*, nº 2, pág. 443, 1993.

produzca la recusación del art. 326, podrá suspenderse la celebración de la vista en el día señalado.

I- ANTICIPO DEL ACTO DE LA VISTA

Aunque la Ley no recoge este supuesto, en la práctica y al amparo de lo dispuesto en el art. 321 LEC, en uso de las facultades del Presidente de la Sala (hoy Sección) (en el caso de que el órgano ad quem sea una AP) o del Juez (si se trata de un JPI) al que corresponde hacer los señalamientos, se puede, en atención a las necesidades del servicio, modificar un señalamiento adelantándolo, siempre que no se produzca indefensión a las partes (SSTS 5-3-1957 y 5-5-1957).

II- SUSPENSION DEL ACTO DE LA VISTA

La Ley determina que, aún cuando se haya citado a las partes para la celebración de la vista en un día y hora determinados en la correspondiente cédula, cuando concurren las circunstancias del art. 323 LEC, puede suspenderse dicha celebración.

Para que dicha actuación judicial se produzca es preciso que concurren una serie de requisitos: subjetivos, objetivos y de la actividad. Tras analizarlos, estudiaremos el tipo de contenido de la resolución del órgano ad quem y los recursos que caben contra la misma.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

Existen supuestos en los que, necesariamente, la suspensión de la vista debe venir precedida de una solicitud de las partes, ya sea por escrito antes del día de su celebración, o ese mismo día in voce al dar comienzo la vista (causas 3ª a 8ª del art. 323 LEC).

En cambio, existen otros supuestos en los que el mismo órgano puede decidir la suspensión sin que haya mediado una previa petición de parte (causa 1ª y 2ª del art. 323 LEC).

B- REQUISITOS OBJETIVOS

La vista deberá celebrarse en el día señalado, según dispone el art. 322 LEC, y para alterar esta regla general se necesita la concurrencia de alguna de las causas que enumera, con carácter que pretende ser taxativo (aunque luego veremos que existe alguna otra causa más), el art. 323 LEC.

a- CASOS DEL ART. 323 LEC

Todas las referencias del art. 323 al Tribunal o a la Sala se deben entender hechas también al Juez cuando la apelación se resuelve por un órgano unipersonal como es el JPI en el juicio verbal.

Los motivos de suspensión de las vistas responden a muy diversas razones, algunas de índole subjetiva, otras objetiva y otras por circunstancias de la propia actividad.

1- POR CIRCUNSTANCIAS SUBJETIVAS

Por circunstancias subjetivas podemos distinguir entre que provengan del órgano jurisdiccional o de las partes.

Del órgano jurisdiccional encontramos sólo la de la falta del número de Magistrados necesarios para dictar sentencia (causa 2ª), ya que, conforme al art. 196 LOPJ (ver también arts. 197 y ss. LOPJ, sobre la formación de las Salas y de los Magistrados suplentes), se hace preciso que concurran a la vista un mínimo de tres Magistrados en el

caso de la AP. Si no se consigue tal número, procede la suspensión de oficio con nuevo señalamiento, so pena de incurrir en una evidente nulidad de actuaciones. Lógicamente, téngase en cuenta que cuando sea un JPI el que conozca de la apelación, no es aplicable esta causa.

En cuanto a las causas provinientes de las partes, a su vez pueden provenir del propio interesado o de los que actúan como postulantes (es decir, de su Procurador o/y de su Abogado, si los hubiera).

Proviene del propio interesado la que deriva del fallecimiento de cualquiera de los litigantes (causa 4ª). Según el art. 9.7 LEC, la muerte del poderdante cesa al Procurador en su representación, aunque para que sea efectivo tal cese habrá de ponerse en conocimiento del órgano tan pronto como sea posible y acreditarse adecuadamente por el Procurador.

Proviene del Procurador la debida a la muerte o cesación del mismo (causa 3ª). Esta cesación por las causas del art. 9 LEC habrá de ser clara y terminante, y no surtirá efectos hasta que se acredite por uno de los medios del art. 9.2 LEC. Si a pesar de la renuncia del Procurador continúa en su representación por acuerdo de la Sala no existe motivo de suspensión (STS 29-12-1914). Esta cesación o muerte habrá de probarse adecuadamente.

Proviene del Abogado la enfermedad de éste, justificada suficientemente a juicio de la Sala, siempre que se solicite cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la vista, a no ser que la enfermedad hubiese sobrevenido después de este período (causa 6ª). Aunque nada diga la Ley, también deberá ser causa de suspensión la muerte del Abogado, siempre y cuando no haya mediado tiempo suficiente entre ésta y la vista para encontrar un nuevo defensor. La enfermedad del Letrado debe impedir la asistencia, no basta con una mera dolencia. Alguna sentencia del TC entiende que para acreditarla basta con un certificado

médico en papel común (STC 130/ 1986, de 29 de octubre). Para calificar la importancia de la enfermedad o lesión podrá el órgano pedir informe al médico forense.

También proviene del Abogado la defunción del cónyuge o de cualesquiera de los ascendientes o descendientes del mismo, ocurrida dentro de los nueve días anteriores al señalado para la vista (causa 7ª). Hoy en día puede plantearse el supuesto de la comprensión dentro del concepto de cónyuge de las situaciones matrimoniales de hecho, aunque existirá el problema de probarlas si no existe un antecedente documental. Lógicamente, deberá acreditarse suficientemente tal defunción y el momento en que sobrevino.

2- POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS

Causas objetivas de suspensión de la vista son: la solicitud de la misma de común acuerdo por los Procuradores de las partes alegando justa causa, a juicio del Tribunal (causa 5ª); y la coincidencia de dos señalamientos de vista del Abogado defensor para el mismo día en distintos órganos, lo cual se acreditará convenientemente, en cuyo caso tendrá preferencia el órgano superior respecto al inferior (causa 8ª).

En la causa 8ª, se acreditará la coincidencia de los señalamientos con la correspondiente papeleta de señalamiento o con la providencia correspondiente que se entrega al hacer la comunicación. Nada dice el precepto sobre qué señalamiento prevalece si se trata de órganos de igual rango o de distintas Salas de un mismo órgano, en cuyo caso, según Guasp y Manresa³³², prevalece el de fecha anterior.

³³² GUASP, Jaime; Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I, pág. 838. 1948, Madrid; y MANRESA Y NAVARRO, José María; Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, pág. 36. Imprenta de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, 3ª edición, 1910, Madrid.

3- POR CIRCUNSTANCIAS DE LA ACTIVIDAD

Circunstancias de la actividad son: por impedirlo la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior (causa 1ª), ya que si una vista del día anterior no finaliza en las horas de audiencia, continuará el día o días siguientes, conforme al art. 322 LEC, siendo entonces imposible celebrarse dos vistas a la vez.

b- SUPUESTO DEL ART. 326 LEC

Además de los ocho casos del art. 323 LEC, el art. 326 establece uno más relativo al supuesto en que un Magistrado sustituye a otro. Pueden entonces las partes recusarlo en el mismo acto de la vista al dar ésta comienzo, acordándose entonces la suspensión de la misma en tanto no se resuelva el incidente de la recusación.

No es aplicable esta causa cuando sea un JPI el que conozca de la apelación en el juicio verbal.

c- SUPUESTOS DE IMPOSIBILIDAD EXTERNA

Además de los casos de los arts. 323 y 326 LEC, es indudable que la vista tendrá que suspenderse por cualquier causa de imposibilidad externa, fuerza mayor o caso fortuito que impida celebrarla y que tiene que comprender, en general, todos aquellos supuestos en los que el desarrollo de la vista no pueda realizarse de una forma mínimamente correcta.

Todo ello será convenientemente apreciado por el órgano ad quem, sin perjuicio de que puedan las partes ponerlo de manifiesto.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Haremos referencia al tiempo y forma en que se ha de acordar o pedir la suspensión de la vista.

a- TIEMPO

Respecto a las causas del art. 323: en la causa 1ª, la suspensión se acuerda por el órgano una vez se ha dispuesto la continuación de la otra vista en el día siguiente, a tenor del art. 322 LEC; en la causa 2ª, la suspensión se acuerda por el órgano nada más tener conocimiento de que no concurrirá el número preciso de Magistrados; en la causa 3ª, la suspensión la solicitará la parte, sin dilación alguna, según se tenga conocimiento del hecho acaecido de la muerte o cesación de su Procurador; en la causa 4ª, la suspensión la solicitará el Procurador en el momento de conocer el fallecimiento de la parte; en la causa 5ª, tan pronto como se llegue al acuerdo, los Procuradores lo comunicarán al órgano para que éste pueda, en su caso, acordar la suspensión; en la 6ª, las partes solicitarán la suspensión cuarenta y ocho horas antes de la vista, si la enfermedad del Letrado sobrevino antes de este período, o nada más conocerse si sobrevino después de tal período; en la 7ª, cuando acaezca el fallecimiento la parte solicitará la suspensión, aunque sólo si acaeció en los nueve días anteriores a la vista; en la 8ª, solicitará la parte la suspensión cuando le hayan notificado ambos señalamientos y, por tanto, ya sepa que le va a ser imposible asistir a los dos a la vez.

En el supuesto del art. 326 LEC, la suspensión de la vista no se solicita directamente por las partes, sino que es el hecho de la recusación el que la desencadena, sin necesidad de que sea solicitada, aunque las partes, en el momento en que se les haga saber el nombre de estos Magistrados, deberán recusarlos, si así lo desean.

En el supuesto de imposibilidad externa, es el propio órgano de oficio el que acordará la suspensión de la vista en el momento en que aprecie que no se dan las circunstancias mínimas para el normal desenvolvimiento de la vista. También podrá solicitarse por las partes en el momento de producirse el hecho que impida la celebración de la misma.

b- FORMA

En aquellos supuestos en que es precisa la solicitud de parte de la suspensión (causas 3ª a 8ª), ésta ha de hacerse por escrito o bien in voce al dar comienzo la vista.

Si se solicita por escrito previamente al momento de celebración de la vista, éste se ha de estructurar siguiendo las reglas generales: un encabezamiento, un cuerpo y un suplico.

Centrándonos en el cuerpo, puesto que ninguna particularidad ofrece el encabezamiento, se ha de exponer la concurrencia de una serie de sucesos que pueden encuadrarse dentro de alguno de los supuestos del art. 323 o 326 LEC o tratarse de un caso de imposibilidad externa, convenientemente acreditados.

En el suplico se solicitará que en base a lo expuesto en el cuerpo del escrito, se acuerde la suspensión de la vista señalada para el día tal según providencia de día tal.

Terminará el escrito con el lugar, fecha y firma preceptiva del Procurador si no se trata de la causa 3ª por fallecimiento del mismo, y sólo será preceptiva la del Letrado cuando se trate de una causa de suspensión que se refiera a él (causas 6ª, 7ª y 8ª), a tenor de lo dispuesto en el art. 10.4º LEC.

Si la suspensión se solicita in voce, al dar comienzo la vista por haber resultado imposible hacerlo con anterioridad, el Procurador o el Letrado de la parte, según si la causa

en que se funde la solicitud de suspensión afecte a uno u otro, procederá a poner en conocimiento del órgano y a acreditar adecuadamente los hechos que se han producido y que obligan a suspender la vista en base al supuesto que corresponda de los arts. 323 y 326 LEC o a poner de relieve las circunstancias que impiden el desarrollo normal de la vista.

D- TIPO Y CONTENIDO DE LA RESOLUCION DEL ORGANO AD QUEM

Una vez que las partes han solicitado la suspensión de la vista, o simplemente cuando de oficio proceda, el órgano dictará una resolución acordando o denegando dicha suspensión.

El tipo de resolución dependerá del contenido de la misma. Por tanto, si el órgano acuerda la suspensión de la vista, lo hará por medio de una providencia, y si la deniega dictará un auto en el que se contengan los fundamentos de tal decisión, conforme al art. 245 b) LOPJ.

En cuanto al contenido de la resolución, si la suspensión se solicitó a instancia de parte, el órgano la acordará si se dan todos los requisitos que hemos ido viendo en cada una de las causas de los arts. 323 o 326 LEC, o si se acredita la existencia de un supuesto de imposibilidad externa.

En el supuesto de la causa 3ª, el órgano mandará en la misma providencia se haga saber al poderdante el fallecimiento o cesación de su Procurador, fijándose un plazo en el que deberá personarse con un nuevo Procurador si así lo desea y aportar igualmente nuevo poder, lo cual no será preciso en los casos en los que el poder se otorgó a varios Procuradores.

En la Circular del Consejo Judicial de 31 de enero de 1927, sobre suspensión de vistas, se aconsejaba a los Presidentes de las Audiencias adoptar las medidas necesarias

para que sean depurados debidamente los motivos alegados para solicitar la suspensión de vistas y de tener que acordarlas se señale nuevo día dentro de los quince siguientes.

Por tanto, tan pronto como haya desaparecido el motivo de la suspensión, el órgano volverá a señalar nuevo día para la celebración de la vista, sin alterar el orden de los señalamientos ya hechos (art. 324 LEC).

E- RECURSOS

En el supuesto de que se acuerde la suspensión, contra la providencia que así lo decreta no cabrá recurso alguno (art. 401 LEC).

En caso de que se deniegue la solicitud, nada se dispone en la Ley, pero puede pensarse que quepa reposición o súplica, según se trate del JPI o de la AP, contra el auto que así lo disponga (arts. 380 y 402 LEC). Cabría incluso recurso de amparo ante el TC si la incomparecencia de la parte a la vista cuya suspensión fue injustamente denegada produjo indefensión o menoscabo del principio de audiencia y contradicción.

5- CELEBRACION DE LA VISTA

Llegado el momento de celebración de la vista, hemos de analizar las distintas situaciones que en ella pueden producirse en razón a las posibles conductas de los sujetos, el procedimiento de la vista en función de las situaciones que pueden darse respecto a las partes, distinguiendo según haya o no que practicarse prueba, finalizando por la documentación y efectos de la misma.

En general, las vistas se regulan por los arts. 313 y ss. LEC.

I- SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIRSE

En la celebración de la vista pueden producirse diversas situaciones relacionadas con los sujetos del proceso: órgano jurisdiccional y partes.

A- EN RELACION CON EL ORGANO JURISDICCIONAL

Llegado el día de la celebración de la vista, ésta tendrá lugar ante el órgano ad quem, en el recurso de apelación del juicio verbal, el JPI o la AP (o, en su caso, la Sección de la AP) correspondiente.

En relación al órgano jurisdiccional, hemos de recordar que si se trata de la AP, es necesario que estén presentes el Presidente de la misma (o de la Sección) y otros dos Magistrados (art. 81.1 LOPJ), pues de lo contrario no formarán Sala, es decir, no habrá un número suficiente de Magistrados para dictar sentencia, lo cual recordemos es causa de suspensión de la vista (art. 323.2º LEC). En caso de que falte alguno de los Magistrados, el art. 2001 LOPJ establece la posibilidad de que cubran esos puestos los Magistrados suplentes (ver también los arts. 199 y ss. LOPJ). Esto debe ser así porque la STC 254/1994, de 21 de septiembre declaró inconstitucional, como ya previamente explicamos, el art. 737 LEC, en el que se ordenaba a la AP constituirse con un solo Magistrado para conocer de la apelación del juicio verbal.

Recordemos también que la designación de los Magistrados que no constituyen plantilla de la Sala se hará saber inmediatamente a los mismos y a las partes, a efectos de su posible abstención o recusación antes o al inicio del acto de la vista (art. 326 LEC). Por tanto, no cabe comunicar los nombres una vez comenzada la vista, y si se incumple este requisito la vista no será nula, sino irregular, pudiendo la parte todavía recusar en los tres días que concede el art. 327 LEC. Si se recusa a algún Magistrado suplente se suspenderá

la vista y, formalizada la recusación por escrito dentro de tercero día, se sustanciará el incidente (art. 327 LEC).

Si en el transcurso de una vista enfermarse o se inhabilitare alguno de los componentes del órgano se aplicará lo dispuesto en el art. 329 LEC.

B- EN RELACION CON LAS PARTES

Notificadas las partes del día y hora de celebración de la vista del recurso de apelación, éstas tienen la carga, no la obligación, de comparecer. Por tanto, pueden adoptar dos posturas: no comparecer en tiempo y forma o comparecer en tiempo y forma.

a- INCOMPARECENCIA

La incomparecencia puede producirse por parte del apelante, del apelado o de las dos partes.

1- DEL APELANTE

El apelante puede adoptar la actitud de no comparecer al acto de la vista. Esta ausencia puede recaer en él mismo o en su Procurador y Abogado, si hace uso de ellos. En este último caso también puede que acuda el Procurador, pero no así el Letrado, o viceversa.

Sin embargo, al no existir un trámite de personación de las partes ante el órgano ad quem, no puede darse el supuesto de que la no personación del apelante implique que se declare desierto el recurso y devenga firme la resolución recurrida, pues el apelante ya ha formulado sus pretensiones impugnatorias y ha fundamentado la misma en el escrito de interposición (STC 15 de enero de 1996). Lo que se produce, por tanto, es la preclusión de

llevar a cabo, en el momento de la vista, las actuaciones que en tal acto pueden realizarse. Entender que la incomparecencia produce el desistimiento parece un efecto excesivo para un acto puramente omisivo, ya que el desistimiento en la segunda instancia produce la firmeza de la resolución de la primera instancia.

Por lo tanto, la incomparecencia voluntaria del apelante no implica legalmente la terminación de este procedimiento de impugnación que, por consiguiente, ha de llegar a su normal conclusión por medio de la emisión de la sentencia correspondiente.

2- DEL APELADO

El apelado puede, al igual que el apelante, adoptar la actitud de no comparecer al acto de la vista, o bien él mismo, o bien su Procurador y Abogado, si hace uso de postulación. También cabe que acuda el Procurador, pero no el Letrado, o viceversa.

La no comparecencia del apelado tampoco produce la terminación del procedimiento, que continuará hasta que se dicte sentencia.

Si el apelado no se adhirió a la apelación, su incomparecencia no tiene una especial transcendencia, pues no es obstáculo para la confirmación de la sentencia recurrida.

Si por otro lado, el apelado se adhirió a la apelación, en realidad es un apelado-apelante, puesto que la adhesión es un verdadero recurso. Sucederá entonces lo mismo que en el supuesto de incomparecencia del apelante, que precluirá para él la posibilidad de realizar las actuaciones que se llevan a cabo en la vista, celebrándose ésta sin su asistencia, pues recordemos que también el apelado adhesivo ha ya fundamentado su adhesión en el escrito de tal nombre.

3- DE LAS DOS PARTES

Si ninguna de las dos partes comparece, precluirá para ambas la posibilidad de celebrar vista.

b- COMPARECENCIA

Si el apelante, apelado o ambas partes comparecen, se celebrará la vista, aunque con las limitaciones que las incomparecencias producidas acarreen.

II- PROCEDIMIENTO DE LA VISTA EN LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE RESPECTO DE LAS PARTES

En este apartado vamos a recoger los distintos desarrollos de la vista de la apelación que se pueden dar en función de la asistencia a la misma de una sola de las partes litigantes, o bien de ambas, aunque distinguiendo previamente según haya o no que practicarse prueba, a tenor de lo dispuesto en el art. 736.II LEC.

Aunque en cada supuesto estableceremos los distintos momentos que tiene la vista, su desarrollo lo posponemos al análisis del supuesto más general que es el de que ambas partes litigantes comparezcan al acto de la misma.

El procedimiento de la vista de la apelación en el juicio verbal se regula por el art. 736.II LEC, completándolo, en lo que no lo contradiga, con el art. 330 LEC.

A- SI NO HAY QUE PRACTICAR PRUEBA

Cuando el Juez o Tribunal ad quem estimó necesario la celebración de vista, pero no hay que practicar prueba, aquélla se celebrará conforme a lo establecido en el art. 330 LEC.

a- SI NO COMPARECE NINGUNA DE LAS PARTES

Ante la incomparecencia a la vista de las dos partes litigantes, ésta queda reducida a dar por terminado el acto, pronunciando el Presidente o el Juez la fórmula de “Visto” y extendiéndose la correspondiente acta (art. 330.III LEC).

b- SI SOLO COMPARECE UNA PARTE

En este caso, la vista seguirá los pasos que se establecen en el art. 330 LEC y que a continuación analizaremos, aunque referidos sólo a la parte, apelante o apelado, que concurriesen.

c- SI COMPARECEN AMBAS PARTES

Como ya dijimos, el art. 330 LEC desarrolla el procedimiento que se ha de seguir en esta vista.

1- RELACION DEL SECRETARIO

En primer lugar, la vista comienza con la fórmula expresada por el Presidente o el Juez “dése cuenta”.

A continuación, el Secretario hará una relación sucinta de los antecedentes que den a conocer la relación a enjuiciar, cuando la Ley no disponga otra cosa, es decir, mencionará de que tipo de proceso se trata, contra qué resolución del mismo se interpuso el recurso, quién la dictó y en qué fecha.

2- POSIBLES ACTUACIONES PREVIAS

Sin embargo, antes o al darse comienzo la vista pueden producirse diversas situaciones, así como realizarse determinadas peticiones.

Si el órgano ad quem es la AP, conforme al art. 326 LEC, antes de dar comienzo a la vista, se ha de poner en conocimiento de las partes la sustitución de alguno de los Magistrados de la Sala e inmediatamente después pueden éstas recusarlo.

Aunque el art. 313 LEC dispone que la vista se ha de realizar en audiencia pública, el art. 314 suaviza esta norma disponiendo que los Jueces y Tribunales podrán disponer de oficio o a instancia de parte que se haga a puerta cerrada el despacho y vista de aquellos negocios en que lo exijan la moral o el decoro. Si se solicita instancia de parte deberá hacerse en el momento de darse principio a la vista, oídas brevemente a las partes, decidiendo el órgano en el mismo acto y sin posibilidad de recurso.

3- INFORME DE LAS PARTES

Después las partes concurrentes o sus Abogados, si hicieren uso de ellos, informarán oralmente por su orden, es decir, primero la parte apelante y luego la apelada.

Si existen varios co-apelantes o co-apelados seguirán el orden que ellos mismos se impongan, aunque siempre siguiendo la regla general, es decir, primero los apelantes y luego los apelados.

Si existe un apelante que es a la vez apelado y un apelado que es a la vez apelante, primero intervendrá el apelante-apelado, luego el apelado-apelante informando sobre su defensa frente a las pretensiones contrarias y estableciendo los límites de su propia impugnación, y finalmente el primer apelante volverá a intervenir para contestar al recurso planteado de adverso.

En cuanto a la forma, estos informes han de hacerse oralmente y guardando el debido respeto y decoro.

En relación al contenido, éste debe ser la fundamentación del recurso, que ya estaba recogida en los escritos de interposición y adhesión o impugnación, por lo que en estos informes no se podrá ni solicitar nuevas pruebas, ni plantear nuevas cuestiones, ni reproducir la denuncia de una falta cometida en la primera instancia, ni solicitar confesión judicial o documental (al amparo del art. 863 LEC). Todas estas peticiones han tenido su momento procesal oportuno anterior a la vista de la apelación y, por ello, son ahora inadmisibles, de forma que si se solicitasen, el órgano ad quem no las tendría en cuenta. Por tanto, las partes deben sujetarse en sus respectivos informes a lo que ya fundamentado en sus correspondientes escritos, sin que puedan de ninguna forma ampliarlo a otras cuestiones; como mucho, cabe pensar que pueda reducirse dicha fundamentación, renunciando claramente al exceso, o que se deduzcan cuestiones incidentales, como, por ejemplo, infracciones de forma cuyo primer momento procesal para ponerlas de manifiesto sea éste, porque se han producido a la largo de la tramitación de la apelación (art. 334 LEC). De esta forma, tampoco el apelado que no se adhirió a la apelación, podrá ahora aprovechar para hacerlo, ni tampoco impugnar algún extremo gravoso que no impugnase ya (SAP Madrid 19-5-1969).

Igualmente, no pueden las partes en su informe perder el tiempo con divagaciones impertinentes o innecesarias, ante lo cual el órgano puede advertírselo, pudiendo a la segunda advertencia retirarle la palabra (art. 332 LEC).

4- SEGUNDA INTERVENCION PARA RECTIFICAR HECHOS O CONCEPTOS

El art. 330.II LEC dispone que los Abogados (o las partes), con la venia del Presidente (si se trata de la AP, y si no del JPI), podrían hablar por segunda vez, pero sólo para rectificar hechos o conceptos (STS 23-11-1987).

5- INTERVENCION DE LAS PROPIAS PARTES

El art. 331 LEC autoriza a las partes litigantes a intervenir en la vista del recurso para exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa. También pueden intervenir sin esperar al momento anterior a la conclusión de la vista si se trata de cualquier solicitud que les concierna.

Evidentemente, este precepto es aplicable en el juicio verbal sólo en el supuesto de que alguna de las partes esté haciendo uso de Abogado, pues en ese caso será éste el que hablará en su nombre. Siendo de otra forma, este precepto no es de aplicación, pues ya serían las propias partes las que tendrían que exponer directamente el informe.

Dispone la norma que el Presidente (o el Juez) les concederá la palabra, sin dejar, por tanto, al arbitrio del órgano judicial el concederla o no, sino que deben concederla en cualquier caso, una vez se le haya solicitado la venia. Lo que sí está facultado el órgano es a llamar la atención a la parte en el caso de que en su alegato no se estén contrayendo a los hechos o no lo estén haciendo con el decoro debido.

6- TERMINACION DEL ACTO

El último párrafo del art. 330 establece que el acto de la vista se dará por terminado pronunciando el Presidente (o el Juez) la formula “Visto”.

B- SI HAY QUE PRACTICAR PRUEBA³³³

El párrafo II del art. 736 LEC establece, entre otros contenidos, que la vista se celebrará empezando por la práctica de la prueba, y a continuación las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.

Por tanto, llegado el día de celebración de la vista, se comenzará el acto con la práctica de las pruebas admitidas que puedan realizarse en dicho momento. Aunque la Ley no hace distinciones, hay que entender que en el acto de la vista se practicarán aquellas que sean posibles, pero no las que requieran el envío de oficios, requerimientos, exhortos.....etc.

El art. 736 puede ser completado con el 330, de forma que es aplicable ahora (en el caso de que deba practicarse prueba) el procedimiento que vimos se seguía en la vista cuando no había que practicarse prueba, tanto en el supuesto de incomparecencia de ambas partes, como en el comparecencia de una o ambas partes. Únicamente habrá de tenerse en cuenta que tras la relación del Secretario y las posibles actuaciones previas, y previamente a los informes de las partes, deberá practicarse la prueba admitida y tras ella resumir oralmente las partes (o sus Abogados) el resultado de la misma.

III- DOCUMENTACION DEL ACTO

La vista se documentará, según dispone el art. 334 LEC, acreditándose en los autos por diligencia, que extenderá el Secretario o Escribano, expresando: los nombres de los Magistrados que compongan la Sala (o del JPI); los Abogados que hayan informado (si los hubo o, por el contrario, si informaron las partes); los Procuradores que hubiesen asistido (si los hubo); el tiempo que hubiese durado el acto; cualquier incidencia ocurrida durante la

³³³ Sobre la prueba en la segunda instancia véase GALÁN URBANO, Pedro; La Prueba en Segunda

celebración (por ej., las de los arts. 331 y 332 LEC); y las pretensiones incidentales que hubiesen deducido las partes y exijan resolución.

A continuación, la diligencia será leída a los presentes y firmada por las partes o sus Procuradores y Abogados. Sin embargo, del tenor literal de este precepto 334 no parece entenderse que la diligencia sea en todo caso leída y firmada, sino sólo cuando las partes hubiesen deducido en la vista alguna pretensión incidental que exija resolución. No creemos que esta última solución sea la más correcta, y la achacamos a un error material del legislador.

IV- EFECTOS DE LA VISTA

Si han comparecido ambas partes y han emitido sus correspondientes informes en el acto de la vista, se han concretado y justificado las pretensiones de cada una de ellas, aunque siempre dentro de lo alegado y fundamentado en sus respectivos escritos de interposición y adhesión o impugnación al recurso, según se trate del apelante o apelado.

Si, por el contrario, no compareció alguna de las partes, para ella habrán precluido las actuaciones que tienen lugar en la celebración de la vista, pero sin olvidar que como la fundamentación del recurso, adhesión o impugnación ya se realizó en los correspondientes escritos, no existirá nunca falta de concreción y el procedimiento de segunda instancia seguirá adelante hasta la sentencia firme.

6- DECISION : LA SENTENCIA

La decisión es el último estadio en la fase procedimental ante el órgano ad quem, por eso la incluimos aquí.

Instancia, en "Boletín de Información del Ministerio de Justicia", 1981, Octubre-Noviembre.

Además, la sentencia es la forma de terminación normal de la segunda instancia o recurso de apelación, pues a través de la misma se resuelve dicho recurso.

En concreto, es el art. 736.I LEC el que en parte regula esta sentencia de segunda instancia en el juicio verbal: “Recibidos los autos por el órgano competente para decidir la apelación, si no hubiese propuesto prueba, dictará sentencia en el plazo de diez días, confirmando o revocando la apelada con imposición de las costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el artículo 496 y mandará devolver aquéllos al Juez.”

Igual que explicamos en la primera instancia, la sentencia puede ir precedida de diligencias para mejor proveer si el órgano ad quem lo estima necesario para un mayor esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, nos remitimos a lo dicho de ellas en la primera instancia, por ser igualmente aplicable a la segunda (arts. 340 a 342 LEC).

En general, a la sentencia de segunda instancia le es aplicable lo ya analizado en la de primera instancia: concepto, génesis, requisitos, tipos, fórmula, formación y aclaración, por lo que a lo allí expuesto nos remitimos. Sin embargo, existen algunas diferencias respecto de aquélla, y son precisamente estos puntos diversos los que centrarán ahora nuestra atención.

I- REQUISITOS INTRINSECOS

Se aplican en general a la sentencia de segunda instancia los mismos requisitos intrínsecos que ya vimos en la de primera instancia (motivación, claridad y precisión, congruencia y exhaustividad). Sin embargo, deben hacerse algunas apreciaciones respecto de la motivación, la exhaustividad y la congruencia.

A- MOTIVACION

En cuanto a la motivación de la sentencia de apelación, debemos decir que cabe la motivación por remisión cuando el órgano ad quem se limita a asumir en su integridad los argumentos jurídicos utilizados en la sentencia apelada sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas, pero siempre que ante el órgano judicial que dicta la sentencia de remisión no se haya planteado cuestión sustancial alguna que no hubiere sido ya resuelta por la sentencia remitida (SSTC 146/1990, de 1 de enero; y 80/1990, de 26 de abril).

B- EXHAUSTIVIDAD

En cuanto a la exhaustividad, ésta es aplicable plenamente a la segunda instancia, hasta el punto de que el órgano de apelación tiene también el deber de pronunciarse sobre aquellos extremos de la litis sobre los que no se haya pronunciado el Juez de la primera instancia y, por lo tanto, no estén recogidos en la resolución recurrida, y ello, en base al art. 359 LEC, según alguna jurisprudencia del TS (SSTS 7-12-1989 y de 7-7-1909³³⁴).

Sin embargo, la falta de exhaustividad no se da cuando el órgano no entra a resolver sobre las cuestiones de fondo por estimar admisible una excepción planteada y rechazada en la primera instancia; o cuando, desestimada la pretensión principal, no entre a conocer de las subordinadas (STS 10-12-1951); o cuando el fallo del órgano es desestimatorio, porque en tal caso entiende que todas las pretensiones de la parte han sido denegadas, sin necesidad de que se pronuncie una por una acerca de ellas (STC 61/1989, de 3 de abril); o cuando el órgano no se pronuncia acerca de alegaciones de las partes no sustanciales para la resolución del litigio (SSTC 95/1990, de 23 de mayo y 144/1991, de 1 de julio).

C- CONGRUENCIA

En lo que a la congruencia se refiere, debemos precisar que, si bien la apelación revierte en el órgano ad quem la jurisdicción atribuida al de la primera instancia, sólo en la medida en que el perjudicado por la resolución pretende; de ahí que no pueda extenderse a extremos de la misma, que por aquiescencia de la parte hayan quedado firmes. Dicho de otra forma, el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que haya sido consentido por la parte a quien perjudique, al tener que ser considerado firme y con autoridad de cosa juzgada (art. 408 LEC), no puede volver a ser considerado y resuelto por la sentencia de apelación, al haber quedado totalmente fuera de su ámbito de conocimiento, por no haberlo recurrido la parte legitimada para ello (*"tantum devolutum quantum appellatum"*), por lo que si, no obstante ello, el órgano de apelación por su propia iniciativa, vuelve a pronunciarse sobre el mismo, la sentencia que pronuncie estará ineludiblemente viciada de incongruencia, además de desconocer la autoridad de cosa juzgada formal, que proclama el precepto anteriormente citado. Con ello, el órgano de apelación ve restringido su ámbito de decisión.

Además, el principio de congruencia no permite resolver sobre cuestiones formuladas a destiempo o que supongan una ampliación respecto de las pretensiones deducidas en primera instancia, pues a ello se opone el principio *"pendente appellatione nihil innovetur"* (STC de 16 de junio de 1979).

Sin embargo, no todo son cortapisas al poder decisorio del órgano ad quem, ya que éste, al tratarse la apelación de un recurso ordinario de naturaleza revisora, tiene en el momento de fallar amplias facultades de actuación, tanto en lo que se refiere al Derecho

³³⁴ Citada por ARAGONESES ALONSO, *Sentencias...cit.*, pág. 172.

aplicable al caso, como a la valoración de las pruebas practicadas en primera o en segunda instancia, lo cual supone un examen íntegro del proceso. Por tanto, existe congruencia en la sentencia dictada por el órgano de apelación, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario, cuando éste basa su decisión en fundamentos de derecho divergentes de los utilizados por el Juez de la primera instancia (STC 20/1982, de 5 de mayo y SSTS 11-10-1956 y 26-12-1989).

Igualmente, la adecuación del fallo a las pretensiones de las partes, no alcanza a los fundamentos de derecho que éstas aleguen para sustentarlas. El órgano de apelación es libre para valorar a su parecer cuál es la norma aplicable al caso controvertido; por tanto, puede separarse de los fundamentos de derecho alegados por las partes, pero no de los hechos alegados y probados en el proceso (STC 48/1989, de 21 de febrero y SSTS 26-2-1947; 6-7-1961; 24-3-1948; 20-10-1949; 15-4-1955; 16-6-1976; y 26-12-1989).

En el tema de costas, el órgano de apelación debe también guardar la congruencia debida respecto de las de primera instancia, no pudiendo hacer un nuevo pronunciamiento sobre las mismas que no se haya pedido por las partes (STS 30-3-1989).

A pesar de lo dicho, el órgano puede fallar sobre extremos distintos a los delimitados por las partes como objeto de la segunda instancia en determinados supuestos: primero, en relación con los presupuestos procesales de orden público, la Ley procesal, así como la jurisprudencia autorizan a los órganos de apelación, entre otros, a examinar de oficio la competencia objetiva o la falta de jurisdicción por razón de la materia del Juez de la primera instancia (art. 74.III LEC), a analizar si se han cumplido los requisitos formales necesarios para la admisión del recurso (STS 2-2-1952), a apreciar la existencia de defectos constitutivos de la relación procesal de primera instancia (STC 61/1989, de 3 de abril), la procedencia del recurso de apelación contra la resolución judicial impugnada

(SSTS 26-11-1965; 12-10-1908; y 3-4-1944), y si a lo largo de la tramitación del recurso se han seguido las normas del procedimiento; segundo, cuando se plantean por el demandante dos pretensiones alternativas, y el órgano revoca la sentencia que estimaba una de ellas, entrando a conocer de la otra (SSTS 3-1-1948; 12-11-1992; 26-2-1987; y 17-6-1988); tercero, en el caso de pretensiones subsidiarias de una principal, cuando la principal fue acogida por la sentencia recurrida y es desestimada por el órgano de apelación, éste pasa a decidir sobre las subsidiarias (STS 22-2-1949, o la SA Territorial Granada 8-11-1965); cuarto, cuando la sentencia afecta a varios litigantes, y sólo uno de ellos apela, la decisión del órgano puede afectar a los no apelantes que consintieron el pronunciamiento adverso (SSTS 6-1-1934 y 17-7-1984); quinto, cuando se produce la absolución o condena de alguno de los demandados, no recurrentes, por existir un vínculo de solidaridad procesal entre todos ellos (SSTS 26-9-1984; 7-7-1950; y 3-3-1990); sexto, en las cuestiones relativas al estado civil y condición de las personas, el órgano entra a conocer de las cuestiones sin necesidad de que el apelado se adhiera a la apelación (STS 26-4-1951).

D- PROHIBICION DE LA REFORMATIO IN PEIUS³³⁵

El anterior principio de la congruencia de la sentencia de apelación está *íntimamente unido a la prohibición de la reformatio in peius³³⁶*.

Este principio no está recogido legalmente, pero es ampliamente recogido por la jurisprudencia y admitido por la doctrina.

³³⁵ Véase LORCA NAVARRETE, A.M^a, Sobre la prohibición de la reformatio in peius, en "Constitución, Derecho y Proceso. Estudios en homenaje a los Profesores Hercé y Duque". 1983, Zaragoza.

³³⁶ Un mayor estudio de la misma puede hallarse realizado por GIBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 588 y ss..

La prohibición de la *reformatio in peius* o interdicción de la reforma peyorativa es una limitación a las posibilidades de decisión del órgano ad quem, que veda todo cambio o limitación que pueda significar una agravación para el recurrente (tanto para el apelante como para el apelado adhesivo) de los términos del fallo dictado, salvo que la contraria ejercite también igual derecho, de forma inmediata o mediata (SSTS 4-3-1959; 9-1-1992; y 22-4-1993; y SSTC 40/1990, de 12 de marzo; 143/1988, de 12 de julio; y 115/1986, de 6 de octubre).

Sin embargo, debe quedar claro que esta prohibición sólo abarca al que recurre, no al que se conformó con la resolución impugnada (SSTS 12-12-1990 y 18-12-1964).

La corriente jurisprudencial actual entiende que la prohibición de la reforma in peius es una manifestación de la interdicción de indefensión que reconoce el art. 24 CE y una proyección de la congruencia en la segunda instancia (SSTC 143/1988, de 12 de julio; 19/1992, de 14 de febrero; y en la misma línea, 20/1982, 54/1985, 86/1986, 115/1986 y 15/1987), ya que, si el ámbito de la apelación queda limitado por el principio de prohibición de la *reformatio in peius* y el órgano de apelación lo quebranta fallando por encima de sus propios límites en segunda instancia, la sentencia que dicte adolecerá de incongruencia por resolver sobre aspectos sobre los que no se ha desplegado el efecto devolutivo, aun cuando en puridad de justicia el apelante hubiese debido recibir un gravamen superior al que le ha impuesto el Juez de la primera instancia. La misma línea sigue la jurisprudencia menor (SAP Huelva 1-10-1986; SAP Soria 17-3-1981; y SAP Murcia 4-11-1976 y 28-6-1979).

Este principio prohibitivo alcanza también a las costas procesales, de manera que no puede el órgano de apelación imponerle al recurrente las de primera instancia, cuando el Juez a quo no lo hizo (STSS 31-5-1967; 3-4-1990; y 4-3-1959). Sin embargo, lo que sí

puede el órgano ad quem es imponer las costas de primera instancia al apelado que no apeló ni se adhirió al recurso (STS 6-10-1984).

Ahora bien, la prohibición de la reformatio in peius ofrece algunos supuestos que quiebran el principio general: cuando existen pretensiones alternativas o subsidiarias (SSTS 8-2-1969; 11-3-1916; 23-5-1929; 17-12-1964; 10-3-1965; 22-2-1949; 3-1-1948; 20-6-1949; y 7-7-1917); cuando el órgano revoca una sentencia absolutoria de la instancia y entra a conocer del fondo del asunto (SSTS 15-3-1988; 13-5-1992; 22-6-1983; 12-6-1989; 11-7-1990; y 12-11-1992; y SAP Lérida 18-12-1979); cuando el apelado hace uso de la figura procesal de la adhesión (STC 143/1988, de 12 de julio; SSTS 28-11-1989; 9-1-1992; 7-10-1991; 23-12-1992; 30-11-1964; 9-12-1954; y 10-2-1977; y SAP Pamplona 20-9-1988; y SAP Badajoz 8-7-1991); y en el supuesto de cambio de fundamentación jurídica (STS 22-7-1993).

II- PLAZO

A- SI NO SE PROPUSO PRUEBA

Establece el art. 736.I LEC que la sentencia de apelación en el juicio verbal se dictará en el plazo de diez días desde la recepción de los autos por el órgano ad quem, si no se hubiese propuesto prueba. Recordemos que en este caso, lo más normal será que no se celebre vista, pero no tiene por qué ser así, pues a ello autoriza el art. 736.II (en su comienzo). Claro que, si se celebra vista pero no se propuso prueba, no se aplicará lógicamente el plazo para fijarla de quince días (a partir de la admisión de la prueba en tres días), pues siendo de otra forma, sería muy difícil respetar dicho plazo de diez días contados desde la recepción de los autos por el órgano competente para decidir la

apelación. Otra cosa es que se celebre vista y no se deba practicar prueba porque la propuesta no se admitió, pues en este caso sí se aplicará el plazo de quince días para fijar la vista, contados a partir de la inadmisión de la prueba. Esto es así porque el art. 736 no habla de si se debe o no practicar prueba en la vista, sino de si ésta se propuso o no, mas puede resultar que ésta no deba practicarse porque estando propuesta, no se admitió. De esta forma, lo importante para aplicar el plazo de diez días en la decisión de la apelación no es si se admitió o no la prueba propuesta, sino que ésta efectivamente no se propusiera.

B- SI SE PROPUSO PRUEBA

Ningún plazo para dictar sentencia, en cambio, se establece para el supuesto de que se propusiere prueba (volvemos a repetir, se admitiere o no ésta). En dicho caso, entendemos que en base a los principios de celeridad y rapidez que deben regir este proceso de ínfima cuantía, el órgano ad quem deberá dictar sentencia en el plazo más breve posible.

III- FORMULA

En cuanto a la fórmula de la sentencia de segunda instancia, ésta tendrá la misma estructura que la de primera instancia (encabezamiento, motivación y fallo), por lo que, como ya dijimos al comienzo del análisis de la sentencia de segunda instancia, a lo dicho en la de primera instancia nos remitimos.

Sin embargo, debemos recalcar que en el encabezamiento se expresará también, en el caso de que el órgano ad quem sea la AP (al ser ésta un órgano colegiado), y antes de los “considerandos” (fundamentos de derecho), dice el art. 372.1º LEC, el nombre del Magistrado Ponente. En este caso, lógicamente, al expresarse el Tribunal (AP) que

pronuncie la sentencia, se deberán indicar los nombres de los Magistrados que hayan conocido del recurso.

IV- FORMACION

De nuevo hemos de distinguir en el proceso a seguir en la formación de la sentencia de segunda instancia, según ésta sea dictada por un órgano unipersonal como es el JPI, o por un órgano colegiado como es la AP.

Si es dictada por el JPI es plenamente aplicable todo lo dicho en el proceso de formación de la sentencia de primera instancia. Sin embargo, si la sentencia la dicta la AP, la formación de la sentencia de apelación seguirá un proceso distinto, que ahora analizaremos: deliberación y votación, redacción, extensión, firma, documentación, publicación y notificación³³⁷.

A- DELIBERACION Y VOTACION

Cuando el órgano ad quem en el juicio verbal sea una AP, inmediatamente después de celebrada la vista o en el día señalado para votación y fallo, se discutirá (es decir, se deliberará) y votará la sentencia. Si no fuere posible, por impedirlo otras atenciones del servicio, señalará el Presidente día a los mismos efectos y dentro del plazo fijado por la Ley (art. 339 LEC).

Sin embargo, antes de proceder a la deliberación y votación, puede producirse el estudio de los autos por los Magistrados. De esta forma, a tenor de los arts. 338 LEC y 252 LOPJ, celebrada la vista del pleito o hecho el señalamiento para votación y fallo, podrá cualquiera de los Magistrados pedir los autos para examinarlos personalmente, y si los

pidieren varios, el Presidente fijará el tiempo por el que haya de tenerlos cada uno, de modo que pueda dictarse la sentencia dentro del plazo establecido. Igual y específicamente respecto del Ponente, el art. 251.1. LOPJ se refiere a que tendrá a su disposición los autos para dictar sentencia, puesto que es el que, a tenor del art. 205.5 LOPJ (336.5º LEC), debe proponer la sentencia que haya de someterse a la discusión de la Sección. Ahora bien, recordemos que el Presidente y los Magistrados pueden examinar los autos (en este caso, rollo) en cualquier momento de la sustanciación de un procedimiento, por disponerlo con este carácter general el art. 251.II LOPJ.

Producido el estudio de los autos, se llevará a cabo la deliberación y votación, cuya regulación se encuentra en los arts. 338 y ss. LEC y 249 y ss. LOPJ).

Una vez que el Ponente ha sometido a la deliberación de la Sala los puntos de hecho, las cuestiones o fundamentes de derecho y la decisión que deba comprender la sentencia, y previa la discusión necesaria, se votará sucesivamente (art. 344 LEC).

El Tribunal ad quem (AP) se ha de ceñir a una serie de normas procesales que regulan la votación de los autos (arts. 254 y ss. LOPJ y 343 y ss. LEC).

En la votación de un recurso de apelación, aunque legalmente no venga preceptuado, han de estar presentes los mismos Magistrados que asistieron a la vista oral (STS 14-11-1992).

Respecto del tiempo, la discusión y votación de los autos y sentencias se verificará antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario y para las vistas (art. 343.I LEC), sin poder interrumpirse, una vez empezada la votación, sino en caso de fuerza mayor (arts. 254.3 LOPJ y 343.II LEC).

³³⁷ Éstas son las fases que cita GUASP, Derecho...cit., Tomo I, págs. 488 y ss..

Respecto de la forma de llevarse a cabo la votación, además de ser siempre a puerta cerrada (art. 343.I LEC), a juicio del Presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de Derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse (art. 254.1 LOPJ).

Respecto del orden a seguir entre los propios Magistrados, a la hora de votar, votará primero el Ponente y después los demás Magistrados por orden inverso al de su antigüedad, siendo el Presidente el último en hacerlo (arts. 254.2 LOPJ y 345 LEC).

Respecto del número de votos precisos para dictar sentencia, prescribe el art. 255 LOPJ que los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la Ley señale una mayor proporción, no pudiéndose exigir en ningún caso un número determinado de votos conformes que altere la regla de la mayoría.

En el supuesto del Magistrado que en el momento de votar la decisión del recurso ha sido trasladado, jubilado, separado o suspenso, los arts. 256 LOPJ y 346 LEC disponen que dicho/s Magistrado/s votará/n los pleitos a cuya vista hubiere/n asistido y que aún no se hubiere/n fallado.

Si por cualquier motivo algún Magistrado estuviere imposibilitado de asistir al acto de votación del fallo, dará un voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al Presidente; si no pudiere escribir ni firmar, lo extenderá ante un Secretario de la Sala; el voto así emitido se unirá a los demás y se conservará, rubricado por el que presida, con el libro de sentencias (arts. 257.1, 2 y 3 LOPJ y 347.I y II LEC). Si el Magistrado no puede de ningún modo emitir su voto, votarán entonces los no impedidos, dictando estos sentencia si hubiere los necesarios para formar mayoría, o viéndose de nuevo el asunto sustituyéndose el impedido, separado o suspenso en la forma establecida en la Ley, si no

hubiere votos bastantes para constituir la mayoría exigida en el art. 255 LOPJ (arts. 257.4 y 258 LOPJ y 347.III LEC).

Sin embargo, la falta de votos suficientes para dictarse sentencia puede venir producida, no por la falta de Magistrados en la votación, sino porque no resulta la mayoría de votos necesarios. Según el art. 262 LOPJ, cuando en la votación de una sentencia o auto no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes, y si aún así no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de nueva vista, concurriendo dos Magistrados si hubiese sido impar el número de discordantes, y tres en el caso de haber sido par; concurrirá para ello: en primer lugar, el Presidente de la Sala, si no hubiere ya asistido; en segundo lugar, los Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito; en tercer lugar, el Presidente de la Audiencia; y, finalmente, los Magistrados de las demás Salas, con preferencia los del mismo orden jurisdiccional. Esta Sala se denomina Sala de Discordia y su funcionamiento se contiene en el art. 263 LOPJ. Si de nuevo no se obtiene la mayoría necesaria, se procederá a una nueva votación, sometiéndose sólo a ésta los dos pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.

B- REDACCION

En un órgano colegiado corresponde realizarla al Magistrado Ponente (art. 336.6º LEC, al que se remite el art. 365 LEC, y art. 205 LOPJ), a no ser que, por circunstancias especiales, si el voto del Ponente no ha sido conforme con el de la mayoría, estime oportuno el Presidente de la Sala confiar el encargo a otro Magistrado (art. 336.6º). La redacción ha de ser conforme a lo acordado por la Sala (art. 336.6º), por lo que ésta ha de

aprobar dicha redacción, según dispone el art. 365, pero la aprobación no constituye ni puede ser en ningún caso una nueva votación del fallo; si surgen discrepancias acerca de la procedencia o improcedencia de alguna expresión, habrán de decidirse con arreglo al criterio de la mayoría.

C- EXTENSION

Una vez realizada, en efecto, la redacción de la sentencia por el Ponente y aprobada por la Sala, se extenderá en papel del sello de oficio (art. 365), es decir, se vuelve, en principio, a transcribir, con las modificaciones que acaso la Sala haya acordado, sin necesidad de que esta transcripción sea de la propia mano del Magistrado Ponente. La transcripción se hace en papel exento del impuesto para evitar que un mismo acto grave por dos veces al litigante, puesto que la certificación de la sentencia se consigna luego en los autos. El documento extendido de este modo y firmado, como se verá a continuación, constituye el original de la sentencia, el cual no se incorpora a aquellos autos, sino que se recoge y guarda por el Presidente de la Sala para formar con él el registro de sentencias del modo prevenido en los reglamentos o disposiciones especiales (arts. 365 LEC y 265 y 266 LOPJ).

D- FIRMA

La firma consiste en la transcripción al pie del documento, por cada uno de los Magistrados, de sus nombres y apellidos, más el signo acostumbrado o rúbrica, en la forma que suela hacerlo el firmante. Deben firmar todos los componentes del colegio judicial que ha emitido el fallo, según indica el art. 365 y de manera análoga los arts. 248, 259 y 266 LOPJ, ordenando el art. 367 que todo el que tome parte en la votación de una sentencia

firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría. La firma deberá ser entera, conforme establece el art. 251. Sin embargo, cuando, después de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite algún Magistrado de los que votaron y no pudiese firmar, el que hubiere presidido el Tribunal lo hará por él, expresando el nombre de aquél por quien firme y después las palabras “votó en Sala y no pudo firmar”.

Ahora bien, el Derecho español permite al que disiente, aunque deba firmar la sentencia, salvar su voto, mediante la emisión de un reservado. En efecto, a tenor del art. 260 LOPJ, todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría, pero podrá, en este caso anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse, por remisión, los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme. El voto particular, con la firma del autor, se incorporará al libro de sentencias y se notificará a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando, de acuerdo con la Ley, sea preceptiva la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto a ella.

E- DOCUMENTACION

La documentación es el acto por el que se deja constancia de la sentencia en los autos; su naturaleza es, pues, la de un acto de constancia, que se realiza mediante la transcripción por el Secretario de una certificación literal de la misma y de la diligencia de publicación, a la que ha de añadirse, para mayor garantía, sin duda, aunque ello no esté muy de acuerdo con lo acostumbrado en el proceso civil, el “Visto Bueno” del Presidente de la Sala (art. 365). Conforme a los arts. 265 y 266 LOPJ, en cada Juzgado o Tribunal se

llevará, bajo la custodia del Secretario respectivo un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, y autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha. Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la Secretaría del Juzgado o Tribunal y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas. Los Secretarios pondrán en los autos certificación literal de la sentencia.

F- PUBLICACION

La publicación es la lectura de la sentencia en audiencia pública por el Ponente o, en su defecto, por el que presida la Sala (art. 365), siendo aplicable a la naturaleza, vigencia actual y crítica de este trámite lo indicado sobre la publicación que se exige en los órganos unipersonales.

En caso de estar declarado en rebeldía el litigante, se aplicará también a la publicación de la sentencia de segunda instancia lo ya visto en la de primera (arts. 283 y 770 LEC).

G- NOTIFICACION

La notificación se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 260 y concordantes de la Ley, siendo también de aplicación lo dispuesto en el art. 248.4, al que nos referimos al tratar de las sentencias de los Juzgados.

En el supuesto de notificación en rebeldía, tener también en cuenta los arts. 283 y 770 LEC.

V- CONTENIDO

La sentencia que se dicta en un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva en el juicio verbal puede contener distintos pronunciamientos, según se apelase: únicamente contra la sentencia definitiva; contra la sentencia definitiva, invocándose la nulidad de que trata el art. 496 LEC o cualquier otra nulidad; o contra la sentencia definitiva y contra resoluciones interlocutorias que no impedian la continuación del juicio.

Por un lado, si únicamente se apeló la sentencia definitiva, el órgano ad quem puede o bien desestimar el recurso, o bien estimar el recurso, revocando la sentencia impugnada. Si decide desestimar el recurso, lo normal será que confirme la sentencia apelada, pero puede ocurrir que no la confirme cuando entienda que los fundamentos de derecho deben ser otros, pero sin que se produzcan modificaciones en el resultado al que se llega; el órgano puede también desestimar el recurso del apelante, pero estimar el del apelado adhesivo, por lo que ha de precisar con claridad a qué puntos se circunscribe la desestimación. Si el órgano decide estimar el recurso, puede atacar la resolución impugnada por vicios in procedendo (es decir, por error en la aplicación de normas procesales, que a su vez puede tratarse de error durante la tramitación o al dictar sentencia, al declarar indebidamente el Juez de la primera instancia que no podía entrar a juzgar sobre el fondo, por carecer, por ejemplo, de jurisdicción o de competencia, en cuyo caso dictará el mismo órgano ad quem la sentencia sobre el fondo), o por vicios in iudicando (es decir, por una aplicación incorrecta del Derecho material, o por una valoración errónea de las pruebas, en cuyos casos dictará el órgano ad quem sentencia fallando a favor en todo o en parte de las pretensiones de la/s parte/s recurrente/s, o sea, del apelante y del apelado adhesivo).

Por otro lado, si se apeló la sentencia definitiva y se invocó la nulidad del art. 496 LEC o cualquier otra, puede el órgano: desestimar la nulidad solicitada y el recurso contra la sentencia definitiva; o desestimar la nulidad solicitada y estimar el recurso contra la sentencia definitiva; o decretar la nulidad de actuaciones. Si se estimase la petición de nulidad, el órgano ad quem, absteniéndose de decidir sobre el fondo de la cuestión, ordenará la reposición de los autos al estado que tenían cuando se cometió la falta y lo demás que proceda conforme a las disposiciones legales.

Por último, si se apeló contra la sentencia definitiva y contra resoluciones interlocutorias que no impedian la continuación del juicio, el órgano ad quem puede: desestimar las apelaciones planteadas contra resoluciones interlocutorias y contra la sentencia definitiva; o desestimar las apelaciones planteadas contra resoluciones interlocutorias y estimar el recurso contra la sentencia definitiva; o estimar la/s apelación/es interpuesta/s contra resoluciones interlocutorias, acordando se retrotraigan las actuaciones al momento en que se dictó la resolución impugnada.

C- DESARROLLO ANORMAL^{338*164}

Tras finalizar el análisis de las fases ante el Juez a quo y ante el órgano ad quem, como partes fundamentales en que se divide el procedimiento de segunda instancia, pasaremos a tratar el desarrollo anormal que en ellos puede producirse, al igual que hicimos en la primera instancia.

³³⁸ En general, sobre el desarrollo anormal en la segunda instancia puede consultarse a GIBERT POMATA, *Tratado...cit.*, págs. 886 y ss..

^{*164} En general, consultar lo dicho al respecto en la primera instancia.

También ahora este desarrollo anormal (llamado crisis procesales) podemos dividirlo en crisis: subjetivas, objetivas y de la actividad, según que afecten a los sujetos, objeto o la actividad procedimental.

En general, es aplicable a la segunda instancia lo dicho sobre el desarrollo anormal en la primera instancia. Sin embargo, existen algunas diferencias y particularidades en el desarrollo anormal de la segunda instancia, sobre todo porque hay que tener en cuenta el carácter colegiado del órgano ad quem si se trata de una AP.

Haremos ahora referencia sólo a los aspectos distintos respecto a lo mencionado en el desarrollo anormal de la primera instancia.

1- CRISIS OBJETIVAS: RECUSACION

Igualmente, a las crisis objetivas de segunda instancia es aplicable lo dicho de ellas en la primera (recusación, conflictos de jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, acumulación de autos y prejudicialidad excluyente). Sin embargo, es conveniente recordar algunas particularidades de la recusación en la segunda instancia, sobre todo porque debe tenerse en cuenta el carácter colegiado de la AP (que es uno de los posibles órganos ad quem en la apelación del verbal).

I- RECUSACION DE MAGISTRADO/S

En cuanto a la recusación de un Magistrado componente de la AP, éstas son las particularidades respecto a la recusación de primera instancia.

Competente para la instrucción del incidente será el Magistrado más antiguo, que sirva en el mismo órgano jurisdiccional o en otro superior, según los arts. 207 y ss. LOPJ (art. 204.1 LOPJ). En concreto, si el recusado es el Presidente de la AP, instruye la

recusación el Magistrado más antiguo de dicha Audiencia (art 224.1 a) LOPJ); si el recusado es cualquier otro Magistrado, instruye el Magistrado más antiguo de su Sala y si el recusado fuere el más antiguo, el que le siga en antigüedad (art. 224.1 b) LOPJ). En cambio, no recoge la Ley quién instruye cuando sean dos o más Magistrados de una Sala o Sección de la AP, o todos los miembros de la misma; habrá que acudir entonces a lo dispuesto en el art. 224.2 LOPJ.

Es competente para resolver el incidente la misma AP, conforme al art. 82.5º b) LOPJ (cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en el Tribunal Superior de Justicia correspondiente).

En cuanto al requisito temporal, ya expusimos en la recusación de la primera instancia que ésta deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde (art. 223.1 LOPJ). Recordemos que cabe la posibilidad de que algún Magistrado sea sustituido en el transcurso de la tramitación del recurso, en cuyo caso la recusación del que le sustituye se podrá proponer cuando se tenga conocimiento del cambio, aunque, según lo dispuesto en el art. 326 LEC anteriormente ya analizado, en el caso de que haya necesidad de completar una Sala con Magistrados de otra o con suplentes se comunicarán los nombres de los mismos a las partes, para que éstas los recusen si así lo desean antes o al comienzo de la vista, o en todo caso en los tres días siguientes a su celebración (art. 327 LEC), quedando sin efecto la vista, si la recusación se declara procedente y verificándose de nuevo con Magistrados hábiles tan pronto como sea posible (art. 328 LEC).

Cuando se recusa a un Magistrado, no será de aplicación el art. 226 LOPJ referido a la recusación de un Juez en el juicio verbal, por lo que entonces tiene plena eficacia el art. 201 LEC que dispone que la recusación no detendrá el curso del pleito, que seguirá

sustanciándose hasta la citación para sentencia definitiva (o firme, debería decir), en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida el incidente de recusación, si no estuviere terminado. Por tanto, si el recusado no aceptare como cierta la causa de recusación, ordenará el instructor la práctica de la prueba, si se hubiere propuesto en forma y fuere pertinente, en el plazo de diez días, y, acto seguido, remitirá lo actuado a la autoridad competente para decidir, que lo hará por medio de auto, oído el Ministerio Fiscal (art. 225.4 LOPJ).

Contra la decisión de la recusación no se dará recurso alguno, ni tan siquiera podrá hacerse valer la nulidad de la resolución al recurrir en una instancia superior, pues en el juicio verbal no cabe casación (art. 228 LOPJ).

En todo lo demás (causas legales, legitimación, forma, procedimiento, efectos, costas, sanciones...) será aplicable lo dicho en la recusación de primera instancia.

II- RECUSACION DE JUECES

En el caso de que el órgano ad quem sea un JPI, se aplicará lo dicho para la recusación de primera instancia, es decir, instructor será el que legalmente le sustituya (art. 224.1 d) LOPJ) y competente para la resolución será el propio instructor (art. 225.4 LOPJ).

En lo que se refiere al tiempo de proponer la recusación, ésta deberá hacerse, como ya dijimos, tan pronto como sea conocida la causa, teniendo en cuenta que la sustitución del JPI que viene actuando, en cualquier momento del transcurso de la tramitación de la apelación, debe ser puesta en conocimiento de las partes, para que éstas puedan hacer uso, si así lo creen preciso, de la recusación del nuevo Juez ad quem. Máxime si se tiene en cuenta que en estas apelaciones no siempre existe vista y, por tanto, las partes pueden no

tener directo conocimiento de una posible sustitución del titular del órgano judicial, hasta que es notificada la resolución recurrida.

Será nuevamente aplicable el art. 226 LOPJ respecto a la recusación de un Juez en el juicio verbal, ya que en este caso el órgano ad quem será un JPI. De esta forma, si el recusado no admitiera como cierta la causa de la recusación, se suspenderá el curso del asunto principal, siguiéndose en la recusación el procedimiento del art. 226 LOPJ, que ya explicamos en la primera instancia. No será por tanto en este caso aplicable lo dispuesto en el art. 201 LEC, pues la recusación sí detendrá el curso del asunto principal (aunque sólo si el recusado no aceptare como cierta la causa de la recusación).

Tampoco ahora contra la decisión se dará recurso alguno; tampoco, como vimos en el caso de que se recuse a un Magistrado, en una instancia superior a través de la nulidad de tal resolución, pues no existe casación en el verbal.

En todo lo demás es plenamente aplicable lo dicho en la recusación de primera instancia.

III- RECUSACION DE SECRETARIOS, OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES JUDICIALES

Es aplicable lo dicho en la primera instancia sobre sus recusaciones (art. 461.2 LOPJ para la recusación del Secretario y art. 462.2 LOPJ para la de Oficiales, Auxiliares y Agentes).

Simplemente hay que especificar que en el caso de los Secretarios, la pieza de recusación se instruirá por el propio Juez o por el Magistrado Ponente, y se fallará por aquél o por la Sala o Sección que conozca del proceso, según quien sea el órgano ad quem, es decir, un JPI o una AP.

De igual forma, en la recusación de los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales, será el Juez o Presidente, según si se trata de un JPI o de una AP, quien adoptará de oficio o a solicitud de parte, con audiencia del funcionario, las medidas que procedan para garantizar la imparcialidad de los mismos en las actuaciones judiciales.

2- CRISIS DE LA ACTIVIDAD

Durante la segunda instancia o apelación pueden producirse crisis en la actividad que no difieren sustancialmente de las que vimos se producen en la primera instancia.

Sin embargo, junto a las tres causas de paralización o quietud anormal del procedimiento (interrupción, detención y suspensión), podemos resaltar otra importante crisis que se produce en la segunda instancia (además de las anteriores) y que no se debe a una paralización del proceso, sino a un retroceso en el curso del mismo: la que se produce por la anulación de la actividad procesal en la que se retrotraen las actuaciones al momento de cometerse un error o fallo procesal^{339*165}.

D- TERMINACION ANORMAL^{*166}

Igual que sucedía en la primera instancia, también la apelación o segunda instancia puede además de concluir normalmente mediante sentencia (previamente analizada, como el último paso procedimental de la fase ante el órgano ad quem), concluir anormalmente a través de: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción judicial o caducidad de la instancia.

³³⁹ Así lo indica GUASP, Derecho...cit., Tomo I, pág. 473.

^{*165} Ver al respecto el Capítulo IX del Título V del Libro I del Proyecto (arts. 225 a 231).

^{*166} En general, ver lo dicho al respecto en la primera instancia.

En general, es aplicable ahora lo dicho de estas formas de terminación anormal en la primera instancia, aunque deben hacerse algunas aclaraciones.

Nos detendremos más en el desistimiento y en la caducidad de la instancia, pues son las únicas formas de terminación anormal de segunda instancia que se regulan expresamente en la Ley.

1- RENUNCIA

Es aplicable a la renuncia en la segunda instancia lo dicho para la misma en la primera.

Sin embargo, debe aclararse que el sujeto que renuncia en esta instancia es el apelante (o apelado-adhesivo), que no tiene por qué coincidir necesariamente con el que fue demandante o actor primitivo en la primera instancia.

En cuanto a los efectos, el proceso termina mediante sentencia con efecto de cosa juzgada declarándose firme la de primera instancia recurrida e imponiéndose las costas al apelante.

2- DESISTIMIENTO^{340*167}

La Ley regula el desistimiento en la segunda instancia en los arts. 409, 410 y del 846 al 849 LEC.

³⁴⁰ El desistimiento en la segunda instancia se halla explicado por GISBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 909 y ss..

^{*167} Tener en cuenta lo expuesto al respecto en la primera instancia y, en concreto, el art. 450 Proyecto: "Artículo 450. Del desistimiento de los recursos.

1. Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución.

2. Si, en caso de ser varios los recurrentes, sólo alguno o algunos de ellos desistieran, la resolución recurrida no será firme en virtud del desistimiento, pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren exclusivas de quienes hubieren desistido."

Hay que tener en cuenta que el desistimiento podrá realizarse bien ante el Juez a quo, bien ante el órgano ad quem.

I- DESISTIMIENTO ANTE EL JUEZ A QUO

A tenor del art. 409 LEC, el recurrente puede desistir del recurso interpuesto ante el Juez a quo en tres momentos: antes de haberse remitido los autos al órgano superior; antes de habersele entregado al recurrente el testimonio para interponer o mejorar la apelación ante el órgano ad quem; o entregado el testimonio al recurrente, lo devuelva al Juez a quo sin haber hecho uso de él ante el órgano ad quem.

El primer caso se refiere a los supuestos de apelaciones contra cualquier tipo de resolución judicial admitidas con efecto suspensivo (art. 387 LEC).

En los dos últimos casos, nos encontramos ante apelaciones admitidas sin efecto suspensivo y que no se hayan interpuesto contra sentencias (art. 391.III y IV LEC).

Cualquier desistimiento del recurso que quiera efectuar el recurrente, posterior a estos trámites de la apelación, deberá hacerse ante el órgano ad quem. Fuera de estos supuestos, el Juez a quo debe inadmitir cualquier escrito que se le presente pretendiendo desistir del recurso.

La Ley no menciona la posibilidad de que el apelado se oponga al desistimiento del recurrente cuando éste se lleva a cabo ante el Juez a quo.

En cuanto a la forma, podrá hacerse, en este juicio verbal, igual que en la primera instancia, por escrito u oralmente mediante comparecencia.

Como en el proceso de infima cuantía no es preceptiva la postulación, no hará falta para desistir ni Procurador, ni firma de Letrado, pero si se hace uso del primero, deberá poseer poder especial o que el mismo apelante se ratifique (art. 410.I LEC). Para la

ratificación de la parte, ésta puede hacerlo de palabra, compareciendo en el Juzgado, o por escrito. Para el caso del desistimiento por parte del Abogado del Estado, nos remitimos a lo dicho al respecto en la primera instancia.

El desistimiento ha de ser expreso, puro y simple.

El Juez deberá condenar al desistido en las costas ocasionadas con la interposición del recurso (art. 410.II LEC).

El efecto del desistimiento será la firmeza de la resolución recurrida, formal y materialmente, lo cual impide que se pueda volver a promover la pretensión contenida en el recurso.

II- DESISTIMIENTO ANTE EL ORGANO AD QUEM

El desistimiento del apelante ante el Juez o Tribunal ad quem se autoriza en los arts. 409.III y 846.I LEC y en el juicio verbal debe llevarse a cabo de la misma forma que hemos analizado para el desistimiento ante el Juez a quo: mediante comparecencia o por escrito. Sin embargo, la parte debe emitir un juramento, a no ser que se presente por Procurador con poder especial (art. 846.II LEC). Tener también en cuenta el caso del Abogado del Estado ya expuesto en el desistimiento ante el Juez a quo.

A diferencia del desistimiento ante el Juez a quo, el apelado puede ahora oponerse en el plazo de tres días a que se dé por terminada la sustanciación del recurso de apelación, pero únicamente basándose en una de estas dos causas: insuficiencia del poder, o falta de capacidad del litigante (art. 847.I LEC). El apelado deberá presentar un escrito impugnando la pretensión del apelante y motivando la causa en la que base su oposición. Si efectivamente aprecia el órgano ad quem la concurrencia de alguna de las causas de oposición del apelado, concederá un breve plazo para que el apelante la subsane (art.

847.I); si la falta no se subsana, una vez que haya transcurrido el plazo seguirá su curso la sustanciación de la segunda instancia, si así lo solicita el apelado (art. 847.II).

Verificado el desistimiento, el art. 848 preceptúa cuáles son los efectos posteriores: sin más trámites y sin ulterior recurso, se tendrá al apelante por separado de la apelación, se le condenará en las costas, se tendrá por firme la resolución apelada, y se mandará comunicar al Juez inferior el desistimiento con devolución de los autos si se tratase de una apelación admitida con efecto suspensivo. Todo ello a través de auto.

Un caso especial es el de la apelación adhesiva, pues dispone el art. 849.I que si el apelado se hubiere adherido a la apelación, y por este motivo, dentro de los tres días señalados en el art. 847, se opusiere a que se dé por terminada la segunda instancia, el órgano tendrá por separado al apelante con las costas hasta entonces causadas, y mandará seguir la sustanciación del recurso para resolver extremos de la sentencia a que se refiera la adhesión del apelado.

En su párrafo II, el art. 849 plantea la posibilidad de que el apelante desista del recurso antes de que el apelado se pueda adherir al mismo, situación que entendemos no podrá producirse en el juicio verbal en esta fase ante el órgano ad quem, pues como preceptúa el art. 734.I LEC, admitida la apelación, el Juez (a quo) dará traslado a las demás partes para que presenten escritos de impugnación o adhesión. Luego la adhesión en el verbal se producirá siempre en la fase ante el Juez a quo, no ante el órgano ad quem.

Alguna jurisprudencia admite el desistimiento de parte del contenido del recurso en el propio acto de la vista entendiendo que se trata de un desistimiento tácito (STS 17-7-1981), si bien es cierto que ésta no es preceptiva en la apelación del verbal. En cambio, la jurisprudencia menor no admite este desistimiento en la vista del recurso (SAP Sevilla 31-1-1989).

3- ALLANAMIENTO

Es aplicable lo dicho al respecto en la primera instancia, aunque ha de entenderse que en la segunda instancia el que se allana será el apelado.

El efecto principal es que el proceso termina mediante sentencia que admitirá la apelación del apelante, si el órgano está de acuerdo con sus pretensiones. En cuanto a la condena en costas, entendemos que la misma nó sólo es posible, pues el allanamiento se produciría ahora en un momento posterior al plazo para contestar a la demanda, conforme dispone el art. 523.III LEC, sino que, según veremos después, se aplica en la segunda instancia el criterio del vencimiento (art. 736 LEC).

4- TRANSACCION JUDICIAL

Nos remitimos a lo dicho en ella para la primera instancia.

5- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA^{341*168}

Según el art. 411 LEC, se tendrá abandonada la segunda instancia en toda clase de juicios, aun respecto de menores o incapacitados, si no se insta su curso durante dos años, contados desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes.

No obstante, se contará el plazo desde que los litigantes hubiesen podido instar el curso de los autos cuando el mismo quedase sin el mismo por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes (art. 412 LEC).

³⁴¹ La caducidad en la segunda instancia se halla explicada por GIBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 917 y ss..

^{*168} Ver lo dicho al respecto en la primera instancia.

Será obligación del Secretario dar cuenta al órgano respectivo del transcurso del plazo, para que se dicte de oficio la providencia correspondiente (art. 413 LEC).

En cuanto a los efectos, se tendrá por abandonado el recurso y por firme la sentencia apelada o recurrida, mandando devolver los autos al órgano inferior, con certificación del auto en que se hubiere dictado esta resolución, para los efectos consiguientes. En estos casos, las costas de la instancia caducada serán de cuenta del apelante o recurrente (art. 415 LEC).

Del auto a que se refiere el artículo anterior podrá el demandante, apelante o recurrente pedir reposición o suplicar dentro de cinco días, si creyere que se ha procedido con equivocación al declarar transcurrido el término legal en cuya virtud se hubiere tendido por caducada la instancia o se hallare en el caso del art. 412; no podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo (art. 416 LEC). Este recurso de reposición se sustanciará conforme a lo prevenido en los arts. 378 y 379, admitiéndose al que pida la reposición la justificación que ofrezca sobre el hecho en que la funde, concediéndose a este fin un plazo que no podrá exceder de diez días (art. 417 LEC). No se cita el recurso de súplica mencionado en el art. 416, por lo que parece que, admitiéndose la misma justificación que se dice en el art. 417, habrá que tener también en cuenta lo establecido en el art. 402 LEC.

VI- EFECTOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA³⁴²

Tras haber analizado el procedimiento de segunda instancia, llegamos por último a los efectos de la misma, que, al igual que hicimos en la primera instancia, podemos dividirlos en: efectos económicos, efectos jurídico-materiales y efectos jurídico-procesales.

A- EFECTOS ECONOMICOS

Hacemos referencia a las costas y a la asistencia jurídica gratuita en la segunda instancia.

1- COSTAS^{*169}

En la segunda instancia no se siguen los criterios del art. 523 LEC que vimos se aplicaban a la primera, pues el ya citado art. 736 LEC dispone que la sentencia se dictará confirmando o revocando la apelada con imposición de las costas al apelante en el primer caso. Como veremos, el criterio único en este artículo es el del vencimiento, sin que se dé la posibilidad de que el órgano ad quem estime, cuando confirma la sentencia de primera instancia, la existencia de circunstancias excepcionales que propicien la no imposición de las costas al apelante, como ocurría en la primera instancia.

En lo demás (concepto, partidas y tasación e impugnación) es aplicable en el tema de costas en segunda instancia lo dicho en la primera.

2- ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA

El abono de los gastos procesales queda dispensado en la segunda instancia cuando existe, a favor de alguna de las partes, derecho de asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para ello hace falta haberlo solicitado y obtenido.

Es aplicable a la asistencia jurídica gratuita en segunda instancia lo expuesto al respecto en la primera.

³⁴² Para los efectos en la segunda instancia hemos consultado a GUASP, Derecho...cit., Tomo II, págs. 645 y ss.; y GISBERT POMATA, Tratado...cit., págs. 275 y ss. y 800.

^{*169} Para las costas en segunda instancia, nos remitimos a lo dicho al respecto en la primera, y en especial los arts. 397 y 398 Proyecto.

Únicamente, podría plantearse el problema de hasta qué punto, sin haber estado dispensado de los gastos de la primera instancia, se puede gozar de la correspondiente exención en la segunda. Esta posibilidad está acertadamente restringida en el art. 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando se dispone que el actor o el demandado que pretenda el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberá acreditar ante la Comisión de asistencia jurídica gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella.

Por lo demás, el disfrute de este derecho supone en la segunda instancia los mismos contenidos que en la primera, y ya se vio en ese momento cómo puede incluir este derecho el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, y por tanto también para las actuaciones que han de verificarse ante el Juez o Tribunal ad quem, si éste órgano expresamente así lo solicita mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el juicio verbal (art. 6.3 Ley 10-1-1996).

B- EFECTOS JURIDICO-MATERIALES

Nos referimos a los efectos jurídico-materiales que puede producir la sentencia de segunda instancia.

Evidentemente, por la estrecha relación entre la primera y la segunda instancia que rige en nuestro ordenamiento, siempre que el órgano de apelación confirme una sentencia de primera instancia constitutiva, se impregna ella también de este carácter, y produce, por tanto, efectos jurídico-materiales en las situaciones preexistentes a la propia apelación.

En concreto, podemos encontrarnos diversos supuestos: el órgano puede revocar la sentencia constitutiva de instancia y sustituirla por otra declarativa, con lo cual

desaparecen estos efectos que ya no se dan en la segunda instancia; el órgano puede revocar la sentencia de instancia de carácter declarativo, y dictar otra en su lugar constitutiva, ocasionándose los efectos de los que hablamos (piénsese en la revocación de una sentencia absolutoria en la instancia y su sustitución por otra sobre el fondo de carácter constitutivo); y por último, el órgano puede declarar la nulidad de todo lo actuado y decretar la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la falta, con lo cual la sentencia de segunda instancia no entra a conocer del fondo del asunto y por tanto no produce ningún efecto jurídico-material.

Un efecto directo podemos encontrarlo en el supuesto de que acordada la ejecución provisional de la resolución recurrida, el órgano la haya revocado, con lo cual la parte que la solicitó debe indemnizar los daños causados a la contraria (art. 381 LEC).

C- EFECTOS JURIDICO-PROCESALES

Los efectos jurídico-procesales hacen referencia: a la firmeza de las resoluciones judiciales que se dictan durante la segunda instancia, y en especial de la sentencia; al efecto de la cosa juzgada que producen las resoluciones firmes; y a la ejecutabilidad de la sentencia.

1- FIRMEZA : RECURSOS

Ya explicamos cómo la firmeza supone la irrecurribilidad de una resolución judicial.

Ahora vamos a analizar la recurribilidad de las distintas resoluciones que se dictan en la segunda instancia de un juicio verbal.

I- CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA^{*170}

Contra la sentencia dictada en un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en un juicio verbal no cabe ulterior recurso (art. 1687 LEC), es decir, no cabe casación. Por lo tanto, la sentencia de la segunda instancia deviene firme automáticamente.

Sólo cabe contra ella el recurso de revisión y el de audiencia al rebelde cuando concurren los requisitos legalmente establecidos para su interposición, el recurso de amparo constitucional cuando se alegue que se ha producido la violación de un derecho o garantía constitucional, y el recurso ante los Tribunales Internacionales en los supuestos en que proceda. Nos remitimos a lo dicho al respecto en la primera instancia.

II- CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA^{*171}

Contra las resoluciones dictadas durante la segunda instancia puede o bien no haber recurso (nos remitimos a las indicadas a lo largo del procedimiento), o bien haber recurso horizontal, es decir, recurso ante el mismo órgano que dictó la resolución.

Contra las resoluciones dictadas en segunda instancia por un JPI cabe el recurso horizontal de reposición (arts. 376 y ss. LEC), al ser esta clase de órgano unipersonal; contra las resoluciones dictadas en segunda instancia por una AP cabe el recurso horizontal de súplica (art. 402 LEC), al tratarse de un órgano colegiado.

^{*170} Si la sentencia de segunda instancia la dictó un JPI, ésta deviene firme y por tanto irrecurrible; pero si la dicta una Audiencia Provincial, ya hemos explicado que cabe recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 468 a 476 Proyecto), y contra la resolución en él dictada, recurso en interés de la Ley, salvo que se hubiera ejercitado el recurso de amparo ante el TC (arts. 490 a 493). En el caso de que la sentencia la dictase una Audiencia Provincial, cabe también recurso de casación (arts. 477 a 489), si se cumple alguno de los motivos del art. 477.2. Contra la resolución que inadmita el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, cabe queja (arts. 494 y 495).

Para la sustanciación de ambos recursos se seguirán los trámites de los arts. 378 y 379 LEC. Sin embargo, existen algunas diferencias: en primer lugar, mientras la reposición ha de interponerse en tres días, la súplica se hará en cinco días; y en segundo lugar, antes de que la súplica se resuelva, deberá informar el Magistrado Ponente.

En la segunda instancia del juicio verbal, ni el recurso de reposición ni el de súplica son susceptibles de posterior recurso.

Ambos son recursos horizontales o no devolutivos, es decir, son resueltos por el mismo órgano que ha dictado la resolución que se impugna.

La reposición procede contra ciertas resoluciones interlocutorias, es decir, contra providencias y autos, salvo los exceptuados por la Ley. Además, cabe contra las diligencias de ordenación de los Secretarios Judiciales.

La súplica cabe contra las providencias (siempre que no sean diligencias de ordenación), contra los autos y sentencias resolutorios de incidentes suscitados en segunda instancia y contra los autos no resolutorios de incidentes.

2- COSA JUZGADA ^{*172}

Como ya vimos en la primera instancia, las resoluciones firmes producen el efecto jurídico-procesal de la cosa juzgada, que a su vez puede tratarse de cosa juzgada formal o de cosa juzgada material. Así ocurre también en la segunda instancia.

La cosa juzgada formal se predica de todas las resoluciones firmes y la cosa juzgada material sólo de algunas, como es la sentencia de segunda instancia.

^{*171} Como el Proyecto ya no habla del recurso de súplica, contra las resoluciones interlocutorias dictadas en segunda instancia cabrá sólo en su caso recurso de reposición (arts. 451 a 454).

^{*172} Ver lo dicho al respecto en la primera instancia.

Por tanto, la sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio verbal no puede ser atacada a través de un nuevo proceso, por resultar firme y por tanto irrecurrible y con autoridad de cosa juzgada (formal y material).

Nos remitimos a lo dicho sobre la cosa juzgada en la primera instancia, en concreto para el supuesto de que se dicte una sentencia absolutoria en la instancia.

3- EJECUTABILIDAD ^{*173}

El último efecto procesal importante es el que la sentencia de segunda instancia (que siempre es firme), si es de condena, es ejecutable, abriéndose entonces el proceso de ejecución correspondiente (arts. 919 y ss. LEC).

En cuanto a la competencia para ejecutar y a los trámites a seguir en el supuesto de tercería de dominio o mejor derecho, nos remitimos a lo explicado en la primera instancia (art. 739 LEC).

^{*173} Ver lo dicho al respecto en la primera instancia.

TERCERA PARTE

CONCLUSIONES

Del contexto del presente trabajo puede inferirse con cierta nitidez que por parte de la que suscribe se ha intentado abordar de la forma más completa posible, aunque sin pretensiones de exhaustividad, el estado, desarrollo y problemática del juicio verbal civil ordinario a lo largo de su devenir histórico.

Tal labor fue comenzada a finales de 1.996, al tiempo del inicio del primer curso de Doctorado, y desde entonces llevo ocupándome de los distintos aspectos de dicho proceso, con la inestimable ayuda y orientación de mi Director de Tesis, el Profesor. Dr. D. Pedro Aragonese Alonso. En el ínterin de este período surgió un Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que con el tiempo se ha convertido en el hoy ya conocido como Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 23 de septiembre de 1.999. Esta circunstancia nos provocó ciertas dudas sobre la conveniencia de la continuación del presente trabajo, mas lo avanzado del estado del mismo, la amplia “vacatio legis” establecida en dicho Proyecto, la oportunidad de que en él se mantenga un juicio declarativo con idéntica denominación de verbal que parece ser continuador del actual, y algún otro factor más, nos llevó al firme convencimiento de la utilidad de un estudio de este calibre, en el que se pusieran en relación regulación actual y futura regulación pendiente de aprobación definitiva, pensando especialmente en el período transitorio en el que, de aprobarse el Proyecto, ambas Leyes serían aplicables. Por todo ello, elegimos para la presentación de este trabajo este momento que, lejos de ser inapropiado, paradójicamente resulta de todo punto interesante.

Dicho esto por considerarlo obligado, de la investigación realizada podemos extraer las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA: El estudio histórico y el análisis de los ordenamientos jurídicos extranjeros que nos son más próximos, ponen de relieve la necesidad de que exista un proceso breve y sencillo, conforme a las líneas generales de nuestro juicio verbal, para resolver asuntos de escasa entidad, o que requieran una solución urgente.

SEGUNDA: Tal proceso debe inspirarse en los principios de oralidad, concentración, inmediación judicial, informalidad o sencillez y celeridad o brevedad, con amplias facultades de dirección del Juez, dada la posibilidad de ausencia, para estos casos, de la postulación profesional.

TERCERA: El “juicio verbal” regulado en el Capítulo IV del Título II, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente vigente es un proceso o juicio civil, declarativo, singular, ordinario y plenario, aplicable a la satisfacción de pretensiones que no tengan señalada en la Ley una tramitación especial, en cuantía mínima o ínfima.

CUARTA: Como notas características de este tipo de proceso para las reformas venideras deben señalarse:

A.- La supresión absoluta de los criterios electivos (sumisión expresa y tácita) para determinar la competencia territorial, la cual debe atribuirse por la Ley en la forma más idónea al tipo de acción ejercitada, estableciendo como fuero general el del domicilio del demandado.

B.- Debe mantenerse la excepción actualmente vigente de la no necesidad de la postulación profesional, pero, en caso de utilización de la misma por la parte demandante, debe facilitarse a la parte demandada la misma intervención profesional, conforme al principio de “igualdad de armas”.

C.- Dados los principios inspiradores del proceso que hemos señalado en la Segunda Conclusión, el régimen jurídico general deberá ser adecuado, estableciéndose las peculiaridades propias de los mismos.

D.- La iniciación del proceso deberá realizarse por “demanda”, entendiendo por tal el acto de la parte actora por la que solicita la celebración del juicio. Tal demanda, conforme se establece en el Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualmente en tramitación parlamentaria, debe ser sucinta, pero deberá indicarse en ella además de la identificación de las partes con los domicilios en que puedan ser citados, la expresión de lo que constituya el objeto del proceso, y una breve fundamentación del mismo, de forma tal que el demandado no tenga duda razonable de lo que se pretende.

E.- En materia de alegación y pruebas deben aumentarse las facultades de dirección del órgano jurisdiccional, a fin de aclarar y encauzar las dudas que puedan suscitarse a las partes en el desarrollo del proceso, orientándoles respecto de los medios de prueba que pueden utilizar, y llevando a cabo la práctica de las pruebas personales, en forma semejante a la establecida para el proceso laboral.

F.- Debe facultarse al Juzgador para decidir en equidad, conforme a una constante histórica y a lo que establecen algunos de los ordenamientos jurídicos procesales más avanzados. Aunque la sentencia debe respetar los principios de motivación, claridad, precisión, exhaustividad y congruencia, los razonamientos que determinan el fallo deben exponerse de forma breve y sencilla.

G.- Postulamos por el mantenimiento de la segunda instancia para estos procesos, dejando sin efecto la exclusión actual para las acciones personales basadas en derechos de crédito.

H.- La interposición de la apelación no exigirá su fundamento. La tramitación de la misma debe realizarse en una vista oral, conociendo de ella un solo Magistrado, en el caso de que corresponda a la Audiencia Provincial conocer de la segunda instancia, para lo que será preciso la modificación, en este punto, de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal Magistrado deberá estar facultado para orientar a las partes sobre el contenido de sus intervenciones, en el caso de que no asistan a las mismas Abogados en ejercicio, pero cuidando de no prejuzgar sobre el contenido que pueda tener el fallo.

En suma y sin pretensiones exhaustivas, constituye lo expuesto el marco de las conclusiones más relevantes merecedoras de atención, sin perjuicio de los puntos que en trabajos posteriores sobre el particular puedan ir suscitándose.

RELACION BIBLIOGRAFICA

(se ordenan por orden alfabético las distintas obras y artículos consultados en la elaboración de este trabajo)

- **ALBÁCAR LÓPEZ**, José Luis (director); Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II (Arts. 460 al 1480), Editorial Trivium, S.A., 2ª edición, Junio 1994, Madrid.
- **ALMAGRO NOSETE**, José; Derecho Procesal, Tomo I, Volumen I, junto a GIMENO SENDRA, CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA, Editorial Tirant Lo Blanch, 4ª edición, 1989, Valencia.
- **ALONSO OLEA**, Manuel; Derecho Procesal del Trabajo, junto a MIÑAMBRES PUIG, Editorial Civitas, 9ª edición, 1997, Madrid.
- **ÁLVAREZ ALARCÓN**, A.; Las diligencias preliminares del proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1997, Barcelona.
- **ARAGONESES ALONSO**, Pedro; Proceso y Derecho Procesal, Introducción, EDERSA, 2ª edición, 1997, Madrid.
 - Técnica Procesal. Proceso de Cognición y Juicio Verbal. Editorial Aguilar, 1955, Madrid.
 - Sentencias congruentes. Pretensión, Oposición, Fallo, Editorial Aguilar, 1957, Madrid.
 - Los incidentes en el juicio verbal, en “Revista de Derecho Procesal”, págs. 335 y ss., 2º trimestre, 1951.
 - Programa y Esquemas para su desarrollo del Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, 1998, Madrid.
- **ARAGONESES MARTÍNEZ**, Sara; Reflexiones sobre la reforma procesal civil de 1992, junto a HINOJOSA SEGOVIA, en “Revista de Derecho Procesal”, 1992.

- “Revista de Derecho Procesal”, nº 2, 1993.
- **ARANZADI**, Repertorio Cronológico de Legislación, Años 1960, 1966, 1974, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, 1992, 1994, 1996 y 1999, 1ª edición, Editorial Aranzadi, Pamplona.
- **BACHMAIER WINTER**, Lorena; La asistencia jurídica gratuita, Editorial Comares, 1997, Granada.
- **BONET NAVARRO**, Ángel; La prueba de confesión en juicio, J.M. Bosch Editor, 1979, Barcelona.
- **BUJOSA VADELL**, L.; La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, J.M. Bosch Editor, 1995, Barcelona.
- **CAPMANY Y DE MONPALAU**, Antonio; Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona o Libro del Consulado del Mar, Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1797, Madrid.
- **CASTÁN TOBEÑAS**, José; Reflexión sobre el Derecho Comparado y el método comparativo, Discurso de apertura de los Tribunales de 16 de septiembre de 1957.
- **CIENFUEGOS MATEO**, M.; Los efectos de las sentencias, J.M. Bosch Editor, 1998, Barcelona.
- **CODES DALLOZ**, Nouveau Code de Procédure Civile el Code de l'Organisation Judiciaire, Jurisprudence Générale Dalloz, 24ª édition, 1988, Paris.
- **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**, spiegato Articolo per Articolo, e principali leggi complementari, con formule dei principali atti, aggiornato al D. Lgs. 19-2-1998, nº 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado). I Codici Esplicati, collana ideata e diretta da Federico del Giudice, Edizioni Giuridiche Simone, Giugno 1998.

- **CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL**, comentado y concordado, con Jurisprudencia, Tesis y Doctrina, por Jorge Obregón Heredia, Editorial Porrúa, 3ª edición, 1987, México.
- **CODIGO DE PROCESSO CIVIL**, anotado por Fernando Luso Soares, Duarte Romeira Mesquita, Wanda Ferraz De Brito, Ed. Almedina, 3ª edicao, 1985, Coimbra.
- **CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION**, y normas complementarias, textos ordenados, anotados y actualizados por el Dr. Antonio José Giangrosso, Ediciones Depalma, 11ª edición, 1989, Buenos Aires.
- **CORREA DELCASSO, J.P.**; El proceso monitorio, J.M. Bosch Editor, 1998, Barcelona.
- **CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín**; Derecho Procesal, Tomo I, Volumen I, junto a ALMAGRO NOSETE, GIMENO SENDRA, y MORENO CATENA, Editorial Tirant Lo Blanch, 4ª edición, 1989, Valencia.
- **DE LA ESCALERA GAYÉ, Santiago**; Tratado del Juicio Verbal Civil, Editorial Góngora, 1955, Madrid.
- **DE LA OLIVA SANTOS, Andrés**, Derecho Procesal Civil, Tomos I, II, III y IV, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 4ª edición, 1995, Madrid.
 - Sobre la Cosa Juzgada (Civil, Contencioso-Administrativa y Penal, con examen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1991, Madrid.
- **DE VICENTE Y CARAVANTES, José**; Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Introducción, Libros Primero, Tercero y Apéndice, Imprenta de Gaspar y Roig Editores, 1856, Madrid.

- **DÍEZ RIAZA**, Sara: La Procuraduría, Serie Estudios Jurídicos N.S., Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 1997, Madrid.

- **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**, Serie: Manuali Giuridici, Edizioni Simone, 1992.

- **DOVAL DE MATEO**, Juan de Dios: La revisión civil, J.M. Bosch Editor, 1979, Barcelona.

- **FAIRÉN GUILLÉN**, Víctor, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, Editorial Clarasó (Bosch), 1953, Barcelona.
 - El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia (Contra la doctrina de la litis contestatio), J.M. Bosch Editor, 1950, Barcelona.
 - Reducción y simplificación de los tipos procesales, en “Revista de Derecho Procesal”, 1954, pág. 145.
 - El juicio ordinario, los plenarios rápidos y los sumarios, en “Estudios de Derecho Procesal”, 1955, pág. 373, Madrid.
 - Juicio ordinario, plenarios rápidos, sumario y sumarísimo, en “Temas del ordenamiento procesal”, 1969, pág. 823, Madrid.
 - La sistematización de los procedimientos declarativos españoles, en “Temas del ordenamiento procesal”, 1969, pág. 747, Madrid.
 - El proceso ordinario, sumario y sumarísimo, en “Revista de Derecho Judicial”, 1969, núm. 37, pág. 11.

- **FERNÁNDEZ LÓPEZ**, Miguel Angel, Derecho Procesal Civil, Tomos I, II, III y IV, junto a DE LA OLIVA SANTOS, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 4ª edición, 1995, Madrid.
 - Derecho Procesal Práctico, junto a RIFÁ SOLER y VALLS GOMBAU, Tomo IV, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992, Madrid.

- **FONS RODRÍGUEZ, C.;** La acumulación objetiva de acciones en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1998, Barcelona.
- **FONT SERRA, E.;** La prueba de peritos en el proceso civil español, Hispano Europea, 1975, Barcelona.
- **FUENTE ÁLVAREZ, Francisco;** El nuevo recurso de apelación civil en los juicios verbales y de cognición, Actualidad Jurídica Aranzadi, 15-4-1993, nº 97.
- **FUERO JUZGO Ó LIBRO DE LOS JUECES,** cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, en Madrid, por Ibarra, impresor de Cámara de Su Majestad. Editorial Lex Nova, 1980, Valladolid.
- **FUERO REAL** del Rey Don Alfonso El Sabio, copiado del Códice de El Escorial y cotejado con varios códices de diferentes archivos por la Real Academia de la Historia, de orden y a expensas de Su Majestad, en la Imprenta Real, Madrid, 1836, Editorial Lex Nova, 1979, Valladolid.
- **FUEROS Y OBSERVANCIAS DEL REINO DE ARAGON,** Libro III, ediciones de 1624, 1667, de Savall y Penen.
- **GALÁN URBANO, Pedro;** La prueba en segunda instancia, en “Boletín de Información del Ministerio de Justicia”, 1981, Octubre-Noviembre.
- **GARBERÍ LLOBREGAT, José;** Jornadas sobre el “Juicio Verbal civil del automóvil”, junto a GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO. 29 de noviembre de 1993, San Sebastián.
 - Apelación y Casación en el Proceso Civil, junto a GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Editorial Cóllex, 1994, Madrid.

- **GIMENO SENDRA**, Vicente; Derecho Procesal, Tomo I, Volumen I y II, junto a **ALMAGRO NOSETE**, **CORTÉS DOMÍNGUEZ** y **MORENO CATENA**, Editorial Tirant Lo Blanch, 4ª edición, 1989, Valencia.
- **GISBERT POMATA**, Marta; Tratado de la Apelación Civil (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios), obra dirigida y revisada por Pedro Aragonesees Alonso, **EDERSA**, 1996, Madrid.
- **GOLDSCHMIDT**, James; Derecho Procesal Civil, 1936.
- **GÓMEZ COLOMER**, Juan Luis; Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a **MONTERO AROCA** y **ORTELLS RAMOS**, José María Bosch Editor, 1994, Barcelona.
 - Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a **MONTERO AROCA**, **MONTÓN REDONDO Y ORTELLS RAMOS**, José María Bosch Editor, 1995, Barcelona.
 - El nuevo régimen del beneficio de la asistencia jurídica gratuita, en “La Ley”, 22 de abril de 1996, págs. 1 y ss..
- **GÓMEZ DE LA SERNA**, Pedro; Tratado Académico-Forense de los Procedimientos Judiciales, Tomo II, junto a **MONTALBÁN**, imprenta de D.F. Sánchez, 2ª edición, 1856, Madrid.
- **GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO**, Nicolás; Jornadas sobre el “Juicio Verbal civil del automóvil”, junto a **GARBERÍ LLOBREGAT**. 29 de noviembre de 1993, San Sebastián.
 - Apelación y Casación en el Proceso Civil, junto a **GARBERÍ LLOBREGAT**, Editorial Cóllex, 1994, Madrid.
- **GONZÁLEZ GRANDA**, P.; Extensión y límites de la jurisdicción española. Análisis sistemático del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, J.M. Bosch Editor, 1992, Barcelona.
- **GUASP DELGADO**, Jaime; Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, 2ª edición, 1961, Madrid.

- Derecho Procesal Civil, Revisada y adaptada a la legislación vigente por Pedro Aragonese, Tomos I y II, Editorial Civitas, S.A., 4ª edición, 1998, Madrid.
 - Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I (Arts. 1 al 459), M. Aguilar Editor, 1943, Madrid; y en su edición de 1948, Editorial Aguilar, Tomo II, Volumen I, Primera Parte (Arts. 460 al 549), M. Aguilar Editor, 1945, Madrid.
 - Reducción y simplificación de los procesos civiles especiales, en “Anuario de Derecho Civil”, 1951, pág. 411.
-
- **GUINCHARD**, Serge; Procédure Civile, junto a VINCENT, 24ª édition, 1996, Paris.
 - **GUTIÉRREZ SANZ**, M. R.; La reconvencción en el proceso civil español, J.M. Bosch Editor, 1993, Barcelona.
 - **LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY DON ALONSO EL NONO**, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de Su Magestad, Tomo II (Partidas III-IV), impreso por Andrea De Portonariis, 1555, Salamanca.
 - **LORCA NAVARRETE**, A. Mª; Sobre la prohibición de la reformatio in peius, en “Constitución, Derecho y Proceso. Estudios en homenaje a los Profesores Hercé y Duque”, 1983, Zaragoza.
 - **HERCE QUEMADA**, V.; La proliferación de tipos procedimentales en primera instancia, en “Revista de Derecho Procesal”, 1965, III, pág. 119.
 - **HERRERO PEREZAGUA**, J. F.; La condena en costas. Procesos declarativos civiles, J.M. Bosch Editor, 1994, Barcelona.
 - **HEVIA DE BOLAÑOS**, Juan; Curia Philipica, 1797, Madrid.

- **HINOJOSA SEGOVIA**, Rafael; Reflexiones sobre la reforma procesal civil de 1992, junto a **ARAGONESES MARTÍNEZ**, en "Revista de Derecho Procesal", 1992.
- **IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**, commentato con la Giurisprudenza a cura di Francesco Bartolini e Pietro Dubolino, Editrice La Tribuna, 4ª edizione, 1995, Piacenza.
- **JIMÉNEZ SÁNCHEZ**, Guillermo J. (coordinador) ; Derecho Mercantil, Volumen I, Editorial Ariel, S.A., 4ª edición, 1997, Barcelona.
- **LASSO GAITE**, Juan Francisco; Crónica de la Codificación Española, Antecedentes históricos, Tomo 2 y Tomo 4, Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, 1970, Madrid.
- **LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL**, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, edición oficial, 1855, Madrid.
- **LOS CODIGOS ESPAÑOLES**, concordados y anotados; Tomo 6, Ordenanzas Reales de Castilla, recopiladas y compuestas por Alfonso Díaz de Montalvo, mandado por los RR.CC., imprenta de la Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra, 1849, Madrid.
- **MANRESA Y NAVARRO**, José María; Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, reformada conforme a las bases aprobadas por la Ley de 21 de junio de 1880, Tomo III, Editorial Reus, 1955, Madrid.
 - Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, Imprenta de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, 3ª edición, 1910, Madrid.; y el Tomo I en su edición de 1952.
- **MÁRQUEZ ROMERO**, Pedro; El allanamiento en el proceso civil, Editorial Comares, 1992, Granada.
- **MARTÍNEZ-ALCUBILLA**, Marcelo; Diccionario de la Administración Española, Tomos 2, 4 y 6, J. López Camacho impresor, 4ª edición, 1886, Madrid.

- Boletín Jurídico-Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Apéndices de 1907, 1908, 1923, 1924, 1932, 1941, 1944, 1947, 1948 y 1952. Madrid.
- **MARTÍN OSTOS**; Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil, 1981, Madrid.
- **MIÑAMBRES PUIG**, César; Derecho Procesal del Trabajo, junto a ALONSO OLEA, Editorial Civitas, 9ª edición, 1997, Madrid.
- **MONTALBÁN**, Juan Manuel; Tratado Académico-Forense de los Procedimientos Judiciales, Tomo II, junto a GOMEZ DE LA SERNA, imprenta de D.F. Sánchez, 2ª edición, 1856, Madrid.
- **MONTERO AROCA**, Juan; Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a ORTELLS RAMOS y GÓMEZ COLOMER, José María Bosch Editor, 1994, Barcelona.
 - Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO Y ORTELLS RAMOS, José María Bosch Editor, 1995, Barcelona.
 - El Juicio Verbal de Tráfico (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios). Tirant Lo Blanch, 1999, Valencia.
 - La intervención adhesiva simple, 1982, Barcelona.
- **MONTÓN REDONDO**, Alberto; Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a GÓMEZ COLOMER, MONTERO AROCA y ORTELLS RAMOS, José María Bosch Editor, 1995, Barcelona.
 - Valoración de las pruebas e interpretación de los resultados probatorios. Escritos en homenaje al Profesor Prieto-Castro, Editora Nacional, 1979, Madrid.
 - Procedimientos Civiles Especiales, Ediciones Universidad Salamanca, 1982, Salamanca.
 - Iniciación al estudio del Derecho Procesal (conceptos básicos y fuentes), Ediciones Universidad Salamanca, 1987, Salamanca.

- **MORÁN BOVIO**, David; Derecho Mercantil, Volumen I, Capítulo 10, Coordinador Guillermo J. Jiménez Sánchez, Editorial Ariel, S.A., 4ª edición, 1997, Barcelona.
- **MORENO CATENA**, Víctor; Derecho Procesal, Tomo I, Volumen I, junto a ALMAGRO NOSETE, GIMENO SENDRA y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Editorial Tirant Lo Blanch, 4ª edición, 1989, Valencia.
- **MUÑÍZ PECES**; Reducción de los tipos de procedimientos civiles (reforma procesal), en "Revista de Derecho Procesal", 1961, pág. 211.
- **NOVISIMA RECOPIACION** de las Leyes de España, dividida en XII Libros, mandada formar por Carlos IV, impresa en Madrid, 1805.
- **NUEVA RECOPIACION** de las Leyes de España, dividida en IX Libros, mandada formar por FELIPE II, impresa en Madrid, 1567.
- **ORTELLS RAMOS**, Manuel; Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a MONTERO AROCA y GÓMEZ COLOMER, José María Bosch Editor, 1994, Barcelona.
 - Derecho Jurisdiccional, Tomo II, junto a GÓMEZ COLOMER, MONTERO AROCA y MONTÓN REDONDO, José María Bosch Editor, 1995, Barcelona.
- **OSSORIO**, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliastra SRL, 1982, Buenos Aires.
- **PÉREZ GORDO**, Alfonso; La prejudicialidad penal y constitucional en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1982, Barcelona.
- **PICÓ I JUNOY**, J.; El derecho a la prueba en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1995, Barcelona.

- **PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ**, Leonardo; Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editorial Aranzadi, 2ª edición, 1985, Pamplona.
 - Estudios y Comentarios para la Teoría y la Práctica Procesal Civil, Volumen I, Instituto Editorial Reus, 1950, Madrid.
 - Exhibición, Tomo I, 1942.
- **PROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL**, nº expediente 121/147, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 23 de septiembre de 1999, y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie A, núm. 147-15, de 5 de octubre de 1999.
- **RAMOS MÉNDEZ**, Francisco; La sucesión procesal, 1974, Barcelona.
- **REVILLA GONZÁLEZ**, José Alberto; El juicio verbal por daños en la circulación de vehículos a motor (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios), Colección dirigida por Víctor Moreno Catena, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, 1999, Valencia.
- **RIFÁ SOLER**, José María; Derecho Procesal Práctico, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ y VALLS GOMBAU, Tomo IV, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992, Madrid.
- **RIBÓ DURÁN**, Luis; Diccionario de Derecho, 1995, Barcelona.
- **SAMANES ARA**, Carmen; La tutela del rebelde en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1993, Barcelona.
- **SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, Ricardo; Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia. Dirección José Luis Albácar López, Tomo II (Arts. 460 al 1480), Editorial Trivium, S.A., 2ª edición, Junio 1994, Madrid.

- **SANTOS VIJANDE**, Jesús María; La intervención forzosa de Abogado y Procurador en el “juicio verbal del automóvil”. Límites legales y constitucionales de la autodefensa, EDESA, 1997, Madrid.
 - Declinatoria y “Declinatoria Internacional”. Tratamiento procesal de la competencia internacional. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1991, Madrid.
- **SEGOVIA LÓPEZ**, Luis; Responsabilidad civil por accidente de circulación, EDESA, 1998, Madrid.
- **SENTÍAS BALLESTER**, César; Tratado Práctico de Interdictos I, Colección Nereo, 1978, Barcelona.
- **SERRA DOMÍNGUEZ**, Manuel; El juicio verbal, en “Nueva Enciclopedia Jurídica”, Tomo XIV (JULIS), págs. 239 a 245, Editorial Francisco Seix, S.A., 1978, Barcelona.
 - Incongruencia civil y penal, en “Estudios de Derecho Procesal”, págs. 393 y ss., 1969, Barcelona.
 - Concepto y regulación positiva del litisconsorcio, en “Revista de Derecho Procesal”, págs. 573 y ss., 1971.
- **SOLÉ RIERA**, Jaume; El recurso de apelación civil, J.M. Bosch Editor, 2ª edición (revisada y actualizada), Junio 1998, Barcelona.
- **SOTO NIETO**, F.; Derecho vivo: Jurisprudencia comentada, en “Revista de Derecho Judicial”, Tomo I, págs. 527 y ss., 1970, Madrid.
- **TOMÉ PAULE**, José; Lecciones de Procesos Civiles Especiales, Editorial Cóllex, 2ª edición, 1998, Madrid.
- **VALLS GOMBAU**, José Francisco; Derecho Procesal Práctico, junto a FERNÁNDEZ LÓPEZ y RIFÀ SOLER, Tomo IV, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992, Madrid.
- **VALLS Y TABERNER**, Consolat de Mar, Volumen II, 1931, Barcelona.

- **VÁZQUEZ IRUZUBIETA**, Carlos; Doctrina y Jurisprudencia de la LEC, Editoriales de Derecho Reunidas (EDERSA), 2ª edición, 1984, Madrid.
- **VÁZQUEZ SOTELO**, José Luis; Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia. Dirección José Luis Albácar López, Tomo II (Arts. 460 a 1480), Editorial Trivium, S.A., 2ª edición, Junio 1994, Madrid.
- **VERGÉ GRAU**, Juan; La rebeldía en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, 1989, Barcelona.
- **VICENTE ROJO**, José; Manual Práctico de Tercerías de Dominio, Editorial Práctica de Derecho, S.L., 1997, Valencia.
- **VILLANUEVA Y SANTAMARÍA**, Pablo; Proceso de Cognición y Juicios Verbal y de Desahucio, Editorial Aranzadi, 3ª edición (actualizada y puesta al día en legislación, jurisprudencia y formularios), 1985, Pamplona.
- **VINCENT**, Jean; Procédure Civile, junto a GUINCHARD, 24ª édition, 1996, Paris.
- **ZIVILPROCESSORDNUNG**, Beck-Texte im dtv, 1997, München.